

NUEVA HISTORIA ARGENTINA

DIRECCIÓN DE TOMO

Alejandro Cattaruzza

CRISIS ECONÓMICA, AVANCE DEL ESTADO
E INCERTIDUMBRE POLÍTICA

(1930-1943)



Editorial Sudamericana

Proyecto editorial: Federico Polotto

Coordinación general de la obra: Juan Suriano

Asesor general: Enrique Tandeter

Investigación iconográfica: Graciela García Romero

Diseño de colección: Isabel Rodríguez

CRISIS ECONÓMICA, AVANCE DEL ESTADO
E INCERTIDUMBRE POLÍTICA
(1930-1943)



PROLOGO

NUEVA HISTORIA ARGENTINA

Alejandro Cattaruzza
Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario

Juan Carlos Korol
Universidad de Buenos Aires, CONICET

Darío Macor
Universidad Nacional del Litoral

Luciano de Privilello
Universidad de Buenos Aires

TOMO 7

Anahí Ballent
Universidad Nacional de Quilmes, CONICET

CRISIS ECONÓMICA, AVANCE DEL ESTADO E INCERTIDUMBRE POLÍTICA (1930-1943)

Joel Horowitz
St. Bonaventure University, Nueva York

Diego Armus
Kean University
Director de tomo: Alejandro Cattaruzza

Susana Belmartino
Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, Centro de
Estudios Sanitarios y Sociales de Rosario

Maria Teresa...
Universidad Nacional de Rosario

Sylvia Saitta
Universidad de Buenos Aires, CONICET

EDITORIAL SUDAMERICANA
BUENOS AIRES

Editorial Sudamericana

Coordinación general de la obra: Juan Suriano

Asesor general: Enrique Tandeter

Investigación iconográfica: Graciela García Romero

Diseño de colección: Isabel Rodríguez

TOMO 7

ESTADO E INCERTIDUMBRE POLÍTICA
CRISIS ECONÓMICA, AVANCE DEL

(1930-1943)

Director de tomo: Alejandro Cattaruzzi

Todos los derechos reservados.

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo por escrito de la editorial.

IMPRESO EN ESPAÑA

*Queda hecho el depósito
que previene la ley 11.723.*

© 2001, Editorial Sudamericana S. A.®
Humberto 1° 531, Buenos Aires.

www.edsudamericana.com.ar

ISBN 950-07-1938-X

ISBN O.C. 950-07-1385-3

COLABORADORES

Alejandro Cattaruzza Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario	7
Juan Carlos Korol Universidad de Buenos Aires, CONICET.	11
Darío Macor Universidad Nacional del Litoral.	17
Luciano de Privitellio Universidad de Buenos Aires.	49
Anahi Ballent Universidad Nacional de Quilmes, CONICET.	97
Adrián Gorelik Universidad Nacional de Quilmes.	143
Ricardo González Leandri Instituto de Historia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.	201
Joel Horowitz St. Bonaventure University, Nueva York.	281
Diego Armus Kean University, New Jersey.	331
Susana Belmartino Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, Centro de Estudios Sanitarios y Sociales de Rosario.	383
María Teresa Gramuglio Universidad Nacional de Rosario, Universidad de Buenos Aires.	429
Sylvia Sáitta Universidad de Buenos Aires, CONICET.	

COLABORADORES

Alejandra Carreras
Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario

Juan Carlos Kouri
Universidad de Buenos Aires, CONICET

Dario Macor
Universidad Nacional del Litoral

Luciano de Pristichio
Universidad de Buenos Aires

Anghel Balcan
Universidad Nacional de Quilmes, CONICET

Adrián Gorkik
Universidad Nacional de Quilmes

Ricardo González Leandri
Instituto de Historia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid

Joel Horowitz
St. Bonaventure University, Nueva York

Diego Arias
Kean University, New Jersey

Suzana Belmarino
Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, Centro de Estudios Sanitarios y Sociales de Rosario

Maria Teresa González
Universidad Nacional de Rosario, Universidad de Buenos Aires

Sylvia Saitta
Universidad de Buenos Aires, CONICET

Y A LA MEMORIA DE
LOS QUE FUERON
Y SON

www.rosario-conicet.gov.ar

ÍNDICE

<i>Colaboradores</i>	7
<i>Introducción</i> por Alejandro Cattaruzza	11
<i>Capítulo I. La economía</i> por Juan Carlos Korol	17
<i>Capítulo II. Πακτίδος, coaliciones y sistema de poder</i> por Darío Macor	49
<i>Capítulo III. La política bajo el signo de la crisis</i> por Luciano de Privitello	97
<i>Capítulo IV. País urbano o país rural: La modernización territorial y su crisis</i> por Anahi Ballent y Adrián Gorelik	143
<i>Capítulo V. La nueva identidad de los sectores populares</i> por Ricardo González Leandri	201
<i>Capítulo VI. El movimiento obrero</i> por Joel Horowitz	239
<i>Capítulo VII. Enfermedades, médicos y cultura higiénica</i> por Diego Armus y Susana Belmartino	283
<i>Capítulo VIII. Posiciones, transformaciones y debates en la literatura</i> por María Teresa Gramuglio	331
<i>Capítulo IX. Entre la cultura y la política: Los escritores de izquierda</i> por Sylvia Saïtta	383
<i>Capítulo X. Descifrando pasados: Debates y representaciones de la historia nacional</i> por Alejandro Cattaruzza	429

INDICE

Colombianos 7

Introducción
por Alejandro Carranza 11

Capítulo I. La economía
por Juan Carlos Koral 17

Capítulo II. Partidos, coaliciones y sistemas de poder
por Dato Masor 49

Capítulo III. La política bajo el signo de la crisis
por Luciano de Prichillo 97

Capítulo IV. País nuevo o país nuevo:
la reorganización territorial y su crisis
por Anahí Baham y Adán Gortik 143

Capítulo V. La nueva identidad de los sectores populares
por Ricardo González Leandri 201

Capítulo VI. El movimiento obrero
por Joel Horowitz 239

Capítulo VII. Esperanzas, miedos y cultura histórica
por Diego Arana y Susana Beltramo 283

Capítulo VIII. Posiciones, transformaciones y debates
en la literatura
por María Teresa Giménez 371

Capítulo IX. Entre la cultura y la política:
los escritores de izquierda
por Sylvia Zama 383

Capítulo X. Describiendo pasados:
Debates y representaciones de la historia nacional
por Alejandro Carranza 439

INTRODUCCIÓN

Este volumen recoge varias de las líneas de investigación que, sobre el período 1930-1943/1945, se desarrollaron en la historiografía argentina a partir de la recuperación democrática de 1983. Desde ya, no todas ellas rompen radicalmente con aproximaciones anteriores; se trata en cambio de la incorporación de algunas cuestiones poco atendidas en etapas previas y de la reconsideración de otras áreas más frecuentadas.

Así, en el capítulo dedicado a la economía se analiza el proceso que hizo de la industria su sector más dinámico. En esa transformación se destacan los efectos de la crisis de 1929, el comportamiento del sector externo y la sustitución de importaciones; al mismo tiempo, se argumenta que las políticas implementadas se hallaban sostenidas por una visión de corto plazo. Ciertos aspectos de los cambios producidos fueron, con claridad, dependientes de procesos cuyo inicio había tenido lugar tiempo antes de la crisis.

El impacto del golpe sobre el sistema político y su funcionamiento posterior, las estrategias de los partidos, las prácticas electorales y el fraude, constituyen los ejes de los capítulos referidos a la política; a ellos se suma el papel del Ejército y el problema de la legitimidad. En esta mirada, la política en los años treinta deja de ser sólo la lucha entre grupos animados por inalterables visiones del mundo, para convertirse en una complicada competencia por el poder, librada por actores que, sin abandonar sus incertidumbres, reorientan sus estrategias para actuar en un distorsionado escenario electoral sobre el cual el Estado opera de maneras también cambiantes.

Por su parte, las políticas estatales de modernización territorial son objeto de un estudio específico. En él se incluyen las dimensiones materiales, entre las cuales la construcción de la red carretera y la acción de YPF son dos de las más relevantes, y la actitud de ciertos cuerpos administrativos del Estado. El desplazamiento desde una modernización concebida en clave urbana hacia una en la que se impuso un modelo de país rural tuvo, a su vez, expresiones en los debates culturales y aun en los librados dentro de algunos espacios profesionales.

Las corrientes ideológicas y la estructura organizativa del movimiento obrero son exploradas desde una perspectiva que otorga importancia a la creciente relación con el Estado. Esa relación se

vio afectada por el crecimiento de las organizaciones de trabajadores industriales, cuya magnitud fue una de las novedades más notorias hacia fines del período. En parcial relación con este capítulo, se ubica el examen de la constitución de nuevas identidades colectivas. Iniciado en la primera posguerra, afectó en particular a los sectores populares urbanos, y se asentó en los cambios ocurridos en los niveles y en las expectativas de vida de esos sectores, y en la nueva dimensión social de la acción estatal. El proceso devino en una visión popular del Estado y de la política que exhibió acusados aires reformistas. El análisis de los problemas de la salud y de la organización médica, ensayado en otro de los capítulos, se inscribe en una línea temática próxima a la anterior, que insiste en la ampliación de los contenidos de la ciudadanía social por efecto de la incorporación del derecho a la salud.

Sobre el mundo de la cultura se despliegan diversas aproximaciones, que se ensayan en tres capítulos. En uno de ellos se explica el funcionamiento del campo literario y los reagrupamientos producidos, y se reconocen como fenómenos característicos del período las transformaciones de la narrativa y la intensidad de las polémicas político-ideológicas suscitadas por la situación internacional. En el segundo, los emprendimientos culturales de la izquierda se constituyen en objeto central; allí se revela la gran actividad de un grupo amplio de intelectuales que, entre la revolución y la unidad antifascista, animaron la vida cultural argentina. En conjunto, ambos capítulos permiten la crítica de las imágenes, tan extendidas, que sólo hallaban desazón y decepciones entre los intelectuales de los años treinta. Finalmente, el último capítulo del volumen se dedica a las discusiones sobre la nación y su historia libradas por varios grupos culturales, entre ellos el revisionismo, y a las acciones estatales que intentaban la difusión de un relato sobre el pasado.

Parece entonces evidente que este índice exhibe cambios respecto a modos anteriores de organizar el estudio de los años treinta. Ellos se produjeron por efecto de la aparición, luego de la última dictadura, de nuevos frentes de investigación en la historiografía argentina, acompañada con evoluciones de la disciplina en el contexto internacional, y por la obtención de nuevas evidencias empíricas, que permitían someter a crítica buena parte de la explicación heredada.

No es posible, desde ya, detectar una estricta coincidencia inter-

pretativa en esos trabajos; sin embargo, algunas convicciones se han ido extendiendo entre los historiadores. En primer lugar, aunque 1930 conserva una fuerte condición periodizante, hoy se admite que importantes procesos exhiben ritmos propios y no se alinean con aquel momento de fuerte impacto político. Fenómenos sociales, culturales y económicos reclaman así una perspectiva que considere la presencia de continuidades respecto de la etapa anterior.

Por otra parte, la imagen de un mundo político y cultural dividido en dos bloques uniformes y autoconscientes de las tradiciones que los sostenían, enfrentados en un combate claro y central —“liberales” enfrentados a “nacionales”, “democráticos” a “autoritarios”, historiadores “oficiales” a revisionistas, “fraudulentos” a “populares”, entre otros—, no parece sostenerse ya. El cuadro fue mucho más complejo y menos ordenado; en él, la identificación de propios y ajenos se realizaba un poco a tientas, y los límites de los diversos grupos se reconstruían con frecuencia.

Aquellas investigaciones han permitido también, para muchas áreas, el planteo de una periodización “interna” más ajustada. Los primeros años fueron de crisis económica, pero desde aproximadamente 1934 se produjo una tendencia a la recuperación, por ejemplo, y en cuanto al sistema político, la abstención del radicalismo señala una diferencia importante si se la compara con el fraude a gran escala, aplicado desde mediados de la década. Los años treinta pueden, entonces, ser divididos en dos etapas, que a grandes rasgos cubren una y otra mitad de la década; dentro de esta última, incluso, puede reconocerse una coyuntura particular a partir del comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

Cuando se trata de este período, transformaciones como éstas provocan un efecto importante, ya que vienen a cuestionar interpretaciones de circulación muy amplia en la sociedad. Las primeras imágenes de conjunto de la década abierta en 1930 fueron planteadas a comienzos de los años cuarenta, y exhibieron una fuerte dependencia del debate político. La aparición del peronismo dio a esas interpretaciones una actualidad evidente, dado que ese movimiento proclamaba ser la contracara del pasado inmediato.

A partir de 1955, historiadores y científicos sociales incorporados a la universidad luego de la experiencia peronista lanzaron las primeras versiones académicas del período 1930-1945; por fuera del sistema universitario, los intelectuales que adherían al pero-

nismo también hacían oír su parecer, y alcanzaban auditorios muy amplios. Entre 1955 y 1975, aproximadamente, las interpretaciones se fueron afinando, y se desplegaron siguiendo en buena medida las claves acuñadas en la primera mitad de los años cuarenta; así, lo que ahora se llamaba dependencia económica y la infamia de los elencos dirigentes eran dos de los rasgos que se destacaban en esas visiones. Por su parte, los temas menos tradicionales de la industrialización y del movimiento obrero fueron, paulatinamente, convirtiéndose en objeto de atención.

La imagen de los años treinta construida en esos tiempos continuaba entramada con los combates del día y con las expectativas sobre el futuro. En los años que van de la caída del primer gobierno peronista hasta 1975, muchos intelectuales confiaban en un porvenir de cambios radicales, a cuya llegada debían contribuir; de acuerdo a cada vertiente ideológica, ellos tenían en su centro el quiebre de la dependencia, la construcción del poder del pueblo, la organización de una nación industrial y moderna, o la restauración de una Argentina tradicional que, de algún misterioso modo, sería también popular. Vistos desde posiciones asentadas en esas certezas, los procesos ocurridos en los años treinta asumían un tono particularmente sombrío.

Así, entre comienzos de los años cuarenta y 1975 tuvo lugar la organización de una imagen global de la llamada década de 1930, a la que aportaron argumentos los historiadores, los políticos, los militantes culturales. A pesar de que las coyunturas fueron cambiantes, durante esos años la cuestión política central fue la del peronismo, y dado el persistente enlace entre la política y la historia, los años treinta fueron leídos como mero prolegómeno a la irrupción de aquel movimiento. Para muchos, el período no encerraba el problema que en realidad se deseaba resolver: si se examinaban los años treinta, era sólo para descifrar aquel otro enigma acuciante, el peronista.

En la Argentina de fin de siglo, en cambio, el debate político lleva muchos años de moderación, y no parece atravesado por las pasiones de los años anteriores a la última dictadura; la cuestión peronista, si no ha desaparecido de la polémica pública, se ha transformado de tal modo que resulta difícil emparentarla con aquella que conmovió a los intelectuales hace treinta años. En el cruce de la profesionalización de la actividad historiográfica con el descenso de la intensidad del debate colectivo, las imágenes actuales de

los años treinta resultan más eruditas, más cautas y notoriamente más fragmentarias que las heredadas. A pesar de todo, la recomposición de una imagen de conjunto de la sociedad argentina de los años treinta puede ser hoy un proyecto que cuente con un punto de partida firme; las investigaciones disponibles cubren un frente muy amplio y los estudios de base son abundantes. Sin embargo, el planteo de una explicación menos rígida que las tradicionales, pero al mismo tiempo más amplia que el conjunto de aproximaciones parciales que vino a reemplazarla, reclama algunas certezas sobre el presente y el futuro de la sociedad. Si esa imagen de conjunto se alcanza, es probable que ella esté destinada a ser, en comparación con la que terminó de forjarse en los tempranos años setenta, una más matizada y más sensible a lo complejo de la realidad social. En cierto sentido, también será una “menos feliz, pero con más sosiego”, nostálgica y certera fórmula que en 1938 Macedonio Fernández aplicara a otros asuntos.

ALEJANDRO CATTARUZZA



...ta aérea del establecimiento metalúrgico CATITA, en Barracas, ciudad de Buenos Aires, enero de 1937.



Una imagen fuertemente persistente de la historia económica argentina se apoya en las muy altas tasas de crecimiento que la economía del país alcanzó entre las últimas décadas del siglo pasado y 1930. Ese crecimiento estuvo impulsado por las exportaciones de productos agropecuarios al mercado mundial y aunque no fue lineal, dado que era interrumpido por crisis periódicas, permitió que se desarrollaran fuertes expectativas sobre las posibilidades económicas del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. A partir de la crisis que se desató en 1929, las características y la orientación de la economía cambiaron profundamente. Las exportaciones hacia el mercado internacional dejaron de ser el impulsor del crecimiento, cuyas tasas se redujeron significativamente. El mercado interno y el desarrollo de una industria cuyos productos estaban dirigidos a ese mercado se transformaron en el nuevo, aunque más moderado, estímulo. La intervención del Estado en la economía se acentuó notablemente, y la Argentina pasó de tener una economía abierta a los mercados mundiales a una economía

basada en un creciente proyecto autárquico volcado hacia dentro.

Esta percepción convirtió al período previo a 1930 en una perdida edad de oro, especialmente para muchos de quienes miraban el pasado desde las décadas de 1980 y 1990. En esa perspectiva, los males argentinos provenían precisamente de la ruptura con el mercado mundial y de la innecesaria y perjudicial actividad del Estado. Para otros estudiosos y ensayistas, los males de la economía argentina se retrotraían al período de mayor crecimiento; allí se encontraban los inicios de una expansión desequilibrada y vulnerable a los embates externos.

Estas imágenes, y esos diagnósticos, no se ajustan demasiado a lo que los conocimientos actuales permiten afirmar sobre la historia económica del país. Como se verá, muchas de las características tanto positivas como negativas que la economía argentina adquirió durante la depresión y la guerra provenían del desarrollo de fenómenos ya existentes en el período anterior. A partir de 1930, algunas de esas características se profundizaron, y muchas de las transformaciones se iniciaron con una posterioridad tal a la crisis que es difícil ligarlas directamente a ella. No obstante, la imagen de 1930 como una divisoria de aguas en la economía no es, tampoco, del todo inexacta. La Argentina agroexportadora se transformó en un país en el que efectivamente la industria se convirtió en el principal motor de la economía. Es posible discutir los momentos y la incidencia de cada una de las transformaciones, pero la Argentina de fines de la década de 1940 era muy diferente a la de la década de 1920. En este sentido, y a pesar de las continuidades, 1930 sigue siendo una referencia esencial para entender aquellas transformaciones y cambios.

Es conveniente, entonces, examinar las características de la economía argentina en los momentos previos a la crisis, para luego profundizar el análisis del período que se extendió entre ese momento y el fin de la Segunda Guerra.

CRISIS Y DEPRESIÓN

Las causas de la crisis que estalló en 1929, simbolizada en el *crack* de la Bolsa de Nueva York que se produjo en octubre de ese año, siguen siendo tema de debate entre los economistas. Algunos señalan las dificultades de los Estados Unidos, convertidos en el

nuevo centro económico y financiero mundial en reemplazo de Gran Bretaña, para reaccionar adecuadamente ante las señales de la crisis. Para muchos de ellos, sus orígenes se encontraban en los problemas generados en la economía norteamericana. De acuerdo con algunas interpretaciones, fue producto de las políticas monetarias seguidas por las autoridades norteamericanas, en tanto que para otros autores se debió a la incapacidad del mercado norteamericano para absorber la creciente producción allí volcada. Crisis monetaria o crisis de sobreproducción, los efectos fueron mucho más claros que sus causas. La crisis implicó una disminución del comercio mundial y una retracción de la inversión de capital fuera de los países que tradicionalmente invertían más allá de sus fronteras. Se extendió rápidamente a todo el mundo industrializado, con la notoria excepción de la entonces Unión Soviética, y uno de sus impactos más evidentes fue la fuerte y prolongada caída de la actividad económica, la depresión. El otro efecto importante se relacionó con la inmediata consecuencia de tal depresión: la muy alta desocupación. En los Estados Unidos, casi uno de cada cuatro trabajadores se encontraba desempleado en 1933.

Las dificultades que la mayoría de los países encontraron para continuar con sus prácticas comerciales y financieras habituales impulsaron, en los Estados afectados, la adopción de una serie de políticas específicas. Ellas implicaban una retracción de las economías dentro de las fronteras nacionales, el fortalecimiento de barreras proteccionistas, el abandono del patrón oro incluso por parte de los Estados Unidos y Gran Bretaña, y la búsqueda de acuerdos bilaterales entre países, que habrían de reemplazar el comercio abierto y multilateral que, en alguna medida, había caracterizado a la etapa anterior.

La Argentina no fue ajena a estos procesos. El impacto de la crisis se sintió especialmente en la caída de los valores de las exportaciones tradicionales de carne y cereales, y en las consecuentes dificultades para la obtención de capitales y de las divisas necesarias para el pago de las importaciones. El financiamiento del Estado se enfrentó con nuevos problemas, debido en gran parte a que sus principales fuentes provenían tradicionalmente de los gravámenes al comercio exterior, particularmente a las importaciones, y a la decisión de seguir afrontando los pagos correspondientes a la deuda externa. La desocupación apareció también como la más evidente de las consecuencias sociales de la crisis.

Para enfrentar esta situación, los gobiernos de la década de 1930 llevaron adelante una serie de políticas que abarcaron desde la búsqueda de fuentes de financiamiento que no estuvieran ligadas al comercio exterior, hasta el mantenimiento de la inconvertibilidad monetaria decidida durante los últimos tiempos del gobierno radical. Esas políticas incluyeron la creación del Banco Central, la adopción de medidas tendientes a disminuir las importaciones, los intentos de apoyo y regulación de la producción agropecuaria y la búsqueda de caminos que permitieran salvaguardar la relación con los mercados tradicionales, en particular el británico, para las exportaciones argentinas.

Estas medidas se daban en el contexto de una creciente ilegitimidad política, proveniente del golpe de Estado que había derrocado a Yrigoyen en setiembre de 1930, del posterior fraude electoral a gran escala, implantado desde mediados de la década, y de los episodios de corrupción en los que se vieron involucrados los gobiernos, y algunos opositores, durante la década. El golpe había colocado en el poder al general Uriburu y en 1932, a partir de elecciones en las que el radicalismo se abstuvo de participar por el veto oficial a sus candidatos, el general Justo se hacía de la presidencia. En 1943 un nuevo golpe de Estado pondría fin al experimento de un sistema de gobierno que era difícil caracterizar como democrático, y que con sus vicios de origen y sus prácticas poco claras volvería más tolerable para algunos sectores de la sociedad la reiterada intervención militar en la política del país.

Desde la perspectiva de las políticas económicas, se ha tratado de distinguir entre la línea seguida por el gobierno de Uriburu, y sus ministros de Hacienda, y el de Justo, en el cual la figura de Federico Pinedo, al frente de esa cartera a partir de 1933, tomaría una dimensión preponderante. Nuevos cambios se insinuaron a partir del golpe de 1943. A pesar de ello, también aquí se registran inesperadas continuidades.

Resulta entonces de utilidad un análisis pormenorizado de los efectos de la crisis, las políticas implementadas por el Estado, los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de esas políticas y los cambios producidos en el contexto internacional.

Los efectos de la crisis fueron claros rápidamente. Implicaron el derrumbe de los precios de los principales productos de exportación de la Argentina —cereales, lino y carnes—, tal como puede apreciarse en la Tabla 1.

Tabla 1
Precio promedio de los productos argentinos (1926=100)

AÑO	Cereales y lino	Carnes
1929	100,8	111,8
1930	82,5	109,7
1931	55,9	90,3

Fuente: Villanueva (1975). p. 63.

A esta fuerte disminución de los precios obtenidos por las exportaciones se unía el deterioro de los términos del intercambio, tal como puede apreciarse en la Tabla 2. Este deterioro de los precios de las exportaciones, superior a la disminución de los precios de las importaciones, sumado al mantenimiento de los pagos de la deuda pública y a las dificultades para obtener nuevas inversiones de capital, implicó saldos totales negativos en el balance de pagos que, con alguna excepción, sólo tendieron a revertirse a partir de mediados de la década. Este saldo negativo presionaba a su vez sobre el valor de la moneda.

Tabla 2
Precios de importación y de exportación y términos del intercambio (1913=100)

AÑO	Exportaciones	Importaciones	Términos del intercambio
1928	127,6	131,5	97,0
1929	117,6	130,1	90,4
1930	103,2	130,4	79,1
1931	78,4	130,0	60,3
1932	75,4	128,4	58,7

Fuente: Balboa (1972). p. 163.

Tal situación implicaba una disminución de la actividad económica y, por consiguiente, el aumento de la desocupación. Lamentablemente, no se dispone de cifras seguras sobre el tema. Para 1932, el momento más álgido de la depresión, se ha estimado una desocupación cercana al 28%, pero también se cuenta con estima-

ciones mucho más bajas, incluso inferiores al 10%, para el mismo momento. La evidencia parece insuficiente para una respuesta definitiva y es muy posible que la realidad se ubicase en algún lugar intermedio. Las fuentes cualitativas, por su parte, indican que en todo caso la depresión provocó un menor desempleo en la Argentina que en los Estados Unidos y, lo que es aun más seguro, que la recuperación fue más rápida.

Esta impresión aparece confirmada por las cifras proporcionadas por Díaz Alejandro. El PBI (Producto Bruto Interno) de la Argentina descendió cerca de un 14% entre 1929 y 1932, pero luego se expandió hasta 1940. En 1939, el PBI era un 15% más alto que el de 1929, y estaba un 33% más alto que en 1932, en tanto que en los Estados Unidos el crecimiento fue de sólo 4% entre las primeras fechas mencionadas.

De todas maneras, la situación que planteaba la crisis requería respuestas inmediatas. Aunque los dirigentes argentinos pensaban que el país estaba enfrentando una crisis cíclica, y que luego de ella se restablecería la situación previa, los problemas eran suficientemente evidentes como para demandar una acción rápida por parte del gobierno. Un breve análisis del contexto internacional en el que el país se hallaba inmerso permitirá un examen adecuado de las respuestas internas a la crisis.

EL SECTOR EXTERNO Y LOS CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Desde las últimas décadas del siglo XIX, la expansión de la economía argentina había impulsado una relación cada vez más estrecha con Gran Bretaña. Muchos de los capitales invertidos en el país provenían de Inglaterra, hacia allí se dirigían gran parte de las exportaciones de cereales y, sobre todo, las de carne, en particular las que constituían el producto más especializado de la región pampeana, la carne enfriada. De Inglaterra provenían, además de los capitales, buena parte de los productos manufacturados y el carbón de piedra que alimentaba los ferrocarriles.

Desde la Primera Guerra Mundial se hizo cada vez más evidente la pérdida paulatina del lugar hegemónico que Gran Bretaña ocupaba en el mundo. Sus productos perdían competitividad en comparación con los norteamericanos y Nueva York reemplazaba

progresivamente a Londres como centro financiero mundial. Con frecuencia, los productos industriales norteamericanos, desde los automóviles hasta la maquinaria agrícola, se adaptaban mejor a las necesidades de la Argentina; sin embargo, la producción agraria de los Estados Unidos competía con la argentina, a lo que se sumaban las crecientes actitudes proteccionistas norteamericanas de la década de 1920. Así, era difícil esperar que ése fuera el destino de la producción argentina. El país debía obtener sus divisas, entonces, del comercio en el área de la libra, para poder así pagar por los productos norteamericanos. La convertibilidad de esas libras, obtenidas con las exportaciones, en dólares resultaba esencial para mantener el esquema de comercio triangular.

Naturalmente, tanto ingleses como norteamericanos defendían sus intereses. Desde los Estados Unidos comenzaron a llegar en la década de 1920 capitales dirigidos a la instalación de industrias que pudiesen competir en el mercado interno, eludiendo eventuales medidas proteccionistas y preferencias argentinas. Inglaterra tenía como objetivo aumentar sus exportaciones a la Argentina y mantener el envío de las ganancias de sus empresas, pero debía, además, negociar con los dominios de la corona, cuyos productos competían con los argentinos por el mercado británico. Esta última situación le servía, además, como elemento de presión frente a los intereses argentinos.

La Argentina, por su parte, elegiría mantener su larga alianza estratégica con Inglaterra, al tiempo que atravesaba durante la década de 1920, y en especial entre 1922 y 1927, por una cierta bonanza económica. En 1928, esta situación comenzó a revertirse. Las exportaciones declinaron y el capital comenzó a salir del país, mientras los gastos del Estado aumentaron y cayeron las tasas de interés. Al no reducirse las importaciones, el valor del peso inició una declinación. Como consecuencia, el gobierno de Yrigoyen debió interrumpir la convertibilidad en 1929. Así, algunos de los elementos de la crisis estaban presentes en el país aun antes de que ésta estallara.

Hacia finales de 1929 llegó al país una misión comercial británica, al frente de la cual se encontraba el vizconde D' Abernon. La delegación, que respondía a una invitación del gobierno argentino, tenía como objetivo consolidar las relaciones entre los dos países. Sus resultados fueron halagüeños para Gran Bretaña. La Argentina se comprometía a comprar en el mercado inglés, duran-



Vista aérea de los nuevos elevadores de Rosario, julio de 1931.

te dos años, los materiales e insumos que necesitara para los ferrocarriles del Estado; Gran Bretaña se obligaba a seguir adquiriendo los embarques de carne que la Argentina exportaba normalmente. El acuerdo fue firmado por Yrigoyen y aprobado por la Cámara de Diputados, aunque el gobierno fue depuesto y el Congreso disuelto por el golpe de Estado de 1930 antes de que pudiese contar con la aprobación del Senado. De todas formas, se trataba de un importante antecedente del tratado Roca-Runciman, suscripto en 1933 y aprobado en 1935.

A partir de 1932, la amenaza por parte de Inglaterra de recurrir a una política de preferencia por los productos de sus dominios se renovó como consecuencia del acuerdo alcanzado en ese año en Ottawa entre los representantes de la corona y los países miembros de la comunidad británica. Este acuerdo ponía en peligro las exportaciones argentinas de carne congeladas y envasadas y cereales, que competían con la producción de Australia y Nueva

Zelanda. El único rubro en el que esos países no podían competir con la Argentina lo constituían las carnes enfriadas, que por razones de tiempo y distancia no podían llegar adecuadamente desde aquellos países al mercado británico.

La respuesta argentina consistió en buscar los medios para mantener la relación comercial con Gran Bretaña. Para lograrlo, se envió una comisión especial a ese país, al frente de la cual se encontraba el vicepresidente de la Nación Julio A. Roca, que concluiría un tratado con el representante del *Board of Trade* británico en 1933. Conocido como el tratado Roca-Runciman, el convenio establecía que Gran Bretaña se comprometía a permitir la importación de la misma cantidad de carne que en 1932, a menos que se produjera una nueva y significativa baja de sus precios en Inglaterra. También establecía que el *pool* de frigoríficos anglo-norteamericanos se reservaría el 85% de las exportaciones de carne, mientras el 15% restante sería cubierto con la producción de los frigoríficos argentinos. Este cupo fue resultado de un intento de desmentir las denuncias que señalaban que los frigoríficos extranjeros presionaban mediante su poder de compra para mantener bajo el precio pagado a los ganaderos por las reses.

A cambio de estas concesiones, la Argentina se comprometía a su vez a reducir las tarifas de importación de un amplio número de productos británicos al nivel que tenían en 1930 y no establecerlas en algunos otros, que, como el carbón, se importaban libremente. También se asumía el compromiso de mantener un trato benévolo hacia las compañías británicas y a facilitar el acceso a las divisas que éstas requerían para enviar sus ganancias a Gran Bretaña. Otros puntos del tratado protegían los intereses de los ferrocarriles y el transporte marítimo británico.

El pacto tenía una vigencia de tres años y los principales acuerdos logrados se prorrogaron por un nuevo tratado, conocido como Eden-Malbrán, firmado en 1936. Como consecuencia de ambos tratados, las exportaciones argentinas de carne se mantuvieron entre 1935 y 1938 en un nivel cercano al 90% de las 390.000 toneladas de carne enfriada exportadas en 1932. Éste había sido el nivel al que se había llegado luego de la crisis. En definitiva, los acuerdos alcanzados permitían a la Argentina seguir accediendo al mercado británico, a cambio de importantes concesiones a los intereses de ese origen.

Es inevitable preguntarse cuáles eran entonces las alternativas

planteadas para el sector externo argentino, en las condiciones en las que se encontraba el mercado mundial luego de la crisis y la depresión. Muchas de las políticas de la década de 1930, y en particular el tratado Roca-Runciman, han sido vistas como el resultado de una posición que sólo favorecía intereses extranjeros y los muy acotados de los ganaderos invernadores, que producían el ganado más refinado destinado a ser exportado como carne enfriada. Los más escasos defensores de estas políticas y del tratado afirman, por el contrario, que los condicionamientos que la depresión imponía a la economía hacían que las decisiones tomadas fueran las únicas posibles. Es difícil, sin dudas, aceptar que las decisiones tomadas representaran las únicas alternativas válidas, pero es más difícil aún evaluar los eventuales efectos de las opciones no seguidas. Una valoración retrospectiva no puede realizarse sin introducir las medidas específicas en el contexto más amplio del conjunto de las políticas económicas de la década y sus resultados. Y deben considerarse también las perspectivas que sobre estos problemas tenían los sectores dirigentes.

En este último sentido, recobra interés el llamado "Plan Pinedo", en realidad un plan de "reactivación económica" presentado por Federico Pinedo al Congreso de la Nación en 1940. Aunque el plan nunca llegó a aprobarse, y por lo tanto no significó un cambio en las políticas del Estado, suponía una visión algo más crítica de la posición de la Argentina en el mundo. Para algunos observadores, exhibía una diferencia importante en los objetivos propuestos y la manera de implementarlos.

El plan preveía tanto una serie de medidas para enfrentar la nueva coyuntura de la guerra en Europa, como otras que tendían a proyectos de más largo plazo. Entre las primeras, se encontraban el fomento de la construcción y el sostén de los precios agrícolas, en especial el del maíz. Entre las segundas, el impulso a la industrialización, aunque basada en las "industrias naturales", es decir, aquellas que utilizaban insumos locales. El proyecto descansaba en la convicción de que las exportaciones agropecuarias seguirían siendo el motor principal de la economía del país y que se trataba fundamentalmente de enfrentar una coyuntura adversa.

En realidad, el plan estaba diseñado para enfrentar una situación que se preveía similar, en cuanto a las restricciones en el sector externo, a la que había desatado tanto la Primera Guerra como, más adelante, la crisis de 1929. Pero estos presupuestos se demos-

traron imprecisos: la Argentina siguió exportando durante la Segunda Guerra, al mismo tiempo que el esfuerzo en el que se encontraban embarcadas las economías tradicionalmente proveedoras de los productos que el país obtenía en el exterior restringió las importaciones, impulsando de este modo el crecimiento industrial.

Sin embargo, algunas de las propuestas del plan se llevarían a cabo algo más adelante. Entre ellas, la creación del Banco Industrial, que tuvo lugar en 1944, y la regulación del comercio exterior mediante lo que sería el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que desde 1946, ya en tiempos del peronismo, monopolizaría las operaciones de exportación de cereales y oleaginosas.

LAS RESPUESTAS A LA CRISIS

La primera respuesta a la crisis por parte del gobierno de Uriburu consistió en afirmar la vigencia de políticas ortodoxas. Se trataba de equilibrar el presupuesto del Estado, al mismo tiempo que se mantenía el pago de la deuda pública.

La búsqueda del equilibrio entre recursos y gastos en las cuentas del Estado recibió una fuerte prioridad. Dado que en el contexto de una reducción del comercio internacional era natural que los recursos del Estado disminuyeran, puesto que la mayor parte de ellos provenía de los impuestos al comercio exterior, la solución buscada fue doble. Por una parte, se redujeron los gastos del Estado disminuyendo los salarios de los empleados públicos, en un 0,05% los más bajos y en una proporción que llegaba a superar el 22% en los más altos. También se restringió el gasto en obras públicas. La reducción de salarios, aunque recesiva, era atemperada por la deflación de precios. Por otra parte, se trató de incrementar los ingresos a través de nuevos impuestos internos y de aumentos en los aranceles a las importaciones.

El problema más serio, aunque no el de mayor peso en el presupuesto, lo constituía la deuda pública. Ésta se componía de una "deuda flotante" con vencimientos a corto plazo y una deuda externa, en su mayor parte en libras. En el contexto de la crisis varios países latinoamericanos habían decidido suspender los pagos; la Argentina, sin embargo, los mantuvo. Esto le permitió al gobierno, al conservar la credibilidad de los inversores, establecer un

“empréstito patriótico” mediante bonos colocados en el mercado local, dada la imposibilidad de obtener fondos externos.

El gobierno también enfrentaba el problema del valor de la moneda y la cantidad de circulante. En el periodo previo a la crisis, la Argentina no había contado con un Banco Central. La cantidad de dinero circulante dependía de la balanza de pagos y de la forma en que sus excedentes o déficit se intercambiaban en la Caja de Conversión. La existencia de excedentes llevaba a un aumento del circulante, baja de los intereses del capital y aumento de la inversión y de la actividad económica. Cuando los excedentes declinaban y el oro salía del país, disminuía el circulante y consiguientemente la actividad económica. El sistema de ajustes automáticos previstos en la Caja de Conversión funcionaba en tiempos normales y se suponía que su suspensión, cuando ello ocurría, era sólo temporaria. De allí que el mecanismo fuera alguna vez denominado un “sistema de patrón oro esporádico”.

Las perturbaciones externas, como las guerras o las crisis, llevaban a su suspensión. Esto había ocurrido durante la Primera Guerra; durante la década de 1920, el mecanismo fue restablecido. Como se ha señalado, en los últimos tiempos del gobierno de Yrigoyen volvió a interrumpirse. Algunas de las funciones que corresponden a la figura de un Banco Central, como establecer el nivel del circulante, o supervisar el sistema bancario, eran cumplidas por el Banco Nación y otras instituciones como la propia Caja de Conversión y la Tesorería.

El gobierno de Uriburu mantuvo la inconvertibilidad del peso; en 1931, estableció el control de cambios intentando mantener el valor de la moneda, para lo cual permitió la salida de oro. Al mismo tiempo, durante los primeros años posteriores a la crisis, decre-



*Federico Pinedo, ministro de Hacienda.
Revista Caras y Carctas, julio de 1935.*

cía el circulante, con la excepción de 1932, cuando la utilización de los fondos del empréstito por parte del gobierno llevó a su aumento.

A partir de 1933, cuando Federico Pinedo asumió como ministro de Hacienda, las medidas tomadas tendieron en algunos casos a profundizar las políticas anteriores, y en otros a introducir innovaciones. El establecimiento del impuesto a los réditos y la creación del Banco Central fueron medidas que continuaban las tendencias ya insinuadas, fortaleciéndolas. Pero el nuevo ministro dispuso también la devaluación del peso, una mayor intervención en el comercio exterior a partir del control de cambios y una mayor intervención del Estado en el sostenimiento de los precios agropecuarios y en la regulación de la producción del sector.

Yrigoyen, en su primer gobierno, había intentado la implantación del impuesto a los réditos, pero enfrentó una firme oposición en el Congreso. En 1933, se creaba finalmente ese impuesto, que permitió que el Estado dejara de depender de los recursos obtenidos de las imposiciones al comercio exterior: durante los años veinte, casi el 80% de los recursos estatales se obtenía de esa fuente; en cambio, hacia fines de la década de 1930 de allí provenía sólo la mitad de los recursos. En los años finales de la Segunda Guerra, la reducción fue todavía mayor: alcanzaba a cubrir solamente cerca de un 10% de los requerimientos del gobierno.

Otras medidas tuvieron relación con la política monetaria. Ya en 1932 Otto Niemeyer, un especialista británico, fue consultado sobre las características que debería tener un Banco Central. El proyecto, finalmente aprobado en 1935 junto con una serie de leyes que regulaban el sistema bancario, difería en algunos puntos del propuesto por Niemeyer. En principio, implicaba que muchas de las operaciones que diversas instituciones realizaban serían a partir de allí centralizadas. Las funciones del Banco Central consistían en regular el crédito y el circulante adaptándolos al volumen real de los negocios, en concentrar reservas moderando las fluctuaciones provocadas por las exportaciones y las inversiones de capital extranjero sobre la moneda, el crédito y las actividades comerciales, en controlar a los bancos promoviendo la liquidez y el buen funcionamiento del crédito y en actuar como agente financiero y consejero del gobierno en las operaciones relacionadas con el crédito interno y externo y con la administración de los empréstitos.



Federico Pinedo habla en la inauguración del Banco Central, junio de 1935.

La conducción del banco recayó en un directorio de catorce miembros, de los cuales el gobierno nombraba tres, incluyendo el presidente y el vicepresidente, los bancos, siete y otros sectores de la economía, independientes del bancario, cuatro. El economista Raúl Prebisch fue designado director; posteriormente, Prebisch obtendría reconocimiento internacional por sus tareas al frente de la Comisión Económica para América Latina, agencia de las Naciones Unidas, fundada hacia el fin de la guerra.

La creación del banco generó nuevas polémicas, en parte por la composición de su directorio, en el que participaban extranjeros, y en parte por los temores que suscitaba la posibilidad de que actuara con demasiada independencia del gobierno, y aun de que llevara adelante una política monetaria anticíclica, pero inflacionaria. De hecho, el circulante comenzó a aumentar luego de 1936, pero si se toma en cuenta la deflación que se había producido en los primeros años de la década, el volumen real a fines de los años '30 era menor que a fines de la década anterior.

El gobierno continuó, luego de la fundación del Banco Central, con el esquema ya iniciado de reestructuración de la deuda pública, tanto interna como externa. El esquema se sostenía en el cambio de los bonos a corto plazo por bonos que requerían un pago anual menor, pero que se prolongaba en el tiempo. Esto permitía disminuir los costos anuales para el Estado, y contó con la aceptación de los acreedores.

Las medidas más innovadoras, contrapuestas con orientaciones anteriores, fueron el control de cambios y la devaluación del peso dispuesta en 1933, y reiterada en 1938 al mismo tiempo que se introducía un sistema de restricciones a las importaciones que buscaba evitar que un exceso de demanda siguiera presionando sobre su valor. Era, justamente, el control de cambios, la herramienta que le permitía al gobierno establecer quiénes tenían prioridades para acceder a las divisas más baratas del mercado oficial, tanto para cubrir las necesidades de importación, como para cumplir con las remesas de inmigrantes y de los beneficios de las empresas extranjeras.

El sistema de control de cambios implicaba la creación de un mercado oficial, donde las divisas obtenidas de las exportaciones tradicionales se vendían al gobierno y éste las revendía a las empresas favorecidas, que contaban con un permiso previo de importación, a un precio más alto. Aquellos importadores que no podían acceder al mercado oficial debían comprar las divisas en el mercado libre, lo que significaba un sobreprecio cercano al 20%. Aunque en principio las divisas del mercado libre provenían de exportaciones no tradicionales y algunas otras fuentes, el gobierno podía intervenir vendiendo divisas de un mercado en el otro, lo que le proporcionaba una fuente importante de ingresos así como la posibilidad de incidir fuertemente en los productos importados y en la definición de los países desde los cuales podían ser importados. Una de las consecuencias del tratado Roca-Runciman consistía, precisamente, en las prioridades que se les otorgaban a las empresas británicas. Pero el sistema también funcionaba para restringir importaciones e impulsar la producción local de productos antes adquiridos en el exterior.

Las ganancias que el gobierno podía obtener por las diferencias entre los precios de compra y de venta de las divisas sirvieron, además, para permitirle al ministro Pinedo establecer un precio sostén para el trigo, el maíz y el lino entre 1933 y 1936. A estas

medidas se agregó la creación de juntas reguladoras, que abarcaron distintos aspectos de la producción agrícola y ganadera de la región pampeana y de las economías regionales. A partir de 1933, se fueron organizando la Junta Reguladora de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la Junta Reguladora de Vinos, la de la Industria Lechera, la Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate y la Junta Nacional del Algodón.

Estas medidas intentaban proteger la producción agrícola y se combinaban con el convenio con Gran Bretaña para asegurar el mercado de carnes. El tratado Roca-Runciman estableció, también, las bases para empréstitos que permitieron desbloquear los fondos que las empresas extranjeras habían acumulado entre 1931 y 1933 al no poder remitir sus ganancias, o incluso pagar por insumos, ante la falta de divisas.

El gobierno, a través de la aplicación de estas medidas, logró mejorar las cuentas públicas y consiguió que parte de la deuda externa fuera repatriada y pasara a estar denominada en pesos. Hacia 1937, las tres cuartas partes de las obligaciones de largo plazo estaban radicadas en el país, cuando esta cifra cubría sólo la mitad en 1929.

A la sustancial mejora de la situación de la economía y del estado de las cuentas públicas había contribuido un cambio favorable en el sector externo, que se produjo a partir de 1934. En ese año comenzó una tendencia ascendente en las exportaciones y una mejora de los precios, que se afirmaría mucho más a comienzos de la década siguiente.

No obstante, en 1937 tuvo lugar otra recesión, que hizo temer que se reprodujeran los efectos de la crisis desatada en 1929; las exportaciones disminuyeron, y volvieron los problemas de balance de pagos. La respuesta del gobierno combinó una devaluación del peso con la ampliación del crédito, y con la extensión del requisito del permiso previo incluso para las importaciones pagadas con divisas obtenidas en el mercado libre. Se buscaba equilibrar el balance de pagos y mantener la actividad interna.

A la alarma suscitada por la nueva depresión se sumaron, muy pronto, los temores sobre los efectos de la guerra en Europa. Se esperaba que éstos fueran similares a los provocados por la Primera Guerra Mundial, y Pinedo, de nuevo a cargo del Ministerio de Hacienda, propuso entonces su plan. Los temores, sin embargo, resultaron infundados.

Una revisión de las políticas económicas durante la depresión estaría incompleta sin una referencia al clima de corrupción que envolvía al gobierno y que impulsaba tanto su descrédito como el aliento a las posiciones nacionalistas. Los ejemplos son varios. El más destacado, las discusiones en el Senado y las denuncias de Lisandro de la Torre sobre el accionar de los frigoríficos para disminuir el precio pagado por el ganado y evadir así cargas impositivas. El asunto involucró a miembros del gobierno, y culminó con el asesinato del senador Enzo Bordabehere en el mismo Senado de la Nación, lo cual obligó a la presentación de la renuncia a sus cargos del ministro de Hacienda, Federico Pinedo, y del de Agricultura, Luis Duhau.

Pero este caso no fue el único. A él se sumaban los escándalos provocados por las presiones británicas para obtener el control del sistema de transporte urbano de Buenos Aires, finalmente aprobado por ley del Congreso, o los que se producían en el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires con relación a la extensión de la concesión a la Compañía Argentina de Electricidad a través de la compra de los votos de los representantes porteños.

LA GUERRA

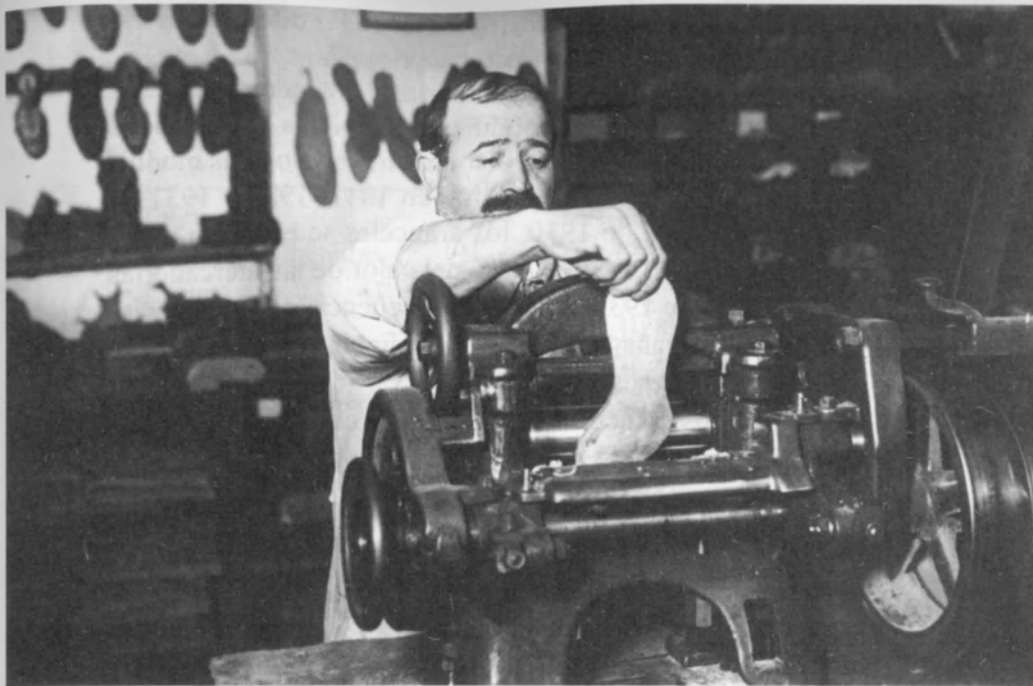
En 1939 estalló la guerra en Europa; entre esa fecha y 1945, el mundo asistiría a sus horrores. Los Estados Unidos se sumaron al bando aliado en 1941 y el conflicto terminó por afectar a la mayor parte de los países del mundo. Incluso la Argentina, donde se profundizaron las divisiones entre los defensores de la neutralidad y los partidarios de los aliados, decidió declarar la guerra al Eje poco antes del fin del conflicto. El gobierno militar inaugurado con el golpe de 1943, en principio reluciente a abandonar la posición neutral, debió soportar las continuas presiones de los Estados Unidos, las que finalmente lo llevaron a la declaración de guerra. Los desencuentros entre la Argentina y los Estados Unidos, que miraban con suspicacia el surgimiento de Juan Domingo Perón y sus presuntas simpatías fascistas, tendrían profundas consecuencias en la posguerra. Entre ellas, se contaron las limitaciones impuestas a los países europeos beneficiarios de la ayuda norteamericana concretada en el Plan Marshall, para la utilización de esos fondos en la compra de productos agropecuarios argentinos.

Los efectos de la guerra fueron en la Argentina menos adversos que lo esperado. La economía del país creció y hacia el fin del conflicto, la Argentina contaba con un importante saldo de libras a su favor acumuladas en Londres como resultado del comercio con Inglaterra. No obstante, el crecimiento ya no estaba basado en las exportaciones agropecuarias, sino en el desarrollo industrial. Por otra parte, aunque importante, ese crecimiento había sido menor que el que caracterizó al país en sus años más expansivos, y también era menor si se lo compara con el de otras naciones que habían participado plenamente en la guerra, como los Estados Unidos y Canadá. Incluso era menor que el logrado por otros países latinoamericanos que, como Brasil, habían participado, aunque no centralmente, en el conflicto armado.

La industria argentina había crecido bajo el impulso de la economía exportadora. Desde fines del siglo XIX se había desarrollado una industria moderna directamente ligada a la elaboración de productos agropecuarios de exportación. Los frigoríficos, que se expandieron en las primeras décadas del siglo XX, y los molinos



Salón de exposiciones de SLAM Di Tella, 1938.



Industria del calzado, 1938.

harineros eran un buen ejemplo de ello. Pero junto con el crecimiento de la economía impulsado por las exportaciones, se había desarrollado un mercado interno, cuya existencia también alentó el crecimiento de las industrias dedicadas a producir bienes para satisfacerlo.

Estas circunstancias le habían conferido al crecimiento industrial algunas particularidades. En el sector directamente ligado a las exportaciones, como los frigoríficos, predominaban la concentración y el capital extranjero. En el sector que producía para el mercado interno, se trataba de una industria de estructura heterogénea compuesta por algunas grandes empresas y una mucho mayor cantidad de empresas menores y talleres.

La política de los gobiernos anteriores a 1930 no incluía un plan específico de desarrollo industrial; sin embargo, las necesidades de financiamiento del Estado se satisfacían con los gravámenes aplicados al comercio exterior, en particular a las importaciones. El impacto de estos gravámenes en el crecimiento industrial, es decir, su efecto indirectamente proteccionista, es difícil de estimar

dada la compleja estructura impositiva. De allí las diferentes perspectivas sobre el tema.

Los aranceles para los productos importados vigentes en la década de 1930 provenían de las modificaciones a una ley aprobada en 1905. Esta ley fue revisada en distintos momentos: las modificaciones más importantes se realizaron en 1911, 1923 y 1931. A principios de la década de 1930, los aranceles se elevaron superando su nivel medio, que era el 28% del valor de las mercaderías importadas. Luego de 1933, y como consecuencia de las negociaciones con Gran Bretaña, tendieron a disminuir, quedando en un valor promedio más cercano al 20%.

El aumento de los aranceles y el sistema de control de cambios, combinado posteriormente con el requerimiento de permisos de importación, son parte de la explicación del crecimiento industrial de la década de 1930. A pesar de la caída de la producción industrial que tuvo lugar entre 1929 y 1931, el crecimiento que se produjo si se considera el período 1930-1934 alcanzó el 8% anual, según las recientes estimaciones de Roberto Cortés Conde, que corrigen hacia arriba las anteriores de la CEPAL que indicaban un crecimiento de 2,3% para el mismo período. Finalmente, la guerra provocó el inicio de una etapa de mayor crecimiento.

Como puede verse en la Tabla 3, fue hacia el final del período aquí estudiado cuando tuvo lugar el mayor crecimiento de la producción industrial. Si se dejan de lado los valores correspondientes a productos de caucho y maquinarias y artefactos eléctricos—cuyo crecimiento es un efecto estadístico producido por partir de una base prácticamente inexistente—, es posible observar que eran los productos textiles, los metálicos y el petróleo y sus derivados los que lideraban el crecimiento. El procesamiento de alimentos y bebidas, que incluye las ramas más tradicionales de las industrias de exportación, creció por su parte a tasas menores.

Estas cifras son confirmadas por los cambios en la estructura de la industria que se indican en la Tabla 4. Como puede verse, entre 1935 y 1947, fecha de los censos industriales, disminuyó el porcentaje de establecimientos, personal y producción vinculados a la alimentación, en los totales de esos rubros correspondientes a la industria argentina. En tanto, la industria textil aumentó la participación en todos ellos y en la fuerza motriz. Los datos son significativos pues la textil era una rama relativamente rezagada en el país; su crecimiento estuvo impulsado por la expansión del

Tabla 3
Tasa de crecimiento anual medio de la producción industrial

	1925-29/ 1937-39	1937-39/ 1948-50
Total	3,4	5,0
Alimentos y bebidas	2,1	2,6
Tabaco	0,5	4,9
Productos textiles	10,8	9,1
Confecciones	-0,4	4,4
Productos de la madera	-2,2	6,4
Papel y cartón	-1,7	6,3
Imprenta y publicaciones	-2,2	2,3
Productos químicos	-0,4	7,7
Derivados del petróleo	12,6	5,0
Productos de caucho	39,0	3,0
Artículos de cuero	-2,2	7,2
Piedras, vidrios y cerámica	-2,5	6,3
Metales	5,1	5,4
Vehículos y maquinaria, excluida la eléctrica	8,3	8,3
Maquinaria y artefactos eléctricos	40,5	8,7
Otras manufacturas	0,1	5,1
Artesanías	N/D	3,7

Fuente: Díaz Alejandro (1975), p. 220 (n/d: no disponible).

cultivo del algodón que se había iniciado en la década anterior.

Fue durante el período de la guerra que la industria alcanzó sus tasas de crecimiento más altas (ver Tabla 3), y aunque los textiles encabezaron ese crecimiento, también empezó a tener importancia la metalmecánica, que incluía talleres de reparaciones y la fabricación de artefactos eléctricos. El conflicto bélico, al impedir la importación de los productos que la Argentina adquiría habitualmente en el exterior, reforzó las políticas que tendieron a reducir las importaciones durante los años '30. Hacia el fin de la guerra, la participación de la industria en el PBI superaba ya a la del sector agropecuario.

El aumento de la producción industrial permitió incluso acce-

Tabla 4
Estructura de la industria (en porcentajes)

	Establecim.		Personal		Producción		Fuerza motriz	
	1935	1946	1935	1946	1935	1946	1935	1946
Alimentación y afines	31	22	27	23	42	34	36	36
Textil, vestuario y afines	15	20	21	23	20	26	8	10
Metalmecánicas y afines	23	27	20	22	14	14	14	17
Químicas y afines	3	3	5	6	10	11	12	15

Fuente: Dorfman (1983), pp. 48 y 53.



El ing. Padilla, ministro de Agricultura, en la fábrica de neumáticos Firestone, a comienzos de la década de 1940.



Vista aérea de la fábrica de pinturas Alba, Nueva Pompeya, ciudad de Buenos Aires, octubre de 1938.

der a mercados externos, especialmente de los países latinoamericanos que se encontraron con las mismas dificultades que la Argentina para mantener la importación de productos provenientes de los Estados Unidos y Europa. La participación de los productos manufacturados no tradicionales representaba el 2,9% del total de las exportaciones en 1939. En 1943, el momento de su pico más alto, llegó a ser del 19,4%. El fin de la guerra cambió nuevamente las condiciones, con la vuelta de proveedores tradicionales, y esa participación bajaría al 5,5% en 1947.

Parte del crecimiento industrial del período se relacionó con la instalación en el país de empresas norteamericanas, en especial en ramas como la textil, las fábricas de neumáticos y de productos eléctricos. El fenómeno no era nuevo: ya a principios de siglo se habían instalado frigoríficos de capitales norteamericanos. La tendencia se reforzó durante la década de 1920, cuando buscaban eludir las barreras arancelarias elevadas en esos años. Durante la crisis,

debido a que los acuerdos entre la Argentina y Gran Bretaña establecían ventajas para los productos ingleses dado que las divisas disponibles debían utilizarse preferentemente para el intercambio comercial y financiero entre estos dos países, el proceso se hizo más intenso. Congruentemente, las estadísticas muestran una clara disminución de las importaciones provenientes de los Estados Unidos. La presencia de capital extranjero, que según algunas estimaciones superaba el 50% del capital invertido en la industria, implicaba la existencia de un nuevo actor que el gobierno debía tomar en cuenta en el diseño e implementación de sus políticas y en especial en el acceso a las divisas que permitieran la provisión de insumos.

El producto del crecimiento industrial al finalizar la guerra tendría como destino principal el mercado interno. La importancia de ese mercado también creció para los productos agropecuarios, en la medida que aumentaba la población urbana y por lo tanto disminuían las exportaciones agropecuarias, cuya producción había comenzado un proceso de estancamiento que se reflejaba en su participación en el PBI. La Argentina se cerraba sobre sí misma.

UN BALANCE

La Argentina se recuperó de la depresión relativamente rápido y comenzó durante la crisis, y con mayor fuerza durante la guerra, un proceso de crecimiento basado en la industria. ¿Fue éste el resultado de las políticas aplicadas por el Estado durante la década de 1930 y la primera mitad de la siguiente? El inicio y la recuperación del proceso de industrialización por sustitución de importaciones parecen indicar que la respuesta es afirmativa. No obstante, para que la respuesta sea convincente es necesario primero analizar hasta qué punto pueden considerarse homogéneas las políticas implementadas durante la depresión y la guerra, y tener en cuenta, además, los cambios en el sector externo durante ambos periodos.

La "nueva fórmula" de los treinta, en la denominación que Javier Villanueva da a las políticas implementadas por Pinedo a partir de 1933, partía de la constatación de las adversas condiciones provocadas por la crisis y por la política de preferencias imperiales británica. También, del registro del conflicto entre los intereses norteamericanos y británicos por imponerse en la Argentina y de

la existencia, desde los años veinte, de una base industrial ligada en parte a los intereses norteamericanos.

Estas eran las condiciones que habrían llevado al diseño paulatino de una política que contenía medidas estructurales y medidas anticíclicas. Las primeras pretendían mantener la relación con Gran Bretaña, especialmente preservando el mercado para las carnes argentinas. La contrapartida argentina consistía en asegurar que las libras obtenidas por esas exportaciones se utilizarían preferentemente para el pago de productos británicos y para las remesas de capital a Londres de las empresas del mismo origen. El segundo tipo de medidas, las anticíclicas, pretendía utilizar el control de cambios para desarrollar una política de apoyo a la industria, que no era presentada como tal. Junto con otras acciones, como el desarrollo de las obras públicas, debían tender a la disminución del desempleo y reactivar la economía, pero también debían atraer capital extranjero al sector industrial.

Estas políticas, encabezadas por Pinedo, buscarían impulsar las industrias para las que se contaba con insumos locales y que pudiesen competir en el mercado internacional. Al mismo tiempo, proponía una estrategia de acercamiento a los Estados Unidos, aunque tratando de no enfrentarse con la elite ganadera. Éste sería el significado del plan presentado por el ministro en 1940.

Desde el Banco Central la estrategia propuesta habría sido diferente, aunque no completamente contradictoria. Se trataba de apoyar a las industrias ya instaladas en el país, muchas de las cuales utilizaban insumos que era necesario importar y estaban controladas por capital extranjero. En este caso, las necesidades de obtener capitales que impulsaran la industrialización frente al deterioro de los mercados de los productos tradicionales de exportación eran las razones que primaban.

Habría sido más tarde, luego del golpe de 1943 y del surgimiento de Juan Domingo Perón, que se habría impuesto una estrategia diferente. Se trataba, entonces, de asegurar el pleno empleo y el mejoramiento de los salarios reales. Se apoyaría la industria existente así como el desarrollo del mercado interno y la industrialización por sustitución de importaciones. A estos objetivos se sumaron los del Ejército: la meta era construir una industria pesada que permitiera cubrir las necesidades de armamento de las Fuerzas Armadas y asegurara la defensa nacional.

La explicación es atractiva. Según ella, los dirigentes argenti-

nos de la década de 1930, aunque no habían diseñado sus planes desde el principio, conocían perfectamente las consecuencias indirectas de sus decisiones, y muy pronto empezaron a buscarlas.

La interpretación de Villanueva acentúa las discontinuidades de las políticas económicas. No obstante, también hay signos de continuidad entre decisiones anteriores a la crisis misma, desde la visita del vizconde D' Abernon y la salida de la convertibilidad en tiempos de Yrigoyen a las primeras medidas tomadas por los gobiernos de Uriburu y luego de Justo entre 1930 y 1933. Incluso en los primeros tiempos posteriores al golpe de 1943 se continuaron políticas iniciadas con anterioridad, aunque se inician los enfrentamientos con los Estados Unidos que más tarde implicarían fuertes problemas al frenar la posibilidad de colocar productos argentinos en la Europa de posguerra beneficiada por el Plan Marshall.

Por otra parte parece claro que, más allá de los méritos de las políticas diseñadas en los años treinta, la recuperación se inició a partir de 1934 en buena medida como consecuencia de un aumento de las exportaciones y de un mejoramiento de los términos del intercambio. Al iniciarse la crisis, las políticas de los gobiernos argentinos parecían diseñadas para la coyuntura, manteniendo firmes algunos principios de la ortodoxia económica: el equilibrio del presupuesto, el servicio de la deuda externa y el privilegio a la defensa del mercado de carnes. No estaban inspiradas en principios keynesianos de aumento del gasto público como herramienta para disminuir la desocupación; sólo a fines de la década estos postulados comenzarían a ser aceptados por el pensamiento oficial. Aun el Plan Pinedo, cuyos eventuales efectos si se hubiera aplicado permanecen en el territorio de lo hipotético, estaba también inspirado en principio en la coyuntura.

Muchos años después, el mismo Raúl Prebisch sostenía que las medidas tomadas para controlar el comercio exterior tenían como objetivo un apoyo a la industria que no podía proclamarse, dado el clima poco propicio de la época. Pero esas medidas también favorecieron a las empresas ya instaladas, como lo harían posteriormente las tomadas en defensa del mercado interno.

Las perspectivas de largo plazo no parecían ser preocupaciones centrales de los funcionarios, o al menos se encontraban subordinadas a la búsqueda de una solución a los problemas inmediatos. Sin duda, existían alternativas a las políticas económicas seguidas, pero tratar de definir las no constituye un ejercicio muy fructí-

fero. Uno, tal vez más legítimo, consiste en tratar de entender cuáles fueron las razones que guiaron a los actores en la elección de sus opciones, y estas últimas estaban muy acotadas. El escenario internacional, sacudido por la depresión primero y la guerra después, la competencia entre Inglaterra y los Estados Unidos por el mercado local, el alineamiento interno de las fuerzas políticas, las ideas prevalecientes sobre política económica en el momento en que se desató la crisis y el clima de corrupción e ilegitimidad que rodearon a los gobiernos del período parecen elementos suficientes para explicar las medidas tomadas desde el Estado.

BIBLIOGRAFÍA

Alhadeff, Peter. "The Economic Formulae of the 1930s: a Reassessment", en Guido Di Tella y D.C.M. Platt (eds.), *The Political Economy of Argentina, 1880-1946*, Nueva York. St. Martin's Press, 1986.

———. "Public Finance and the Economy in Argentina, Australia and Canada during the Depression of the 1930s", en D.C.M. Platt y Guido Di Tella (eds.), *Argentina, Australia & Canada. Studies in Comparative Development, 1870-1965*, Nueva York. St. Martin's Press, 1985.

Balboa, Manuel. "La evolución del balance de pagos de la República Argentina, 1913-1950", en *Desarrollo Económico*, 45, 12, 1972.

Cortés Conde, Roberto. *La economía argentina en el largo plazo (siglos XIX y XX)*, Buenos Aires. Sudamericana. 1997.

Díaz Alejandro, Carlos. *Ensayos sobre la historia económica argentina*, Buenos Aires. Amorrortu. 1975.

Di Tella, Guido. "Economic Controversies in Argentina from the 1920s to the 1940s", en Guido Di Tella y D.C.M. Platt (eds.), *The Political Economy of Argentina, 1880-1946*, Nueva York. St. Martin's Press. 1986.

——— y Zymelman, Manuel. *Los ciclos económicos argentinos*, Buenos Aires, Paidós, 1973.

Dorfman, Adolfo. *Cincuenta años de industrialización en la Argentina, 1930-1980*. Buenos Aires, Solar, 1983.

Ferrer, Aldo. *La economía argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1963.

Fodor, Jorge y O'Connell, Arturo. "Dependencia, historiografía y objeciones al Pacto Roca. Un comentario", en *Desarrollo Económico*, 25, 99, 1985.

———. "La Argentina y la economía atlántica en la primera mitad del siglo XX". en *Desarrollo Económico*, 49, abril-junio 1973, pp. 3-65.

Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas. *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*, Buenos Aires, Ariel, 1998.

Gravil, Roger. "Anglo-U.S. Trade Rivalry in Argentina and the D'Abernon Mission of 1929", en David Rock (ed.), *Argentina in the Twentieth Century*. Londres y Pittsburgh. University of Pittsburgh Press. 1975.

Jorge, Eduardo. *Industria y concentración económica (desde principios de siglo hasta el peronismo)*. Buenos Aires. Siglo XXI. 1971.

Katz, Jorge y Kosacoff, Bernardo. *El proceso de industrialización en la Argentina: evolución, retroceso y prospectiva*. Buenos Aires. CEAL. 1989.

Korol, Juan Carlos. "El desarrollo argentino y la historia comparada", en *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. E. Ravignani"*, tercera serie, Nro. 5, 1992.

Lewis, Colin. "Anglo-Argentine Trade, 1945-1965", en David Rock (ed.), *Argentina in the Twentieth Century*. Londres y Pittsburgh, University of Pittsburgh Press. 1975.

Llach, Juan José. "El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo", en *Desarrollo Económico*, 23, 92, 1984.

Mallon, Richard y Sourrouille, Juan V. *La política económica en una sociedad conflictiva*. Buenos Aires. Amorrortu, 1975.

O'Connell, Arturo. "La Argentina en la Depresión: los problemas de una economía abierta", en *Desarrollo Económico*, 23, 92, 1984.

Prebisch, Raúl. "Argentine Economic Policies since the 1930s: Recollections", en Guido Di Tella y D.C.M. Platt (eds.), *The Political Economy of Argentina, 1880-1946*. Nueva York, St. Martin's Press. 1986.

Skupch, Pedro. "Nacionalización, libras bloqueadas y sustitución de importaciones", en *Desarrollo Económico*, 12, 47, 1972.

Smith, Pedro H. *Carne y política en la Argentina*. Buenos Aires, Paidós. 1968.

Vázquez-Prevedo, Vicente. *Crisis y retraso. Argentina y la economía internacional entre las dos guerras*. Buenos Aires, Eudeba, 1978.

Villanueva, Javier. "Economic Development", en M. Falcoff y R. H. Dolkart (eds.), *Prologue to Perón: Argentina in Depression and War, 1930-1945*. Berkeley, University of California Press, 1975.

———. "El origen de la industrialización argentina", en *Desarrollo Económico*, 12, 47, 1972.

Large, Eduardo. *Industria y comercio en Argentina: historia y perspectivas de la década de los sesenta*. Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

Katz, Sergio. *Historia del comercio exterior argentino*. Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

Korol, Juan Carlos. "El desarrollo argentino y la historia comparada," en *Historia Argentina*, vol. 10, no. 1, pp. 1-100. Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

Lach, Juan José. "El Plan Pinedo de 1940: su significado histórico y los orga- nismos de la economía política del gobierno," *Revista de Historia Económica*, vol. 1, no. 1, pp. 1-100. Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

Milner, Richard. *Argentina y el comercio exterior*. Buenos Aires, Amorrortu, 1972.

O'Connor, John. *El desarrollo económico argentino*. Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

Prabhu, Ravi. "Argentine Economic Policies since the 1930s: Reflections," en *Journal of Latin American Studies*, vol. 10, no. 1, pp. 1-100. Cambridge, 1978.

Prabhu, Ravi. "Nationalization, labor productivity and economic growth in Argentina," en *Development Economics*, vol. 12, no. 1, pp. 1-100. London, 1981.

Prabhu, Ravi. *El comercio exterior argentino*. Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

Vázquez-Pardo, Vicente. "Crisis y renacimiento argentino y la economía interna," en *Revista de Historia Económica*, vol. 1, no. 1, pp. 1-100. Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

Villanueva, Javier. "Economic Development," en M. Falcoff y R. H. Dolan (eds.), *Argentina: un siglo de historia*. Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

Wallerstein, Immanuel. *El mundo moderno y su origen*. Barcelona, Siglo XXI, 1971.

LA POLÍTICA EN SU
LABERINTO

II

Partidos, coaliciones y sistema de poder

por DARÍO MACOR



zación de actividades de propaganda en un local del Partido Socialista, 1940.



LA POLÍTICA EN SU LABERINTO

A lo largo de la década abierta en 1930 ciertos partidos políticos, individualmente o integrando coaliciones, alcanzaron suficiente significación electoral como para constituir en torno a ellos el campo de competencia por la conquista de las principales representaciones parlamentarias y el acceso al control del gobierno nacional. Ese campo de competencia política se estructuró en torno al eje oficialismo-oposición, relativamente estable en su conjunto pero con fuerte conflictividad y dinamismo en cada uno de sus vértices. Por un lado se contaron las fuerzas oficialistas, que controlaban los recursos del Estado nacional y concurrían a la competencia organizadas como una coalición, la Concordancia; por otro, la oposición, en la cual coexistieron partidos con identidades claramente diferenciadas (socialista, demócrata progresista, Unión Cívica Radical) que elaboraron distintas alternativas para ocupar el lugar de la oposición en el sistema, con la aspiración de alcanzar el poder nacional (coalición de socialistas y demoprogresistas en la Alianza Civil; abstencio-

nismo electoral de la UCR; participación electoral de las tres fuerzas por separado; intentos de construir un Frente Popular reuniendo a las tres fuerzas con otros actores políticos y sociales).

A su vez, la dinámica de las distintas organizaciones partidarias y sus relaciones estuvo signada no sólo por los cambios que sufrió la relación gobierno-oposición, sino también por las mutaciones internas de la coalición gubernamental y de las distintas fuerzas opositoras. En este sentido, se distinguen tres etapas.

Una primera, breve y bajo la sombra del golpe militar y la dictadura de Uriburu, en la que se constituyó el campo de conflicto político con rasgos que marcaron el proceso en el primer quinquenio de la década: el perfil del oficialismo se definió precisamente en estos pocos meses que separan el golpe del treinta de la asunción de Justo a la presidencia, así como el de la oposición parlamentaria, integrada por el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista, que concurren a las elecciones coaligados en la Alianza Civil, a fines de 1931, y también el de la oposición externa al sistema, lugar ocupado por el radicalismo en abstención.

La segunda etapa fue la de la consolidación de la coalición oficialista desde el poder y con el liderazgo de Justo, y se extendió hasta mediados de la década. En este período, éxitos y fracasos de las estrategias del oficialismo y de la oposición modificarían notablemente el cuadro de situación anterior. La coalición gubernamental vio confirmada su estrategia a partir de la capacidad para reorientar al Estado, obligando a la recomposición de las políticas opositoras. Por lo pronto, fue en esta etapa cuando se produjo el retorno del radicalismo a la competencia electoral, lo cual modificó el frente opositor. La reincorporación del partido mayoritario sinceró rápidamente las representaciones parlamentarias de socialistas y demoprogresistas, que habían crecido gracias a su retiro, e introdujo a la Concordancia en un verdadero laberinto cuyos senderos remiten a dos de los problemas esenciales de poder político: el problema de la reproducción en el poder y el de la producción de legitimidad.

Esta encrucijada adelantó la descomposición del sistema de poder elaborado por Justo, que caracterizó a la última etapa. Marcada por la imperiosa necesidad del gobierno de utilizar la maquinaria del fraude electoral en gran escala para garantizar el control de la sucesión, y por la crisis de legitimidad resultante de esa manipulación, esta etapa es la de la agonía del sistema de poder justista.

Las alternativas de salida del laberinto fracturaron al mismo gobierno y los principales rasgos de la crisis se percibieron ya en los últimos años de la presidencia de Justo y atravesaron el gobierno de Ortiz-Castillo. Si Ortiz aparece como un remedo de Roque Sáenz Peña, al apostar por el transformismo del régimen dando una respuesta positiva a la cuestión de la legitimidad para salir así del laberinto, su sucesor, Castillo, retomó el sendero del fraude que le permitía controlar la sucesión al costo de sacrificar, no ya la ilegitimidad de origen que era un pecado común con sus antecesores, sino ese horizonte para una república verdadera que Ortiz había logrado instalar lo suficiente como para multiplicar los costos de su abandono.

GOLPE Y REFORMULACIÓN DEL CAMPO POLÍTICO

El 6 de setiembre de 1930, un reducido grupo de fuerzas militares, cuyo núcleo principal estaba constituido por jóvenes cadetes del Colegio Militar, logró definir casi sin resistencias la crisis política que había paralizado al gobierno radical cuando apenas cumplía un tercio del mandato constitucional. En ese invierno de 1930, la imagen del anciano presidente Yrigoyen tenía la virtud de potenciar a la oposición política facilitando la coincidencia en el rechazo de su figura y de su gestión. Su desalojo del poder parecía presentarse así como la única alternativa para posibilitar la solución de la crisis política, aceptada incluso por hombres del partido oficial y del mismo gobierno. El éxito de la movilización militar del 6 de setiembre parecía confirmar a los protagonistas del levantamiento la legitimidad de la acción, pero instalado Uriburu en la Casa Rosada y a medida que se alejaba el fantasma del presidente depuesto, las dificultades para traducir aquella coincidencia en un proyecto político minarían rápidamente el poder del gobierno provisional.

El uriburismo, que nucleaba a su alrededor a los grupos más intransigentes de la derecha nacionalista y a sectores tradicionales del conservadurismo, pretendía encabezar una revolución política a partir de la revisión de las disposiciones institucionales sobre las que se asentaba el régimen derrocado: el sistema electoral con sus mecanismos de representación y la misma Constitución Nacional. Los contenidos últimos del proyecto no alcanzaron una definición



*Custodia en la casa de Hipólito Yrigoyen.
setiembre de 1930.*

precisa, ensombrecidos por las contradicciones de los miembros del gabinete, la inexperiencia política del presidente y el rechazo de los actores convocados para acompañar la gesta.

En el cuadro de esas contradicciones debe instalarse el intento de acercamiento a Lisandro de la Torre. En la visión de Uriburu, De la Torre podía encabezar un proceso de reconstrucción de una democracia de elite, a partir de la redefinición de la Ley Sáenz Peña que impedía el “gobierno de los mejores”. Amigo personal de Uriburu, De la Torre había compartido con él en años pasados la tentación por el voto calificado como camino para evitar la demagogia y la manipulación del electorado; también la inquina contra el gobierno radical y especialmente contra Yrigoyen. Sin embargo, a

pesar de coincidir con los setembrinos en un diagnóstico común del gobierno depuesto, sus prevenciones frente a las consecuencias de la intervención militar lo habían mantenido a prudente distancia del alzamiento. Su experiencia política le permitía apreciar que, luego de casi dos décadas de democracia electoral, la legitimidad de un gobierno sólo podía ganarse en ese terreno. No creía entonces De la Torre en la posibilidad de conciliar legitimidad y democracia calificada; por lo tanto, se trataba de volver cuanto antes al terreno electoral sin artilugios legales, tal vez con la certeza íntima de que la crisis terminal del gobierno radical habría cumplido su función pedagógica, contribuyendo a la madurez del electorado.

La otra vertiente del proyecto uriburista era promovida especialmente por los sectores nacionalistas que rodeaban al presidente. A tono con los modelos que en Europa se ensayaban en respuesta a la crisis del liberalismo, entendían necesario modificar radicalmente el sistema de representación que descansaba en el individuo y los partidos, para dar lugar a las organizaciones corporativas en las que la sociedad podría reconocerse como comunidad. Este modelo corporativo no se apoyaba en un movimiento de masas como los fascismos, sino en el Ejército, última fuente del orden jerárquico perdido en el mundo de la democracia liberal.

La atracción de los grupos nacionalistas por la experiencia de Primo de Rivera en España o por el fascismo italiano —que en 1930 gozaba de insospechadas simpatías en la Argentina, muchas de las cuales se volverían vergonzantes recién con la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial— no alcanza para definir al uriburismo como fascismo. Como señaló a pocos años de la experiencia José Luis Romero, este “fascismo criollo” fue aristocrático y carente de cualquier aire plebeyo; tomó del modelo europeo el militarismo pero dejó fuera el movilizacionismo de masas, que el fascismo italiano ponía en escena histriónicamente en un ritual de renovación de la legitimidad plebiscitaria del Duce.

Esta característica del proyecto de jerarquización de la sociedad y del orden político lo volvía por completo dependiente de la variable militar. Su condición de desarrollo, entonces, estaba sobredeterminada por la capacidad de convocatoria a ese Ejército en cuyo nombre el nacionalismo integrista interpelaba a la sociedad. Pero el ejército, tan imprescindible para el modelo propuesto, estaba lejos de ser controlado por el uriburismo. La reestructuración burocrática de la institución en las décadas anteriores no sólo la había modificado mucho más de lo que el dictador y sus acompañantes podían percibir, sino que este proceso de centralización en la toma de decisiones de la institución coincidía con la construcción de un liderazgo interno en la figura “profesionalista” de Justo.

Desde su condición de jefe de una máquina centralizada, Justo podía cercar militarmente al uriburismo y, a la vez, poner coto a las expectativas de los militares yrigoyenistas que insistían en invocar a un Ejército ya inexistente en distintos alzamientos condenados a la derrota. A comienzos de 1931, la morosidad del gobierno para convocar a elecciones terminó de hacer visibles los térmi-

nos de la cuestión militar y la capacidad del liderazgo justista en la institución. Un “planteo militar” de la mayoría de los cuadros de oficiales superiores exigió el inmediato retorno a la normalidad institucional, bajo la amenaza de un levantamiento que Uriburu sólo pudo detener sacrificando sus proyectos más ambiciosos de ingeniería institucional y convocando a elecciones presidenciales. En este contexto de movilización militar se inscribió el levantamiento del coronel yrigoyenista Gregorio Pomar en Corrientes, ocurrido en 1931, rápidamente sofocado al quedar aislado de las principales fuerzas militares controladas por el sector justista, que habían logrado su objetivo de doblegar al presidente. El levantamiento de Corrientes sería el primero de una serie confirmatoria del poder justista sobre el aparato institucional interno, de la imposibilidad de impactar sobre el conjunto de la institución desde sus márgenes, y del serio peligro para los oficiales yrigoyenistas de ser utilizados por Justo en su carrera a la presidencia.

La fortaleza del liderazgo de Justo en las Fuerzas Armadas respondía también a factores que se ubicaban más allá de la institu-



Tropas revolucionarias atrincheradas en un costado del camino, cerca del Hipódromo de Corrientes, momentos después de sublevarse, 29-8-1931.

ción. Sus estrechas relaciones con las fuerzas políticas y sociales tradicionales que habían promovido el movimiento setembrino ofrecían a los hombres de armas un horizonte civil que resguardaba a la institución. Esas otras fuerzas políticas y sociales del campo antiyrigoyenista, ajenas al reducido núcleo uriburista, advirtieron rápidamente que los intentos de reformulación política del presidente provisional eran innecesarios y hasta peligrosos. La presión ejercida por estos sectores para sostener la tradición institucional liberal terminó de aislar al gobierno y consolidó la posición de Justo.

La Concordancia, el bloque político interpartidario con el que Justo controló el poder político a lo largo de la década, nunca se conformó como una organización estable e institucionalizada sino que funcionó como una coalición de hecho, que congregaba a fuerzas de muy diferentes recursos como los distintos partidos conservadores provinciales (por entonces ya reunidos en el Partido Demócrata Nacional), el antipersonalismo radical y el socialismo independiente. Un bloque político que en 1930-1931 tenía ya recorrido un camino común cuyo punto de partida más claro puede datarse en las elecciones de 1928, cuando los partidos conservadores provinciales y los socialistas independientes apoyaron la fórmula del antipersonalismo, en un acuerdo electoral que se conoció como la “confederación de las derechas”.

A pesar de la dura derrota sufrida en esas elecciones, en poco tiempo los partidos de la coalición de las derechas recuperarían la iniciativa política gracias a los problemas que ponían en jaque al gobierno y al partido oficial. Apenas dos años después del “plebiscito” de 1928, las elecciones legislativas de 1930 mostraban esta recuperación de los sectores opositores en el terreno electoral. En el clima político de 1930, la lectura de esos resultados, incluso la del propio radicalismo, aunque en sordina, destacaba más el retroceso del partido oficial en los principales distritos que su supervivencia como partido mayoritario a nivel nacional.

Para un sector de la oposición, la recuperación electoral de 1930 alimentaba la expectativa de derrotar al radicalismo en las urnas; la vía electoral podía ofrecer así una salida legítima para sanear la democracia que el radicalismo bastardeaba. Esta confianza en la capacidad del sufragio para corregir las deformaciones populistas del sistema respaldaba la cautelosa distancia del PS y del PDP frente a la intervención militar de setiembre.

En las organizaciones partidarias que se habían coaligado en 1928 tras la fórmula del antipersonalismo, la percepción fue diferente. La capacidad del radicalismo para sostenerse electoralmente dio lugar a una lectura pesimista de las posibilidades que la democracia tenía para autocorregirse. En esta visión, el gobierno yrigoyenista no respetaba el pacto de convivencia política, premisa sobre la cual la reforma de 1912 había cifrado sus expectativas de democratización en la práctica del sufragio y de conformación de organizaciones partidarias orgánicas. El personalismo yrigoyenista se presentaba así como una anomalía, como una deformación que corrompía el sistema afectando el atributo pedagógico del sufragio en el proceso de construcción y calificación del ciudadano. La corrección del proceso no podía esperarse entonces de los mismos ciudadanos, ya que su esclarecimiento era obstruido por la “corrupción” gubernamental. En esta argumentación, el discurso de la democracia en el legado de la reforma de 1912 permite poner por afuera de ella al gobierno radical que la distorsiona, y justificar así una intervención militar, igualmente externa, como mecanismo correctivo.

El registro de esta argumentación, predominante en la dirigencia política de las fuerzas tradicionales promotoras del golpe militar, permite ajustar la mira sobre las expectativas con las que esos sectores, y los principales medios de prensa que los acompañaron, se lanzaron a la conquista de la opinión pública, justificando la ruptura institucional. Que esta convocatoria se realizara en nombre de la democracia liberal —aun considerando la cuota de oportunismo de este recurso argumentativo— establece una clara divisoria de aguas con el nacionalismo, que en expresa colisión con esa tradición liberal, definirá el horizonte de ideas de la dictadura de Uriburu.

EL BLOQUE OFICIAL

Poco antes del golpe de setiembre, el bloque político de la derecha tradicional dio un primer paso a su institucionalización con un documento público, el “manifiesto de los 44”, con el que clausuraba cualquier espacio de negociación con el gobierno y justificaba así la necesidad de la intervención de las Fuerzas Armadas. Suscribían el “manifiesto” los legisladores nacionales del socialismo in-

dependiente y de los partidos conservadores, mientras los legisladores antipersonalistas hacían lo propio, pero manteniendo su independencia.

A los pocos días de asumir Uriburu la presidencia provisional, los partidos aliados conformaron la Federación Nacional Democrática, coalición que no exigía a los partidos integrantes el abandono de su identidad partidaria, y que reunió al PSI, al antipersonalismo y a las distintas organizaciones provinciales conservadoras. Promovida especialmente por los socialistas independientes, la vida de la federación fue efímera. Sin embargo, su constitución significaba el acta de nacimiento posgolpe del bloque político partidario. Como tal, ponía un límite a los proyectos del uriburismo en el gobierno y, coincidiendo con la presión que desde el Ejército ejercía el sector justista, demandaba el retorno a la normalidad institucional.

Para el socialismo independiente, cuyo triunfo en las últimas elecciones capitalinas le daba una proyección nacional que carecía de estructura organizativa en la cual sostenerse, la federación podía ofrecer una plataforma para su desarrollo político más allá de la ciudad de Buenos Aires. En cambio, para los partidos conservadores, especialmente para el poderoso aparato bonaerense, concurrir a la coalición sin resolver antes la cuestión de la unificación partidaria era conceder a los partidos aliados un espacio nacional que no guardaba proporción con sus fuerzas electorales efectivas. Para el antipersonalismo, la situación era ambigua, ya que su desarrollo político estaba más supeditado que el de sus aliados al rumbo que adoptara el partido derrocado. Con Yrigoyen preso y Alvear que aplaudía desde París la intervención militar, el desconcierto de los radicales podía ser capitalizado por el antipersonalismo, en la medida que su opción conservadora no cortara definitivamente los vínculos con la tradición radical. Se definía así para este sector un territorio partidario muy vulnerable, como veremos, a las decisiones de la UCR, que sin embargo se revelará en cierto sentido exitoso. Ese territorio del antipersonalismo sería el de Justo a lo largo de la década.

La presión simultánea de los partidos federados, el Ejército y los principales medios de prensa llevó al gobierno a ensayar una salida electoral con la cual su ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, pensaba plebiscitar la gestión de Uriburu y recuperar así la iniciativa política. La estrategia establecía un recorrido de elec-

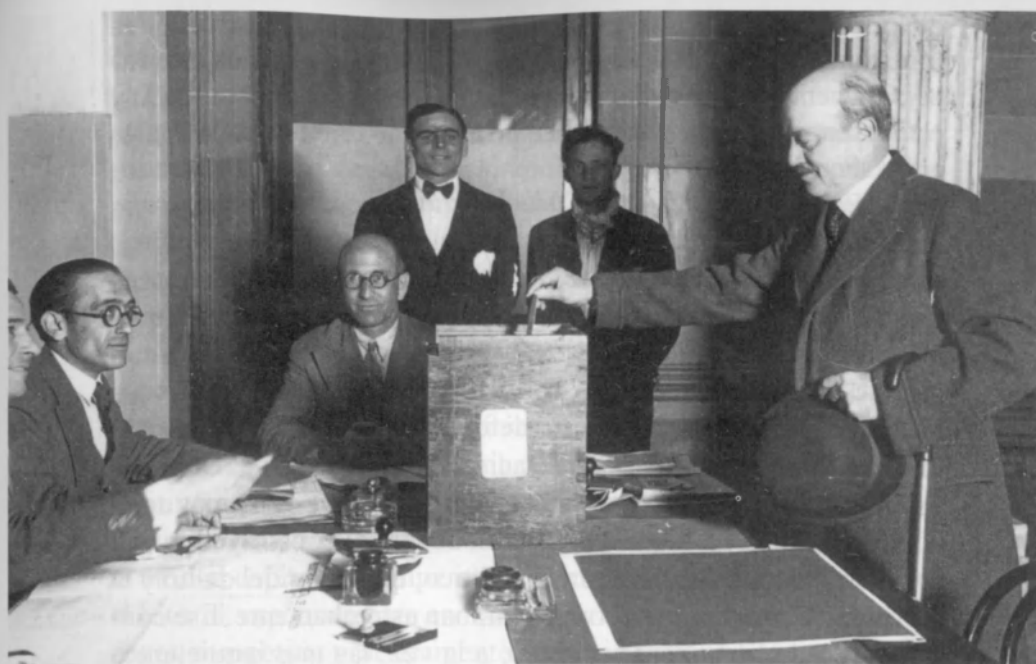
ciones de autoridades provinciales que se iniciaría en abril en la provincia de Buenos Aires para continuar inmediatamente en Santa Fe, Corrientes y Córdoba.

Los sectores del conservadurismo bonaerense más cercanos a Sánchez Sorondo lograron el apoyo de su partido para el plan de elecciones escalonadas, que comenzarían precisamente en el distrito bonaerense, donde confiaban en que el descrédito radical les aseguraría el triunfo. Esta decisión provocó la ruptura de la Federación Nacional Democrática, a la cual los conservadores dieron el golpe de gracia convocando a la unificación partidaria nacional de las distintas fuerzas provinciales afines. El partido conservador de Buenos Aires se preparaba así para organizar una estructura nacional, con la cual podía convocar luego a sus aliados antipersonalistas y socialistas independientes desde una situación de fuerza como para imponer a sus candidatos o, al menos, condicionar el avance de Justo como referente de la potencial coalición de las derechas. A la vez, si el resultado de las elecciones de abril le era favorable, el conservadurismo bonaerense podría reclamar para sus dirigentes los principales cargos nacionales en la futura contienda electoral.

Desde el mirador del gobierno, la estrategia adoptada significaba poner en suspenso los proyectos de ingeniería institucional más ambiciosos del nacionalismo integrista. Sánchez Sorondo logró concentrar todas las expectativas del gobierno en el plan electoral, y los comicios de la provincia de Buenos Aires se transformaron así, por acción del mismo gobierno, en un acto plebiscitario sobre su gestión.

Para tan altas expectativas, el resultado de las elecciones bonaerenses de abril de 1931 no podía ser más catastrófico. El triunfo radical reveló la formidable capacidad electoral que aún mantenía el partido derrocado, a pesar de no contar con recursos estatales ni con la participación de su máximo líder, recluido por el gobierno en Martín García. Se trató de un triunfo relativamente holgado, que no alcanzaba para que el radicalismo tuviera colegio electoral propio, aunque se descontaba que el Partido Socialista, que había hecho una buena elección, le daría sus votos a la fórmula radical en esa instancia decisiva.

El revés electoral fue caro en consecuencias. Decidió la suerte del uriburismo y desarticuló la estrategia del gobierno, que se vio obligado al repliegue: se precipitó la caída de Sánchez Sorondo,



Julio A. Roca (h), candidato a vicepresidente, votando en las elecciones de noviembre de 1931.

suspendiéndose el cronograma electoral previsto, para finalmente anularse las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Con el alejamiento de Sánchez Sorondo, el justismo pasó a controlar prácticamente el gobierno, que terminó por convocar a elecciones de autoridades nacionales en todo el país para noviembre de 1931.

El triunfo radical en la provincia de Buenos Aires tuvo también importantes consecuencias en la definición de la organización política de las derechas: puso un severo límite a las aspiraciones hegemónicas del conservadurismo bonaerense, jerarquizó la importancia de potenciar las distintas fuerzas en una acción electoral común, y consolidó a Justo como el único candidato que podía reunir detrás de sí a conservadores, antipersonalistas y socialistas independientes.

Abandonada la Federación Nacional Democrática, las fuerzas conservadoras provinciales apresuraron la constitución de una organización nacional; en agosto, se fundaba el Partido Demócrata Nacional. El PDN fue en sí mismo una coalición, ya que reunía a agrupaciones provinciales que, si bien coincidían en su represen-

tación local de las clases propietarias, respondían a muy diferentes tradiciones y prácticas políticas. El Partido Demócrata de Córdoba, Concentración Cívica de Entre Ríos, el Liberal de Mendoza y el Conservador de Buenos Aires, por ejemplo, eran más diferentes entre sí que lo que señala su denominación local. Los conservadores de Buenos Aires y los de Córdoba eran los casos más extremos de esta diversidad partidaria.

Los conservadores cordobeses fueron una de las expresiones más nítidas del reformismo conservador. En la saga del reformismo político de 1912, la importancia asignada al sufragio como instancia pedagógica en la construcción de la ciudadanía llevó a los conservadores cordobeses a defender la transparencia electoral, aun frente a la amenaza del radicalismo sabattinista. El poderoso partido bonaerense, en cambio, se transformó en la más aceitada maquinaria para la manipulación de votos, construyendo una organización en la que el aparato político, el mundo del delito y la corrupción organizada se compenetraban estrechamente. Ese conservadurismo bonaerense produjo, a la vez, las más inquietantes innovaciones políticas en la década, sobresaliendo el ensayo de Fresco, en cuyo gobierno provincial el fascismo criollo buscó en clave populista el camino para construir un partido de masas.

En las provincias más pequeñas y socialmente más tradicionales, el conservadurismo tuvo un fuerte peso. En la mayoría de estos distritos, las organizaciones conservadoras usaron los recursos del Estado para reproducirse en el poder, recurriendo a las peores tradiciones del clientelismo patrimonialista y aprovechando el menor nivel de exposición ante la opinión pública nacional de los distritos más chicos y alejados de los principales órganos de prensa.

Entre el reformismo cordobés, el conservadurismo populista bonaerense y el tradicionalismo patrimonialista de los pequeños distritos, a lo largo de los años treinta el PDN fue la fuerza cuantitativamente más importante del bloque oficialista. La mayoría de las situaciones políticas provinciales estuvo bajo su control y logró una importante representación parlamentaria nacional, aunque debió resignar frente al antipersonalismo la máxima candidatura en las dos elecciones presidenciales de la década, la de 1931 y la de 1937.

El lugar que la Federación Nacional Democrática quería ocupar como expresión política del bloque de poder en constitución fue

cubierto parcialmente por la Concordancia, una alianza laxa de conservadores, antipersonalistas y socialistas independientes. La Concordancia nunca alcanzó una efectiva organización institucional sino que funcionó en los hechos como un acuerdo parlamentario de los bloques partidarios. En las coyunturas electorales, los partidos mantenían su propio perfil, especialmente en las elecciones legislativas, adoptando un candidato común en los comicios para cargos ejecutivos. La coincidencia electoral en la candidatura presidencial no avanzaba sobre las organizaciones partidarias que, por el contrario, mantenían su independencia y participaban con candidatos propios en el resto de los cargos. Esta unidad en la diversidad, que se revela como una constante en la organización de las derechas, estaba facilitada por el carácter en general no competitivo del poder territorial de cada fuerza. En efecto, mientras el Partido Socialista Independiente era un típico aparato político de la ciudad capital, el antipersonalismo tenía su principal fuerza en el Litoral, especialmente en Santa Fe y Entre Ríos, y los conservadores competían prácticamente en soledad con el radicalismo en el resto de las provincias. Esta situación facilitaba el encolumnamiento en cada distrito tras el partido que mejor podía representar a la coalición. Las cosas resultaban más complicadas en casos como el entrerriano, donde antipersonalistas y demócratas competían entre sí, lo que repercutía en el orden nacional. En las elecciones de 1931, por ejemplo, los antipersonalistas se negaron a apoyar la candidatura de Roca como vicepresidente de Justo, propuesta por los demócratas, y completaron la fórmula presidencial con Matienzo, un hombre de sus filas.

En el distrito santafesino el antipersonalismo no tuvo competencia en su representación de la Concordancia, aunque como consecuencia de los resultados electorales de 1931 debió resignar ante el PDP el manejo del estado provincial durante la primera mitad de la década. El lugar de la derecha fue ocupado por el antipersonalismo, que con el liderazgo de Manuel de Iriondo terminaría de fundir su identidad en la tradición conservadora.

Más allá de la capacidad electoral efectiva del antipersonalismo a nivel nacional, su principal fuerza residía en el rol que desempeñaba como organización dentro de la Concordancia y especialmente en relación con el liderazgo de Justo. Éste y Ortiz, las dos figuras que alcanzaron la presidencia en representación de la Concordancia, eran antipersonalistas, y ambos habían integrado el ga-

binete de Alvear. Además del preciado trofeo del Ejecutivo nacional, a lo largo de la década el antipersonalismo tendría significativa presencia en el gabinete nacional y una importante representación parlamentaria. El bloque legislativo partidario expresó más fielmente la evolución electoral de la organización, y las variaciones en su composición ponen en evidencia su vulnerabilidad frente a las actitudes asumidas por el partido radical.

Producido el derrocamiento de Yrigoyen y frente al desconcierto inicial del radicalismo, el antipersonalismo tenía un amplio sendero para crecer a la sombra de la tradición radical; el mismo Justo lo transitó en espera del apoyo de los sectores antiyrigoyenistas del radicalismo a su candidatura presidencial. Con Alvear de regreso al país y asumiendo la dirección de la reorganización partidaria, los márgenes de maniobra del antipersonalismo, y de Justo, se estrecharon y la situación se tornó hostil para su crecimiento, en tanto el perfil político del ex presidente ofrecía menos flancos para las acusaciones de personalismo. Con ello se reducían las posibilidades del antipersonalismo de ingresar en el "territorio de caza" del radicalismo para capturar sectores de su electorado permeables al discurso antiyrigoyenista.

En el cuadro de situación de 1931, la dirección alvearista en el partido radical significó un dique de contención a la fuga de cuadros y de base electoral hacia el antipersonalismo, que en las difíciles condiciones del ambiente político que debía enfrentar la UCR podría haber comprometido más seriamente la estructura organizativa partidaria. Desde fines de 1931 y hasta mediados de la década, las líneas sobre las cuales se estableció la competencia fueron firmes, con el radicalismo en la abstención y ocupando el lugar de la oposición externa. Mientras la UCR recurrió al factor identitario activando la tradición, el antipersonalismo se refugió en lo organizacional, en la estructura partidaria que conduce a los aparatos del Estado, allí donde puede obtener los recursos materiales que garanticen la reproducción de la organización.

La importancia del antipersonalismo en la Concordancia estuvo dada por su peso en el Litoral y por su capacidad de competencia con el radicalismo por la tradición partidaria. Ambas cuestiones eran de vital importancia para matizar la impronta conservadora de la coalición, que habría acotado el electorado potencial y permitido un predominio interno del Partido Demócrata Nacional, incompatible con el tipo de liderazgo que Justo estaba organizando.

Como sus socios antipersonalistas, los socialistas independientes también lograron una sobrerrepresentación en el gobierno justista. Su principal fortaleza residía en la capacidad electoral demostrada en la Capital Federal, cuyo nivel de exposición pública impactaba en la opinión nacional. Surgido como escisión liberal del Partido Socialista en 1927, y construido sobre algunos nombres de prestigio, como los de Pinedo y De Tomaso, el socialismo independiente tuvo protagonismo electoral en la primera mitad de la década, enfrentando en el territorio capitalino al Partido Socialista y al radicalismo, para desaparecer prácticamente en la segunda mitad.

En la explicación de este descenso electoral hasta su virtual desaparición, se ha señalado como uno de los principales factores la vacancia de liderazgo producida por la temprana muerte de De Tomaso, quien en los comienzos del gobierno de Justo sobresalía



1) Miguel A. Cárcano, diputado nacional; 2) Robustiano Patrón Costas, presidente provisional del Senado; 3) Cnel. Manuel Rodríguez, ministro de Guerra; 4) Antonio de Tomaso, ministro de Agricultura; 5) Horacio Bruzzone, presidente del Congreso del Frio; 6) Federico Martínez de Hoz, gobernador de Buenos Aires; 7) Manuel Alvarado, ministro de Obras Públicas, setiembre de 1932.

como un hombre clave del gabinete nacional. Por la debilidad propia de una fuerza construida casi exclusivamente en torno a una elite política reconocida públicamente, la desaparición de uno de sus principales arquitectos sería muy difícil de sobrellevar. Más aún, porque De Tomaso era quien mejor parecía proyectar a ese pequeño grupo dirigente capitalino hacia la política nacional. Su ausencia llevaría a un primer plano a quienes, como Pinedo, desestimaban la negociación política privilegiando el saber técnico como fuente de legitimidad de esa proyección y de su pertenencia a la elite dirigente estatal.

Más que de un quiebre en la evolución partidaria, se trató de la aceleración de un proceso que marca al socialismo independiente prácticamente desde su origen. A partir de sus primeros pasos en 1927, los socialistas independientes fueron definiendo su lugar en la política en un proceso de diferenciación de los otros —radicales, conservadores y sus antiguos compañeros del PS— que ponía el acento en las cualidades intelectuales de su dirigencia, capacitada para responder a los problemas del Estado y la economía por encima de los dilemas de los universos partidarios. La inserción de la elite del partido en el gobierno de Justo favorecería esta tendencia, que la inesperada muerte de De Tomaso terminó de confirmar: un pasaje del partido al Estado en el cual el “hombre de Estado” deja atrás al “hombre de partido”, abandonando la lógica de la negociación política, que colisiona con el imperativo de eficacia en la gestión estatal.

Así, el pequeño partido que en 1930 había conquistado la primera minoría electoral en la Capital tuvo su momento de gloria en los primeros años del justismo, para ingresar rápidamente en un cono de sombras hasta su desaparición; mientras tanto, el PS y la UCR —ésta desde su regreso al terreno electoral en 1935— recuperaban su capacidad electoral. Paralelamente, los miembros de la elite partidaria del socialismo independiente se transformaron en actores principales del proceso de reformulación del Estado nacional. El caso más notable fue el del grupo constituido en torno a Pinedo cuando éste controló la cartera de Economía del gobierno de Justo, y hasta alguno de ellos se arriesgó a acompañar, en la segunda mitad de la década, la empresa más atrevida del conservadurismo bonaerense, que desde la gobernación de Fresco ofrecía a la nación una propuesta política conservadora inclinada al populismo, con inocultables parecidos de familia con el fascismo.



Duelo F. Pinedo-L. de la Torre momentos antes de batirse; desde la izquierda, Robustiano Patrón Costas, Federico Pinedo, Gilberto Suárez Lago y Manuel Fresco, 25 de Julio de 1935.

La debilidad institucional de la Concordancia, que retendría el poder a lo largo de la década y hasta 1943, contribuía a reforzar un tipo de liderazgo como el de Justo, que a la postre se revelaría como una pieza fundamental de la coalición, dado que la completaba perfeccionando el equilibrio inestable de sus componentes e impidiendo la activación de sus tendencias centrífugas. La fortaleza del liderazgo de Justo residió en su orientación bifronte: hacia el frente militar y hacia el frente civil. El liderazgo de Justo en las fuerzas armadas, construido metódicamente desde lugares clave como la dirección del Colegio Militar y el Ministerio de Guerra, alcanzó su madurez en la dictadura de Uriburu. Este núcleo estrictamente militar del liderazgo entre los hombres de armas fue reforzado por la proyección alcanzada por Justo en la sociedad política, más allá de las fronteras de la institución. A la vez, esa proyección en los círculos políticos era deudora de su jerarquía en el ámbito castrense. Si a partir de 1930 toda solución política en la

Argentina debía dar cuenta de la ecuación militar, que asignaba a la institución armada un rol tutelar, la ascendencia en el campo castrense se transformaba en un valor agregado para la construcción de un liderazgo en el campo civil. Con el vigor de su ascendencia militar, Justo construyó un liderazgo político que le permitió controlar la Concordancia y, con ella, el poder nacional casi toda la década.

En el terreno estrictamente político, Justo desarrollaría hasta la perfección una conducción sostenida en el equilibrio inestable de las fuerzas aliadas, a la cual era funcional la debilidad institucional de la coalición. La desigualdad de fuerzas implicaba un riesgo permanente: que el peso electoral del Partido Demócrata se tradujera en un predominio interno que sólo reservara para sus aliados lugares secundarios en la estructura de poder. Este riesgo, aunque siempre presente, fue acotado por el fortalecimiento del doble liderazgo de Justo, que lo autonomizaba de las fuerzas políticas en tanto su fuente de poder no residía sólo en ese ámbito. De esta manera, Justo pudo liderar la coalición insistiendo en presentarse como portador de la tradición radical no yrigoyenista, y desde la jefatura del Estado nacional estuvo en condiciones de promover una participación de socialistas independientes y antipersonalistas muy superior a la que hubiera correspondido por su importancia electoral, manteniendo así un equilibrio entre las fuerzas de la Concordancia.

La situación de equilibrio dinámico se sostuvo, entonces, sobre tres componentes fundamentales: el Partido Demócrata, principal aportante de recursos electorales, que controlaba la mayoría de las situaciones provinciales y el bloque legislativo más importante; dos organizaciones menores, el antipersonalismo y el socialismo independiente, que alcanzaron una sobrerrepresentación en el Estado nacional gracias al deliberado apoyo del líder de la coalición; y un liderazgo de doble rostro, que dio a su portador un margen de autonomía política con el cual incidió notablemente en la reproducción del equilibrio de la coalición, que a su vez tuvo en una jefatura de este tipo la clave de su dinamismo.

Sobre estas bases el bloque oficial supo resolver a su favor las diferentes coyunturas políticas del período, sin poder eludir el dilema que lo acompañaba desde su origen: las necesidades, que se presentan como irreconciliables, de reproducción en el poder y de producción de legitimidad. El regreso del radicalismo a la arena

electoral de mediados de la década bien podía presentarse como un logro del gobierno, que superaba así la impugnación al funcionamiento del sistema, pero la participación radical amenazaba seriamente el control oficial de la sucesión presidencial. Ante la presencia radical en la competencia electoral por la presidencia de 1937, el bloque oficial llevaría las prácticas de manipulación electoral a su máxima expresión. Prácticas no ausentes, por cierto, en la primera mitad de la década, pero que en la competencia con la Alianza Civil no habían requerido la escala que ahora las volvía escandalosas.

Las elecciones de 1937 dejarían una clara enseñanza para el oficialismo, con lecturas diferentes de acuerdo con las tradiciones de antipersonalistas y demócratas que, respectivamente, sostendrían los gobiernos de Ortiz y de Castillo. Con el radicalismo compitiendo electoralmente, la necesidad de reproducción en el poder requería de un esfuerzo manipulador de tal magnitud que dejaba al desnudo la ilegitimidad del oficialismo y ponía en cuestión la gobernabilidad. La reconciliación con la democracia electoral, por su parte, implicaba resignarse anticipadamente a la entrega del gobierno a la oposición. La primera de estas lecturas de las elecciones de 1937 guió la política del gobierno de Ortiz desde 1938 y su intento de sanear el sistema electoral, avanzando en acuerdos con la oposición que conmovían las bases de la coalición oficial. La dura reacción conservadora frente al proyecto reformista de Ortiz se vio favorecida por la vacancia presidencial que dejó en manos de Castillo, un hombre del conservadurismo catamarqueño, el Ejecutivo nacional. El razonamiento conservador indicaba que si la libertad electoral tenía como destino inexorable el abandono del poder y su entrega al partido radical, el control y la manipulación de los comicios eran la única garantía para la continuidad en el poder, en la confianza de que el apoyo del Ejército podía suplir la ilegitimidad del régimen.

Pero hacia 1938, cuando asumió la fórmula Ortiz-Castillo, el equilibrio de la coalición había entrado en crisis. En primer lugar, porque aunque Ortiz podía exhibir un origen político afín al de Justo, no tenía con las Fuerzas Armadas una relación que pudiera asimilarse a la de su antecesor. El relevo en la cúspide política alteró ese patrón de doble liderazgo ejercido por Justo y obligó a los sucesivos presidentes a prestar una atención especial al campo militar, que estaba en relación directa con el poder de tutoría de la

corporación. La situación fue manejable mientras Ortiz estuvo a cargo del Ejecutivo, ya que el respaldo relativo de Justo permitió evitar el distanciamiento y la erosión de la relación del poder político con el Ejército. Pero el recambio presidencial provocado por la enfermedad y muerte de Ortiz agregó un nuevo elemento de descomposición. Con Castillo en la Casa Rosada, fue el PDN el que tomó las riendas del Ejecutivo, y el equilibrio de la coalición fue amenazado por el hegemonismo conservador. La ruptura del equilibrio podía afectar directamente el liderazgo que todavía ejercía Justo y sus esperanzas de volver al poder. Esta situación ahondó las fisuras del oficialismo y promovió el acercamiento de los sectores justistas a la oposición radical, igualmente temerosa del rumbo que tomaba Castillo. La situación de quiebre del bloque oficial resultante contribuyó a profundizar la autonomización de las Fuerzas Armadas con respecto al sistema político y a constituir un nuevo cuadro de situación, que se reveló maduro en el momento

del golpe militar de 1943, poco tiempo después de que las muertes de Alvear y de Justo terminaran de exponer, ahora dramáticamente, la vacancia de liderazgo político.

EL LUGAR DE LA OPOSICIÓN

Luego de la puja electoral bonaerense de abril de 1931, y al ritmo impuesto por el bloque oficial, el campo opositor se ordenó en dos constelaciones políticas: la Alianza Civil y el radicalismo. Ambas participaron de ese espacio opositor desde registros deudores del proceso político anterior al golpe de 1930. En el periodo de Uriburu se consolidaron las fronteras que se-



Tapa de Entre rejas (1939), libro de memorias del coronel Atilio Cattáneo, sobre las rebeliones radicales.

pararían a ambas fuerzas hasta 1935, abriendo dos alternativas para la acción opositora: la institucional aliancista, cuyo principal recurso fue la acción parlamentaria y electoral, y la extrainstitucional del radicalismo, que interpeló al gobierno desde los márgenes marcados por la abstención electoral.

El retorno del radicalismo a la arena electoral en 1935 depositó en esa fuerza el principal peso del rol opositor. Socialistas y demoprogresistas vieron desdibujarse a partir de entonces la sobrerrepresentación política que habían alcanzado y cedieron, ante el radicalismo, el lugar de alternativa nacional al oficialismo, refugiándose en los distritos en los que cada fuerza tenía peso propio, el socialismo en la Capital Federal y el PDP en la provincia de Santa Fe. La ruta de la oposición en la segunda mitad de la década también estuvo signada por los intentos de reunirse en un frente común, desde el frustrado Frente Popular a los primeros ensayos de la Unión Democrática, en los que el clima ideológico internacional, conmovido por la guerra de España y la Segunda Guerra Mundial luego, tendrá evidente influencia.

Socialistas y demoprogresistas

Aunque desde posiciones ideológicas diferentes, socialistas y demoprogresistas habían coincidido en la recusación al gobierno de Yrigoyen por su defección republicana, y el antiyrigoyenismo se había transformado en un componente fuerte en la definición de las identidades de ambos partidos. Para el socialismo, el yrigoyenismo aparecía como una expresión más, a la par de la conservadora, de la “política criolla”, caracterizada por el caudillismo y el clientelismo que sacrificaban al sistema republicano y bajaban la densidad de la ciudadanía sobre la que se edificaba la democracia liberal. Esta imagen socialista del yrigoyenismo se reforzaba por razones más materiales: el carácter competitivo de ambas fuerzas en el mercado electoral de la Capital Federal. A lo largo de los gobiernos radicales, esta competencia se había extendido hacia el campo sindical, donde los socialistas comprobaron a diario cómo la política oficial favorecía a los gremios controlados por sus enemigos *sindicalistas*, contribuyendo a consolidar el predominio de éstos en el movimiento obrero.

La distancia que separaba al PDP del yrigoyenismo era de or-

den diferente y no alcanzaba a todo el radicalismo, como en el caso de los socialistas. La manifiesta enemistad entre De la Torre e Yrigoyen, más allá del enfrentamiento personal, remite a la bifurcación de los caminos del primer radicalismo. Como los que se oponían al personalismo de Yrigoyen desde el propio partido, anteponiéndole la figura mítica de Alem, De la Torre reclamaba para sí una tradición que se iniciaba con el jefe de la Revolución del Parque, en la que él había recibido su bautismo político. Ella se afirmaba con Bernardo de Irigoyen, para continuar con él mismo, que venía a recuperar lo que el radicalismo de Yrigoyen desechara de esa tradición fundante. Al igual que sus aliados socialistas, los demoprogresistas llegaban a 1930 con una larga experiencia de enfrentamiento electoral con la UCR, en particular en Santa Fe.

De esta manera, durante los años de vigencia de la Ley Sáenz Peña, socialistas y demoprogresistas habían coincidido en ubicarse en el sistema de partidos con una estrategia de diferenciación del radicalismo, que se acentuaba naturalmente en tanto éste controlaba el poder. En la coyuntura crítica de 1930, ambos partidos se mantendrían, en líneas generales, al margen de la coalición de fuerzas políticas y sociales promotoras de la intervención militar: socialistas y demoprogresistas interpretan las elecciones legislativas de 1930 de un modo que los lleva a ponerse en guardia frente a los nuevos peligros que podía acarrear el quiebre de la estabilidad institucional. Se trataba de una interpretación positiva de las capacidades correctivas de la democracia electoral, que destacaba su importancia para el proceso de construcción de la ciudadanía y que llevaría a ambos partidos a un punto que se pretendía tan equidistante del gobierno radical como de las fuerzas golpistas. Cuando se produjo la intervención militar, ese lugar equidistante fue ganado por la ambigüedad, dado que era imposible traducirlo en una alternativa política.

Más allá de ese común antiyrigoyenismo, y del compartido temor al quiebre institucional, ambas fuerzas tendrían recorridos distintos en la primera etapa de la dictadura de Uriburu, que revelan las diferencias de organización, de contenidos ideológicos y de canales de sociabilidad de los cuadros partidarios. Para el PS, aun cuando el enfrentamiento con el yrigoyenismo habilitaba una mirada complaciente con su derrocamiento, la dictadura de Uriburu mostró ya en las primeras medidas sus lazos de parentesco con el fascismo, y por lo tanto la oposición se hizo cada vez más clara.

Un partido como el socialista, con una cerrada estructura de cuadros y un perfil ideológico definido, podía sostener una postura orgánica de rechazo al gobierno militar. Además, el frente civil que acompañaba a los golpistas de setiembre reunía a la derecha tradicional con el novel socialismo independiente desprendido de su seno, su adversario más duro en el distrito capitalino, capaz de ofrecerle competencia no sólo en el terreno estrictamente electoral sino también en el más profundo de la identidad partidaria, cuestión que volvía visceral ese rechazo. Por último, la disciplinada organización partidaria les daba a sus militantes un marco de contención orgánico, ofreciendo un espacio de sociabilidad auto-suficiente; una sociedad dentro de la sociedad, cuyas precisas fronteras guardaban un orden político, social y cultural. Una estructura de esta naturaleza delimitaba con claridad las redes de sociabilidad de sus fieles, reduciendo al mínimo la “contaminación” con lo externo.

Las diferencias del PDP con los socialistas en este aspecto no pueden ser más elocuentes. Aunque se ha señalado correctamente al PDP como un partido programático, en este sentido más afín al socialismo que al radicalismo, el partido de De la Torre carecía de una oferta ideológica integral para sus cuadros. A tono con esa menor densidad ideológica, la identidad partidaria no requería de dispositivos de sociabilidad alternativos, por lo que sus cuadros transitaban por diferentes circuitos de acuerdo con su inserción social. La mayoría de sus dirigentes participaba de los espacios de “sociabilidad patricia”, en los que coincidían con hombres de otros partidos tradicionales —fundamentalmente con aquellos de la coalición de las derechas—, sin que las diferencias políticas tuvieran un impacto decisivo en las relaciones sociales. Para una fuerza política así constituida, la coyuntura política de 1930 fue verdaderamente crítica, ya que puso en colisión su campo de argumentación política, en el que bosquejaba un alejamiento de la intervención militar, con el mundo de relaciones sociales de su dirigencia, que se empeñaba en contradecir esa distancia.

Estas diferencias entre socialistas y demoprogresistas ocuparon un primer plano hasta el fracaso del ensayo electoral uriburista en abril de 1931. Mientras los socialistas mantuvieron una postura clara como oposición a la dictadura de Uriburu casi desde sus inicios, el PDP tuvo una posición ambigua, que recién encontró un punto de definición luego del triunfo radical en las elecciones de

la provincia de Buenos Aires. La negativa de De la Torre a estrechar filas con Uriburu, quien ofreció el apoyo del Ejecutivo nacional para una eventual candidatura a la presidencia, no alcanzó para disimular los coqueteos políticos entre el líder santafesino y su antiguo compañero de lides políticas devenido en dictador. No se trataba de un detalle anecdótico, como podría sugerirlo el rumbo que tomaría el discurso latorrista apenas unos años después, sino más bien del nudo de la crisis ideológica que sacudía las certidumbres de los hombres que se reconocían en la tradición liberal argentina.

En esos días del ensayo uriburista, reconocidas figuras del PDP decidieron jugar su suerte con el gobierno militar, contribuyendo a hacer más equívoca la posición partidaria. El caso más notable por su carga ideológica fue el de Carlos Ibarguren, que desde su cargo de interventor en la provincia de Córdoba ofreció una de las argumentaciones más elaboradas para justificar el golpe militar y su necesidad histórica, en nombre de la reorganización corporativa del sistema de representación política. Menos conocida pero con resultados políticos más palpables, fue la participación de cuadros intermedios del PDP en la intervención en la provincia de Santa Fe, situación que colocó al partido en una posición inmejorable para las elecciones de fines de 1931.

A partir del nuevo escenario que se abrió en 1932, con la Concordancia asentada en el poder, el PDP fue definiendo un discurso más nitidamente liberal que lo alejó del comunitarismo conservador para aproximarlos a la izquierda socialista. El acento que De la Torre puso desde entonces en ciertos núcleos de su argumentación alcanzó su mayor impacto en la opinión pública cuando enfrentó en el Senado nacional a las principales figuras del gobierno justista. Muchos de estos temas del discurso latorrista pueden reconocerse en décadas anteriores; la novedad residía ahora en el énfasis y en el cambio de sentido que sugiere el que fueran acompañados por planteos que, en otros registros, dieron lugar a las principales tesis impugnadoras del fenómeno imperialista.

A lo largo de 1931, socialistas y demoprogresistas avanzaron en el proceso de constitución de una alianza electoral que les permitiera presentarse como una alternativa tanto al radicalismo como al bloque de las derechas. La abstención radical volvía aconsejable una estrategia de no confrontación con el partido de Yrigoyen, si se trataba de convocar a sus votantes tradicionales; sin embargo,



Dirigentes socialistas y demoprogresistas de la Alianza Civil: desde la izquierda, el primero de brazos cruzados es Nicolás Repetto; le siguen Lisandro de la Torre, Mario Bravo, Silvio Ruggieri, Enrique Dickmann y otros, agosto de 1931.

el legado del largo enfrentamiento con el caudillo radical, común a ambas fuerzas, dejó su impronta en la campaña electoral, y la Alianza insistió en destacar las fronteras que la separaban de la experiencia yrigoyenista. Sin embargo, había diferencias. La impugnación socialista al yrigoyenismo no afectó su interpretación cada vez más negativa del golpe militar y la dictadura de Uriburu, y fue de la mano de una crítica igualmente severa de la tradición conservadora. Para el PDP, en cambio, el 6 de setiembre de 1930 tenía un contenido redentor: un movimiento de la civilidad que venía a terminar con el flagelo yrigoyenista para recuperar el horizonte de la reforma política de 1912. A lo largo de la campaña electoral, De la Torre insistió en presentarse como el heredero de ese "espíritu" del 6 de setiembre, que quiere ver desfigurado por el militarismo del gobierno de Uriburu y la práctica política del justismo.

Por otra parte, la Alianza Civil era, como la Concordancia, un

acuerdo electoral que no afectaba a las organizaciones partidarias y que reconocía las capacidades electorales de cada fuerza en los distintos distritos. Socialistas y demoprogresistas tendrían una dinámica parlamentaria independiente, aunque se alentaba la acción coaligada frente al oficialismo. Gracias a la abstención de la UCR, ambos partidos alcanzaron en la primera mitad de la década una importante representación en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras el peso electoral en la Capital Federal y en la provincia de Santa Fe les permitió tener una representación en el Senado nacional que, a pesar de su reducido número, impactó en la opinión pública por la estatura política de figuras como De la Torre y Alfredo Palacios.

La fórmula presidencial de la Alianza reunió a los máximos líderes partidarios, Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto, en un orden que reconocía las mejores posibilidades electorales del PDP en los distritos provinciales. La estructura básica de la Alianza se asentaba en los distritos de Capital Federal y Santa Fe, ámbitos en los que logró la mayoría en las elecciones de 1931, conquistando el grueso de su representación parlamentaria nacional y el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. La desproporción de fuerzas de cada partido en ambos distritos transformaba a la Alianza en una estructura simbólica que descansaba en el partido con mayor peso en la jurisdicción cuyos hombres ocupaban prácticamente todas las candidaturas electorales.

En Capital Federal la fuerte estructura y la potencia electoral del PS le permitían hegemonizar la Alianza. En la clave de la hora, sin embargo, frente a una coalición de derechas que incluía al socialismo independiente, la alianza con el PDP podía impedir la fuga hacia la derecha del electorado independiente. En el distrito santafesino la relación interfuerzas se invertía y el PDP lideraba cómodamente la propuesta aliancista, acompañado por un partido socialista con una pequeña estructura de cuadros e ínfima presencia en el mercado electoral. Gracias a su dilatada trayectoria en la provincia, la democracia progresista había alcanzado un firme arraigo que le permitía capturar una porción importante del electorado; no obstante, su fuerte presencia no había bastado para alcanzar la mayoría que, desde 1912, había sido radical. Consecuentemente, las posibilidades electorales de la Alianza en Santa Fe dependían mucho más que en Capital Federal de la actitud de la UCR. Precisamente, la abstención radical de 1931 fue la que abrió el camino

para que el PDP alcanzara, con Luciano Molinas, la gobernación. El desempeño demoprogresista se sostuvo en la primera mitad de la década, mientras el radicalismo continuó alejado de la competencia electoral. Pero el levantamiento de la abstención radical marcó el comienzo del ocaso del partido de De la Torre, que sólo se estabilizó en los límites de la supervivencia partidaria como una minoría electoral de carácter provincial.

En el resto de los distritos provinciales, la Alianza sólo podía aspirar a capitalizar el voto radical para conquistar la mayoría. La fuerte identidad socialista le permitía al partido contar con referentes locales en muchas ciudades del interior del país; aunque su organización y penetración en el electorado no alcanzaban para ofrecer una alternativa electoral y, en el mejor de los casos, se concentraban en la órbita municipal. En el caso de la provincia de Buenos Aires, aunque igualmente minoritario, el socialismo tenía un piso electoral interesante, constituido por la conjunción de tres variables sobre las que se asentaba su desarrollo: el efecto de arrastre ejercido por su predominio en Capital Federal, la presencia partidaria en el movimiento obrero y el desarrollo localizado en lo municipal, cuyo caso más notable fue el de la ciudad de Mar del Plata, donde el partido contaba con una densa red político-social. En el resto de las provincias, el PDP, aunque tan débil como el socialismo, podía recurrir a personalidades instaladas en la opinión pública por su larga participación en la política tradicional. La trayectoria partidaria le permitía contar con figuras provinciales identificadas con el ideario partidario, y a la vez ofrecer una convocatoria competitiva ante los conservadurismos locales.

Esa fortaleza relativa de la Alianza en Capital y Santa Fe no compensaba su debilidad en el resto de los distritos provinciales, donde los partidos coaligados del justismo tenían asegurado el triunfo. Así, con el radicalismo en la abstención, la victoria justista estaba garantizada. Esta situación tendría una consecuencia paradójica en la práctica comicial: la ausencia de la UCR y la debilidad de la Alianza Civil en la mayoría de los distritos favorecían el control monopólico de la Concordancia sobre el acto electoral; pero la misma circunstancia volvía menos necesaria la manipulación electoral para garantizar el triunfo de la fórmula justista. Mientras el radicalismo permaneció en la abstención, los dispositivos del fraude electoral se perfeccionaron de cara a la competencia interna del bloque oficial, y no frente a desafíos de otras fuerzas.

Cuando la amenaza electoral del radicalismo se hizo realidad, a partir del levantamiento de la abstención en 1935, los dispositivos del fraude pasaron a ser imprescindibles para garantizar la reproducción de la Concordancia en el poder.

En estas condiciones, en las elecciones presidenciales de noviembre 1931 y en general en las que se realizaron en la primera mitad de la década, el justismo pudo dejar los distritos de Capital Federal y Santa Fe librados a las fuerzas del mercado electoral. El nivel de exposición ante la opinión pública del distrito capitalino volvía realmente costoso forzar la realidad electoral; además, la dependencia de la ciudad de Buenos Aires del Ejecutivo nacional reducía la competencia electoral a los cargos legislativos. En Santa Fe, en cambio, se disputaba también el Ejecutivo provincial, por lo cual el antipersonalismo local tenía sobrados motivos para intentar utilizar los recursos del Estado a fin de volcar la elección en su favor. Sin embargo, en las elecciones de 1931 el PDP tenía suficiente influencia en el Ejecutivo provincial como para garantizar la transparencia electoral. El triunfo demoprogresista en esas elecciones relegará al antipersonalismo al rol de oposición parlamentaria, hasta que en 1935 se interviene la provincia, hecho que permitirá preparar el camino para el acceso del líder antipersonalista Manuel de Iriondo a la gobernación, en 1937.

La confianza del bloque oficial en 1931 se reforzaba por el perfil adoptado por la Alianza en la campaña electoral. Con la UCR en abstención, la fórmula De la Torre-Repetto bien podía verse beneficiada por una parte importante del tradicional electorado radical que privilegiara la posibilidad de impedir el triunfo del principal enemigo: los conservadores y antipersonalistas. El mismo Justo aparecía como responsable de la proscripción de Alvear. Basta observar los resultados electorales para comprender que esta posibilidad se concretó en buena parte, a pesar del discurso electoral antiyrigoyenista de la Alianza, otorgándole un porcentaje de votos que multiplicaba con creces la suma de los tradicionalmente obtenidos por los dos partidos. Ese porcentaje fue lo suficientemente importante como para crear la ficción de una situación electoral competitiva, que terminaría por beneficiar al gobierno de Justo amortizando la ilegitimidad de origen resultante de la proscripción radical.

Sin embargo, el discurso aliancista cerraba las puertas a la posibilidad de rozar el núcleo duro del electorado de la UCR, el partí-

cipe de las creencias partidarias. Para esta fracción del electorado radical, la convocatoria de su partido a la abstención resultaba mucho más atractiva que las opciones electorales que se les ofrecían, igualadas en su antirradicalismo. Aunque Justo adoptaba una línea discursiva más conciliadora, propia de un pragmatismo político en que haría escuela, se trataba del candidato oficial del golpe militar que había derrocado a Yrigoyen, y del promotor y beneficiario de la proscripción del radicalismo.

El lugar de la oposición conquistado por la Alianza Civil en 1931 tenía dos centros: el estado provincial santafesino, donde el acceso al Poder Ejecutivo le permitió desarrollar una política presentada como alternativa a la del poder nacional, y el Congreso Nacional, donde el importante número de cargos alcanzados le dio una presencia significativa en la opinión pública. En ambos espacios, la principal limitación para mejorar lo conquistado estará dada por las características de la Alianza, organizada como un mero acuerdo electoral, y por la fortaleza renovada del radicalismo liderado por Alvear, que logró la unidad partidaria suficiente como para mantener la imagen de partido mayoritario aun en la abstención.

En efecto, mientras en la provincia de Santa Fe el gobierno local estaba exclusivamente identificado con el PDP, en el Congreso Nacional cada partido tuvo sus respectivos bloques parlamentarios a lo largo del gobierno de Justo. El bloque legislativo de la Concordancia, bajo la presión del gabinete justista, funcionó en los hechos con mayor unidad que el de sus opositores.

En el terreno electoral, ya en 1932, y a partir de entonces en los sucesivos comicios



Lisandro de la Torre y Enzo Bordabehere en Rosario, luego de haber votado en las elecciones de 1932.

para cargos legislativos, cada partido se presentó individualmente. Hasta mediados de la década, esta estrategia le permitió a cada organización mantener sus respectivas fortalezas distritales y, con ella, el importante número de legisladores. A partir de 1935, en cambio, las condiciones electorales se alteraron profundamente: socialistas y demoprogresistas deberían competir ahora en el terreno mismo de la oposición con la UCR.

A su vez, el reingreso radical a la competencia electoral modificó las construcciones institucionales, amenazando los intereses del conjunto de la oposición. El sinceramiento electoral que acarrió la participación radical llevó al Poder Ejecutivo nacional y al bloque oficial a profundizar los dispositivos de manipulación electoral que, en las nuevas condiciones, se transformaban en necesidad imperiosa para mantenerse en el poder. El PS y el PDP debieron enfrentar entonces, junto con el radicalismo, el mecanismo que el gobierno perfeccionó al detalle en la última etapa: por un lado, el cambio en la ley electoral, con el que se volvió al sistema de lista completa y se suprimió el tercio de representación de la minoría por distrito; por otro, el ejercicio sistemático del fraude en la mayoría de los distritos.

Paralelamente, la recomposición del campo electoral opositor tuvo también otras consecuencias. Las particularidades del conservadurismo en la provincia de Córdoba ofrecían mayores garantías para el ejercicio de los comicios y permitieron al radicalismo sabatinista alzarse con la gobernación a fines de 1935. La sola posibilidad de que el distrito mediterráneo pasara a las filas de la oposición en las elecciones presidenciales que se avecinaban hizo que el gobierno nacional se apresurara a actuar, recuperando alguno de los territorios opositores, como la Capital Federal o la provincia de Santa Fe. Los atributos de la Capital Federal para impactar en la opinión pública seguían aconsejando dejar librados al mercado los resultados electorales, de modo que se imponía en la lógica oficialista la intervención de Santa Fe, viejo anhelo del antipersonalismo provincial. Una vez tomada la medida, el justismo logró reproducir, en vista de las elecciones de 1937, el equilibrio en el mapa distrital que había construido seis años antes: conserva el lugar privilegiado para la Capital Federal y mantiene igual situación para un distrito provincial importante, donde el principal partido opositor puede competir libremente con el bloque oficial, aunque reemplazando la Santa Fe del PDP por la Córdoba del radicalismo.

Otros factores, además, contribuyeron a confirmar este desplazamiento espacial y partidario de la oposición. Por una parte, con la intervención a Santa Fe el gobierno nacional dejó a Lisandro de la Torre sin poder territorial, afectando así su posicionamiento para las elecciones presidenciales y, sobre todo, evitó la consolidación de una triple referencia opositora que, de confluir en un frente común contra el oficialismo en 1937, contaría con el manejo de tres distritos importantes y una influencia en la opinión pública capaz de poner en duda la capacidad gubernamental para asegurarse la continuidad en el poder. Por otra parte, desde el bloque de la Concordancia, el desplazamiento Santa Fe-Córdoba permite otra interpretación: el fortalecimiento del antipersonalismo en detrimento del Partido Demócrata Nacional. El antipersonalismo siempre le había ofrecido a la Concordancia un perfil competitivo frente a la UCR, que ahora, luego del levantamiento de la abstención de 1935, se tornaba crucial. El antipersonalismo logró, en esa nueva coyuntura, alcanzar el control del estado santafesino e imponer un hombre de sus filas como sucesor de Justo.

También en 1935, el senador demoprogresista Enzo Bordabehere era asesinado en el recinto del Senado. Sin poder territorial propio y cediendo ante la UCR el primer lugar de la oposición en el distrito santafesino, el PDP apenas logró mantenerse en la segunda mitad de la década como minoría electoral y sin trascender la esfera local. Sólo los esporádicos y siempre frustrados intentos de reunir a la oposición en un Frente Popular lograron sacar momentáneamente al partido de esa agonía, que será brutalmente confirmada a comienzos de 1939, cuando De la Torre, en diálogo con Alem, elija el camino del suicidio.

Los problemas del socialismo en la segunda mitad de la década, aunque diferentes, no fueron menores que los de sus antiguos aliados. Si bien la desaparición del Partido Socialista Independiente eliminaba una de sus principales competencias electorales, el retorno del radicalismo amenazaba seriamente la continuidad de su bloque parlamentario, que se reduciría rápidamente. Desde entonces y hasta el golpe de 1943, su desempeño electoral tuvo una fuerte dependencia de los resultados obtenidos por el radicalismo. Por otra parte, el socialismo enfrentó una amenaza de otro orden que provino de la izquierda del arco ideológico, y que cargó de urgencia a antiguos problemas de la organización. Aunque de menor peso en el terreno electoral, esta amenaza tenía singular im-

portancia en tanto tocaba los núcleos básicos de la identidad partidaria: el ideológico y el de la relación del partido con el movimiento obrero, ambos estrechamente relacionados entre sí.

En el imaginario socialista el partido expresaba políticamente el interés de la clase obrera y, a la vez, el espíritu republicano. Este imaginario enriquecía la misión de la dirigencia partidaria y tensionaba la relación, de por sí conflictiva, con las organizaciones de clase. La tensión entre lo político y lo gremial remitía tanto a la representación de la dirigencia obrera en la dirección partidaria y en el Parlamento, como al lugar asignado a la política en el campo de la lucha gremial. Los conflictos que se produjeron en el ámbito sindical a partir de 1935 profundizaron ciertos desacuerdos entre la dirigencia partidaria y los principales representantes socialistas en el movimiento obrero. Desde entonces, importantes sectores de la dirigencia obrera socialista promovieron la intervención de los sindicatos en la lucha política, impulsando la participación de las organizaciones obreras en un Frente Popular con los principales partidos de la oposición, reunidos tras la bandera antifascista.

Este cambio en la política sindical está asociado al giro político del comunismo local. En la primera mitad de la década, el Partido Comunista había tenido un desarrollo político aislado de los “partidos de la burguesía” y del juego electoral y parlamentario. La persecución estatal y la intransigencia política del PC, férreamente alineado con las directivas emanadas de su organización internacional, habían contribuido a este aislamiento. En ese contexto, el desarrollo comunista tiene un territorio casi excluyente en el movimiento obrero. A partir de 1935, a tono con los cambios en el comunismo internacional, el partido local será uno de los principales promotores de la reunión de las fuerzas políticas democráticas en frentes electorales. En ese contexto se inscriben los intentos frustrados del Frente Popular de 1936, su apoyo a la candidatura presidencial de Alvear en 1937, y los primeros ensayos de Unión Democrática. La conflictiva relación entre las dirigencias política y sindical socialistas volvía más vulnerable al PS ante la competencia comunista, que podía resultar más corrosiva en el clima ideológico de la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo luego de la invasión nazi a la Unión Soviética, en 1941, cuando el comunismo local encontraría un espacio de desarrollo político sobrevaluado en relación con sus fuerzas electorales efectivas.

RADICALES Y SOCIALISTAS OBREROS HAN HECHO REALIDAD EN MENDOZA EL FRENTE POPULAR

MENDOZA, 11. — Después del acto cívico de la noche anterior, en el que fueron recibidos por el Dr. Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

En Villa Maipú con la participación del Frente Popular, el doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

Después de haberse reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular, el doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

Marcelino Vite, jefe de los radicales, y Roberto Ortiz, jefe del Frente Popular, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

Avance

semanario de los trabajadores

BUENOS AIRES, Jueves 12 de Agosto de 1937

Editado por la Comisión de Prensa del Partido Socialista Obrero

Redacción y Administración: VICTORIA 1483

El 12 de Mayo 1937

50 CENTAVOS EL EJEMPLAR

De Quinientos mil a mil Quinientos...

Un teatro abarca el más chico de Buenos Aires. Trece fotografías para que en su seno los gradientes altos, voces de público. Propaganda desahogada. Comunicados y discursos a los dioses, que son la impunidad de un movimiento guerrillero. Una cuarenta afiches, volantes y más. En el fondo, un alma. En la calle, un alma. Indios alborotados que vociferan al viento las fórmulas fijas y sin vida. Un momento de existencia.

Roberto M. Ortiz, Candidato de la Oligarquía y del Imperialismo

Desde la instauración de nuestra patria, el poder ha estado en manos de una oligarquía que ha gobernado a través de la oligarquía. Algunos historiadores remontan hasta el año 1820 la instauración de esta forma de gobierno y de este.

Puede afirmarse, sin embargo, que el poder ha estado en manos de una oligarquía que ha gobernado a través de la oligarquía. Algunos historiadores remontan hasta el año 1820 la instauración de esta forma de gobierno y de este.

SAENZ PENA PRESIDENTE DE TODOS LOS ARGENTINOS



Saenz Peña, presidente de todos los argentinos.

En el momento de la proclamación del Frente Popular, el doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

VUELTA AL GOBIERNO

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

EL LENCIO DE LOS ENBAJADORES OLIGARQUICOS

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

EL AÑO LE TERMINA SU CICLO DE INFLUENCIA

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

ASCENSION DEL RADICALISMO AL PODER

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

El doctor Roberto Ortiz, candidato del Frente Popular, acompañado de los delegados de los partidos radical y socialista obrero, se han reunido en sala para discutir las medidas que se adoptarán en el momento de la proclamación del Frente Popular.

Tapa de Avance, semanario del Partido Socialista Obrero, 12-8-1937.

A su vez, la presencia comunista interpelaba al socialismo en su identidad ideológica atizando la conflictividad interna. En la historia del Partido Socialista, la definición ideológica de la organización había provocado enfrentamientos internos centrados fundamentalmente en dos grandes problemas: la cuestión nacional, es decir, el lugar de la nación en un pensamiento político internacionalista, y la cuestión revolucionaria, esto es, la relación del mundo de ideas socialistas con el paradigma marxista y la percepción de los significados de la Revolución Rusa. La cuestión nacional fue parcialmente absorbida por la dirigencia partidaria en la primera mitad de la década, con la reincorporación de Alfredo Palacios al partido en 1930 y la de Manuel Ugarte en 1935, aunque el nuevo alejamiento de éste al año siguiente señalaba una línea de falla: la definición de la política partidaria en clave antiimperialista. La cuestión revolucionaria incrementó en la década del treinta la conflictividad interna de la organización con el crecimiento de un ala izquierda, liderada por Benito Marianetti, que cuestionaba la dirección partidaria retomando la bandera antiimperialista en un sentido que lo aproximaba a los planteos comunistas, hasta llegar a la fractura de 1937 con la creación del Partido Socialista Obrero.

El radicalismo

La multiplicidad de actores y conflictos fue una característica fuerte del radicalismo desde su origen, a la que contribuía la ausencia de definición programática. A la hora del golpe de 1930, la situación de crisis reactivó conflictos que habían llevado a la fractura partidaria en la década del veinte y que cruzaron al partido en toda la década del treinta, en registros actualizados de acuerdo con las novedades políticas.

A lo largo de los años treinta se confirmó una configuración, esbozada en la década anterior, de tres actores principales, todos ellos a su vez integrados por una miríada de actores menores. Por una parte, el antipersonalismo, definido como organización partidaria por fuera del radicalismo; por otra, el yrigoyenismo y finalmente el alvearismo, ambos dentro del marco partidario y compitiendo por su conducción. Esta situación de una estructura dividida en dos polos principales y con un elemento externo cuyas fron-

teras con uno de ellos eran imprecisas, marcó la evolución partidaria en la década. El enfrentamiento interno entre alvearistas e yrigoyenistas se tradujo en dos pares de opuestos: abstención-participación e intransigencia-colaboración. Organizada de esta manera, la disputa recorre todo el período, pasando por momentos críticos.

En 1930, el impacto negativo del golpe militar en el radicalismo fue evidente. Gravoso en sí mismo en tanto devolvía al partido al llano, el éxito del movimiento dejaba al desnudo las contradicciones internas que paralizaban la gestión yrigoyenista, que llegaban al compromiso de miembros del gabinete nacional y del mismo vicepresidente Martínez con el intento de forzar el retiro del presidente. La renuncia del general Dellepiane al Ministerio de Guerra, ante la imposibilidad de articular una respuesta enérgica para el frente militar, marcó el punto límite de la agonía del gobierno radical. A partir de ese momento, el gobierno careció de interlocutores en el ejército que pudieran equilibrar la influencia de los sectores justistas y uriburistas, con lo cual se definía una de las principales condiciones de posibilidad para el quiebre institucional: que la acción de un grupo decidido no encontrara resistencias en las filas de los hombres de armas.

Inmovilizado por las divisiones internas, acosado por la oposición y la prensa y sin capacidad de conducción militar, el gobierno yrigoyenista cederá el poder al comando militar golpista sin resistencias. Habían transcurrido apenas dos años del excelente desempeño electoral de 1928 y sólo unos meses de un nuevo triunfo, más modesto pero igualmente importante por el contexto de crisis en el que se produjeron las elecciones. Sin embargo, en los últimos días del invierno de 1930, el gobierno no pudo impedir que esa legitimidad electoral fuera relegada en nombre de la opinión pública y de la eficiencia, con las que sus enemigos construían el dispositivo de justificación de la intervención militar.

La inacción del gobierno frente a los preparativos del golpe y su caída ante tan exiguas fuerzas militares contribuyeron al desconcierto de los cuadros partidarios, obstruyendo la articulación de una estrategia de resistencia. Este estado de parálisis del partido será decisivo para desactivar a los militares radicales. Mientras el ya ex presidente Yrigoyen iniciaba el camino de la prisión que lo retendría en Martín García, el otro ex mandatario radical, Alvear, se despedía de la embajada argentina en París con las más duras

declaraciones contra el presidente depuesto proferidas por un hombre del partido. Las afirmaciones de Alvear aliviaban de culpa a los golpistas, poniendo el acento en los desaciertos partidarios y haciendo recaer en Yrigoyen la principal responsabilidad de lo acontecido. Por la estatura política de Alvear, sus declaraciones no podían pasar inadvertidas en el radicalismo, donde activarían la tradicional desconfianza entre yrigoyenistas y antipersonalistas, ni tampoco entre los triunfadores de setiembre, donde Uriburu, que ocupaba la presidencia, y Justo, que se preparaba para ella, buscaban establecer un diálogo con el ex presidente que ayudara a profundizar el aislamiento del sector yrigoyenista.

En la primera etapa de la dictadura, entonces, la crisis del partido radical se exponía públicamente en toda su dimensión, como continuación de los días finales del gobierno de Yrigoyen. Cuánto y cómo afectaba esta crisis a la estructura partidaria y su capacidad electoral era algo más difícil de determinar.

Para los conjurados de setiembre, la crisis del radicalismo afectaría tanto a su organización como a su caudal de votos. Apoyado en esa interpretación optimista, que pronto se revelaría ingenua, el gobierno de Uriburu planificó las elecciones provinciales que comenzarían en abril de 1931 en la provincia de Buenos Aires. A tan pocos meses del golpe, el partido conservador creía llegada la hora de quebrar la larga hegemonía radical en la provincia.

En ese distrito provincial, clave por su aporte de electores, el radicalismo yrigoyenista había construido su principal fortaleza partidaria; allí era la fuerza predominante desde la intervención de 1917, a la que siguieron continuos triunfos electorales desde el año siguiente; incluso en las elecciones de 1930, en las que el conservadurismo había logrado una notable recuperación, el radicalismo consiguió mantener la primacía. Con el golpe militar maduró un nuevo cuadro de situación cargado de hostilidad para el partido derrocado. No sólo perdió el manejo de los recursos del Estado, sino que su organización y el universo simbólico de la identidad radical —que en el distrito tenía una referencia casi exclusiva en la figura de Yrigoyen— serán interpelados por la opinión pública desde una imagen demoníaca construida por los triunfadores de setiembre.

Ese clima profundizaba la crisis radical, cuyos principales dirigentes eran marginados de la acción política por la persecución del gobierno militar. El desafío electoral revelaría el verdadero

impacto del golpe militar sobre la estructura partidaria y sobre su tradición de partido mayoritario, colocando al radicalismo en una situación límite, ya que un resultado negativo otorgaría un agregado de legitimidad al golpe militar y confirmaría su anunciada decadencia como organización, promoviendo la fuga de cuadros y el ingreso de otras fuerzas partidarias al territorio de su electorado fiel.

Al mismo tiempo, tanto Uriburu como Justo confiaban en Alvear para profundizar las fisuras del radicalismo hasta la ruptura, convocándolo a una cruzada contra el sector yrigoyenista. El ex presidente estaba lejos de querer asumir la empresa, sobre todo luego del ensayo electoral de abril de 1931, en el que pudo constatar no sólo el poder interno de los sectores yrigoyenistas, que lograron imponer la candidatura de Honorio Pueyrredón a la gobernación relegando la suya, sino la capacidad para sostener el predominio partidario en el distrito a pesar de la crudeza con que se exponía en la opinión pública la imagen de su jefe.

Con el regreso de Alvear al país, las expectativas que generaba su figura entre los antiyrigoyenistas tuvieron oportunidad de ser contrastadas con la realidad; a su vez, el propio Alvear pudo marcar los límites de su crítica al yrigoyenismo y definir el lugar que estaba dispuesto a ocupar en la política argentina. Para Justo, su ex ministro, nadie como el ex presidente podía ayudar tanto a estrechar el cerco a los sectores yrigoyenistas del radicalismo, facilitando el pase de cuadros opuestos al presidente derrocado, pero todavía integrantes de la UCR, al antipersonalismo. De esta manera, se fortalecerían las posibilidades de construir una organización partidaria competitiva, capaz de capturar un importante caudal del electorado radical cautivo, y hasta de competir con el yrigoyenismo en el terreno de la identidad radical. El principal límite para esta expectativa residía precisamente en la voluntad política de Alvear: dispuesto a recuperar el primer plano en el escenario político, la bendición que Justo solicitaba competía de manera directa con esa ambición y, por lo tanto, era imposible.

A su vez, en los planes de Uriburu el ex presidente radical podía también ayudar a erradicar al yrigoyenismo. En esta dirección, la dictadura reclamaba de Alvear un firme rechazo de la experiencia del gobierno depuesto, ofreciéndole como contrapartida la libertad para reorganizar el partido.

La negativa de Alvear a aceptar las sugerencias oficiales confir-

ma su voluntad de dar la lucha política en un terreno no predeterminado por el adversario. Alvear decidió alejarse de su declaración de París para intentar liderar un radicalismo unido, donde el yrigoyenismo garantizaba una envidiable capacidad electoral. Con Yrigoyen preso y enfermo, no había en el partido una figura equivalente a la suya que pudiera disputarle la dirección partidaria; por lo tanto, antes que activar el conflicto con los sectores que se reconocían en el anciano caudillo, era hora de suavizarlo, hasta lograr presentarse como el hombre que garantizaba la unidad partidaria. En un momento tan decisivo para la organización y frente a la convocatoria a elecciones presidenciales, su trayectoria política le ofrecía al partido, y especialmente al sector yrigoyenista, un símbolo de unidad que podía funcionar como dique de contención para los sectores más permeables a la convocatoria del antipersonalismo, sobre todo cuando, gracias al manejo de los resortes estatales, los antipersonalistas contaban con recursos materiales para salir a la caza de cuadros y votantes radicales. Ese movimiento pondría en riesgo la condición de partido mayoritario, y el propio Yrigoyen aconsejó el apoyo a Alvear.

El triunfo radical en las elecciones bonaerenses de abril de 1931 y la postura asumida por Alvear a su regreso al país definirán la política que el gobierno seguiría frente al partido ante los comicios presidenciales convocados para fines de 1931, destinada a bloquear su retorno al poder. El resultado es conocido: acoso a la dirigencia partidaria, que sufrirá encarcelamientos y deportaciones, y proscripción de la candidatura presidencial de Alvear.

En ese ambiente tan poco favorable comenzaron los preparativos para la reorganización partidaria en nombre de la unidad, constituyéndose una Junta, llamada Junta del City, encargada de reformar la carta orgánica y definir el programa partidario. En setiembre de 1931 se aprobaba la nueva carta orgánica que, manteniendo la antigua estructura partidaria, establecía como novedad el voto directo de los afiliados. Hasta 1933, el proceso de reorganización estuvo en el centro de la escena; fue en ese momento cuando el alvearismo terminó de conquistar los principales órganos de conducción. Durante esos años, el enfrentamiento interno se concentró en torno a la actitud por asumir para enfrentar al gobierno. Mientras la intransigencia yrigoyenista insistía en la vía revolucionaria, alentando diferentes levantamientos armados, el alvearismo jerarquizaba el camino de la reorganización partidaria.

La proscripción de la candidatura presidencial de Alvear había llevado a la abstención, de modo que el alvearismo cerraba filas tras su líder con una bandera cuyo peso en la tradición partidaria hacía más difícil a los sectores yrigoyenistas discutirla. En la puja interna, la abstención resultaba un elemento de cohesión frente al régimen al recrear la mística partidaria, mientras le permitía a la organización eludir los conflictos que habrían acompañado a la participación electoral. Sin embargo, la dirigencia alvearista debía enfrentar dos problemas de envergadura: por una parte, el retiro de la competencia electoral dificultaba la posibilidad de contener en las filas de la organización a los sectores más reacios al yrigoyenismo, muchos de los cuales respondieron positivamente a la convocatoria que el antipersonalismo realizaba desde la Concordancia. Por otra, la abstención por sí misma, tal como era presentada por la dirigencia alvearista, no desactivó a los sectores del yrigoyenismo, que cuestionaban el sentido de esa herramienta si no iba acompañada por una oposición intransigente que incluyera la alternativa revolucionaria.

Desde el levantamiento de Pomar en 1931, la vía revolucionaria se veía seriamente limitada tanto por su escaso impacto en las filas militares como por la distancia que tomaba de ella la dirigencia partidaria. El último alzamiento revolucionario, producido en Santa Fe en 1933, fue diferente de los anteriores y reflejó bien ese doble límite. Fracasados los intentos de minar el poder del justismo en el ejército, el levantamiento armado de 1933 fue más civil que militar, y el lugar elegido reforzó esta primacía de lo político, con claros mensajes a la dirigencia partidaria y al resto del campo oposi-



Marcelo T. de Alvear, rumbo al exilio, julio de 1931.

tor al gobierno justista. El control demoprogresista de la provincia introducía una cierta ambigüedad en el aparato represivo que podía facilitar la acción revolucionaria y, a la vez, al colocar a la Alianza Civil en la incómoda posición de defender el orden junto al gobierno nacional, realzaba el lugar del radicalismo como fuerza opositora. El levantamiento revolucionario coincidía, por otra parte, con la reunión en Santa Fe de la máxima dirigencia partidaria, cuya gran mayoría era ajena a los preparativos armados de sus correligionarios. Precisamente la reunión de la Convención Nacional del partido en Santa Fe coronaba el proceso de reorganización interna en el que el alvearismo fue conquistando el control de los principales resortes de poder; el movimiento parece haberse planeado también hacia el partido.

Agotada la alternativa revolucionaria, la UCR siguió hasta 1935 sin participar de las elecciones. En esos dos años de cierta estabi-



Presos radicales trasladados con sus colchones a la alcaidía de Rosario, luego de la rebelión, enero de 1934.

lidad institucional interna, la principal línea de preocupación de la dirigencia partidaria se modificó. Si hasta entonces la fuente de conflicto más importante provenía de la intransigencia revolucionaria, ahora se producía un corrimiento hacia el otro extremo del arco partidario: el tránsito de militantes y dirigentes medios al antipersonalismo, que manejaba recursos estatales. Las dificultades para mantener la cohesión interna frente a esta situación, junto a la presión de los principales medios de prensa que negaban justificativo a la continuidad de la política abstencionista, llevaron al partido a modificar su estrategia en 1935, decidiendo el regreso a la competencia electoral. El alvearismo se preparaba así para recuperar el terreno perdido frente al antipersonalismo, con la intención de avanzar, a partir de las elecciones legislativas de 1936, en la conquista de representaciones parlamentarias. Adelantando la hora de la batalla decisiva por el Poder Ejecutivo, la UCR se disponía de este modo a utilizar el escenario electoral para reconstruir el territorio de sus adherentes e ir conformando una mayoría parlamentaria para un próximo gobierno.

Confirmando las expectativas de la dirigencia, el regreso a la competencia electoral trajo consigo el reflujo de importantes sectores partidarios emigrados al antipersonalismo; este cambio de tendencia resultaba alentador para la dirigencia alvearista. Los sectores intransigentes, en cambio, no podían ver con buenos ojos el regreso a las filas partidarias de quienes habían acompañado al gobierno de Justo. En esta instancia, la reactivación del conflicto interno pudo ser contenida por la fortaleza del alvearismo, canalizándose en un grupo que terminaría siendo externo a la organización partidaria, FORJA, cuya singular impugnación político-ideológica no logró vulnerar la torre de poder partidario. Las resistencias internas de los sectores intransigentes no habían desaparecido ni mucho menos, pero tenían por el momento demasiadas dificultades para adquirir relevancia política. El alvearismo mantuvo la unidad partidaria en un punto muy alto considerando las hostilidades enfrentadas desde el golpe de 1930; más aún, logró preservar la imagen de partido predominante a pesar de no participar de las elecciones. Esta imagen, tan reconfortante para la dirigencia como paralizante para las oposiciones internas, fue confirmada por el triunfo en las elecciones legislativas de 1936 y por la conquista de algunos gobiernos provinciales.

En ese contexto, FORJA se fue definiendo a través una práctica



Mesa directiva de FORJA; tercero y cuarto desde la izquierda, Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche, 10-3-1942.

político-intelectual que afirmaba la tradición yrigoyenista para marcar los contrastes entre la dirección del partido y su historia. Mientras tanto, fronteras adentro y sin renunciar a la práctica política partidaria, la oposición interna se expresó fundamentalmente en el debate por los contenidos programáticos, que cruzaba las páginas de las publicaciones identificadas con el partido; en la afirmación de liderazgos intermedios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires; y en el afianzamiento de liderazgos regionales que comenzaron a buscar su proyección nacional, como el sabattinismo cordobés.

Contenida parcialmente la conflictividad interna por el triunfo en las elecciones legislativas de 1936 y por la campaña para las presidenciales de 1937, la derrota de Alvear en estas elecciones fue un duro revés para la conducción partidaria y habilitó la revisión de la estrategia seguida. El fracaso de 1937 venía a cuestionarla en los términos que la misma dirección partidaria había plan-

teado. No había sido eficaz para obligar al gobierno a desistir del fraude, ni había construido las herramientas para enfrentar esa disposición gubernamental a distorsionar los resultados electorales. Así, bajo el signo de la derrota de 1937, se generó un espacio más propicio para el desarrollo de la oposición interna, promoviendo la confluencia de los distintos sectores enfrentados a la conducción.

La posición institucional lograda por el partido en el breve tiempo transcurrido desde su regreso a la participación tuvo la importancia suficiente como para ordenar el conflicto interno en la discusión sobre las modalidades y los contenidos con que debía ejercerse la oposición. Ya las elecciones de 1936 le habían permitido alcanzar una importante presencia en la Cámara de Diputados, que se acrecentará hasta lograr la mayoría en esa cámara cuando la política de Ortiz le permita competir con el oficialismo sin fraude. Un bloque legislativo tan importante obligaba al partido, día a día, a responder a la política del gobierno, jerarquizando la discusión por los contenidos programáticos, marco en el cual aquellos que se presentaban como portadores de la tradición yrigoyenista buscaban diferenciarse de la conducción. Para esa oposición interna, el rumbo de la gestión partidaria comprometía al partido al mimetizarse con el gobierno y el bloque oficial, no sólo por la actitud conciliadora frente a las políticas estatales, sino por el comportamiento de los representantes partidarios en los organismos legislativos, que, involucrados en escándalos de corrupción al igual que sus pares del oficialismo como ocurrió con el affaire de la CHADE, dañaban seriamente la legitimidad de la organización en la opinión pública.

Simultáneamente, el enfrentamiento interno también se daba alrededor de la postura que se debía asumir con respecto al resto de las organizaciones políticas opositoras. Desde su regreso a la competencia electoral, el radicalismo tuvo que enfrentar lo que se presentaba como un dilema, de acuerdo con su tradición partidaria: hasta dónde acompañar las experiencias aliancistas que desde otros sectores de la oposición se proponían como alternativa, desde el intento de Frente Popular de 1936 a los primeros ensayos de Unión Democrática de comienzos de los años cuarenta. Los sectores intransigentes, que hacia esta última fecha ya comenzaban a reconocerse como un bloque que sostenía una postura de endurecimiento frente al gobierno y a la corrupción que alcanzaba al par-

tido, mantuvieron en este punto una actitud que entendían fundada en la tradición partidaria de la “pureza de la organización”, que no podía contaminarse con otras fuerzas políticas. La intransigencia se definirá así, al cierre del período, desde el doble reclamo de no transigir con el gobierno, ni transigir con el resto de los partidos opositores. Paralelamente, la postura conciliadora del alvearismo para con el gobierno fue acompañada con una posición que superaba parcialmente el aislamiento partidario, aunque esa unión posible con otras fuerzas no entrañaba una verdadera discusión en torno a las implicancias organizativas y políticas de una coalición que trascendiera lo meramente electoral.

El enfrentamiento interno define así a los actores principales como unionistas e intransigentes, reviviendo en los primeros años de la década del cuarenta la antigua tensión que cruzaba al partido desde su origen. Esa tensión se daba entre la tradición liberal, que jerarquizaba el rol del partido como parte de un sistema en el que coexisten actores equivalentes, y la referencia organicista, que al identificar sin mediaciones al radicalismo con la nación excluía del reparto al resto de las fuerzas políticas que no podían compartir un status de por sí excluyente. Ese registro consolidó la división interna en dos bloques, sin que se revirtiera el predominio de quienes habían conducido la organización a lo largo de la década, que lograrían mantener el control partidario a pesar del fallecimiento de Alvear en 1942. En el seno de la intransigencia, mientras tanto, se fue constituyendo una generación de recambio, que tendría su hora en la dirección partidaria poco después, precisamente cuando el radicalismo había perdido esa condición de partido predominante con la que signó más de tres décadas de política argentina.

BIBLIOGRAFÍA

Buchrucker, Cristian. *Nacionalismo y peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial, 1927-1955*, Buenos Aires, Sudamericana, 1987.

Cantón, Darío. *Elecciones y partidos políticos en la Argentina (historia, interpretación y balance: 1910-1966)*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973.

Cattaruzza, Alejandro. *Historia y política en los años treinta: comentarios en torno al caso radical*, Buenos Aires, Biblos, 1991.

Ciria, Alberto. *Partidos y poder en la Argentina moderna, 1930-1946*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1985.

Del Mazo, Gabriel. *El radicalismo. Ensayo sobre su historia y doctrina*, Buenos Aires, Raigal, 1955.

Galletti, Alfredo. *La política y los partidos*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1961.

Luna, Félix. *Alvear*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.

Macor, Darío. *El poder político en la Argentina de los años treinta*, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1999.

———. *La reforma política en la encrucijada. La experiencia demoprogresista en el estado provincial santafesino*, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1993.

Persello, Ana Virginia. *El radicalismo argentino en crisis, 1930-1943*, Rosario, Fundación Ross, 1996.

Puiggrós, Rodolfo. *Historia crítica de los partidos políticos argentinos*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.

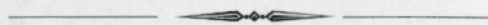
Romero, José Luis. *El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX*, Buenos Aires, Solar, 1983.

Rouquié, Alain. *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, Buenos Aires, Emecé, 1981.

Sanguinetti, Horacio. *Los socialistas independientes*, Buenos Aires, Belgrano, 1981.

Walter, Richard. *La provincia de Buenos Aires en la política Argentina, 1912-1943*, Buenos Aires, Emecé, 1987.

III



La política bajo el signo de la crisis

por LUCIANO DE PRIVITELLIO



Civiles movilizados en apoyo a la acción militar del 6 de setiembre de 1930.



SETIEMBRE DE 1930: LA "HORA DE LA ESPADA"

“Sólo un milagro pudo salvar la revolución. Ese milagro lo realizó el pueblo de Buenos Aires...” Esta ajustada apreciación del entonces capitán conspirador Juan D. Perón, quien había formado parte del grupo del general José Félix Uriburu hasta que, desencantado por su falta total de organización y la escasa prudencia de los conspiradores, se acercó a los hombres del general Agustín P. Justo, ilustra dos características salientes del movimiento del 6 de setiembre: su debilidad en lo militar y su éxito en la opinión.

La columna revolucionaria se integró con grupos de civiles mal armados, convocados por los partidos opositores y algunos diarios como *Crítica*, acompañados por adolescentes del Colegio Militar y una escasa tropa de línea; los jefes principales, Uriburu y Justo, eran militares retirados. En un relato muy poco marcial, Roberto Arlt revelaba, en un artículo aparecido en *El Mundo* dos días más tarde, el tono festivo de la marcha: “En fin, aquello era un paseo, una revolución sin ser revolución; todas las muchachas batían las manos y lo único que le falta-

ba era una orquesta para ponerse a bailar. La agresión que como se dice, partió del Molino, no tiene nombre. [...] Pues al paso de los soldados que venían de Flores y que cortaron luego por Caballito Norte, no fue un camino de soledad, de miedo o de indiferencia, sino que, en todas partes, estallaban aplausos, y la gente se metía entre los soldados como si hiciera mucho tiempo que estuviera familiarizada con esta naturaleza de movimientos”.

La columna llegó hasta la Casa Rosada y se apoderó de ella sin que nadie intentara seriamente detenerla; la única excepción fue la resistencia organizada en el Arsenal de Guerra por el ministro del Interior Elpidio González junto a los generales Nicasio Aladid, Enrique Mosconi y Severo Toranzo. El Arsenal se rindió cuando recibió la notificación de la renuncia del vicepresidente Enrique Martínez, llevada personalmente por el general Justo. Algunas escaramuzas que se produjeron el día 8 fueron fácilmente sofocadas. En muchas provincias, las administraciones radicales abandonaron espontáneamente las sedes de gobierno, dejando sus instalaciones a merced de quien quisiera ocuparlas. Muy lejos de las tradiciones pretorianas a las que se acostumbrarían años más tarde, la mayor parte de los cuadros militares se negaron a movilizar sus tropas; otros simplemente no sabían que debían hacerlo. Una fuerte cultura legalista hacía dudar a la mayoría de los oficiales sobre la conveniencia de un movimiento de este tipo: paradójicamente fue esa misma cultura la que aseguró el acatamiento inicial al nuevo presidente Uriburu, una vez que éste se encontró instalado en las oficinas de la Casa Rosada con las renunciaciones de Yrigoyen y Martínez en sus manos.

El primer acto de un proceso que vendría a restaurar la supremacía de los poderosos de la Argentina, desde la “oligarquía” hasta los “monopolios petroleros”, pasando por el “partido militar”, impresiona mucho menos que la dimensión de sus supuestos móviles. Esta atribución cómoda de responsabilidad a unos actores tan tremendos como ocultos ha impulsado a pasar por alto la profunda crisis de la estructura política del yrigoyenismo, que arrastró consigo a su partido y, finalmente, al propio régimen institucional. ¿Cómo se llegó a esta situación, apenas dos años después de la espectacular victoria electoral del radicalismo en 1928?

LA CRISIS DEL YRIGOYENISMO

El escrutinio de los comicios presidenciales realizados el 1° de abril de 1928 arrojó un resultado contundente: 839.140 votos del radicalismo yrigoyenista contra 439.178 votos del radicalismo antipersonalista, que había contado con el respaldo de las agrupaciones conservadoras. Ante estos números se perfilaron dos reacciones extremas: en el personalismo, la convicción absoluta de su identidad total con “la nación”, más aún cuando había arrojado el lastre del antipersonalismo; en la oposición, un profundo desconcierto que paulatinamente provocó el acercamiento a opciones conspirativas, junto con un desencanto frente a la “cultura cívica” de los argentinos y frente a la práctica del sufragio.

El radicalismo concibió la reelección de Yrigoyen como un verdadero plebiscito. Esta lectura no era una simple metáfora; por el contrario, exhibía una vez más una vocación totalizante de la cultura política local, adaptada ahora a lenguajes y procedimientos que, como el plebiscitario, se utilizaban en otras latitudes como alternativa a la democracia liberal en crisis. A despecho de las acusaciones de sus opositores, esta vocación no era una novedad introducida por el radicalismo, sino que estaba sólidamente instalada en la política argentina desde varias décadas antes de su llegada al poder. En muchos sentidos, la ley electoral de Sáenz Peña había permitido consolidar esta cultura política, en parte porque los autores de la ley la tomaron como propia y, en parte, porque acrecentó el dramatismo de la competencia política y del lenguaje en el que ella se expresaba, al aumentar las dimensiones del electorado.

A pesar del establecimiento de la representación de las minorías, la reforma de 1912 fue refractaria al pluralismo ya que, en la visión de sus defensores, la sociedad fue concebida como un bloque único con un atributo también único y determinante: su ideal de progreso. En consecuencia, los comicios no tenían por objetivo manifestar las voces de intereses sociales diversos, sino garantizar la representación de la unánime voluntad progresista de la nación, que era también la de cada uno de sus ciudadanos. Así, la ley electoral vino a consagrar, mediante la ampliación del electorado, una visión de la sociedad que la planteaba homogénea en clave espiritual: la representación política estaba llamada a expresar el “alma de nación”, cuyo contenido concreto Sáenz Peña no dudaba en reconocer tanto en su propia voz como, más ampliamente, en la

del “grupo pensante” del que era miembro. Pero, a pesar del optimismo de Sáenz Peña, no fue el “grupo pensante” quien se benefició de la reforma sino la UCR que, a favor de sus victorias electorales, fue asociando su propia identidad a la integración ciudadana en la monolítica comunidad política nacional. Junto a sus reiterados triunfos en diversas elecciones, otro factor preponderante en esa asociación fue la “religión cívica” proclamada por el partido, en especial a través de su autoidentificación con una “causa” llamada providencial y mesiánicamente a desplazar a la clase política anterior al espacio demonizado del “régimen oligárquico”. Su éxito, a pesar de la evidente incongruencia entre la pretensión de ruptura y las trayectorias recientes del partido y sus dirigentes, demuestra el potencial ideológico de la religión cívica radical, versión renovada y formidable de la tradicional matriz totalizante de la cultura política argentina. En efecto, entre sus tópicos no se advierte ni un solo rastro de un pluralismo sociológico o político: a quienes pretendían imponerles un programa partidario que permitiera distinguir a la agrupación de otros partidos, los radicales gustaban responder que expresaban la voluntad única de la nación que, esta vez, encontraba su mejor intérprete en el partido y, especialmente, en Yrigoyen.

Esta identidad política, tan extensamente asumida, se adecuaba bien a una sociedad articulada alrededor de la experiencia de la movilidad real y virtual. En efecto, más que a la “clase media”, el radicalismo apelaba al “pueblo” o a la “nación”, sujetos que remitían a un conjunto real de dimensiones tan vastas como imprecisos eran sus límites. Su mayor virtud no era el recorte de un sector económico-social determinado, sino su asociación con un conjunto de valores integradores. Funcionaba así como la oposición especular de la “oligarquía”, cuya referencia social era tan arbitraria y escasamente específica como la del “pueblo”, pero transmitía el disvalor diametralmente opuesto de la exclusión. En un período en el que grandes sectores de la sociedad se embarcaban de una u otra manera en la aventura de la movilidad social o el progreso individual, la UCR logró asociar su identidad con esta suma de experiencias individuales en términos de una inclusión emocional dentro de la comunidad nacional por la vía de la política. La práctica del sufragio fue uno de los rituales que renovaban ciclicamente esta identidad inclusiva.

Expresión sin igual de esa religión cívica, Yrigoyen había sabi-

do despertar una gran expectativa alrededor de su figura durante la campaña de 1928. Sin embargo, la desmesurada magnitud de esas expectativas redundó en un rápido y proporcional desgaste, una vez que los datos de la realidad comenzaron a manifestarse bien diferentes de los previstos. Las primeras señales de la crisis económica afectaron las finanzas del Estado incluso antes del crack de Wall Street y provocaron el aumento de la inflación, el descenso de sueldos y la disminución del ritmo del gasto público, uno de los motores esenciales del patronazgo oficial. Aunque no se produjo una situación de conflicto social intenso como había sucedido durante el primer gobierno de Yrigoyen, decayó profundamente la adhesión al presidente. En un escenario político en el que los partidos tendían a construir identidades totalizantes, negándose a asumirse como una parte y habituados a deslegitimar y repudiar drásticamente a los opositores, la crisis favoreció una creciente tensión.

En este clima, entre 1928 y 1929 el gobierno inició un avance sobre la oposición con el objeto de ganar el control del Senado; la ofensiva incluyó intervenciones muy conflictivas en San Juan, Mendoza, Corrientes y Santa Fe. La oposición se exponía a perder el último reducto que dominaba y, ante esa posibilidad, se volcó agresivamente hacia la opinión y las calles. En pocas semanas, los actos comenzaron a acomodarse a las palabras y la violencia política aumentó su frecuencia e intensidad. En ocasiones, sólo se trató de proclamas efectistas, como la del radicalismo antipersonalista entrerriano, que apelaba desde el Senado provincial a un Urquiza capaz de derrocar al nuevo tirano Rosas. Pero también se produjeron hechos graves, como el asesinato de Washington Lencinas en diciembre de 1929, por el cual sus seguidores culparon directamente a Yrigoyen, o el frustrado atentado contra el presidente, ejecutado por un militante anarquista solitario, pero atribuido por los personalistas a la oposición. Poco después del asesinato de Lencinas, se produjo un agitado debate en la Cámara de Diputados, en el cual cada sector planteó una larga lista de muertes violentas de las que sus adversarios serían culpables.

Las elecciones legislativas nacionales de marzo de 1930 revelaron la gravedad de la situación. Tanto la campaña como los comicios se vieron plagados de incidentes, donde no faltaron los enfrentamientos armados, los muertos, las presiones policiales y las maniobras de fraude. En San Juan y Mendoza, los interventores

de Yrigoyen se preocuparon bien poco por ocultar las acciones destinadas a obtener resultados favorables a cualquier precio; en Córdoba, la policía detuvo a fiscales opositores y se denunció la posterior aparición de urnas abiertas. Finalmente, triunfó la UCR, pero la victoria fue lo suficientemente exigua como para que fuera procesada como una derrota: la religión cívica radical no incluía una explicación política ni emocionalmente satisfactoria para un descenso del caudal de votos como el experimentado entre 1928 y 1930. Menos aún la tenía para una derrota resonante como la sufrida en Capital Federal frente al Partido Socialista Independiente.

Un radicalismo confundido aparecía dando la espalda a aquella religión cívica que, entre sus certezas, incluía la que asociaba al partido con procedimientos electorales transparentes y con la condición de mayoría incontrastable. De todos modos, la UCR veía significativamente acrecentada su representación en la Cámara baja, dado que el sistema de mayoría y minoría prescrito por la Ley Sáenz Peña era poco elástico ante el descenso de votos a favor de un partido. En la oposición coexistían el entusiasmo electoral, fundado en el buen desempeño en esos comicios, con la preferencia por una salida rápida a través de una ruptura institucional. La doble situación de crisis económica y política se veía agravada por la crisis interna que vivía el gobierno, consecuencia del rápido desgaste de la autoridad de Yrigoyen. Ciertamente, el deterioro físico del presidente explica en parte esta circunstancia, aunque también lo hace la apenas disimulada lucha entre sus más cercanos colaboradores, quienes, convencidos de una sucesión anticipada tan próxima como inevitable, buscaban beneficiarse con ella. Paradójicamente, estas luchas que fragmentaban la administración política del Estado potenciaban un estilo de gobierno que hacía de Yrigoyen el centro de toda decisión, ya que lo convertía en árbitro final de las disputas personales. Se acentuaba así la inoperancia de un gobierno sometido a enconadas luchas palaciegas y a las decisiones de un árbitro que era incapaz de asumir su rol.

Esta situación dio, dramáticamente, el tono a la estrategia seguida frente a las notorias actividades conspirativas de civiles y militares, todas ellas ampliamente conocidas por el gobierno. Políticos opositores y oficiales del Ejército se reunían sin disimulo en lugares conocidos, como la sede de *Crítica* y la casa del general Uriburu, cuyo estilo tan poco prudente atemorizaba al capitán Perón, para quien era inminente una reacción represiva del gobier-

no. Pero no fue así. En el gabinete se recortaron dos grandes tendencias: una, encabezada por el ministro de Guerra, general Dellepiane, quien pretendía desarticular por la fuerza a los conspiradores; otra, la integrada entre otros por el vicepresidente Martínez, el ministro del Interior González y el canciller Horacio Oyhanarte, quienes minimizaban la situación y preferían no alterar los ánimos con iniciativas apresuradas. La decisión presidencial se inclinó por el segundo grupo: el 3 de setiembre se conocieron los términos violentos de la renuncia de Dellepiane, luego de que González desautorizara la detención de varios supuestos conspiradores ordenada por él. Yrigoyen, enfermo y retirado en su casa de la calle Brasil, había sido convencido de que la situación no era peligrosa, sólo dos días después de un frustrado intento de Uriburu por iniciar el movimiento y a tres de su definitiva realización.

¿GOLPE O REVOLUCIÓN?

Dispersión del poder y centralización de las decisiones fueron las dos caras de una misma crisis de gobierno y ambas ofrecieron múltiples flancos para las estrategias de la oposición: las prácticas conspirativas atravesaban la escena política de una forma compleja y sinuosa, un ida y vuelta de la oposición al oficialismo. Pero, más allá de la trama de intrigas e intereses sectoriales y personales, el movimiento del 6 de setiembre recibió múltiples apoyos, que fueron expresados con fervor o tomando veladas precauciones: desde instituciones patronales hasta algunos sindicatos, de dirigentes de la derecha a ciertas agrupaciones de izquierda, todos los partidos importantes con excepción de la UCR personalista, la casi totalidad del periodismo, el movimiento estudiantil universitario... ¿Qué acción era la que recogía tan amplios apoyos?

El 6 de setiembre fue visto por muchos de sus contemporáneos como una más de las “revoluciones” o “movimientos cívicos” de origen netamente civil, apoyados por militares, que constituían una ya larga tradición local. Vale recordar que esta tradición había sido insistentemente reivindicada por el propio Yrigoyen y por el radicalismo, evocando los movimientos que se habían sucedido desde 1890. El objetivo proclamado, tampoco demasiado original en tanto provenía del mismo repertorio revolucionario, era la restauración de un régimen democrático e institucional que estaría siendo vio-

lado por el presidente. Es difícil entender hoy esta lectura ya que, proyectado hacia el futuro, el derrocamiento de Yrigoyen es justamente considerado como el inicio de una larga serie de golpes militares; sin embargo, ésta no era la visión predominante en 1930.

Este fenómeno nos coloca ante una versión autóctona y, en parte, original de las dificultades que los sistemas democráticos liberales venían experimentando desde el fin de la Gran Guerra. Original, en tanto se impugnaba al gobierno afirmando los mismos principios que lo sostenían, incluyendo la Constitución liberal y la reforma de Sáenz Peña y no, como sucedía en Europa, descartando globalmente el sistema.

Dado que buena parte de la oposición compartía la convicción sobre el rol pedagógico que debían cumplir la ley electoral y, fundamentalmente, los partidos, pero sostenía que esta apuesta reformista en favor de la creación del sufragante esclarecido aún no se había cumplido, el razonamiento sólo podía responsabilizar del fracaso a la demagogia de la UCR y a Yrigoyen. Imágenes reiteradas en los editoriales de la prensa y en múltiples discursos políticos, como la “política criolla” o el “elector independiente”, apela-



Homenaje femenino a José Félix Uriburu. 15-9-1930.

tivo este último que remitía directamente al ciudadano racional que opta entre partidos en un libre mercado electoral según lo había pensado Sáenz Peña, se recortaban sobre este diagnóstico crítico que, sin embargo, dejaba abierta la puerta a una posible rendición. La condición era evidente: el fin de la “demagogia personalista”.

La UCR también era considerada la culpable de males que en otros ámbitos se atribuían a la democracia en general, tales como la inoperancia de sus administraciones, o las votaciones parlamentarias en bloque, una práctica introducida por las nuevas formas de mandato imperativo inscriptas en los procedimientos de los partidos políticos modernos. La primera crítica retomaba la vieja asociación de Sáenz Peña entre la razón progresista y las ideas de un grupo político; la segunda había estado presente desde el momento en que Yrigoyen buscó conformar un bloque parlamentario disciplinado. Ambas encontraban en el presidente su blanco predilecto.

Así, muchos opositores formulaban las críticas habituales en el marco de la crisis de las democracias occidentales de entreguerras contra la UCR y se lanzaban, a diferencia de otros casos, desde lo que se consideraban las promesas frustradas de una democracia liberal naturalmente positiva. La escasa atención que se ha prestado a estas posiciones, que eran las de la mayor parte de los actores del movimiento de setiembre, se debe al sobredimensionamiento del poder y la influencia de Uriburu y su grupo. Sin embargo, la fuerza de la concepción mayoritaria explica no sólo la impotencia de Uriburu para imponer su visión militarista y corporativista del golpe, sino también la rápida conformación de una oposición al presidente provisional en los mismos grupos revolucionarios, que se institucionalizó el 27 de setiembre en la Federación Nacional Democrática, inicialmente constituida por los partidos Socialista Independiente y Conservador de Buenos Aires, a la que luego se incorporaron agrupaciones conservadoras y antipersonalistas de las restantes provincias. La insistencia de Uriburu para imponer la reforma constitucional en un sentido corporativista, ya anunciada en declaraciones periodísticas por oficiales adictos y por el propio presidente el 1° de octubre de 1930, sólo sirvió para erosionar su de por sí escaso poder y, paralelamente, para consolidar la figura de Justo como abanderado posible de la continuidad legal y de una rápida apertura comicial.

La interpretación que Uriburu y los grupos nacionalistas buscaban imponer, según la cual se enfrentaba una crisis definitiva del sistema liberal, de la Constitución y de la Ley Sáenz Peña, estaba claramente a contramano con la visión predominante en la opinión pública. Pero no fue éste el único límite de su estrategia, ya que el Ejército, la institución que Uriburu pretendía transformar en fuente de su legitimidad, sostén y administrador del poder, convertida por el golpe en árbitro de la situación política, estaba controlado por Justo tanto material como ideológicamente.

EL EJÉRCITO HACIA 1930

Desde comienzos de los años veinte, el Ejército se encontraba en plena consolidación de una serie de estructuras institucionales creadas aproximadamente entre los años 1880 y 1910. Como parte de este proceso, se había formado una poderosa burocracia que controlaba el funcionamiento, los destinos, las jerarquías y los ascensos desde el Ministerio de Guerra y el Estado Mayor. En general, los miembros de esta dirección se destacaban como funcionarios y docentes de los institutos que, desde el Colegio Militar hasta los organismos superiores de instrucción técnica, conformaban cada vez más los peldaños ineludibles para la carrera de ascenso de todos los oficiales. La imposición de una mística corporativa y la invención de una tradición militar, que también se imaginaba asociada unívocamente a la existencia de la nación, amalgamaban a los cuadros y profundizaban la estructura de poder interno de estas jerarquías. La burocracia castrense consideraba toda interferencia externa como perjudicial para su recién ganado ascendiente, en particular si ella respondía a los avatares de las tormentosas coyunturas políticas.

Sin embargo, la prolongación de la política en el Ejército era una tradición demasiado sólida como para desaparecer con facilidad, y no fue precisamente el radicalismo en el poder desde 1916 quien contribuyera a modificar esta actitud. Un importante grupo de oficiales "radicales" se había formado al calor de los levantamientos revolucionarios (en especial el de 1905) y, ya en la presidencia, Yrigoyen buscó asegurarse el control de la institución favoreciendo a este grupo con destinos importantes y ascensos extraordinarios. Así, frente a la mística corporativa teñida de un fuerte

mesianismo patriótico, que se construía paulatinamente rechazando como ajeno lo político, se recortó otra identidad interna que sobreimprimía a lo anterior diversas dosis de afinidad con la “causa” del gobierno radical que, en el ámbito militar, asumía la forma de la “política de reparaciones”.

La política militar del primer mandato de Yrigoyen chocó muy rápidamente con las estructuras burocráticas y despertó rechazos incluso entre oficiales que simpatizaban con el radicalismo, como Uriburu o Justo. Para ellos era intolerable que Yrigoyen colocara a un civil, Elpidio González, como ministro de Guerra, y lo era todavía más que pasara por sobre su autoridad. A comienzos de los años veinte, los grupos descontentos comenzaron

a organizarse en logias y a identificarse como “profesionalistas” para distinguirse de los “radicales”, división que se acopló naturalmente a la polarización de toda la sociedad política en torno a la figura de Yrigoyen. Durante la administración de Alvear, la balanza se inclinó en favor de los “profesionalistas”, mientras su ministro de Guerra, el general Justo, aventajaba a Uriburu como líder del sector y creaba una poderosa red de lealtades entre la oficialidad. Esta nueva posición de caudillo militar venía a consagrar el gran prestigio que había sabido ganar entre la oficialidad joven e intermedia durante su paso por la dirección del Colegio Militar entre 1914 y 1922. Allí introdujo una importante renovación de los planes de estudios que incluyó, junto con las materias técnicas y los primeros rituales corporativos de “camaradería militar”, disciplinas de educación cívica fuertemente apegadas al republica-



José F. Uriburu, setiembre de 1930.

nismo liberal. De este modo, difundió entre los futuros oficiales una versión de la sociedad y la política que lo tendría por muchos años como primera fuente de autoridad. Como ministro también alimentó su imagen de militar profesionalista, aumentando desproporcionadamente el presupuesto del área.

Durante su breve paso por la comandancia de la fuerza luego del 6 de setiembre, Justo recuperó para su sector las posiciones perdidas durante el ministerio Dellepiane y no dudó en utilizarlas contra Uriburu. A comienzos de 1931, un nutrido grupo de altos oficiales reclamó al dictador un rápido retorno a la normalidad institucional. Semanas más tarde, la decisión de Uriburu de convocar a elecciones detuvo un importante alzamiento castrense, muy probablemente promovido por Justo. De todos modos, ya sin oportunidad de triunfar, grupos de oficiales radicales comprometidos en la conspiración se alzaron en Corrientes al mando del coronel Gregorio Pomar.

Acorralado en la opinión y derrotado en el Ejército, Uriburu ensayó una salida electoral diseñada por su ministro del Interior, el nacionalista y conservador bonaerense Matías Sánchez Sorondo. Se trataba de plebiscitar la figura y los proyectos presidenciales mediante un sistema de elecciones de autoridades provinciales que comenzaría en Buenos Aires. El 5 de abril de 1931 se votó en Buenos Aires y la UCR ganó por un margen algo mayor que el de 1930, aunque escaso en relación con los resultados registrados durante los años veinte: 218.783 votos radicales contra 187.734 conservadores; el socialismo sorprendió con los 41.573 votos que lo transformaron en árbitro del futuro colegio electoral. El carácter de plebiscito que el grupo uriburista había dado a los comicios bonaerenses no le dejaba alternativas intermedias entre el éxito y la derrota. Además de consagrar el derrumbe de Uriburu, el acto electoral demostró claramente que la retirada del radicalismo distaba mucho de ser un desbande ya que, aun sin poder contar con algunos recursos clave como la policía y las intendencias, su "máquina" electoral se mostraba vital y eficaz. Por otra parte, la continuidad de la crisis que un año antes había perjudicado a la UCR ahora se encaminaba en contra del interventor de Uriburu, Carlos Mayer Pellegrini, cuyas medidas de ajuste presupuestario deterioraron la ya pobre popularidad de un régimen empeñado en introducir innovaciones repudiadas incluso por quienes lo habían apoyado el 6 de setiembre.

JUSTO PRESIDENTE

La UCR no fue el único sector político en alentar y festejar la derrota de la facción del conservadurismo bonaerense alineada con la estrategia de Sánchez Sorondo: Justo tenía sobrados motivos para desear la derrota del ministro del Interior. Decidido a llegar a la presidencia, el fracaso y desbande del ala dura del gobierno le permitieron asumir el control de parte del aparato oficial, sin necesidad de comprometerse formalmente con un gobierno repudiado en la opinión.

Así, Justo comenzó a diseñar una candidatura cuyo camino sería lo suficientemente sinuoso como para no eludir un importante intento por encabezar la fórmula del radicalismo. El paso no era descabellado ya que, detenido y proscrito Yrigoyen, el partido quedaba en manos de Alvear, de quien Justo había sido ministro. Sin



Agustín P. Justo (centro), candidato presidencial, en visita a Santiago del Estero. 15 de octubre de 1931.

embargo, sus intentos fracasaron: por una parte, Alvear desconfiaba de las maniobras de su ex colaborador; por otra, y esto era crucial, las negociaciones para armar una candidatura radical, que contenían imposiciones de Uriburu y guiños de Yrigoyen, iban por carriles que no lo incluían. Justo buscó entonces la división del partido que desde el golpe parecía volver a unirse, como había sucedido en la provincia de Buenos Aires en ocasión de los comicios de abril. En esta empresa tuvo un suceso relativo ya que consiguió el respaldo de varios grupos antipersonalistas, que fueron los primeros en proclamar su candidatura, y hasta logró la adhesión de algunos dirigentes personalistas como el santafesino Ricardo Caballero. Pero sus maniobras sólo culminaron en un éxito total una vez que, utilizando todo su poder dentro del gobierno, hubo logrado el veto de la candidatura de Alvear, lo que llevó a la UCR a decidir la abstención. Con esta medida, tomada por el Comité Nacional a pocos días de los comicios presidenciales de noviembre de 1931, el radicalismo recuperaba uno de los componentes más sentidos de su religión cívica, pero dejaba el campo allanado para la victoria electoral de Justo. La Alianza Civil, formada por socialistas y demócratas progresistas que proclamaron la fórmula Lisandro de la Torre-Nicolás Repetto, no estaba en condiciones de disputar seriamente la presidencia.

Mientras tanto, Justo se aseguró el apoyo de los partidos conservadores provinciales que se habían reunido en el Partido Demócrata Nacional, y también el del Socialista Independiente. De este modo, se transformó en un candidato polifacético: continuador o crítico de la revolución, radical, masón o católico, conservador, nacionalista o liberal, general o ingeniero, todo a medida de la ocasión. Una novedad anticipaba nuevos tiempos: su candidatura obtuvo el apoyo explícito de la cúpula de la Iglesia Católica, alarmada por el público anticlericalismo de los dos componentes de la fórmula de la Alianza. Por el momento, también contó con el apoyo del nacionalismo, cuya crispada voz se dejaba oír desde el periódico *La Fronda*.

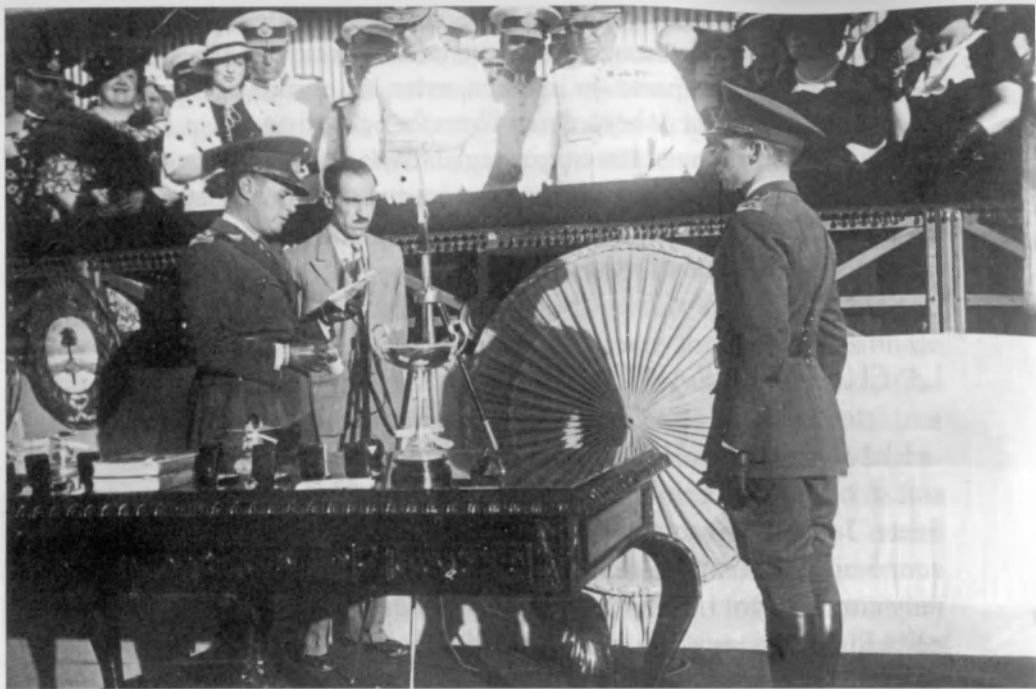
Con la ausencia de candidatos de la UCR, Justo ganó los comicios presidenciales de noviembre de 1931 con comodidad. A pesar del llamado radical en tal sentido, el nivel de abstención de votantes fue muy bajo y no era difícil advertir que el electorado radical se había dividido: muchos habían votado a la Alianza y otros, a pesar de todo, a las listas justistas. Tampoco se registraron manio-

bras de fraude, con excepción de los ocurridos en Buenos Aires y Mendoza. En ambos casos, el fraude no buscó perjudicar a la Alianza, sino que fueron parte de la lucha entre las agrupaciones que llevaban a Justo a la cabeza de su fórmula pero disputaban entre ellas la vicepresidencia, los cargos legislativos y todos los puestos locales. En efecto, a pesar de una versión que quiere ver detrás de Justo a una alianza formal y estable entre partidos llamada "Concordancia", tal cosa no existía en 1931.

LA CUESTIÓN RADICAL

El 24 de febrero de 1932, el general Justo asumió la presidencia; el conservador Julio A. Roca lo acompañó como vicepresidente. Justo debió tomar medidas destinadas a enfrentar la crisis económica y, al mismo tiempo, maniobrar en un terreno político muy complicado. La situación presentaba dos datos salientes: por un lado, la impugnación a la legitimidad de su gobierno por parte de la UCR, que asumía la forma de la abstención y los levantamientos armados; por otro, la tirante relación entre los conglomerados políticos que lo habían tenido como candidato.

En un marco donde la situación local favorecía las lecturas de la realidad en clave de crisis, tal como sucedía en buena parte del mundo occidental, Justo consideraba por su parte que en el caso argentino se trataba sólo de un sacudón leve y pasajero. Confiaba en una pronta normalización de la economía y del sistema político y, en consecuencia, no veía razón para abandonar el régimen republicano y la Ley Sáenz Peña. Las opciones totalitarias abiertas por el derrumbe de las democracias liberales las juzgaba por demás exóticas y descartables. Esta creencia profundizaba automáticamente la importancia de la cuestión radical, en tanto que la abstención del partido mayoritario constituía una irregularidad evidente para el régimen que decía defender. Justo pretendía solucionar el problema de un modo sencillo: la UCR se reincorporaría al sistema una vez que demostrara su adhesión a una práctica política "civilizada". A tono con una opinión más general, Justo pensaba que la prueba de esta conversión debía ser el repudio de la figura de Yrigoyen, pero su ambición política le prescribía una segunda condición más personal: la aceptación de su propia figura como líder redentor del partido. El fracaso de su primer inten-



Ceremonia en el Colegio Militar. En el palco, desde la izquierda, el ministro M. Rodríguez y el presidente Justo, diciembre de 1934.

to por alcanzar este lugar era, a su juicio, totalmente reversible.

El optimismo presidencial parecía desproporcionado toda vez que pretendía cooptar en su favor un partido que no sólo era opositor, sino que además objetaba abiertamente la legitimidad de su gobierno. No era otro el significado de la estrategia de la abstención y los sucesivos levantamientos armados que, si no eran organizados por la cúpula del partido, tampoco eran rechazados por ella. Estos intentos armados no tenían ninguna posibilidad cierta de quebrar el firme control del Ejército, consolidado por Justo a través de su ministro de Guerra, general Manuel Rodríguez, pero permitían sostener y recrear componentes sentidos de la religión cívica radical. Las máximas autoridades radicales estaban dispuestas a enfrentar la prisión y el exilio porque sabían hasta dónde, en ausencia de la mística generada por las campañas y las victorias electorales, se convertían en señales que ayudaban a sostener emociones e ideales identitarios del partido y, por extensión, su propia legitimidad como dirigentes.

Esta estrategia del Comité Nacional de la UCR tenía, sin embargo, un problema. En tanto que la vía armada carecía de posibilidades de éxito, la disputa con el gobierno tenía como tribunal último el impacto de los levantamientos en la opinión pública. Sin embargo, ante cada alzamiento, la abrumadora mayoría de los diarios, junto a la oposición demócrata-socialista, se unía en una condena que también involucraba a la política de abstención. Cómodamente respaldado por este clima, Justo no se privó de recurrir a un variado arsenal para aprovechar el descrédito de la política radical, imponer una imagen de normalidad institucional y transferir al radicalismo la responsabilidad por cualquier irregularidad. Así, cultivó un estilo deliberadamente opuesto al de Yrigoyen: su presencia en actos públicos era frecuente, sus discursos se difundían por la prensa escrita y la radio, se preocupaba por cumplir puntillosamente con cada uno de los rituales republicanos (en especial la apertura de sesiones parlamentarias, habitualmente ignorada por Yrigoyen), y acostumbraba reivindicarse como expresión de un pluralismo político que habría sido violado por el ex presidente. Como confirmación de esta última pretensión, podía exhibir la colaboración en el Congreso con la oposición socialista y demócrata progresista: la bancada oficialista, por ejemplo, aprobó varios proyectos de la oposición —en particular sobre temas sociales—, lo que se ofrecía como prueba del pluralismo oficial y del abandono de una política facciosa. Finalmente, Justo recurrió con frecuencia a la más tradicional crítica antiyrigoyenista; cuando hacia 1934 las condiciones de la economía mejoraron, gustaba difundir la eficacia de su política económica en un implícito contraste con el antecedente del radicalismo personalista. Esta prédica en favor de la eficacia gubernamental remitía, por un lado, a la citada “razón” de Sáenz Peña pero, por otro, empalmaba con el más moderno entusiasmo tecnocrático del equipo económico encabezado por el ministro de Hacienda, Federico Pinedo.

El juego de impugnaciones mutuas entre el gobierno y el radicalismo tendría su fiel más contundente en ocasión de los comicios nacionales para renovación de la Cámara de Diputados de marzo de 1934, cuando se revelaría si las expresiones de la opinión se ajustaban o no a las decisiones del electorado. Excluida la UCR, la expectativa de estas elecciones no era su resultado final expresado en la distribución de bancas, sino la disputa entre dos visiones enfrentadas de la realidad política argentina, representa-

das por la abstención y la concurrencia. Además, se plebiscitaría la pretensión gubernamental de normalidad institucional, cuya mejor expresión debían ser unos comicios tranquilos y transparentes. En este contexto, cobró especial importancia el caso tucumano, donde el radicalismo local decidió levantar la abstención en abierta disidencia con las autoridades partidarias nacionales. Poco importaban las escasas bancas puestas en juego: lo que allí sucediera se ofrecería como prueba de verdad para las partes en disputa. Justo, advertido de la naturaleza del juego, puso en alerta a los jefes militares de aquella zona y envió veedores propios para evitar que el gobernador Próspero García utilizara la máquina oficial para volcar en su favor la elección tucumana. García reclamó por lo que interpretaba como un avance sobre la autonomía de la provincia, pero Justo subió la apuesta lanzando una advertencia pública al gobernador, pocos días después de un ataque armado contra un acto radical.



Elecciones de 1934.

En la elección de marzo de 1934 no se registraron problemas importantes; el nivel de concurrencia alcanzó un porcentaje aceptable para una elección de diputados—62,8% del padrón— y, sobre todo, la UCR rebelde de Tucumán ganó la elección. La prensa repudió a coro la abstención radical, mientras Justo inició su discurso de apertura de las sesiones legislativas de ese año con una extensa apología de la limpieza de los comicios y una referencia particular al caso tucumano. El gobierno había impuesto su visión de la realidad.

Para el radicalismo, las elecciones alteraron dramáticamente la balanza de costos-beneficios de la abstención. Era evidente que la apuesta había

sido demasiado alta, ya que la concurrencia electoral era promovida por la obligatoriedad legal, por los medios de prensa, por la oposición socialista y demoprogresista, por los grupos radicales disidentes y, fundamentalmente, lo era de un modo apenas velado por la misma máquina electoral del radicalismo. Las autoridades del partido no desconocían que muchos punteros y jefes parroquiales que aceptaban formalmente la abstención negociaban sus votos con la UCRA a cambio del acceso parcial a los beneficios materiales necesarios para mantener su patronazgo, ya que advertían mejor que nadie el hecho de que las máquinas electorales sólo pueden reproducirse participando de los comicios. La existencia de estas estructuras establecía una diferencia sustancial con la abstención anterior a 1912, cuando el partido y su aparato electoral estaban en formación. Por otra parte, cuando el sufragio era una práctica de minorías, la abstención era fundamentalmente una cuestión de dirigentes; el sufragio ampliado involucraba, en cambio, a una multitud de actores cuyas acciones eran difíciles de prever y controlar. Si hasta los comicios de 1934, el Comité Nacional de la UCR había aceptado pagar ciertos costos a cambio del beneficio que la abstención suponía para la religión cívica partidaria, el fracaso público de esta estrategia daba por tierra con el cálculo. El riesgo era ahora la fragmentación del partido, detrás del cual acechaba expectante el presidente Justo.

Así, la concurrencia a los comicios decidida entre el 2 y 3 de enero de 1935 por la Convención Nacional de la UCR fue promovida por Alvear y buena parte de los dirigentes atendiendo al fracaso de la abstención y de los movimientos cívico-militares, y a las críticas cotidianas que soportaban ambas estrategias dentro del propio radicalismo. Estas circunstancias obligan a revisar la interpretación que hace del levantamiento de la abstención una concesión al oficialismo, tomada a contramano de posiciones combativas e intransigentes que habrían sido las de la base partidaria y, por añadidura en ese argumento, las genuinamente populares. La decisión impulsó el retorno de grupos que se habían aproximado al antipersonalismo, y Alvear obtuvo el respaldo unánime de la prensa. Estos éxitos resultaron infinitamente más importantes y significativos que la oposición y las críticas de sectores que estaban en minoría, entre los cuales se encontrarían futuros miembros del grupo FORJA, fundado en ese mismo año de 1935, cuyo brillo postumo y retrospectivo revela mal el rol por demás modesto que le

cupo en las disputas políticas de los años treinta. Sólo a medida que se fuera advirtiendo que el concurrentismo provocaba también sus propias consecuencias negativas para el partido, aparecería una seria oposición interna que se identificaría como “yrigoyenista” en oposición al Comité Nacional presidido por Alvear. Pero, alimentado por la victoria en las elecciones legislativas de 1936, hasta la votación presidencial de 1937 el clima general fue optimista: se celebraba la vuelta a los comicios, la probable victoria y la virtual reunificación del partido detrás de la línea Alem-Yrigoyen-Alvear.

LAS FUERZAS OFICIALISTAS

Incluso antes de que el levantamiento de la abstención alejara aun más la posibilidad de formar su partido a partir de un tronco radical, para Justo se hacía necesario coordinar un gobierno conformado por un conjunto de agrupaciones que estaban lejos de constituir una fuerza homogénea. El PDN era una federación de partidos provinciales, incapaz de evitar las disidencias que, en ocasiones, se transformaban en conflictos abiertos; el antipersonalismo tampoco era mucho más que un puñado de estructuras provinciales con algún peso en Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja, Santiago del Estero y Capital, y el PSI, luego de un efímero intento por disputar el espacio de la izquierda al PS, en particular en el Concejo Deliberante porteño, languideció hasta desaparecer.

Las fricciones entre los diferentes grupos en busca del favor presidencial fueron frecuentes. Los conservadores criticaban a Justo por el lugar destacado que reservaba a los antipersonalistas en el Ejecutivo, argumentando no sin razón que eran ellos quienes aportaban la mayor cantidad de votos. Para Justo, los cálculos eran otros. Otorgando al antipersonalismo un espacio mayor al que le hubiera correspondido por su caudal de votos, Justo lograba, a corto plazo, el mantenimiento de un equilibrio que le daba libertad de maniobra y sostenía la apariencia de una coalición. A largo plazo, el antipersonalismo podía ser la mejor plataforma para su estrategia de acercamiento al radicalismo.

Sin embargo, una situación conflictiva que se reprodujera en todos los escenarios podía amenazar la marcha de la administración, lo cual era particularmente peligroso en momentos de crisis

política y económica. Justo entendió que si no podía ni convenía eliminarlo, el conflicto debía ser acotado y su política se orientó a coordinar las bancadas en el Congreso. Sobre este acuerdo parlamentario elaborado durante los dos primeros años de su gobierno se fue estructurando la Concordancia. No es probable que Justo pensara en ella como una solución duradera: si bien era un instrumento eficaz para evitar que los conflictos interfirieran en la labor parlamentaria, la armonía rara vez se trasladó al terreno de los comicios. Por el contrario, con excepción de la elección presidencial de 1937, cuando la única representación en juego fue la cabeza del Ejecutivo, los partidos mantuvieron su identidad en cada provincia, compitiendo entre ellos con enconada virulencia si era necesario. A pesar de su deseo de conformar un partido orgánico, del que él mismo se veía como constructor y líder, y al cual tenía como elemento imprescindible para el funcionamiento del régimen, Justo pasó toda su presidencia, y aun el resto de su vida, tratando de manejarse entre los inestables equilibrios de los múltiples y fragmentados actores del sistema político argentino, intento que llevó adelante con particular destreza y total ausencia de escrúpulos. La distancia entre el modelo de un partido mínimamente organizado y la Concordancia fue una expresión más de la distancia entre el ideal de la reforma saenzpeñista y el funcionamiento efectivo de la política partidaria en la Argentina.

LA SUCESIÓN Y EL FRAUDE

Si bien parte de la apuesta política de Justo parecía coronada por los comicios de 1934 y el levantamiento de la abstención radical de comienzos de 1935, esta última medida venía a poner en cuestión su posición electoral y, fundamentalmente, sus ambiciones personales hacia el radicalismo. La posibilidad cierta de alcanzar la presidencia en 1937 encolumnó a la UCR tras la conducción de Alvear, incluyendo las expresiones provinciales más reacias a someterse a los dictados del Comité Nacional como el entrerriano o el tucumano. Justo se inclinó, entonces, más decididamente hacia los sectores conservadores, los más firmes de su alianza y aquellos que podían garantizarle, si no la mayoría, al menos un importante número de votos. Asimismo, había profundizado otras estrategias de cooptación de votantes, como su acercamiento al



Comisión de Prensa del XXXVII Congreso Eucarístico Internacional de 1934. Entre otros, 1) ministro de Obras Públicas Manuel Alvarado, 2) vice de la Mesa Directiva Dr. Tomás R. Cullen y 3) Carlos Ibagüen, presidente de la Comisión.

catolicismo, que había tenido su momento cúlmine en el Congreso Eucarístico de 1934, o su intento de reconquistar la adhesión de los grupos nacionalistas, que se habían apartado poco después de su llegada a la presidencia, concediéndoles, por ejemplo, la persecución legal del Partido Comunista.

Sin embargo, la impresión generalizada era que ninguna maniobra pública alcanzaría para formar la mayoría capaz de garantizar a Justo el control de su sucesión. De esa convicción surgió su decidido compromiso con el fraude electoral. Así, con el aval presidencial, se produjo la rápida transformación de las prácticas irregulares y violentas de control y producción clientelística de sufragio que, desde 1912, venían utilizándose de modo puntual y limitado, en un mecanismo de alteración y manipulación sistemático del ejercicio y los resultados electorales.

En 1935 debían renovarse varios Ejecutivos provinciales, acontecimiento de gran relevancia dado que las provincias seguían sien-

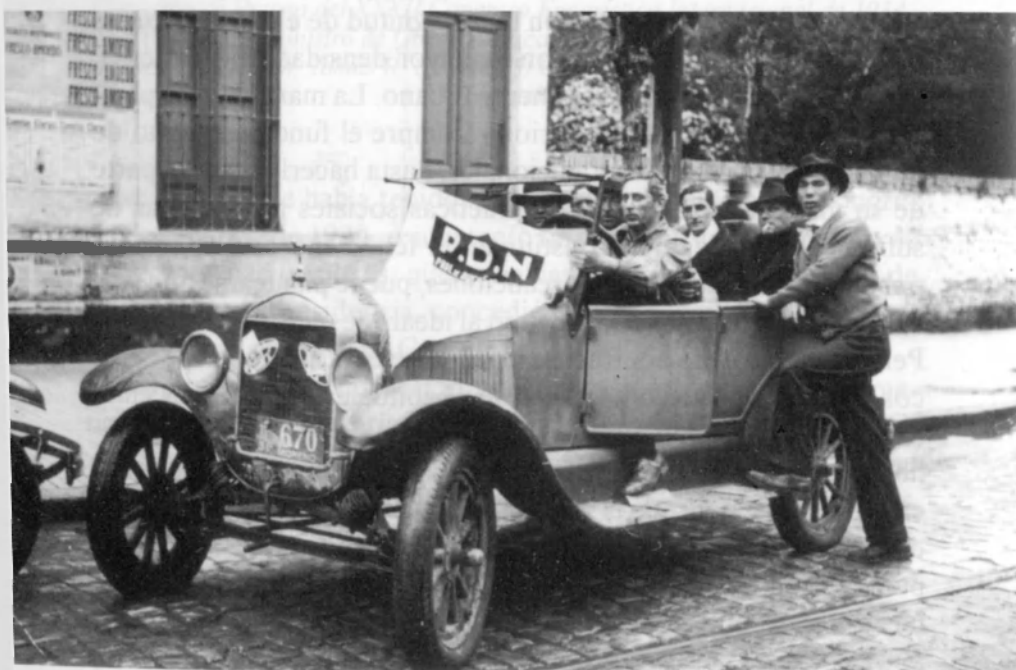
do las piezas clave del control electoral. Las leyes electorales de 1912 habían intentado terminar con lo que Sáenz Peña llamaba la lucha de la “quimera contra la máquina”, buscando desarticular el control electoral de los gobernadores sobre el electorado de sus provincias y, a su vez, el control que el presidente ejercía sobre los gobernadores en su calidad de “gran elector”. Sin embargo, las máquinas electorales no sólo no desaparecieron luego de 1912, sino que se perfeccionaron, adecuándose a las nuevas situaciones creadas —aunque no exclusivamente— por la ampliación del número de sufragantes.

Más allá de estos cambios, las provincias siguieron siendo los marcos de referencia del funcionamiento comicial: cada una constituía un distrito donde la elección era organizada y ejecutada. En la mayoría de ellas y a pesar de la ampliación de votantes, las cifras de electores siguieron siendo lo suficientemente pequeñas como para no poner en riesgo el desempeño de los caudillos locales, ni el control de estos últimos desde las capitales. En provincias más grandes, se producía una mayor fragmentación, como en el caso de Buenos Aires y Santa Fe. Por su parte, la Capital Federal era un caso *sui generis*, con una magnitud de electores apenas menor que la bonaerense y con la mayor densidad de población, era el único distrito completamente urbano. La marcada complejidad de su tejido social condicionó siempre el funcionamiento de las máquinas electorales tradicionales, hasta hacerlas perder parte de su influencia frente a otras prácticas sociales productoras de sufragio, como las que constituyen el fenómeno de la “opinión pública”. Aun con muchas precauciones, puede plantearse que este distrito fue el que más se aproximó al ideal “de mercado” de Sáenz Peña, situación que era frecuentemente celebrada por los periódicos, que mostraban como prueba las habituales oscilaciones electorales y los frecuentes triunfos opositores. Sin embargo, los equilibrios de fuerzas del sistema institucional delineaban una situación paradójica, ya que la relevancia del distrito en la distribución de cargos representativos nacionales siempre fue significativamente pobre en contraste con la influencia de una opinión capitalina que, incluso en lo que respecta a las más mínimas cuestiones municipales, se había conformado y se proyectaba políticamente en una dimensión indiscutiblemente nacional.

En consecuencia, frente a la decisión concurrentista de la UCR, la cuestión de las provincias se transformó en la llave que definiría

la elección presidencial de 1937. El oficialismo conservador cor-
dobés daba claras muestras de no adherir a la política de fraude,
permitiendo la victoria radical de fines de 1935 que llevó a Amadeo
Sabattini a la gobernación. En la Capital, la perspectiva era aun
más oscura para Justo, dado que existía la posibilidad cierta de
perder no sólo la mayoría ante la UCR, sino también la minoría
contra el socialismo. Esto fue, en efecto, lo que sucedió en marzo
de 1936, en ocasión de la elección de diputados.

Esta situación guió en adelante los pasos oficiales que apunta-
ron al dominio de Buenos Aires y Santa Fe. En el primer caso, el
objetivo se aseguró mediante una oportuna ley provincial conoci-
da como “ley trampa”, que otorgó al gobierno el control total de
las mesas de votación, junto con la consagración de la candidatura
de Manuel Fresco, una figura capaz de poner en suspenso los gra-
ves conflictos internos del conservadurismo bonaerense. En Santa
Fe, el problema era más acuciante dado que el gobierno pertenecía
a la oposición demoprogresista; allí, Justo recurrió al tradicional
mecanismo de la intervención federal sin ley del Congreso o, como



*Automóvil con propaganda del Partido Demócrata Nacional durante la
campana para las elecciones de gobernador de la provincia de Buenos Aires,
en apoyo a la candidatura de Fresco, 1936.*

se dijo entonces con ironía, con “media ley” ya que la intervención sólo había sido aprobada por el Senado el último día de sesiones ordinarias de 1936. La provincia pasó a ser controlada por el radicalismo antipersonalista, liderado por el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Manuel de Iriondo, quien en 1937 sería elegido gobernador mediante comicios fraudulentos. Esto le permitió a Justo no sólo disponer de los electores santafesinos, sino también mantener el equilibrio dentro de una Concordancia que, en la coyuntura, aparecía demasiado volcada hacia los conservadores.

A pesar de la ofensiva sobre ambas provincias, persistían algunos riesgos derivados de la distribución de electores de presidente entre mayorías y minorías por cada distrito provincial. En el mes de setiembre de 1937, el Congreso aprobó una iniciativa del Ejecutivo para reformar la ley electoral, eliminando el sistema de lista incompleta para el caso de electores de presidente. En adelante, el partido ganador de una provincia se llevaría todos los electores y no solamente los dos tercios. A través de esta medida, que daba marcha atrás con una de las innovaciones de la Ley Sáenz Peña, Justo resignó la minoría de algunos distritos, entre las cuales la de la Capital ni siquiera era segura, pero ganó para la Concordancia la totalidad de los electores de Santa Fe, Buenos Aires y las provincias chicas, donde la hegemonía era conservadora. Con todos estos reaseguros, que incluían el aval al fraude, Justo garantizó su lugar como gran elector. Perdía, sin embargo, buena parte de la opinión favorable que su gobierno había podido mantener hasta 1934 en lo relativo a la cuestión electoral, precisamente a raíz de ese aval.

Quedaba pendiente el nombramiento del sucesor. Detrás de la opción por el radical antipersonalista Roberto M. Ortiz se escondía una estrategia cuyo objetivo era el mantenimiento del poder personal de Justo que, de todos modos, seguiría teniendo su base más sólida en la autoridad que ostentaba dentro del Ejército. Ortiz era un hombre políticamente débil, representante de un partido ya casi inexistente, que despertaría la desconfianza de sus aliados conservadores, sometidos por Justo a una nueva frustración ya que, a pesar de realizar el principal aporte electoral a la Concordancia, quedaron relegados al segundo término de la fórmula. La debilidad de Ortiz y el contrapeso que podría ofrecer ante los grupos conservadores parecían una garantía de la dependencia personal que Justo esperaba de su sucesor. El objetivo final de esta estrate-



Marcelo T. de Alvear saluda en un acto en Córdoba durante su campaña electoral, agosto de 1937.

gia era sencillo: buscaba utilizar a Ortiz para acceder a un segundo mandato en 1943, esta vez, esperaba, a la cabeza de una UCR agradecida por la eliminación del fraude y por el regreso al poder bajo su liderazgo.

El resultado de los comicios presidenciales fraudulentos de noviembre de 1937 tuvo importantes consecuencias. Entre los diversos sectores afines al oficialismo, el proceso abierto en 1935 venía alentando un nuevo y más profundo abandono de la visión optimista de las prácticas electorales. Más allá de los conocidos respaldos públicos al “fraude patriótico” o de los textos que, como el de Rodolfo Moreno, aludían al fracaso de la Ley Sáenz Peña, la más notable manifestación de esta sensación se produjo en la apertura de sesiones del Congreso de 1937. En esa ocasión, Justo propuso a los legisladores el estudio de un posible censo electoral que, mediante el recorte de un electorado calificado, terminara con la universalidad del sufragio. Ciertamente, la propuesta no tuvo ninguna consecuencia práctica, pero revela la perplejidad de un

personaje que siempre había confiado en las bondades del sistema electoral vigente ante las dificultades para controlar este instrumento.

Para la dirigencia radical, los acontecimientos sucedidos entre el levantamiento de la abstención en 1935 y la derrota electoral de 1937 fueron construyendo un verdadero callejón sin salida; luego de esta última fecha, su política fue errática y contradictoria y, consecuentemente, alentó el despliegue de grupos cada vez más críticos de la conducción partidaria. La clave de toda esta situación era la definición de la actitud que debía asumir el partido frente al fraude oficial, teniendo en cuenta que, recientemente, la política de abstención había fracasado. La opinión pública se había mostrado, en la primera mitad de la década, contraria a la línea que el partido había decidido. Por otra parte, la UCR no había podido traducir su condición de mayoría electoral en un respaldo equivalente de sus electores hacia la política de abstención: cualquiera sea la explicación del voto radical, su adhesión no alcanzaba a tal extremo. De todos modos, el concurrencismo creaba nuevos problemas ya que el radicalismo se insertaba en un sistema político que le negaba cualquier posibilidad de victoria mediante la flagrante violación de las reglas del juego pero del cual, al mismo tiempo, se reconocía como miembro pleno. Ya en 1936 habían comenzado a advertirse las posibles consecuencias de esta situación: mientras los diputados radicales, en una actitud de oposición extrema, se negaban a aprobar los diplomas de los diputados fraudulentos de la provincia de Buenos Aires —dejando a la Cámara sin funcionar durante varias semanas y provocando un resonante conflicto institucional con el Senado—, los concejales porteños del mismo partido, respaldados por Alvear, no dudaron en aliarse con los concordancistas para votar las escandalosas ordenanzas que prorrogaron las concesiones de las empresas privadas de electricidad. Una anécdota atribuida a Alvear revela hasta dónde era consciente de esta dificultad. Ante el reproche de un correligionario indignado por la aceptación por parte del partido de fondos empresariales, que incluían los recibidos en calidad de soborno por las compañías de electricidad, Alvear habría respondido preguntando ofuscado de qué otro modo pensaba su crítico financiar la campaña presidencial.

Ocurría que el lugar que ocupaba el radicalismo en el escenario político no sólo le impedía alcanzar el gobierno, sino que lo obli-

gaba a acordar con el oficialismo para mantener su aparato institucional y la máquina del partido. En efecto: era el temor a la dispersión del partido, una posibilidad cierta durante la abstención, la variable que explica por qué los dirigentes radicales, en algunos casos desorientados y de mala gana, aceptaron esta nueva realidad, aun cuando luego de los comicios de 1937 se reveló que el riesgo de división podía reaparecer como consecuencia del concurrencismo. A medida que se diluía el optimismo, grupos cada vez más numerosos adherían a posiciones críticas en nombre de los principios de la religión cívica y de una línea “yrigoyenista” enfrentada con la “alvearista” que, en general, poco tenían que ver con los clivajes producidos en el partido durante la década anterior. En muchos casos, esta oposición tenía a nivel partidario los problemas que la UCR encontraba a nivel nacional, ya que oscilaba entre la posible fractura del partido y la denuncia del recurrente fraude interno que, estimaban, le impedía acceder a posiciones de importancia.

LA ALTERNATIVA FRUSTRADA DE ORTIZ

Roberto M. Ortiz asumió la presidencia el 20 de febrero de 1938. Su vicepresidente era el conservador catamarqueño Ramón S. Castillo, cuya candidatura fue resultado de arduas negociaciones dado que Justo prefería otros candidatos a los que consideraba más cercanos o maleables. De todos modos, cada uno a su turno, ni Ortiz ni Castillo ajustarían sus políticas a los deseos de su elector.

Al igual que Justo, Ortiz creía que la solución de una situación crítica e irregular —y ahora claramente identificada con el fraude electoral— debía realizarse dentro del régimen liberal y la Ley Sáenz Peña; pero en contraste con su antecesor, sus moderadas ambiciones políticas le permitían imaginar la salida al fraude como una drástica apertura electoral, aun cuando ésta derivara en una administración radical. Ello no implica que su visión del radicalismo personalista fuera particularmente optimista, pero confiaba en la capacidad educadora de la práctica electoral, a la que pretendía ayudar con leyes que obligaran a los partidos a transformarse en estructuras menos facciosas y más orgánicas. El paradigma reformista de 1912 seguía conformando una parte importante del pen-

samiento político de Ortiz, en el cual, de todos modos, aparecieron algunas novedades significativas. Ortiz estimaba que una práctica electoral normal y correcta era incompatible con las terribles miserias sociales que decía haber observado en sus giras proselitistas por el interior. Pobreza y ciudadano elector eran dos realidades incompatibles y de su convivencia sólo podía esperarse el florecimiento de la demagogia, tal como había sucedido durante el segundo gobierno de Yrigoyen. Para solucionar este problema, proponía una activa intervención del Estado, que debía incluir, por ejemplo, la compra y administración estatal de los ferrocarriles y otros servicios públicos básicos.

La lentitud del desarrollo social y de la regeneración de los partidos, alentados por la acción del Estado, no era para Ortiz argumento suficiente para postergar la apertura electoral. En cambio, otro factor le demandaría mayor prudencia: cada avance de su política electoral demolería en igual proporción las bases de la coalición que lo había llevado a la presidencia y le permitía gobernar. Era indudable que la destrucción de las máquinas de fraude electoral provocaría la reacción de los partidos conservadores y anti-personalistas que mantenían el control de las situaciones provinciales gracias a este recurso; a ello habría que sumar la previsible oposición de Justo, quien vería desbarrancarse una de sus cartas de negociación en vistas a su proyecto de retorno a la presidencia en 1943.

Así, cuando las denuncias de fraude en las elecciones para la renovación de diputados celebradas el 6 de marzo de 1938 se reprodujeron en casi todos los distritos, Ortiz cumplió su rol en el juego del fraude, asegurando con particular énfasis en la apertura de las sesiones ordinarias, apenas unas semanas más tarde, que las elecciones se habían desarrollado “regular y tranquilamente” y que las denuncias existentes ya habían sido “giradas a la justicia”.

Sin embargo, y a pesar de este inicio, Ortiz pareció estar sinceramente resuelto a terminar con los casos de fraude más escandalosos. La declaración de guerra al fraude se produjo poco más de un año después, en abril de 1939, cuando decidió la anulación de los comicios de San Juan, luego de una elección plagada de irregularidades. El conflicto abierto estalló a partir de febrero de 1940 con la intervención a Catamarca, particularmente significativa por ser el territorio del vicepresidente Castillo, y sobre todo con la intervención de la provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires era un caso muy sensible, porque constituía la base de cualquier andamiaje electoral de proyección nacional y, fundamentalmente, porque el impacto en la opinión de lo que allí sucedía era por demás intenso. Desde la asunción del gobernador Manuel Fresco, la situación bonaerense se había transformado en un tópico de los editoriales periodísticos de los diarios de la Capital, en parte por sus propios méritos, en parte porque ofrecía el contraste a la vez más cercano y contundente con la cultura cívica que se atribuía a los ciudadanos del distrito porteño. Existía una tercera razón: la provincia de Buenos Aires era el escenario de uno de los ensayos conservadores más notables para lograr una salida al problema del fraude electoral sin perder el control político. Su autor era el gobernador Fresco quien, a diferencia de Justo y Ortiz, concebía la salida de la crisis a través de un camino en el cual era necesario poner un drástico fin a los principios y mecanismos de la Ley Sáenz Peña. A partir de una mezcla de modelos que reivindicaba simultáneamente el integrismo católico, el fascismo europeo y el New Deal de Roosevelt, su proyecto apuntaba a la organización de la sociedad desde el Estado, según un esquema corpora-



El presidente Ortiz emite su saludo para Navidad desde la residencia presidencial, diciembre de 1938.

tivo. La sociedad organizada desde el Estado debía ser activamente movilizada en favor de este último, y éste era el rol que Fresco atribuía, junto con otras prácticas como la educación o la actividad sindical, a los comicios. Lejos del ideal liberal que otorgaba al sufragio la función de conformar la representación plural de los individuos y la sociedad en la política, lejos también del grado de libertad electoral de los ciudadanos que, a pesar de sí misma, admitía aquella concepción totalizante característica de la cultura cívica argentina, para Fresco la votación debía ser apenas uno más de los tantos rituales de movilización de la ciudadanía bajo estricto control del Estado. Por esta razón, no se preocupaba por ocultar la manipulación del voto —lo que supondría el reconocimiento implícito de una transgresión fraudulenta— sino que pretendía exhibirla con entusiasmo. Su modalidad preferida era el voto cantado, que transformaría cada emisión del sufragio en un ritual de adhesión en el cual la presión estatal podía, naturalmente, ejecutarse con comodidad.

Sin embargo, cada vez que se votaba los límites del ideal autoritario de Fresco se hacían evidentes. Desde los diarios, desde las bancas del Congreso y desde la misma presidencia, se alzaba a coro un repudio generalizado por lo que, a contramano de la voluntad del gobernador de Buenos Aires, era concebido simplemente como un fraude. En lugar de presentar la imagen de una sociedad sin fisuras movilizada detrás del Estado a través de una elección unánime, la versión más difundida era la de un gobierno tráfuga y sin apoyo ciudadano.

El 25 de febrero de 1940 se realizó en Buenos Aires la elección para gobernador luego de una clara amenaza de Ortiz contra cualquier posible maniobra de Fresco. Este, a su vez, pretendía imponer como sucesor al caudillo populista de Avellaneda, Alberto Barceló, a cualquier precio. Unos días después, el 3 de marzo, se realizaron con normalidad los comicios nacionales para renovar la Cámara de Diputados. Fresco había decidido permitir la victoria del radicalismo en estos últimos, para asegurarse la victoria en los primeros. Pero cuando aún no había resultados firmes de la primera elección, y mientras se multiplicaban las denuncias contra el “escrutinio a conciencia”, denominación dada a la falsificación de los resultados electorales, de larga tradición en la provincia de Buenos Aires, el 8 de marzo Ortiz envió la intervención federal a la provincia ante el aplauso generalizado de una amplia mayoría de la opinión pública.



El presidente Ortiz y su esposa María Luisa Iribarne salen de la Catedral, luego de la ceremonia por los funerales del papa Pío XI, febrero de 1939.

A cambio de la ruptura con sus aliados de antaño, Ortiz podía contar con el apoyo de un reducido grupo de legisladores anti-personalistas y, en parte, con el de la UCR. Es que la actitud presidencial no podía sino provocar entusiasmo en Alvear y el Comité Nacional, en tanto venía a dar aire a una política moderada que, para entonces, generaba renovados disensos internos. Un presidente dispuesto a destruir las máquinas del fraude era la salida más evidente, tal vez la única posible, para un partido que se había estrellado contra un muro cuando apostó por una impugnación abstencionista que no contó con el apoyo popular necesario, y que ahora chocaba contra otro encarnado en la participación en un sistema que le vedaba la victoria mediante la violación sistemática de las reglas del juego. Esta bocanada de aire fresco para el Comité Nacional llegaba justo cuando el grupo conocido como Bloque Opositor amenazaba con quebrar al partido en nombre del “yrigoyenismo intransigente”. Una nueva tendencia a la desintegración partidaria amenazaba con no detenerse, no sólo por el arsenal de críticas contra la actitud del Comité

Nacional, sino también porque esta disidencia podía encontrar en el gobernador de Córdoba, Amadeo Sabattini, un respaldo institucional de indudable prestigio. La situación de Sabattini era a la vez cómoda y expectante: podía mostrarse como el abanderado de la intransigencia, mientras gozaba los beneficios de su posición de gobernante posibilitada por la negativa del conservadurismo local a ejercer el fraude, una indulgencia de la cual Alvear no gozaba.

De todos modos, la transformación del entusiasmo del Comité Nacional por las medidas de Ortiz en un apoyo abierto a su gobierno, por demás urgido de tales respaldos, reconocía un límite muy rígido en la necesidad de mantener un perfil opositor para no seguir ofreciendo flancos débiles a los críticos internos. La situación para los líderes radicales distaba de ser sencilla.

Por su parte, la previsible y exacerbada hostilidad de los conservadores hacia el gobierno se canalizó en una serie de ofensivas destinadas a contrarrestar el apoyo que la apertura electoral de Ortiz cosechaba en la opinión pública. Para ello, comenzaron a ventilar varios escándalos que supuestamente involucraban al presidente. El más resonante fue el vinculado con la compra de terrenos en El Palomar, que no sólo buscó el descrédito de Ortiz, sino también el de su ministro de Guerra, el general Márquez. La elección de este segundo blanco no era ingenua: Márquez y el Ejército eran piezas fundamentales en la política presidencial.

Sabedor de que la apertura del sistema electoral desataría una lucha entre fuerzas muy parejas, Ortiz buscó desde un primer momento el crucial respaldo del Ejército que, convocado por el presidente, paulatinamente volvió a instalarse en el rol de árbitro de la situación política. Algo parecido había sucedido en 1930, pero sobre esta similitud inicial se destacaban novedades significativas que modificaron sustancialmente las características de la intervención castrense en la vida política a comienzos de los años cuarenta. Por un lado, el escenario general sobre el que debían actuar era ahora infinitamente más disputado y complejo; por otro, quien convocaba a la oficialidad en su favor no era un caudillo militar que, como Justo, podía asegurarse el control de la fuerza. Esta vez era un dirigente civil quien debía dialogar con los oficiales de igual a igual. Finalmente, las propias características internas del Ejército venían modificándose en los últimos años, tan sorda como profundamente.

Durante su presidencia, Justo había logrado mantener al Ejército relativamente alejado de la práctica política. Siendo a la vez cabeza del Ejecutivo y el más importante caudillo de la institución, sabía bien que él era el principal beneficiario de este perfil prescindente y “profesionalista”. De allí su preocupación por mantener cierto equilibrio interno, evitando repetir la actitud pendular y facciosa que había caracterizado la circulación de los mandos durante la década anterior. Pero una vez fuera del gobierno y ante la eventualidad de conflictos internos generados por la búsqueda de apoyos iniciada por Ortiz, ese mismo equilibrio que otrora había beneficiado a Justo como presidente multiplicaba ahora la fuerza de los potenciales contendientes instalados en posiciones de poder. Por debajo de este complejo panorama coyuntural, venía produciéndose un proceso que transformaría de raíz los valores y comportamientos de los oficiales más jóvenes.

Siendo Justo ministro de Guerra, en 1927 monseñor Copello había asumido la dirección del vicariato castrense, y de su intensa actividad en el cargo nacería una relación destinada a tener profundas consecuencias políticas. Decidida a dejar una marca indeleble en la formación de una oficialidad a la que vislumbraba como un factor de poder sin igual, la Iglesia ofreció a los jóvenes oficiales una visión del mundo de marcado contenido antiliberal, integrista, corporativa, furiosamente nacionalista, antisemita, autoritaria, antidemocrática y antiparlamentaria. Esta concepción no sólo se presentó como una alternativa atractiva frente a la desorientación producida por la crisis mundial del liberalismo, sino que entusiasmó especialmente a los hombres de armas, ya que les reservaba un lugar de privilegio como portadores de las virtudes de la ascendente “nación católica”. La guerra civil española, seguida con interés y entusiasmo por sacerdotes y oficiales, consolidó esta identidad agresiva y mesiánica que fue amalgamando la cruz y la espada en nombre de los mismos valores. Este proceso fue mucho menos ruidoso que las siempre citadas influencias de los modelos fascistas europeos pero, por eso mismo, su concreción fue más firme, sus avatares menos dependientes de los cambios coyunturales y sus consecuencias de más largo aliento.

A fines de los años treinta, esta nueva situación militar ya había producido cierto desgaste de la influencia de Justo dentro de la institución. Su lugar como referente y pedagogo de una visión a la vez tecnicista y liberal de la sociedad y la política, que años antes

le había garantizado un prestigio y una hegemonía incontrastables, estaba siendo erosionado por la nueva pedagogía de una Iglesia que él mismo había privilegiado como guía espiritual y educadora del Ejército. Si entre 1914 y 1928 Justo había sabido ganarse el favor de los jóvenes oficiales que recibían instrucción en los institutos castrenses, y que ahora ocupaban lugares importantes en la estructura de mando, las nuevas camadas se estaban educando con otros parámetros y otros referentes; sólo faltaba que una facción nacionalista y profundamente refractaria a la democracia liberal se organizara como tal, encontrara sus líderes y precisara sus objetivos. Mientras tanto, toda esta erosión no alcanzaba para modificar un dato que todos reconocían: a pesar de tener que enfrentar una situación más compleja, Justo controló el sector más poderoso de la oficialidad del Ejército hasta su muerte en enero de 1943. La institución armada seguiría siendo el más fiel y determinante capital político de Justo.

Ortiz también conocía este dato y, para tratar de contrarrestarlo, utilizó toda la fuerza institucional del Poder Ejecutivo y el respaldo ofrecido por el general Márquez. Ante la previsible reacción de Justo, se desató la lucha dentro de la institución: aunque un grupo importante se encolumnó con el ministro, el sector más numeroso apoyó a Justo. Esto le alcanzó para detener un movimiento de fuerza interno planeado por el general Márquez en favor de Ortiz, a pesar de lo cual el presidente juzgó que el apoyo conseguido era suficiente y se lanzó contra las máquinas de fraude.

El conflicto abierto entre el presidente y el principal caudillo militar posibilitó la organización y el sostenido ascenso del sector de oficiales nacionalistas. Este cambio fue alentado por el mismo Justo que, siguiendo lo que para él era una conocida, segura y eficaz estrategia, apostaba a dividir las aguas y promover los extremos para maniobrar con mayor soltura y presentarse como única solución a la vez firme, moderada y confiable.

LA GUERRA Y LA UNIÓN DEMOCRÁTICA

A pesar de las intervenciones de provincias en contra del fraude, la presencia de Ortiz en la Casa Rosada era la única garantía que permitía mantener el precario equilibrio de la situación política y militar junto con toda la estrategia de apertura electoral. Su

desplazamiento del cargo —consecuencia de una enfermedad que lo postraría primero y lo llevaría a la muerte en julio de 1942— señaló, por consiguiente, su drástico final.

Sin embargo, las actitudes de Ortiz, sumadas a la situación internacional provocada por el estallido de la guerra mundial en septiembre de 1939, comenzaron a modificar las condiciones del escenario político local. En su mensaje de apertura de sesiones de 1939, Ortiz se quejaba por lo que consideraba el abandono de las perspectivas y tradiciones nacionales en la política argentina. Esta queja presidencial venía a hacerse cargo de un fenómeno que, a pesar de su crítica, apenas comenzaba su desarrollo: la paulatina importancia de las imágenes políticas internacionales para dar sentido a las situaciones y definir las opciones locales. Mientras las armas hablaban en Europa, esta forma de mirar la política no podía sino favorecer la paulatina polarización de las opciones. Ya no se trataba de una limitada riña de partidos que enfrentaba a radicales, conservadores y socialistas, sino de una verdadera guerra vital entre la democracia y el nazifascismo.

Este fenómeno se había insinuado durante la guerra civil espa-



Propaganda callejera de Acción Argentina en 1942.

ñola, pero sin alcanzar la misma repercusión. La diferencia se explica, en parte, por la mayor magnitud de la nueva conflagración y por las opciones más tajantes a las que obligaba. Muchos de los que en la Segunda Guerra Mundial apoyaron decididamente la causa aliada habían visto con escasa simpatía la cercanía de la República española con el comunismo, y es probable que el mismo Alvear compartiera esta actitud. De hecho, Alvear se negó a reconocer cualquier paralelo entre España y el caso argentino, y no dudó —como buena parte del radicalismo en medio del entusiasmo electoralista de 1936— en despreciar toda propuesta en favor de la formación de un Frente Popular. Sin embargo, tan diferente impacto se explica también por la nueva situación de la política local. El lento alejamiento de Ortiz de la presidencia que se inició a mediados de 1940, y su reemplazo por el vicepresidente Castillo, dieron lugar a un nuevo escenario conflictivo en el que la UCR quedaba nuevamente sin salida posible.

Todo esto vino a ofrecer las condiciones ideales para la difusión de una visión moral y guerrera de la política, tan dramática como agresiva y polarizada. En esta clave, radicales y socialistas promovieron la formación de una comisión legislativa para investigar “actividades antiargentinas”, que, detrás del objetivo de averiguar posibles maniobras nazis en el país, se convirtió en un resonante foro de oposición al gobierno de Castillo. Esta oposición podía contar incluso con el apoyo del presidente enfermo quien, en febrero de 1941, hizo difundir una proclama pública atacando las medidas de Castillo en favor del fraude. Los diarios más importantes del país no dudaron en apoyar la declaración de Ortiz y, aunque la proclama no lo decía explícitamente, en asociar la política de Castillo con los totalitarismos europeos.

A la distancia, es evidente que Castillo no debía sentir mayor simpatía por el Eje y, llegado el momento, no dudó en elegir a Robustiano Patrón Costas, un ferviente aliadófilo, como sucesor. Pero, en ese momento, importaba poco la veracidad de estas acusaciones, toda vez que muchas personas las creían ciertas y actuaban en consecuencia. Por otra parte, Castillo se veía obligado a profundizar su política autoritaria, su alianza con los sectores nacionalistas del ejército y la neutralidad para mantener su autoridad, todo lo cual venía a confirmar, para quienes quisieran creerlo, las inclinaciones nazifascistas del presidente en ejercicio.

Mientras tanto, la enfermedad de Ortiz avanzaba y, en setiem-



Afiche del Partido Demócrata Nacional, en apoyo a Ramón Castillo, 1942.

bre de 1941, Castillo pudo formar su propio gabinete. En varios de los nombres que lo integraban puede intuirse la fiera del asalto conservador al gobierno. El nombramiento de un incondicional de Justo, el general Tonazzi, en la cartera de Guerra, revelaba además los resultados de una alianza que había enfrentado a Ortiz en nombre del fraude. Pero ésta era la última y efímera concesión de Castillo, en cuyos planes no había nada más alejado que un futuro gobierno de Justo, que reeditara sus preferencias por el antipersonalismo. Por el contrario, el flamante presidente se apresuraba a usar el fraude en beneficio de un claro predominio conservador, lo que incluía, indefectiblemente, la cabeza de la futura fórmula para un copartidario.

Para el radicalismo el golpe fue severo: toda la estrategia de Alvear y el Comité Nacional perdía su rumbo sin la presencia de Ortiz en el Ejecutivo. Con la salida electoral catapultada a un futuro impreciso e incierto, sólo quedaban en pie las acusaciones de su complicidad con el oficialismo y los sucesivos escándalos políticos. Estas críticas arreciaban, preferentemente en boca de disidentes radicales que de esta manera pensaban rescatar una mística identitaria sin advertir hasta dónde contribuían involuntariamente a sepultarla. El desconcierto radical fue tan agudo que en los comicios nacionales de marzo de 1942 la UCR perdió varios distritos en los que no se adulteraron sus resultados. El caso más significativo y resonante fue el de la Capital Federal, donde resignó la mayoría frente al socialismo. Por otra parte, esta serie de derrotas volvía a poner en cuestión el dogma que hacía del radicalismo una mayoría indiscutible. Desde el Comité Nacional reaparecieron las

propuestas de alianzas a tono con el clima de unión democrática antifascista que, alimentando un círculo vicioso, provocaron nuevas críticas y éxodos en nombre de la pureza de los principios. Para los críticos de la política unionista, el radicalismo no debía aliarse con nadie al menos por dos razones. La primera, fundada en la tradición de la religión cívica, indicaba que la UCR encarnaba en sí misma a la totalidad de la nación. La segunda, porque esta alianza era hija de una polarización extranjera y, para algunos, no había ninguna razón que hiciera más terribles a los nazis que a los británicos. Para terminar de complicar la situación interna, el 23 de marzo de 1942 moría Alvear, dejando un partido dividido y un vacío de liderazgo que desnudaba aun más una crisis que parecía no tener fondo.

A pesar de la debilidad de la oposición radical, la intención de Castillo de fundar un exclusivismo conservador también tenía límites muy marcados. Por un lado, sólo podía sostenerse mediante el fraude, lo que reeditaría un cíclico escenario de trampa y violencia; por otro, debía contar con una improbable pasividad de la UCR y con el apoyo de un ejército en el que Justo —repentinamente convertido en adalid de la democracia como público defensor del ingreso de la Argentina en la guerra y nuevamente volcado a la oposición— seguía teniendo poderosas influencias. Ninguna de estas dos últimas condiciones estaba asegurada pero, si en la cuestión radical poco era lo que Castillo podía hacer y, por otra parte, no parecía necesario preocuparse demasiado en virtud de la propia crisis partidaria, el escenario castrense ofrecía, en cambio, algunos caminos para el desarrollo de la estrategia presidencial. Así, Castillo concentró sus esfuerzos en la elaboración de un acuerdo con el sector nacionalista. Las condiciones leoninas que tuvo que aceptar el presidente demostraron hasta dónde se había invertido el peso específico de las partes desde 1930.

En efecto, a cambio de su apoyo, a fines de 1942 los oficiales nacionalistas se alzaron con el Ministerio de Guerra para el general Pedro Pablo Ramírez y con los mandos más importantes. Pero ya un año antes habían obtenido el cierre compulsivo del Concejo Deliberante porteño, y estuvieron a punto de conseguir el del Congreso Nacional, y el mantenimiento de la política neutralista en la guerra mundial. Mientras las tropas alemanas se encontraban a las puertas de Moscú, ciudad que gozaba ahora de las simpatías de una prensa que diariamente le dedicaba sus titulares, Castillo pri-

vilegiaba su alianza con los oficiales y voceros nacionalistas porque creía, probablemente con razón, que era ésta su única carta para sostenerse en el poder. El fracaso del ambicioso plan económico proyectado por su ministro Federico Pinedo le había mostrado que ni siquiera podía contar con el apoyo de los poderosos de la economía.

De este nuevo escenario nació a fines de 1942 la posibilidad de un acercamiento entre la UCR y Justo, quien, finalmente, parecía ver realizada su ilusión de encabezar la fórmula radical o, al menos, la de una eventual Unión Democrática. Para una parte de los dirigentes del Comité Nacional, Justo era la única figura capaz de enfrentar con éxito un posible fraude de Castillo y, sobre esta base, se acercaron al viejo enemigo. El radicalismo bonaerense venía dando pasos por demás firmes en este sentido. Mientras tanto, Justo dialogaba con importantes dirigentes conservadores, como Rodolfo Moreno, para incorporarlos a esta nueva propuesta política, al tiempo que comenzaban a abrirse los primeros comités que proclamaron su candidatura, algunos autoproclamados independientes, otros, radicales.

Muertos Ortiz y Alvear, Castillo y Justo eran los hombres del momento, pero otra muerte volvió a modificar el cuadro. En enero de 1943, pocos meses antes de las elecciones, moría Justo, dando por tierra con toda esta posible estrategia. Castillo parecía no tener rivales y es probable que, paradójicamente, esa situación terminara con su capacidad de negociación frente a los militares nacionalistas que, sin Justo, se daban cuenta de la inexistencia de una figura capaz de equilibrar su poder. Pivoteando sobre la cada vez más frágil alianza entre el gobierno y la oficialidad nacionalista, desde el Comité Nacional del radicalismo se lanzaron señales firmes ofreciendo la cabeza de su fórmula al ministro de Guerra, el general Ramírez, que había llegado al cargo por la presión de la oficialidad nacionalista. La trascendencia pública de este eventual acuerdo naturalmente enfrentó a Castillo con su ministro. El presidente pidió su renuncia y la respuesta de Ramírez fue su derrocamiento el día 4 de junio: así se produjo el primer golpe de Estado en el cual el Ejército participó autónoma e institucionalmente, bajo el comando de sus más altas jerarquías. Finalmente abandonaba su rol como árbitro, o como soporte de una política civil, para ocupar un lugar como protagonista principal a cara descubierta.

CRISIS, INCERTIDUMBRES Y CONVICCIONES

El golpe de junio de 1943 puso fin a un período político y, al igual que el golpe de 1930, deja como interrogante póstumo la pregunta sobre qué habría sucedido de no haber tenido lugar. Como sea, los años treinta han quedado en la memoria histórica como un período de crisis política profunda, una visión que no resulta sorprendente toda vez que la crisis fue también una clave privilegiada de comprensión para los propios contemporáneos. Sin embargo, muchos de los rasgos de esta crisis estaban inscriptos en las modalidades que la política argentina había asumido a partir de la ampliación de la participación electoral producida en 1912.

La modalidad electoral diseñada en la reforma de 1912 y el ejercicio concreto del voto se instalaron en la cultura política argentina, a la vez, como un mecanismo institucional y aritmético de promoción de representantes y como un ritual social. En el primer sentido, la presencia de las mayorías y minorías se encontraba garantizada según una propuesta que intentaba prescribir un sistema bipartidario a través de la aplicación de la lista incompleta. Por su parte, la Constitución delimitaba los controles y contrapesos del funcionamiento republicano. Sin embargo, el ejercicio de voto fue también el momento culminante de un ritual colectivo cuya importancia en la conformación de las identidades y los valores sociales aún no ha sido iluminada en toda su dimensión. Lo que parece claro es que una de sus consecuencias fue que las fórmulas institucionales republicanas quedaron completamente opacadas por la construcción de identidades políticas fundadas en visiones totalizantes y deslegitimadoras del otro. Ése era justamente el significado de la “causa” radical y la “razón” conservadora, incapaces de considerar legítima la existencia de una oposición.

Ésta no era una característica novedosa, pero el crecimiento de la participación electoral amplió su dimensión y sus consecuencias. Lo que hasta 1912 había sido parte de los discursos de unos actores que no necesitaban consagrar su posición en elecciones competitivas, luego de esta fecha se convirtió en una de las herramientas más formidables para el ejercicio de la política. Como sucedía en otras tantas experiencias de Occidente, la política democrática de masas —con su necesidad de construir mayorías elec-

torales en públicos amplios y heterogéneos— tendía naturalmente a dramatizar las consignas y la expresión de los valores. De esta manera, se fue consolidando un sistema político cuyos actores se veían a sí mismos como amigos o enemigos, como mayorías indiscutibles, como poseedores de razones verdaderas e incontrastables. En coyunturas de relativa tranquilidad, estas características no provocaban consecuencias demasiado espectaculares, pero, en momentos de crisis, derivaban fácilmente en acciones violentas.

En los años posteriores a 1930 se abrió un juego político en el cual la repulsión por la alternancia terminó eliminando todo rastro de unas reglas de juego comunes. En la escena resultante, gobierno y oposición fueron vaciando los comicios de todo su sentido ritual e identitario: el primero, incapaz de abandonar la pública transgresión de los principios que lo sostenían; la segunda, atrapada en una política moderada, en parte elegida y en parte impuesta por las circunstancias, que daba aliento tanto a las críticas como a las tendencias centrífugas. Lo que resulta significativo de los comicios de 1942 no es tanto la derrota radical, sino el escaso entusiasmo que despertaron, incluso, cuando se trataba de criticar al fraude; la política local sólo transmitía incertidumbres y una creciente anomia. El profundo impacto que los clivajes de la guerra mundial produjeron en los discursos políticos locales desnuda un abandono parcial de los principios autóctonos, pero, a la vez, revela la perduración de los marcos de una cultura política gustosa de las versiones extremas de la realidad.

Sin embargo, no debe confundirse la coyuntura de 1942 y 1943 con un cambio de largo plazo. En poco tiempo, el sufragio volvería a adquirir un poderoso sentido social, recuperando su función de ritual identitario cada vez más efectivo a la hora de expresar una matriz totalizante y negadora del otro. Las incertidumbres de 1943 darían paso a convicciones firmes con una notable rapidez.

BIBLIOGRAFÍA

Ansaldi, Waldo; Pucciarelli, Alfredo, y Villarruel, José (eds.). *Representaciones inconclusas. Las clases y los discursos de la memoria, 1912-1946*, Buenos Aires, Biblos, 1995.

———. (comps.). *Argentina en la paz de dos guerras*, Buenos Aires, Biblos, 1993.

Bejar, María Dolores. "Otra vez la historia política. El conservadorismo bonaerense en los años treinta", en *Anuario del IEHS*, N° 1, Tandil, 1986.

Buchrucker, Cristian. *Nacionalismo y peronismo (la Argentina en la crisis ideológica mundial 1927-1955)*, Buenos Aires, Sudamericana, 1987.

Cattaruzza, Alejandro. *Marcelo T. de Alvear. El compromiso y la distancia*, Buenos Aires, FCE, 1997.

Ciria, Alberto. *Partidos y poder en la Argentina moderna*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.

De Privitellio, Luciano. *Agustín Pedro Justo. Las armas en la política*, Buenos Aires, FCE, 1997.

Devoto, Fernando y Ferrari, Marcela. *La construcción de las democracias rioplatenses: proyectos institucionales y prácticas políticas, 1900-1930*, Buenos Aires, Biblos, 1994.

García Heras, Raúl. *Transportes, negocios y política. La Compañía Anglo-Argentina de Tranvías. 1876-1981*, Buenos Aires, Sudamericana, 1994.

Gutiérrez, Leandro y Romero, Luis Alberto. *Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra*, Buenos Aires, Sudamericana, 1995.

Halperin Donghi, Tulio. *Argentina, la democracia de masas*, Buenos Aires, Paidós, 1972.

———. *La Argentina en el callejón*, Buenos Aires, Ariel, 1995.

———. *La larga agonía de la Argentina peronista*, Buenos Aires, Ariel, 1995.

Horowitz, Joel. "Ideologías sindicales y políticas estatales en la Argentina, 1930-1943", en *Desarrollo Económico*, 24, 94, julio-septiembre 1984.

Luna, Félix. *Alvear*, Buenos Aires, 1958.

Macor, Darío. *Imágenes de los años treinta*. Documento de Trabajo N° 3, Universidad Nacional del Litoral. 1995.

Melón Pirro, Julio y Pastoriza, Elisa (eds.). *Los caminos de la democracia. Alternativas y prácticas políticas, 1900-1943*. Buenos Aires, 1993.

Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos. *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires. Siglo XXI. 1970.

Rock, David. *El radicalismo argentino, 1890-1930*. Buenos Aires. Amorrortu, 1977.

Rouquié, Alain. *Poder militar y sociedad política en la Argentina*. Buenos Aires, Emecé, Tomo I, 1981; Tomo 2, 1982.

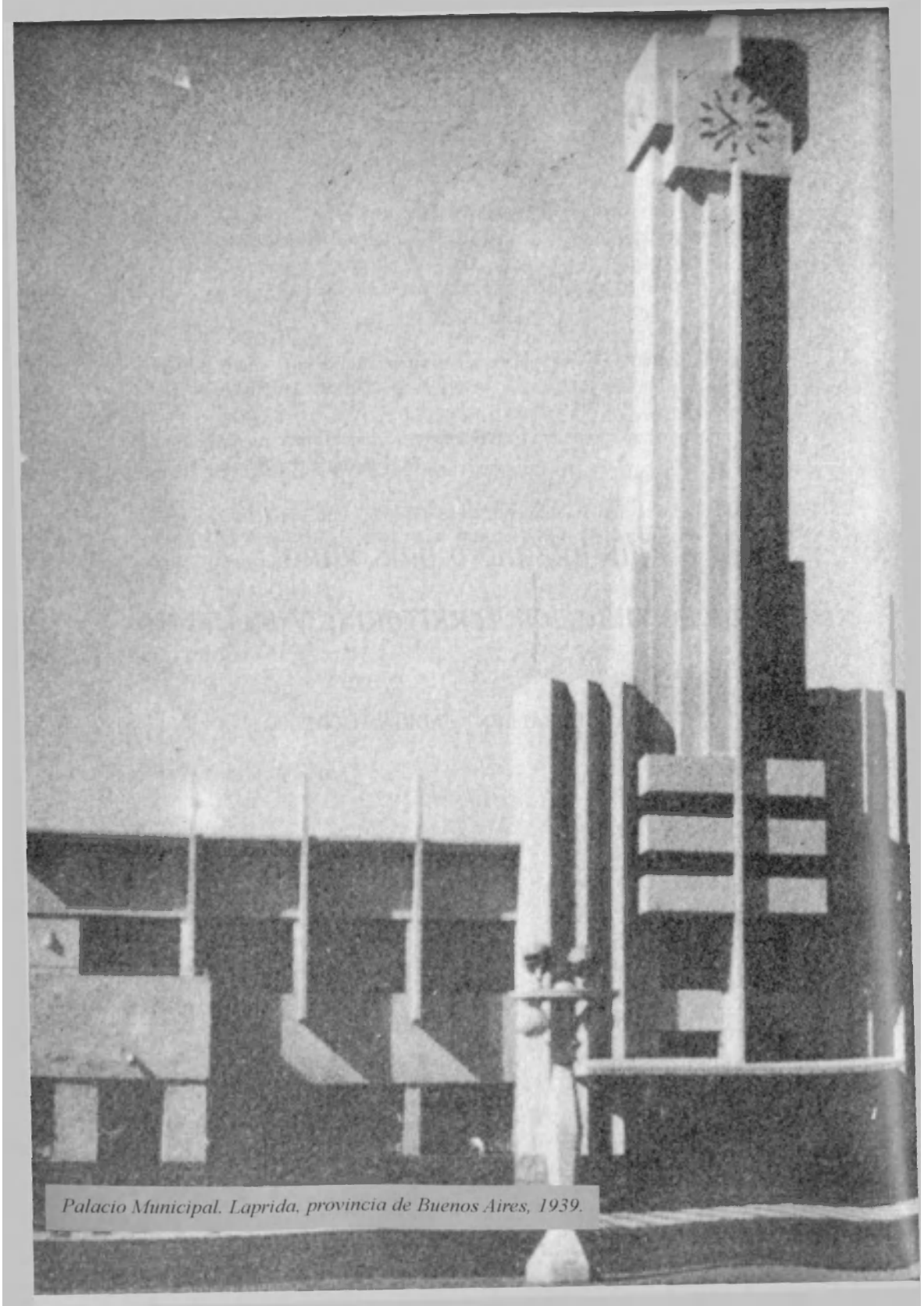
Walter, Richard. *La provincia de Buenos Aires en la política Argentina. 1912-1943*. Buenos Aires, Emecé, 1987.

Zanatta, Loris. *Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo. 1930-1943*. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1996.

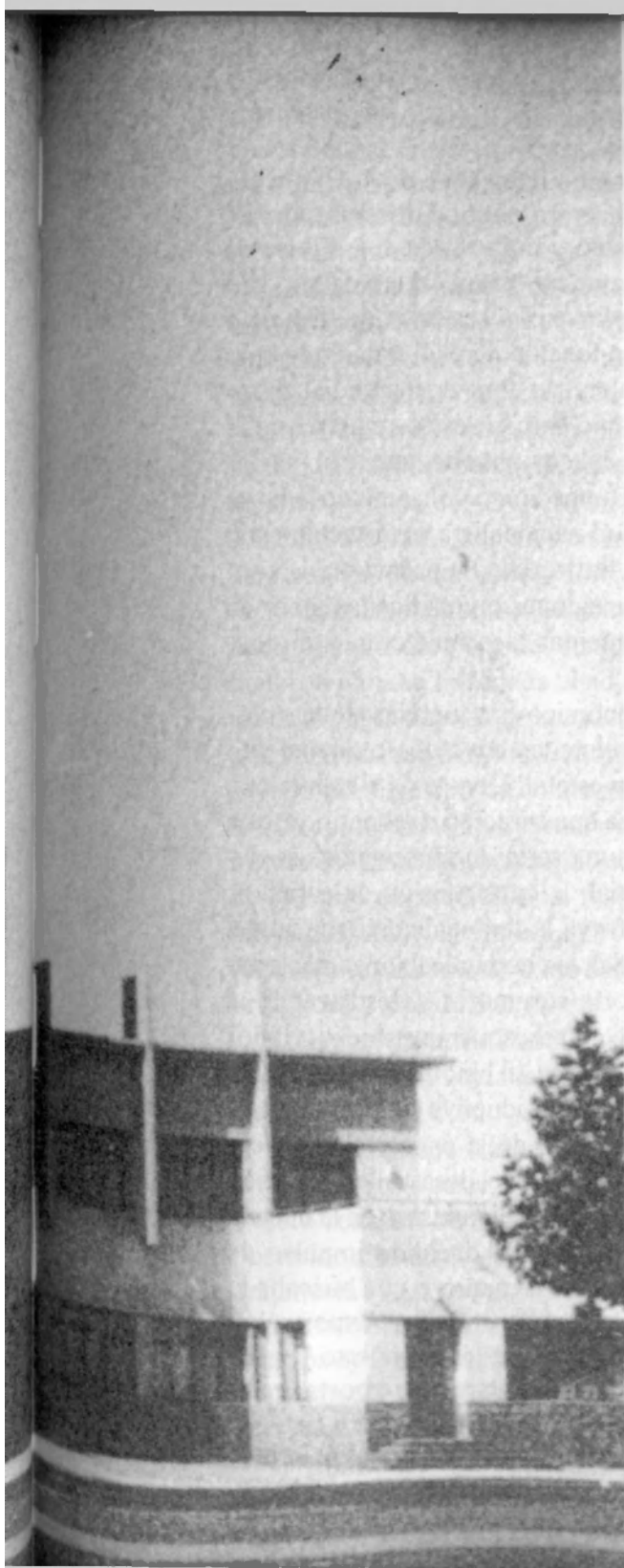
IV

*País urbano o país rural:
La modernización territorial y su crisis*

por ANAHI BALLENT y ADRIÁN GORELIK



Palacio Municipal. Laprida, provincia de Buenos Aires, 1939.



PARADOJAS

La década que comenzó en 1930 registró transformaciones radicales en el territorio nacional, tanto en su organización material como en las representaciones culturales a través de las cuales se lo interpretó, dejando hondas marcas hacia el futuro. Las políticas que surgieron como receta casi universal después del crack de 1929 fueron llevadas adelante en nuestro país por un Estado que contaba ya con una larga tradición de intervención sobre la sociedad. Pero la necesidad de sustituir importaciones generó una nueva actitud pública favorable a la diversificación productiva. De esta forma se terminaba de poner en cuestión el esquema espacial nacional que había caracterizado el ciclo de "crecimiento hacia afuera", con su desproporcionado desarrollo del litoral frente a un interior escasamente vinculado a los circuitos productivos, explotado selectivamente en función de la extracción puntual de productos primarios destinados a la exportación. Durante los cincuenta años de paz que siguieron a la federalización de Buenos Aires, la vieja polémica política acerca de las relaciones entre el puerto y el

interior se había mantenido latente, asordada por el éxito del modelo económico agroexportador; hacia 1930, lo que parecía la quiebra definitiva de ese modelo la reactivó.

Sin embargo, no se trataba, como en los años de la Organización Nacional, de disputas por el centro político del país, sino de una revisión del sentido económico y cultural de sus diferentes regiones. Para Alejandro Bunge, que no era un crítico del modelo agroexportador en sí, debía aceptarse con realismo que su ciclo había terminado para siempre. En función de ello, había que buscar roles para el país adecuados al nuevo concierto mundial, a través de un desarrollo autónomo que para su éxito requería de la puesta en régimen de producción del conjunto del territorio nacional. "Crear mercado", proponía Bunge como consigna de la hora, y eso significaba una nueva actitud nacionalista y proteccionista: la promoción de una integración territorial que permitiera la conquista del mercado nacional con regiones diversificadas, pero en continuo contacto para complementar la producción y el consumo.

Éstas fueron las variables económico-productivas de la cuestión territorial en la década del treinta, en cuyo desenvolvimiento tendría un rol primordial la acción estatal. Dentro de ella, hubo un sector particular de la obra pública que caracterizó el periodo, con la peculiaridad de desencadenar una serie de fenómenos asociados en la transformación territorial: la construcción de caminos. Durante los años treinta se construyó la red caminera troncal del país, que estructuraría por décadas las comunicaciones nacionales, poniendo el eje en el transporte automotor y desplazando al ferrocarril, que estaba relacionado con el esquema agroexportador y su centro imperial, Inglaterra. A su vez, el binomio camino-automóvil era completado por otro factor productivo emblemático de las búsquedas de autonomía económica de la época: el petróleo, insumo cuya importancia crecía también en el desarrollo industrial.

Estos fenómenos irrumpieron con gran dinamismo en la década de 1930, vinculando la acción estatal a un decidido impulso de modernización del interior; un impulso expansivo que buscaba la "urbanización del país". El modelo basado en la agroexportación había podido desarrollarse con Buenos Aires como puerto y puerta a espaldas del país. En cambio, la sustitución de importaciones suponía, de acuerdo con los técnicos e intelectuales que la promovían como política pública, una nueva alianza nacional presidida

por el Estado, con objeto de que el progreso metropolitano se difundiera compartiendo sus beneficios. Se industrializarían las ciudades del interior, se modernizarían las técnicas rurales y los sistemas de posesión de la tierra, se diversificaría la producción y se interconectarían los hábitos regionales. A diferencia del imaginario decimonónico, la Buenos Aires “europea” ya no se impondría sobre una *tabula rasa*, sino que se debía impulsar la generación de un nuevo tablero nacional en el que Buenos Aires se “argentinizara” y el interior del país se renovara, ofreciendo las reservas para la salida económica y cultural a la crisis.

Los años treinta se presentan así como un período de modernización radical del país y de su territorio liderada por el Estado y, en consonancia, como un momento de homogeneización en clave urbana de hábitos sociales en una escala nacional. Sin embargo, este paisaje de modernización y cohesión nacional no se alinea fácilmente con algunas de las imágenes más recurrentes que nos han quedado del período, fundadas en la crisis y el fraude, que hicieron ganar a la década el adjetivo de “infame”, especialmente desde el punto de vista de la crítica a un Estado poco consustanciado con los intereses del país. Se trata de un período fuertemente atravesado por este tipo de contrastes, tanto en el propio proceso histórico como en las interpretaciones que de él hicieron sus contemporáneos. La mera caracterización de sus notas dominantes generó planteos contradictorios: restauración agropecuaria o impulso industrializador; liberalismo doctrinario o novedosa injerencia estatal; conservadurismo o modernización; defensa de los intereses británicos o nacionalismo.

Ezequiel Martínez Estrada, en *Radiografía de la Pampa*, hizo de la paradoja un verdadero motor de su indagación sobre los “males” argentinos, como señaló Liliana Weinberg, para mostrar que el progreso puede traer atraso, el enriquecimiento, miseria, y la civilización, barbarie. Y es indudable la analogía de ese procedimiento retórico de Martínez Estrada con el espectáculo del país posterior a la crisis de 1930: una paradoja notable, por ejemplo, definitoria en los contrastes territoriales del período, es que la elite que se había instalado en el poder para restaurar los buenos viejos tiempos de la sociedad oligárquica y el orden agroexportador sería la encargada de impulsar una notable modernización urbana e industrial.

Esta paradoja bien puede considerarse una clave de lectura para

interpretar las contradicciones y los límites del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, del intervencionismo estatal, de las políticas de alianza con Inglaterra. Y la dimensión territorial tiene la peculiaridad de poner al rojo vivo este carácter paradójico: el mismo gobierno que buscó beneficiar los intereses ingleses fue el que terminó construyendo la red troncal vial que habría de destruir toda viabilidad económica del principal de esos intereses, el ferrocarril. Asimismo, ciertas acciones del gobierno obstaculizaron el desarrollo petrolero estatal, pero al mismo tiempo se lo impulsó como política de Estado, con el efecto señalado de industrialización del país y modernización del interior. En el curso de esa tarea, a su vez, se conformó una ideología nacionalista que tuvo en su centro la imagen tan difundida de relación inequívoca entre YPF, territorio interior, soberanía e interés nacional.

Se trata de aspectos antinómicos que pueden explicar, por su parte, que el interés estatal en la homogeneización territorial no haya tenido un resultado lineal. Cabría, en cambio, hablar de un éxito pírrico, ya que se tradujo en una exasperación de las contradicciones territoriales, que al ponerse en evidencia cristalizaron representaciones inversas, produciendo así una reacción contra el modelo del país urbano que se alimentaba de los mismos motivos que habían alentado su expansión. Es necesario contemplar que las relaciones entre las transformaciones efectivas y sus representaciones son complejas, ya que ambas son dimensiones dinámicas, con lógicas propias que se encontraban en pareja mutación. De hecho, buena parte del carácter paradójico de los conflictos interpretativos sobre la década de 1930 podría hallar su explicación en el hecho de que por entonces se puso en contacto una amplia acción estatal de modernización territorial con una larga tradición cultural que había identificado en el territorio la clave de los males argentinos, como muestra la línea interpretativa que va de Sarmiento a Martínez Estrada. Tal tradición veía en la extensión pampeana la marca material de la imposibilidad de cultura, y con la imagen del "desierto" igualaba naturaleza y pasado: el vacío, la barbarie, la ausencia de toda huella en la que anclar la nueva civilización propia de un país moderno. Para la voluntad constructivista del siglo XIX, esa ausencia pudo parecer auspiciosa, pero a partir de la crisis del '90 comenzó a repararse casi con exclusividad en su cara sombría.

Colocar esas interpretaciones sobre el territorio dentro de una larga tradición cultural impide el reflejo simplista de analizar el clima intelectual de los años treinta como producto exclusivo de la crisis social y política que produjo el golpe militar, al mismo tiempo que exime de discutir si los diagnósticos pesimistas se justificaban. Durante el período tuvo lugar una sobredeterminación en esa tradición cultural, en la que confluyeron capas de diferentes orígenes ideológicos y temporales: diversas “restauraciones” nacionalistas; el organicismo cultural de las interpretaciones sobre la crisis civilizatoria de entreguerras, con su relación mecanicista entre suelo y cultura; el criollismo de las vanguardias estéticas de los años veinte, con su reivindicación metafísica de la pampa como clave del alma argentina. Fue ésa la sintonía en que los visitantes de finales de la década del veinte, Ortega y Gasset, Waldo Frank, Keyserling, fueron interrogados ávidamente como “quirománticos”, según la expresión de Victoria Ocampo, porque se les pedía que interpretasen la Pampa como la palma de la mano de la Argentina. Así, Waldo Frank parece mediar entre Sarmiento y Martínez Estrada: “Sois una nación potencial perdida en la vastedad de vuestra tierra. Vuestra tristeza es eso: estar perdidos”. Nación potencial: “La Pampa: promesas”, titulaba Ortega y Gasset, extrayendo de los horizontes pampeanos la explicación de la ausencia de realización del hombre argentino. Y los principales ensayos de la década del treinta dialogaron una y otra vez con esas intuiciones, desde Scalabrini Ortiz, cuyo *El hombre que está solo y espera* de 1931 puede leerse como un programa de refutación de las conclusiones de Ortega y Gasset, aunque no de su enfoque, hasta Eduardo Mallea, que en *Historia de una pasión argentina* siguió de cerca las observaciones y el tono de Frank.

Pero si estas sobreposiciones tuvieron cierta autonomía de la peculiar coyuntura del treinta, es indudable que ésta les dio una coloración específica, ya que el desarrollo de un discurso público nacionalista realimentó en los círculos intelectuales la reflexión sobre la cultura nacional. El “conocimiento del país”, buscado eufórica o angustiosamente por las producciones culturales del período, muestra así otras facetas. La nueva situación llevó a que no fuera ya suficiente para la construcción de un imaginario nacional la composición de un mosaico de peculiaridades pintorescas; se hacía necesaria la figuración de un espacio nacional, territorial, cultural y económicamente cohesionado. Así, se produje-

ron nuevas determinaciones rápidamente alineadas con la figura economicista de la “sustitución de importaciones”. El propio Ortega y Gasset lo fraseó de modo elocuente apenas iniciado el año treinta, en “Por qué he escrito ‘El hombre a la defensiva’”, al advertir que el argentino enfrentaba “un momento grave de su historia nacional, cuando —después de dos generaciones en que ha vivido de fuera— tiene que volver a vivir de su propia sustancia en todos los órdenes: económico, político, intelectual”. Sustitución de importaciones en la economía, sustitución de importaciones en la cultura; tal fue el estado de ánimo que imperó en los años treinta, y que vinculó la consigna de “crear mercado” con la reivindicación cultural de que “es hora, para los honestos, de empezar a construir aquí, pisando nuestro suelo”, como se dirá en la revista de arquitectura *Tecné* a comienzos de la década de 1940. Se expresaba así un giro hacia el “descubrimiento del interior”, metáfora de la revinculación con una Argentina “profunda” y de la necesidad de arraigo de la cultura elusiva de sus habitantes.

El pasaje de una dimensión a otra y de un extremo al otro de la década estuvo también marcado por la clave paradójica, aunque sus motivos estructurantes suenen similares. El “crear mercado” había apuntado a la radicalización de una modernización territorial, de aliento estatal y carácter urbano, que había llegado a su límite. Por su parte, “el descubrimiento del interior”, hacia el fin de la década, había sumado la preocupación social a la cultural y culminaba en un modelo alternativo de modernización: contra el país urbano, el país rural. La crisis del campo y la explosión urbana de Buenos Aires son dos procesos que hicieron eclosión sobre el final de la década, pero que marcaron retrospectivamente todo el período; por eso, para caracterizarlo, José Luis Romero utilizó una expresión que muestra la mutua vinculación de esos procesos: la “ofensiva del campo sobre la ciudad”. Una “ofensiva del país rural” que fue crítica de la propuesta de construcción de un país urbano forjada a principios de la década, pero de la que al mismo tiempo era su consecuencia directa.

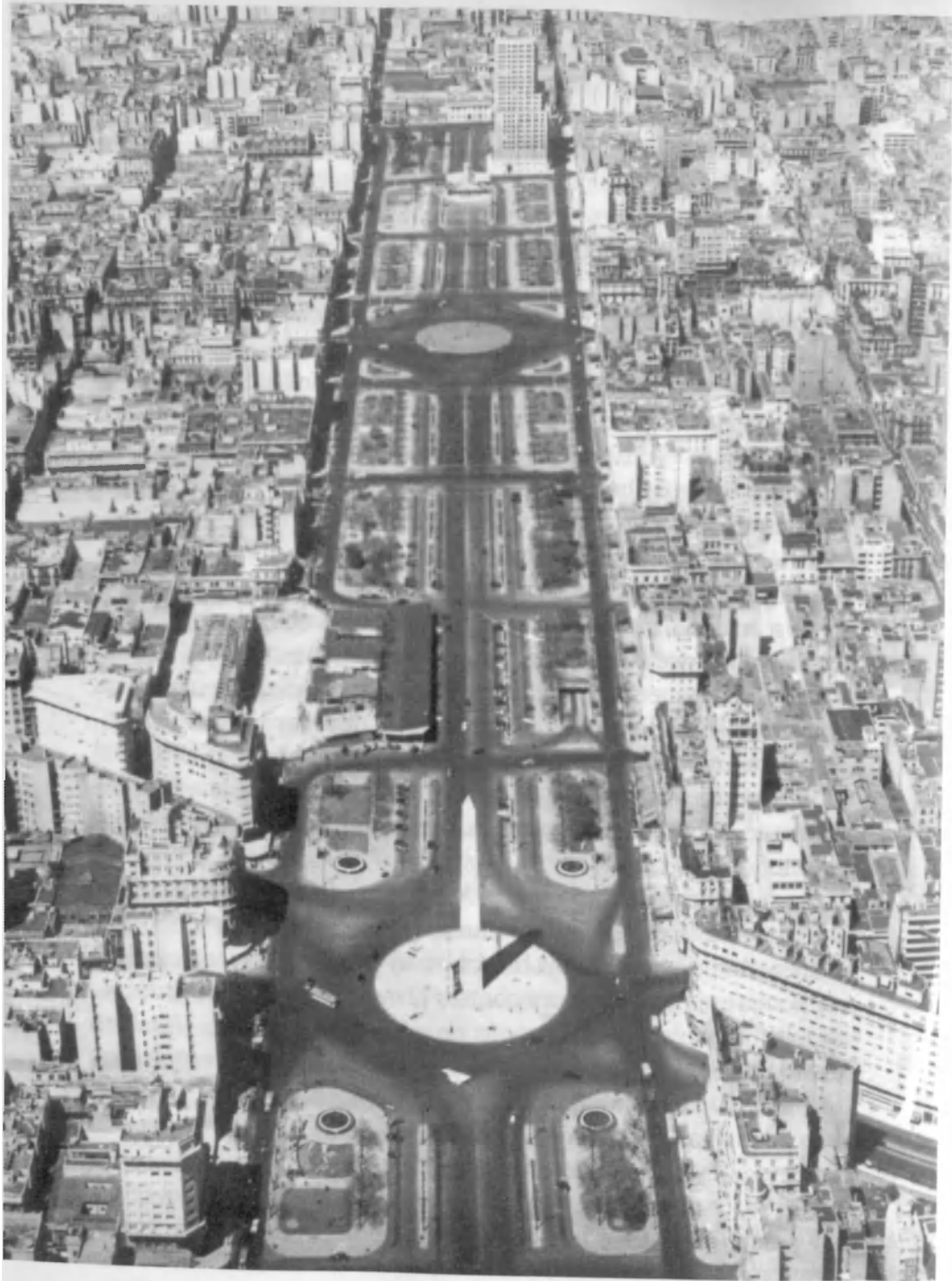
A LA BÚSQUEDA DEL "PAÍS URBANO"

El territorio y las obras públicas

La crisis de 1930 fue leída por los elencos técnicos y políticos con peso en el poder público como un síntoma que revelaba la necesidad de una mayor intervención del Estado en la economía, más allá de que los diagnósticos difirieran sobre su profundidad y duración, y sobre la capacidad del país para superarla. En relación con el territorio, estas cuestiones se tradujeron en un incremento de las obras públicas, consideradas tradicionalmente como el soporte de la producción y de las funciones asignadas al Estado. Se trató, fundamentalmente, de una modernización de la infraestructura de transporte, riego y almacenamiento de la producción, y de las condiciones de la vida rural, que buscaba una mayor eficiencia en la producción agrícola-ganadera.

Sin embargo, la situación del campo no fue el único impulso para la ampliación de la obra pública en los inicios de la década. La sustitución de importaciones obligó a concebir obras vinculadas a la producción industrial y energética, a la vez que la construcción en general, y la obra pública en particular, eran vistas como actividades capaces de controlar la desocupación. Las consignas del momento eran "modernizar el campo" y "urbanizar el país", en otras palabras, construir un territorio cohesionado y homogéneo sobre la base de nueva infraestructura y nuevo equipamiento.

La relevancia cobrada por el Ministerio de Obras Públicas informa sobre la modalidad que fueron adoptando estas preocupaciones. Su principal centro de acción lo constituyó la red caminera, aunque el incremento en obras o proyectos de arquitectura, hidráulica y elevadores de granos no debe ser soslayado. También debe atenderse el parcial ingreso de la obra pública en terrenos que anteriormente no formaban parte de sus competencias, a través de ciertos programas de acción social que en la década siguiente enfatizaría el peronismo. El ministerio había sido creado en 1898, y el período 1932-1940, cuando lo dirigió Manuel R. Alvarado, constituyó una etapa principal de su desarrollo. La inauguración en 1936 de su nueva sede, un "rascacielos" modernista en la aún incipiente avenida 9 de Julio, fue parte de la política de centralización de la actividad de cada uno de los ministerios.



Ministerio de Obras Públicas, ya concluidas las obras de apertura de la avenida 9 de Julio.

Con el edificio se creaba una nueva imagen pública de la institución, vinculada a la modernidad y el progreso, y a la creciente intervención del Estado en la configuración del territorio; era una consecuencia de su actividad a la vez que un símbolo de su programa institucional.

Los gobiernos provinciales, aunque de manera desigual de acuerdo con sus recursos y su orientación política, avanzaron en sentidos similares al planteado por el gobierno nacional, en muchos casos superando sus propuestas. El gobierno del Partido Demócrata Nacional en Mendoza (1932-43), por ejemplo, sobre todo durante la gestión de Guillermo Cano (1935-38), además de desarrollar una amplia protección a la industria vitivinícola, estimuló la producción de cemento, el petróleo y el turismo, y propuso un amplio plan de obras públicas donde se destacaban las áreas de vivienda, salud y educación; en 1940 se llamó a concurso para la concreción de un Plan Regulador para la ciudad de Mendoza. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Manuel A. Fresco (1936-1940) sólo redujo la ambición de sus planes provinciales de obras públicas cuando el gobierno nacional negó autorización para continuar emitiendo los empréstitos provinciales que los financiaban. Una amplia acción de equipamiento para las ciudades provinciales (cementeros, sedes gubernamentales, mataderos, aeródromos) coexistió con proyectos de vivienda urbana (se creó el Instituto de la Vivienda Obrera) y rural (a través del Instituto Colonizador de la provincia, otra de las promociones de su gobierno) y con importantes obras ligadas al turismo.

El reconocimiento del valor de las obras públicas no era exclusivo de los conservadores, sino que se extendía a muchos otros grupos políticos. El bloquismo sanjuanino, durante el gobierno de Federico Cantoni (1932-1934), impulsó la construcción de empresas con fuerte participación estatal (Bodegas del Estado, Azucarera de Cuyo y Marmolería del Estado), a la vez que se mantuvo particularmente activo en áreas como vialidad, irrigación y vivienda rural. Los gobiernos radicales de Córdoba (Amadeo Sabattini y Santiago del Castillo, 1936-43), a través de su eslogan electoral "Agua para el Norte, caminos para el Sur y escuelas para toda la provincia", ponían también en primer plano las obras públicas.

A su vez, ciertas reparticiones estatales desarrollaron notables ampliaciones de su producción a nivel nacional. La Dirección de Ingenieros Militares construyó cuarteles en distintos puntos del

país y obras de particular envergadura en Buenos Aires, cuyo interés trascendía el plano militar para insertarse en una renovación más global de la producción arquitectónica. Fue el caso del barrio de viviendas Sargento Cabral en Campo de Mayo, o del Hospital Militar Central.

En la mayor parte de estos ejemplos se hace presente la explotación de la capacidad simbólica y expresiva de la arquitectura moderna por parte del Estado. Su lenguaje de formas geométricas, techos planos, muros desnudos y blancos, expresaba mucho más que cambios internos a la arquitectura: a través de imágenes, desplegabam un discurso que hablaba de progreso y de una transformación productiva basada en la técnica. Por otra parte, se trataba de un lenguaje fuertemente asociado a lo urbano, cuya incorporación al paisaje del campo o de las pequeñas localidades del interior evocaba también las consecuencias deseables de tal transformación en la dimensión social y cultural; el progreso rescataría de su atraso al habitante del interior. Campo y ciudad dejarían de ser antagonistas, para que el primero se transformara en una suerte de prolongación de la segunda.

Más allá de estos significados básicos que se reiteraban en las propuestas modernizadoras estatales, existieron variantes en cuanto a elecciones formales y a modelos de referencia. Así, la modernidad que proponía la arquitectura de los planes de Fresco era más audaz que el austero racionalismo de los planes mendocinos o el elegante modernismo de las escuelas cordobesas. La especie de expresionismo mal templado que caracterizó buena parte de los edificios construidos en el interior de la provincia de Buenos Aires puede ser juzgado, a primera vista, como mera extravagancia formal, pero en realidad tensa y extrema una búsqueda de expresividad político-cultural de la arquitectura que fue propia de buena parte de la producción estatal de la década. La monumentalidad modernista de las obras promovidas por Fresco se proyectaba como una representación elocuente de modernidad y progreso, directa y carente de ambigüedad. Cargada por un fuerte programa simbólico, esta arquitectura parecía obligada a apelar a todos los recursos para ser visible, construyendo nuevos hitos urbanos o territoriales que señalaran la radical novedad de los programas económicos, sociales o culturales que encarnaban. La extrañeza con respecto a su entorno inmediato, en lo que atañe a forma, colores o dimensiones, era deliberada, porque constituía la imagen de un cambio que

se iniciaba en el presente, a la vez que contenía una promesa de futuro; esta arquitectura se erigía al mismo tiempo como instrumento y símbolo del cambio. La sólida alianza entre arquitectura moderna y Estado fue central para la difusión de las formas y estéticas modernistas en la sociedad. Y ambos fueron los hechos característicos de los años treinta, aunque las rutinas del eclecticismo no abandonaron los tableros de dibujo de las reparticiones estatales de un día para el otro.

Sin embargo, las acciones llevadas a la práctica fueron notablemente inferiores a las carencias que se detectaban. Hubo, por ejemplo, un notable atraso en el desarrollo de la infraestructura de aeropuertos, ya que la construcción de uno para Buenos Aires fue propuesta por el Congreso en 1932, pero los estudios sobre su localización tomaron más de una década, demorando la concreción de la obra, que se inició recién en 1944 en la localidad de Ezeiza. Otro caso fue el de diques y represas hidroeléctricas, que comenzaron a planificarse a fines de la década del treinta (El Cadillal en Tucumán o El Nihuil en Mendoza), pero cuya construcción efectiva fue impulsada recién por el peronismo. Finalmente, la intervención del Estado en la construcción de viviendas masivas, entendida como un conjunto de acciones planificadas, sostenidas en el tiempo y relevantes desde el punto de vista cuantitativo, fue otro tema que se vio postergado en la práctica hasta que el peronismo las encaró.

La modernización, entonces, encontraba sus límites. En ellos es posible reconocer las huellas del conservadurismo político de sus impulsores, sus dudas e incertidumbres frente a los grandes cambios que estaban enfrentando, y su prudente apego a una política fiscal equilibrada. Pero tales límites no afectan el impacto del volumen de lo realmente realizado, y esto se tradujo en el imaginario social bajo la forma de un lugar común de larga duración: los gobiernos conservadores “hacen obra”. Esto significaba que “hacer obra” a través de emprendimientos públicos era sinónimo de “buen gobierno”, en un argumento donde la política era entendida como “progreso” en el “bienestar general”, interpretación alentada por los nuevos roles del Estado en la vida social. “Los conservadores roban, pero hacen obra”: gobiernos que fueron sinónimo de corrupción, fraude electoral o intimidación política, se legitimaban en su capacidad ejecutiva a través de la obra pública. Desde este punto de vista, la obra pública y sus imágenes adquirirían una nueva

dimensión simbólica, ya que parecían tomar partido dentro de la vieja alternativa administración/política. La obra pública permitía a los conservadores presentarse como eficaces administradores empeñados en una tarea amplia y patriótica, que buscaba el bien común, y desvinculada generosa y asépticamente de los intereses partidarios o sectoriales con los cuales identificaban a “la política”.

El territorio como espacio de la producción

La red de caminos

En la mayor parte de las obras públicas es posible, entonces, introducir matices entre los imaginarios y lo realmente producido; pero hay un sector de la obra pública en el cual la década de 1930 marcó un antes y un después: la construcción de caminos. Este hecho empalmó con tendencias internacionales iniciadas en la primera posguerra, aunque la inmensa difusión propagandística a nivel internacional de la obra vial se produjo a partir de 1933, cuando en Estados Unidos se transformó en una de las recetas con que el New Deal combatió la depresión y en Alemania en uno de los emblemas del despegue nacional que prometía el régimen nazi.

El automóvil se imponía como el medio de transporte del siglo XX. En la Argentina, el surgimiento del mercado automotor local y su posterior afianzamiento en la década del veinte constituyeron un efecto de la expansión del comercio norteamericano en América Latina a partir de la Primera Guerra Mundial. Como parte de esa expansión, se radicaron subsidiarias de empresas norteamericanas; Ford Motors instaló una planta de armado de automóviles en el país en 1917 y la General Motors lo hizo en 1925. Como plantea García Heras, el establecimiento de compañías financieras asociadas, a partir de 1928, permitió ofrecer facilidades para la compra de automóviles, ampliando el mercado. El inmenso despliegue publicitario apuntaba a consolidar nuevos patrones de consumo entre las clases medias y altas. Finalmente, la radicación en el país de Good Year (1930) y Firestone (1931) afianzó la preeminencia norteamericana en el rubro. La crisis y el control de importaciones frenaron el crecimiento del mercado automotor hasta la recuperación de mediados de la década; a partir de esos años, la tendencia ascendente fue sostenida.

Como resultado de esa expansión, el transporte automotor comenzó a producir una transformación en las comunicaciones. Ya a mediados de la década del veinte se había intensificado un debate sobre los medios de transporte, dentro del cual ocupaban un lugar central las disputas de los productores rurales con los ferrocarriles británicos por la incidencia de las tarifas de transporte en el costo de la producción. La necesidad de desarrollar nuevos medios de transporte era vista como una urgencia por los sectores que propugnaban una modernización de la infraestructura: Alejandro Bunge y su *Revista de Economía Argentina* venían siendo ejemplos de esa actitud, observada con recelo por las empresas británicas y, por esa razón, sin una acogida entusiasta en ámbitos oficiales.

Los prestigios del transporte automotor combinaban variados argumentos. su modernidad técnica, su novedad empresarial (que contraponía los éxitos de la industria norteamericana frente a la decadencia irremisible de la británica), la ductilidad que le permitía llegar con baja inversión a zonas alejadas, la posibilidad de desarrollo de pequeñas empresas no monopólicas para el transporte de carga, el desarrollo de industrias locales que proveían parcialmente a las automotrices. Con esos argumentos, en Buenos Aires toda la oposición progresista, y buena parte de la opinión pública, se pronunciaban en contra del monopolio británico del sistema de tranvías y subterráneos, y a favor de la revolución del transporte urbano que había significado el surgimiento del *colectivo*.

Así se generalizó desde los años veinte la oposición entre el ferrocarril y los transportes de motor de explosión en todo el país. Como resultado, el camino aparecía enfrentado a todo aquello que, en la economía y el territorio argentinos, representaba el trazado ferroviario, sinónimo de los males del país, especialmente de la crisis de la producción rural y del crecimiento desacompañado de las diferentes regiones argentinas. Por ello, la construcción de caminos era entendida como una demorada reafirmación de la nacionalidad oprimida por la “tela de araña” que habían tendido los intereses británicos sobre el mapa nacional. Tal interpretación estaba difundida en un amplísimo espectro político, que reunía desde la izquierda hasta los sectores nacionalistas, y que presentaba al camino como un símbolo de la voluntad de desarrollo económico nacional. Curiosamente, la acción gubernamental de la década



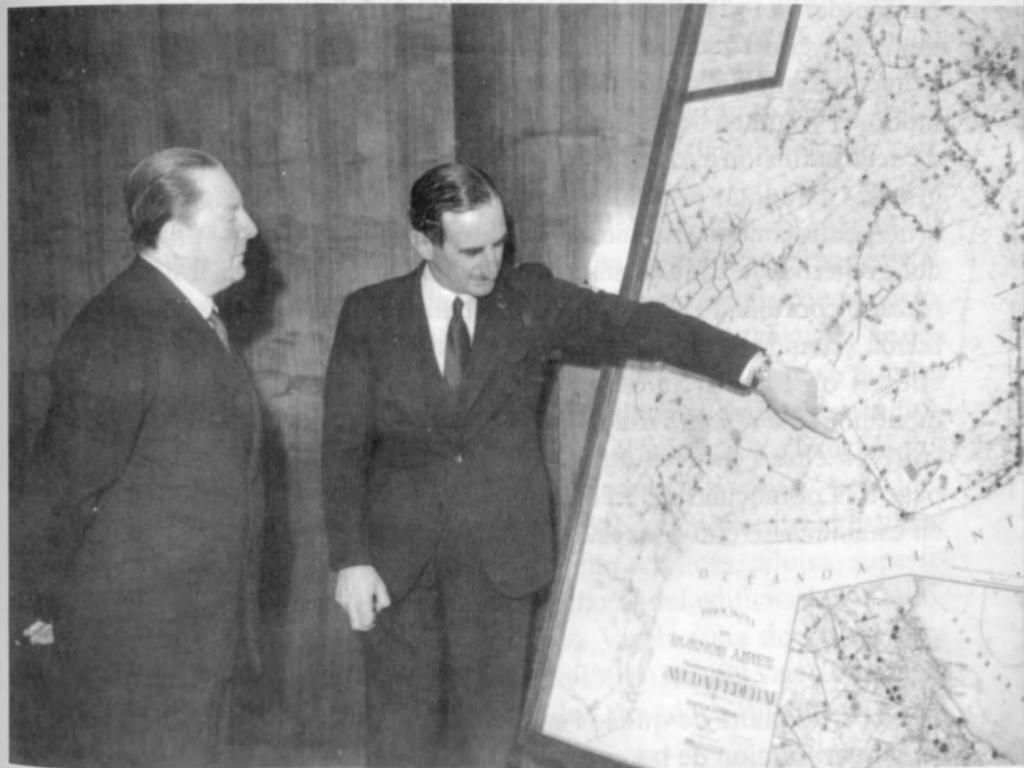
Puente en Río Tercero, 1936.

del treinta fue la que materializó aquellos núcleos ideológicos de los que serían sus opositores.

En efecto, la construcción de carreteras tuvo por entonces un desarrollo que no se igualaría por décadas. El principal impulso a la vialidad tuvo lugar en los inicios de la presidencia de Justo a través de la ley 11.658/32, que creó un nuevo fondo nacional de vialidad destinado al estudio, trazado y construcción de caminos y obras anexas, obtenido por un impuesto sobre la nafta y los lubricantes. En el mismo año se había creado, dentro del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Vialidad de la Nación, sobre la base de dos reparticiones existentes. La ley 11.658 daría a este ente administrador de fondos, proyectista y ejecutor de obras, una mayor autonomía, ascendiéndola a Dirección Nacional. Entre 1932 y 1939, durante la gestión del ingeniero Justiniano Allende Posse, integrante del círculo más estrecho vinculado al presidente Justo, Vialidad construyó la parte principal de la red caminera que estructuraría por décadas las comunicaciones nacio-

nales. En 1932, el país disponía sólo de alrededor de 2.000 km de caminos de tránsito carretero permanente; para 1944 la red nacional se había ampliado a casi 60.000 km, con más de 30.000 km de caminos de tránsito permanente y más de 3.000 km en construcción, a los que se sumaban aproximadamente 8.000 km de caminos provinciales.

El plan integral delineado por la Ley de Vialidad preveía la unión de las capitales y los centros de producción, y el acceso a los países limítrofes, a los puertos y estaciones ferroviarias. El trazado de la red nacional o troncal constituyó una preocupación inmediata: Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario y Santa Fe en el litoral, Córdoba en el centro del territorio, Salta y Resistencia en el norte, fueron los centros camineros del sistema. Las características específicas de la región patagónica aconsejaron la construcción de dos rutas paralelas de dirección norte-sur, vinculadas por rutas trans-



El ingeniero José M. Bustillo, ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, muestra a Héctor P. Blomberg, periodista de Caras y Caretas, la obra caminera realizada entre 1936 y 1939.

versales. En cuanto a la comunicación con países limítrofes desde Buenos Aires, en la ruta 9 (Panamericana) hacia Bolivia se registraron los progresos más rápidos, a la vez que se avanzaba de manera algo más lenta hacia Chile, Paraguay y Brasil. Para 1940, los objetivos iniciales del plan se consideraban cumplidos. Privilegiando la integración nacional, los trabajos iniciales se desarrollaron en el interior del país, aunque ya a mediados de la década se emprendió el plan de acceso inmediato a las grandes ciudades, que comenzó con el trazado de la avenida de circunvalación General Paz en Buenos Aires, en 1936. Era éste un proyecto experimental cuyos principios pensaban trasladarse más tarde a Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.

Las empresas británicas, ante la evidencia de que no podían impedir el desarrollo vial, buscaron al menos que complementara su propio trazado, proponiendo a las estaciones principales de ferrocarril como cabeceras de subsistemas viales locales. Sin embargo, vieron todas sus aspiraciones derrotadas, ya que la red caminera se construyó en franca competencia, organizando una red troncal paralela a las principales vías férreas nacionales. De tal modo, el volumen de cargas por ferrocarril descendió hasta el borde de la extinción a lo largo de la década. Y aquí aparece una de las grandes paradojas presentes en el trazado vial, ya que la oposición brutal entre ambos sistemas alejó el reclamo opositor y la política del gobierno de toda posibilidad de planificación racional de un trazado coordinado nacional que capitalizara la infraestructura instalada (cuando se dispuso la "Coordinación de Transportes" fue apenas un intento fallido por prolongar el control británico monopolístico). Y, sobre todo, duplicó en asfalto el problema ya existente en el riel: la configuración radial sobre Buenos Aires que, pese a la potencial flexibilidad del camino y el motor, no tardaría en estabilizarse con consecuencias de larga duración.

El petróleo

La certidumbre de que los caminos eran un factor fundamental de modernización de las comunicaciones, de desarrollo económico y de cohesión nacional se fortalecía también por sus vinculaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una empresa estatal central en las aspiraciones a la autonomía económica. La empresa

había sido creada durante el primer mandato de Yrigoyen y estuvo comprometida con la campaña por la nacionalización del petróleo, uno de los conflictos agudos del segundo mandato, al punto de que en la literatura de la época el golpe del 6 de setiembre fue bautizado como “golpe petrolero”. De hecho, notorios representantes de la Standard Oil, la competencia norteamericana, formaron parte del gabinete de Uriburu y esa empresa consolidó su poder en Salta. Sin embargo, YPF experimentó un notable desarrollo a lo largo de la década abierta en 1930.

En 1931, la tarea de extensión de la empresa había encontrado un hito importante en el contrato firmado con la provincia de Mendoza, que le permitió monopolizar toda la producción petrolera de la región; en 1932 se aprobó la primera Ley Nacional de Petróleo y en 1934 se limitaron las concesiones privadas y se convirtió todo el país en reserva fiscal. La participación de YPF en el mercado de combustibles, en expansión por el inicio de la red caminera, aumentó progresivamente entre 1931 y 1934. En este último año, la empresa se lanzó a propagandizar su tarea con un fuerte contenido ideológico, a la vez que ampliaba los cuerpos técnicos dedicados a la proyección y ejecución de obras —Jorge De la María Prins, responsable de la mejor producción arquitectónica de la empresa, ingresó por entonces a la Oficina de Ingeniería—.

Entre las obras emprendidas se contó el barrio obrero para la destilería de La Plata y la gran campaña de construcción de estaciones de servicio, lanzada en 1936. En las estaciones de servicio, el estilo moderno era utilizado como imagen establecida en los modelos proyectados en serie desde la dirección central, que los concesionarios debían respetar y reproducir. Las estaciones funcionaban como una suerte de comandos de vanguardia tecnológica, sinónimos de progreso y modernización. La vocación didáctica de la arquitectura elegida era evidente: un modernismo estilizado, con claros motivos icónicos (formas náuticas, pilotes, superficies lisas y blancas). Contenido similar al del edificio de los laboratorios de la empresa en Florencio Varela (una de las mejores obras del período), la Destilería San Lorenzo, y el vasto complejo industrial, residencial y recreativo de Comodoro Rivadavia, todos iniciados en 1937.

Al mismo tiempo, el petróleo se convertía también en un combustible fundamental para las industrias, de modo que todas las derivaciones de la industria petrolera parecían desembocar natu-

Y. P. F. abre caminos.



Duran - Irua - Madecjones
(Salta)

*Publicidad de YPF, en el Boletín de
Informaciones Petroleras, 1934.*

ralmente en la presentación de YPF como una empresa modernizadora y pujante, pionera en el descubrimiento y la atención de lejanas zonas del país a las que hacía llegar el progreso. “YPF hace caminos, YPF hace patria”, fue una de las características leyendas publicitarias que comenzó a usar la empresa en los años treinta, acompañada por fotografías que mostraban una brecha abierta en la selva norteña, un automóvil atravesando veloz un nuevo camino recién desbrozado o la inauguración de una modernísima estación de servicio en un pequeño poblado provinciano, en

el que debía producir un efecto de modelo técnico y estético.

Esta imagen se apoyaba también en la relación de la empresa con otras prácticas muy novedosas y llamativas, de exitosa expansión social, como el deporte y el turismo. YPF impulsó a nivel nacional el automovilismo, en su modalidad de Turismo Carretera, que funcionó durante las décadas del treinta y el cuarenta como vertebrador social y cultural de muchos pueblos del interior, introduciendo pautas modernizadoras y de integración regional. El automovilismo realimentó también el desarrollo de una miriada de pequeños talleres de autopartes, bases sobre las cuales se expandiría en las décadas siguientes la industria automotriz local. A su vez, YPF desarrollaba acciones que contribuyeron con la extensión a las clases medias del turismo, que dejaba de ser una práctica de elite, convirtiéndose en el mecanismo privilegiado del “conocimiento de lo propio” inseparable de la constitución de un ima-

ginario nacional. YPF realizó un verdadero amojonamiento de las rutas del país: sólo en el plan que realizó juntamente con el Automóvil Club Argentino, entre 1938 y 1943, construyó 180 estaciones de servicio con sedes sociales en las principales ciudades, campings, servicios recreativos y técnicos.

Modernización, nuevas técnicas, nuevas prácticas sociales, industrialización, desarrollo del territorio. Todas esas valencias se anudaban de manera inequívoca en la imagen que construía YPF. Pero también, y muy especialmente, soberanía e interés nacional, consolidando un imaginario nacionalista y favorable a la autonomía económica del país. En efecto, las implicancias telúricas del petróleo como recurso natural propio, radicado en las profundidades de lejanos rincones de la nación, sumadas a su creciente incidencia en la producción industrial y a las pujas interimperialistas por su control, se prestaban adecuadamente para campañas nacionalistas que intentaban imponer los productos de la empresa como quintaesencia de lo argentino.

“La índole de la industria del petróleo, la íntima relación que tienen la explotación, desarrollo e industrialización del mismo con la defensa nacional y la economía del país, y la lucha universal que se ha entablado por apoderarse de los campos petrolíferos han dado a esta rama de la industria un carácter eminentemente nacionalista”, escribía el presidente de YPF, Ricardo Silveyra, en enero de 1934,



...y cuando YPF dice...

Es una verdad incontrovertible la argentinidad de YPF. En este sentido, podemos decir que es una amplia expresión de lo argentino, porque es obra, exclusivamente, de este pueblo. Con sus vaciamentos en el país, YPF explora, explota y elabora con personal propio, que es argentino; transporta su producción en su flota, que es la más importante entre las que están al servicio de una empresa industrial argentina, y distribuye sus productos con elementos propios. ¿No es ello una expresión sintética de argentinidad?

De ella deriva esa "calidad argentina" de los lubricantes YPF, señor automovilista, con los cuales, se lo aseguramos, su coche será mejor.

Consulte en garages y estaciones de servicio la tabla de lubricación del Motoromóvil YPF. Le indicará el Motoromóvil que su coche necesita.

Los lubricantes MOTOROMÓVIL YPF en sus legítimos envases de color azul y blanco, de un litro, cuatro y 18 1/2 litros. Y cuide siempre que la luz sea roja en su preselección.

11 PUNTOS DE SUPERIORIDAD
Si Ud. desea conocer el significado técnico de cada uno de estos puntos y la influencia del mismo sobre la calidad del aceite, le invitamos a que consulte en detalle a los representantes de YPF en las pólizas de telefonía o escriba a YPF División Lubricantes.



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES - PANDE 400000 922 - 33.6031 - Bº AIRES

LUBRICANTES YPF

100% ARGENTINOS

Y cuando YPF dice que es exclusivamente argentino, dice la verdad.

Aviso de YPF en Sur, n° 24, setiembre de 1936.

planteando una paradoja similar a la de la construcción de la red vial, sobre todo si se piensa en el modo en que ha quedado estigmatizada la acción estatal de la década. Es que el “crear mercado” tenía también implicancias ideológicas y culturales, más aún si se atiende a la composición de un grupo de colaboradores íntimos del presidente Justo. Todos ellos pertenecían, como él mismo, a una corporación profesional con una matriz ideológica muy particular, la ingeniería, que desde finales del siglo XIX venía levantando las banderas de un “nacionalismo técnico” de fuerte arraigo en las oficinas públicas, donde se formaron los nuevos cuerpos técnicos del Estado nacional. Las principales políticas de los gobiernos conservadores, entonces, coincidieron casi puntualmente en una suerte de “nacionalismo objetivo” con los principales lineamientos que, por ejemplo, proponían los hermanos Irazusta en *La Argentina y el imperialismo británico*, un libro fundador del revisionismo que apareció en el mismo año de 1934, o con propuestas posteriores de Scalabrini Ortiz. Se trataba en todos los casos de promover una industrialización parcial para aumentar el mercado interno y el desarrollo de la producción nacional de petróleo, de la infraestructura vial y del transporte automotor.

El territorio como espacio del ocio

El turismo

Desde los años veinte, el turismo dentro del país había sido impulsado como recreación masiva por periódicos modernizadores de los hábitos sociales como *Crítica*, que destinaba correspondientes en las zonas pintorescas del país. Se otorgaba al turismo una función “civilizadora” de doble vía, vinculada al conocimiento del país: “desprovincializar” a los habitantes del interior, para borrar los rastros de “odioso regionalismo”, y “argentinar” a los porteños, que “conocen en sus mínimos detalles el París elegante” pero “ignoran paladinamente cómo se vive en el interior de su propia tierra”. Esos movimientos se creían indispensables para la constitución de una “nacionalidad moral”, como sostenía *Crítica* en setiembre de 1922. La expansión del turismo tenía dos vertientes: el arraigo a los sitios argentinos del turismo de elite, invirtiendo el hábito prestigioso del viaje a Europa, y la incorporación de los

sectores medios y populares al nuevo turismo masivo.

Las primeras ampliaciones en ambos sentidos habían comenzado durante los años de la Primera Guerra Mundial, pero el progreso más notable ocurrió en la década del veinte, con la consolidación de las clases medias aunada a la difusión del automóvil y a ciertas políticas sectoriales, como la de la comuna de Mar del Plata controlada por el Partido Socialista, tal cual demuestra Elisa Pastoriza. El principal desarrollo se experimentó en esa ciudad y en las sierras de Córdoba: tanto la elite como las clases medias preferían, frente a la sublimidad de ciertos escenarios naturales, la

suavidad y benignidad de los paisajes pintorescos, aquellos espacios naturales colonizables por el hombre de manera relativamente sencilla y que aludían a la naturaleza como sereno y confortable marco de la vida social. Más aún, el veraneo de la elite tuvo siempre una marcada predilección por aspectos mundanos y de interacción social. La ruleta era un elemento imprescindible para atraerla; clubes, cines, posibilidades de prácticas deportivas diversas, confort, eran factores necesarios para satisfacer gustos sofisticados y formas de sociabilidad complejas, que serían también adoptadas por los sectores medios.

Ese doble proceso de ampliación registró un salto cualitativo en los años treinta. En el caso del turismo de elite, el viaje a Europa se vería nuevamente postergado, en principio por la crisis y el control de cambios, más tarde por el clima bélico. En el caso del turismo masivo, transformaciones legislativas como el sábado inglés



Tapa de El Hogar, N° 1465, 12-11-1937.

de 1932 o las vacaciones pagas, que se sancionaron por primera vez para el sindicato de comercio en 1934, favorecieron la generalización del hábito entre la clase media, alentando un proceso que luego extendería el peronismo a los sectores obreros. Ciertas instituciones, como la Asociación Cristiana de Jóvenes, la Casa de la Empleada y el Club Argentino de Mujeres, disponían de casas de veraneo para sus asociados en Sierra de la Ventana, Cosquín y Mar del Plata, comenzando a trascender así las posibilidades de acceso individual al veraneo y esbozando las bases de lo que sería más tarde el turismo sindical. En el mismo sentido, pero dentro de la acción estatal, a fines de la década la ley 12.669 disponía la construcción de hosterías y hoteles de turismo en San Luis, La Rioja y Catamarca. El incremento del turismo en esos años puede medirse a través del caso de Mar del Plata, donde las cifras de turistas pasaron de 65.000 en 1930 a 380.000 en 1940, registrando así casi el 500% de aumento.

El cambio fundamental que se produjo en los años treinta radi-



*La comitiva de Alejandro Bustillo en las obras de Playa Grande,
Mar del Plata, agosto de 1937.*

có en la actividad estatal, en la cual la expansión de la red caminera jugó un rol central. La pavimentación de la ruta 2 a Mar del Plata, inaugurada en 1938, fue un hito en el proceso de ampliación del turismo, del mismo modo que el nuevo equipamiento urbano promovido por el gobierno provincial, como el balneario de Playa Grande de 1935 y la nueva rambla con el Casino y Hotel Provincial iniciados en 1938, todas obras de Alejandro Bustillo. Mar del Plata se publicitaba entonces como “la ciudad de todos”, en el aparente convencimiento de que el avance de los sectores medios podía no ser contradictorio con la permanencia de la elite, que se mantendría fiel al carácter mundano de la ciudad si su equipamiento era modernizado e incrementado. Mar del Plata, entonces, constituía la expresión más clara del doble sentido en que era pensada la ampliación del turismo, y de la forma en que era usado lo que se consideraba su también doble base material, rutas y equipamiento. Allende Posse, director de Vialidad, expresaba sintéticamente en un artículo de la revista *El Hogar* el doble carácter de tal base material: “El turismo —decía— necesita caminos... y cocineros.”

En la presentación que hacía de su primer número extraordinario dedicado al turismo, en noviembre de 1933, *El hogar* parecía continuar las expresiones del diario *Crítica* de la década anterior: “Fomentar el turismo es hacer obra patriótica [...] (El viaje a Europa debe dejar de constituir) el objetivo de los ricos y el ideal de los pobres que aspiran a un mejor estado de fortuna para alcanzarlo”. Sin embargo, la diferencia sustancial entre los textos de las dos publicaciones es que el autor de este último era Manuel R. Alvarado, ministro de Obras Públicas: era el Estado quien ahora lideraba un proceso que había sido reclamado anteriormente por sectores progresistas o modernizadores de la sociedad.

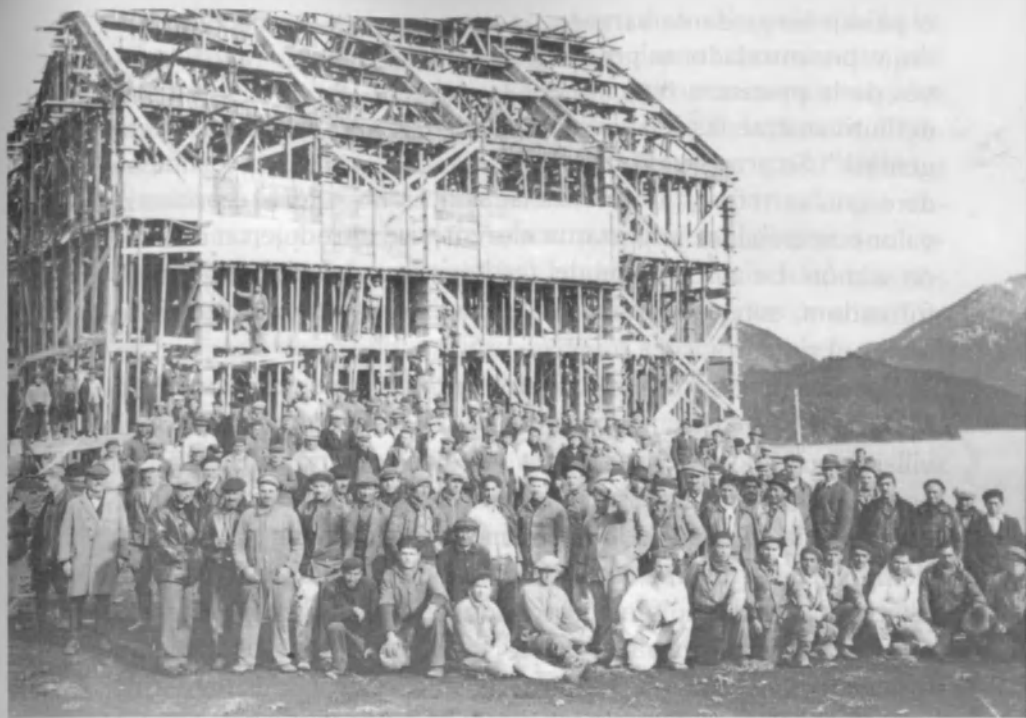
Los parques nacionales

“Conocer la patria es un deber”: el lema que se imponía en otra de las creaciones estatales destinadas a la promoción del turismo, la Dirección General de Parques Nacionales, dirigida por Exequiel Bustillo, mostraba a su vez la sintonía con los eslóganes que difundía entonces YPF. “Crear mercado”, “Defender la producción nacional”, “Conocer el país”: la coincidencia de eslóganes es sin-

tomática y muestra una concatenación de ideas que vinculan distintos campos de acción sobre el territorio nacional. La Dirección General de Parques Nacionales creada por ley 12.103 de 1934, se encontraba en el ámbito del Ministerio de Agricultura, aunque gozando de una amplia autonomía; administraba parques o reservas nacionales, definidos como “porciones del territorio de la Nación, que por su extraordinaria belleza o en razón de algún interés científico determinado, fueran dignas de ser conservadas para uso y goce de la población de la República”. La misma ley creaba los parques nacionales de Nahuel Huapi e Iguazú, y por decreto 105.433/37 se crearon las reservas nacionales Perito Moreno, Los Glaciares, Lanín, Los Alerces y Copahue para la constitución de nuevos parques en el futuro.

La característica central del programa, tal como fue delineado por Bustillo, no respondió tanto al concepto conservacionista de reservas naturales (típico en los Estados Unidos) como al intento de construcción de grandes enclaves modernizadores, relacionando el turismo con la pavimentación, el transporte, la hotelería, pero también con la transformación del hábitat rural y con nuevos emprendimientos económicos. La llegada del camino, el hotel y el turista comenzaban a ser vistos como avanzadas de nacionalización en las fronteras más alejadas, como puesta en práctica de la soberanía territorial, objetivos coincidentes con los de Gendarmería Nacional, creada en 1938. Los parques nacionales quedarían marcados por ese origen vinculado al anhelo de consolidar zonas de frontera, y buena parte de los emprendimientos modernizadores de los años treinta tendrían ese carácter estratégico. En verdad, se trataba de otra vertiente del “nacionalismo objetivo” aplicado a la transformación territorial, en alimentación mutua con los temas económicos o de la identidad cultural.

Tanto la zona del Nahuel Huapi como la del Iguazú tenían una historia como símbolos de soberanía nacional que se remontaba a comienzos de siglo; ya se les había asignado un específico valor geopolítico que presidiría toda la actividad de su ocupación. Pero recién en la década del treinta tuvo lugar una acción decidida por parte del Estado, basada en el objetivo de integrar la industria del ocio y el turismo en la tarea de puesta en régimen y explotación del territorio nacional. En tal sentido, el impulso brindado al Nahuel Huapi superó notablemente los esfuerzos destinados al Iguazú, ya que se juzgaba que el potencial económico del Sur era mayor que



Grupo de obreros que participa en la construcción del hotel Llao-Llao, agosto de 1936.

el de la selva tropical, y que permitiría competir con el turismo desarrollado en Europa.

El impulso en el Nahuel Huapi comenzó en 1934, cuando se completó la línea de ferrocarril que lo unía con la capital. Poco después, la Dirección Nacional de Vialidad construyó unos 300 kilómetros de pavimento dentro del parque y la navegación en el lago quedó garantizada por la construcción del buque Modesta Victoria. La arquitectura, encargada por Exequiel Bustillo a su hermano Alejandro, jugó un papel destacado en la transformación del área: desechando las imágenes que había desarrollado en Mar del Plata, tanto el modernismo de Playa Grande como el clasicismo del hotel y casino, Bustillo proyectó el hotel Llao-Llao en una arquitectura pintoresquista de piedra y madera. Asimismo, realizó una serie de obras menores en el Parque, redactó las normas generales de urbanización y fijó los estilos para Bariloche, a los que se ajustó el centro cívico proyectado por Ernesto De Estrada, inaugurado entre 1936 y 1940. Tal arquitectura pretendía armonizar con

el paisaje circundante a través del uso abundante de madera y piedra y, por otro lado, se proponía civilizar su carácter agreste a través de la presencia humana condensada en obras, configurando definitivamente las imágenes adecuadas a la anhelada "Suiza argentina". Se promovieron instalaciones deportivas, especialmente de esquí, se reforestaron áreas, se adaptaron nuevas especies de valor comercial, se importaron ciervos y se introdujeron colonias de salmón. La apropiación del territorio era esencialmente transformadora, aunque se planteaba en vinculación con valores inherentes al sitio.

La vasta operación territorial incluía también el fraccionamiento de ciertos sectores para su venta y la posterior organización de villas de turismo; muchos lotes habían sido adquiridos previamente por Exequiel Bustillo, en una operación francamente especulativa. Los 1.550 turistas de 1934 se incrementaban a 4.000 en 1940, siempre dentro del universo del turismo de elite. Bustillo consideraba que sólo la explotación económica de las prácticas de elite podía construir, consolidar e imponer los nuevos espacios librados al turismo; otros efectos de carácter social vendrían más tarde, por añadidura, y en los meses estivales, lejos de los costosos equipamientos del esquí. Así, su propuesta se diferenciaba netamente de la que realizó Fresco para Mar del Plata, que apostaba a la ampliación del turismo masivo. Sin embargo, no eran vistas como políticas contradictorias, sino como dos caras, la nacionalista y la cosmopolita, que convivían en el eslogan de "crear mercado".

El weekend

La modalidad del *weekend*, estrechamente ligada a la difusión del automóvil, propuso nuevas facetas de un tipo de habitar desarrollado desde fines del siglo XIX: la casa suburbana o rural de uso ocasional o semipermanente. El automóvil facilitaba el abandono de la ciudad por lapsos cortos, permitiendo gozar a la vez de los beneficios de la ciudad y de la tranquilidad del campo. El automóvil produjo una ampliación de esta tendencia, y al mismo tiempo señaló una ruptura dentro de ella, favoreciendo un avance de los espacios del *weekend* sobre el campo, modernizando el territorio de una manera más amplia que la operada anteriormente por el ferrocarril.

Como ofertas para el *weekend*, a la tradicional opción de la vivienda individual se sumaron nuevas propuestas de vivienda agrupada, como los primeros country-clubs que comenzaron a surgir en la época: el Tortugas en 1930 y el Hindú a fines de la década. Organizados a partir de instalaciones deportivas (en particular deportes terrestres, polo y golf), vinculaban vivienda y deporte de una manera nueva, sobre la base de referencias norteamericanas que comenzaban a extenderse en algunas ciudades de Latinoamérica. Los country-clubs de la década del treinta eran iniciativas de elite; formaban parte de una diversificación de los espacios del ocio selecta y exclusiva, pero indicaban claramente el peso cada vez mayor que las prácticas deportivas ganaban en el conjunto de la sociedad.

La ampliación a los sectores acomodados de las clases medias de la práctica del *weekend* fuera de la ciudad se vinculaba con el proceso de modernización de los modos y espacios del habitar doméstico. Fue aquél un momento de intensa transformación de las tipologías de vivienda, en el que cambió la disposición de los ambientes; se abandonó la tradicional “casa chorizo” para adoptar la moderna casa de “planta compacta”. También se incrementó la tecnificación del hogar, especialmente el equipamiento electrodoméstico y sanitario, mientras aparecían nuevas estéticas caracterizadas por la simplicidad y la ausencia de ornamento. En 1933 comenzaba a publicarse la revista *Casas y Jardines*, representante de estas nuevas tendencias y dedicada sobre todo a la vivienda suburbana, de *weekend* o de veraneo. La nueva publicación ilustró el gusto del momento a través de sus protagonistas privilegiados, la casa racionalista y el chalé californiano, variantes modernista y rústica de un nuevo afán modernizador de los espacios del habitar. Por primera vez un emprendimiento editorial podría sostenerse en el tiempo centrándose en la arquitectura y la decoración dirigidas a un público no especializado; el hecho es indicativo del interés que despertaba la transformación de la vivienda dentro de un mercado relativamente amplio y en expansión.

La modernización en la ciudad: Buenos Aires como epicentro del “país urbano”

La vivienda urbana asumía a su vez particulares formas de transformación, que la convirtieron rápidamente en el símbolo elocuente

de los nuevos tiempos: la casa de renta o departamentos desarrollada en altura se imponía como parte de una modernización general de la ciudad. Fue éste un proceso reconocible en los distritos centrales de Rosario, Córdoba y Mendoza, ejemplos de gran despliegue constructivo en edificios de altura. Pero, como en otros aspectos de la modernización, Buenos Aires lo emblematicó de modo más completo. En esa ciudad, durante los años treinta se construyó la masa de edificios de renta que todavía hoy caracteriza áreas completas de su zona central. Su construcción comprometió una importante ola de inversiones privadas que se mantuvo incluso durante los años de la crisis, ya que el alquiler de departamentos se consideraba una renta segura. Estos edificios generalizaron en la ciudad un perfil modernista de rascacielos blancos y en ese rubro se obtuvo en 1935 uno de los “récores” en que se apoyaba el orgullo porteño: el Kavanagh, el rascacielos “más alto de Latinoamérica”. Se trataba de una transformación radical de los hábitos domésticos basada en la modernización tecnológica del habitar.



El edificio Kavanagh frente a la Plaza San Martín, 1936.

El edificio de departamentos de renta fue producto de una ecuación, directamente relacionada con el cálculo económico del cual es el producto más directo, que vincula el sobrio modernismo de las fachadas con la compactación de las plantas de los departamentos, la consiguiente reducción de la superficie de las habitaciones, la racionalización y simplificación de los diseños y la incorporación de nuevos dispositivos y artefactos de confort, respondiendo acabadamente a lo que en los años treinta se denominaba una "concepción de vida moderna". Además de las nuevas formas, los nuevos artefactos y los nuevos equipamientos, ella implicó la exasperación del carácter de mercancía de la vivienda, ya que el negocio estaba implícito desde la construcción, y se expresaba en la propia forma de las unidades y en los equipamientos colectivos que proponían una disgregación individualista de las funciones tradicionalmente agrupadas en el "hogar". En general, se la concebía como vivienda transitoria, porque se compartía con otra o porque sus habitantes eran familias en formación, en franco contraste con el anhelo de permanencia emblemático por la vivienda individual autoconstruida típica de las décadas anteriores. De tal modo, la casa de renta también encarnó unas relaciones hombre-habitar más plenamente modernas, tema percibido y celebrado por los medios que formaban opinión entre las clases medias y altas urbanas.

Si esta renovación privada fue posible y tuvo tal impacto fue porque formó parte de una modernización urbana emprendida por el Estado, con inversiones cuya intensidad y coherencia sólo resisten la comparación con la obra del intendente Torcuato de Alvear en los años ochenta del siglo XIX. De tal modo, en 1936 Buenos Aires podía celebrar el cuarto centenario de su primera fundación en el apogeo de una modernización que definió su perfil urbano, social y cultural por varias décadas. El intendente Mariano de Vedia y Mitre (1932-1938) buscó constituir ese acontecimiento en un punto de llegada de la vida de Buenos Aires marcado por su obra y coronado por las transformaciones decisivas que se estaban produciendo de modo vertiginoso. Durante su gestión se ensancharon las avenidas transversales desde Callao hasta el río, se finalizaron las diagonales norte y sur, se inició la avenida 9 de Julio, se finalizó la avenida Costanera, se completó la red de subterráneos, se rectificó el Riachuelo y se reemplazaron todos sus puentes tradicionales con estructuras modernas, se entubó el arroyo Maldona-



Obras para la apertura de la avenida 9 de Julio, 1937.

do, se trazó la avenida General Paz, se consolidó y completó la estructura de calles con infraestructura de servicios. Aunque algunas de esas obras correspondían en los hechos a otras reparticiones nacionales como el Ministerio de Obras Públicas o Vialidad Nacional, se integraban en un proceso liderado por el municipio que venía a completar la modernización urbana.

Que el proceso pudiera ser leído como la culminación de un impulso anterior no es un dato menor de la performance de De Vedia y Mitre, ya que eso implicaba que había logrado colocar su obra en la estela del *proyecto* para Buenos Aires del intendente Alvear, iniciado cincuenta años antes. Gracias a la intensidad de la obra pública y a sus logros publicitarios, De Vedia y Mitre consiguió restituir en Buenos Aires el imaginario dinámico de las ciudades modernas, recuperando el sentido de espectáculo urbano que había caracterizado a Alvear. A lo largo de 1936 se demolió y abrió la avenida Corrientes desde Callao a Pellegrini, y al otro año desde allí hasta Alem; cada dos meses se realizaban las inauguracio-



Construcción del Obelisco, 1936.

nes parciales con gran sentido ritual. En un tiempo similar se demolieron las cinco manzanas completas que fueron el comienzo de la avenida 9 de Julio. Para celebrar el cuarto centenario se levantó en 60 días la obra cumbre, desde el punto de vista simbólico, de toda la operación, el Obelisco, diseñado por Alberto Prebisch en la Plaza de la República, intersección de tres avenidas en construcción y de dos líneas de subterráneos que también estaban en obra.

De tal modo, se produjo una concentración de transformaciones modernizadoras que parecían convertir a la Buenos Aires de los años treinta en el lugar de realización del sueño modernista. Las fotografías de la época muestran una ciudad desventrada, trabajando día y noche en marcha febril de progreso. Roberto Arlt, que en sus ficciones había ya figurado una Buenos Aires radicalmente modernista, fue su cronista entusiasmado, mostrando la atracción que ejerce una ciudad que ha decidido acelerar el porvenir. “El Intendente [...] parece regocijadamente dispuesto a tirar abajo la ciudad”, escribía Arlt en su columna del diario *El Mundo*, nada habituada al elogio de la clase política.

LA OFENSIVA DEL “PAÍS RURAL”

Los dos países

Esta imagen de la Buenos Aires moderna constituía el centro que daba sentido a las representaciones públicas del “país urbano”, producidas en el curso de la modernización territorial. Así proponía entenderlo el poeta y cronista norteamericano Archibald Mac Leish, miembro de la comitiva del presidente Roosevelt en su visita de 1936, quien ofrece una vivaz descripción del país que podía verse desde “la Diagonal Norte de Buenos Aires, con un primer término lleno de Buicks de turismo tapizados de cuero y convertidos en taxis [y] un segundo de ventanas de lujosos edificios para oficinas [...]”. De acuerdo con esa imagen de la capital, se llegaba a la conclusión de que la Argentina era una nación moderna y cosmopolita, conclusión que Mac Leish enfatizaba en la escritura con el ritmo sincopado de las visiones urbanas de la literatura modernista. Pero, en cuanto se avanza en el texto, se advierte que esa exaltación de los aspectos modernizadores tiene en su

discurso una función estrictamente retórica, ya que su objetivo es volver más tajante la contraposición entre ese país urbano e industrial que se ve desde Buenos Aires y el país que se ve desde la pampa, “enorme en su despoblación y su silencio”.

La descripción del territorio asumía así un carácter polarizador. Y si en el análisis de las políticas públicas se advierte la existencia de un programa explícito de modernización territorial, esta descripción de los “dos países” manifiesta elocuentemente su fracaso. En el mismo momento en que se producía el apogeo de las políticas estatales modernizadoras para el conjunto del país, la visión de Mac Leish las enfrenta a la realidad: el contraste entre la ciudad-puerto y el interior, lejos de reducirse, parecía haberse ensanchado.

Para el cronista norteamericano se trataba una constatación pragmática, encaminada a persuadir a la Argentina de que debía abandonar sus aspiraciones industrialistas y aceptar su verdadero destino de país rural. De todos modos, la imagen que proponía se enlazaba con una larga saga de valoraciones polarizadas que la modernización territorial había buscado clausurar: el contraste entre la ciudad y el campo, o entre el mundo urbano del litoral y el mundo rural del interior reconoce una historia muy densa en la Argentina, que en los años treinta encontró su formalización en la figura de “los dos países”.

Desde aquella otra crisis que en 1890 había puesto el optimismo modernizador de la Argentina decimonónica en duda, ese contraste venía asumiendo un carácter antiurbano. Contra el apotegma sarmientino de la civilización y la barbarie, se identificaba al campo con los valores profundos de la argentinidad y a la ciudad-puerto con el cosmopolitismo disolvente, organizando una serie de asociaciones de larga vida en la cultura argentina: interior sano versus metrópoli enferma; interior espiritual versus metrópoli materialista. A partir del Centenario, el nacionalismo político y cultural no cesó de hacer hincapié en esta polarización como centro de los males argentinos, y a lo largo de la década del treinta esa imagen irá empalmando crecientemente con otro motivo: la oposición entre el país real y el país falso. Ésa es la perspectiva de Eduardo Mallea en *Historia de una pasión argentina* (1937), vertebrada en torno a la oposición entre la Argentina invisible y la visible. Ligazón moral-territorial que sería estabilizada por el revisionismo nacionalista, poniendo a Buenos Aires del lado de la

“administración nacional opulenta”, falsa, superficial. epicentro de la política de bambalinas, sostenida por los intereses extranjeros, causa y consecuencia de la decadencia del país verdadero.

En los años treinta, los “dos países” dieron encarnación territorial a la oposición real/falso, profundo/superficial, invisible/visible; pero, al mismo tiempo, el nuevo ciclo de la metropolización de Buenos Aires comenzaría a plantear complicaciones en las lecturas simplistas de esas polaridades. Porque en el Centenario, la opinión que indicaba que la nueva barbarie había llegado de los

Mac Leish: los dos países

“Si se acepta la primera imagen de la Argentina [...] se llega a una conclusión. Buenos Aires es una gran ciudad. [...] Es una gran ciudad en el sentido en que París y Nueva York son grandes ciudades. Es una ciudad cosmopolita, una metrópoli siglo veinte en todos sus detalles —muchedumbres, avenidas, parques, trenes subterráneos, pianistas en jira, confusión de lenguas, chirriar de frenos, brillo de cinematógrafos, rebuzno de aparatos de radio, baile de tobillos, seducción de pestañas ennegrecidas que se reflejan en espejos de Cadillacs tapizados de color crema, impudicias de senos de pasta en las vidrieras de las tiendas de ropa interior, cadencias de jazz-band a las dos de la mañana, a oscuras, en terrazas de casas de departamento. Es una ciudad boyante, llena de Bancos de mármol, de ascensores con puertas de bronce, de anuncios de neón que deletrean apellidos de millonarios internacionales, hermosas fábricas que producen alpargatas, frazadas baratas, hilados de rayón, carnes congeladas, vendas, cigarrillos, jabón, muebles, objetos de cristal, cerveza. Es una ciudad de primera clase, hecha de piezas standard, funcionalmente intercambiable, que podría trasladarse del valle del Plata al del Po o al del Rin, o al del Sena, o al del Hudson [...]. Siendo así la ciudad de Buenos Aires, no es de extrañar que quienes ven a la Argentina con Buenos Aires en primer término lleguen a la conclusión de que la Argentina es, o está a punto de ser, una nación moderna, cosmopolita y altamente industrializada semejante a todas las demás naciones modernas e industrializadas de Occidente. [...] Cuando se está en una ciudad tan internacional y tan interurbana es perfectamente lógico suponer que se está en un país del mismo género. O al menos que se está en un país que hace todo lo posible por llegar a ser un país de ese género. Puede irse más allá. Observando no sólo el capitalismo cosmopolita, el capitalismo mundial de Buenos Aires, sino su agitación

barcos resultaba tranquilizadora y parecía sostenerse en la evidencia, pero en la década del treinta, cuando tal interpretación se adoptó como lugar común, quienes estaban protagonizando el nuevo proceso de expansión de la Babel urbana, reproduciendo su sentido disolvente, eran los migrantes de ese interior “puro”, reivindicado ahora como sitio de la “auténtica” civilización. En efecto, el nuevo impulso de crecimiento de la Buenos Aires metropolitana comenzaba a basarse ahora en las migraciones internas, y si se le podía achacar a la ciudad el vaciamiento del interior, ¿cómo la

y su afán, sus nuevos edificios, su proletariado bien calzado, sus altos números índices en la industria, su aire de prosperidad en un mundo en que sorprende la prosperidad, se puede llegar a creer que se está en la única nación industrial del mundo que ha eludido las corrientes enfermedades industriales: en la única nación industrial del mundo capaz de repetir en el mundo posterior al año 30 la historia triunfal de los Estados Unidos en el mundo que se terminó en 1929.

”[...] Si se acepta la segunda imagen de la Argentina —y la mayoría de los argentinos del interior juntamente con una importante proporción de políticos argentinos y con no pocos intelectuales argentinos la adoptan— se llega a una conclusión completamente distinta. La Argentina de la pampa, la Argentina de las enormes llanuras, la Argentina que se abre a la mañana más allá de las colinas como se abre el mar detrás de los cabos, cuando el avión desciende de Salta a Tucumán, la Argentina sin ciudades, con pocas carreteras, con cercas rectas y distanciadas que parecen meridianos de un mapa, tiene tan poco que ver con el cosmopolitismo, con la industrialización, como cualquier país del mundo. Esa Argentina es un país de doce millones y medio de habitantes, una cuarta parte de los cuales está concentrada en la ciudad de Buenos Aires y el resto se halla desparramado en un área como la del Este del Misisipi en los Estados Unidos. Es un país donde las distancias entre casa y casa son demasiado grandes para que se oiga el ladrido de los perros ni siquiera en las noches más silenciosas [...] [un país] con un Buenos Aires muy pequeño y muy lejano al término de un ferrocarril de vía ancha donde las estaciones aparecen cada veinte minutos como si el país hubiera sido dispuesto no por la geografía sino por un relojero...”

Mac Leish. Archibald. “La Argentina del Rio de la Plata, la Argentina de la pampa” (1938), en *Los irresponsables*, Losada, Buenos Aires, 1942.

afectaba la nueva población que provenía de él? ¿Cómo integrarla en la visión polar de los dos países, cómo pensar su futuro, qué hacer con la ciudad, cómo cambiarla? Dentro de su aparente neutralidad descriptiva, Mac Leish proponía un problema que en esos años comenzaba a entrar en su fase más aguda: si la Argentina debía ser un país rural, ¿qué significaba esa ciudad enorme y cosmopolita en su extremo, que expoliaba al campo y lo vaciaba? ¿Cómo incorporarla a una discusión sobre el futuro del país? O, como plantearía en 1940 Martínez Estrada en *La cabeza de Goliat*: “Si demoliéramos ladrillo a ladrillo la ciudad de Buenos Aires, como se desmonta un mecanismo pieza a pieza; si cerráramos los puertos e hiciéramos retroceder los ferrocarriles hacia estaciones mediterráneas; [...] ¿cuál sería la suerte ulterior de la República?”

La cabeza de Goliat

Tal el problema de un país con su “cabeza decapitada”, una cabeza que hacia 1940 comenzaba a sobrepasar los tres millones de habitantes, casi el 30% de la población total del país, el 50% de la totalidad de los habitantes de todas sus ciudades, y casi el 100% de la totalidad de su población rural. Por lo menos desde la primera posguerra, el tamaño de Buenos Aires era un problema recurrente en la reflexión cultural y política. Lo muestra el libro de Juan Álvarez, *Buenos Aires*, de 1918, inicio de una serie argumental que en los años treinta se expandiría, que identificaba el mal en la ubicación del gobierno nacional, lejos del interior y sometido al lujo metropolitano y a la influencia de los poderosos; en los ferrocarriles ingleses, que favorecieron un desarrollo industrial artificial en una ciudad alejada de todas las riquezas naturales del país; en las políticas portuarias.

En *Una nueva Argentina* (1940), Alejandro Bunge graficó con la figura de “país abanico” una estructuración nacional en arcos de circunferencia con centro en Buenos Aires, mostrando que “la densidad de la población, la capacidad económica, el nivel cultural y el nivel de vida van disminuyendo a medida que aumenta la distancia de la Capital”; ésta, por añadidura, miraba “hacia ultramar y con la espalda al interior”. El primer arco de circunferencia del abanico era una zona formada por un radio de 580 kilómetros desde la Capital que abarcaba casi toda la provincia de Buenos Aires,

la de Entre Ríos, el sur y el centro de la de Santa Fe, el sudeste de la de Córdoba y el norte de la de La Pampa. Esta zona constituía el 20% del territorio del país pero allí se concentraba el 67% de la población, el 86% de la superficie cultivada con cereales y lino, el 63% de los animales vacunos del país, el 54% de la extensión de las líneas ferroviarias, el 71% de los aparatos telefónicos, el 79% de los automóviles en circulación y el 78% de los capitales invertidos en las industrias extractivas y manufactureras. Pero, incluso dentro de esa zona privilegiada, la metrópoli porteña, considerando la mancha urbana que ya excedía los límites estrictos de la Capital Federal, llegaba a índices completamente desproporcionados en relación con los otros distritos. El valor de los productos elaborados equivalía en la metrópoli al 60% del total del país, contra el 14% del resto de la provincia de Buenos Aires, el 9% de la de Santa Fe y el 4% de la de Córdoba; los capitales invertidos en la industria ascendían a más del 52% en la metrópoli, contra el 12% en el resto de la provincia de Buenos Aires, el 9% en la de Santa Fe y el 4% en la de Córdoba. El resto de los indicadores apuntaba en el mismo sentido, de modo que la capacidad económica total, considerando la de la metrópoli como una base 100, equivalía en el resto de la provincia de Buenos Aires a un 58%, en la provincia de Santa Fe a un 30% y en la de Córdoba a un 23%.

A su vez, en la segunda mitad de la década de 1930 comenzaba a hacerse evidente que existía una fuerte partición interna en el proceso expansivo de la propia metrópoli: la cabeza de Goliat distaba de mostrar una modernización homogénea. Detrás de la intensa política urbana que se llevó adelante dentro del distrito federal anidaba un conflicto que reproduciría dentro de la metrópoli el conflicto más general entre la ciudad "europea" y el interior provinciano. El texto de Mac Leish trabajaba sobre el contraste más radical que se percibía si se miraba el país desde la Diagonal Norte porteña o desde el interior rural despoblado, pero ¿qué habría ocurrido si se lo hubiese mirado desde algunos de los distritos industriales del Gran Buenos Aires que estaban sufriendo una transformación acelerada al compás de la conurbación? ¿Qué país se habría descubierto?

No es fácil encontrar testimonios de esos años de finales de la década del treinta y comienzos de la del cuarenta que revelen el modo en que la nueva migración estaba formando la metrópoli en sus estribaciones regionales. Tal ausencia de testimonios contribuiría a explicar que, en 1945, la movilización del 17 de octubre a

Plaza de Mayo pueda haberse experimentado “desde la ciudad” como una absoluta sorpresa, como la aparición abrupta de lo radicalmente diferente: hombres y mujeres que llegaban a la ciudad desde sus “afueras”. Sin embargo, las cifras censales indican que el proceso de migración interna se desenvolvía de modo continuo desde mediados de la década del treinta, aumentando el peso relativo de los provincianos en la población de Buenos Aires desde un 16% en 1936 al 37% diez años después. Podrían darse varias explicaciones para la falta de percepción del fenómeno; una de ellas es que el impulso modernizador dentro de los límites de la Capital generó un imaginario urbano que asimiló automáticamente el crecimiento metropolitano sin reparar en sus novedades. Asimismo, gracias al desarrollo industrial, los recién llegados se incorporaron desde los márgenes de la ciudad y la sociedad, pero a una economía en expansión que necesitaba de ellos, lo que permitió, en un primer momento, acentuar el carácter móvil e integrativo de ese proceso. Y se podría ensayar una explicación más específicamente urbana: Buenos Aires no había cesado de expandirse en los sesenta años anteriores, y siempre incorporó con retardo a la imagen y la cultura de la ciudad los procesos que excedían sus núcleos tradicionales de sentido. Así había ocurrido en las dos primeras décadas del siglo con el primer cinturón de barrios populares, que recién serían incorporados a la imagen “oficial” y a la cultura de la ciudad en la década del veinte, y así estaba ocurriendo a finales de los años treinta con los nuevos cordones urbanos que sobrepasaban ahora los límites de la Capital.

Pero en este nuevo proceso de suburbanización, a raíz del sentido que registraba la modernización de la ciudad, ya no podría tener lugar una nueva integración, o al menos no plenamente, sin grandes contrastes y contradicciones. Es que la modernización urbana de este período, que quiso presentarse como el proceso que venía a completar un proyecto de larga data, en realidad significó la inversión del sentido histórico que había tenido la expansión urbana en todo su ciclo moderno, planteando un novedoso repliegue de la ciudad capital sobre sí misma que desconoció el proceso de formación de los radios metropolitanos. La modernización de Buenos Aires en los años treinta tuvo en su base una operación de exclusión, que eliminó los afanes reformistas que hasta entonces habían caracterizado la gestión pública y los debates culturales y técnicos sobre ella.

Ya en los años veinte, como resultado de la integración de los nuevos barrios populares dentro de la Capital, desde el propio poder se venía planteando la necesidad de una nueva ampliación jurisdiccional que contemplara urbana, social y políticamente los procesos de expansión territorial y que lograra mayor eficacia en la gestión pública. La observación de que ningún problema estructural del conglomerado metropolitano reconocía límites jurisdiccionales y, por lo tanto, la necesidad de definir institucionalmente el “Gran Buenos Aires”, ya aparece en el *Proyecto orgánico de urbanización del municipio*, el plan urbano encargado por el intendente Noel en 1925. La expresión “Gran Buenos Aires” buscaba aplicar una tendencia urbanística internacional, que en las grandes metrópolis ya venía designando la coordinación política y administrativa regional para gestionar el conjunto urbano excedidos sus tradicionales límites. A mediados de la década del treinta, en el campo técnico argentino esa necesidad se había convertido en una verdad indiscutible: una gestión global que garantizara la expansión al conurbano de los logros obtenidos en la ciudad capital,



Construcción de la Avenida General Paz, 1939.

en términos de infraestructura, servicios, calidad ambiental y del espacio público.

Por el contrario, en esos mismos años, la modernización optó por la dirección opuesta: el trazado definitivo de los bordes de la Capital se convirtió en la resolución de facto de aquel intenso debate. Ese trazado ratificó una forma definitiva para la ciudad, circunscribiendo el área de acción municipal y permitiendo densificar todo el territorio de la Capital; aquellas otras reformas atentas a la dimensión regional fueron excluidas. Por eso se puede caracterizar el proceso de renovación de la década como una “modernización conservadora”. Más que completar un *proyecto* de Alvear, como lo presentaba De Vedia y Mitre, ella representó la inversión de todo el ciclo de expansión reformista. Así, cuando finalmente se institucionalizó el “Gran Buenos Aires” en 1948, fue de modo contrapuesto a la teoría urbana que había inspirado tal denominación, simplemente integrando los diecinueve partidos conurbanizados de la provincia de Buenos Aires, separados del núcleo que les daba sentido urbano y ambiental. La avenida General Paz fue, desde entonces y hasta la actualidad, la metáfora del límite “europeo” de la ciudad capital, el borde vergonzante detrás del cual ocultar sus contrastes y sus imposibilidades.

Las razones del campo

Si no estaba claro el rol de una ciudad como Buenos Aires en un “país rural”, era fundamentalmente porque ya casi no quedaban en la Argentina de los años treinta quienes creyeran que el perfil económico y social nacional podía tener en su centro al campo. Como ha demostrado Tulio Halperin, ya con anterioridad a la crisis de 1930 eran fuertes las voces que planteaban que las soluciones de largo plazo necesarias para el país difícilmente pudieran fundarse haciendo centro exclusivamente en la agroexportación, cuyos problemas y limitaciones estructurales no hacían sino agravarse.

Confirmando tal diagnóstico, los procesos de desequilibrio poblacional entre el campo y la ciudad venían produciéndose sin pausa a lo largo de todo el siglo: en 1895, el 58% de la población del país era rural; en 1914, el 42%; en 1930, el 32% y en 1938 sólo el 26% seguía viviendo en el campo. Hasta antes de 1930, este fenómeno podía explicarse de modo casi optimista apelando a las condicio-

nes privilegiadas de la explotación rural en la Argentina, pero a partir de entonces comenzó a tener un significado exclusivamente negativo: la demostración de que el núcleo de sentido de la pujante Argentina agroexportadora se vaciaba definitivamente. La paradoja implícita en el diagnóstico de Mac Leish era expresada de modo directo por Bunge en el título de uno de los capítulos de su libro: "La agrícola Argentina, país de población urbana".

Sin embargo, aquel núcleo de sentido se renovarían en otras representaciones, siempre paradójicas. Por una parte, ese crecimiento de la población urbana puede verse, como lo haría José Luis Romero, como fruto de la "ofensiva" del campo sobre las ciudades que se verifica desde mediados de la década. Por otra parte, era notoria la presencia creciente que el tema rural y, sobre todo, las figuraciones rurales comenzaban a tener en los debates sobre el país y en la producción de imaginarios sociales, justamente en el momento en que muy pocos confiaban en que el futuro de la Argentina pudiese estar ligado a la producción rural. Presencia curiosa, ya que debe asociarse tanto a los éxitos de una política oficial conservadora que había vuelto a poner en el centro de la escena a los sectores agroexportadores más tradicionales, como a sus opositores, que provenían de los sectores del campo desplazados por los límites de la política de modernización territorial antes que de la industria urbana. La presencia del tema rural en la cultura de finales de los treinta podría verse como resultado tanto del éxito como del fracaso de las políticas públicas y de los sectores involucrados en la modernización conservadora.

En 1936, Miguel Ángel Cárcano, ministro de Agricultura, se hacía vocero de esa paradoja durante una intervención en la Cámara de Diputados, en términos que demuestran la perplejidad con que se asistía a sus consecuencias sociales y culturales: "Pueblo agrario por imposición del medio, su vida, con respecto al régimen del suelo, es un mosaico de ensayos, tentativas, éxitos y experiencias. Vivimos encadenados al campo. Sus problemas dominaron nuestro crecimiento. [...] para hacer próspera la Nación y definir nuestra cultura, debemos encarar nuevamente el gran problema de la vinculación del hombre con la tierra. [...] Debemos arraigar al agricultor a la tierra que trabaja. Razones económicas, políticas y sociales lo aconsejan".

La política de la diversificación económica y la industrialización dirigida parecía generar efectos contrarios a la búsqueda mo-

modernización del interior. Para quienes ubicaban el desarrollo rural en el centro de la problemática nacional, el esquema modernizador suponía la diversificación productiva y regional, y el equilibrio consiguiente entre las diferentes zonas del país: “crear mercado” era revitalizar todo el territorio como un aparato de producción y consumo integrado y eficiente. Pero en la segunda mitad de la década de 1930 comenzaba a hacerse evidente la relación entre las políticas de modernización estatales y el vaciamiento del campo. La complementariedad de la industrialización sustitutiva con los intereses más poderosos del campo llevó a una política de proteccionismo arancelario y concentración económica que se traducía en mayores sangrías de población del interior hacia las únicas áreas que expandían el mercado laboral, las industrias urbanas. Fue en ese marco que las carreteras, y todos sus correlatos de la política de modernización territorial, se convirtieron apenas en motores y conductos para esa sangría; también los caminos terminaron siendo “despobladores”, término con que se había denunciado el rol del ferrocarril.

El propio gobierno, hacia finales de la década, registraba esos resultados con alarma, aunque para repararlos insistió en idénticas políticas. Así, en 1938, el presidente Ortiz, ratificando los objetivos de modernización del interior, podía decir en el Senado al asumir su cargo:

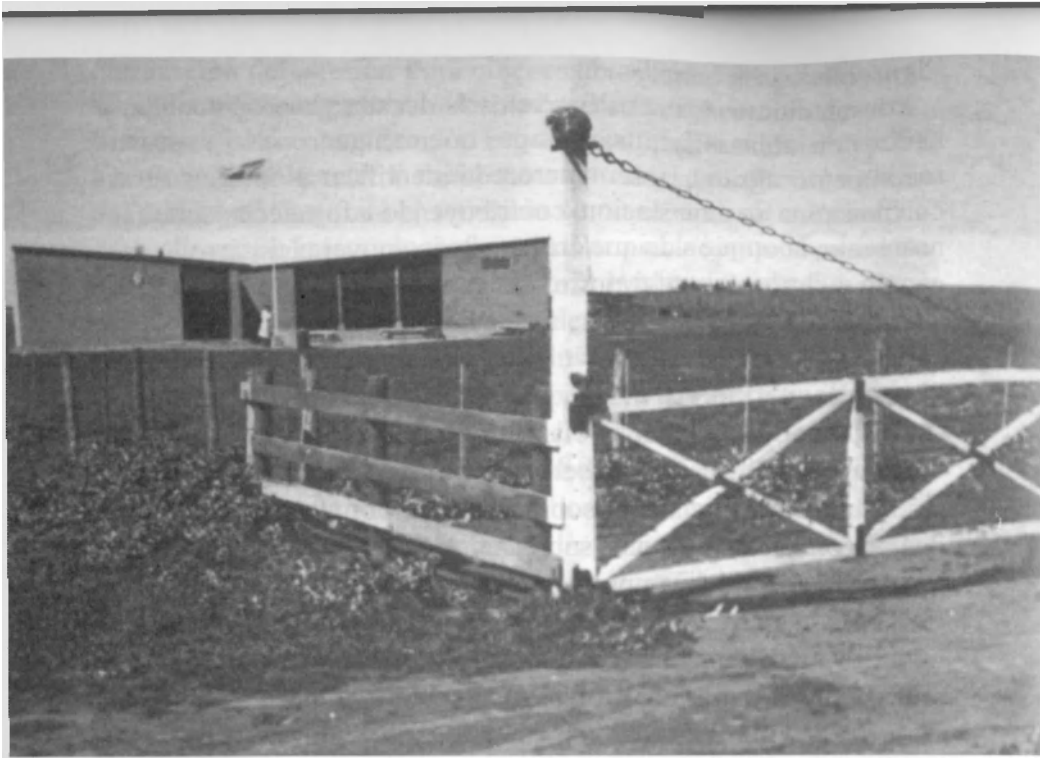
“Poco significa, para ese futuro tan soñado, que ciertas partes de la periferia argentina posean ciudades importantes, puertos activísimos, emporios de la industria y del comercio, ricos y cultos, si están rodeados de desiertos donde las condiciones de vida son hartamente precarias porque no llegan los beneficios y progresos de la civilización. [...] Hay urgencia perentoria en remediar la situación en que viven innumerables hermanos nuestros en las provincias y territorios, para bien del país y del porvenir de la raza, pero no con soluciones esporádicas y de momento [...]. Ese estado permanente de abandono y de pobreza no se resuelve con socorros ni paliativos piadosos, sino con remedios que ataquen y extirpen los males en su origen, y con medidas que aseguren a esos pueblos una vida estable de bienestar y de progreso, y el normal desenvolvimiento de todas sus posibilidades materiales, culturales y sociales”.

Por añadidura, los años finales de la década vinieron acompañados por intensas sequías y plagas que menguaron el ya escaso rendimiento agrícola y terminaron de identificar el interior rural con una zona de devastación, contribuyendo a fortalecer, simultáneamente, la opinión de que era necesario apoyar el desarrollo del campo y el proceso migratorio que lo vaciaba.

Un modernismo rural

Entre las políticas con que el Estado trató de paliar esa situación se destacan las iniciativas sobre vivienda popular rural, coincidentes con los diagnósticos sobre la precariedad de la situación de los trabajadores del campo y con las preocupaciones sobre la necesidad de su arraigo. Era éste un tema que había sido abordado muy marginalmente en los intensos debates sobre la vivienda popular de las décadas anteriores, siempre centrados en la vivienda obrera urbana. Al mismo tiempo, los escasos desarrollos de modelos de vivienda extraurbana realizados por los arquitectos habían estado hasta entonces vinculados a la expansión del *weekend* y sus figuraciones recreativas, mientras que en este caso se trataba de enfrentar el problema de la vivienda en el campo entendido éste como un lugar de trabajo y producción. La mayoría de las iniciativas estuvieron a cargo de instituciones fundadas por el gobierno de Justo, aunque comenzaron durante el gobierno de Ortiz. Todas estaban relacionadas con propuestas más amplias dirigidas al sector agropecuario, centradas en la colonización o el crédito agrario, como el concurso de prototipos para viviendas rurales organizado por el Instituto de Colonización de la Provincia de Buenos Aires en 1937; el concurso realizado en 1938 por el Banco Nación (que había creado la Sección Crédito Agrícola en 1933); la labor del Consejo Agrario Nacional, creado en 1939 sobre la base de proyectos legislativos anteriores; el conjunto de proyectos realizados por la Dirección de Tierras y Colonias del Ministerio de Agricultura; las propuestas del Banco Hipotecario Nacional de 1942.

Las políticas del arraigo rural no sólo reconocían estímulos en la situación local, sino que eran consecuentes con la principal preocupación que comenzaba a marcar los debates de la urbanística: la necesidad de evitar las grandes concentraciones urbanas, a tra-



*Escuela rural en Suipacha, provincia de Buenos Aires,
Arq. Eduardo Sacriste, 1943.*

vés de una ocupación territorial equilibrada. Se trataba de un clima de opinión internacional, basado en el predominio de las teorías urbanas anglosajonas, de gran peso desde finales del siglo XIX y completamente hegemónicas desde mediados de los años treinta. Contra el imaginario del modernismo metropolitano de la concentración, la mecanización y la estandarización de la vida urbana, se imponía el modelo de la descentralización basado en el dispositivo territorial de la ciudad-jardín, que en la teoría contemplaba la formación de núcleos urbanos autosuficientes con funciones productivas, en vinculación con la pequeña propiedad rural.

En el debate argentino, los problemas territoriales planteados se resumían en la oposición de dos consignas: urbanizar el campo o ruralizar la ciudad. La primera representaba claramente la línea de las iniciativas estatales de modernización del territorio y se desarrolló principalmente en la primera mitad de la década, encontrando su apogeo en el Primer Congreso de Urbanismo de 1935. Haciendo un balance de él, en su número de noviembre de ese año la

Revista de Arquitectura reclamaba al gobierno el tipo de política que respaldaba las obras de la Dirección Nacional de Vialidad o YPF: “Es hacia una distribución racional de la población que debe rectificar sus actos la administración pública [...]. Habremos así pasado la época transitoria de la factoría y *construido una nación, urbanizando el país*”.

La segunda posición se hizo paulatinamente predominante en la segunda mitad de la década, como parte del nuevo protagonismo del “país rural”. El proyecto del ministro Cárcano para la creación de la comisión de colonización nacional proponía la formación de explotaciones agrarias suburbanas; un año después, en 1936, la creación de la Comisión Nacional de Colonización era impulsada por Juan Cafferata, antes creador de la Comisión Nacional de Casas Baratas, con el objeto de producir una versión rural de ésta. En 1939, José Martínez, senador por Córdoba, proponía la creación del Instituto de la Vivienda Popular para “proyectar planes de descongestión de las grandes ciudades”, precisando la necesidad de que “estos planes comprendan no solamente el ejido de las ciudades propiamente dichas, sino de las zonas suburbanas y adyacentes a las mismas para llevar la población al campo”. El Museo Social Argentino, persistente defensor de esta posición, organizó en 1940 el Primer Congreso de la Población, cuyo diagnóstico fue una de las más radicales críticas al papel del fenómeno urbano en el desarrollo del país. La ciudad apareció demonizada bajo las imágenes de “tumor urbano”, “corriente de lava del urbanismo invasor”, y se terminaba proponiendo su completa desconcentración en una periferia rural.

Uno de los ejes de debate fue, desde ya, la cuestión del crecimiento de Buenos Aires; la opinión técnica generalizada proponía la creación de instrumentos de control de la expansión. Pero el problema general incluía también los modelos diferentes de vida implícitos en las propuestas urbanísticas. Urbanizar o ruralizar también significaba la constitución de imaginarios contrapuestos del habitar. El predominio casi absoluto de las propuestas anglosajonas en la cultura técnica de la época podría explicarse porque conciliaban una serie de postulados modernistas (la necesidad de la planificación urbana como aspecto parcial de la planificación territorial y social) con la reivindicación del motivo doméstico del *home*, en sus aspectos de realce de la vida familiar y del contacto “humanista” entre la cultura y la naturaleza. De tal modo, este humanis-

mo modernizador era capaz de albergar tanto la revisión interna al modernismo que se desarrollaba desde mediados de la década de 1930, como las necesidades de una nueva sensibilidad fuertemente atravesada en la Argentina por el auge católico posterior al Congreso Eucarístico de 1934, que hacia comienzos de la década del cuarenta tendía a aumentar su peso tanto en las corporaciones profesionales como en el propio Estado. Aunque esta corriente no se plasmó en emprendimientos urbanísticos concretos en la década, constituyó la base ideológica de buena parte de los emprendimientos urbanísticos y habitacionales del peronismo en el poder.

Finalmente, este debate urbanístico encontró un correlato ajustado en el terreno de las figuraciones arquitectónicas, en el cual el “regreso al campo” se imponía en muchos frentes, constituyendo tal vez uno de los principales referentes para la generalización del imaginario rural a fines de los años treinta. Se asistió a un viraje regionalista o localista en los debates del modernismo arquitectónico, también inspirado en los cambios que se venían produciendo desde 1930 en el seno del modernismo internacional como parte de la reflexión sobre el agotamiento de sus primeras figuraciones, asociadas linealmente con el progreso tecnológico. El impacto más general de la guerra ratificó ese viraje: ya por razones materiales, como las restricciones de las importaciones que llevaron a valorizar la madera y la piedra locales; ya por razones culturales, como el relativo aislamiento generado por el eclipse europeo.

En la Argentina, tal viraje se expresó en diferentes vertientes. Una de ellas fue constituida por un sector del modernismo que desde el comienzo de su militancia vanguardista en los años veinte había buscado una expresión “criolla” —en el sentido dado por las vanguardias literarias— de la arquitectura moderna y que ahora podía reencontrarse francamente con ciertas imágenes de la tradición rural. Es el caso de Alberto Prebisch, introductor de los textos de Le Corbusier y otras proclamas de vanguardia en la primera posguerra, quien hacia 1940 construía casonas señoriales tradicionalistas, defendiendo su relación con el paisaje, la historia y los materiales locales con el mismo tono beligerante con que antes había postulado la necesidad de una creación arquitectónica *ex nihilo*.

Otra vertiente encontró una expresión más de fondo en la articulación de las problemáticas disciplinares con las de la transformación territorial llevada adelante por el Estado. En la Argentina,

como en otros países donde fuertes políticas territoriales estatales eran acompañadas por el debate sobre la identidad nacional de la arquitectura —el México cardenista o la Unión Soviética—, aquel viraje disciplinar siguió paso a paso el rumbo de la experimentación estatal, que significó para los arquitectos, hasta entonces profesionales eminentemente urbanos, poner en el centro del debate los problemas del interior y el habitar rural.

Por ejemplo, las estaciones de servicio y los edificios industriales y de habitación que realizaba YPF, entre 1934 y 1937 habían sido francamente modernistas, casi comandos didácticos de vanguardia con la explícita vocación de generalizar en el país un imaginario de progreso urbano; pero hacia 1938 comenzaban una búsqueda en pos de diferentes fórmulas de combinación entre tradición y modernidad, entre cosmopolitismo y regionalismo, a través del uso de los materiales o las composiciones volumétricas. A los estilos náuticos o cúbicos de los primeros años, les sucedieron imágenes volcadas hacia un estilo rústico más o menos modernista: combinaciones de vidrio, piedra y techados de tejas invertidos, uno de cuyos más altos ejemplos es la estación de servicio de Peralta



*Estación de servicio de YPF en Peralta Ramos, Mar del Plata,
Arq. Jorge de la María Prins, 1938.*



Estación caminera Dolores, Plan ACA-YPF, c. 1938, Arq. Antonio Vilar.

Ramos, en Mar del Plata, realizada en 1938 por De la María Prins. Esas tendencias derivarían, hacia comienzos de la década del cuarenta, en la generalización de una tipología pintoresquista con reminiscencias del estilo californiano.

Vinculada a la misma empresa, pero con impacto más directo en la cultura arquitectónica, debe señalarse la experiencia que llevó adelante el arquitecto modernista Antonio U. Vilar, como diseñador general del plan que YPF realizó con el Automóvil Club Argentino a partir de 1937. En el transcurso del encargo estatal Vilar realizó un “descubrimiento” del interior, de los problemas del desarrollo social y productivo nacional, que concluiría en un cambio radical en sus posiciones. En 1933, en el cenit de sus convicciones modernistas, había propuesto un rechazo total de la tradición para resolver los problemas del presente; en 1943, en cambio, la experiencia realizada con el Plan ACA-YPF lo llevaba a valorar las peculiaridades regionales, colocando al Estado como único garante interesado en la salvaguarda de los valores históricos y sociales que el descubrimiento del *interior* de la nación hacía aparecer en toda su rara riqueza. Actitud coincidente con políticas oficiales: en 1939 se había formado la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y en 1943 la Oficina de Lugares, Edificios y Monumentos Históricos en el Ministerio de Obras Públicas.

El Estado que había salido a modernizar el país parecía haber regresado con una mayor conciencia de los “valores” que ese país encerraba para la definición de una identidad. Y el “viaje turístico” que la arquitectura emprendió gracias a los encargos públicos modernizadores se convirtió en una *novela de aprendizaje* de la nacionalidad.

El ejemplo muestra con claridad el rol jugado por el Estado como campo de pruebas de las diferentes expresiones del “regreso al campo” y, al mismo tiempo, el efecto que produjo la escala territorial en que debía realizarse esa experimentación. La mediación del Estado llevó, en primer lugar, a que los debates arquitectónicos se hicieran cargo del conjunto del país, y, en segundo lugar, transformó las discusiones sobre la creación de una “arquitectura nacional” en la búsqueda de un “tipo” de obra adaptada a la totalidad del país, que combinase necesidades modernas y expresividad nacional-regional. La clave estatal seguía siendo la necesidad de homogeneizar el territorio, pero si a comienzos de la década esa homogeneización tenía el sello de la modernización urbana, a finales de la década pasaba por diferentes modulaciones del imaginario rural. Hacia los años cuarenta, ya se encontraba consolidada la idea de que “país”, como representación, debía ser sinónimo de interior.

Pero hay que enfatizar también el tono definitivamente social que el “descubrimiento” del interior, entendido como conocimiento directo de las condiciones de vida populares y rurales, le dio a la arquitectura moderna. Un tono que se hizo evidente en figuras maduras profesionalmente como Vilar (quien comenzó entonces una sostenida experimentación de prefabricación de vivienda popular rural), pero que resultó particularmente importante en las nuevas generaciones de arquitectos. Emergía así, en los tardíos años treinta, una nueva vanguardia, a la que el “descubrimiento” del interior le permitió reintroducir de modo contestatario la problemática popular en el universo de la arquitectura moderna argentina, a la que criticaba por haber convertido la revuelta inicial en una fórmula especulativa para casas de renta, sin contenido social ni estético. Algunas de las principales figuras de esa nueva generación son el grupo Austral, formado en 1939; Horacio Caminos y Eduardo Sacriste, protagonistas de la posterior Escuela de Tucumán; la revista *Tecné*, dirigida por Conrado Sonderguer y Simón Ungar en 1942; todos realizaron un reconocimiento de

la arquitectura popular del interior y reivindicaron el uso de materiales autóctonos, la adecuación al clima y el carácter social como las nuevas bases de una arquitectura verdaderamente modernista.

“País” ya equivalía a “interior”, pero además, para esta exasperación de los temas que la transformación territorial a cargo del Estado había puesto a la orden del día, “interior” equivalía a “cuestión social”. Por lo tanto, la ofensiva del “país rural” podía volverse una crítica radical a la modernización conservadora aun siendo tan deudora de ella, como no tardaría en demostrarse a partir de 1945.

Los viajes del ensayo

Estas imágenes, por supuesto, no podían tener un carácter unívoco; por el contrario, se asistió en esos años a una sobreposición de matrices interpretativas diversas sobre la composición del país, que reconocían inspiraciones en algunos casos muy alejadas en el tiempo. Sin embargo, muchas de las principales tendencias emergentes en la cultura estuvieron relacionadas con este “viaje” al país interior, con esta nueva coloración “provinciana” del clima de ideas.

La línea hegemónica contra la cual se manifestaron las nuevas interpretaciones era la que representaba al país centrado sobre la pampa y sobre Buenos Aires. Una representación de larga data, en la cual el “criollismo vanguardista” de la década del veinte había introducido un matiz celebratorio, dejando de localizar en la pampa la clave del mal cultural e iniciando una suerte de “metafísica de la llanura” que, en la década de 1930, se había vuelto completamente convencional. En la mayor parte de los casos se trataba de una metafísica optimista, como era optimista Scalabrini Ortiz en *El hombre que está solo y espera*, en su confianza de que, finalmente, luego de toda la agitación europeizante del aluvión inmigratorio, se imponía en la ciudad el “espíritu de la tierra”. De todos modos, aun en los casos en que se tratara de una metafísica pesimista, como la de Martínez Estrada, esas lecturas entendían la figura de la pampa-Buenos Aires como una sinécdoque de la Argentina toda. Así, el mapa del país era una especie de *pendiente* que desembocaba en el Plata, donde se expresaba la totalidad del

carácter nacional. Esa posición era adoptada, en el marco de la modernización conservadora, casi como la versión oficial sobre el carácter “criollo” de la ciudad y, transitivamente, de una Argentina que se explicaba en ella.

Aunque desde comienzos de la década del treinta algunas voces ponían reparos a la fascinación que producían esas lecturas, sólo en la segunda mitad comenzaría a tomar forma una representación consistente del país interior, que iba a oponerse a aquel “pampeanocentrismo”. Bernardo Canal Feijóo fue uno de los autores que con más persistencia avanzaron en esa búsqueda de representar el país desde un “miraje tierra-adentro”, como llamaba a ese cambio de perspectiva. En 1937 propuso una refutación encendida del libro que Martínez Estrada había publicado en 1933, montando una interpretación de la tradición cultural en la que lo interior omitido tomó el carácter de síntoma. Así, en *Proposiciones en torno al problema de una cultura nacional argentina*, publicado en 1944, sostuvo que la Argentina moderna se había construido sobre el aserto alberdiano de que el “desierto” (es decir, aclaraba, la parte “ocupada” por la historia colonial española o por el indio) impedía la civilización y que ella sólo podía implantarse por la fuerza, “de gajo”, argumento también implícito en la figura sarmientina de la civilización y la barbarie. Tal construcción había creado una falsa alternativa en la cual toda la cultura argentina posterior habría quedado apresada, por aceptación directa o por inversión “crítica”: “ser bárbaro, pero auténtico, o ser culto, pero simplemente nominalista y retórico”.

Sin embargo, tal vez sea Scalabrini Ortiz, justamente por haber sido partícipe activo de la mirada vanguardista y “pampeanocéntrica”, quien mejor muestre el carácter del cambio experimentado en las representaciones del país. Entre *El hombre que está solo y espera*, de 1931, y sus escritos de denuncia nacionalista de la segunda mitad de la década, Scalabrini pasó del optimismo urbano a la exploración de las razones ocultas que hacían pervivir, dramáticamente, al “país pastoril”. Este último diagnóstico también alojaba el optimismo, dado que la explicación conspirativa y monocausal de los males nacionales permitía esperar la redención. Sin embargo, desde el punto de vista de la imagen del país que modelaban, ambos registros eran completamente contrastantes. En 1931, Scalabrini podía afirmar en directa analogía con Frank:

“El Hombre de Corrientes y Esmeralda es el vórtice en que el torbellino de la argentinidad se precipita en su más sojuzgador frenesí espiritual. Lo que se distancia de él puede tener más inconfundible sabor externo, peculiaridades más extravagantes, ser más suntuoso en su costumbrismo, pero tiene menos espíritu de la tierra.

”Por todos los ámbitos, la república se difumina, va desvaneciéndose paulatinamente. Tiene sabor peruano y boliviano en el norte pétreo de Salta y Jujuy; chileno en la demarcación andina; cierta montuosidad de alma y de paisaje en el litoral que colinda con Paraguay y Brasil y un polimorfismo sin catequizar en las desolaciones de la Patagonia.

”El Hombre de Corrientes y Esmeralda está en el centro de la cuenca hidrográfica, comercial, sentimental y espiritual que se llama República Argentina. Todo afluye a él y todo emana de él. Un escupitajo o un suspiro que se arrojan en Salta o en Corrientes o en San Juan, rodando en los cauces, algún día llegan a Buenos Aires.”

A lo largo de la segunda mitad de la década, en cambio, en una serie de artículos que reuniría luego en *Política británica en el Río de la Plata*, Scalabrini revirtió el carácter de esa centralidad de Buenos Aires para adoptar, por una parte, la representación de los “dos países”, la ciudad litoral y el interior, dramática e irremediabilmente escindidos. Y, por otra parte, para comenzar a ver las huellas de un futuro mejor en el país “tierra-adentro”, donde el espíritu nacional es “más recio” porque está “afirmado en la verdad de la tierra”. Allí radicaría la posibilidad de vencer esa escisión, en la que se habían comprometido todos los poderes imperiales y sus agentes porteños durante la historia nacional.

De estas nuevas representaciones del país se desprenderían posiciones que variaban de acuerdo con la valoración que se le diese a cada una de las partes en juego. El interior, ¿era una región mantenida por la fuerza en un primitivismo del que se la debía rescatar, produciendo, como proponía Canal Feijóo, un proceso de desarrollo que la pusiera a la altura de la modernización del litoral? ¿O su potencialidad radicaba precisamente en haber mantenido una esencia a salvo de la modernización, como quería el telurismo populista, haciendo de la necesidad virtud? Indudablemente, esas modulaciones vuelven a plantear la alternativa del comienzo entre

urbanizar o ruralizar, o quizá más matizadamente, entre homogeneizar en busca de “tipos” nacionales, fueran rurales o urbanos, o promover la diferenciación regional. Pero se debe notar que entre finales de la década del treinta y comienzos de la del cuarenta las alternativas, en todos los casos, ya se encontraban por completo comprendidas en la misma clave señalada para la arquitectura: “país” equivalía a “interior”, y cualquier noción de nacionalismo estaba indisolublemente ligada a su conocimiento y defensa cabal.

En este sentido, conviene volver al tema de la difusión de las imágenes del interior. Graciela Silvestri ha señalado la importancia, como dato de la constitución de los imaginarios del paisaje, de la publicación de fotografías de regiones argentinas que realizó en sus primeros números la revista *Sur*. Tres décadas después de publicadas, en 1962, Victoria Ocampo y Jorge Luis Borges polemizaron por ellas. Evocando el primer número de la revista, Borges usó las fotografías como ejemplo de que el proyecto inicial de Ocampo tenía la mirada puesta en Europa: “Estábamos bastante asombrados de ver, en el primer número de esta revista publicada en Buenos Aires, que había una foto de las cataratas del Iguazú, otra de Tierra del Fuego, otra de la cordillera de los Andes, e incluso una de la provincia de Buenos Aires. Creo recordar que ésta decía ‘Vista de las pampas’... en plural! Un verdadero manual de geografía. Victoria había hecho esto para mostrar la Argentina a sus amigos de Europa, pero resultaba un poco curioso en Buenos Aires”.

En su respuesta, Ocampo opuso a la connotación despectiva de Borges la importancia que en los años treinta suponía ya no enseñarles el país a los extranjeros, sino a los propios argentinos. Más aún, las imágenes respondían a un “afán de autoconocimiento”: “*Sur*, mi querido Georgie, ha sido para mí un medio costoso de aprender nociones elementales, téngalo presente. Estas fotos formaban parte de ese intento. Antes de dedicarlas al lector desconocido (nuestro eterno cliente) me las dedicaba a mí misma, figúrese. Así es tu tierra —me decían—. No lo olvides, ignorante”.

Una cantidad de iniciativas y afirmaciones de Ocampo en *Sur* permiten asegurar que ese “afán de autoconocimiento” era mucho más que una construcción retrospectiva. Así, en el número 10 de 1935, comenta su deseo incumplido de que Eisenstein filmara un documental en la Argentina, un “poema épico [...] que relatara en imágenes la historia de nuestra tierra y del hombre que en ella

lucha". La necesidad de documentar de Ocampo muestra la articulación cultural de la demanda "turística" de *Critica* en la década anterior pero, también, la respuesta a la requisitoria de Ortega y Gasset, sólo posible a partir de la crisis de 1930: el territorio debía ser la sede primera, material y espiritual, de la sustitución de importaciones en la cultura.

Desde este punto de vista, la polémica asume otro carácter. A Borges no le había parecido "turístico" incorporar fotografías en el *Evaristo Carriego* de 1930, parte de la operación criollista de la vanguardia que homologaba pampa y ciudad. Ocurre que, como para el primer Scalabrini Ortiz, también para Borges mostrar aquello que no era la pampa-ciudad suponía ofrecer una visión "exótica" del país, mientras que el gesto de Ocampo ya buscaba incluir toda la geografía en un nuevo manual nacional y, por esa vía, americano, ya que junto a las fotos de regiones argentinas, en efecto, se publicaban otras del resto de Latinoamérica. Homologar exotismo y turismo, como hacía Borges, implicaba no hacerse cargo del rol del turismo en esa década de su ampliación estatal y social: la relación entre "conocer lo propio" y "crear mercado". Y no parece secundario, en este estricto sentido, remarcar la presencia continua de publicidad de YPF con largos textos nacionalistas en las páginas de la revista *Sur* desde 1934 en adelante.

"Toda la geografía": tal vez el mejor ejemplo del rol del turismo en la constitución del nuevo territorio lo plantea la incorporación de las imágenes del sur del país. Como señalaría más adelante Canal Feijóo en su *Teoría de la ciudad argentina*, el "plano inclinado" del país que desembocaba "naturalmente" en la pampa-ciudad ya era anacrónico, porque correspondía al mapa de la ocupación española vigente hasta la organización nacional, que había sido sin embargo modificado con la incorporación en el siglo XX de la Patagonia, efectivizada en los años treinta por la iniciativa estatal. El fuerte impulso estatal de esa década, con su búsqueda de homogeneización urbana de los primeros años o con su reversión ruralista de los finales, impuso una figuración sobre "lo propio" que involucró, por primera vez, al país en su conjunto. La igualación de "país" con "interior", alumbrada por la ocupación territorial del Estado, había comenzado a producir el diseño de un nuevo mapa nacional.

BIBLIOGRAFÍA

Ballent, Anahi. "La 'casa para todos': grandeza y miseria de la vivienda masiva", en Devoto, F., y Madero, M. (dirs.), *Historia de la vida privada en la Argentina*, t. 3. Buenos Aires, Taurus, 1999.

———. *Las huellas de la política. Arquitectura, vivienda y ciudad en las propuestas del peronismo*. tesis doctoral inédita, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1997.

Ballent, Anahi y Silvestri, Graciela. "Ministerio de Obras Públicas de la Nación", en Liernur, J., y Aliata, F., *Diccionario histórico de arquitectura, habitat y urbanismo en Argentina*, Buenos Aires, FADU (en prensa).

García Heras, Raúl. *Automotores norteamericanos, caminos y modernización urbana en la Argentina 1918-1939*, Buenos Aires, Libros de Hispanoamérica, 1985.

Gorelik, Adrián. "Buenos Aires y el país: figuraciones de una fractura", en Altamirano, C., *La Argentina en el siglo XX*, Buenos Aires, Ariel, 1999.

———. "La arquitectura de YPF: 1934-1943. Notas para una interpretación de las relaciones entre Estado, modernidad e identidad en la arquitectura argentina de los años treinta", *Anales del Instituto de Arte Americano*, N° 25, Buenos Aires, FADU-UBA, 1987.

———. *La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936*, Buenos Aires, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 1998.

Gramuglio, María Teresa. "Sur: constitución del grupo y proyecto cultural", *Punto de Vista*, N° 17, Buenos Aires, abril-julio de 1983.

Halperin Donghi, Tulio. "Canción de otoño en primavera: previsiones sobre la crisis de la agricultura cerealera argentina (1894-1930)", en *El espejo de la historia. Problemas argentinos y perspectivas latinoamericanas*, Buenos Aires, Sudamericana, 1987.

———. "Crónica del período", en AAVV, *Argentina 1930-1960*, Buenos Aires, Sur, 1961.

Liernur, Jorge Francisco. "El discreto encanto de nuestra arquitectura, 1930-1960", *Summa*, N° 223, Buenos Aires, marzo de 1986.

Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos. *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

Pastoriza, Elisa. "Mar del Plata en los años '30: entre la regresión política y el progresismo social", en Melón Pirro, J., y Pastoriza, E. (coords.), *Los caminos de la democracia. Alternativas y prácticas políticas*, Mar del Plata, Biblos, 1996.

Romero, José Luis. *Latinoamérica: las ciudades y las ideas*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1976.

Sarlo, Beatriz. *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988.

Silvestri, Graciela. "Parques nacionales", en Liernur, J., y Aliata, F., *Diccionario histórico de arquitectura, hábitat y urbanismo en Argentina*, Buenos Aires, FADU (en prensa).

———. "Postales argentinas", en Altamirano, C., *La Argentina en el siglo XX*, Buenos Aires, Ariel, 1999.

Solberg, Carl. *Petróleo y nacionalismo en la Argentina*, Buenos Aires, Emecé, 1982.

Weinberg de Magis, Liliana. "Radiografía de la pampa en clave paradójica", en Martínez Estrada, E., *Radiografía de la pampa* (edición crítica de León Pollmann), México, Colección Archivos, 1993.

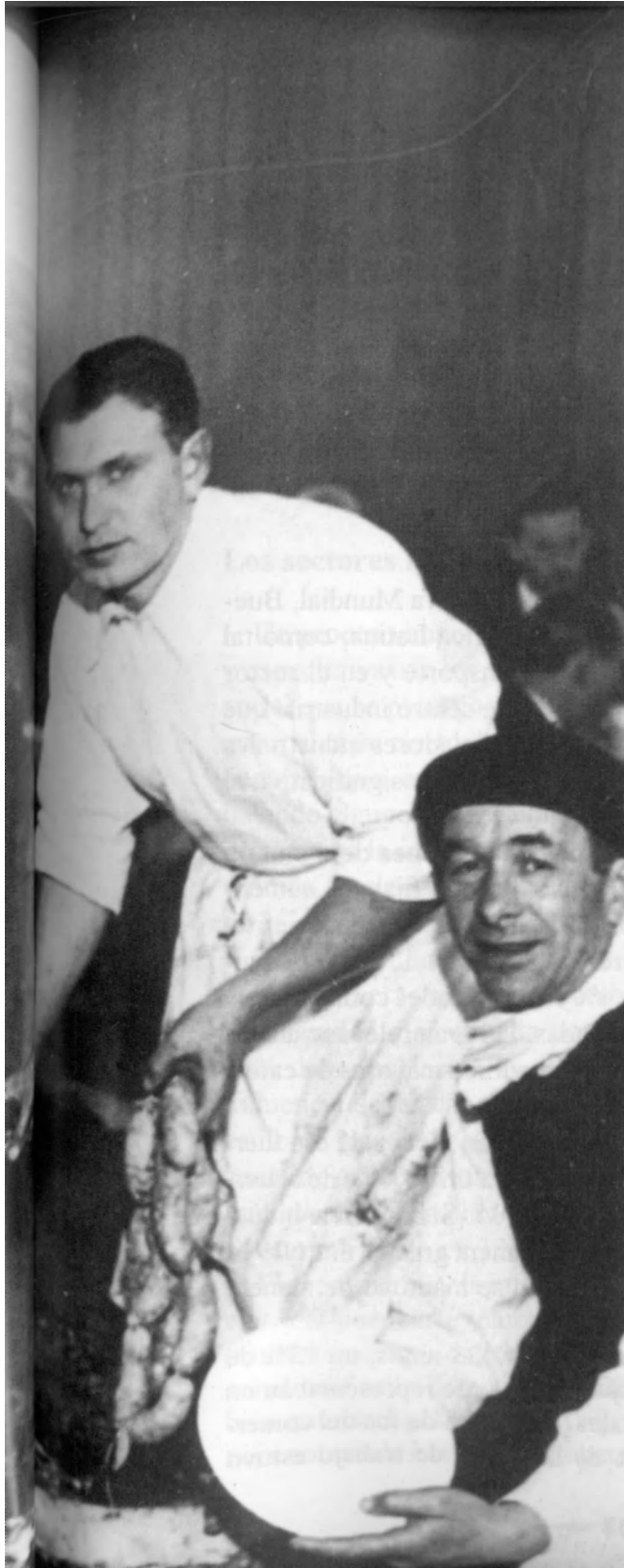
V

*La nueva identidad de
Los sectores populares*

por RICARDO GONZÁLEZ LEANDRI



Asado en una reunión obrera, principios de la década del 40.



Entre las dos guerras mundiales la identidad de los sectores populares urbanos, inicialmente trabajadora, contestataria y vinculada a un cierto desarraigo inmigratorio, fue modificándose hasta convertirse en una más fluida y reformista. Esta transformación se relacionó de manera estrecha con cambios producidos en los niveles y en las expectativas de vida de los sectores populares, y también con la creciente incidencia social de nuevas dimensiones del Estado.

En virtud de estos cambios, continuando una tendencia que comenzó a hacerse notar en la primera década del siglo, el Estado dejó de ser percibido por los sectores populares como un espacio enemigo para convertirse en forma paulatina en un instrumento político del cual podían obtenerse ciertos beneficios y, por lo tanto, en un bastión por conquistar.

La nueva cultura popular que comenzó entonces a conformarse, en la que tuvieron una influencia creciente el Estado —sobre todo en su faceta educativa—, los escenarios barriales, la palabra escrita, la radio, el cine y el espectáculo deportivo, se caracterizó por un peculiar pragmatismo que se hizo notorio en las

nuevas formas que adquirió “lo político”. Así, no es sorprendente que la influencia de los anarquistas, predominante en etapas anteriores, dejara paso a la de radicales y socialistas.

El inicio de estos cambios se sitúa, aproximadamente, en los años de la Gran Guerra, para desplegarse en la década abierta en 1930. Su comprensión reclama, entonces, remontarse hasta aquella primera fecha. Por otra parte, Buenos Aires es el ejemplo que mejor resume tales transformaciones, que sin embargo se desarrollaron en buena parte de las grandes ciudades argentinas.

TRABAJADORES Y SECTORES MEDIOS

El mundo del trabajo en una gran ciudad

En el momento que estallaba la Primera Guerra Mundial, Buenos Aires era la ciudad más grande de América Latina; como tal empleaba a miles de trabajadores en el transporte y en el sector servicios. Al mismo tiempo, era un creciente centro industrial que cobijaba en su seno al 36% de todos los trabajadores industriales de la república, porcentaje que se elevó de forma significativa al 44% en 1936.

Es difícil saber en forma precisa las dimensiones del “mundo del trabajo” durante esos años. El censo de 1914 fijaba el número de trabajadores en 406.120, de los cuales un 67% realizaba actividades industriales manuales o artesanales, un 11,1% estaba ocupado en el sector transporte, un 2,4% en actividades comerciales y un 19,2% en ocupaciones no calificadas. De gran relevancia es el hecho de que un 73% de todos los trabajadores mayores de catorce años era extranjero.

Las mujeres, por su parte, representaban un 20,8% de esa fuerza laboral en 1914, porcentaje que se elevó a un 23,4%, de acuerdo con los datos del censo industrial de 1935. Si bien en la industria el porcentaje de trabajadoras bajó de manera gradual entre 1914 y 1930, en el total de la fuerza de trabajo se mantuvo de manera constante alrededor del 20%.

También trabajaban en Buenos Aires 24.423 niños, un 12% de los que entonces tenían entre 10 y 16 años, que representaban un 3,2% de los trabajadores industriales y un 2,8% de los del comercio. Entre 1914 y 1921 un 7,1% de la fuerza de trabajo estuvo

compuesta por menores. Esa cifra disminuyó suavemente, aunque con altibajos; sin embargo, a lo largo del período el porcentaje de los niños en la fuerza laboral osciló de manera permanente entre un 4 y un 8%.

Puede concluirse a partir de estas breves referencias que el mundo del trabajo durante los años de entreguerras, y por ende a lo largo de la década de 1930, fue grande y diversificado y comprendió alrededor de un cuarto del total de la población de la ciudad de Buenos Aires. En el inicio del período estaba compuesto por una mayoría de extranjeros, sobre todo italianos y españoles, proporción que fue variando de una manera destacada en los años siguientes.

Los sectores medios

Un proceso importante que contribuyó al cambio de fisonomía y expectativas de los sectores populares urbanos fue la movilidad social que se produjo durante este período. Tal movilidad se hizo notoria en un cierto desgranamiento de la masa trabajadora y en el hecho de que, en forma paulatina pero constante, se fueron desdibujando algunos de los límites entre los estratos sociales. Tal proceso apoyó la constitución de una imagen de sociedad más abierta y fluida, que permitió a voceros conservadores y radicales hablar de la inexistencia de clases sociales en la Argentina.

Hacia 1930, la impronta de las capas medias en muchas regiones del país era ya bastante notable y Buenos Aires fue, obviamente, la ciudad más influida por estos sectores, que pasaron de un 38% de su población en 1914 a un 46% en 1936. Esta creciente influencia de las capas medias se hizo especialmente visible en el estilo de vida de la ciudad como conjunto y sobre todo en el horizonte de expectativas, en los gustos y en la conducta como consumidores y seres políticos de sus heterogéneos sectores populares. Si esto era cierto en 1930, lo fue aun más en 1945.

El crecimiento y la influencia mencionados fueron posibles gracias a la peculiar evolución social de este período, en el que las transformaciones del sistema educativo y la demanda real de personal calificado fueron muy importantes. Es bien conocido también que ya el gobierno de Yrigoyen había expandido de una manera notoria la burocracia gubernamental, abriendo canales de as-

censo a personas que aspiraban a incorporarse a los grupos medios o que ya pertenecían a ellos. Otro rasgo característico de la expansión de las clases medias fue la multiplicación del número de propietarios y empleados de pequeños negocios.

Sin embargo, la movilidad social y el crecimiento de las capas medias durante este período siguen registrando aún hoy aspectos confusos, dado que no es mucho lo que se sabe acerca del porcentaje real de trabajadores que se vieron inmersos en forma directa en esa aventura del ascenso social y cambiaron su actividad no calificada, desarrollada en talleres y pequeñas fábricas, por tareas típicas de la clase media. La evolución de la estructura ocupacional y, por lo tanto, de los requisitos exigidos para instalarse en posiciones laborales propias de las capas medias muestra que éstas crecieron gracias al aumento de los empleados y de los profesionales. Sólo en segunda instancia debe su incremento la clase media a los pequeños patronos y comerciantes.



Asamblea en la Asociación Trabajadores del Estado, 1941.

Los trabajadores, que eran en gran medida extranjeros todavía hacia 1930, debieron encontrar sin duda muchas dificultades en adquirir la educación, las habilidades y la influencia necesarias para ocupar puestos característicos de los sectores medios. En efecto, los requisitos de acceso a las profesiones eran demasiado estrictos para una masa de inmigrantes cuyos índices de analfabetismo eran todavía importantes y lo mismo puede decirse, aunque en menor medida, de la heterogénea categoría de los empleados. Todo indica en consecuencia que el ascenso social durante el período analizado no se debió, al menos de una manera destacada, a un fenómeno de movilidad inmediata entre “clases” —que el trabajador inmigrante se convirtiera él mismo, y de manera rápida, en un miembro de las clases medias— sino a un proceso de más largo plazo, mediado en general por la educación, y cuyos actores principales fueron más bien los hijos o los nietos, ya argentinos, de antiguos migrantes transoceánicos.

En el crecimiento de los sectores medios sin duda influyeron también otros factores. Uno de ellos fue la incorporación de inmigrantes que ya pertenecían a los sectores medios en sus respectivos países de origen, fenómeno que si bien fue numéricamente minoritario, no puede dejarse de lado sin más. Un segundo elemento fue la ocupación de puestos considerados propios de las capas medias por hijos de la elite en un movimiento inverso de descenso social, que tuvo lugar sobre todo en la década abierta en 1930.

En cuanto a la conversión de trabajadores en pequeños patronos o comerciantes, también es necesario tener en cuenta que para una mayoría era realmente difícil ahorrar lo suficiente como para iniciar un emprendimiento comercial propio. Esta experiencia, cuando se intentaba, requería un serio esfuerzo por parte de familias capaces de aportar un número suficiente de trabajadores y de resistir la autoexplotación intensa y prolongada, de todos o de la mayoría de sus miembros.

LAS CONDICIONES DE VIDA

El resurgimiento económico en los años veinte, luego de la crisis asociada a la posguerra, había hecho mucho para difuminar el activismo sindical y político de las vertientes más contestatarias

de los trabajadores. Excepto por las importantes protestas contra la ley de jubilaciones de 1924, el número de huelgas en la Capital Federal, por ejemplo, declinó hasta alcanzar los niveles relativamente bajos de 1911 a 1916.

Apoyada por estos datos, se extendió entre los investigadores la opinión de que la transformación se debió a una favorable evolución de las condiciones de vida. Las cifras oficiales parecen corroborarlo, tanto a nivel del empleo como de los salarios reales. Tal punto de vista, asimismo, se vio reforzado por el hecho de que esa mejora relativa fue complementada por una legislación que limitó las horas de trabajo, y por la regulación de las condiciones laborales de las mujeres. En 1929, tras años de arduas negociaciones y batallas sindicales, se aprobó finalmente la ley de las 8 horas, medida que venía aplicándose en importante cantidad de establecimientos desde hacía ya tiempo. Sin embargo, otras realidades también aparecen ratificadas, en buena parte, por las estadísticas oficiales: el desempleo fue mucho más importante, las oportunidades de movilidad bastante más escasas y los salarios altos menos generalizados de lo que normalmente se presupone. Autores como Robert E. Shipley han planteado, entonces, la necesidad de introducir matices en esa visión optimista. Señalan, además, que un porcentaje considerable del aumento de los salarios fue absorbido por el alza de los precios de los alimentos, el vestido y la vivienda. Por lo tanto, para describir de forma adecuada la evolución de las condiciones de vida de los sectores populares en esta etapa es necesario observar con detenimiento el efecto de ciertas oscilaciones económicas.

Los primeros gobiernos radicales tuvieron desde el punto de vista económico dos etapas bastante diferenciadas. Cuando Yrigoyen accedió al poder en 1916, el país estaba viviendo las agnias de una seria depresión económica iniciada en 1913, que se extendería hasta 1917. Durante estos años se registró un considerable desempleo, que afectó sobre todo a los trabajadores urbanos vinculados al sector exportador. A esta primera etapa siguió una segunda que comenzó en 1918, prolongándose hasta la depresión de posguerra, que supuso en cambio un cierto auge económico.

Es importante destacar que durante estos años el efecto principal de la Primera Guerra Mundial fue el surgimiento bastante acelerado de un proceso inflacionario. Al comienzo, los precios internos se vieron afectados por los de las materias primas importadas,

mientras que a partir de 1917 lo fueron por el incremento de la demanda externa de productos agropecuarios; como la oferta permanecía relativamente inelástica, dicha demanda tuvo creciente gravitación en los precios a los consumidores locales: en 1918 habían subido un 75% con respecto a los de 1910. Entre 1914 y 1918 el costo de vida urbano registró un aumento de alrededor de un 65%. Mientras el costo de los alimentos se elevó en promedio un 40%, el de los alquileres lo hizo un 15% y el de ciertos rubros específicos, como las confecciones, casi un 30%. Por otra parte, índices elaborados por la *Revista de Economía Argentina* calculaban que el costo de la vida se había casi duplicado entre 1914 y 1920.

El costo de la vida descendió algo en 1919 para alcanzar luego el nivel más alto de todo el período en 1920 y volver a bajar, esta vez de manera bastante abrupta, hasta 1922. A partir de ese año el descenso se hizo más suave y gradual hasta 1930. Como dato cualitativo, puede destacarse que los visitantes extranjeros se mostraban asombrados por los precios que veían en los escaparates, y que más de uno de ellos consideró que Buenos Aires era la ciudad más cara del mundo.

Los salarios reales, por su parte, disminuyeron ostensiblemente entre 1914 y 1918, para experimentar luego un aumento sostenido hasta 1920, cuando se frenaron; hacia 1922, volvieron a incrementarse. Recién en 1921 llegaron a superar los niveles del comienzo de la guerra. A partir de 1923 se produjo un aumento moderado del salario real, que alcanzó su punto máximo en 1928.

Una importante cuestión a tener en cuenta para considerar en sus justos términos la evolución de los salarios reales y las condiciones de vida de los sectores populares es que las mujeres representaban entre un 15 y un 25% de los trabajadores de la ciudad, dato al que se prestaba poca atención en muchas de las estimaciones de la época. Las trabajadoras calificadas y semicalificadas ganaban sólo un 40% del salario de sus homólogos masculinos y generalmente un 10% menos que los trabajadores no calificados. Conviene mencionar también que la diferencia entre los salarios de los hombres y de las mujeres creció y no disminuyó en la década de 1920.

Las oscilaciones mencionadas permiten afirmar que durante buena parte de este período la inflación fue un enemigo insidioso de los sectores populares asalariados, que difícilmente podían es-

capar de ella, convirtiéndose en sus principales víctimas. La inflación, a pesar de su carácter oscilante, tuvo además una participación significativa en connotar la relación entre estos sectores y la elite terrateniente durante el primer gobierno radical tanto a nivel social como político, dado que su principal efecto fue redistribuir el ingreso desde los grupos urbanos hacia los sectores rurales y exportadores.

El encarecimiento de los productos de consumo básico colocó al gobierno radical frente a situaciones complejas. Con respecto a los aumentos del precio del azúcar, la carne y el pan, poco margen tenía para producir modificaciones en favor de los sectores populares afectados, salvo en momentos muy especiales y sin mayor trascendencia en el largo plazo.

El problema de los alquileres fue sin duda diferente dado que, en el caso porteño, sus fluctuaciones no se debieron directamente a factores internacionales sino más bien a la presión demográfica dentro de la ciudad. Frente a esta cuestión sí adoptó el gobierno radical medidas drásticas como su congelamiento.

A pesar de la mejora relativa de la década de 1920, la trama conflictiva que comenzó entonces a tejerse alrededor del consumo y sus oscilaciones se fue instituyendo de manera creciente en un factor decisivo a la hora de definir la identidad específica de los sectores populares. En ese mismo sentido fue importante el papel que jugó la estructura tarifaria e impositiva en la formación de los precios de los productos de primera necesidad. No casualmente el Partido Socialista trató en forma permanente de que se redujeran las tarifas de importación, en apoyo a los consumidores urbanos. Tales peticiones colocaron a la Unión Cívica Radical ante difíciles alternativas, producto de su propia sensibilidad frente a la particular competencia que de tal modo se le planteaba y del hecho de que, como gobierno, estaba sometido a fuertes presiones de carácter opuesto.

La situación era realmente delicada pues su éxito político, y gran parte de sus importantes clientelas, los obtenía el radicalismo de los sectores medios y populares gracias al aumento del gasto público. Para ello tenía que mantener una fuerte capacidad extractiva de recursos, que no podían ser obtenidos fácilmente de los sectores económicamente poderosos sin enajenarse al mismo tiempo la buena voluntad de los consumidores urbanos. A pesar de las serias dificultades planteadas en este aspecto, el gobierno



Habitantes de Villa Desocupación, 1933.

supo salir airoso de tales encrucijadas por lo menos hasta 1930, con algunas notorias excepciones como la ocasionada por los graves conflictos de 1919. Y lo hizo a fuerza de adoptar gestos oportunos y medidas de carácter coyuntural, que muchos tildaron de electoralistas.

Conscientes de esta paradójica situación y sintiéndose cómodos en esa posición de “consumidores urbanos” que la coyuntura les abría, los sectores populares comenzaron a ejercitar un pragmatismo de índole muy particular, que con el tiempo fue convirtiéndose en una de sus características más importantes.

La crisis mundial de 1930 puso un coto evidente a la relativa mejora social de los sectores populares. Lo más llamativo de la nueva situación fue el aumento de la desocupación, tanto en la capital como en el conjunto del país. Un estudio gubernamental del año 1932 confirmó la existencia de 90.000 desocupados en Buenos Aires y de 334.000 en todo el país, contra 15.000 que había a comienzos de 1930. El surgimiento de emplazamientos precarios habitados fundamentalmente por personas sin trabajo, como “Villa Desocupación” o “Villa Esperanza”, y la instalación de “ollas

populares” en algunas zonas de la capital y de otras grandes ciudades son un claro indicio del deterioro que la crisis causó en una parte importante de estos sectores.

En forma paralela al incremento de la desocupación se produjo, obedeciendo a los mismos motivos, un deterioro bastante generalizado de los niveles de vida, que se prolongó al menos hasta mediados de la década. Al mismo tiempo que se reducían los salarios, aumentaban de forma considerable los costos en alimentación y vestido. El salario promedio de los obreros industriales, tomando el índice de 1929 como 100, cayó a 81 en 1932 y a 77 en 1934; al año siguiente comenzó sin embargo a recuperarse, manteniendo valores estables hasta aproximadamente 1943.

También fue importante el descenso de las cifras de incorporación de extranjeros. La inmigración europea prácticamente cesó a partir de 1930, lo que incidió en el declive de la participación de extranjeros en el total de la población porteña: de 45,6% en 1909 ascendió a 49,3% en 1914, para descender de manera brusca a 35,1% en 1936 y a 27,5% en 1947. Como puede observarse, en 1914 el número de argentinos superaba de manera escasa al de extranjeros, mientras que en 1936 sólo un tercio de la población había nacido fuera del país. Esta “argentinización” de los sectores populares se convirtió en un factor de primera magnitud como constituyente de las nuevas formas de la cultura popular.

En forma simultánea, los migrantes internos comenzaron a adquirir una importancia creciente. En 1936, el número de porteños se había incrementado en 260.000 personas, con respecto a la estimación de 2.153.179 hecha para 1930. Tal incremento se debió, sobre todo, al crecimiento vegetativo y a la inmigración de trabajadores de las provincias: en 1914, un 18% de la población nativa había nacido fuera de los límites de la ciudad de Buenos Aires, y en 1936, un 24%. A mediados de la década de 1940, ese porcentaje se elevó al 44%. Los trabajadores nativos nacidos en las provincias, que habían constituido menos de la mitad de la fuerza de trabajo de la ciudad de Buenos Aires en 1914, llegaron a representar hacia 1940 unas tres cuartas partes de los empleados en las mayores ocupaciones industriales.

Pero no sólo los cambios en el origen de la población influyeron en la fisonomía y la cultura de los sectores populares urbanos. También lo hicieron las variaciones en la composición por sexos. La inmigración masiva del período previo había hecho que el pre-

dominio de los hombres sobre las mujeres fuera especialmente relevante en los tramos de edades activas. Sin embargo, el índice de masculinidad bajó en Buenos Aires, desde un 117,2 en 1914 a un 99,3 en 1936 y a un 94,5 en 1947. Hacia mediados de la década de 1930, el número de mujeres ya sobrepasaba ligeramente al de hombres, superando una diferencia en favor de aquéllos que era de 120.000 en 1914. Más allá del cambio cuantitativo, se produjeron algunas transformaciones significativas en las condiciones de vida y en las expectativas de las mujeres de clase media y alta, que no parecen haberse difundido en la misma proporción en los sectores populares. La legislación aprobada en 1926, que fijaba, incrementándolos, los derechos legales de la mujer, fue un primer paso importante, a pesar de que seguía manteniendo algunos aspectos discriminatorios.

Otra importante característica de este período fue el cambio en la distribución por edades: en la década de 1930 los jóvenes, adultos de ambos sexos, ya dominaban la ciudad y cambiaron en buena medida su tono vital. La esperanza de vida pasó de 48,63 años en 1913/15 a 59,44 en el 35/37 y a 65,24 en 1947.

Los efectos de la educación pública también se hicieron notar. En Buenos Aires, por ejemplo, los analfabetos pasaron de ser un 54,4% en 1895 al 35,1% en 1914, y a 12,6% en 1938, lo que devino en la presencia de un mayor número de personas en condiciones de acceder a instrumentos de capacitación más formales que la sola experiencia. El cruce de esta realidad con la particular evolución del mercado de trabajo, que se destacó por una notable demanda de empleados en los servicios administrativos públicos, privados y de especialidades, influyó en la emergencia de una peculiar avidez por capacitarse, que se convirtió también en otro de los rasgos más típicos de los sectores populares durante este período.

LOS SECTORES POPULARES Y LA EXPERIENCIA URBANA

Viejos y nuevos barrios

Uno de los procesos que más contribuyeron a la transformación de la identidad de los sectores populares urbanos durante el período de entreguerras, y que dejaron huellas indelebles en su cultura,

fue la constitución de numerosos barrios nuevos, en particular en Buenos Aires pero no sólo allí.

La desconcentración de los sectores populares de Buenos Aires fue un proceso que venía sucediéndose de forma continuada desde principios de siglo. A los barrios más tradicionales —San Telmo, Barracas, La Boca, San Cristóbal, Balvanera, y el Norte— que a fines del siglo rodeaban el Centro, se agregó una primera periferia ya visible hacia 1910: Almagro, Caballito, Flores, Belgrano, el bajo Belgrano, Palermo o Villa Crespo.

Varios factores explican estas transformaciones: el tranvía eléctrico constituyó un cambio notable en la vida de una ciudad que, con una superficie de 18.854 hectáreas, era ya hacia principios de siglo una de las más extensas del mundo. Superior al tranvía a caballo, vino a facilitar el acercamiento a la periferia, junto con el ferrocarril suburbano y el subterráneo, nuevo medio de transporte inaugurado en 1913, que sería ampliado y mejorado en las décadas de 1920 y 1930, al que se agregó a partir de 1928 el colectivo. Pero el poblamiento de los suburbios fue posible fundamentalmente por otro factor: la difusión de los remates de lotes en cuotas mensuales, cuyas facilidades de pago pusieron los terrenos al alcance de un mayor número de familias.

En la década de 1920, ese desplazamiento de los sectores populares urbanos se intensificó, en especial hacia las zonas sur y oeste. Además de los factores mencionados, incidieron en este proceso la diferencia en el costo de los arrendamientos y el inicio de la instalación de fábricas y talleres en las áreas periféricas, proceso que se extendió también de manera importante en los años treinta.

Tal fue la magnitud del fenómeno de surgimiento de nuevos barrios que se ha considerado a este período como una “época dorada” de desarrollo físico y demográfico de la ciudad. En efecto, durante esos años se produjeron importantes transformaciones: entre 1920 y 1940, por ejemplo, se duplicó la superficie total pavimentada, y ya hacia 1930 prácticamente toda la ciudad tenía luz eléctrica. En otras ciudades del país, como Rosario y Córdoba, tuvieron lugar procesos con características similares.

El centro de la ciudad sufrió también grandes mutaciones que impulsaron a intelectuales contemporáneos a escribir sobre su vida agitada de gran urbe y su despersonalización. Pero esta cuestión afectó menos a los barrios, que siguieron manteniendo durante bastante tiempo un aspecto semirrural.

Si bien durante esta etapa todos los distritos urbanos porteños registraron un fuerte crecimiento, las cifras correspondientes a Vélez Sarsfield, San Bernardo y Belgrano fueron particularmente asombrosas. Entre 1914 y 1936, estas tres áreas crecieron desde unas 300.000 personas, el 20% del total de la población de la ciudad, a cerca de un millón, el 40% de la población total.

La misma pauta de crecimiento y desplazamiento del centro a los suburbios continuó de manera firme en la década de 1930. Muchos contemporáneos se sorprendieron ante la rapidez con que se expandían los nuevos barrios, que relegaba a los vecindarios con más de quince años de antigüedad a la categoría de “barrios viejos”. Durante los años treinta, en la Capital, también crecieron en forma notoria los vecindarios de Parque Patricios, Pompeya, Mataderos, Villa Soldati, Villa Lugano, La Paternal, Versailles, Vélez Sarsfield, Saavedra, Villa Devoto y Villa Urquiza. Estas denominaciones nuevas se refieren a unidades urbanas amplias, que a menudo encierran otras menores como Villa Malcolm o Villa Mitre, y muchas otras que no llegaron a institucionalizar un nombre. A estas últimas corresponde de manera más estricta la denominación de barrios.

La experiencia de la vivienda propia

Este proceso de descentralización urbana o suburbanización, tan importante para la particular evolución de los sectores populares, puede ser conceptualizado también como el conjunto de las miles de expe-



Barrio Versailles, diciembre de 1930.

riencias personales y familiares que se vieron involucradas en la aventura de adquirir una vivienda propia. Esta cuestión, por su destacado valor simbólico, pasó a ocupar un lugar muy importante en la cultura popular.

El pasaje de la pieza del conventillo en el centro a la vivienda unifamiliar en un barrio se ha convertido en un lugar común a la hora de describir la evolución urbana y la experiencia de los sectores populares. Esta constatación ha dado pie también a una mirada francamente optimista con respecto a la suerte de estos sectores durante el período. No sorprende, entonces, que los datos de la evolución de la habitabilidad popular, que señalan que mientras en 1919 el 10% de la población vivía en conventillos, en 1927 sólo lo hacía un 5%, hayan sido utilizados de manera preferente para apuntalar la afirmación de que el nivel de vida de los sectores populares porteños mejoró en la década abierta en 1920.

Con el tiempo, sin embargo, la centralidad del conventillo como hábitat de los sectores populares, que trabajos pioneros consideraban un fenómeno casi obvio, ha sido cada vez más discutida. En efecto, se calcula que tanto antes como después del surgimiento del primer cinturón suburbano, el conventillo dio cobijo a menos de un cuarto de la población de la ciudad.

Por lo tanto, debe admitirse que el aspecto más destacable de las formas de habitabilidad popular fue su notable heterogeneidad: habitaciones en hoteles baratos, fondas y conventillos, la propia fábrica, taller o comercio, habitaciones que se dedicaban a ese fin en las propias residencias de la elite y la vivienda unifamiliar fruto de la autoconstrucción. Al respecto, Liernur ha descrito un mundo cuantitativamente significativo, oculto en los lugares más insospechados, la ciudad efímera, que estaba allí, agazapada y precaria, esperando la mirada atenta que la descubriera al invertir fondo y forma.

Pero si el punto de partida de la peripecia popular con respecto a la vivienda propia no fue tan sencillo, el punto de llegada tampoco lo fue. La imagen idílica de la casita en el barrio oculta un sinfín de cuestiones distintas y contradictorias. En efecto, las experiencias satisfactorias, que fueron muchas, se vieron acompañadas más de una vez por serias decepciones. Éstas fueron el resultado de la precariedad de los materiales disponibles y, sobre todo, de dificultades medioambientales originadas por una especulación exagerada, que llevaba a lotear zonas inundables y no muy aptas

para erigir viviendas. En consecuencia, subsiste el interrogante acerca de la enorme diversidad de situaciones concretas incluidas bajo el rótulo común de “vivienda propia”.

El tipo de vivienda determinó también importantes aspectos de la sociabilidad de los sectores populares, hecho muy notorio en el pasaje del conventillo a la vivienda unifamiliar en un barrio, polos extremos de ese *continuum* de experiencias populares vinculadas a la vivienda. A estos efectos, es útil tener en cuenta la recurrente pregunta de Leandro Gutiérrez: ¿qué tipo de familia era posible en la pieza del conventillo?

Más allá de estos matices, en la medida que importantes cantidades de trabajadores adquirieron su casa propia, fueron cambiando sus pautas de comportamiento. A partir de entonces, la búsqueda de un nuevo tipo de privacidad modelada sobre los estilos de la vida cotidiana de las clases medias se tornó cada vez más importante. Pero, al mismo tiempo, ese tipo de sociabilidad orientada hacia el interior coexistía con otro que se dirigía hacia fuera, cuyos focos eran la calle, la cuadra, el café, la plaza y el almacén. Por lo tanto, pueden encontrarse en los comportamientos populares tanto rupturas como continuidades: en ciertas cuadras, esquinas y almacenes de los nuevos barrios, muchos vecinos, también ellos inmigrantes aunque sus hijos fueran ya muy porteños, buscaban de manera febril y muchas veces inconsciente reproducir el tipo de sociabilidad que los había marcado durante su paso por el conventillo o la fonda céntrica meses o años antes, pero, sobre todo, aquella otra mucho más fuerte y arraigada, la de sus propios pueblos de origen.



Boedo en 1941.

LA NUEVA SOCIABILIDAD POPULAR

Los nuevos barrios fueron núcleos sociales de notable peculiaridad, diferenciados de manera bastante clara de los antiguos asentamientos obreros —de los cuales el centro y La Boca constituyen buenos ejemplos para la Capital—, que siguieron conservando su importancia y sus características típicas. Por su parte, los nuevos barrios, distantes en general de los lugares de trabajo, se convirtieron en los ámbitos del ocio popular, que comenzaba a nacer gracias a la reducción de la jornada de trabajo y de la nueva vida familiar. Por ello mismo, se transformaron en espacios donde los sectores populares experimentaron con nuevos mecanismos de transición entre lo privado y los ámbitos públicos.

Como parte de un proceso más amplio de redefinición del vínculo entre los sectores populares y las distintas facetas de lo



Villa Crespo, octubre de 1930.

urbano —material, social, cultural y simbólica—, la calle y el umbral, lugares predilectos para charlas y reuniones informales, adquirieron un nuevo sentido social. Otros aspectos de esta redefinición fueron el surgimiento de heterogéneos ámbitos de sociabilidad institucionalizada y la centralidad que en forma creciente comenzó a adquirir la práctica deportiva.

La característica central de los barrios nuevos fue que su tono social y cultural estuvo connotado por una peculiar yuxtaposición entre sectores del mundo del trabajo y de las capas medias, conformadas en gran medida por empleados, funcionarios y profesionales hijos de inmigrantes. Esta amalgama de sectores sociales facilitó a su vez el surgimiento de redes de sociabilidad características, en las cuales ciertos sectores, como los maestros, comenzaron a cobrar una novedosa influencia.

Todavía a lo largo de los años treinta, la mayoría de estos barrios fueron instalaciones aisladas unas de otras. Buena parte de sus edificaciones eran quintas y sólo había unas diez o doce viviendas por manzana, rasgo que fue desapareciendo poco a poco durante el periodo gracias a la realización de nuevos loteos.

Las sociedades que allí surgieron fueron por lo tanto sociedades en construcción, casi de frontera, donde las perentorias necesidades de los primeros habitantes impulsaron un tipo peculiar de acción colectiva. Esta situación, en la que se vio inmersa una parte importante de los sectores populares urbanos, está por lo tanto en el origen mismo de otra de las características de la cultura popular de los años treinta, así como del completo período de entreguerras: su marcada inquietud asociativa.

A mediados de la década de 1920, un periódico barrial mostraba su sorpresa ante el “alarmante crecimiento del número de clubes, sociedades, comités y asociaciones de toda índole que observa nuestro barrio”. Con humor expresaba a continuación: “¡Es que viene el fenómeno! ¿El fenómeno? Sí, el único vecino del barrio que no ha fundado ningún club o sociedad”.

Los nuevos espacios de sociabilidad barrial se conformaron de manera febril. Muchos de ellos nacieron de forma espontánea, para ir institucionalizándose más adelante. Primero fueron las reuniones informales en la calle, la esquina o el almacén. Luego los cafés o los clubes, centros de actividades recreativas que estaban en el eje mismo de la vida barrial. Junto a ellos se desarrollaron la sociedad de fomento y el comité partidario, que fueron expresión de

la colaboración vecinal tanto para construir su hábitat como para incorporarse al mundo político.

Tal afán asociativo fue, como ha sido señalado, producto directo del proceso de suburbanización, pero también lo fue del mayor entrecruzamiento de iniciativas provenientes de distintas esferas sociales e institucionales. En el caso de Buenos Aires, fue en primer lugar la respuesta de los diversos vecindarios de la ciudad, es decir, de su gente, a su situación de relativo aislamiento, a la precariedad del equipamiento urbano y a la necesidad de establecer en forma rápida nuevas redes de relación. Sin embargo, estas asociaciones nacientes se vieron también influidas por intentos reformistas que tuvieron otros orígenes: las transformaciones socio-políticas y, sobre todo, la creciente influencia de ciertas acciones del Estado.

Dado el importante papel que cumplieron en el procesamiento de la experiencia colectiva, tales asociaciones se convirtieron, con el correr del tiempo, en los ámbitos públicos más característicos de los respectivos vecindarios. El entretejido de relaciones sociales que se fue urdiendo entre estas instituciones y otros ámbitos más definidamente informales conformó un área de sociabilidad y de inquietudes típicamente barriales, que dotaban de una identidad específica a los sectores populares de una zona determinada.

Desde su mismo nacimiento, las nuevas asociaciones populares se abocaron con intensidad a generar actitudes participativas. Al mismo tiempo, se vieron a sí mismas como sustitutas a la vez que promotoras de la intervención estatal, sobre todo en cuestiones vinculadas al equipamiento urbano y a la educación. Muchas consideraban, sin embargo, que su tarea fundamental consistía en convertirse en “ámbitos donde se forja la mentalidad del pueblo”.

Debido a la amplitud de sus objetivos iniciales resulta, en muchos casos, bastante difícil diferenciar entre distintos tipos de asociaciones populares. En efecto, las primeras asociaciones que nacieron con los vecindarios, en la década de 1920, tendieron a incorporar en su seno todo tipo de actividades: culturales, relacionadas con la gestión urbana, recreativas e incluso deportivas.

En la década de 1930, estas asociaciones polifacéticas tan típicas fueron eclipsadas en gran parte por otras instituciones con mayor especificidad, fenómeno vinculado al propio crecimiento urbano y a una cierta “masificación” y mayor segmentación social y cultural de los barrios. Pueden establecerse, sin embargo, algu-



Nicolás Repetto (centro) visita un local socialista, 1935.

nas diferencias entre asociaciones cuyo objetivo principal fue el fomentismo o la gestión de mejoras urbanas, y aquellas otras con fines específicamente sociales, deportivos o culturales, como clubes, bibliotecas y academias.

Un fenómeno al que no siempre se ha prestado la debida atención es la vinculación estrecha que existió entre el crecimiento del número de asociaciones y la intensificación del espíritu competitivo, sobre todo a nivel institucional, en determinados sectores de los barrios. Este fenómeno fue verdaderamente complejo y si bien en términos generales benefició a los vecindarios como conjunto, en muchas ocasiones derivó en un aumento del localismo “de cuadra”, que tuvo como corolario la emergencia de conflictos y hostilidades. Algo similar sucedió con la notable diversificación asociativa, que originó una particular tensión entre “cultura” y deporte, fenómeno al que los clubes e instituciones “sociales” más antiguos trataron de amoldarse lo mejor posible, muchas veces mediante la fusión con otros emprendimientos recientes.

Dentro del conjunto de estas asociaciones, las bibliotecas

barriales se destacaron por su importante papel en la conformación de nuevas redes de sociabilidad, y por representar los casos más nítidos de confluencia entre las expectativas, afanes y gestión populares y otras instancias institucionales y políticas. Muchas de las bibliotecas fueron impulsadas por los mismos sectores populares para cubrir necesidades muy sentidas por los vecinos, como las creadas en clubes y sociedades de fomento. Las denominadas “bibliotecas populares” fueron, en cambio, producto de la iniciativa estatal e impulsadas institucionalmente por disposiciones del Concejo Deliberante entre 1927 y 1928. La iniciativa municipal no se limitó sólo a ese tipo de intervención sino que, mediante donaciones, también incidió en la propia marcha de aquellas otras bibliotecas creadas de manera espontánea por los propios vecinos. Los partidos políticos cumplieron también un papel de primera magnitud en la creación de bibliotecas barriales. En Buenos Aires, se destacó de manera notable en tal actividad el Partido Socialista, que en el año 1932 contaba ya con 56 bibliotecas.

Como ámbitos populares que eran, las bibliotecas cumplieron una labor amplia y polivalente y de ningún modo se limitaron a las tareas relacionadas con los libros y la lectura. Desarrollaron también otras actividades culturales, de tipo recreativo e incluso deportivo, actividades que en las bibliotecas surgidas de manera más espontánea llegaron en ocasiones a doblar en importancia a la actividad nominalmente principal.

Las conferencias o “veladas culturales” organizadas por las bibliotecas se convirtieron en los eventos más importantes, y a la vez más característicos, de la nueva sociabilidad popular que se estaba conformando. Se trató de actos a los cuales el vecindario se volcó en forma masiva y que se caracterizaron por su heterogeneidad: en ellos la conferencia propiamente dicha, que también podía cubrir una amplísima gama temática, era acompañada por actuaciones musicales, teatrales y una multiplicidad de otras actividades llevadas a cabo a veces por personas invitadas especialmente, y en general por profesores y alumnos de academias y conservatorios de la zona. En muchas ocasiones, tales veladas culminaban en un baile popular.

Lo importante de estos eventos culturales fue, en primer lugar, que rápidamente adquirieron un valor simbólico para vecindarios que los concebían como elementos de progreso colectivo y espacios de participación. En segundo término, las conferencias, al

mismo tiempo que fueron eficaces mecanismos de participación, también sirvieron para canalizar determinados intentos de diferenciación en el seno de los vecindarios. De estos últimos derivó el tono formal y a veces “acartonado” de algunas de las intervenciones y actividades, y las temáticas un poco desfasadas con respecto a un público barrial, que cada tanto se abordaban. Puede afirmarse en consecuencia que las conferencias organizadas por bibliotecas y asociaciones barriales pusieron en juego imágenes de identificación y diferenciación, muy propias del horizonte de expectativas de esa amalgama social que eran los sectores populares barriales de la época.

Por otra parte, a pesar de la típica alta concurrencia de estos actos, no todos los vecinos se hicieron eco de las invitaciones institucionales. Muchos se mantuvieron indiferentes e incluso otros mostraron su hostilidad, actitud que dio lugar en más de una ocasión a ciertas tensiones y disputas.

Como actos masivos que eran, las conferencias o veladas culturales se diferenciaron de aquellas otras actividades vecinales orientadas hacia públicos específicos: jóvenes, deportistas o melómanos. A su vez, como actos culturales y recreativos, representaron un espacio para la participación y “presentación” de “las familias” en la sociedad barrial. Tal característica les otorgaba un tono social específico y reforzaba al propio tiempo su papel, pero sobre todo el de las instituciones que las organizaban, como ámbitos mediadores o de pasaje entre lo privado y lo público.

Otra cuestión notoria en las conferencias fue la alta participación femenina, reflejo de la importancia de las mujeres en los nuevos ámbitos de la cultura popular y en el vecindario. Esto tuvo una correlación estrecha con los temas abordados, sobre todo en la década de 1920, en que la promulgación de los derechos civiles de las mujeres provocó una cierta agitación.

La importancia adquirida por las bibliotecas y las conferencias se mostraba en plena consonancia con la presencia de unos sectores populares ávidos por capacitarse y por adquirir un tipo de cultura vinculada a nuevas formas de ocio que comenzaba, recién entonces, a ser experimentado por ciertos sectores del mundo del trabajo y por las capas medias nacientes.

Paralelamente, ese impulso asociativo e institucional dio lugar a un tipo particular de distinción cuya expresión más llamativa fue la emergencia de unas nuevas elites barriales, importante indicio

de las profundas mutaciones que estaba sufriendo la cultura popular, entendida en sentido amplio. Esas elites, que en muchas ocasiones se definían a sí mismas como los “vecinos conscientes”, estuvieron conformadas por empleados públicos que pusieron al servicio de las asociaciones toda su experiencia administrativa y de gestión, algunos “vecinos caracterizados” —en general médicos y comerciantes— y algunos trabajadores que se destacaron por su intensa actividad asociativa. Sin embargo, en muchos vecindarios, especialmente en aquellas zonas donde la impronta de los sectores medios era más notoria, los “vecinos conscientes” tendieron a identificarse cada vez más con los “vecinos caracterizados”. En estos casos, desarrollaron actitudes con un alto grado de ambivalencia con respecto al resto del vecindario: por una parte, fomentaban la participación y la solidaridad, y por otra, proclamaban un tipo peculiar de diferenciación y segmentación. La democracia en el barrio presentaba también sus bemoles.

Pero existían otras facetas de la ambivalencia de las elites barriales, menos orientadas hacia la generación de distinciones internas. Algunas de estas elites, por ejemplo, sin dejar de lado su papel en la búsqueda y construcción de la especificidad barrial,



Barrio Montserrat hacia 1930.

actuaban al mismo tiempo como intermediarias frente a procesos, campos o “ambientes” más generales. Con ello trataban de mostrar lo similar, lo que más bien podía unir o identificar al vecindario con la gran urbe. Esto fue muy notorio en el caso específico de los militantes culturales, en su mayoría docentes, cuyo papel como mediadores se distinguió en forma bastante clara del asumido por las elites sociales o económicas de los vecindarios.

Las situaciones descritas muestran la importancia de la transformación a que se vio sometida la cultura de los sectores populares en el período, debido al predominio de una sociabilidad distinta y a la amalgama entre sectores medios y del mundo del trabajo que comenzaba a producirse en los nuevos barrios. Tal cultura popular adquirió rasgos cada vez más nítidos: solidaridad, participación y, sobre todo, heterogeneidad social. Pero, junto a tales características, se hicieron cada vez más evidentes los intentos de establecer jerarquías y marcar diferencias externas e internas, que dieron lugar a no pocos conflictos.

EL ENTRAMADO SOCIAL Y POLÍTICO

Otra cuestión de vital importancia para medir la magnitud de los cambios que se estaban produciendo en la conformación y cultura de los sectores populares es su relación con el mundo de la política. Tras haber sido considerado en los años precedentes como algo ajeno y hostil, el mundo de la política pasó a ser concebido, al igual que el Estado, como un ámbito que si bien no ofrecía demasiadas posibilidades de participación, sí permitía, en cambio, la obtención gradual de beneficios colectivos y personales. Incidió en este cambio el distinto sentido que adquirió el vínculo entre la política local y la general, provocado por la transformación de las estrategias e instituciones partidarias, que trataban ellas también de amoldarse a los cambiantes estilos populares del período.

En Buenos Aires, pocos años después de la Ley Sáenz Peña, la ley 10.240, de Reforma de la Carta Orgánica Municipal de la Capital Federal, introdujo cambios sensibles en la composición del Concejo Deliberante, al permitir que se incorporaran en proporciones destacadas miembros de las capas medias y de otras fracciones de los sectores populares. Con ella se inició una etapa de reformismo, tanto a nivel de funcionamiento político como de la

gestión de las mejoras urbanas, en el que se vio involucrada una parte de los nuevos sectores populares que comenzaban a afianzarse por entonces.

Como consecuencia de tales reformas, la UCR y el Partido Socialista, que contaban con los favores de importantes grupos populares y en buena medida los representaban, comenzaron a ocupar un lugar central en la política de la Capital Federal, relegando a los conservadores, intérpretes de los intereses de las elites sociales, al lugar de una minoría frecuentemente insignificante.

Sin embargo, varios elementos enturbiaron el desarrollo de la democracia a nivel local, especialmente en la década de 1930. Uno de ellos fue que, dada su importancia para el gobierno central, la ciudad de Buenos Aires se vio afectada por decisiones sobre las cuales las autoridades locales sólo tuvieron un control limitado. El espíritu que guió la reforma urbana se vio afectado además por el rechazo, en 1916 y 1917, de dos propuestas específicas: la de la Cámara de Diputados de que se otorgara el voto a ciertas categorías de mujeres, solicitada por un representante demócrata progresista, y la negativa del Senado a convertir en electivo el cargo de intendente. Tales decisiones, además de introducir fisuras en el funcionamiento democrático de la ciudad, ayudaron a erosionar la fe en la capacidad de las autoridades electas para gestionar los intereses urbanos, según se vio durante la peculiar evolución política de los años treinta.

A pesar de todas aquellas insuficiencias, las reformas mencionadas implicaron importantes cambios a nivel de la composición del elenco político. Si bien los beneficiarios directos fueron los radicales y los socialistas, el voto proporcional permitió que entraran a participar otras formaciones como el Partido Comunista, que mantuvo en general siempre a un representante, hasta la década abierta en 1930. Gracias a él también pudieron acceder al Concejo pequeñas formaciones que intentaban defender intereses particulares, como el Partido de la Salud Pública y el de Gente del Teatro, cuyo voto se convirtió en decisivo en ciertas coyunturas específicas.

Uno de los efectos más importantes de estas transformaciones fue el acicate que significaron para la propia organización de los sectores barriales. En realidad, las reformas legales apuntalaron de una manera importante el boom asociativo de la época, fenómeno que se trasladó al plano institucional en 1927, con la apro-



Mujeres del Partido Socialista en la campaña de 1930.

bación de la ordenanza que regulaba la creación y las actividades de las instituciones vecinales y de fomento.

En el plano más específico de la organización partidaria, ya hacia 1918 los radicales habían desarrollado una importante y eficaz maquinaria política y electoral. Ésta se basaba, fundamentalmente, en la figura del caudillo barrial, que proveía servicios a los vecinos afines y ejercía un tipo característico de patronazgo. Para ese entonces, los líderes de la UCR y del Partido Socialista ya habían elaborado un claro y sofisticado entendimiento de la composición social y de la distribución del electorado de Buenos Aires, a partir del cual construían sus respectivas apelaciones. Tanto unos como otros confeccionaban sus programas tratando de afianzar alianzas entre distintas fracciones de los sectores populares. A nivel nacional y municipal, los aspirantes a puestos políticos y los que ya los ocupaban respondían de manera habitual a los requerimientos específicos de determinados distritos teniendo siempre en mente su respectiva composición social.

Entre 1918 y 1930, los radicales tuvieron algunas claras ventajas en este aspecto, dado que controlaban la administración a nivel

nacional y con ello dispusieron del enorme poder de dispensar favores, particularmente bajo la forma de empleos. El control de la administración a nivel nacional también implicó un importante manejo de la administración y la política local a través de la figura del intendente, con lo que se amplió de forma notable la influencia del partido en la ciudad. La fuerte apelación de los radicales a los hijos de inmigrantes fue también un factor que actuó a su favor de manera decisiva.

Sin embargo, a pesar de las notorias ventajas acumuladas por los radicales, los socialistas se las arreglaron muy bien para plantear una importante y pareja competencia por los favores de los sectores populares de la ciudad. Sin duda, fue la peculiar conformación de estos sectores la que actuó como trasfondo social de las estratégicas oscilaciones programáticas y organizativas del Partido Socialista, que si bien se constituyó en un partido de nítida orientación socialdemócrata, adoptó el modelo organizativo propio de los partidos liberales norteamericanos. Con este tipo de organización, y conservando el apoyo de los distritos donde la presencia de trabajadores era más densa, los socialistas llegaron incluso a adentrarse en los sectores medios, más proclives a los radicales. A su vez, aprovechándose de sus disputas internas, alcanzaron algunos triunfos importantes, a nivel local y nacional, con lo que lograron mantener una presencia destacada tanto en el Congreso Nacional como en el Concejo Deliberante.

El dominio del Concejo ejercido por radicales y socialistas modificó de manera irrevocable su naturaleza, su tono y su actividad respecto de la etapa anterior. En este cambio el papel de los socialistas fue clave dado que, si bien sólo contaban con un tercio de los ediles, las tres cuartas partes de los proyectos e iniciativas fueron suyos.

Los concejales socialistas, y a veces también los diputados, realizaban visitas semanales a los distritos para estar al tanto de determinados problemas y escuchar a los vecinos. Las visitas eran realizadas por iniciativa de los propios concejales, pero muchas veces obedecían al pedido de grupos y asociaciones populares que les dirigían peticiones previas. Los radicales también intervinieron en estas cuestiones y adoptaron muchas veces las mismas iniciativas.

Puede hablarse, entonces, de la constitución de una densa trama social y, especialmente, política, producto del entrecruzamiento

de las actividades de los representantes políticos, de las máquinas partidarias, de los caudillos locales, de las elites barriales y de los afanes reivindicativos del conjunto de los sectores populares afincados en vecindarios. Poco se sabe, sin embargo, de la medida exacta en que las máquinas partidarias y el clientelismo expresaron la nueva cultura popular de la época. Lo que sí resulta evidente es que de ninguna manera los sectores populares fueron meros sujetos pasivos de las estrategias partidarias.

Puede observarse también cómo la gestión municipal y la política (la menuda y la amplia) fueron los espacios donde el pragmatismo y la ambivalencia típica de las elites barriales y de sus asociaciones se manifestaron de manera más acusada. Característica fue, en tal sentido, la actitud asumida por muchos dirigentes vecinales con respecto al Concejo Deliberante: a pesar de las abundantes y frecuentes críticas que vertían sobre una institución que consideraban mero instrumento de la lógica partidaria, estaban unidos a ella por un férreo proceso de negociación permanente, similar, en algún aspecto, al que se desplegaba en el mundo sindical. Este proceso llegó a convertirse en uno de los rasgos más típicos del período, incluso luego de que el golpe de 1930 cambiara radicalmente el marco político general. Tales actitudes cobran mayor importancia si se las compara con aquellas otras, clásicas de los sectores populares de los períodos previos, orientadas por sectores más contestatarios.

Lo más curioso de las críticas populares al funcionamiento “político” del Concejo fue, sin embargo, el hecho de que provenían de dirigentes y vecinos que en gran parte eran también militantes de los mismos partidos y que, como tales, difícilmente podían sustraerse a su influjo. Un caso típico fue la ola de politización que sacudió a las asociaciones vecinales y tiñó muchas de sus actividades reivindicativas durante los años 1925-1929, fruto en buena medida de conflictos y divisiones originados dentro de los mismos partidos populares.

La trama político-social así constituida fue quebrada en parte por los sucesos políticos de 1930, que tuvieron como consecuencia inicial el vaciamiento de su sentido más participativo. Dicho año representó un claro punto de ruptura a partir del cual las fuerzas conservadoras recuperaron, mediante una amplia combinación de mecanismos antidemocráticos, la influencia que habían perdido en el gobierno y en el campo político. El retorno a la competen-

cia electoral del radicalismo, producido en 1935 al levantarse la abstención partidaria, provocó algunos cambios de tendencia.

El juego partidario característico de la etapa previa al golpe fue el fiel reflejo de la actitud de unos sectores populares, subordinados pero mucho más pragmáticos, cuyo espíritu plenamente adaptado a la posibilidad de obtener mejoras graduales fue poco permeable a la hegemonía de una sola fuerza política. Esta forma de pensar y sentir dio origen a una multiplicidad de estrategias y actitudes. Muchas de ellas estuvieron, obviamente, detrás de las reivindicaciones y logros obtenidos de forma colectiva. Otras, en cambio, dieron lugar a las luchas de facciones partidarias y a los liderazgos personales.

Ante la nueva etapa que se iniciaba con el golpe de setiembre de 1930, a la que algunos han denominado “reformismo sin partici-

pación”, el movimiento vecinal popular no respondió de manera uniforme.

Dicho movimiento, que en los años finales de la década de 1920 había pasado por un auge organizativo cuyos puntos culminantes fueron la creación de una Junta Central de Barrios conformada por los propietarios de las “casas baratas” y varias confederaciones vecinales, se dividió en forma drástica y entró en una profunda crisis. Destacados dirigentes e instituciones vecinales se vieron tentados a participar en los experimentos del gobierno de Uriburu de crear una Junta de Vecinos Nota-



Escena callejera en Buenos Aires, febrero de 1930.

bles y un Concejo Deliberante de características corporativas. Esas propuestas fueron, en cambio, objeto de la más profunda repulsa por parte de un número importante de otras asociaciones. Desde estos ámbitos se consideraba el experimento gubernamental como “perfectamente ilegal” a la vez que se lo tachaba de “anacronismo intolerable”. Se agregaba seguidamente que tal intento corporativo “repugna a nuestro sentimiento democrático por su aspecto calificado y excluyente”, fundamentalmente porque “la ciudad no puede descomponerse en almaceneros y zapateros, en boticarios y panaderos. Para la ley sólo hay ciudadanos”.

Para muchas asociaciones populares de esta índole, sin duda, comenzaba un importante reflujó, producto del quiebre de la trama socio-política en relación con la cual encontraban su propia razón de ser. Muchas, sin embargo, no se resignaban, e intentaban reproducir y conservar de manera militante y testimonial en el plano interno aquellas características que se estaban perdiendo en los niveles más generales de la política y la gestión urbana. De tal manera, comenzaron a hacerse nuevos llamamientos para agilizar la vida interna de las instituciones. Uno de ellos expresaba en aquellos acuciantes momentos: “Deben crearse núcleos de propaganda, listas de candidatos, campañas para la elección de los mejores, vida democrática, en fin...”

Para ese entonces, la sociedad comenzaba a experimentar serios cambios, que auguraban otros mayores todavía. Éstos fueron particularmente visibles en la política nacional y local y, sobre todo, en la nueva fisonomía que comenzaban a adquirir los sectores populares.

OTRAS FACETAS DE LOS SECTORES POPULARES

Entre estos sectores comenzaron a emerger un conjunto de prácticas y pugnas de alto contenido simbólico relacionadas, sobre todo, con el auge de la práctica deportiva y con la constitución de un “público deportivo”.

Ya desde el comienzo del período de entreguerras, y durante los años treinta, el mundo del deporte y los entretenimientos experimentó una notable expansión, paralela al incremento de su práctica profesional, que tuvo como principal efecto crear espacios y actores nuevos, en especial alrededor del fútbol. Tal expansión se

relacionaba con la creciente permeabilidad de los sectores populares y de los gobiernos hacia discursos provenientes de movimientos con afanes universalistas, como el olímpico o el que condujo a la organización de los primeros certámenes mundiales de fútbol.

Otro rasgo destacado de la realidad social que acompañó al auge del fútbol como espectáculo popular fue la mejora paulatina de los niveles de ingresos de los trabajadores y el aumento de sus posibilidades de tiempo libre, situación que se afianzó a partir de mediados de la década de 1930 y, de modo más notorio, en la de 1940.

Fue en este período cuando comenzaron a adquirir relevancia social tanto el espectador moderno como la “hinchada”, papeles y espacios nuevos desempeñados mayoritariamente por miembros de los sectores populares. El auge de tales actores y prácticas estuvo emparentado, de manera estrecha, con la consolidación de ciertos modos de expresión popular, generalmente masculinos, que combinaron nuevas formas de pasividad y actitudes predominantemente imaginarias con el protagonismo activo de ciertos grupos de “aficionados”. Se prefiguraba ya el futuro “espectáculo de masas”.

Junto a estos nuevos actores, espacios y prácticas populares, comenzó a destacarse de una manera creciente el carácter heroico, nacional y de gesta de aquella “pasión de multitudes” en que comenzó a convertirse el fútbol, y de aquel “amor a los colores”, que eran los del club, que se entremezclaban y confundían con los del barrio, o con sus facciones.

Junto con el crecimiento del “amor por los colores”, la difusión del amateurismo marrón —que suponía una velada forma de pago a los deportistas—, y luego del profesionalismo, y la consecuente consolidación del espectáculo deportivo, surgió también la figura del “ídolo” popular, cuyas proezas estaban destinadas a perdurar durante largo tiempo en la memoria colectiva. Gracias al apoyo de la prensa y de la radiodifusión, personajes como el “Olímpico” Orsi o Miguel Ángel Firpo, el “toro de las pampas”, se convirtieron en arquetipos dignos de ser adorados por unos nuevos sectores juveniles populares y, sobre todo, por aquellos que, situados en los peldaños más bajos de la escala social, los observaban con una mirada que entreveía en la emulación una perspectiva alternativa de ascenso social.

Si bien esta nueva forma del sentir popular —masculina y juve-



Partido San Lorenzo-Atlanta, revista Ahora, 1936.

nil— se canalizó principalmente a través del fútbol, también lo hizo por medio del básquet, expresión de cambios notorios en la ocupación de los espacios urbanos, e incluso de otros deportes como la pelota a paleta, de curioso y notable arraigo, magnífica amalgama entre lo nacional y lo inmigratorio, y entre lo deportivo y el mundo de las apuestas.

Estos nuevos modos de expresión cultural de los sectores populares, que los contemporáneos definían como pasionales, ayudaron a su vez a la consolidación de los clubes deportivos, instituciones que hacia la década de 1930 se convirtieron en verdaderos símbolos locales y de pertenencia barrial. Para ciertos “aficionados”, esa pertenencia llegó a definirse, sobre todo, por oposición a sus rivales.

A medida que fueron transformándose cada vez más en espectáculos multitudinarios, ciertas competencias deportivas abandonaron su carácter de gestas barriales para asumir un perfil más general y difuso, que en algunos casos alcanzó la categoría de nacional. Apuntalaron esta evolución tanto el papel preponderante que comenzó a desempeñar la radio, como la internacionalización de la competencia deportiva, que se intensificó a partir de los Juegos Olímpicos de Amsterdam celebrados en 1928, de las giras de equipos de fútbol que empezaron a ser cada vez más frecuentes y

de certámenes como el Campeonato Sudamericano de Fútbol que tuvo lugar en Uruguay por esas fechas. El inmediato aumento de la afluencia de público a los estadios producto de estos factores condujo a varios clubes a ampliar sus instalaciones, e incluso la propia Cámara de Diputados comenzó la discusión de un proyecto para la construcción de un estadio con capacidad para 250.000 personas mediante una subvención estatal. Se hacía obvio, también en la Argentina, el interés que los deportes comenzaban a despertar en muchos medios estatales europeos y americanos, como importantes mecanismos de control y de “nacionalización” de las actividades masivas de los sectores populares. Ese interés corrió paralelo al proceso más amplio de conversión de estos sectores populares en “público”, proceso que se vio reforzado por el surgimiento de un nuevo estilo periodístico, más “popular” y masivo, cuyo ejemplo paradigmático fue el diario *Crítica*. También medios como la radio y el cine, que continuaban su expansión, colaboraron en aquella transformación. Hacia 1930, funcionaban en todo el país aproximadamente 1.000 salas, que en las grandes ciudades no se ubicaban sólo en el centro, sino en muchos barrios; las emisiones de radio, gracias a nuevas tecnologías, tenían desde aproximadamente 1932 un alcance nacional, y hacia 1938, las estimaciones oficiales indicaban que había en la Argentina 1.100.000 aparatos receptores, cifra que significaba que existía una radio cada diez personas. La cultura de masas exigía esa presencia de un público ampliado, que integraban en buena parte los sectores populares. Así, junto al ídolo deportivo aparecían las estrellas de cine o teatro, o figuras como la de Carlos Gardel, a la vez agente y síntoma de la difusión del tango entre los grandes auditorios populares en los años treinta.

Al mismo tiempo, los intereses de muchos clubes, creados años antes por grupos de amigos o vecinos y ahora ya bastante burocratizados, comenzaron a entrelazarse con los de la política. Se trataba de otra expresión de la mayor densidad y complejidad que empezaban a adquirir las redes sociales populares. Unas elecciones en el club San Lorenzo de Almagro, por ejemplo, mostraron a través de la violencia verbal y las fuertes disputas entre los candidatos la notable envergadura que comenzaba a adquirir la cuestión. El triunfo de Pedro Bidegain, diputado nacional por el radicalismo e importante caudillo de la Capital Federal, no sorprendió a nadie. Sumaba así un elemento más a su posición de

poder en las redes de clientela tan características de aquella época.

La conversión de sectores populares en “público” no se produjo de manera lineal y automática, sino que se vio atravesada por un conjunto de nuevas manifestaciones y pugnas de notable interés simbólico. Entre ellas se destacó el arraigo que comenzó a adquirir un tipo peculiar de violencia colectiva, de marcados rasgos juveniles, especie de contracara de la sociabilidad popular típica de los nuevos barrios y de sus instituciones más notorias, tan contenida en sus formas y tan estricta en sus códigos.

A diferencia de las formas de violencia popular más frecuentes hasta el comienzo del período, vinculadas sobre todo a su utilización como recurso político, esta que afloraba en los tiempos de entreguerras mantuvo un vínculo más bien indirecto y bastante borroso con ese ámbito. Nuevos fueron sus objetivos y destinatarios y nueva fue también la simbología con la cual se recubrió.

Este tipo de expresión colectiva, cuya importancia no debe, sin embargo, exagerarse, comenzó a surgir en los últimos años del fútbol amateur, a fines de la década abierta en 1920, y se consolidó plenamente con el auge del gran espectáculo profesional a partir de los años treinta. Fue en esta época, por ejemplo, que en un encuentro disputado entre los equipos de Colegiales y San Telmo, en el estadio de Boca Alumni en la isla Maciel, se sucedieron las agresiones, los disparos de armas de fuego y hubo heridos y contusos. No se trató de un fenómeno aislado: la violencia de las “hinchadas” fue adquiriendo mayor frecuencia con el incremento, sin duda muy notable, de espectadores. En 1929, 40.000 personas presenciaron un partido disputado entre los equipos de Boca Juniors y Racing Club y 45.000 colmaron el estadio de San Lorenzo de Almagro para observar al equipo local contra Boca Juniors. Poco tiempo antes, en el año 1927, al festejarse la fusión definitiva de las dos ligas en las que se dividía el fútbol argentino, la fiesta organizada en el estadio de River Plate se vio enturbiada por agresiones entre hinchadas rivales, por varios conatos de incendio y por la invasión del campo por parte del público, lo que originó un saldo importante de heridos y contusos.

El espectacular crecimiento del número de espectadores indica a su vez que, estadísticamente, los involucrados en tal tipo de actos violentos representaron un núcleo más bien minoritario y extremo. Sin embargo, también es cierto que, debido a su trascen-

dencia en los nuevos marcos sociales y de opinión, su importancia no puede ser ignorada.

Las nuevas formas que fue adquiriendo con el tiempo la expresividad popular, de las cuales este nuevo tipo de violencia asociada al auge de la práctica deportiva fue uno de sus subproductos, no se limitaron a los ámbitos o espectáculos masivos. También se reprodujeron a menor escala, con intensidad variable según las circunstancias, en las múltiples competiciones que empezaron a desarrollarse para ese entonces en el interior mismo de los barrios, donde el papel del espectador cobraba una mayor relevancia personal. Estas expresiones emergieron al mismo tiempo que comenzaba a consolidarse el público amplio de los grandes espectáculos deportivos. Puede pensarse, por lo tanto, que ciertas formas de práctica deportiva competitiva y el importante papel desempeñado por la “hinchada” buscaban, para el grupo de amigos o colegas del barrio que la conformaban, un protagonismo que le estaba siendo arrebatado por el gran espectáculo del deporte profesional, que imponía el anonimato y una participación imaginaria. Paradójicamente, sin embargo, en la medida que comenzaban a actuar, las nuevas “hinchadas” iban descubriendo formas de protagonismo novedosas, en otros marcos ahora definidos por ámbitos sociales, institucionales y de opinión que excedían el encuadre popular del cual habían partido. Se abría para las “hinchadas” el mundo de las “masas”.

La “hinchada”, que canalizó su actividad fundamentalmente a través del deporte como espectáculo, puede cotejarse con la murga, que representó en buena medida la irrupción de lo excesivo y de lo diferente, brillando en el espacio ambiguo y temporalmente acotado de los corsos y fiestas de carnaval, de notable importancia en los años veinte y treinta. En tal sentido, es importante recordar que muchos de los jóvenes líderes de “hinchadas”, lo eran, a su vez, de murgas.

En este último caso se trató, como en ninguna otra manifestación popular de la época, tal vez por su compleja heterogeneidad, de una exquisita mezcla entre fenómenos típicos de una sociabilidad propia del XIX, de gran aldea, y de urbe en expansión acelerada. La murga permitía, sobre todo, la aparición efímera pero central de sectores y actitudes borrados de la vida cotidiana del barrio, como por ejemplo la homosexualidad que, actuada como parodia, se hacía visible en la escena pública en la fugacidad de la marcha carnavalesca.

Ambos espacios, murga e “hinchada”, fueron también expresión de esa nueva cultura de los sectores populares que se estaba consolidando en el período de entreguerras. Al mismo tiempo que mostraban una pasión y una vehemencia muy peculiares, señalaban la existencia de un difuso malestar “juvenil” no fácilmente definible. Estas nuevas formas del sentir popular advertían sobre la fuerte irrupción de problemáticas particulares y diferenciadas en el seno de los sectores populares, y de su papel todavía subalterno.

BIBLIOGRAFÍA

Armus, Diego y Suriano Juan. "The Housing Issue in the Historiography of Turn-of-the-Century Buenos Aires". en *Journal of Urban History*, vol. 24, n° 3, 1998.

González Leandri, Ricardo. "Lo propio y lo ajeno. Actividades culturales y fomentismo en una asociación vecinal. Barrio Nazca (1925-1930)", en Armus, Diego (compilador): *Mundo urbano y cultura popular. Estudios de historia social argentina*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

Gorelik, Adrián. *La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires (1887-1936)*. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1998.

Gutiérrez, Leandro y Romero, Luis Alberto. *Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra*. Buenos Aires, Sudamericana, 1995.

Korn, Francis. *Buenos Aires: los huéspedes del 20*. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1989.

Saitta, Sylvia. *Regueros de tinta. El diario Crítica en la década de 1920*, Buenos Aires, Sudamericana, 1998.

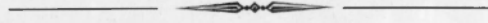
Scher, Ariel y Palomino, Héctor. *Fútbol, pasión de multitudes y de elites*, Buenos Aires, CISEA, 1989.

Shipley, Robert. *On the outside looking in: A social history of the "Porteño" worker during the "Golden Age" of Argentine development 1914-1930*, Tesis de doctorado, Rutgers University, 1977.

Suriano, Juan (compilador). *La cuestión social en la Argentina 1870-1943*, Buenos Aires, La Colmena, 2000.

Walter, Richard. *Politics and Urban Growth in Buenos Aires: 1910-1942*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

VI



El movimiento obrero

por JOEL HOROWITZ





mblea en la Unión Obrera Textil, 14-3-1942.



UN PERÍODO DE CAMBIOS

Durante los años treinta el movimiento obrero cambió con rapidez. El escenario en el cual actuaban las organizaciones de trabajadores se modificó profundamente, y el sistema político tomó nuevas formas, alterando los límites de lo posible. La intensificación de las tensiones ideológicas a escala mundial, a raíz de la difusión del fascismo, tuvo un impacto muy fuerte en la Argentina, al igual que la pérdida de confianza en el modelo liberal. La estructura económica también cambió: la depresión mundial golpeó duro y provocó penurias colectivas e individuales. Una de las respuestas a la crisis fue la intensificación de la industrialización por sustitución de importaciones, que en ciertos sectores, aunque no en otros, se caracterizó por la aparición de fábricas grandes y con sólido capital.

Todo esto tuvo un efecto importante sobre las organizaciones obreras. Los sindicatos "apolíticos" de base artesana quedaron desplazados, y fueron sustituidos por organizaciones que tenían lazos al menos nominales con los partidos, que tendían a ser más

grandes y que trataban de representar a grupos mayores de trabajadores, incluyendo a los no especializados. Como en otras partes del mundo, los problemas para organizar a los obreros semicalificados y no calificados de las fábricas llevaron a los sindicatos a buscar ayuda en el sistema político, de manera cada vez más intensa. Con la ventaja que otorga la visión retrospectiva, la existencia de esta tendencia no debería sorprender; sin embargo, ella ha sido frecuentemente oscurecida por lo que ocurrió luego de 1943.

En muchos sentidos, este camino de aproximación al Estado había comenzado a ser transitado en la década anterior. La dirección en la cual los sindicatos se estaban moviendo puede hoy fecharse con claridad en la década de 1920, aunque estaba lejos de ser evidente para los observadores contemporáneos. Los sindicatos anarcosindicalistas, divididos por oficios en muchos casos, que habían sido el eje del movimiento obrero durante la tremenda agitación de los años que van de 1917 a 1921, habían perdido mucha fuerza hacia 1929. Su apoliticismo los ayudó poco, y tuvieron muchas dificultades en la adaptación a la industrialización creciente, que hacía aumentar el número de obreros semicalificados y no calificados.

El anarcosindicalismo se había transformado en la tendencia dominante, luego de que el anarquismo comenzara un lento declive a partir de 1910. Los *sindicalistas*, al menos teóricamente, evitaban la política en la creencia de que el núcleo importante y doctrinariamente correcto era el sindicato; la revolución, pensaban, llegaría a través de la huelga general. Este rechazo de la política y los constantes roces con los socialistas hicieron que la cooperación con la Unión Cívica Radical fuera factible y atractiva. Los radicales, luego de su llegada al poder en 1916, deseaban expandir su apoyo popular y buscaron aliados entre los sindicatos, pero nunca quisieron formalizar la relación. Además, el rival político principal de los radicales en la Capital era el Partido Socialista, por lo tanto los contactos con cualquier grupo que estuviera dispuesto a tratar con el gobierno de Yrigoyen, y cuyo crecimiento pudiera bloquear a los socialistas, parecían atractivos. Los *sindicalistas* exhibieron una muy pragmática habilidad para crear alianzas informales con los gobiernos radicales mientras, al mismo tiempo, denunciaban la política burguesa.

Uno de los caminos ensayados por el gobierno radical para ex-

tender el apoyo que le prestaban los grupos populares fue auxiliar, o cuando menos tolerar, las huelgas en ciertos sectores estratégicos de la economía, como los ferrocarriles y los puertos, en los cuales había un número significativo de trabajadores argentinos que tenían derecho al voto. La actitud del gobierno, la inflación y las violentas tensiones ideológicas del período posterior a la Revolución Rusa contribuyeron a producir una masiva ola de huelgas, que no fueron detenidas por la represión de la Semana Trágica de 1919. Sin embargo, hacia mediados de 1921 la agitación había demostrado ser demasiado costosa políticamente, e Yrigoyen cambió de rumbo, abandonando el intento de aprovechar las huelgas y otras tácticas similares. A pesar de no desinteresarse por las clases trabajadoras, Yrigoyen y los radicales trataron de conseguir apoyo de otras maneras. La gigantesca ola de huelgas terminó en 1921; una huelga general convocada a fines de mayo de ese año fracasó, y la actividad huelguística se mantendría relativamente baja durante toda la década. Para muchos activistas sindicales, el período 1917-1921 fue el momento paradigmático, y su meta fue recrearlo. Conviene tener en cuenta, por otra parte, que el modelo *sindicalista* comenzó a perder vigor cuando dejó de resultar funcional a las metas de los radicales. Las organizaciones *sindicalistas* necesitaban algún tipo de apoyo externo frente a los sectores patronales intransigentes, pero no podían contar ya con el radicalismo; éste fue un problema que se haría más profundo en la década de 1930.

Un problema adicional fue la existencia de disputas sectarias, que se prolongarían durante los años treinta. Los *sindicalistas* demostraban escasa tolerancia hacia los adherentes a otras ideologías, fueran socialistas, comunistas o anarquistas, lo que llevó a constantes luchas y rupturas. La Unión Sindical Argentina, la confederación controlada por los *sindicalistas*, perdió primero a los socialistas que formaron su propia central, la Confederación Obrera Argentina, en 1926; más tarde, en 1929, los comunistas fundaron el Comité Nacional de Unidad Sindical Clasista. Esta última creación se debió más al cambio de línea del movimiento comunista internacional, que reclamaba ahora una actitud agresiva y alejada de cualquier alianza, que a acontecimientos ocurridos en la Argentina. Quizá más serio fue el rechazo de los *sindicalistas* a la creación de una organización entre los trabajadores ferroviarios, de ajustada disciplina y altamente centralizada, la Unión Ferroviaria.

Su intento de organizar un sindicato alternativo fracasó y le ganó enemigos. Además, la Federación Obrera Marítima, que había sido su sindicato más fuerte, sufrió severas derrotas en la década de 1920, y nunca se recuperó.

También la economía empezó a cambiar a fines de los años veinte, aunque la naturaleza de esa transformación fue imperceptible para muchos contemporáneos. Las grandes fábricas estaban comenzando a coexistir con el taller artesano. Los sindicatos por oficio tradicionales tenían dificultades para incorporar a los trabajadores en las fábricas más grandes, que incluían muchos obreros sin calificación, quienes no se habían iniciado en la tradición de la sindicalización. Estas tendencias se hicieron más intensas durante los años treinta.

LA UNIÓN FERROVIARIA

Un nuevo tipo de organización sindical había aparecido con la fundación de la Unión Ferroviaria en 1922. Su alcance era nacional, pero el poder se encontraba altamente centralizado y la Comisión Directiva controlaba a las autoridades locales, limitando estrictamente sus actividades; sus dirigentes casi siempre pusieron a su sindicato por encima de las ideologías o los partidos políticos. Los líderes usaban su poder para hacer respetar la disciplina de trabajo en la red ferroviaria: aunque dispuestos a demostrar su capacidad de interferir en el flujo de mercancías a través, por ejemplo, del trabajo a reglamento que atascaba el tráfico ferroviario, eran reticentes a hacer colapsar por completo el sistema. Estas estrategias los transformaron, en no mucho tiempo, en interlocutores aceptables para las compañías ferroviarias y, lo que era más importante, para el gobierno, que encontraba mucho más fácil lidiar con el sindicato que con la posibilidad de interrupción del tráfico ferroviario. Esta lección se trasladó a los años treinta.

El gobierno de Alvear ayudó a la Unión Ferroviaria a obtener beneficios muy importantes de las compañías; los salarios y las condiciones de trabajo mejoraron notoriamente y los ferroviarios se transformaron en una elite. Ellos ofrecían al gobierno algo crucial, como era el orden en las líneas ferroviarias, y así se transformaron en una fuerza muy poderosa. Hacia 1929, llegaban a las 63.485 cuotas mensuales pagadas, según consignaba la *Memoria*

y balance de la *Comisión Directiva* correspondiente a 1930. Esa cifra igualaba la alcanzada por la FORA del IX Congreso, la confederación *sindicalista*, en su mejor momento.

Sin que resulte sorprendente, la Unión Ferroviaria y su sindicato hermano, La Fraternidad, que agrupaba a los maquinistas, se convirtieron en el modelo para muchas organizaciones sindicales. No obstante, sus éxitos fueron difíciles de repetir, ya que pocos sindicatos podían ofrecer al gobierno lo que garantizaban los ferroviarios. Sus áreas no eran estratégicas y con frecuencia no había involucrados tantos votantes potenciales. También pocos sindicatos estaban tan dispuestos a pasar por alto las cuestiones políticas. En la década de 1920, aquellas dos organizaciones fueron únicas y, aunque su éxito no llegó a ser repetido en los años treinta, otros sindicatos hicieron intentos de seguir sus pasos. Las victorias de la Unión Ferroviaria pronto la transformaron en el sindicato más poderoso del país.

UN INTENTO DE UNIDAD DE 1928

La oportunidad para que la Unión Ferroviaria actuara como fuerza dominante en el movimiento obrero llegó a causa de una de las periódicas campañas por la unidad. Hacia 1928, una organización nacional de trabajadores gráficos llamó a la unificación del movimiento obrero, y dos de las cuatro confederaciones sindicales respondieron favorablemente: la Confederación Obrera Argentina y la Unión Sindical Argentina. Los comunistas y los anarquistas permanecieron fuera de la acción unitaria. Esa campaña para crear la Confederación General del Trabajo sembró la semilla de futuros problemas: algunos de los líderes socialistas de la Confederación Obrera Argentina resistían la idea de la unidad, y en las elecciones internas la posición de quienes en cambio la sostenían ganó sólo gracias al uso del fraude electoral. Luis Cerruti, ferroviario y primer secretario general de la CGT, señalaría años más tarde: “¡La unidad de la clase trabajadora la he hecho yo!”. Pero, por otra parte, no quedó establecido ningún calendario para regularizar la estructura de la confederación, y esta circunstancia finalmente llevaría a su quiebre en diciembre de 1935. Formalmente, la CGT no se constituyó hasta después del golpe de setiembre de 1930.

Buena parte de los años veinte habían sido prósperos, pero la

tendencia cambió radicalmente durante el año dramático de 1929. La depresión, desde ya, intensificó todos los antiguos problemas de la clase obrera y de los sindicatos; la desocupación creció, y los empresarios aprovecharon la situación para bajar salarios y cambiar condiciones de trabajo. Hasta el empleo estatal dejó de ser un refugio seguro, dado que los sueldos se pagaban sistemáticamente tarde. Las tensiones ideológicas crecieron: estibadores anarquistas y *sindicalistas* se tirotearon en el intento de mantener sus respectivas cuotas de trabajo en los puertos de Rosario y Buenos Aires. A su vez, el cada vez más débil gobierno de Yrigoyen no estaba en posición de auxiliar a los trabajadores. Sin embargo, y a pesar de estos problemas, algunos integrantes del movimiento obrero estuvieron entre los pocos sectores de la sociedad que intentaron proteger al gobierno constitucional. El líder ácrata Diego Abad de Santillán sostendría, muchos años más tarde, que algunos líderes anarquistas y *sindicalistas* planearon una huelga general para defenderlo, aunque fallaron en su intento. Los sindicatos no estaban en condiciones de lanzar una huelga general exitosa, ya que eran demasiado débiles y políticamente marginales.

LUEGO DEL GOLPE DE SETIEMBRE

El movimiento obrero enfrentó simultáneamente dos crisis de importancia. Por una parte, la depresión creó desempleo en gran escala; algunas villas miseria aparecieron rápidamente, mientras se organizaban colas de inmigrantes ante las embajadas, con la esperanza de ser repatriados. Responder con éxito a una crisis económica de tal profundidad hubiera sido casi imposible para los sindicatos aun en circunstancias muy favorables, y las que reinaban, en cambio, estaban muy lejos de ser buenas. Durante el régimen de Uriburu se impuso la ley marcial y luego el estado de sitio; los sindicatos anarquistas y comunistas fueron rápidamente empujados a la clandestinidad y, al menos temporariamente, dejaron de funcionar en los hechos. Sus líderes fueron encarcelados, torturados u obligados a exiliarse, mientras se hostigaba también a otras organizaciones obreras. Más de trescientos extranjeros que el régimen consideraba peligrosos fueron deportados, y tuvieron lugar al menos cinco ejecuciones bajo la ley marcial. Se creó, además, la infame Sección Especial de la policía, con el objetivo de

extirpar el comunismo. Claramente, se trataba de una nueva etapa en la violencia dirigida por el Estado: fue el primer intento sistemático de suprimir ideologías y prácticas a través de la violencia estatal.

En general, la actividad sindical se hizo difícil. De acuerdo con el importante dirigente de los trabajadores gráficos, René Stordeur, por ejemplo, el sindicato estaba sosteniendo una gran huelga contra la empresa Fabril Financiera en los días inmediatamente anteriores al golpe. Luego del 6 de setiembre, el jefe de Policía manifestó al gremio: “Este escándalo se ha terminado, se acabó la huelga”; los dirigentes se sintieron compelidos a darle fin. Esta situación no fue, en modo alguno, singular: un gran número de empresas utilizó la represión general existente para rebajar salarios, cambiar condiciones de trabajo y despedir trabajadores. Quienes protestaban, en esa coyuntura, podían ser fácilmente reemplazados. La empresa norteamericana Unión Telefónica comenzó con los despidos el mismo día del golpe, y ellos tuvieron como víctimas, en particular, a los dirigentes sindicales, entre quienes estaba Luis Gay, el secretario general de la Federación Obreros y Empleados Telefónicos.

Los sindicatos pudieron hacer poco y aun la simple celebración de reuniones era difícil. No obstante, a aquellas organizaciones que el gobierno no consideraba demasiado peligrosas se les permitió funcionar en un nivel mínimo, realizando las reuniones dentro de locales cerrados, por ejemplo. Pocos días después de la toma del poder por los militares, se constituyó oficialmente la CGT con la fusión de la USA y de la COA. Se estableció que el Comité Ejecutivo se conformaría con igual cantidad de representantes de ambas organizaciones, y no se determinó ninguna forma de cambiar esa disposición; tal circunstancia abrió el camino para problemas posteriores.

A pesar de que la tendencia dominante en el gobierno veía en la pura represión la mejor política para seguir con el movimiento obrero, existía una segunda tendencia, corporativista, cuya presencia brindó la oportunidad para que ciertos sindicatos intentaran alguna acción en común con el Estado. Los corporativistas creían que el papel estatal en las relaciones laborales debía ser importante, y que los sindicatos tenían un lugar en el proceso, pero siempre subordinados al Estado. El más notorio de estos funcionarios era el presidente del Departamento Nacional del Trabajo, Eduardo

Maglione, quien desde su cargo trató de evitar que las firmas sacaran ventaja de la situación política y económica a expensas de los trabajadores, empeorando de ese modo los problemas de desempleo. Sin embargo, el poder del DNT era muy limitado: Maglione, por ejemplo, trató de forzar a la Unión Telefónica a aceptar algunas concesiones favorables al sindicato, pero la compañía lo ignoró. A ello se sumaba que Maglione no contaba con la cooperación plena del resto del gobierno, en particular de quienes conducían la Policía, cuyas acciones tuvieron una incidencia mucho más amplia que la del DNT en la vida cotidiana de las organizaciones obreras.

A pesar de la actitud de Maglione, fue éste un período verdaderamente sombrío para los sindicatos y para los trabajadores. Las pocas huelgas que ocurrieron fueron actos de desesperación, con muy reducidas posibilidades de éxito. Más de las tres cuartas partes de las huelgas que tuvieron lugar en Buenos Aires a lo largo de 1931 fueron derrotadas, y aquellas que fueron exitosas o llegaron a soluciones negociadas involucraron a menos de 800 trabajadores.

Las implicancias a largo plazo de esta etapa extremadamente difícil fueron también amplias. La CGT recomenzó su política de cooperación con el gobierno, aun con un gobierno que apenas estaba dispuesto a dar alguna pequeña ayuda. Este hecho reflejaba varios fenómenos diferentes: los *sindicalistas* habían desarrollado, durante los gobiernos radicales, el hábito de depender del gobierno; la Unión Ferroviaria, gracias a su reputación, podía casi siempre acceder a los despachos de los funcionarios oficiales. Ella dominaba la CGT, y la dotaba de una cierta credibilidad. Así, rápidamente, la CGT se transformó en un interlocutor aceptado por el régimen, interviniendo a menudo en los intentos de liberar presos o de permitir la actividad normal de los sindicatos. La dirigencia de la CGT fue duramente criticada por humillar públicamente a la organización, al alabar la imposición de la ley marcial a cambio de obtener la conmutación de la pena de muerte dictada contra tres choferes anarquistas. En realidad, dadas las circunstancias generales, la dura represión y su creencia en el valor de la vida humana, no le quedaban muchos caminos. No obstante, la CGT pudo hacer poco, más allá de aliviar apenas la situación miserable de los trabajadores.

A su vez, la represión dio una nueva forma al movimiento obre-

ro. El anarquismo, ya declinante, nunca se recuperó de la represión inmediatamente posterior al golpe y durante los años treinta fue apenas una fuerza marginal. Los cambios en las formas de trabajo contribuyeron a desplazar a los anarquistas, quienes habían sido fuertes en sectores como el de los carreteros, que cada vez se tornaba más anacrónico. Sobre los comunistas, la represión tuvo un impacto mucho menos dramático. Aunque sus organizaciones también fueron empujadas a la clandestinidad, la existencia de una estructura partidaria les permitió sobrevivir. El partido distribuyó militantes a lo largo del país para agrupar a los trabajadores: Rufino Gómez, por ejemplo, fue enviado por el PC a Comodoro Rivadavia, donde organizó en primer lugar células del partido, antes de intentar la creación de un sindicato entre los obreros del petróleo. Gracias a este tipo de tácticas, los sindicatos dirigidos por comunistas estuvieron en condiciones de reaparecer luego de que la represión se aquietó, durante la presidencia de Justo.

LOS AÑOS INICIALES DEL GOBIERNO DE JUSTO

Para muchos sindicatos, la situación mejoró rápidamente cuando el general Justo asumió la presidencia, en febrero de 1932. Si bien la situación económica no cambió inmediatamente, la represión extendida y masiva se aplacó, haciéndose esporádica y algo menos dura, y los sindicatos que no eran percibidos por el gobierno como una amenaza al orden podían operar con relativa libertad. Desde la perspectiva sindical, la dificultad consistía en tratar de calcular qué era aquello que el gobierno consideraba una amenaza. Y un problema que persistía era que muchos empleadores continuaban prefiriendo no tratar con los sindicatos, lo que hacía necesaria para los trabajadores al menos la neutralidad del Estado, cuando no su intervención activa.

Los sindicatos que crecieron más rápidamente fueron aquellos que tenían conexiones políticas, pues contaban con una fuerza externa que podía proporcionar ayuda, propaganda, lugares para las reuniones y dinero. El gobierno, en buena parte compuesto por radicales antipersonalistas, había aprendido algunas de las cruciales lecciones de la era precedente y reconocía que, en ocasiones, era más fácil forzar a la patronal a hacer concesiones que enfrentar las

dificultades creadas por las huelgas o la agitación. Sin embargo, era necesario llamar la atención del gobierno, y aunque tal cosa podría haberse logrado a través de las huelgas o la presión política, se trataba siempre de un juego peligroso. El régimen nunca definió las reglas de ese juego, y los sindicatos no sabían qué era lo que podía traerles asistencia y qué, en cambio, acarrearía la represión. Por otra parte, los diferentes sectores gubernamentales no siempre trabajaban juntos. El Departamento Nacional del Trabajo, con su conocimiento incomparable de la situación laboral, era con frecuencia bastante favorable a los sindicatos, pero le faltaba el poder para forzar la cooperación de las compañías o de otras ramas del gobierno. Las actitudes de estas últimas variaban ampliamente entre sí.

A su vez, los sindicatos del interior, en general, debieron afrontar dificultades mucho mayores que los de la Capital, si bien fueron más activos de lo que habitualmente se ha pensado. El DNT sólo tenía jurisdicción sobre la ciudad de Buenos Aires y los territorios nacionales. Las condiciones económicas fueron, a grandes rasgos, todavía peores en las provincias; al mismo tiempo, dado que el fraude electoral solía ser frecuente en el interior, se prestaba menos atención a la opinión pública. Esta última circunstancia permitía también que la violencia se aplicara mucho más a menudo que en la Capital.

A comienzos del gobierno de Justo, en el movimiento obrero tenían preponderancia los sindicatos que pertenecían a la CGT. La única estadística real para Buenos Aires, de setiembre de 1932, fue realizada por la Liga Patriótica Argentina, una agrupación de extrema derecha, pero probablemente la información tuviera su origen en fuentes policiales. La Liga afirmaba que 132.000 trabajadores estaban afiliados a los sindicatos, aunque cerca de 83.100 de ellos pertenecían a organizaciones nacionales, cuyos miembros estaban dispersos por el país, siendo la mayoría de la Unión Ferroviaria. Un porcentaje abrumador, el 82,6%, pertenecía a la CGT; los miembros de sindicatos autónomos eran el 7,6%, así como quienes pertenecían a la FORA (anarquista) y sólo el 2,3% correspondía a los agrupamientos comunistas. Con claridad, los sindicatos mayores eran los del transporte, y sólo unos pocos obreros industriales estaban organizados.

La disminución inicial de la represión, que Justo utilizaba para diferenciarse del gobierno uriburista, permitió que los trabajado-

res aprovecharan la ocasión para tratar de reconquistar el terreno perdido durante los años anteriores, cuando una huelga equivalía a una derrota casi cierta o a algo peor. Así, en 1932 se produjo una intensa ola huelguística, con más conflictos y participantes que en cualquier otro año del período en consideración. Los resultados revelan por qué el movimiento no continuó: de acuerdo con el DNT, casi las tres cuartas partes fueron derrotadas.

Esas huelgas fueron, en su mayoría, intentos desesperados de recuperación de lo perdido, y dada la aún complicada situación económica, sus desenlaces eran predecibles. La respuesta del gobierno dependía mucho de la posición del sindicato en la estructura económica, de su visibilidad para sectores amplios de la sociedad y de la filiación política de sus líderes. Si bien la mayoría de las organizaciones sindicales eran sencillamente ignoradas por el gobierno, otras enfrentaron una dura represión, y unas pocas elegidas contaron con la intervención activa, que ayudaba a resolver conflictos en términos que no eran desfavorables.

Cuando, por ejemplo, en 1932 los comunistas condujeron a los petroleros a la huelga en Comodoro Rivadavia, el gobierno respondió con una represión masiva, que incluyó encarcelamientos y deportaciones en gran escala. Ello reflejaba la importancia de la industria, el papel de los comunistas, y también la escasa visibilidad del conflicto para la opinión pública. El gobierno de Justo, como sus predecesores, tendía a responder más duramente ante las huelgas producidas lejos de Buenos Aires; así, el mismo año, cuando los trabajadores telefónicos lanzaron una huelga contra la Unión Telefónica, impopular empresa norteamericana, la reacción fue muy diferente. A pesar del constante corte de líneas de teléfonos, que incluyó las que conectaban la Casa Rosada con Campo de Mayo, luego de 52 días de duro conflicto el gobierno ayudó a imponer una solución, que si bien no resolvía los problemas del sindicato, al menos le permitió sobrevivir.

¿Por qué fue ésta la postura estatal? En parte, porque la compañía era impopular, era norteamericana y no contaba con muchos defensores locales. Pero también porque la organización estaba dirigida por los *sindicalistas*. Los antipersonalistas que formaban parte del régimen sabían que con tales organizaciones podían trabajar, y que su crecimiento no habría de golpearlos políticamente, dado que no tenían filiación partidaria. Además, el sindicato había estado dispuesto a aceptar la mediación del gobierno y trató con



*Asamblea de empleados de comercio; sentado en la primera fila,
Ángel Borlenghi, 13-5-1939.*

fervor de evitar la huelga, pero la compañía se había mostrado intransigente. También contó el deseo de distinguirse de la gestión uriburista: el justismo necesitaba exhibir su buena voluntad hacia el movimiento obrero en una huelga muy visible.

Esta actitud de dos caras se prolongó durante todo el período neoconservador, si bien a partir del ascenso de Castillo, a comienzos de los años cuarenta, el gobierno se mostraría cada vez más adverso. La mayoría de los sindicatos no contó con el apoyo ni la hostilidad gubernamentales, pero debió enfrentar a los empresarios en un marco caracterizado por una sobreoferta de mano de obra, y con una fuerza policial que buscaba, por sobre todo lo demás, garantizar el orden. Se explica, entonces, que el número de huelgas descendiera en 1933.

Los sindicatos que lograron un desempeño adecuado en los años iniciales de la gestión de Justo tenían conexiones con el Partido Socialista. El curioso equilibrio que el régimen trató de encontrar

entre una apariencia democrática y su dependencia del voto fraudulento, hizo crecer la importancia de los socialistas. Mientras los radicales, todavía el mayor partido del país, se abstuvieron de participar en los procesos electorales, las fuerzas del gobierno necesitaron del Partido Socialista para obtener ciertos aires de legitimidad y para que las apoyara en ciertas cuestiones cruciales: la Concordancia era inestable, y el Partido Socialista contaba con 43 diputados. Por lo tanto, el gobierno neoconservador estaba dispuesto a proporcionarle ayuda en materias que no consideraba vitales, pero que sí eran decisivas para los socialistas.

En 1932, la Federación de Empleados de Comercio, que tenía estrechos lazos con el Partido Socialista y dirigía Ángel Borlenghi, un hombre políticamente muy hábil, comenzó una serie de campañas políticas. Esas campañas buscaban compensar el hecho de que era difícil organizar a los empleados de comercio, ya que estaban dispersos, a lo largo de grandes áreas, en innumerables negocios. Los comercios en los cuales los trabajadores estaban organizados podían sufrir una competencia desventajosa por parte de aquellos en los que no había presencia sindical, ya que sus costos laborales eran más altos. Además, muchos empleados de comercio se concebían a sí mismos como miembros de la clase media; si bien sus salarios y sus condiciones de trabajo no eran, con frecuencia, mejores que los de la clase obrera, tendían a ser reticentes a sindicalizarse o a realizar una huelga. Borlenghi percibió que a través de la presión política el gobierno podía ser inducido a establecer mejores condiciones de trabajo. Todos los comercios, y no sólo aquellos en los que la organización era fuerte, deberían entonces aceptar las mejoras, y el papel del sindicato sería ayudar a que las leyes fueran aprobadas y hacerlas cumplir. Las mejores condiciones llevarían así a los empleados a afiliarse.

La Federación de Empleados de Comercio creó, en 1932, una confederación nacional de sindicatos del sector, con la intención de movilizar apoyos a escala nacional para la sanción de leyes laborales. Borlenghi y la Federación tuvieron un éxito sorprendente. Una serie de manifestaciones en todo el país recibió respaldo de miembros de todas las fuerzas políticas importantes. Fueron aprobadas dos leyes, que a pesar del reclamo de la Federación, quedaron limitadas a la Capital: una que establecía el llamado “sábado inglés”, que fijaba una semana laboral de cinco días y medio, y otra que obligaba a los comercios a cerrar a las ocho de la noche,

lo que limitaba las largas jornadas de trabajo. Con mayor dificultad fue promulgada una reforma del Código de Comercio, de extensiones nacionales, que hizo más difíciles los despidos. Estas exitosas campañas, cuyo resultado era dependiente de la cooperación de la Concordancia, no sólo mejoraron las condiciones para los empleados de comercio y para otros trabajadores, sino que también permitieron el crecimiento de la Federación, que se expandió desde algo menos de 1.000 miembros en 1932 hasta unos 18.000 en 1936; también se transformó en una organización en verdad nacional.

La Unión Obreros Municipales, en la que predominaban los socialistas, fue otro sindicato que logró un buen desempeño en aquellos años. Contribuyó a ello el hecho de que el intendente de Buenos Aires necesitara la cooperación del Concejo Deliberante, donde los socialistas eran una fuerza muy importante.

Sin embargo, el éxito de estos dos sindicatos fue una excepción. La mayoría todavía enfrentaba los problemas creados por la mala situación económica, por la hostilidad empresarial y por la indiferencia del gobierno, esto último en el mejor de los casos. Aun la organización más fuerte, la Unión Ferroviaria, tuvo serias dificultades. Hacia 1932, era el único sindicato verdaderamente grande. Decía representar a todos los trabajadores de los ferrocarriles con la excepción de maquinistas y fogoneros, y en aquel año promediaba los 67.799 cotizantes de cuotas sindicales; el número total de ferroviarios afiliados a la Caja de Jubilación del sector era de 138.441, incluyendo a directivos y a maquinistas. La depresión golpeó a los ferrocarriles con dureza, y como los salarios eran un porcentaje significativo de los costos totales, las compañías apelaron a los despidos durante el período de Uriburu, aunque no está clara la envergadura de esas medidas. De todos modos, los intereses del sindicato y del gobierno coincidían: el gobierno no quería ver crecer la desocupación, sin duda alarmado por el potencial impacto social y político, y tampoco lo deseaban, naturalmente, las organizaciones ferroviarias. La administración continuaba viendo a los sindicatos como los mejores garantes de la relativa paz en los ferrocarriles. Así, bajo una considerable presión gubernamental, las compañías y las dos organizaciones sindicales elaboraron soluciones por separado, que efectivamente reducían salarios aunque de manera parcialmente camuflada y temporaria, a cambio del fin de los despidos. La importancia de este compromiso en el lar-

go plazo, más que en la demostración de la envidiable posición de los ferroviarios si se la compara con la de otros trabajadores, residió en el malestar y la inquietud que las reducciones generaron en las bases de la Unión Ferroviaria.

El descontento se agravó durante los años iniciales del régimen de Justo. Una vez más, las compañías insistieron en una rebaja de sueldos; la dirección de la Unión Ferroviaria se dividió entre quienes estaban dispuestos a aceptarla y aquellos que sostenían que ya se habían realizado demasiadas concesiones. Los partidarios de la primera posición ganaron, desconociendo un congreso especial del sindicato; las medidas fueron más tarde confirmadas en gran parte por un arbitraje en el que el mismo Justo estuvo involucrado. Mientras los ferroviarios eran forzados a hacer concesiones, en retribución estuvieron en condiciones de protegerse de los despidos. El propio hecho de que Justo participara en un arbitraje señala la importancia de los ferroviarios.

Sin embargo, los disidentes utilizaron el descontento en las bases para tomar el control del sindicato. Y a la modificación en la dirección de la Unión Ferroviaria correspondió, dada su importancia, un cambio en la distribución del poder dentro de la CGT: los *sindicalistas* fueron marginados.

Aunque las fricciones entre los líderes de la Unión Ferroviaria habían existido desde fines de los años veinte, recién cristalizaron durante las disputas libradas en torno a la baja de salarios. Las facciones principales eran dos; los contemporáneos denominaron “sindicalistas” a la facción que tenía el poder, en tanto que los rebeldes fueron llamados “socialistas”, pero las etiquetas eran engañosas. Había miembros del Partido Socialista en ambos bandos, y las diferencias de opinión claras fueron escasas hasta 1932-1933. Aunque los “socialistas” estaban más próximos al PS, ambos grupos estaban dominados por hombres que creían que los partidos políticos debían mantenerse al margen de los asuntos sindicales. Pero existían otras diferencias y otras áreas de tensión: quienes tenían el poder no deseaban compartirlo, y los que estaban fuera lo querían para sí mismos. La rivalidad entre los representantes de los trabajadores de las dos compañías más grandes también jugaba; Antonio Tramonti y otros líderes de los trabajadores del Ferrocarril Sud siempre habían dominado el sindicato, y los hombres con base en el Central Argentino creían que no tenían la cuota de poder que les correspondía. En 1934, la facción “socialista”,

liderada por José Domenech, se hizo del control de la Unión Ferroviaria, abriendo una etapa de confrontación dentro de la CGT.

Así, cuando hasta su organización más fuerte atravesaba dificultades severas, el movimiento obrero sólo podía esperar un cambio favorable una vez que la economía hubiera mejorado lo suficiente como para poder arrancar cierto poder de manos de los empresarios. Hasta entonces, era muy fácil reemplazar a los trabajadores que se plegaban a una huelga, y muchas compañías estaban al borde de la quiebra. Hacia 1934-1935, la economía urbana comenzó a recuperarse de los efectos de la depresión, y la política económica favoreció la sustitución de importaciones y la afluencia de capital extranjero. La tendencia, iniciada en los años veinte, de coexistencia de pequeños establecimientos con otros mayores se intensificó. Hacia 1935, había 722 fábricas con más de 101 trabajadores, que empleaban a 223.520 personas; en 1941, la cifra había crecido hasta los 1.130 establecimientos, con 366.882 trabajadores. Sin embargo, el número de pequeños establecimientos continuó su expansión y a menudo ellos operaban junto con los grandes en algunas industrias. En la industria de la seda artificial, por ejemplo, el hilado se hacía en grandes fábricas multinacionales, mientras que el tejido se ejecutaba en compañías nacionales de tamaño considerable y en diminutos talleres con uno o dos telares. Habitualmente, se entendía que en las grandes fábricas la organización sindical era más fácil que en los establecimientos pequeños.

La declinación de la importancia relativa de la pequeña empresa tuvo consecuencias diversas. El papel de los trabajadores calificados se tornó menos crítico, dado que los semicalificados y no calificados eran cada vez más. También creció el número de trabajadores industriales sindicalizados. Estas tendencias dañaron severamente a los *sindicalistas*, que tenían su base principal entre los obreros calificados de establecimientos pequeños. Por otra parte, la más importante organización de orientación *sindicalista*, la Federación Obreros Marítimos, declinaba desde sus derrotas de los años veinte. El *sindicalismo* estaba perdiendo posiciones tanto en algunas industrias que dejaban de ser artesanales para introducir máquinas —por ejemplo, en la fabricación de muebles— como en los ferrocarriles. Los lazos que había cultivado diligentemente con radicales y antipersonalistas en los años veinte eran menos importantes; la UCR, fuera del poder, podía ofrecer poca ayuda concreta

y nunca había provisto el tipo de auxilio institucional —locales, propaganda— que partidos como el Socialista o el Comunista brindaban regularmente. El antipersonalismo, que formaba parte del oficialismo, entendía que necesitaba poco de la aproximación a las fuerzas obreras, dado que no podía ganar las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Fuera de la Capital, la Concordancia solía depender del fraude y, por lo tanto, no necesitaba buscar votos por otros caminos. Sin embargo, el oficialismo podría haber procedido de otro modo: en 1931, cuando las reglas de juego político todavía estaban indefinidas, los conservadores de la provincia de Buenos Aires habían ubicado en su lista de candidatos a diputados a dos miembros de la Unión Ferroviaria. Uno de ellos, Bernardo Becerra, había tenido un papel central en el sindicato desde su fundación, e incluso había sido su vicepresidente. Aunque ambos fueron elegidos, Becerra, el más conocido, murió antes de asumir el cargo. Los conservadores nunca profundizaron este experimento, al parecer exitoso. Sin duda lo consideraron innecesario, dado que los votos podían ser “producidos” de otros modos.

LA CUESTIÓN DE LA UNIDAD

Dentro del movimiento obrero argentino ha existido un mito que indica que el estado “natural” de las cosas en el movimiento sindical es el de unidad. Las numerosas tentativas de alcanzarla, sin embargo, siempre fallaron a causa de la incompatibilidad producida por las diferencias ideológicas o por choques personales. Por otra parte, las confederaciones tenían poco que ofrecer a las organizaciones afiliadas y no contaban con medios para disciplinar a los rebeldes. Pocos sindicatos tenían alcance nacional y las confederaciones tendían a centrarse en Buenos Aires, prestando poca atención a los problemas existentes en las provincias. La CGT tuvo los mismos límites que sus antecesoras. A pesar de sostener que había conseguido la unidad del movimiento obrero, fuerzas importantes permanecieron fuera de ella: los anarquistas, que estaban en decadencia, no se incorporaron y continuaron en la FORA. Tampoco lo hicieron los comunistas, que mantuvieron su Comité Nacional de Unidad Sindical Clasista; a diferencia de los anarquistas, los comunistas estaban en crecimiento luego de que disminuyera la represión uriburista, gracias a la ayuda del partido. A

pesar de todo, hacia 1934-1935 tanto la organización anarquista como la comunista eran pequeñas. El verdadero problema estaba dentro de la propia CGT y consistía en la rivalidad entre los llamados socialistas y *sindicalistas*.

Los *sindicalistas* sostenían que el movimiento obrero debía mantenerse próximo al gobierno, pero ajeno a la política de partido; los socialistas, en cambio, entendían que debía establecerse una distancia mayor con la administración y admitían la participación política. Las rivalidades y las alianzas personales fueron a menudo de importancia central, y la falta de tolerancia exacerbó las diferencias y elevó las tensiones, en particular a medida que los socialistas crecían y los *sindicalistas* se debilitaban. Este cambio en la relación de fuerzas no se reflejaba en la estructura del Comité Confederal de la CGT, establecida al momento de la creación, que otorgaba igual representación a las confederaciones fundadoras y algunos lugares a las organizaciones autónomas. Sin embargo, no había tenido lugar ningún congreso que estableciera un ajuste en esa estructura. Así, tres *sindicalistas* representaban a varios sindicatos, aun cuando sus propias organizaciones estuvieran disueltas. Al mismo tiempo, no se permitía a la Unión Ferroviaria reemplazar a sus representantes en el Comité, de modo que en el cuerpo no se traducían el cambio ocurrido en la composición de la Comisión Directiva del sindicato. Los *sindicalistas* sólo podían mantener el control de la CGT porque los representantes de la Unión Ferroviaria que los apoyaban había roto la política de los primeros tiempos, cuando todos los ferroviarios votaban como un bloque. Este quiebre de la solidaridad mostró la crudeza de las luchas internas de la Unión Ferroviaria.

Ambas facciones creían que el tamaño y el desempeño de la Unión Ferroviaria les daban el derecho de dirigir la CGT. Las disputas dentro de la Unión Ferroviaria y del movimiento obrero en general se cruzaron y se potenciaron; estaba claro que quien controlara la Unión Ferroviaria controlaría la CGT. Esta pelea por el manejo de la central tuvo lugar a pesar de que su papel y su poder fueran restringidos. Su función se limitaba, esencialmente, a interceder ante el gobierno en favor de huelguistas presos y a dialogar con la administración en nombre de los sindicatos pequeños y de industrias poco importantes, que no llegaban a conseguir audiencias.

Los líderes *sindicalistas* estaban demasiado ansiosos por figu-

rar entre los grupos que el gobierno consideraba aceptables, si se tiene en cuenta lo escaso de los beneficios recibidos. Dos de los sindicalistas clave en la CGT, Alejandro Silvetti y Andrés Cabona, habían recibido empleos de bajo nivel del gobierno y comenzaron a representar a la Asociación de Trabajadores del Estado. Las razones profundas de este arreglo, si es que las había, son desconocidas.

A fines de 1933, algunos grupos del movimiento obrero, en su mayor parte socialistas, comenzaron a presionar para obtener una declaración que denunciara los peligros del fascismo en la Argentina. Después de que algunos de los miembros de la Junta Ejecutiva de la CGT se reunieran con el presidente Justo, la propia Junta hizo pública una declaración en la que alababa los intentos del gobierno por promover la democracia, sosteniendo que no existían en la Argentina las condiciones que habían conducido al fascismo. El Comité Central, más amplio, atacó la declaración, pero sus objeciones se dirigieron más a los socialistas y a sus intentos por tomar el control de los sindicatos que al fascismo o a la Junta Ejecutiva. La adulación al poder por parte de los *sindicalistas* no los favoreció. En los años treinta tenían poco que ofrecer al gobierno: controlaban sólo algunos sindicatos y se estaban debilitando, y como la política había cambiado, era más importante la apariencia de legitimidad que brindaban los socialistas que los votos que ellos hubieran podido aportar.

Dentro del movimiento obrero, los socialistas —que en muchos casos lo eran sólo nominalmente y no estaban afiliados al partido— deseaban ver reconocida su nueva fuerza en la confederación nacional. Compartían la aversión a los *sindicalistas* y buscaban poner distancia con un gobierno que no era democrático, ni amistoso hacia los trabajadores. En las disputas con los *sindicalistas* también fueron factores importantes los viejos resentimientos: los roces habían existido siempre entre quienes seguían más estrictamente cada una de las líneas ideológicas, y en las décadas previas, cuando los *sindicalistas* dominaban las confederaciones, excluían de sus congresos a quienes hubieran ganado cargos electivos como miembros de las listas del Partido Socialista. Los ataques habían sido mutuos, y la creación de la CGT sólo había ocultado los antagonismos existentes.

En diciembre de 1935 tuvo lugar una crisis que cambió el aspecto de la confederación. Como las tensiones crecían, y final-

mente se puso fecha para celebrar el postergado congreso que fijaría la estructura de la organización, los *sindicalistas* que tenían el control de la CGT enviaron delegados en una gira por el interior. El objetivo no declarado era hacer campaña a favor de los candidatos *sindicalistas* para las próximas elecciones internas de la Unión Ferroviaria; esto amenazaba trastornar el delicado equilibrio político dentro de ese sindicato. Los socialistas respondieron con un golpe, haciéndose del poder en la CGT y reconstituyendo los organismos de control. La violencia fue mínima, pero el sueño de la unidad se hizo pedazos. De los acontecimientos surgieron dos CGT: una, con predominio *sindicalista* y sede en el local de los trabajadores telefónicos; otra, socialista, que operaba desde la Unión Ferroviaria. Pareció entonces que este último sindicato se quebraría siguiendo las mismas líneas: los grupos en lucha en la Unión Ferroviaria respaldaban a sus colegas ideológicos en la Confederación, y eran ferroviarios quienes encabezaban ambas CGT. Sin embargo, el objetivo de la unidad se mostró demasiado fuerte entre los ferroviarios, y por un tiempo los *sindicalistas* volvieron a la Unión Ferroviaria.

Con la Unión Ferroviaria apoyando a la CGT socialista, los *sindicalistas* quedaron marginados. Esta central declaraba unos 262.630 miembros hacia julio de 1936; el número real de cotizantes era en verdad algo más bajo, pero es razonable suponer que la exageración era casi la misma para todas las organizaciones. La CGT que dominaban los socialistas incluía sindicatos tan grandes como la Unión Ferroviaria, que sostenía contar con 100.000 miembros; La Fraternidad, con 15.000; la Federación de Empleados de Comercio con 18.489; la Unión Tranviarios, con 10.000; la Unión Obreros Municipales, con 8.900.

A su vez, la versión *sindicalista* de la CGT tenía sólo 25.095 miembros y dependía de la Federación Obreros y Empleados Telefónicos, de 4.729 miembros, y de la Federación Obrera Marítima, con 6.200. Los *sindicalistas* se habían transformado sólo en una triste reliquia de lo que habían sido en la inmediata posguerra. Hacia 1937, la CGT *sindicalista* devino en la Unión Sindical Argentina, de escasa importancia.

También los acontecimientos internacionales favorecieron a la CGT socialista. En 1935, el Comintern comenzó a cambiar su política; los partidos comunistas fueron urgidos a abandonar la actitud agresiva y sectaria que habían seguido desde fines de los años

veinte, y a buscar aliados en la izquierda y en el centro. Esta política de Frente Popular tuvo en la Argentina un impacto inmediato: en 1935, la confederación sindical comunista —el Comité Nacional de Unidad Sindical Clasista— se disolvió y, un año más tarde, ocurrió lo mismo con los sindicatos comunistas paralelos. Las organizaciones que controlaban los comunistas se incorporaron a la CGT socialista.

LOS AÑOS INTERMEDIOS

Hacia mediados de la década de 1930 se produjo un cambio profundo en la naturaleza del movimiento obrero; por debajo de él, se ubicaba un conjunto de importantes y amplias transformaciones estructurales. La economía urbana se había recuperado y el proceso de sustitución de importaciones se encontraba avanzado; muchos sectores de la industria se habían modernizado. La existencia de fábricas más grandes y de oportunidades para conseguir mejores empleos abrió la posibilidad para que los trabajadores se mostraran más agresivos. Las huelgas dejaron de ser un mecanismo sólo defensivo, y su número creció. Sindicatos y trabajadores comenzaron a realizar demandas más audaces y, al mismo tiempo, sus huelgas se transformaban en herramientas para intentar organizar amplios sectores de obreros industriales. Junto con ello, se produjo un significativo viraje en los resultados de los conflictos. Según cálculos del DNT, en 1934 los trabajadores sólo habían ganado el 13% de las huelgas realizadas en la Capital, mientras perdían el 73,7%, y en el resto se llegaba a un



Detención durante la huelga del 23-7-1935.

acuerdo. Hacia 1936, los trabajadores tenían una expectativa de victoria mucho mayor: en el 31,7% de los conflictos ganaron, sólo perdieron el 42,3% y ese porcentaje siguió bajando.

Los sindicatos con predominio comunista constituyeron el sector más dinámico del movimiento obrero, y el más lanzado a la ofensiva; parecían tener una visión más amplia que las otras organizaciones. Sus oponentes los acusaban de utilizar las huelgas para sus propios fines, y en un sentido la crítica era correcta. Las huelgas dirigidas por comunistas se transformaban en movimientos con dos objetivos: uno, conseguir mejoras para los trabajadores; otro, expandir el sindicato. Los comunistas percibieron que conseguir mejoras significativas para las vidas de amplias mayorías de trabajadores no era ya suficiente para organizar cada una de las fábricas; se trataba ahora de organizar sindicalmente sectores enteros de la industria. De esta manera, las compañías a las que se habían arrancado concesiones no sufrirían la competencia de aquellas en las cuales no había presencia sindical. Simultáneamente, los comunistas registraron la necesidad de obtener la cooperación de los trabajadores no calificados y de las mujeres.

En el período posterior a 1935, los sindicatos en los cuales había una fuerte influencia comunista tuvieron un rápido crecimiento; muchos reunieron diferentes especialidades en un sindicato único por industria. Los comunistas hicieron progresos acelerados entre los trabajadores textiles, metalúrgicos, de la alimentación —especialmente en los frigoríficos— y sobre todo de la construcción. También obtuvieron logros importantes en la industria de la madera, sobre todo en la construcción de muebles, pero el sindicato se separó de los comunistas y fue dominado por disidentes de izquierda, muchos de ellos trotskistas. Por primera vez, se tornaron importantes los sindicatos cuyos miembros trabajaban en fábricas. Esto reflejaba, al menos parcialmente, los cambios en la naturaleza de la economía. Varias de esas organizaciones tenían también alcance nacional, una tendencia que, si bien seguían los comunistas, había sido iniciada por otros; basta recordar el mencionado caso de la Federación de Empleados de Comercio.

La expansión de algunos sindicatos en los que predominaban los grupos comunistas fue espectacular. En 1936, de acuerdo con manifestaciones de la CGT al Departamento Nacional del Trabajo, la Federación Obrera de la Industria de la Carne tenía 500 miembros. Al año siguiente, se formó un nuevo sindicato, la Federación



Huelga de los obreros de la construcción. Gente con restos de un tranvía incendiado por los huelguistas en la calle Médanos, 7-1-1936.

Obrera de la Alimentación. Hacia fines de 1942, existían 44 sindicatos que pertenecían a ella, y se trataba de una organización verdaderamente nacional. Un año antes, en 1941, contaba con 19.513 miembros, de los cuales 11.676 pagaban cuotas.

Aun más impresionantes fueron la creación y el desarrollo de la Federación Obrera Nacional de la Construcción, en una industria que había estado dominada por pequeños sindicatos de oficio, dirigidos en buena parte por anarquistas. Los sectores comunistas desplegaron su acción a través de un sindicato de albañiles creado en febrero de 1935; la huelga que sirvió para la organización estalló en octubre de ese año. Desatado por un trágico accidente de trabajo, el movimiento fue de una efectividad aplastante. La violencia, si bien fue una herramienta muy importante, no estuvo dirigida contra las compañías sino contra los rompehuelgas, y buscó afectar al público en general a través de ataques a los tranvías y

acciones por el estilo. La visibilidad de la huelga provocó la intervención del DNT, aunque su intento falló por el rechazo de los empresarios a aceptar los términos propuestos. En enero de 1936, los comunistas organizaron una huelga de solidaridad por 24 horas, que pronto se extendió a 48; a pesar de no recibir el apoyo de la CGT, contó con unos 50.000 participantes, incluyendo taxistas y colectiveros. La violencia fue intensa, especialmente el primer día: trolleys y trenes fueron apedreados, se quemaron ómnibus y fue volcado un tren lechero. Hubo entre cuatro y seis muertos, incluyendo tres policías. Esta violencia produjo el resultado deseado: la intervención del Ministerio del Interior, que tenía capacidad para conseguir una solución acordada. Los albañiles habían recibido el apoyo de la mayoría de los obreros especializados en la construcción, y estaban en vías de crear un sindicato más grande: la huelga y la victoria obrera galvanizaron a los trabajadores y dieron a sus líderes el prestigio necesario para organizarlos sindicalmente.



Huelga de los obreros de la construcción. En los alrededores de Mataderos la policía reprime a un grupo de huelguistas, 7-1-1936.

La clave en esa tarea eran los capataces, trabajadores especializados, en muchos casos italianos, que utilizaban sus propios equipos. Una vez que se unían al sindicato, sólo contrataban a sus miembros, creando así verdaderos talleres sindicales, que sólo existieron en la industria de la construcción. De la gigantesca huelga de 1935/1936 surgió la Federación Obrera Nacional de la Construcción, que no sólo tuvo gran fuerza en casi todas las especialidades en Buenos Aires, sino que contó con afiliados en casi todo el país. A pesar de que el gobierno intentó frenar el crecimiento de la organización deportando a algunos líderes clave hacia países europeos gobernados por dictaduras, el sindicato prosperó. Hacia 1941, sólo la Unión Ferroviaria era mayor, y de acuerdo con cálculos de Celia Durruty publicados en 1969, el sindicato de la construcción incluía la mitad de sus miembros potenciales, una hazaña notable en una industria cuyo trabajo era estacional y que se desarrollaba en sitios dispersos.

¿Por qué los sindicatos con preponderancia comunista consiguieron tales éxitos? Los comunistas pusieron los recursos de su partido a disposición de los trabajadores de la mayor fábrica de cada barrio. Endurecida por la represión que soportaba, la amplia red del Partido Comunista permitió a sus militantes sindicales realizar los cruciales contactos dentro de las fábricas y crear las bases de las organizaciones, venciendo con frecuencia el temor obrero a perder el trabajo o a ir a la cárcel. He aquí cómo José Peter, por largo tiempo el líder comunista del sindicato de trabajadores de frigoríficos, describía las acciones:



*Huelga de los obreros de la construcción.
Un miembro del comité de apoyo a la huelga
en una escena familiar, 1936.*

“Se volvió de nuevo a los conventillos, a las esquinas, a los restaurantes, a cuanto lugar fuera posible para entablar una conversación o concretar una entrevista. [...] Fue muy valiosa la ayuda que nos prestaron los almaceneros, los lecheros, los repartidores de pan, los vendedores a plazos que recorrían por aquellos tiempos las casas de vecindad, los que por la índole de sus respectivas actividades estaban muy ligados a los obreros de los frigoríficos. Estaban a la orden del día las visitas que realizaban, por ejemplo, los compañeros del ‘Wilson’ trasladándose a la Isla Maciel para establecer contacto con los obreros del ‘Anglo’ y viceversa, siempre en el mismo plan de ampliar los enlaces. Los paseos por la costa, los asados, las pequeñas fiestas organizadas por distintos motivos, hicieron mucho en tal sentido. En ellos, aunque por precaución no se hablara mucho de la organización, se realizaban los trabajos tendientes a ella; distribuíase la propaganda, imponíase de las reivindicaciones más corrientes en cada sección, y vinculábase a nuevos obreros [...] Así, poco a poco, con extrema paciencia, aglutinando voluntades para la defensa de las reivindicaciones, grandes y pequeñas, pero



Habla el dirigente José Peter en una asamblea de obreros de la carne, 1940.

siempre sentidas por los obreros y las obreras, se fue construyendo la nueva base sindical”.

Esta táctica permitió sostener la actividad sindical donde, de otro modo, hubiera sido imposible hacerlo.

Los comunistas también fueron auxiliados por su reconocimiento del papel clave que las mujeres tenían en muchas industrias, algo en lo que falló el resto de los grupos. La Federación de Obreros y Empleados Telefónicos, que dominaban los *sindicalistas*, por ejemplo, hizo muy poco por organizar a las operadoras, desatendiéndolas por considerarlas miembros de la clase media. Sin embargo, a corto plazo eran precisamente las operadoras quienes podían alterar el servicio telefónico y no los hombres, que en su mayoría realizaban instalaciones y reparaciones. En la industria textil, buena parte de la mano de obra era femenina, si bien el porcentaje tendió a decrecer a lo largo de la década. Los comunistas, a diferencia de sus rivales socialistas, advirtieron que no podrían organizar esa industria sin el respaldo activo de las mujeres. Los socialistas siempre habían dependido de los trabajadores calificados, mayoritariamente hombres; en cambio, los comunistas abordaron los problemas femeninos dentro de la fábrica, reclamando igual pago por igual trabajo y haciendo campaña por la enmienda de la ley de maternidad para hacerla más favorable a las trabajadoras. El sindicato examinaba asuntos de interés para las mujeres, y el aparato del partido se encargó de que ellas tuvieran un lugar en los ámbitos de toma de decisiones. Así, Ida Pechini formó parte de la Comisión Directiva, mientras que Dora Genkin representó al sindicato en un congreso de la CGT. Estas acciones ayudaron a convocar a un gran número de mujeres, lo que era esencial para la organización sindical.

Con una percepción igualmente correcta de la naturaleza de la industria, la Unión Obrera Textil, liderada por comunistas, procuró llevar adelante convenios por sector. Si los acuerdos eran por fábrica, razonaban, los empresarios que los firmaran tendrían costos laborales más altos y serían vulnerables a la competencia de las compañías que no habían acordado; en cambio, si sectores completos de la industria firmaban convenios ese tipo de competencia no se produciría e incluso los empresarios podían ser favorables a otorgar ligeros aumentos de salarios. El sindicato textil fue capaz de conseguir la firma de varios de esos contratos. Sin embargo, su

existencia no significaba que los trabajadores pudieran opinar demasiado acerca de las condiciones de trabajo en la fábrica, ya que era imposible hacer cumplir lo acordado, salvo en aquellos lugares donde los trabajadores tenían fuerza suficiente para garantizarlo por sí mismos. Hasta las leyes que regulaban las condiciones de trabajo eran ignoradas con frecuencia, en particular fuera de Buenos Aires, y sólo los trabajadores altamente calificados tenían capacidad real para controlar sus condiciones de trabajo.

El ascenso comunista fue además favorecido por el infortunio de otros grupos. Los anarquistas y los *sindicalistas* habían sido marginados. La ayuda que el Partido Socialista podía brindar a los sindicatos declinó cuando su importancia en el sistema político comenzó a disminuir, con el levantamiento de la abstención de la Unión Cívica Radical en 1935. Luego de las elecciones de 1938 y 1940, el socialismo sólo retuvo cinco bancas en Diputados. El neoconservadurismo había dejado de necesitar al PS para otorgar legitimidad al sistema, y no tuvo ya razones para complacerlo. La Federación de Empleados de Comercio, por ejemplo, pasó buena parte del período posterior a 1935 tratando de proteger los logros que había alcanzado previamente en la arena legislativa. Su única iniciativa nueva fue un plan de jubilaciones que, a pesar de una campaña que recordaba las de años anteriores, exitosas, fue aprobada con mucha dificultad en Diputados y nunca se trató en Senadores.

Tampoco estaba el Partido Socialista en condiciones de proporcionar el mismo tipo de ayuda organizativa que los comunistas, o no estaba dispuesto a hacerlo. Para ser justos con el PS, muchos dirigentes obreros afiliados eran casi *sindicalistas* en su rechazo a la intromisión de la política en sus organizaciones, prefiriendo permanecer independientes y limitando, de ese modo, el auxilio que el partido podía darles. Por otra parte, el PS se debilitó en 1936 por una escisión de su ala izquierdista y juvenil, que fundó el Partido Socialista Obrero, aunque esa circunstancia no tuvo impacto en el movimiento sindical.

Los grupos que no estaban vinculados al Partido Comunista sufrieron también un golpe, a raíz de una disputa ocurrida en la Unión Ferroviaria. En 1938, reactualizando el viejo conflicto, los *sindicalistas* se fueron del sindicato, formando la Federación Obreros y Empleados Ferroviarios. Tenían el apoyo activo del gobierno de Ortiz, que había sostenido buenas relaciones con el ala *sindicalis-*

ta de los ferroviarios mientras había sido ministro de Obras Públicas de Alvear. Ortiz necesitaba desesperadamente hallar aliados políticos, dado que su cambio de línea, que ahora se dirigía contra los mecanismos del fraude electoral, había cortado los lazos con quienes lo habían llevado al poder; el presidente buscaba un sindicato que pudiera ser su aliado. Sin embargo, la escisión sólo incrementó la inquietud laboral en los ferrocarriles: los dos sindicatos compitieron por el favor de grupos de trabajadores que ya estaban descontentos, y les fue difícil establecer disciplina alguna. Los resultados no fueron los que la administración deseaba, y bajo presión del gobierno la nueva organización se disolvió en 1940.

Estos procesos tenían lugar en una sociedad en la cual las tensiones se estaban haciendo muy fuertes, lo que reflejaba, en parte, el colapso del consenso liberal que había dominado el pensamiento de la elite política desde al menos la segunda mitad del siglo XIX. La búsqueda de nuevas ideologías y fórmulas políticas se había acelerado con la aparición del fascismo, la depresión y luego el ascenso nazi. En la izquierda, los roces se atenuaron cuando en 1935 el Partido Comunista adoptó la estrategia de Frente Popular, que aunque nunca fue creado formalmente, por la reticencia de radicales y socialistas, hizo posible un espíritu de cooperación. Si bien las suspicacias se mantenían, los adherentes de muchas tendencias ideológicas del movimiento obrero lograron colaborar entre sí. El punto más alto de esta cooperación, desde el punto de vista simbólico, fue la manifestación del Primero de Mayo de 1936, patrocinada en conjunto por el PC, el PS, la UCR y la mayor de las dos versiones de la CGT. La política comunista de aliento a la creación de una coalición de centroizquierda, aunque frustrada, les permitió hacer uso de la intervención estatal para solucionar problemas laborales: los comunistas se presentaron como líderes responsables, que trataban de evitar las huelgas constantes a través de la firma de contratos por sectores de la industria. Ortiz y Fresco, por momentos, encontraron atractiva la posibilidad, ya que ofrecía paz social; ambos se mostraron dispuestos a soportar el crecimiento de los sindicatos comunistas que tuvo lugar después.

El espíritu de solidaridad dentro del movimiento obrero y de la izquierda en general se vio fortalecido, además, por un acontecimiento externo: la guerra civil en España. En el movimiento obrero se manifestó un raro sentido de unidad, y sindicatos y trabajadores abrazaron con fervor la causa de la República. Los periódicos



Integrantes de una comisión de la CGT, principios de la década de 1940.

cos sindicales, como *CGT*, siguieron de cerca el esfuerzo de guerra, mientras los sindicatos aportaban sumas relativamente considerables a los republicanos. Más importante aún fue la extensión del sentimiento de que existía una misión por cumplir, y de que se estaban viviendo tiempos peligrosos.

Ese clima permitió a socialistas y comunistas postergar sus sospechas mutuas y cooperar dentro de la *CGT* y en otros ámbitos, favoreciendo aun más el desarrollo de grandes y fuertes sindicatos en la industria, y su organización allí donde no habían existido. Los sindicatos comenzaban a ser mayores, cubrían áreas geográficas más vastas y a menudo representaban también a los trabajadores no especializados. Su envergadura y sus tácticas hicieron que tanto los gobiernos como los empresarios se mostraran más favorables a la negociación. A diferencia de las grandes organizaciones de tiempos anteriores, como la Unión Ferroviaria y la Federación Obrera Marítima, los de mediados de los años treinta no agru-

paban a trabajadores de sectores estratégicos, muy visibles y con capacidad para dañar rápidamente la economía cortando el circuito comercial de exportación-importación. Era éste un nuevo tipo de sindicato, cuyo modelo pudo haber sido la Unión Ferroviaria, pero que en muchos aspectos fue precursor de los sindicatos industriales modernos que emergieron luego de 1943.

EL CONFLICTO SE RENUEVA

El clima de cooperación, sin embargo, no duró. La situación política cambió rápidamente, tanto en el mundo como en la Argentina. Buena parte de la atracción suscitada por el Partido Comunista a mediados de los años treinta se había basado en su incondicional repudio al fascismo y en su esfuerzo por crear una coalición que lo bloqueara. Pero esa posición fue abandonada tras el pacto entre Hitler y Stalin, firmado en agosto de 1939. Luego de algunas dudas, el Partido Comunista abandonó sus intentos



Mitin del Partido Comunista, 6-11-1940.

de colaboración con el resto de las fuerzas de centroizquierda, virando de una posición antialemana a otra de neutralidad beligerante y antiimperialista, lo que significaba tomar posición contra los Estados Unidos y contra Gran Bretaña. Los sindicatos comunistas adoptaron tácticas particularmente agresivas contra firmas de esos orígenes, y esa política creó problemas con los socialistas, que eran fervorosamente pro aliados. Para estos últimos, el cambio de táctica confirmó la sospecha de que los comunistas habían sido poco sinceros desde un principio.

La situación política interna se hizo también más compleja. A mediados de 1940, Castillo, a cargo de la presidencia, cambió de dirección retornando al fraude y comenzando un lento proceso de recorte de las libertades civiles, que hizo cada vez más difícil la actividad sindical. Castillo promovió también vigorosas políticas anticomunistas.

Los choques dentro del movimiento sindical reaparecieron después del cambio de táctica comunista. Hacia mediados de 1940, por ejemplo, los diarios del PC y del PS cambiaban duros ataques contra las posiciones que sobre la guerra sostenía el adversario, y la disputa se extendió hacia el movimiento obrero. Pero hubo también efectos prácticos: la Comisión Administrativa de la CGT expulsó a Andrés Roca del Comité Central a causa de un artículo aparecido en el periódico *El Obrero de la Construcción*, y los enfrentamientos fueron tan serios que el Comité Central de la CGT no se reunió entre mayo de 1940 y octubre de 1942.

En la Unión Obrera Textil, manejada por líderes comunistas, los conflictos dividieron la organización. Un momento clave fue la larga y dura huelga de 1940-1941 contra Ducilo, una gran fábrica de rayón, propiedad conjunta de la Imperial Chemical, de origen británico, y la norteamericana Du Pont. Los adversarios del sindicato denunciaron que se estaba usando la huelga para hacer una exhibición de antiimperialismo; en otras palabras, que el sindicato estaba realizando un ejercicio de gimnasia revolucionaria. El abogado del sindicato, socialista, renunció en medio de la huelga; a su vez, el sindicato acusó a la CGT de no aportar ayuda suficiente, y la CGT rompió todo contacto con la organización. Hacia mediados de 1941, los dirigentes socialistas que habían dejado el sindicato textil formaron su propia organización.

A lo largo de la era del Frente Popular, entre 1935 y 1939, los sindicatos comunistas habían buscado regularmente, y con mayor



*Enrique Dickmann (centro) rodeado de obreros de la fábrica Ducilo,
19 de noviembre de 1940.*

asiduidad que sus rivales, el auxilio del gobierno; algunas veces, lo recibieron. Sin embargo, los gobiernos de la provincia de Buenos Aires posteriores a la intervención promovida por Ortiz demostraron menos interés que su predecesor en los problemas laborales. El gobierno de Castillo tenía todavía menos razones para atender al movimiento obrero, dado que dependía del fraude y era fuertemente anticomunista. A la actitud más agresiva de los sindicatos comunistas en 1941 respondió con el corte de todo contacto entre el DNT y las organizaciones obreras de textiles y de la construcción, dirigidas por activistas de esa orientación. La medida las dejó sin ninguna capacidad para conseguir mediaciones ante las patronales. La CGT intentó restablecer la relación entre los sindicatos y el Departamento, pero fracasó; habida cuenta de la mala relación entre la dirigencia de la Confederación y los comunistas, debe asumirse que la gestión no fue muy fervorosa.

La cambiante situación mundial volvió a alterar, una vez más, las relaciones en el movimiento obrero, mientras simultáneamente Castillo se consolidaba en el poder, avanzando aun más en la restricción de las libertades públicas. La invasión alemana a la Unión Soviética, en agosto de 1941, produjo un cambio inmediato en las tácticas del Partido Comunista. Lo rápido de esta modificación, comparada con la lenta conversión de 1939, lleva a suponer que la oposición a los nazis era notoriamente más popular en el partido que la neutralidad beligerante.

Una vez más, los comunistas pusieron énfasis en la creación de alianzas del centro a la izquierda; la meta principal del partido era ahora ganar la guerra, y asegurar que los productos estratégicos llegaran a los aliados. En ocasiones, el PC puso más empeño en alcanzar estos objetivos que en obtener beneficios para los trabajadores: era una posición difícil de sostener, con militantes de un partido de izquierda que defendían políticas beneficiosas para el esfuerzo de guerra, y quizá para el país, pero no para los trabajadores involucrados. Dentro de la Unión Ferroviaria, por ejemplo, la facción liderada por los comunistas se opuso a un aumento de salarios que se basaba en el establecimiento de tarifas de fletes más altas, argumentando que traería inflación. De acuerdo con Mario Rapoport, José Peter, dirigente de los trabajadores de los frigoríficos, dirigió una carta al embajador británico por la cual manifestaba que estaba dispuesto a terminar un conflicto para auxiliar a los aliados.

Sin embargo, el restablecimiento de la colaboración en el movimiento obrero no era posible. En ciertas organizaciones, como la textil, los antagonismos habían ido demasiado lejos como para ser ignorados. Más importante que ellos era el hecho de que el choque que comenzó en 1940 en la Unión Ferroviaria se había extendido a otras organizaciones. El sindicato ferroviario fue escenario de una rebelión a gran escala contra la dirección de Domenech y sus aliados, entre los que se destacaba Luis González, quienes controlaban además la CGT. Nominalmente, los dos eran socialistas, aunque no miembros del partido —Domenech se había alejado en 1925 y no retornó a él hasta 1942—, y sin embargo tenían una visión casi *sindicalista* del rol de los partidos en el movimiento obrero. Dirigían su sindicato con mano dura, permitiendo apenas el disenso. Sin duda, esta situación creaba problemas, pero lo decisivo era que los ferroviarios hubieran sido forzados a soportar varias formas de rebajas de sus sueldos. El sindicato había hecho,

en general, un buen trabajo protegiendo a sus miembros, pero la industria había sido golpeada por la depresión y la creciente competencia del transporte automotor, y los dirigentes cargaron con la culpa.

Los comunistas pudieron movilizar a las bases descontentas porque tuvieron la ayuda de los radicales. Todos los observadores coincidían en que la mayoría de los ferroviarios eran radicales, pero dentro del sindicato votaban por dirigentes cuyas lealtades políticas estaban en otro sitio, pues en ese ámbito estaban interesados en el desempeño sindical y no en la filiación política. Por estos años, los radicales comenzaron a actuar en los ferrocarriles y dieron cobertura, respetabilidad y apoyo a los comunistas; estos últimos, por su parte, aportaron dirigentes con experiencia, habilidades organizativas y empuje. Utilizando el descontento de las bases, y a pesar de las expulsiones, la intervención de secciones y otras medidas disciplinarias, las dos fuerzas desafiaron al *establishment* sindical ferroviario. En 1942, en la elección interna de un candidato para la Caja de Jubilación, única competencia electoral que involucraba a todo el sindicato, la alianza radical-comunista eligió presentar al jefe de la organización radical de los ferroviarios, Julio Duró Ameghino. Su candidatura estuvo cerca del triunfo, y quienes lo apoyaron denunciaron fraude. Un año más tarde, la misma alianza lo presentó como candidato, contra el oficialismo de la Unión Ferroviaria. La elección tuvo lugar apenas después del golpe del 4 de junio de 1943, y Duró Ameghino ganó. Estaba claro hacia dónde se inclinaba la balanza. El desafío al control de Domenech se extendió a la CGT, que también era manejada con mano dura. En este punto, conviene detenerse a analizar las actitudes del gobierno y los cambios en la naturaleza de los sindicatos.

ANTES DEL PERONISMO

Castillo hizo todavía más duras las restricciones a la actividad gremial y a las libertades: en diciembre de 1941, declaró el estado de sitio. El hostigamiento se centró en los comunistas, que estaban en riesgo permanente de ser arrestados, pero todos los grupos sindicales tuvieron problemas.

Esas restricciones, y las peleas internas, hicieron difícil que los

sindicatos funcionaran normalmente. Los mítines y manifestaciones eran menos frecuentes, y a menudo la policía denegaba el permiso; cuando lograban reunirse, existía el riesgo de que estallaran altercados entre los grupos internos. En 1938 hubo 7.317 reuniones sindicales en Buenos Aires, mientras que en 1941 habían caído a 3.776, y a 3.610 un año más tarde. El número de los concurrentes también cayó, de 466.136 en 1938 a 283.147 en 1942.

Hacia 1941, el Departamento Nacional del Trabajo levantó un censo sindical. De acuerdo con sus cálculos, 441.412 trabajadores pertenecían a los sindicatos; esta cifra representaba un crecimiento del 19,3 % desde 1936. Sin embargo, este crecimiento del número de obreros sindicalizados había aumentado apenas más rápidamente que el conjunto de la fuerza de trabajo, en el marco de una expansión veloz de la economía urbana. Todavía por entonces, sólo el 12% de la fuerza de trabajo no rural estaba sindicalizada. La CGT era, claramente, la confederación dominante: a ella pertenecía el 75% de los miembros de sindicatos. La



Dirigentes de La Fraternidad, 12-2-1942.

Unión Sindical Argentina, *sindicalista*, sólo tenía el 3,3% de las afiliaciones; los sindicatos católicos, el 3%, y los independientes alrededor del 19%.

A su vez, la existencia de un nuevo tipo de organización obrera se hacía evidente. Los sindicatos del transporte eran todavía importantes: la Unión Ferroviaria sostenía tener 90.000 miembros de los que cotizaban 67.668; la Unión Tranviarios, 13.000 y 11.717, respectivamente; y La Fraternidad, 12.795 miembros. Pero había grandes sindicatos, que en algunos casos eran de alcance nacional y agrupaban a obreros industriales, en otras esferas. La Federación Obrera Nacional de la Construcción manifestaba contar con 58.680 miembros; la Confederación Nacional de Empleados de Comercio, 35.000; la Federación Obrera de la Alimentación, 19.513. Existían también importantes organizaciones entre los textiles, los municipales y los estatales.

Sin embargo, la Unión Ferroviaria todavía dominaba la CGT. Tal predominio no se correspondía ya con el tamaño del sindicato, y molestaba profundamente a muchos dirigentes, contribuyendo a alimentar una fuerte acción de oposición dentro de la Confederación, cuya conducción no reconocía las transformaciones ocurridas. La dirigencia de la Unión Ferroviaria aún creía que habría de controlar la Confederación, rehusándose a admitir que su sindicato ya no era mucho más grande y poderoso que otras organizaciones obreras. Los líderes de los ferroviarios señalaban regularmente que la Unión Ferroviaria era la "columna vertebral" de la CGT o del movimiento obrero. Fue esta actitud la que posibilitó que la lucha por el control que ya estaba librándose en el sindicato ferroviario se extendiera tan fácilmente hacia la CGT. Los comunistas y sus aliados radicales no hubieran podido, por sí solos, amenazar el control que la Unión Ferroviaria ejercía en la CGT. Fue necesario que se les unieran dirigentes con una visión cercana a la socialista, que deseaban comprometer más directamente a la confederación sindical en la política y que al mismo tiempo buscaban ejercer una mayor influencia en la central obrera.

Las figuras clave en este movimiento fueron Francisco Pérez Leirós, por largo tiempo jefe de los trabajadores municipales de la Capital, y su colega de los empleados de comercio, Ángel Borlenghi. Ambos eran políticamente ambiciosos y cuestionaban el control de los ferroviarios sobre la CGT. Pérez Leirós había sido elegido diputado cuatro veces como candidato socialista, y



Francisco Pérez Leirós (tercero de la izquierda) en la Unión de Obreros Municipales, 1939.

había dominado su sindicato casi desde el momento de su fundación; era uno de los jefes sindicales de mayor influencia dentro del Partido Socialista. Borlenghi, luego alto funcionario del peronismo, era un hábil operador político, como lo probaba su éxito en impulsar la aprobación de leyes laborales, pero en las listas socialistas nunca había figurado en lugares que le permitieran ganar un cargo. Era también demasiado independiente y demasiado popular, y la dirigencia del partido recelaba sin duda de su autonomía potencial. Por otra parte, era también una persona llamativa, de acuerdo con los espartanos gustos partidarios de esa época: se vestía bien, en su despacho se permitía algunos lujos, y tenía cierta reputación de mujeriego.

Pérez Leirós y Borlenghi se unieron a los ataques de los disidentes contra el poder establecido, tanto en la CGT como en la Unión Ferroviaria. El PS nunca tomó una clara posición ante el conflicto, y sus militantes operaban en ambos bandos. Los disi-

dentes ferroviarios obtuvieron apoyo de todas las agrupaciones políticas importantes, incluidos los conservadores.

En la CGT, el conflicto fue muy fuerte: la reunión del Comité Central Confederal de octubre de 1942 y el congreso que se celebró dos meses después fueron verdaderas trifulcas. De un lado se alineaban radicales, comunistas, y los socialistas más “políticos”; del otro, Domenech y la jerarquía sindical ferroviaria, a los que se sumaban algunos aliados como los tranviarios. Las facciones no podían convivir en la misma organización: cuando el Comité Central se reunió para elegir cargos en marzo de 1943, ocurrió lo que era casi inevitable. Quienes tenían el control presentaron la lista número 1, encabezada por Domenech, mientras los disidentes presentaban la lista número 2, que postulaba a Pérez Leirós. La Unión Ferroviaria había ya expurgado su delegación de aquellos que no se habían comprometido a votar a Domenech; no obstante, un miembro de la UCR llamado Marcos Lestelle votó por la lista 2, dándole la victoria por un voto. La reunión fue entonces suspendida, Lestelle fue reemplazado y en una nueva votación ganó, desde



Asamblea de trabajadores metalúrgicos en el Luna Park, mayo de 1942.

ya, la lista 1 de Domenech. Los perdedores se rehusaron a aceptar la legalidad de la votación, y quedaron organizadas dos versiones de la CGT. La CGT número 1 tenía el apoyo de la Unión Ferroviaria, los tranviarios y algunos otros sindicatos más pequeños. La CGT número 2 incluía a las organizaciones obreras con direcciones comunistas, a las que se agregaban los empleados de comercio, los municipales y La Fraternidad.

Los rencores se hicieron más profundos, y los códigos de conducta vigentes durante décadas fueron quebrados: los ferroviarios disidentes operaban desde el local de los trabajadores municipales; la CGT número 1 apoyó un movimiento disidente entre los textiles, y ayudó a crear una organización, la Unión Obrera Metalúrgica, que se separó del sindicato dominado por los comunistas. Durante los meses anteriores al golpe militar de 1943, las organizaciones sindicales estuvieron ocupadas en sus disputas internas; en cualquier caso, la actividad sindical se tornaba cada vez más difícil, ya que la presión policial iba en aumento.

¿Qué hubiera ocurrido con el movimiento obrero si el golpe militar no se producía y Perón no llegaba al poder? Es imposible decirlo con alguna precisión. Por una parte, está claro que el movimiento obrero era, a comienzos de la década de 1940, mucho más poderoso que en 1930. Su estructura había cambiado, y existían varios sindicatos grandes y fuertes, que actuaban a escala nacional. Sin embargo, había un alto grado de frustración en la dirigencia y, quizá, también en las bases. La sindicalización y las actividades organizativas habían hecho poco más que seguir la expansión de la economía urbana. Los sindicatos no habían tenido éxito, en la mayoría de los casos, en la tarea de auxiliar a los trabajadores a enfrentar la inflación, creciente a causa de la guerra, y mucho menos en la de mejorar la situación general. Otros deseos, como el de hacer cumplir las leyes laborales vigentes y el de crear sistemas jubilatorios, parecían apenas sueños lejanos. En casi todas las industrias, los trabajadores tenían poco control sobre la situación en la propia fábrica; los convenios que fijaban condiciones de trabajo, allí donde los había, valían poco más que el papel en el que estaban escritos, salvo que el sindicato tuviera fuerza suficiente para hacer que fueran respetados. La convicción de que el papel del Estado era crucial en la organización de los obreros no calificados y semicalificados crecía: se estimaba que sólo con el auxilio del gobierno se podría forzar a los empresarios a hacer

concesiones. Por lo tanto, la política asumía una gran importancia, dado que en casi todas partes los sindicatos estaban tratando de organizar a aquel tipo de trabajadores. El carácter semiautoritario del sistema político, sin embargo, hacía complicada cualquier relación del movimiento obrero con el Estado.

Hacia 1943, las dos fuerzas principales del movimiento sindical reconocían la importancia de la política, pero diferían en el modo de aproximación a ese mundo. Existen evidencias de que los líderes de la CGT número 1 deseaban crear algún tipo de partido laborista o de trabajadores; eso fue lo que ocurrió luego, cuando en 1945 se creó el Partido Laborista, aunque la agrupación perdería rápidamente su independencia y sería finalmente disuelta, eclipsada por la figura de Perón. Esta solución podría haber hecho del movimiento obrero argentino uno parecido al inglés.

La alternativa elegida, en cambio, por quienes se alineaban en la CGT número 2 era establecer, entre los sindicatos y el sistema político, lazos mucho más estrechos que los existentes, a través de la vinculación con los partidos de izquierda que ya funcionaban. Este modelo podría haberse asemejado al chileno o a los del sur de Europa. Si no hubieran acontecido cambios más dramáticos, es probable que éste hubiera sido el resultado, dado que los disidentes parecían a punto de tomar el control de la todavía decisiva Unión Ferroviaria.

Traducción de Alejandro Cattaruzza.

BIBLIOGRAFÍA

Abad de Santillán, Diego. "El movimiento obrero argentino ante el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930", *Revista de Historia*, Buenos Aires. Nº 3 (1er. trimestre. 1958), pp. 123-132.

Del Campo, Hugo. *Sindicalismo y peronismo: los comienzos de un vínculo perdurable*, Buenos Aires. 1983.

Durruty, Celia. *Clase obrera y peronismo*, Córdoba, 1969.

Gay, Luis. *El Partido Laborista en la Argentina*, Buenos Aires, Biblos, 1999.

Gómez, Rufino. *La gran huelga petrolera de Comodoro Rivadavia (1931-1932)*, Buenos Aires, 1973.

Horowitz, Joel. *Argentine Unions, the State and the Rise of Perón, 1930-1945*, Berkeley, 1990.

———. "Los trabajadores ferroviarios en la Argentina (1920-1943). La formación de una elite obrera", *Desarrollo Económico*, Buenos Aires, 99, 25 (oct./dic. 1985), 421-446.

Korzeniewicz, Roberto P. "Labor Unrest in Argentina, 1930-1943", *Latin American Research Review* 28, 1 (1993), pp. 7-40.

Lobato, Mirta Zaida. "La mujer trabajadora en el siglo XX: un estudio de las industrias de la carne y textil en Berisso, Argentina", en *Mujer, trabajo y ciudadanía*. Buenos Aires, 1995, 13-71.

Matsushita, Hiroshi. *El movimiento obrero argentino, 1930-1945: sus proyecciones en los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, 1983.

Peter, José. *Crónicas proletarias*, Buenos Aires, 1968.

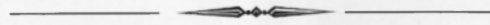
Potash, Robert A. *El ejército y la política en la Argentina, vol. I: 1928-1945: de Yrigoyen a Perón*, Buenos Aires, Sudamericana, 1971.

Rapoport, Mario. *Gran Bretaña, Estados Unidos y las clases dirigentes argentinas; 1940-1945*, Buenos Aires, De Belgrano, 1980.

Torre, Juan Carlos (comp.). *La formación del sindicalismo peronista*, Buenos Aires, Legasa, 1988.

———. *La vieja guardia sindical y Perón: sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.

VII



Ενfermedades, médicos y cultura higiénica

por DIEGO ARMUS y SUSANA BELMARTINO



terior de la Asistencia Pública, ciudad de Buenos Aires, 1931.



Hasta bien entrada la primera década del siglo XX, las enfermedades infectocontagiosas fueron un recurrente dato de la vida en las ciudades y un elemento decisivo en la mortalidad. Las epidemias marcaban la vida de la gente y los esfuerzos de los gobiernos. Fueron muchos los que insistieron en extender las obras de salubridad, un objetivo que tardaría en concretarse debido a sus altos costos. Por detrás de ese empeño había una preocupación por traer orden y estabilidad al cuerpo social: se trataba de salir al paso de las urgencias generadas por la urbanización y la incipiente industrialización. Fue en ese contexto que la bacteriología hizo un impacto en la sociedad, sumando a la veneración por la limpieza la lucha contra gérmenes y microbios, esos nuevos enemigos invisibles.

Esta higiene, predominantemente defensiva, era el resultado de dos preocupaciones que según las coyunturas alternaban en importancia. De una parte, evitar el contagio indiscriminado que el cíclico impacto de las epidemias traía consigo. De otra, utilizar la higiene como uno de los tantos recursos destinados a incorporar a gran parte de las

masas urbanas a la vida moderna. Pero fue la primera de esas preocupaciones —asociada a la idea de la degeneración, la degradación moral y física, la suciedad y la enfermedad— la que marcó los años del cambio de siglo. Así, la lucha antiepidémica venía finalmente a enlazarse con un esfuerzo regenerador, eugenésico, que desde muy distintas posiciones ideológicas terminaba bosquejando la idea de construir una “raza argentina” fuerte y sana.

Al despuntar los años veinte, y particularmente durante los treinta y cuarenta, la higiene defensiva, como disciplina y política pública, quedó relegada a un segundo plano. Este cambio fue en gran medida un resultado de las nuevas tendencias en la mortalidad. Para esos años, en el mundo urbano la gente ya no moría por viruela o sarampión y la tuberculosis no aumentaba, a pesar de que continuaba haciendo estragos; eran las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, enfermedades “nuevas” o “modernas” como solía llamárselas, las que comenzaban a destacarse en las estadísticas. La mortalidad infantil seguía siendo relativamente alta, en gran medida como resultado de las enfermedades gastrointestinales. En el mundo rural, especialmente en el Nordeste, el paludismo dominaba la agenda de las iniciativas en materia de salud pública y el mal de Chagas apenas comenzaba a ser reconocido como problema.

Pero estos cambios también se relacionaban con novedades significativas en el mundo de las ideas y en la sociedad. Durante estas décadas nuevos grupos profesionales se fueron consolidando y nuevos actores sociales y culturales comenzaron a jugar un rol más evidente. Con los médicos en primer lugar, pero junto con ellos otros grupos menos articulados, galvanizó una nueva conciencia de los cambios que tuvo efectos inocultables en las iniciativas y preocupaciones estatales. Los médicos buscaron afirmarse como los únicos proveedores de servicios de atención de la salud, aumentaron en número y redoblaron esfuerzos frente a sus siempre presentes competidores, la medicina casera y la que ofrecían los curanderos. En gran medida, ese esfuerzo fue facilitado no sólo por el desarrollo de una red de instituciones de atención controladas por los médicos sino también por un renovado empeño orientado a ganar la calle y la conciencia de la gente utilizando los modernos métodos del *marketing*. De la mano de esos impulsos llegó un aumento de las expectativas y de las demandas por acceder a tales servicios que no tardaron en hacerse insuficientes. A partir de

los años veinte fueron evidentes los problemas de la falta de camas, de la escasez de recursos y, en general, de una demanda insatisfecha.

La sociedad, especialmente en las ciudades grandes, ya no era la misma. La higiene defensiva de fines del siglo XIX y comienzos del XX perdió presencia, y sobre su tono alarmista se fue articulando una versión nueva, positiva, que combinaba la preocupación por la salud, la plenitud física y la perfección moral. Y en esta apuesta el tema que se recortaba como una muletilla fue el del estilo de vida, una suerte de recurso estratégico multivalente que se proponía indicar los caminos que conducían a una supuesta felicidad. Esta apuesta por la salud no fue, entonces, una réplica del alarmismo finisecular, marcado ante todo por el cíclico azote de las epidemias de enfermedades infectocontagiosas. Es cierto que en ocasiones reaparecía el tono alarmista, pero lo que en esos años se estaba imponiendo era la convicción de que haciendo las cosas de un cierto modo era posible estar sano y gozar de una salud pensada como un valor integral y absoluto.

NOVEDADES Y PERSISTENCIAS EN LA AGENDA DE LA SALUD PÚBLICA

En la década del veinte las enfermedades gastrointestinales, la sífilis, el paludismo y la tuberculosis adquirieron o reafirmaron una dimensión sociocultural donde lo meramente biomédico se saturaba de nuevos significados y sentidos. Las preocupaciones relacionadas con las enfermedades gastrointestinales reconocían, a un mismo tiempo, la gravedad de la mortalidad infantil y la renovada importancia de la crianza de los niños, dos cuestiones centrales en la definición programática de una disciplina muy en boga en esos años, y no sólo en la Argentina, como fue la puericultura. Estas inquietudes, sin embargo, no impulsaron más que la realización de esfuerzos por controlar en las grandes ciudades las condiciones de la oferta de leche de vaca y la construcción de una incipiente red de servicios de salud preventivos y de atención. No hubo sostenidas campañas organizadas desde el Estado, en parte porque era bien difícil atacar eficazmente el problema sin lidiar con la cuestión más vasta de la pobreza. En una perspectiva más amplia, las enfermedades gastrointestinales y la puericultura dieron argu-



*Dispensario de la Liga Argentina contra la Tuberculosis en Villa Crespo,
1925.*

mentos a quienes, desde la elite política, burocrática y médica, construían la retórica de la necesidad de forjar una supuesta “raza nacional” en torno a la cual se jugaba el futuro de la Argentina.

La campaña contra las enfermedades venéreas, en primer lugar la sífilis, fue parte de un esfuerzo moralizador que buscaba llamar la atención sobre una sexualidad corrompida. Se trataba de advertir sobre la existencia de un orden social degradado, penetrado por la suciedad y la falta de higiene, por donde circulaban individuos sexualmente irresponsables. En ese marco, la sífilis se recortaba como un castigo no sólo para las prostitutas sino también, y fundamentalmente, para los hombres que frecuentaban el mundo del burdel violando un código moral interesado en alentar una sexualidad restringida. Pero alrededor de la sífilis también se articulaban los fantasmas de la herencia y la degeneración; aquí también las preocupaciones se presentaban en una clave similar a las de la

mortalidad infantil, toda vez que lo que estaba en juego, se suponía, era el futuro de la raza. En este caso, lo que contaba era el conjunto de efectos negativos que la sífilis tenía en la reproducción. Y aun cuando sus reales consecuencias fueron materia de discusión, quienes lideraron las campañas de profilaxis remarcaban una y otra vez que la sífilis era un problema no sólo porque podía llevar a la parálisis, la locura y la muerte, sino también porque producía malformaciones orgánicas en niños concebidos por padres sífilíticos. Así, las enfermedades de transmisión sexual terminaban colocadas en una encrucijada donde la moral, la sexualidad y la oferta de servicios de atención antivenéreos convergían al momento de definir políticas no sólo respecto de la legalización o no de la prostitución, sino también en cuanto a sus efectos degenerativos en la herencia. En ambos casos, el temor y las obsesiones sexuales marcaron el modo en que el problema fue construido y presentado a la sociedad por los reformadores sociales y médicos. Curiosamente, la fuerza e insistencia del discurso de la profilaxis social con todos sus matices e intensidades —algunos llegaron a hablar de esterilizaciones forzadas de los enfermos y muchos más de la necesidad de difundir la educación sexual en una clave casi puritana que parecía borrar ideologías— se desplegaron en un momento en que las estadísticas no sólo revelaban que la sífilis no era una causa de muerte particularmente destacada sino también indicaban su retroceso. A pesar de ello, quienes animaban las campañas antivenéreas insistían —sin probarlo— en que la sífilis estaba asociada a un sinfín de males, desde las úlceras de estómago a las enfermedades nerviosas, el cáncer o el raquitismo. Se justificaba así un discurso alarmista donde la moral y la medicina se potenciaban mutuamente.

El paludismo, por su parte, afectaba fundamentalmente a ciertas zonas del interior. Una importante proporción de la población infantil moría por esta causa y entre los adultos asumía las características de una enfermedad crónica, con manifestaciones episódicas de carácter agudo y períodos de latencia que, con frecuencia, despertaban falsas expectativas de curación. Presente en Tucumán, Salta y Jujuy desde la época de la Conquista, la expansión del ferrocarril y la movilización de trabajadores hacia la zafra azucarera tucumana facilitaron su difusión hacia Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Corrientes, Chaco y Misiones. Luego de años caracterizados por el desconcierto y la impo-

tencia, hacia comienzos de siglo fue emergiendo una más nítida preocupación por el tema y el paludismo devino en una cuestión pública, no sólo a nivel provincial sino también nacional. Esta toma de conciencia fue en parte facilitada cuando algunos higienistas argentinos se familiarizaron con los descubrimientos en el tema, esto es, la identificación del agente patógeno transmisor —el mosquito anófeles— y el ciclo de la enfermedad entre los seres humanos. Para esos años ya era posible, entonces, empezar a pensar estrategias específicas que podrían llevar a la erradicación del mal. Fue también entonces cuando el Departamento Nacional de Higiene convocó a una reunión nacional e invitó al Ministerio del Interior a atender “el extraordinario desarrollo” del paludismo en las zonas de producción azucarera.

Las estadísticas sociodemográficas asociadas a la endemia no hacían más que contribuir a articular un discurso público que en el mediano plazo facilitaría el lanzamiento de la lucha antipalúdica. En Salta y Jujuy las cifras de mortalidad superaban a las de natalidad y en Tucumán el crecimiento vegetativo de la población era mínimo. En 1903 se presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a organizar la campaña antipalúdica; hacia 1907 se sancionó la ley 5.195 y un año más tarde se aprobó su reglamentación. En 1911 se realizaron modificaciones que apuntaban a una mayor descentralización en la asignación de los recursos. El texto legal reconocía la necesidad de un abordaje múltiple del problema, que suponía la realización de obras de saneamiento del suelo, la destrucción de larvas y mosquitos, el establecimiento de consultorios especiales y la provisión de quinina para la población afectada. En los primeros años, y por falta de recursos, las acciones sobre el medio fueron marginales. La aplicación de quinina, que sí se llevó a la práctica, no logró resultados satisfactorios, en parte por la dificultad de detección de los infectados, en parte por la débil disposición de la población para continuar el tratamiento cuando ya se habían superado los síntomas agudos de la dolencia. Y también porque probablemente la población rural adulta asumía que las fiebres intermitentes propias de la enfermedad eran parte inevitable de la vida. A todo lo largo de la segunda década del siglo el Departamento Nacional de Higiene presentó iniciativas de ley por las cuales se reclamaban aumentos en las partidas destinadas a la lucha antipalúdica, enfatizando la necesidad de acompañar la aplicación de quinina y la lucha contra el mosquito con ini-

ciativas motorizadas por grandes empresas y municipios dirigidas a sanear los depósitos de agua, mejorar las viviendas e impulsar la educación sanitaria en las escuelas.

Entre 1916 y 1935 la campaña antipalúdica enfatizó en el masivo uso de la quinina como terapéutica específica y las obras de desagües como modo de reducir la densidad de mosquitos que, ya se sabía, eran los causantes y vectores de la enfermedad. Lo que todavía se mantenía como una incógnita era el tipo de mosquito anófeles que afectaba la región. La experiencia italiana en la materia —desarrollada naturalmente en función del tipo de mosquito prevaleciente en la península— fue la referencia que marcó la estrategia de las autoridades sanitarias argentinas y también el ámbito académico donde se formaron muchos de los especialistas locales en el tema. Fue en ese contexto cuando comenzó a hacerse sentir la influencia norteamericana en cuestiones sanitarias, reafirmando una tendencia hegemónica ya indudable en otras esferas de la vida nacional. Entre la década de 1910 y la de 1930 la Fundación Rockefeller desplegaría sobre América Latina recursos técnicos y financieros y una firme convicción por promover campañas contra enfermedades que, se pensaba, eran fáciles de erradicar, tratar y controlar. Impulsaron entonces programas de corto plazo y poca inversión en infraestructura sanitaria que apostaban a difundir estrategias no tanto preventivas o de mejoramiento general de las condiciones de existencia sino esfuerzos curativos y modos de control técnico. Las enfermedades que demandaban iniciativas más generales, más largas o más complejas, no estaban jerarquizadas en su agenda para la región. El paludismo o malaria, junto a la fiebre amarilla y la anquilostomiasis, fueron entonces sus objetivos prioritarios. Así, en 1925 el Departamento Nacional de Higiene firmó un convenio de cinco años de duración con la Fundación Rockefeller destinado al estudio y control del paludismo en Tucumán, Salta y Jujuy. En el marco de este convenio, cofinanciado, se crearon laboratorios, se facilitó —al tiempo que se afirmaba la presencia del Estado federal— cierta descentralización de la lucha antipalúdica desarrollando instancias ejecutivas a nivel provincial y regional, se avanzó en la construcción de obras de infraestructura básica para la desecación de pantanos, se capacitó y entrenó personal no médico y, tal vez lo más importante, se logró empezar a difundir en la sociedad el tema de la salud en el campo. A pesar de estos esfuerzos, a comienzos de la década del

treinta todos coincidían en que la enfermedad era epidémica en el Nordeste y endémica en el Noroeste, con un 50 por ciento de los infectados en Tucumán.

Ese sin duda descorazonador balance llevó a que en 1935 la *Memoria* del Departamento Nacional de Higiene invitara a reevaluar la estrategia antipalúdica, dejando a un lado “la aplicación literal de métodos exitosos para otras partes pero ineficaces, inconvenientes y hasta perjudiciales” en el Norte argentino. En efecto, la desecación de pantanos y pequeñas ciénagas trajo mejoramientos agrícolas pero un rendimiento sanitario bastante mediocre. Nuevas investigaciones comenzaron a revelar que la lucha debía ser contra un tipo de mosquito distinto del que se había combatido en Italia. Así se verificó que el paludismo que afectaba a la región tenía que ver con mosquitos que depositaban sus larvas en los cursos de agua rápidos, libres de vegetación, con taludes verticales y limpios, aguas soleadas en constante renovación y la presencia de un alga que les ofrecía alimento y protección. Esas eran, se había concluido, las condiciones óptimas para la reproducción del mosquito, condiciones creadas, paradójicamente, por los trabajos anteriores de desmalezamiento y saneamiento que habían buscado copiar la experiencia italiana. La nueva estrategia antipalúdica consistió, entonces, en plantar vegetación en el lecho de los cursos de agua y arbustos en sus márgenes con el objetivo de recrear áreas de sombra. Estos cambios facilitaron la progresiva desaparición de las larvas. Años más tarde, a esta estrategia se sumaría otra, específicamente diseñada para la temporada invernal, basada en el uso de petróleo. En relativamente pocos años se determinó la extensión y se precisaron los caracteres regionales del mal, se crearon métodos más económicos para combatirlo, se estudiaron nuevas drogas contra la malaria, se construyeron sifones de agua que impedían la radicación de criaderos, se impulsó la siembra de peces que se alimentaban con las larvas así como de murciélagos que hacían lo mismo con el mosquito. Y reforzando estas medidas, se realizó una labor de educación para la salud que reconocía la necesidad de llegar a la población con un mensaje sencillo y en sintonía con los estilos de comunicación de la región. A pesar de estos nuevos esfuerzos, la enfermedad siguió siendo endémica. La experiencia, con todo, confirmó la certeza de que la lucha antimalárica debía necesariamente reconocer la importancia de lo particular y específico de la región afectada o, en otras pala-

bras, que el paludismo debía confrontarse como una enfermedad local.

En 1934 y 1942 se presentaron en el Congreso Nacional proyectos que insistían en las dimensiones sociales de la endemia y en la necesidad de garantizar una mejor organización de la campaña. Los progresos más significativos llegaron en la segunda mitad de la década del cuarenta, cuando el primer gobierno peronista renovó el compromiso del Estado nacional con la lucha antipalúdica. La Secretaría de Salud y más tarde el Ministerio de Salud la incluyeron en su estrategia más general de las “Grandes Luchas Sanitarias”. A este esfuerzo político-institucional se sumó la utilización del DDT, un insecticida que se reveló particularmente eficaz en la lucha contra el mosquito. En 1947 comenzó a aplicarse



Obreros de la Asistencia Pública preparando bolos tóxicos para las ratas, 1935.

masivamente, lográndose la erradicación de la endemia: los diez mil casos de paludismo detectados en el mes de enero de 1941 apenas sobrepasaban los 200 en el mismo mes de 1949. Para esos años, las campañas educativas hablaban de “vivienda antimosquito” como un necesario e imprescindible recurso en la lucha antipalúdica.

La tuberculosis fue probablemente la enfermedad que más atención concitó en los años treinta. En torno de ella se articuló un discurso y una suerte de subcultura que penetró con fuerza singular la literatura, el ensayo sociológico, las letras de tango, los artículos de diarios y revistas de circulación masiva. Tanto el Estado como diversos sectores de la sociedad civil participaron de la campaña antituberculosa. A todo lo largo del último tercio del siglo XIX y hasta la apertura democrática que siguió a la reforma electoral de 1912, los gobiernos conservadores ofrecieron el marco político que permitió la creación y consolidación de una burocracia administrativa que fue capaz de transformar la cuestión de la tuberculosis en un problema público. Trabajando desde el Departamento Nacional de Higiene o desde dependencias de los gobiernos locales y las asistencias públicas municipales, los médicos higienistas lideraron este esfuerzo. No fue un grupo totalmente homogéneo. Algunos explicaban este rol a partir de lo que en ese entonces se entendía como solidarismo social, otros reconocían que el cuidado de la salud, en tanto cuestión social, era parte de los derechos individuales, y otros, por fin, encontraban en el problema de la tuberculosis una prioridad en una agenda destinada a construir la “raza nacional”. Pero estas diferencias tendían a diluirse al momento de establecer el rol que debía jugar el Estado en estas iniciativas. Tal vez por eso, la nueva burocracia médico-administrativa pudo sentar las modestas bases de una red institucional de asistencia antituberculosa. Con todo, a comienzos de siglo el Congreso apenas discutió el tema y la producción legislativa directa o indirectamente relacionada con la tuberculosis fue pobre, quedando las más de las veces circunscripta a los problemas de la higiene o a evitar el contagio de la enfermedad.

Las administraciones radicales y, más tarde, los gobiernos que siguieron al golpe militar de 1930 no produjeron grandes cambios. La novedad vino por el lado de un discurso más enfáticamente intervencionista desde el punto de vista de las responsabilidades del Estado. En los años treinta, profundizando una tenden-

cia esbozada en la década anterior, se subrayó la necesidad de una dirección única de la lucha antituberculosa, sea a la manera norteamericana —en que la iniciativa privada dirigía, pero asumiendo que el Estado acompañaba y apoyaba el esfuerzo—, a la inglesa —en que todo el esfuerzo estaba en manos del Estado—, o a la de la Italia fascista —en que el Estado jugaba el rol dirigente y pautaba y organizaba la iniciativa privada—. En el Congreso Nacional la cuestión apareció con insistencia, pero sólo produjo propuestas legislativas parciales que nunca lograron plasmarse en una ley que efectivamente motorizara la centralización de la lucha y que impulsara lo que los especialistas percibían como el más efectivo recurso para controlar la tuberculosis, esto es, un seguro obligatorio contra la enfermedad que aunara los esfuerzos del Estado, del capital y del trabajo. Para los años treinta, el Estado estaba mucho más afianzado. También la posición de la burocracia médico-administrativa se había consolidado, aunque es posible que haya perdido algo de la relativa autonomía que había gozado a comienzos de siglo y, tal vez, parte de su eficiencia. En cualquier caso, fue a nivel de las administraciones de las grandes ciudades, en primer lugar la de Buenos Aires pero también la de otras del interior, que aparecieron instancias locales de coordinación capaces de expandir servicios y aumentar el número de hospitales y dispensarios barriales.

El Primer Plan Quinquenal del gobierno peronista retomó la prédica y los objetivos ya anunciados en las dos décadas anteriores pero subrayando, como nunca antes, el protagonismo y la función reguladora del Estado en la expansión de los servicios hospitalarios tanto en Buenos Aires, donde la mortalidad tuberculosa ya estaba controlada, como en el interior del país, donde estaba en ascenso o estable. Con todo, y puesto que el interior se había transformado en una región que expulsaba población hacia el Litoral, la tuberculosis en Buenos Aires comenzó a ser asociada a los migrantes internos. Así, el impulso industrializador que atraía mano de obra de las provincias también recargaba la demanda de servicios asistenciales que siempre habían sido deficitarios. Fue hacia finales de la década del cuarenta y comienzos de la del cincuenta cuando la irrupción de los antibióticos transformó radicalmente el problema de la tuberculosis en las grandes ciudades argentinas, en particular las del Litoral. Allí ya no se trataba tanto de tuberculosos que se morían sino de tuberculosos que debían acceder a una terapia que finalmente era eficaz. En cualquier caso, fueron años

signados por una importante expansión de la red hospitalaria, la creación de nuevas agencias estatales abocadas a cuestiones de la salud y, como gran novedad, las contribuciones excepcionales a mutualidades obreras.

En la década de 1930, a los esfuerzos liderados por el Estado se sumaron sociedades barriales, grupos políticos y organizaciones étnicas y laborales que participaron con mayor o menor fervor en la campaña antituberculosa. Sin duda el más relevante de estos esfuerzos fue el de la Liga Argentina contra la Tuberculosis, creada en 1901 tratando de replicar en el ámbito local la experiencia norteamericana. Desde sus comienzos la Liga apuntó a construir un consenso en torno a la necesidad de combatir la tuberculosis. Esa agenda adquirió toda su relevancia en 1935, cuando la Cruzada Antituberculosa Nacional fue presentada a la opinión pública como “una empresa de todos sin distinciones de tendencias filosóficas y políticas”. Su comisión directiva honoraria, además de contar con la presencia del presidente Agustín P. Justo y del intendente de Buenos Aires, Mariano de Vedia y Mitre, reunió a figuras tan dispares como el arzobispo de Buenos Aires, Luis Copello, y el gran rabino de la Argentina, David Mahler; el senador socialista Mario Bravo y quien había sido presidente de la nacionalista Liga Patriótica Argentina, Manuel Carlés; el senador demócrata progresista Lisandro de la Torre y el presidente de la Bolsa de Ganados, Roberto Dowdall; el presidente del Jockey Club, Manuel Alzaga Unzué, y el del Centro de Almaceneros, Manuel Entenza.

Las finanzas de la Liga resultaban del aporte de sus socios y de no muy generosos subsidios del gobierno, especialmente cuando se los comparaba con los que recibían las tradicionales sociedades de beneficencia. A ellos se sumaban los recursos originados en la recaudación de una jugada especial de la lotería o el derecho de uso de los talleres tipográficos del Estado o la distribución sin cargo de sus revistas de difusión, todos ellos obtenidos por lo general a partir de las conexiones de sus miembros dirigentes con el Estado. Su precaria situación financiera la llevó a impulsar una y otra vez campañas para captar contribuciones de la población.

La Liga creó y mantuvo instituciones destinadas a atender las necesidades del tuberculoso pobre que, se suponía, debían servir de referencia cuando el Estado o las mutualidades étnicas u obreras se lanzaban con sus propias iniciativas antituberculosas. Así,

inicialmente bregó por aumentar el número de sanatorios —haciéndose eco de las terapias que desde mediados de fines del siglo XIX indicaban buena alimentación, higiene, aire puro y descanso—. Pero más tarde, cuando fue evidente que levantar una red de sanatorios que atendiera la demanda de miles de tuberculosos era más que ilusorio, centró todo su esfuerzo en ampliar el número de camas en los hospitales y en crear y sostener dispensarios antituberculosos barriales y preventorios para los así llamados “niños pretuberculosos”. Junto con la Sociedad Argentina de Tisiología —la entidad que desde comienzos de la década del treinta buscó representar los intereses de los médicos especializados en enfermedades pulmonares—, la Liga impulsó la coordinación de todas las organizaciones antituberculosas a nivel nacional. Concretada en 1936, la Federación Antituberculosa Argentina se propuso —sin éxito— hacer un uso más eficiente de los limitados recursos de atención desarrollados por más de veinte instituciones privadas asistenciales, étnicas, laborales y profesionales.

En los años treinta la mortalidad por tuberculosis tendía a declinar pero a un ritmo muy modesto. Tal como lo reconocía un estudio de mediados de esa década, la explicación de ese descenso era “tan compleja como la complejidad de la epidemiología de la tuberculosis”. Numerosas narrativas epidemiológicas —apenas esbozadas en el entresiglo y en franco desarrollo a partir de los años veinte y treinta— se propusieron establecer el rol y la relevancia tanto de lo que se dio en llamar los factores “biológicos” como de los “socio-ambientales” en los avatares de la mortalidad tuberculosa. Miradas con la ventaja que da el tiempo, algunas de estas narrativas lucen arbitrarias y hasta delirantes, otras razonables y otras, por fin, apenas tentativas y exploratorias. Todas, de un modo u otro, eran parte de la incertidumbre que marcaba a un saber todavía insuficiente e ineficaz.

Los intentos de explicación particularmente atentos a los “factores biológicos” consideraron la virulencia del bacilo, el nivel de la inmunidad colectiva, la herencia y la raza. Aquellas concentradas en los “factores socio-ambientales” tendieron a destacar, por un lado, el rol de las intervenciones médicas —desde las instituciones de atención, profilaxis y educación a la generalización de ciertas terapéuticas— y, por otro, las condiciones materiales de vida que podían alterar positiva o negativamente la resistencia al contagio. Y aun cuando en ciertas oportunidades se debatió la im-

portancia relativa de estos factores, la caracterización de la tuberculosis como una enfermedad social hizo que se prestara especial atención a la importancia de las condiciones materiales de vida. Así, a lo largo de los años treinta —y en rigor, desde la década anterior—, se consideraron un sinfín de variables para explicar los avatares de la epidemiología tuberculosa, desde “la vivienda insalubre y su mala ventilación” a “la naturaleza del trabajo y duración de las jornadas laborales”, “el nivel de desgaste físico”, “la alimentación deficiente”, “el alcoholismo que quebranta el nivel de vida de la familia obrera”, “el nivel de los salarios”. En 1936, un informe del Departamento Nacional de Higiene indicaba que la tuberculosis tenía una etiología compleja y multicausal por lo cual debía prestarse atención a “los factores orgánicos y ambientales, ambos unidos íntimamente bajo el denominador común de la posición social”. A ellas debían sumarse los factores relacionados con la vivienda, el hacinamiento, la alimentación y la situación económica. El estudio concluía en que era “la situación económica no sólo el más interesante de los factores ambientales en la epidemiología de la tuberculosis sino también la causa mediata y fundamental de los mismos factores”.

El lugar correlativo que ocupaba la tuberculosis entre las enfermedades más homicidas varió con el paso del tiempo. En 1911, la gastroenteritis de los menores de dos años ocupaba el primer puesto seguida por la tuberculosis. En 1916, 1921 y 1926 pasó a encabezar el grupo y finalmente en 1930 descendió de nuevo al segundo rango, aventajada por las enfermedades cardiovasculares que ganaron el primer lugar. Desde 1911 a 1930 se registró un moderado y rítmico descenso de la mortalidad tuberculosa, con tendencia al estacionamiento. Más allá de la mayor o menor confianza de las estadísticas, que podían registrar casos de tuberculosis como bronquitis, bronconeumonías o neumonías, o viceversa, las tendencias de la mortalidad tuberculosa revelan que los avatares de la enfermedad no fueron los mismos cuando se mira el conjunto del territorio nacional. En 1936, por ejemplo, por cada 100.000 habitantes de la provincia de Formosa morían 60 por tuberculosis mientras que en las de Tucumán, Salta y Jujuy el total rondaba los 240. Estos contrastes, condicionados por factores sociales, económicos, epidemiológicos, médicos e higiénicos, locales y regionales, fueron particularmente marcados cuando se comparaban algunas áreas del interior con la ciudad de Buenos Aires. En la capital se

trata, en general, de una curva parecida a la de muchas ciudades europeas o americanas de tamaño similar. Entre 1878 y 1889 el índice de mortalidad osciló entre 300 y 230 por 100.000 habitantes; le siguieron unos años de descenso y, desde comienzos de la última década del siglo XIX y hasta 1907, una suerte de meseta con índices inferiores a 200 pero siempre por arriba de 180. Entre 1908 y 1912 se registró un moderado descenso y a partir de 1912 la curva inició un ciclo ascendente coincidente con los años de la guerra, culminando en 1918 con un índice de casi 250 por 100.000 habitantes. De 1919 a 1932 el índice de la mortalidad se mantuvo estacionario, con una muy tímida tendencia decreciente que nunca logró ponerse por debajo de 170; a partir de 1933 comenzó un sostenido descenso, paulatino hasta mediados de la década del cuarenta y bien acelerado a partir de 1947. En 1953 el índice de mortalidad tuberculosa era del 29 por 100.000 habitantes. Para esos años, en que ya se estaba generalizando el uso de los antibióticos, la gente no se moría de tuberculosis como en el pasado. Se trataba entonces de acceder a terapias específicas exitosas y servicios que, aun cuando se expandieran, no lograban acompañar una demanda que crecía más rápido y que, como era de esperar, se volcaba hacia aquellas áreas mejor servidas. Así, la capacidad de los hospitales de las grandes ciudades quedaba rápidamente superada por la demanda. En particular los de Buenos Aires, que debieron servir no sólo a los tuberculosos porteños, para esos años cada vez menos, sino también a los provenientes de algunas provincias del interior donde la tuberculosis seguía siendo un grave problema.

A todo lo largo del período y en todas las regiones los más afectados fueron siempre hombres y mujeres entre los 20 y 29 años de edad, es decir, en los años de mayor potencialidad laboral. Su peso relativo en el conjunto de afectados tendió a disminuir de modo contemporáneo al descenso de la mortalidad tuberculosa general, desplazándose a edades más avanzadas. La diversidad en los ritmos de descenso y sus implicaciones sociales y políticas se ponían en evidencia una y otra vez. No sólo aparecían, como era de prever, en los periódicos informes del Departamento Nacional de Higiene que circulaban entre médicos y especialistas en salud. También hacían titulares en los diarios de circulación masiva, revelando una vez más cómo la cuestión de la tuberculosis estaba saturada de significados y usos definitivamente modelados por un

TUBERCULOSIS

Acrescientan diariamente
el porcentaje de
enfermos curados por el
nuevo método de las
ondas cortas del

Dr. DIAZ DE SOUZA

AVENIDA DE MAYO 1209

1. B

U. T. 38-5346

*Aviso sobre un supuesto nuevo método de cura de
a tuberculosis, revista Ahora, Buenos Aires, 1935.*

... de Buenos Aires donde hacen primoinfecciones que pueden evolucionar en enfermedad”. Una vez identificados como tuberculosos, informaba un folleto publicado por el ejército en 1932, “dejan por propia voluntad el cuartel o son directamente expulsados a sus lugares de origen”, donde devienen así en “activos focos de contagio”. Periodistas y ensayistas de muy diversas ideologías trabajaban estas noticias con una línea argumental que de un modo u otro tendía a enfatizar los peligros geopolíticos asociados a un ejército con soldados de pobre textura física, blancos seguros del contagio.

Así, la tuberculosis se sumaba a las preocupaciones por la infancia y las campañas antivenéreas que, en el revés de la trama, descubrían una agenda definitivamente marcada por la política y la ideología. Todas ellas, pero muy en especial la tuberculosis, se revelaban como evidencias de un peculiar consenso —el de la construcción de una vigorosa “raza argentina”— que en sus formulaciones retóricas juntaba a conservadores con socialistas, radicales y nacionalistas.

repertorio de cuestiones e ideas que excedían holgadamente lo estrictamente biomédico.

Por ejemplo, cuando en la década del treinta se testaba el estado de salud de la población masculina lista a incorporarse al servicio militar obligatorio, era frecuente que la enfermedad fuera percibida como una manifestación patológica de la experiencia que los jóvenes “provenientes de medios rurales y vírgenes de infección tuberculosa” vivían “en las guarniciones militares más tuberculiza-

ENTRE MÉDICOS Y CURANDEROS

Al despuntar el siglo XX la profesión médica ya había logrado el reconocimiento jurídico que le otorgaba un exclusivo derecho a practicar la cura de la enfermedad. Esa suerte de monopolio debía permitirles mostrarse como profesionales capaces de ofrecer soluciones eficaces, no sólo frente a los casos individuales sino también frente al Estado y a las instituciones lanzadas a elaborar un programa de acción que, siguiendo con la tradición ya adelantada por los higienistas de fines del siglo XIX, reconocía la importancia de la medicina en la forja del futuro de la nación. Sin embargo, y aun cuando la presencia de los servicios de atención médica y de los propios médicos fue más y más ostensible a medida que avanzaba el siglo, los modos en que la gente enfrentaba sus males revelaban que los médicos no eran los únicos que ofrecían tratar de curar las enfermedades.

En el último tercio del siglo XIX la medicina hogareña y la automedicación fueron los modos más comunes para lidiar con las molestias. Tratar de curarse en casa era una reacción indicada por el sentido común y la necesidad. Hacia 1900, cuando la red de instituciones de atención comenzó a crecer, estas dos alternativas siguieron vigentes. El consejo del familiar o del vecino era, naturalmente, el primer recurso. Los que sabían leer también podían informarse consultando algunos de los manuales de medicina casera que circulaban en abundancia y a precios bien módicos. Ya en la década del veinte, el que había escrito Juan Igón llevaba varias ediciones sucesivamente aumentadas. Por su parte, la versión en castellano de *El médico en casa* indicaba más de 1.000 recetas y era ofrecido con insistencia en propagandas de los diarios a la manera de un “formulario médico con el nombre de todas las enfermedades, las plantas medicinales, la preparación de remedios caseros, los preceptos higiénicos y cómo formar en cada familia una botica económica con las cosas necesarias”. En la década del treinta, a los manuales se sumó la radio y fueron muchos los que escuchaban programas como “La Hora de la Salud”, que prescribía regímenes y ofrecía recetas sobre qué hacer con ciertas enfermedades, enlazaba la preservación de la salud con la belleza e invitaba más o menos abiertamente a prescindir de los servicios del médico.

En los años treinta los avisos publicitarios de remedios en dia-

rios y revistas eran habituales, como lo habían sido desde aproximadamente 1920 y lo seguirían siendo hasta entrados los años cuarenta. Ofrecían tónicos y medicamentos que supuestamente servían para una larga lista de males. Los productos que prometían limpiar el organismo de impurezas de todo tipo, en la piel, los intestinos o la boca, comenzaron a circular con una presencia hasta entonces desconocida. Estas pomadas, pastillas y brebajes no fueron una total novedad; los hubo antes pero fue a partir de los años veinte que irrumpieron con fuerza y terminaron dominando el mercado publicitario de los medicamentos. Aludían, casi con obsesión, a situaciones de constipación e intoxicación. Muchos de

SECRETOL

Quando un producto es escogido por millones de personas con extraordinario interés, es debido a sus excelentes bondades. SECRETOL viene honrar una verdadera necesidad ante todo enfermo de

"URINARIAS" (AMBOS SEXOS)

Si usted está enfermo de blenorragia aguda, subaguda y crónica, Prostatitis, Cistitis, no debe perder tiempo ensayando remedios que no ofrezcan garantía. Para ello debe tomar siempre las cápsulas "SECRETOL" que combaten con extraordinaria eficacia las enfermedades de las vías urinarias y principalmente la "BLENORRAGIA" en ambos sexos y todo lo relativo a enfermedades secretas. Afecciones crónicas y abandonadas.

Para estos casos tome siempre "SECRETOL", fórmula científica que los especialistas recomiendan por ser el remedio más eficaz y muy económico.

EXIJA siempre "SECRETOL" en todas las buenas farmacias y no acepte substitutos.

Farmacia Epidio Alvarez
TACUARI 1185 - Bs. Aires

esos malestares se relacionaban con la dieta y con frecuencia comparaban el cuerpo humano con el sistema de cloacas. En 1924, el diario *Crítica* incluía un aviso que decía: "La lengua sucia es un síntoma de que se necesita limpiar el organismo. Use polvos Parodi". Estos mensajes apuntaban a una audiencia mayoritariamente adulta, aunque en relativamente poco tiempo quedó claro que también los niños eran —o podían ser— consumidores potenciales. Por eso, en la década del treinta el vespertino *La Razón* incluía un aviso sobre un tónico yodado que "reemplaza con enormes ventajas al aceite de hígado de bacalao y es tomado con agrado por los niños".

También los fortificantes abundaron en los avisos publicitarios. Pero, a diferencia de los desintoxicantes, se trató de medicamentos de venta libre con una larga presencia en el mundo de la publicidad. Ya en las

Aviso publicitario, revista Ahora, Buenos Aires, 1936.

décadas de 1870 y 1880 eran anunciados en los diarios; tuvieron su momento de auge al despuntar el siglo XX y comenzaron a declinar, sin desaparecer, recién en los años cuarenta. Así, algunos anuncios, como el del vino de peptona pépsica de Cahapoteaut, estuvieron de un modo u otro presentes en los medios impresos por casi medio siglo ofreciendo curar “fiebres convalescentes, diabetes, tisis, disentería y tumores”. Algunos fortificantes, como el Nervigenol, se presentaban como revigorizadores. En 1939 Neclodyme

montó una campaña de varios meses de duración basada en avisos que subrayaban sus múltiples y benéficos efectos en materia de belleza, fortalecimiento físico y mental. Uno de ellos lo ofrecía como “el gran aliado de las mujeres pues fortifica el organismo y repara el desgaste cerebral sin alterar la armonía de la silueta”. Otro indicaba que “restituye la memoria y facilita el funcionamiento del cerebro, como se sabe, el motor del mundo”.

Fueron años en que se afianzó la importación, comercialización y, en menor medida, producción local de brebajes y tónicos. En ese proceso no faltaron quienes buscaron lucrar mientras reforzaban las ya establecidas tendencias a la automedicación. Así, a mediados de los años treinta, el laboratorio La Estrella repartía formularios en los cuales describía síntomas e invitaba a los enfermos a identificar los suyos; en respuesta se les indicaba por carta el producto de la casa que curaría su afección. En verdad, La Estrella reproducía en mayor escala el clásico rol del farmacéutico del barrio que, a la manera de un experto local, aconsejaba a su clientela qué pildoras o tónicos debía comprar. De modo que la gente —educada o no, rica o con escasos recursos— encontraba en los avisos de los diarios o las sugerencias de los farmacéuticos un verdadero arsenal de medicamentos de venta libre en el que se

Dolor de Cintura

“Dolores y más dolores . . . Siento como si me dieran puñaladas en la espalda cada vez que me inclino o hago un esfuerzo.”



Los dolores de cintura son un verdadero calvario para la mujer que debe dedicarse a sus tareas domésticas.

Al principio, se atribuyen al cansancio, a una corriente de aire, a haber dormido en una mala posición. Pero la repetición de los dolores demuestra que hay algo más. Esos dolores sordos y persistentes, o agudos y repentinos, son comúnmente dolores reumáticos que afectan los músculos de la espalda, motivados por la presencia en el organismo de ciertos venenos y desechos, especialmente exceso de ácido úrico. Muchas veces, un género de vida inapropiado, los errores en la alimentación y la falta de ejercicio, favorecen la formación de tales venenos en cantidad excesiva.

Las Píldoras De Witt son indicadas para combatir los dolores de cintura. Por su acción estimulante sobre los riñones, facilitan la eliminación de las sustancias nocivas mencionadas.

No vacile en comprar un medicamento de confianza como las Píldoras De Witt para los Riñones y la Vejiga, conocido y apreciado en todas partes del mundo. Adquiera hoy mismo un frasco en cualquier farmacia.

Píldoras DE WITT

PARA LOS RIÑONES Y LA VEJIGA

Aviso publicitario, revista Ahora, Buenos Aires, 1936.

destacaban las pildoras rosadas del Dr. Williams, De Witt, Montagú o Foster, el alquitrán Guyot, la emulsión Scott, el Nervigenol, el Neolaxán, la Uvalina, el tónico Nucleodyne, el vino tónico Mariani o el Radiosol Vegetal.

Los curanderos también ofrecían sus servicios, a veces apelando a los mismos medicamentos de venta libre. Pero el mundo de los manosantas, charlatanes, herboristas y adivinos era, sin duda, más variado. En el campo tendían a dominar los herboristas, mientras que en la ciudad y sus suburbios la medicina popular era mucho más rica en opciones. De ese mundo, el de la medicina popular en la ciudad, hay referencias que cubren el último tercio del siglo XIX así como las primeras cuatro décadas del XX. Algunos de esos curanderos decían poder lidiar exitosamente con el “pasma”, el “mal de ojo” o el “daño”; otros se presentaban como capaces de curar esas enfermedades y, además, una larga lista de males, dolores y síntomas definidos por la medicina diplomada, entre los que contaban el asma, la anemia, la tisis, la menstruación, el dolor de caderas o las hemorroides. Sus recursos variaban de los medicamentos de venta libre a las hierbas, de los brebajes exclusivos a los pases mágicos, del hipnotismo a la sugestión.

En las décadas del veinte y el treinta la cuestión de los curanderos hizo titulares en los diarios. En 1930 *Crítica* titulaba uno de sus artículos “La ciudad está plagada de curanderos y adivinos”, y Roberto Arlt escribía en *El Mundo* “El gremio de las curanderas y las santeras”, una de sus aguafuertes porteñas más consagradas. Un año antes, en Jujuy, una multitud no dudó en enfrentar a la policía que pretendía impedir que Vicente Díaz, alias Mano Santa, ofreciera sus servicios a la gente. Y en 1928, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, el multitudinario sepelio de la Madre María destacó, una vez más, la relevancia de los curadores populares. Muchos comentaristas, médicos, periodistas o ensayistas encararon el tema como si fuera un asunto novedoso; se trataba, en verdad, de algo conocido, tanto por la policía como por la gente que buscaba soluciones en los servicios ofrecidos por los curanderos. En cualquier caso, su presencia resultaba, al menos en parte, de la escasez relativa de servicios suministrados por la medicina diplomada, precisamente cuando más y más gente entraba en su órbita de influencia. Pero junto con esa escasez también contaban la incapacidad de ofrecer soluciones efectivas frente a muchas enfermedades y la desconfianza de la gente en los médicos, en quie-

nes muchos encontraban profesionales que, como escribía en 1941 uno de los periodistas de la popular revista *Ahora*, eran “maestros de urbanidad en el consultorio particular pero no en los dispensarios y hospitales”.

Así, es evidente que las ofertas de la medicina popular se complementaban con las de la medicina diplomada. En la práctica, la gente recurría a aquellos prestadores que ofrecían las soluciones más convincentes y eficaces. Para quienes vivían en ciudades o pueblos, los itinerarios terapéuticos cambiaban según los casos: siempre empezaban en la medicina hogareña y la automedicación, pero de allí en más las direcciones eran variadas. Y cuando la medicina popular no ofrecía soluciones, aparecía el complemento de lo que ofrecía la medicina diplomada, o viceversa.

Los médicos no descansaron en su crítica a los curanderos, charlatanes, herboristas y farmacéuticos que recetaban; por todos los medios posibles buscaron legitimar y hacer realidad el reconocimiento legal que ya habían logrado en tanto únicos proveedores capaces de ejercer “el arte de curar” o al menos de intentar curar. De la mano de la medicina y la ciencia, con el apoyo del Estado y la sostenida expansión de los servicios de atención, que en el mediano plazo mostraron indudables resultados, especialmente en las ciudades, cada vez más vastos sectores de la sociedad quedaron firmemente instalados en un mundo donde los médicos tendían a dominar y tener la última palabra. Este proceso nunca terminó por desplazar completamente las ofertas de la medicina popular, sea porque mantenían su relevancia al momento de enfrentar ciertas enfermedades, sea porque se renovaban de modo acompasado a la aparición de cuadros patológicos para los cuales la medicina diplomada carecía de respuestas eficaces. De todas maneras, quienes buscaban soluciones en el mundo de la automedicación, la medicina hogareña y las ofertas de la medicina popular eran, ante todo, enfermos. Cuando ingresaban en el mundo de la medicina diplomada, fuera en el hospital, el consultorio particular o la sala de primeros auxilios, se transformaban en pacientes.

LA EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN HOSPITALARIA

La etapa previa a 1930

En 1875 uno de los más prestigiosos higienistas argentinos, el doctor Emilio Coni, afirmaba que “en Buenos Aires una gran parte de los pobres muere sin asistencia médica, o entregados a la explotación indigna de curanderos y parteras, por ignorancia o por la fundada repulsión que muchos de ellos tienen por nuestros hospitales, pues las condiciones en que se hallan son verdaderamente antihigiénicas. Es por estas razones que se observa que los enfermos van a demandar la asistencia en los establecimientos cuando se hallan ya postrados y devorados por la enfermedad”. Cuarenta años más tarde, hacia 1915, el sistema hospitalario se había renovado prácticamente por completo, ampliándose el acceso de la población a sus instalaciones y disminuyendo considerablemente el porcentaje de muertes con relación al total de enfermos atendidos. El hospital había dejado de ser el lugar donde los pobres iban



Hospital Rawson, mediados de la década de 1940.



Hospital Rivadavia, ciudad de Buenos Aires, 1935.

a morir y para esos años intentaba hacerse cargo de la tarea de curar. Además ya no eran sólo los pobres los que demandaban la atención de sus profesionales: también los sectores de clase media y alta lo frecuentaban, ya que allí encontraban los medios técnicos indispensables para el tratamiento de determinadas enfermedades, a veces disponibles en algunos centros de atención privada pero no en consultorios particulares.

No sólo se había incrementado considerablemente el número de camas y habían sido renovadas las instalaciones; también se multiplicaron los consultorios externos, se organizaron los servicios de atención domiciliaria, los de urgencia y primeros auxilios en la vía pública, el sistema municipal de ambulancias, los dispensarios de protección a la infancia, la inspección de salubridad para las amas de leche y la atención de partos a domicilio. Buena parte de estos servicios estaban destinados a la atención de la población de menores recursos y en ellos se combinaban generalmente actividades de atención médica y asistencia social. El esfuerzo de su organización y financiamiento estaba a cargo de las autoridades nacionales y municipales y de una gran variedad de enti-

dades de beneficencia, de diferente importancia y naturaleza.

En Buenos Aires la Asistencia Pública tuvo a su cargo una red de hospitales y estaciones sanitarias diseminados por los barrios. A ellos se sumaban maternidades y dispensarios que proporcionaban leche aséptica a las madres que no podían alimentar en forma natural a sus hijos, conformando tempranamente un conjunto de instituciones destinadas a la protección del embarazo, el parto y los dos primeros años de vida del niño. Una importante red de organizaciones caritativas privadas y religiosas también tomó a su cargo la atención médica y la asistencia social de la población indigente. La Sociedad Nacional de Beneficencia fue la más importante de estas instituciones, tanto por su peso social y político como por su continuada presencia a lo largo de más de un siglo, hasta que gran parte de su actividad terminó absorbida por la Fundación Eva Perón. Dedicados a la protección de la población femenina en situación de desamparo o enfermedad y a la gestión de hospitales y orfanatos, el Hospital Rivadavia y el Hospital de Niños respectivamente, instalados en nuevos y modernos edificios en 1887 y 1894, constituyeron claros exponentes de la magnitud de los recursos que manejaba. A mediados del siglo XIX los hospitales de colectividades comenzaron a construir sus primeras instalaciones y al despegar el siglo XX se consolidaron, expandieron y modernizaron.

Estas novedades en materia de infraestructura de servicios de atención no irrumpieron con igual fuerza en el interior del país y sólo en aquellas ciudades donde la actividad económica derivada de la integración al mercado nacional o internacional había traído cierta prosperidad, la medicina diplomada y sus profesiones e instituciones lograron afianzarse. Al despuntar la segunda década del siglo, por ejemplo, favorecida por la actividad de su puerto, la ciudad de Rosario contaba con cinco hospitales de antigua construcción, refaccionados y dotados de agua corriente y cloacas, y proyectaba la construcción de un gran hospital, "moderno", para conmemorar el Centenario. Para esos años Mar del Plata disponía de un hospital manejado por la Sociedad de Beneficencia y de la Asistencia Pública dependiente del gobierno municipal. En Córdoba, la modernización hospitalaria tuvo que lidiar con una muy vieja infraestructura que se iría renovando pero a un paso muy lento. En otras áreas del interior el gobierno nacional realizó un esfuerzo destinado a compensar la escasa disposición o capacidad de las provincias para hacerse cargo de la construcción de servi-

cios de atención médica. Con ese objetivo se aprobó en 1906 una ley que creaba la Comisión de Asilos y Hospitales Regionales, dotándola con un 5 por ciento de los beneficios producidos por la Lotería de Beneficencia Nacional. Esta iniciativa permitió la instalación de un asilo de alienados en Oliva, del Sanatorio Santa María para tuberculosos y del Hospital Regional del Centro en Bell Ville. En la segunda y la tercera décadas del siglo, la comisión creó los hospitales regionales de Chaco, La Pampa, Misiones, Río Negro, y el Hospital Regional Andino de La Rioja. Para esos años subsidiaba cerca de mil instituciones de beneficencia que tenían a su cargo servicios de atención médica y asistencia social, entre las que se contaban 307 hospitales de muy diversa capacidad ubicados en diferentes lugares del país. La importancia de estos subsidios fue motivo de muchas críticas por parte de unos pocos contemporáneos que veían con disgusto cómo la elite se mostraba caritativa usando recursos del Estado. Las finanzas de la Sociedad de Beneficencia son reveladoras: recibía de tanto en tanto algunas grandes donaciones de particulares que favorecieron periódicamente la expansión de su capacidad instalada, pero era el aporte estatal el que garantizaba el funcionamiento diario de la institución. En 1910, la Sociedad cubría con recursos propios no más del 19 por ciento del total de su presupuesto y en 1935 apenas un 10 por ciento.

También a nivel provincial y municipal regía este sistema de transferencia de recursos del sector estatal al privado. La distribución de subsidios no obedecía a un plan metódico, sino solamente a la influencia puesta en juego por las respectivas instituciones ante el Congreso y las autoridades del municipio. Las más de las veces, eran médicos los que facilitaban el acceso a los fondos públicos por parte de estas organizaciones caritativo-filantrópicas donde ellos mismos ejercían funciones directivas. Así, trabajando en agencias estatales, en sus consultorios y en la filantropía particular institucionalizada, estos médicos no sólo eran portadores de un saber profesional en materia de asistencia médica y social sino también oficiaban a la manera de notables. En esa capacidad podían caminar con soltura los pasillos de la más alta burocracia estatal o del Congreso Nacional y sacar todas las ventajas posibles de un sistema de representación política donde sólo unos pocos entendían que ésa era la forma de acceder y obtener favores del Estado.

Una de las principales fuentes de los recursos destinados a asegurar la atención médica del indigente eran los beneficios de la Lotería Nacional. La ley 3.313, de 1895, asignaba un 60 por ciento del total para la construcción de hospitales y asilos públicos en Buenos Aires y un 40 por ciento para el mismo objeto en las provincias. Para esos años en algunas ciudades ya funcionaban los registros municipales de pobres que, se suponía, debían reglamentar el acceso a la atención. La certificación de la condición de pobre estaba a cargo del comisario de la sección policial o del presidente de la Comisión Auxiliar de Higiene Parroquial del respectivo domicilio. El certificado habilitaba gratuitamente a su portador a los servicios aunque en algunos años y para ciertas prácticas era obligatorio el pago de una pequeña suma. La filantropía estatal de los años del cambio de siglo también produjo la figura del “pobre de solemnidad”, el pobre carente de todo recurso, incluida la aptitud para el trabajo. Cuando en 1919 los socialistas llegaron por primera vez al Concejo Deliberante en Buenos Aires denunciaron el carácter infamante de la “tarjeta de pobre” y obtuvieron su anulación. Se proponían hablar en nombre de quienes, ellos creían, sentían que su respetabilidad había sido avasallada. De todos modos, y más allá de la existencia de las reglamentaciones de pobreza, la atención en los hospitales era libre y gratuita para casos de



Internos del Hospicio de las Mercedes, 1931.

urgencia, así como en el Instituto Pasteur, encargado de la profilaxis contra la rabia, en el Hospital Muñiz, lugar de aislamiento para enfermos infecciosos, y en el Hospital Tornú, donde se internaba a los tuberculosos. En el Hospicio de las Mercedes, para alienados, se venían estipulando desde fines del siglo XIX los montos a pagar por cada una de las categorías de internados, siendo gratuita para los pobres de solemnidad y para los



Doctor Gregorio Aráoz Alfaro con la Comisión de Beneficencia en el día de la colecta por el tuberculoso, 1930.

alienados peligrosos que carecían de recursos y que habían sido remitidos por las autoridades. La gratuidad de la atención sobrecargó el sistema, que crecía pero no con el mismo ritmo que la demanda; no faltaron entonces las denuncias de “pobres que no lo eran”, al parecer individuos que no encontraban “infamante” o “avasallante” el *status* que les permitía un acceso sin gastos a muchos de los servicios ofrecidos por el hospital.

Fue en ese marco que la Sociedad de Beneficencia decidió establecer aranceles de internación para pacientes con cierta capacidad de pago, a los que se brindaba una mejor hotelería en salitas privadas o semiprivadas. Algunos establecimientos estatales de atención hicieron lo mismo. En los hospitales de colectividades la situación era aun más compleja. En principio, los recursos para su instalación y mantenimiento provenían de las cuotas abonadas por sus asociados, reclutados entre personas de buena situación económica que querían proteger a sus compatriotas menos afortunados cuando se encontraban enfermos. Al despuntar el siglo estos hospitales comenzaron a recibir pacientes con disponibilidad de

recursos interesados en atenderse en el hospital abonando tarifas diferenciales. En Buenos Aires el Hospital Español, por ejemplo, ofrecía descuentos del 10 por ciento sobre el total de los aranceles devengados para los miembros de las sociedades de socorros mutuos. Así, en los años veinte y treinta los hospitales de colectividades combinaban la filantropía con prácticas propias de la previsión individual por un lado y de la actividad empresarial privada por otra.

El mutualismo en la Argentina tuvo una agenda amplia y variada, de índole asistencial, cultural, educativa y social, que permitió el acceso a la atención médica de personas que, sin ser pobres, no podían afrontar los gastos ocasionados por cualquier accidente o enfermedad relativamente serios. El desarrollo de estas sociedades de protección mutua acompañó los avatares que marcaron la integración de los inmigrantes en la sociedad argentina. Fueron recursos que facilitaban el establecimiento de vínculos de solidaridad o asistencia entre personas de la misma nacionalidad. También el ámbito laboral alimentó variados esfuerzos asociacionistas, en algunos casos derivados de las primeras formas de actividad sindical —las “sociedades de resistencia”—, en otros a partir de iniciativas originadas en organizaciones de raíz socialista o religiosa —mutualidades que se identificaban como “cosmopolitas” en el primer caso, o círculos católicos en el segundo—, en otros, por fin, como agrupamientos de personas que trabajaban en el mismo oficio o en una cierta repartición pública, o eran miembros del personal de grandes empresas de servicios públicos, particularmente las ferroviarias.

El mutualismo se difundió con rapidez, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, conformando un conjunto complejo de organizaciones con diferente capacidad de convocatoria, disponibilidad de recursos, objetivos prioritarios y referentes identificatorios. La convivencia entre tales agrupaciones no era pacífica. Existía una rivalidad manifiesta que tenía sus raíces no sólo en las diferencias ideológicas sino también en la necesidad de competir para la captación de nuevos adherentes. Socialistas y católicos, por ejemplo, compitieron usando todo tipo de recursos, desde el humor popular a la ridiculización del adversario, las denuncias de raíz ética, los apelativos morales o las reivindicaciones clasistas. Más moderada fue la rivalidad entre asociaciones de colectividades y aquellas que reivindicaban como una forma superior de aso-

ciación el carácter cosmopolita y por ende prescindente de los vínculos basados en la nacionalidad. Pero aun cuando los objetivos y beneficios que ofrecían a sus miembros podían diferir de manera más o menos importante, la mayor parte de las mutualidades ofrecía atención médica y farmacéutica, subsidios destinados a compensar la pérdida del salario durante los períodos de enfermedad, gastos de sepelio y ayuda económica a los familiares del socio fallecido. Algunas también incluían internación hospitalaria, subsidios de hospitalización y para aquellos miembros que padecían enfermedades crónicas.

En las primeras décadas del siglo la organización de los servicios de atención médica con cobertura mutual era relativamente simple: los beneficiarios podían acudir a uno o varios especialistas y consultar a un número variable de médicos clínicos distribuidos en los diferentes “radios” o secciones en los que se dividía la ciudad. Se trataba, en general, de una atención médica relativamente simple, en la que predominaba la práctica clínica y que incluía curaciones realizadas por el mismo médico que, además, aplicaba inyecciones, dedicaba buena parte de su tiempo a la realización de visitas domiciliarias y recetaba las “fórmulas magistrales” que luego elaboraba el farmacéutico.

Junto al sistema público y el mutualismo estaba la oferta de los consultorios particulares. Sin duda, en las ciudades grandes como Buenos Aires y Rosario no faltaron clínicas y sanatorios de lujo y equipamientos bastante sofisticados. Pero también en las ciudades medianas esta oferta privada de servicios ya era un dato inocultable. En Mar del Plata, por ejemplo, existía en 1921 un sanatorio de lujo —el Sanatorio Mar del Plata— que salía a cubrir las demandas de la elite en la temporada veraniega y también otros establecimientos menos suntuosos que atendían las demandas de las incipientes clases medias.

La crisis del treinta

A medida que avanzaba el siglo fueron surgiendo y consolidándose las sociedades mutuales, benéficas y de asistencia a partir de inquietudes filantrópico-caritativas y de previsión social. Establecían vínculos no institucionalizados con el personal del Estado, y moviéndose con relativa autonomía, fueron definiendo sus pro-

pías clientelas, enmarcando sus ofertas a partir de diferentes concepciones de lo bueno, lo justo, lo adecuado, lo posible. A lo largo de las primeras décadas del siglo esas organizaciones cumplieron relativamente bien los objetivos que respaldaron su creación. En los años treinta, sin embargo, comenzaron a hacerse evidentes ciertos síntomas de malestar que aparecían relacionados con la insuficiencia de los recursos disponibles para enfrentar necesidades insatisfechas. Este nuevo contexto resultaba, en general, de las repercusiones que tuvo en el país la crisis internacional de 1929, la caída de las exportaciones, la acumulación de productos destinados al mercado que no encontraban un nivel adecuado de demanda, el desempleo, las migraciones internas y cierto deterioro relativo de las condiciones de la vivienda obrera. Más específicamente la crisis renovaba y ampliaba las demandas a las instituciones ocupadas de la asistencia social y la salud pública al tiempo que ponía en cuestión expectativas que se habían ido conformando en las primeras décadas del siglo.

Algunos cambios en la práctica médica también tuvieron su efecto en la percepción generalizada de la crisis, así como en un diagnóstico negativo respecto de la capacidad de las formas organizativas existentes para responder a las nuevas necesidades y demandas sociales. Así, el reconocimiento de estas novedades exigía la definición de nuevas reglas de juego que, a su modo, estimulaban innovaciones organizativas. Los cambios en la organización de la práctica médica se vincularon estrechamente a las novedades técnicas que, paulatinamente, fueron aumentando la capacidad de diagnóstico y terapéutica de la medicina. En ese escenario, se registró una disminución relativa de recursos destinados a honorarios profesionales y un aumento de los gastos en medicamentos, análisis de laboratorio y radiología. La aparición del “específico”, esto es, el medicamento producido en serie, tendió a reemplazar a la fórmula magistral prescrita para cada paciente por su médico, incrementando, al menos en una primera etapa, su costo. Los costos de atención también aumentaron, como resultado no sólo del creciente uso de radiografías seriadas y de contraste, los “electrocardiógrafos” y otros aparatos más sensibles y de mejor resolución, sino también de una mayor demanda de pruebas de laboratorio por parte de los médicos. A esos cambios se sumaba la incorporación de una serie de nuevos y costosos procedimientos asociados al mejor diagnóstico de las enfermedades venéreas, la de-

tección precoz del embarazo y las técnicas de eritrosedimentación.

La práctica médica también cambió. En la contabilidad de las mutuales disminuyó el número de consultas domiciliarias y los profesionales dejaron de facturar las curaciones simples y la aplicación de inyecciones. Las consultas a especialistas aumentaron y algunas mutualidades, especialmente las que contaban con un número importante de socios, crearon o consolidaron consultorios de especialidades. La Asociación Obrera de Socorros Mutuos, por ejemplo, que hasta ese momento había financiado la atención de sus beneficiarios en consultorios donde trabajaban profesionales contratados, en 1930 decidió instalar servicios de farmacia y laboratorio y abrir consultorios médicos diferenciados según especialidad. Cinco años más tarde, puso en marcha el proyecto de construcción del sanatorio social.

Estas novedades llevaron a médicos en ejercicio, administradores de hospitales y gerentes de mutualidades a tomar en cuenta el aumento de la demanda de atención médica y los problemas institucionales resultantes. En Buenos Aires, entre la primera década del siglo y la de los años treinta, la población de la ciudad se duplicó y el ingreso a los hospitales municipales se multiplicó por 3.5; las cirugías realizadas en ellos por 9.0; las consultas ambulatorias en hospitales y estaciones sanitarias por 15.6, y las camas disponibles para la recepción de enfermos por 4.3. En la Sociedad de Beneficencia, para el mismo lapso, las consultas se multiplicaron por 17.2, las internaciones por 3.9 y las camas disponibles por 2. Estos incrementos daban cuenta no sólo del empobrecimiento relativo de ciertas franjas dentro de los sectores medios urbanos afectados por la crisis económica, sino también de la mayor confianza de la población en la eficacia curativa de la medicina, la creciente toma de conciencia acerca de las consecuencias de largo plazo de algunas enfermedades y la consolidación y el desarrollo de una cultura higiénica.

En las mutualidades el crecimiento de la demanda de atención médica y el aumento de sus costos dispararon debates enfocados en la naturaleza y el objeto del mutualismo, las diferencias entre asistencia, previsión individual y previsión social y la necesidad de replantear las relaciones entre los individuos, las asociaciones mutuales y el Estado. En ocasiones se llegó a considerar la recomendación de hacer uso de los recursos mutuales sólo en el caso en que la solución individual del problema resultara imposible.

La existencia de límites confusos entre la concepción del seguro —basado en la práctica de la previsión individual— y las formas sociales de previsión de base solidaria se puso de manifiesto cuando se discutía la política por adoptar con los grupos sujetos a mayor riesgo y sus consecuencias en el desbalance entre el ingreso por cuotas y el gasto en servicios. Durante los años veinte se habían difundido entre algunas mutuales las técnicas actuariales de cálculo de riesgo. Por eso se debatió, en ocasiones apasionadamente, si los grupos más vulnerables, en primer lugar mujeres, niños y hombres mayores de 45 años, debían abonar cuotas mayores. Fue en ese contexto que el movimiento mutualista incrementó sus demandas de protección a las instituciones del Estado frente a la competencia de las “pseudomutuales”, esto es, empresas de salud con fines de lucro. La dirigencia mutualista apoyó con entusiasmo los diversos proyectos de seguro social que, creían, trans-

formarían a las asociaciones en órganos locales semiautónomos de aplicación del seguro, aumentarían sustancialmente el número de sus miembros como resultado del establecimiento de alguna modalidad obligatoria de afiliación y permitirían una mejor compensación entre recursos y gastos.

Todos estos cambios, marcados por la creciente tecnificación y especialización de la medicina y el aumento de la demanda de atención entre la población de menores recursos, fueron acompañados por una complejización de la práctica médica, por la tendencia al trabajo en equipo en grandes instituciones y por la pérdida de vigencia de



Hospital de Clínicas, ciudad de Buenos Aires, abril de 1931.

la figura tradicional del médico de familia que portaba su clásico maletín. Para algunos, estas novedades no hicieron más que alimentar imágenes catastrofistas que no sólo señalaban el colapso de las instituciones sino también la proletarización del trabajo profesional.

LA ORGANIZACIÓN GREMIAL DE LOS MÉDICOS

Fue entre 1920 y 1940, y al calor de estos cambios y percepciones, que se consolidó el gremialismo médico argentino. Hubo esfuerzos previos, incluso en la segunda mitad del siglo XIX, pero sólo en la década del veinte surgieron las primeras organizaciones —colegios, círculos o asociaciones médicas— que en Buenos Aires y algunas ciudades del interior lograron perdurar en el tiempo. En los años treinta comenzaron a crearse federaciones provinciales y en 1941 se constituyó la Federación Médica de la República Argentina, que dos décadas más tarde se transformaría en la Confederación Médica de la República Argentina, sin duda el interlocutor reconocido del Estado en todo tipo de cuestiones vinculadas a la problemática de la salud y la atención médica.

Desde el primer momento, la organización gremial de los médicos se propuso defender los intereses de los profesionales y preservar el decoro y prestigio de la profesión. Ese enunciado se reiteró cada vez que los médicos necesitaron explicar las razones que los llevaban a agremiarse. Las más recurrentes fueron el aumento del número de médicos, favorecido por el acceso a la educación superior de camadas importantes de la clase media, el incremento de las posibilidades de ascenso social en la Argentina de comienzos de siglo, y la apertura universitaria que supuso la Reforma de 1918. El incremento del número de profesionales y su concentración relativa en las zonas de mayor desarrollo motivó preocupaciones que ponían en cuestión las posibilidades futuras del ejercicio profesional. Estos temores fueron sin duda estimulados por la pobreza y el desempleo generados por la crisis de los años treinta, el aumento de la demanda de atención en instituciones públicas, donde el médico trabajaba gratuitamente o estaba asalariado, la amenaza, relativamente cierta, de una posible reducción absoluta o relativa de la clientela que acudía al consultorio y pagaba en forma directa la atención recibida y, por último, la competencia

de curadores alternativos, enfermeros, parteras y farmacéuticos.

La expansión de las mutualidades motivó cierta alarma, especialmente en aquellas que instalaron consultorios y pretendieron remunerar al profesional a partir de un salario o un pago por horas de trabajo. Dedicadas en sus orígenes a la protección del indigente, habían funcionado como un instrumento útil para acercar la demanda de la población menos favorecida al consultorio de los profesionales independientes. Con el paso del tiempo, su cobertura se extendió a individuos con cierta disponibilidad de recursos que sacaban provecho —en forma indebida, según la perspectiva de sus críticos— de los honorarios reducidos con que muchos profesionales ofrecían sus servicios en las mutualidades. Por su parte, las instituciones de beneficencia, lanzadas a administrar hospitales, dispensarios, consultorios y clínicas, se transformaron en amenazas a la pretensión profesional de exclusivo control de las habilidades indispensables para dirigir una organización de salud. Así, los médicos alegaban una pérdida de autonomía cuando debían aceptar que administradores legos interfirieran en sus hábitos prescriptivos, en el tiempo dedicado a la consulta con cada paciente, en las decisiones de tratamiento o cuando, forzados a violar el secreto profesional, debían denunciar a sus pacientes infecciosos.

Estos malestares profesionales no impidieron que los mismos médicos comenzaran a reunirse en clínicas cooperativas, poniendo en marcha sistemas de prepago en los que se ofrecía atención médica. Estas nuevas organizaciones debieron promover activamente sus servicios y en ocasiones competir abiertamente por la captación de afiliados, utilizando métodos de propaganda que algunos médicos consideraban escandalosos al punto de afectar el decoro profesional. La expansión de estas nuevas modalidades de financiamiento y provisión de servicios se produjo en forma abierta, espontánea, y sin someterse a ningún tipo de regulación por parte del Estado. La literatura médica de la época la asociaba a tendencias a la “mercantilización” de la práctica, al desarrollo de conductas reñidas con la tradicional ética médica, al fenómeno de las “pseudomutuales”, a la pretensión de asalariar a los profesionales o compensarlos a partir de porcentajes irrisorios de las cuotas recaudadas. Algunas asociaciones y colegios profesionales intentaron la puesta en marcha de sus propios planes por abono y llegaron a construir y administrar clínicas y sanatorios en aquellos mercados donde la iniciativa individual no tenía fuerza suficiente o

estímulos adecuados para hacer frente a la inversión necesaria.

Sin duda, el surgimiento de grandes instituciones con capacidad de albergar las nuevas tecnologías de cura multiplicó la eficacia terapéutica de la medicina, ampliando su prestigio y otorgando nuevas condiciones de legitimidad a su pretensión de autonomía y reconocimiento social. Pero también generó cierto malestar, asociado en gran medida a una suerte de amenaza a la supervivencia del ejercicio liberal de la profesión, esto es, la posibilidad de establecer una relación “personal y privada” con cada uno de los pacientes. Los avances estatales que promovían la implementación de sistemas obligatorios de seguro social también fueron percibidos como una amenaza a la autonomía profesional y al consiguiente derecho de los profesionales a establecer libremente el valor de su trabajo. Y aun cuando los médicos reconocieran la necesidad de poner en marcha formas socializadas para enfrentar el riesgo de enfermar, sus altos costos y su atención, una y otra vez se resistieron a abandonar en manos del Estado el control de los sistemas de seguro. Era evidente que como grupo profesional temían perder la autonomía que habían logrado y gozaban desde hacía décadas.

A partir de los años veinte, entonces, la actividad gremial médica fue definiendo los puntos más destacados de la que sería su agenda en la década siguiente: la libre elección del médico por el paciente, el derecho del médico de decidir a qué pacientes brindará sus servicios, el derecho de establecer sus honorarios, el compromiso ético de no contribuir a la devaluación del trabajo profesional, la remuneración por acto médico, la libertad de prescripción, el rechazo a cualquier interferencia externa —de no-médicos— en la toma de decisiones pertinentes a la actividad profesional.

Las asociaciones médico-gremiales tuvieron como principales interlocutores a los organismos estatales vinculados con la asistencia y el cuidado de la salud. En ese diálogo politizaron sus reivindicaciones, reclamando autonomía del Estado y, al mismo tiempo, buscando en él el garante por excelencia del *status* profesional. Durante los años veinte, treinta y cuarenta se profundizó la injerencia estatal sobre cuestiones tradicionalmente localizadas en la esfera privada. Una de esas cuestiones se vinculaba a una generalizada percepción que subrayaba cierto fracaso de las instituciones de atención médica en sus esfuerzos por controlar las enfermedades y sus consecuencias tanto individuales como sociales.

Las estadísticas de incidencia de la tuberculosis y del paludismo, los temores relacionados con las enfermedades venéreas, las tasas de mortalidad infantil que se mantenían relativamente altas, la amenaza “nueva” que se podía prevenir con un mejor diagnóstico del cáncer y las enfermedades cardiovasculares, la preocupación por identificar y prevenir las enfermedades vinculadas al trabajo industrial, fueron percibidos, todos ellos, como indicadores de la necesidad de diseñar formas más eficaces de control y asistencia.

Esta renovada intervención del Estado se legitimaba en la conveniencia y, para algunos, urgencia de destinar fuerzas y recursos en la forja de una población sana y vigorosa, capaz de defender a la patria e incrementar la productividad. Fue en ese contexto que la profesión médica y el Estado redefinieron un campo de interés común, donde no faltaron los conflictos. Como lo venían haciendo desde mediados del siglo XIX, los profesionales siguieron reivindicando su vocación de autonomía; la novedad que trajeron estos años tuvo que ver con la reformulación parcial de los argumentos que buscaban sustentarla. Así, antes que enfatizar en la existencia de un conjunto relativamente reducido de hombres dotados de conocimientos especiales, con condiciones morales propias de una elite y movidos por una vocación asimilable a un sacerdocio laico, la reivindicación de la autonomía era presentada como condición de eficacia de un trabajo técnico destinado al cumplimiento de una función social prioritaria.

LOS MÉDICOS Y LA CULTURA HIGIÉNICA

Los cambios en el campo profesional, en la infraestructura hospitalaria y en las tendencias de la mortalidad se articularon con una suerte de catecismo laico de la higiene que logró penetrar en los poros de la sociedad y la cultura. Muchas de sus prescripciones se transformaron en necesidades materiales y morales de la vida en la ciudad moderna. En el campo, su impacto fue más superficial y lento pero allí también, en el mediano plazo, se hizo evidente. Lo que ese catecismo ofrecía era una cosmovisión donde la salud devenía en una metáfora en torno a la cual giraban, se cargaban de sentido, un sinnúmero de situaciones y experiencias. Así, tanto en el deporte como en el uso del tiempo libre, en la sexualidad y en la crianza de los hijos, en la vestimenta y la comida, en la

vivienda y los espacios públicos, en la escuela y en el lugar de trabajo, el tema de la buena salud anunciaba e introducía otros más abarcadores como el de la armonía y el consenso social, las embrionarias ideas asociadas a la justicia social o los derechos ciudadanos. En ocasiones, ese clima de ideas produjo utopías que imaginaban ciudades o sociedades donde la enfermedad no existía, o estaba convenientemente asistida no sólo por una red de instituciones de atención manejadas por médicos, sino también por un entorno urbano reinventado de la mano de horizontes tan variados como el verde portador de una ilusión rural en la ciudad, el de la tranquilidad del barrio que permitía vivir sin los trajines y excesos metropolitanos o el de la panacea tecnológica que ofrecía infalibles vacunas y medicinas para cada mal.

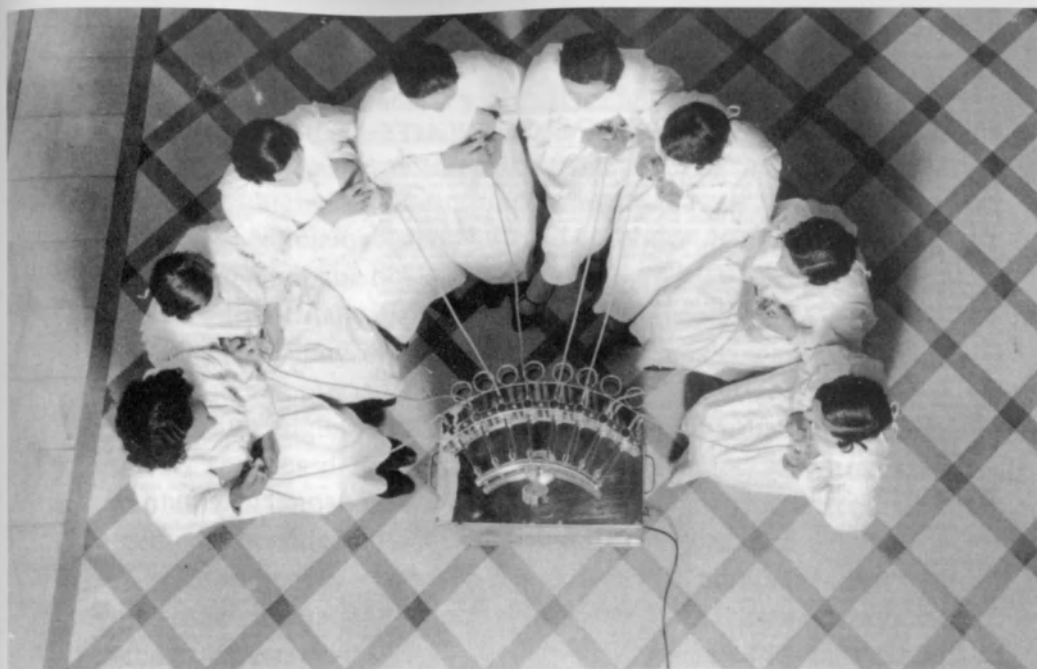
Los médicos fueron un grupo clave en la sostenida ampliación y maduración de este clima de ideas. Fueron también difusores, algunos de ellos incansables, de estas nuevas conductas. En 1940, un folleto publicado por el Centro de Investigaciones Tisiológicas estimaba imprescindible lanzar “un plan de educación higiénica, coherente y con continuidad, basado en el uso de la prensa y la radio, los carteles de anuncio en sitios públicos y en vehículos de transporte colectivo y en los matasellos del correo”. Indicaba que las campañas, además de ser “genéricas y positivas” debían “enfaticar en la alimentación, la vivienda y el examen periódico de la salud”, descartando las campañas espectaculares y esporádicas que, aun siendo bienintencionadas, contribuían poco a la educación higiénica de la gente común y al final eran tan ineficaces como los “sermones higiénicos que se escuchan en la radio que invitan a correr el dial cuanto antes” o las aburridísimas conferencias magistrales cuya “capacidad de penetración”, decían los autores del folleto, era ciertamente limitada. Por estos motivos se insistía en la necesidad de que “el conocimiento higiénico debía ir en busca del sujeto, sorprenderlo, solicitar su atención. Es necesario hacer aceptar ideas y normas sanitarias como se impone la marca de un producto”.

La sofisticación de esta evaluación indicaba que los esfuerzos por difundir las conductas higiénicas no eran una novedad. Estuvieron presentes tanto en el último tercio del siglo XIX, cuando dominaba el discurso del temor y de la higiene defensiva siempre dispuesta a combatir incesantes peligros epidémicos, como a partir de los años veinte, cuando el tono lo daría el discurso de la vida

sana y la higiene positiva. Era esta larga historia la que habilitaba a comienzos de los años cuarenta a algunos médicos sanitaristas a hablar como publicitarios.

La lucha antituberculosa en primer lugar, pero también esfuerzos similares como el de la lucha contra el alcohol, las enfermedades venéreas o las moscas, recurrieron a carteles, afiches, folletos y volantes redactados en un “lenguaje al alcance de todos” y a veces en varios idiomas. Buscaban informar y educar al público. Así, entre 1901 y 1902 se distribuyeron en trenes y fábricas, sociedades mutuales y hospitales, centros obreros, iglesias y escuelas varias centenas de miles de piezas de material impreso. Hubo también otros modos de difusión: las conferencias en salones exclusivos o locales modestos, las cajitas de fósforos con instrucciones higiénicas impresas, las campañas públicas impulsadas como si fueran cruzadas religiosas o militares. A partir de los años veinte, y durante los años treinta, estos esfuerzos de difusión aumentaron significativamente. Copiando los estilos norteamericanos en materia de *social marketing*, se comenzaron a usar en forma regular los diarios y revistas de tirada masiva. En 1935, por ejemplo, la Cruzada Antituberculosa Nacional hizo un intenso y sofisticado empleo de los entonces llamados “modernos modos de difusión”. En la escuela, las maestras leían a los niños cuentos donde la tuberculosis aparecía como “el enemigo número uno” o “el lobo feroz”, todos los abonados que figuraban en la guía telefónica de la ciudad recibían propaganda en su casa, los actores arengaban al público en los entreactos de las funciones de cine y teatro, en las calles los paredones se empapelaban con afiches, en las estaciones de tren se colgaban grandes cartelones de tela y, en pleno centro de la ciudad, los transeúntes podían leer letreros luminosos alusivos. De tanto en tanto, un vagón de tranvía se transformaba en un gran cartel rodante y la radio emitía programas de salud y anuncios sueltos que con insistencia repetían los consejos antituberculosos. En las canchas de fútbol, convertidas ya en escenario de un espectáculo de masas, los altoparlantes invitaban a “hacer patria cuidando de la salud”.

Todos estos esfuerzos de difusión de los años treinta, así como los que se habían desplegado a comienzos de siglo y los que se realizarían en la década de 1940, fueron tejiendo una trama donde el mensaje de la nueva higiene se mezclaba con la propaganda y el consumo. Así, en 1919 algunos anuncios ofrecían yerba en table-



En el poliextractor del lactario de la Sala de Niños del Hospital de Clínicas, las madres venden su exceso de leche, década del '30.

tas e invitaban a tomar mate pero como una infusión, una suerte de opción “racional”, decían, que suplantaba “el uso de la bombilla, el vehículo de contagio de la tuberculosis por excelencia”. Y en los años treinta, cuando los sectores medios, pero no sólo ellos, consumían y utilizaban más y más productos —jabones “higiénicos”, calefones que permitían la ducha frecuente, tónicos y jarabes fortificantes de venta libre—, algunas propagandas se ocupaban puntualmente de recordar al lector que necesitaban aspiradoras para lograr una efectiva “aspiración de los microbios más peligrosos”. Por esos años, fueron frecuentes los programas radiales que no sólo participaban de este esfuerzo por crear una “conciencia higiénica” sino que también igualaban salud a belleza.

La prédica en favor de la higiene se remataba en una nueva idea de la longevidad. El tópico no era una originalidad argentina. En los años veinte, treinta y cuarenta, la New Health Society de Londres pregonaba a los cuatro vientos un decálogo de la longevidad que la revista *Viva Cien Años*, editada en Buenos Aires, hizo propio: “reducir la ración de carne y reemplazarla por el pescado”,

¿A QUE CIFRAS LLEGAN LOS TARADOS EN LA ARGENTINA?

EN TODO EL PAIS NO SE IMPIDEN LOS ENLACES

BUENOS AIRES afirma cada vez más su fisonomía de Babel. Todo intento de definición sobre esta falla en cuanto se aborda su problema en sentido etnográfico y antropológico. Cualquiera observador puede comprobar que, a pesar de los departamentos emblematarios que el Estado creó para estudiar las fases científicas de nuestros núcleos, carecen de eficacia, elementos y orientaciones. Desde luego, Buenos Aires, la metrópoli más sureña del mundo, refleja en su prisma la complejidad racial de la nueva América de origen europeo. Investigadores europeos que estuvieron en esta urbe han expresado su asombro ante lo heterogéneo de las multitudes argentinas, sobre todo las del litoral, sujetas a fenómenos aluvionales de carácter inmigratorio, sorprendidos y distintos. ¿Es una raza la que poseemos? ¿Somos totalmente hispanos u obedecemos a ritmos diversos, tal como ocurrió en Estados Unidos del Norte? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Acaso las estadísticas enseñan algo o establecen alguna conclusión definitiva?

INDIGENISMO, NATIVISMO, EXTRANJERISMO

El país argentino ya no tiene cruces. El criollo de la tradición, producto del cruce biológico conocido, no existe más. Lo ha substituído el nativo. Antes era el perchuca el indígena, que aun supervive en lejanas tierras patrias, dentro de una órbita de miseria degradante. Entre sí indio y el nativo, aciela el extranjero, al que ya no se le llama "gringo", porque ha sido asimilado en forma definitiva a la República. Indigenismo en el norte y centro, nativismo en el este, extranjero en el litoral, se plasman una raza, ni siquiera un pueblo amasado con idéntica sangre y de tipo uniforme. Alberto Haas, un estudioso alemán, profesor de periodismo en Berlín, doctor en ciencias naturales, que murió hace algunos años en Buenos Aires, al darme en juicio sobre la ciudad y sus barrios —varias aldeas superpuestas, afirmó— agregó:

—La arquitectura humana entre ustedes en muestra traza incomprendible, el desorden inarmónico y caótico que precede a toda ejecución de la Naturaleza. Nadie sabe qué saldrá de allí, ni qué tipos se fundirán en moédes tan diluidos...

El aserto se ajusta a la realidad vivencial, cuya inspección, hecha por percibidos, por que late y se manifiesta al ojo penetrante y analítico.

PERDIDA DEL PLASMA HEREDITARIO

Una frase vulgar se emplea a cada instante para abarcar un concepto global sobre la evolución que se nota en Buenos Aires, que es el rostro de la Argentina:

—¡Qué gente rara y exótica! La usencia aumenta y en muchos idiomas arrevesados y se tropiezan con tipos que no tienen parecido alguno con los que son de nuestra "raza".

En tales palabras se encierra el panorama étnico; el flujo biológico, con su torrente de afuera, nos ha hecho perder el plasma hereditario, es decir, desvió el cauce vegetativo de origen peninsular, para permitir aleaciones que alteran el perfil ancestral. Exactamente como en el lenguaje, que en definitiva está acridillado de barbarismos, en la acepción más com-

pleta. ¿Cuál será el índice cefálico de los argentinos en estos lustros? ¿Se le determinará con facilidad? El plasma hereditario, blanqueado por las familias antiguas, se pierde en este océano de tres millones de seres, de los cuales el 60 por ciento habita en las zonas templadas de las riberas y alteran su vieja estructura biológica. física, en suma, en fin, en el asedio de los torrentes de sangre que los vienen de todas las razas del viejo mundo, sin control y sin medida. Y aun aquellos relictos que se empeñan en conservar limpio el principio genético, ceden en su intranquencia, empujados por los aaravereconómicos, que destruyén los rasgos del siglo anterior en incontenible avalancha.

Un ejemplo al margen: matrimonios de criollos que descienden de padres auténticos de España, suspiran los esposas, a quienes se les viástagos con otras muestras de razas lejanas, emigradas a América desde latitudes antipodadas. El proceso de selección racial dentro de la República, de la dinámica biológica en pro de un elite en las generaciones que sobreviven, impele un cambio visible cuyos aspectos provocan a menudo el comentario irónico o la cruel ironía.

EL MECANISMO DEL NACIMIENTO DE LAS RAZAS

La eugenesia, la tipología, en formación en la Argentina, se esfuerzan por fundar u organizar el mecanismo del nacimiento de las razas. Pero el prejuicio coloca una valla estéril a sus proyecciones racionales, a los métodos preventivos y orientadores en técnicas. Hay clases de idiotas en varias sectores sociales, y no los el doctor esta frase en sentido humorístico o de "cachada"; al contrario: es fealdad como síntoma de experimentación. Esas familias de idiotas no aislados, ni en el hogar, ni en la escuela, ni en la vida de relación, se prolongan en el tiempo y se reproducen a base de intereses o de hábitos nocivos. Padres normales, con taras, producen hijos a su semejanza, que priman y se extienden con asombrosa rapidez.



Una operación estéril en Alemania, de acuerdo con las ordenes impartidas por los tribunales científicos constituidos por Adolfo Hitler.



Abuelo y nieto de una raza cuyos rasgos se han degenerado y que se mantienen con características idénticas a través de la evolución biológica.



Un cretino, de los llamados "opos", que tanto abundan en nuestro país.

da. Hasta que un error, un error de primer grado, un epiléptico, anorexia, posura fortísima, ansiedad o los gases que circulan en el organismo, que no tienen, de un error con estigmas de parálisis, que una histeria de acción se proyecta sobre, histeria y histeria, crisis de juvenil trauma. Hasta que uno de ellas se mueva la "histeria" y lo mismo para muchos. Esos errores que se registran en el orden de los estigmas que marcan la fragilidad de un ciclo racial que se llama "mesda" o hasta a ciertos propósitos nacionalistas, hispanos, hispanos y un híbrido orientado.

EL INVENTARIO

Es difícil el inventario racial entre nosotros. El testimonio, el dato, el documento se escapa, se esfuma o se evade. Hay factores de afirmación y desmentido, por cierto, que operan lentamente, pero con oportunidad alguna momento con desprecio lo apaciguó se el momento de un hombre de una raza exótica, que culmina por su talento, adusto y disonante con el medio.

—Es un advenedizo andar, un "asistente", ¿Es posible racial, tal...

Este tipo, marcado anticipadamente a la realización de una forma racial inapropiada, señala la ruta incógnita y varia de los argentinos de este siglo. En este inventario somero debe comprenderse no un atajo a esta o a aquella de las razas que llegan aquí en particular y descreman sus células fecundas; debe contemplarse un resumen del tema, como simple núcleo de explicar que no puede haber "raza" aún allí donde no existen reglas y caudales que la aseguren sobre crisis fijo. Pretenden entender a la Argentina las teorías, experiencias y prácticas activas y experimentales de Alemania o Italia, por ejemplo, sería volver al país a un primitivismo autóctono, que recuperaría más desastres que estas positivas.

LA TALLA DE NUESTROS RECLUTAS

Dice un antropólogo que uno de los rasgos más esenciales para estudiar el adelanto en resistencia física del hombre, que implica belleza, es la talla del individuo. Influye que la raza sea alta o baja. Otro sabio, Madison, comparó a los nor-

El Führer de Alemania, que busca el predominio de sus raza pura, solamente germana.



Artículo publicado en la revista Ahora, en 1936, en el que se reclama la puesta en marcha de medidas que contribuyan a "mejorar la raza".

“comer pan integral, frutas, verduras y lácteos”, “facilitar el movimiento regular de los intestinos”, “beber por lo menos seis vasos de agua por día”, “trabajar y dormir en ambientes bien aireados”, “aprovechar todas las ocasiones para exponer la piel desnuda al aire y al sol”, “usar ropa interior liviana y porosa”, “bañarse todos los días”, “higienizarse escrupulosamente la boca y los dientes”, “practicar ejercicios físicos”. Con esos consejos, la revista anunciaba el camino que debía culminar en una ancianidad sana y vital tanto en lo mental y espiritual como en lo físico.

Así, desde muy diversas posturas políticas e ideológicas, un dominante e impreciso discurso eugenésico positivo permeó el tema de la salud. Algunos fueron eugenistas doctrinarios, otros reformistas sociales del más variado ropaje, y prácticamente todos neolamarckianos. Creyendo firmemente que ciertos cambios medioambientales podían modificar y beneficiar lo que llamaban el “capital genético” de la población, todos ellos destacaban la necesidad, incluso la urgencia, de “mejorar la raza” utilizando recursos y estrategias de nutrimento, de la buena alimentación a la difusión de la cultura higiénica. No buscaban pureza racial, sino fortalecimiento de los cuerpos individuales y del cuerpo de la nación mediante acciones médicas, morales y sociales. Así, la medicina mezclaba los hallazgos de la revolución pasteuriana y la bacteriología moderna con las posibilidades de cambio asociadas a la educación y la lucha contra la pobreza. Fue en ese contexto que se reconocieron las dimensiones sociales de ciertas enfermedades y la necesidad de unir atención médica con asistencia social. Por ese camino se fue definiendo el programa de acción de diversas agencias estatales y de numerosas organizaciones privadas, todas ellas de algún modo involucradas en la lucha contra la tuberculosis, el paludismo, las enfermedades venéreas o la protección de la infancia.

El derecho a la salud y la ampliación de los contenidos de la ciudadanía social

Todavía en las décadas del veinte y el treinta mucha gente enfrentaba los problemas de tener o perder salud como una cuestión azarosa o, al decir de un obrero, como un resultado de “la estrella que nos guía”. Algunos se proponían minimizar los riesgos de ese

azar y, si podían, participaban del mutualismo o de la medicina prepaga tratando de disponer de alguna asistencia básica; otros, tal vez la mayoría, buscaron esa cobertura en los servicios gratuitos de atención ofrecidos por la red hospitalaria estatal. Grupos socialistas, anarcosindicalistas, comunistas o radicales —que en esos años pretendían hablar en nombre de las anónimas masas urbanas y, en ciertos casos, en nombre de los trabajadores en particular— articularon sus preocupaciones referidas a la salud y la enfermedad de modo bastante genérico y como asuntos integrantes de la ampliación de sus derechos sociales. Entre los médicos, tanto entre los que trabajaban en reparticiones o establecimientos del Estado como entre los que participaban en las distintas instituciones de la sociedad civil dedicadas a la asistencia y atención, se fue afirmando la idea de que la preservación de la salud contribuía “al mantenimiento del rendimiento vital, no sólo como una ventaja personal sino también como un bien que interesa a la comunidad y que pertenece a la patria”. Así, concebidos como derechos sociales, como acciones que contribuirían a la obtención de una “ventaja personal”, o como aportes al “fortalecimiento de la patria”, fueron prefigurándose algunos rasgos que anticipaban lo que el primer peronismo desarrollaría en una escala y con una convicción hasta entonces desconocidas.

Al despuntar la década del cuarenta, el Estado profundizaba no sólo su carácter capitalista sino también su función asistencialista, un perfil que venía consolidando desde hace años con la expansión de su red de hospitales, dispensarios y demás servicios de atención. Estos empeños intervencionistas y providentes eran parte de las nuevas funciones que el Estado había asumido para sí, no sólo como mediador en los conflictos sociales sino también como normalizador de más y más cuestiones del mundo privado. Esa ampliación de funciones fue en parte el resultado de demandas originadas en la sociedad civil, en las asociaciones mutuales en primer lugar, que comenzaron a experimentar, especialmente en la década del treinta y al calor de una ampliación de la demanda, condiciones graves de desequilibrios financieros que, se pensaba, podían resolverse con la activa intervención reguladora estatal.

Fue en ese contexto, caracterizado por una mayor intervención del Estado y por la presencia de sectores de la sociedad civil muy interesados en renegociar con él su lugar como oferentes de servicios, donde las cuestiones de la salud y la enfermedad comenza-

ron, como nunca antes, a politizarse. A la discusión sobre las dimensiones y características del asistencialismo estatal, un tema no totalmente nuevo, se sumó a comienzos de los años cuarenta la cuestión del seguro de salud. En torno a este problema, que sí era novedoso, las ideas de la solidaridad y de la justicia ganaron en presencia y alcance. Alentadas por tradiciones muy variadas, de la socialista a la católica y al espiritualismo krausista, esas ideas galvanizarían en torno a la definición de tres conjuntos solidarios a los que se atribuían intereses recíprocos y compartidos. Comenzaría a aceptarse entonces una fórmula donde el Estado y los empleadores debían contribuir a amortizar lo que se dio en llamar “el capital-hombre” y los trabajadores se harían cargo de aportar su parte, quedando de ese modo habilitados a exigir como derecho aquello que habían cofinanciado. En este nuevo marco, los vínculos solidarios, antes primordialmente instalados en la esfera privada de las organizaciones mutuales, incorporaron una dimensión política que logró incluir al Estado como parte interesada y responsable. Así, la maduración de esta nueva relación entre el Estado y la sociedad, un proceso en gestación desde comienzos del siglo XX, tomó forma en un estado de compromiso, donde el reconocimiento de derechos sociales, entre ellos el de la salud, terminó ampliando sustancialmente los contenidos de la ciudadanía.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, Adriana y Reynoso, Daniel. *Médicos e instituciones de salud. Mar del Plata 1870-1960*, Buenos Aires. HISA/Universidad Nacional de Mar del Plata, 1995.

Armus, Diego. "Consenso, conflicto y liderazgo en la lucha contra la tuberculosis. Buenos Aires. 1870-1950", en Juan Suriano (ed.), *La cuestión social en la Argentina, 1870-1943*, Buenos Aires. La Colmena, 2000.

———. "El descubrimiento de la enfermedad como problema social", en *Nueva historia argentina*, vol. V, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

———. "Salud y anarquismo. La tuberculosis en el discurso libertario argentino, 1890-1940", en Mirta Zaida Lobato (ed.), *Política, médicos y enfermedades. Lecturas de historia de la salud en la Argentina*, Buenos Aires, Biblos/Universidad de Mar del Plata, 1996.

Belmartino, Susana. "Las obras sociales: continuidad o ruptura en la Argentina de los años '40", en Mirta Zaida Lobato (ed.), *Política, médicos y enfermedades. Lecturas de historia de la salud en la Argentina*, Buenos Aires, Biblos/Universidad de Mar del Plata, 1996.

Belmartino, Susana; Bloch, Carlos; Persello, Ana Virginia, y Carnino, María Isabel. *Corporación médica y poder en salud. Argentina, 1920-1945*. Rosario, OPS/OMS, 1988.

Belmartino, Susana; Bloch, Carlos; Persello, Ana Virginia, y Quiroga, Hugo. *Las instituciones de salud en la Argentina liberal: desarrollo y crisis*, Buenos Aires, Secretaría de Ciencia y Técnica, 1987.

Carbonetti, Adrián. *Enfermedad y sociedad. La tuberculosis en la ciudad de Córdoba, 1906-1947*, Córdoba, Municipalidad de Córdoba, 1998.

Coni, E. *Higiene social, asistencia y previsión social: Buenos Aires caritativo y previsor*, Buenos Aires, Spinelli, 1918.

Correa Luna, C. *Historia de la Sociedad de Beneficencia*, Buenos Aires, Edición Sociedad de Beneficencia de la Capital, 1925.

Giménez, A. *Las sociedades de socorros mutuos*, Buenos Aires, Talleres Gráficos Rosso y Cía., 1914.

Kohn Loncarica, Alfredo, et al. "Nacionalismo e internacionalismo en las ciencias de la salud: el caso de la lucha antipalúdica en Argentina", en Mario Albor-

noz, et al. *Ciencia y sociedad en América Latina*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1996.

Lazarte, Juan. *Problemas de medicina social*, Buenos Aires, Americalee, 1943.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. *La Primera Conferencia Nacional de Asistencia Social*, 1933.

Niklisen, José. *Contribución al estudio del movimiento mutualista*, Buenos Aires, 1938.

Penna, J. y Madero, H. *La administración sanitaria y la asistencia pública de la ciudad de Buenos Aires*. Buenos Aires, Kraft, 1910.

Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires. *La Sociedad de Beneficencia de la Capital, 1823-1936*, Buenos Aires, Peuser, 1936.

Veronelli, Juan Carlos. *Medicina, gobierno y sociedad. Evolución de las instituciones de la salud en Argentina*, Buenos Aires, El Coloquio, 1975.

Instituto de Estadística y Censos y Secretaría de Salud. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1990.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 1991.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 1992.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 1993.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 1994.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 1995.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 1996.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 1997.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 1998.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 1999.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2000.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2001.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2002.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2003.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2004.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2005.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2006.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2007.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2008.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2009.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2010.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2011.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2012.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2013.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2014.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2015.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2016.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2017.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2018.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2019.

Instituto de Estadística y Censos. Buenos Aires, Anuario Estadístico, 2020.



AS IMÁGENES
SERPENTADAS:
UNA DISCUSIÓN
MARÍA

VIII

*Posiciones, transformaciones y debates
en la Literatura*

por MARÍA TERESA GRAMUGLIO



Fundación de Sur. Parados, de izq. a der.: Eduardo Bullrich, Jorge Luis Borges, Francisco Romero, Eduardo Mallea, Enrique Bullrich, Victoria Ocampo, Ramón Gómez de la Serna. Sentados: Pedro Henríquez Ureña, Norah Borges, Oliverio Girondo, María Rosa Oliver, María Carolina Padilla, Guillermo de Torre y Ernest Ansermet, 1931.



LAS IMÁGENES SEDIMENTADAS: UNA DISCUSIÓN NECESARIA

En los estudios de literatura argentina, el enunciado “década del treinta” pone de manifiesto uno de los problemas más controvertidos que afronta la historiografía literaria: el de encontrar formas de periodización específicas, sustentadas en criterios intrínsecos a los cambios ocurridos en la serie literaria. Debido en buena parte al fuerte lazo que la literatura mantiene con la sociedad, las historias de la literatura se organizan en función de acontecimientos externos a la literatura misma, en especial aquellos que refieren a giros decisivos de la evolución política y social. De ahí que, en el caso de la literatura argentina, denominaciones como “los coloniales”, “los proscriptos”, “la independencia”, “el rosismo”, “el ochenta”, o, más directamente, “Yrigoyen”, se hayan utilizado sin reparos para designar etapas de la producción literaria nacional.

1930 no es una excepción. La fecha tiene la ventaja de satisfacer nuestro sentido común del tiempo con una de esas cifras aptas, por lo redondas,

“Ese sentido festival y deportivo de la vida es el que predomina en los hermosos años de la prosperidad de 1924 –año en que nace Martín Fierro bajo el gobierno liberal y aburguesado de Alvear, amigo de la vida social y de las manifestaciones artísticas. Buenos Aires sale del enclaustramiento en que se hallaba desde 1890 y se transforma visiblemente [...] Todo es risa y alegría, por eso Martín Fierro es una revista seria que se toma todo en broma [...] La Micareme [sic] de ese extraño carnaval – todos lo sabemos – fueron los acontecimientos de setiembre de 1930, en los que ni siquiera faltó el desfile de carrozas alegóricas y la lluvia de flores desde los balcones.”

Juan José Sebreli, “Los martinfierristas, su tiempo y el nuestro”, en *Contorno*, número 1, noviembre de 1953.

“[...] la sociedad liberal se despide de la vida histórica, alegre y suntuosamente, quemando fuegos de artificio y destapando botellas de Champagne. Se van para siempre, y bailan un tango funerario por última vez [...]

“El día siguiente es el triste amanecer después del coito. La alegría se ha vuelto tedio, la borrachera fatiga y todos sienten náuseas, pesadez de cabeza y un sabor amargo en la boca. La violencia puramente verbal de los martinfierristas ya no tiene sentido frente a la violencia real de la Sección Especial. La libertad de Alvear se ha transformado en el Terror de Justo. Toda una generación de escritores desorientados se suicida por esos años: Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni, Enrique Méndez Calzada, Enrique Loncán, Edmundo Montagne. Otros abandonan la literatura o se destierran voluntariamente como Samuel Glusberg, o se dedican a una literatura de evasión como Borges.

“[...] La generación de 1930 despierta en una atmósfera estancada y muerta. Las pampas metafísicas y los hermosos arrabales que descubrían los martinfierristas en sus excursiones turísticas se han desvanecido como la imagen de un sueño. En su lugar quedan calles desiertas, vacías, por donde, al decir de Martínez Estrada ‘pasa por los edificios sin silbar el viento mudo de la pampa’, un viento inclemente de muerte que barre con todo. Los sobrevivientes de la catástrofe adoptan una actitud acorde con la circunstancia, la actitud severa y grave de quienes acaban de enterrar a un ser querido: es la generación que ha sufrido, vivido y sobrevivido a la muerte del liberalismo burgués.”

Juan José Sebreli, *Martínez Estrada: una rebelión inútil*, Buenos Aires, Palestra, 1960.

para marcar límites. Y el golpe del 6 de setiembre fue un acontecimiento lo bastante contundente como para que se lo haya considerado una frontera decisiva, un nudo que condensa las crisis, múltiples y concurrentes, que agotaron el ciclo de la Argentina agroexportadora. Tan contundente, en su impacto puntual y en sus deplorables efectos políticos, que pareció legítimo trasladar sin más esos efectos a la caracterización de la vida literaria. De modo que, así como una corriente historiográfica elaboró una imagen monolítica de los años treinta que se resumía en la fórmula “década infame”, en los estudios literarios es posible encontrar todavía tanto esa misma denominación como la repetición acrítica de las evaluaciones que conlleva. Así, en 1986, el crítico inglés John King señaló que el período comprendido entre los años treinta y comienzos de los cuarenta “suele no ser tocado por los críticos, que lo consideran un período yermo, entre la vanguardia de los veinte y el ‘boom’ de finales de los cincuenta y los sesenta”, y en 1996 la conocida revista literaria *Tramas* dedicó un número a la época y lo tituló, sin conflicto aparente, “La década infame”.

Una condensación del estereotipo

En el primer número de la revista *Contorno*, aparecido en 1953, Juan José Sebreli planteó con ejemplar eficacia retórica los lugares comunes de una visión que contraponía “los locos años veinte” a “los tristes treinta”. Esa evaluación disfórica no era aislada: muestra un fuerte parecido de familia con las que elaboraron otros miembros de su generación, desde David Viñas a Héctor Álvarez Murena, y el mismo Sebreli la retomó poco después en su primer libro. En construcciones como éstas, el impacto general del cuadro prevalece por sobre la precisión de los datos. No es sencillo, por ejemplo, saber con exactitud a qué sectores se refiere Sebreli cuando alude a una “sociedad liberal” que se aleja al compás de un “tango funerario”. Por otra parte, se podrá notar que las calles desiertas y vacías que imagina son las mismas que en esos años Arlt mostró en sus *Aguafuertes* atestadas de gente y sacudidas por el estrépito de las reformas vertiginosas del intendente De Vedia y Mitre. En lo que hace a la vida literaria, tampoco sería sencillo verificar si la tasa de suicidios entre escritores fue en esa década efectivamente más alta que en otras, o si las motivaciones de los

suicidas obedecían a una idéntica desazón provocada por la crisis del orden político. Y si bien Alfonsina Storni se suicidó en 1938, en 1934 había escrito *Mundo de siete pozos*, y el año de su muerte *Mascarilla y trébol*, que resultaron sus libros más renovadores. En fin, si se requiriera exactitud habría que detenerse en las razones puntuales del “destierro” de Glusberg, o discutir la hipótesis de un refugio de Borges en la literatura de evasión, y hasta la noción misma de “literatura de evasión”.

El poder persuasivo de esta construcción no deriva de la solidez de sus argumentos sino de la destreza con que utiliza las figuras del carnaval y de la fiesta, de fuerte carga simbólica y larga tradición literaria, para reforzar un sentido común ya sedimentado. Es perfectamente lícito utilizar en un ensayo crítico los recursos de la retórica y acudir a tópicos prestigiosos. Más aún: si se proyectara esta imagen de los años treinta a un escenario más amplio, sería posible encontrar en la literatura de otros países, incluidos los Estados Unidos, insistentes alusiones a los efectos de miseria material y moral que la crisis económica de 1929 proyectó sobre los años siguientes. Por otra parte, el retroceso de las democracias en Occidente era un dato irrefutable. Y hacia el final de la década, el estallido de la guerra en Europa bastaría para acreditar ese sentimiento generalizado de catástrofe que terminó invadiendo a buena parte de la intelectualidad occidental.

Tener en cuenta este panorama ayudaría a destrabar una visión excesivamente ensimismada en las desventuras locales, y a notar que los grandes acontecimientos políticos europeos incidieron en el campo literario argentino y en buena parte de sus conflictos: en los años treinta, a pesar del estalinismo, 1917 seguía alimentando el imaginario de la Revolución; y el fascismo, la guerra civil española, el nazismo y finalmente la guerra del '39 dividieron posiciones de una manera que, a partir de mediados de la década, se fue tornando cada vez más tajante.

Para una crítica de lugares comunes

Revisar los lugares comunes no implica ignorar el juicio sobre un período de la historia argentina que efectivamente fue, en muchos sentidos, infame, aunque sus excesos de fraude y represión podrían parecer hoy menos ominosos si se los juzgara a la luz de

las experiencias que siguieron a los golpes militares de 1966 y 1976. Lo que se requiere es, en primer lugar, cuestionar ese mecanicismo que traslada rectamente las evaluaciones de la esfera política a la literaria. Luego, reponer algunos datos que permitan desmontar las imágenes sedimentadas y hacer visible el dinamismo de una vida literaria mucho menos paralizada de lo que se supuso. Ambas cuestiones están indisolublemente ligadas.

Lo primero exige reconocer la complejidad de los tiempos históricos, irreductibles a los esquemas simples de décadas y generaciones, puesto que en cualquier segmento que se recorte coexisten fenómenos de ritmo y duración desiguales: algunos nuevos o emergentes, otros ya asentados, que han alcanzado una colocación de predominio, otros que mantienen una presencia residual. Implica además admitir que no existe una sincronía absoluta entre los fenómenos político-sociales y la evolución de los procesos culturales y literarios. Desconociendo esos principios elementales, se han invocado algunas palabras recurrentes en los títulos de obras representativas de los años treinta como índice irrefutable del estado de desazón que habría invadido a los escritores a consecuencia de la situación política: “soledad”, “silencio”, “infamia”. Los títulos: *El hombre que está solo y espera*, *Historia universal de la infamia*, *Hombres en soledad*, *La bahía de silencio...* Es hora de revisar esos argumentos simplistas, y para eso nada mejor que un breve examen de esos textos.

Aunque publicado en 1931, *El hombre que está solo y espera*, de Raúl Scalabrini Ortiz, participa de una sensibilidad claramente ligada al optimismo martinfierrista, bastante menos lúgubre de lo que su título parece sugerir: como ha señalado Adolfo Prieto, basta abrir el libro para comprobar el optimismo de su autor acerca de un destino amparado por el “espíritu de la tierra”. Más que un resultado de la desazón provocada por la crisis política, *El hombre que está solo y espera* es una respuesta amable a ciertas imágenes críticas de la Argentina y de los argentinos elaboradas por algunos viajeros europeos, en particular las formuladas por Ortega y Gasset en “El hombre a la defensiva”. Poco después de escribirlo, Scalabrini Ortiz, lejos de abismarse en una espera solitaria (y tal vez tocado por ese robusto “espíritu de la tierra” en cuyo influjo siempre confió), se incorporó a FORJA e inició los trabajos sobre la penetración del imperialismo inglés en la Argentina que culminaron con la publicación de *Política británica en el Río de la Plata*



Raúl Scalabrini Ortiz, 1932.

en 1936 e *Historia de los ferrocarriles argentinos*, cuatro años más tarde. El surgimiento de FORJA, a su vez, fue no sólo prueba de la vitalidad del pensamiento político: en el tono agresivo y humorístico de sus publicaciones persiste mucho de un estilo que encuentra sus antecedentes en dos célebres publicaciones anteriores, el diario *Crítica* y la revista *Martín Fierro*.

Los relatos de *Historia universal de la infamia* fueron apareciendo primero en la *Revista Multicolor de los Sábados*, suplemento de *Crítica*, y luego publicados en libro por la editorial Tor en 1935. Inauguraron la producción narrativa de Borges, que continuó luego en las páginas de la revista *Sur* con los cuentos que integraron *El jardín de senderos que se bifurcan*, de 1941, y *Ficciones*, de 1944, publicados por la editorial Sur. Por entonces se inició también la larga colaboración entre Borges y Bioy Casares, y ambos escribieron juntos, con el seudónimo H. Bustos Domecq, *Seis problemas para don Isidro Parodi*, que Sur publicó hacia 1942. Tanto los sellos editoriales mencionados como la campaña de promoción del relato de aventuras, el policial y el fantástico que ambos emprendieron por esos años estarían indicando algunas de las zonas de contacto posible entre la literatura culta y los géneros de consumo popular, a contramano de la opinión que, críticamente, los consideraba “escritores elitistas”. En esa campaña deben inscribirse también las antologías de cuentos policiales y fantásticos que ambos compilaron con Silvina Ocampo. Entre los tres, prepararon así el terreno para sus propias ficciones, que se materializaron con la publicación, en 1937, de *Viaje olvidado*, el primer libro de cuentos de Silvina Ocampo, y en 1940, de la que ha sido considerada la mejor novela fantástica de Bioy Casares: *La invención de Morel*. Más que el refugio en una literatura de

evasión, los textos que Borges y Bioy Casares escribieron en los años treinta —textos de los que *Sur* fue vehículo privilegiado— revelan una intervención polémica fuerte en el campo literario, encaminada a disputar un espacio a las tendencias realistas y psicológicas que consideraban dominantes en la narrativa, representadas por escritores como Manuel Gálvez y Eduardo Mallea.

Desde una poética tributaria del realismo que confiere a sus novelas cierta virtud documental, en *Hombres en soledad*, publicado en 1938, Gálvez tematizó con insistencia la soledad que aquejaría a algunos seres especialmente sensibles, en particular a los escritores. Pero si se revisa ese documento imprescindible que son sus *Recuerdos de la vida literaria*, que se publicaron entre 1961 y 1965, se advertirá que la profusión de actividades gremiales, editoriales, institucionales y sociales que Gálvez desplegaba en esos años permitirían poner en duda el valor testimonial de aquella tematización de la soledad, al menos en lo que se refiere a su carrera de escritor.

En cuanto a Mallea, hizo del silencio un drama central en su extensa literatura, por lo que sería erróneo reducirlo a mero reflejo de una coyuntura histórica: el patetismo que desplegó en sus textos primeros persistió a lo largo del tiempo sin demasiadas variantes. En rigor, *La bahía de silencio* vino a coronar en 1940 una década notablemente elocuente en su trayectoria. Después del paréntesis que siguió a los *Cuentos para una inglesa desesperada*, de 1926, publicó *Conocimiento y expresión de la Argentina* y *Nocturno europeo* nueve años más tarde. *La ciudad junto al río inmóvil* apareció en 1936, y en los tres años siguientes lo hicieron *Historia de una pasión argentina*, *Fiesta en noviembre* y *Meditación en la costa*. En *El sayal y la púrpura* (1941) reunió algunos de los ensayos y conferencias que acompañaron esa abundante producción. Por otra parte, su colocación en el campo intelectual parece haber estado al abrigo de las frustraciones que aquejaban a sus personajes: con sus cargos en el suplemento literario de *La Nación* y en la revista *Sur*, Mallea ocupó posiciones de poder específicas de ese campo, y es sabido que su prestigio nacional e internacional superaba por entonces al de Borges.

Algunos estudios históricos han destacado la apatía que se habría apoderado de la vida política argentina en la década del treinta, como consecuencia de la depresión económica, el fraude elec-

toral y la represión. Cuando se aceptan esas caracterizaciones, resulta natural considerar que el correlato inevitable de esa apatía fueran el silencio frente a las cuestiones políticas, la ausencia de debates y la general decadencia de la vida intelectual. Los datos disponibles, que indican una incesante actividad del mundo literario, permiten poner en duda la segunda afirmación. Banquetes, congresos internacionales de escritores, conferencias de visitantes extranjeros, fundaciones de revistas y de editoriales, creación de instituciones académicas y artísticas, polémicas y otras manifestaciones culturales se sucedían, al menos en Buenos Aires. Desde mediados de la década, junto con una cierta recuperación económica, los sucesos de la escena internacional contribuyeron a intensificar ese dinamismo: los avances del fascismo y del nazismo, el giro de los partidos comunistas hacia los frentes populares, la política del panamericanismo, los sucesivos impactos de la guerra civil española y de la Segunda Guerra repercutieron con intensidad entre los escritores, y en ese clima se insertaron los debates nacionales sobre el filofascismo de los sectores gobernantes, la represión, el fraude y los avances del clericalismo. Todo esto confirió a ese período un sesgo muy característico, en el que cobraron especial relieve dos temas cruciales: la responsabilidad de los intelectuales y el lugar de la cultura en las modernas sociedades de masas.

Revistas, editoriales y grupos

Las relaciones entre los autores, revistas, editoriales y públicos que formaron la densa red en que se afirmó la actividad literaria y cultural de la década, exhibieron rasgos particulares. La revista *Sur*, que se suele considerar heredera de la tradición liberal, se fundó en 1931; FORJA, el grupo de jóvenes radicales cada vez más orientado hacia un nacionalismo de sesgo populista, en 1935. Aunque ambas formaciones indican cambios significativos en el campo intelectual, ocuparon posiciones antagónicas. Sin embargo, los espacios no siempre se recortaron con esa nitidez. Así, los nacionalistas Julio Irazusta y Ernesto Palacio, miembros de la dirección de *La Nueva República* entre 1927 y 1932, y los católicos Leopoldo Marechal y Francisco Luis Bernárdez, publicaron con frecuencia en *Sur* hasta bien avanzada la década. Por su parte Bor-

ges, siendo un notorio integrante de *Sur*, colaboró en *Sol y Luna*, revista nacionalista y pro franquista que se publicó entre 1938 y 1943.

En otro circuito, diversas empresas editoriales, desde Tor hasta Claridad, formaban parte de un conjunto de proyectos que desde los años veinte buscaban hacer llegar literatura culta con precios accesibles a lectores pertenecientes a sectores medios y populares: un público nuevo, no tradicional, ampliado, entre otras razones, gracias a los resultados de la Ley de Educación Común. Con una intención similar, Leónidas Barletta fundó en 1930 el Teatro del Pueblo, a cuya financiación se ha dicho que contribuyó, entre otros, Victoria Ocampo. Y entre 1936 y 1939 se incorporaron al medio literario tres grandes editoriales, Losada, Sudamericana y Santiago Rueda, que multiplicaron la difusión de autores nacionales y de traducciones, dando prestigio a la industria editorial argentina en todo el mundo lector de habla española.

En esos años se fundaron numerosas revistas literarias, varias de ellas situadas en lo que genéricamente se denomina izquierda: *Metrópolis* (1931-1933), *Nervio* (1931-1936), *Contra* (1933), *Columna* (1937-1942), *Conducta* (1938-1943) y otras. Continuaron publicándose *Nosotros* (1907-1934; 1936-1943) y *Claridad* (1926-1941). Hasta 1937 siguió apareciendo *Verbum*, la legendaria revista del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de Buenos Aires, y aparecieron otras nuevas, también vinculadas, aunque de un modo menos directo, al ámbito universitario: *Letras* (1930-1933), *Megáfono* (1930-1934). La revista *Criterio*, fundada en 1928, se convirtió en el medio más regular para la difusión de las



Tapa de la revista Claridad, publicada en Buenos Aires en los comienzos de la guerra de España, julio de 1936.

posiciones del catolicismo nacionalista de derecha en el plano cultural, y sobre todo en el político.

De todas estas publicaciones, la más significativa como exponente de los cambios en el campo literario, por su proyecto y por el prestigio que alcanzó, fue sin ninguna duda *Sur*. Las parcialidades y omisiones en que incurrió son bien conocidas, y leer la actividad literaria de los años treinta desde *Sur* no brinda un inventario exhaustivo. Pero ofrece a cambio una perspectiva renovadora de las grandes líneas que articularon la literatura culta en el período.

Esta lectura de la literatura desde *Sur* permite formular algunos planteos. El primero indica que lo verdaderamente representativo del cambio literario en esos años no fue, como se ha repetido hasta el hartazgo, el ensayo de tema nacional. Éste tenía ya una larga trayectoria en la literatura argentina, y los del treinta constituyen una inflexión particular de un desarrollo que había conocido otros momentos de alta densidad conflictiva, como el rosismo o el Centenario. Por otra parte, en esa inflexión, las imágenes de la Argentina que prodigaron los visitantes extranjeros fueron tanto o más movilizadoras que los efectos del golpe militar. Una segunda consideración señala que lo más representativo del cambio literario en esos años fue, en cambio, el conjunto de transformaciones de la narrativa, buena parte de las cuales se originaron en el corazón de *Sur*. Mallea, Silvina Ocampo, Bianco, Bioy Casares y Borges fueron, junto con Roberto Arlt, sus exponentes más relevantes. Por último, otro rasgo novedoso fue la intensidad de los debates político-ideológicos generados por los conflictos de la escena internacional, que tensionaron el entero campo intelectual argentino hasta producir reagrupamientos y dividir posiciones de un modo hasta entonces inédito. Dada la centralidad que todas estas cuestiones adquirieron en sus páginas, cabe afirmar que lo más representativo de lo nuevo en esos años fue, precisamente, la aparición de *Sur*.

LA APARICIÓN DE *SUR* Y LAS TRANSFORMACIONES DEL CAMPO LITERARIO

La revista *Sur* fue fundada por Victoria Ocampo, quien la financió con su dinero y la dirigió hasta su muerte en 1979. El primer número apareció en enero de 1931. Tenía unas doscientas páginas

de texto y veinte de ilustraciones en blanco y negro con impresión de muy buena calidad. Costaba dos pesos. La cifra no parece excesiva, si se piensa que el precio promedio de novelas exitosas como *Don Segundo Sombra* o *La gloria de don Ramiro* era de dos pesos con cincuenta centavos. Presentaba un rasgo novedoso: el consejo de redacción integrado por escritores locales se complementaba con un consejo extranjero. Los integrantes de ambos pertenecían al círculo de relaciones personales de Ocampo, y los argentinos tenían además lazos familiares o amistosos entre sí.

El sesgo a la vez exclusivo y cosmopolita que revelaba esa configuración no era un gesto vacío. Se repetía en las firmas de los colaboradores y permite explicar el sumario del primer número, ya que buena parte de los materiales que lo formaban eran traducciones, textos vinculados con viajes, comentarios sobre temas y figuras clave de diversas ramas de la cultura moderna europea y norteamericana (Picasso, Ansermet, Gropius, Stieglitz, Le Corbusier, el lenguaje del cine). También aparecían varias cartas cruzadas entre argentinos y extranjeros, como la de Victoria Ocampo a Waldo Frank que inaugura la publicación, o la de Drieu La Rochelle a los miembros del consejo argentino. El conjunto incluía algunos ensayos de tema latinoamericano y dos colaboraciones del Borges todavía criollista. Los cruces entre lo americano y lo extranjero se reiteraban en las ilustraciones: reproducciones de pintura contemporánea y de estampas tradicionales, fotografías de paisajes argentinos y latinoamericanos, del teatro de Gropius, de inscripciones de carros.

Aunque *Sur* no anunció sus propósitos con algún manifiesto u otro tipo de presentación convencional, el conjunto ofrece el esbozo de una concepción de la cultura y el anticipo de un programa. Como si se dijera: no es posible construir nada verdaderamente nuevo en el encierro de una sola cultura y una sola lengua; para encontrar la voz propia, es indispensable mantener una relación activa con todo el ámbito americano y con Europa; es necesaria una mediación para interpretar lo mejor de la cultura moderna, y esa tarea está reservada a ciertos grupos especiales de personas. A lo largo de su extensa trayectoria, *Sur* fue singularmente fiel a ese proyecto tácito.

Es posible encontrar ciertas continuidades entre *Sur* y *Proa*, una revista representativa de las módicas vanguardias de los veinte. Pero si se compulsan los elencos de nombres se comprobará rápi-



*Victoria Ocampo junto a Ortega y Gasset,
Madrid, 1929.*

damente que son pocos los animadores de revistas vanguardistas que se incorporaron efectivamente a *Sur*. Por otra parte, aunque no es sencillo acotar una tradición sólida en nuestro pobre liberalismo, con ella compartió *Sur* ciertas actitudes laicas y una concepción abierta de la cultura. Pero ninguna de estas explicaciones resulta suficiente para dar cuenta de la especificidad de esta formación cultural.

Victoria Ocampo y su público

La emergencia de *Sur* obedeció a una configuración nueva, en la cual el dinero y el capital social de Victoria Ocampo resultaron tan decisivos como la consolidación de la autonomía relativa del campo literario y la formación de un nuevo sector de público culto. Como se ha visto, hacia 1930 continuaban multiplicándose las instituciones, publicaciones y actividades que brindaban a los escritores mayor cantidad de espacios con mecanismos internos de legitimación para desarrollar sus carreras. Junto a eso, se puede detectar la paulatina aparición de un sector nuevo de público, pequeño pero capaz de apreciar una publicación que pusiera a su alcance las novedades de la literatura y el arte modernos. Como tantas veces lo ha mostrado la historia de la literatura, cada ampliación del público genera alguna divisoria. En este caso, se trataba de un proceso resultante del crecimiento cualitativo del público lector que la movilidad social ascendente, desde fines del siglo XIX, había ayudado a constituir. Se habían alcanzado así ciertas condiciones de posibilidad para una publica-

ción distinta de las existentes, que cristalizaron en torno de la figura nuclear de Victoria Ocampo.

Ocampo no había participado de los movimientos de vanguardia y ni siquiera ocupaba una posición eminente en el campo literario, a pesar de que Ortega y Gasset había publicado su ensayo *De Francesca a Beatrice* en la *Revista de Occidente*. Para ese trabajo, Ocampo había buscado la aprobación de Groussac y de Ángel de Estrada, dos elecciones bien reveladoras, por lo tradicionales, de las diferencias entre la debilidad de su colocación en el campo literario y la solidez de una posición social, que le facilitaba el acceso a espacios y protagonistas de reconocido prestigio dentro y fuera del país. Precisamente el origen social de Victoria Ocampo y de otros miembros del grupo fue con frecuencia motivo de críticas descalificadoras que encasillaron a *Sur* como órgano cultural bien de la oligarquía, bien de los gobiernos surgidos del golpe del treinta, una lectura muy primaria que sin embargo no ha dejado de reiterarse hasta hoy.

Definiendo el rumbo

Sur se anunció como revista trimestral, pero entre 1930 y 1935 aparecieron solamente nueve números. Al final del número 8, de setiembre de 1933, una “notícula” informaba sobre la creación de la editorial Sur. Los testimonios afirman que con esa empresa se trataba de absorber las pérdidas que arrojaba la revista, pero ese propósito, lejos de desvirtuar el proyecto de *Sur*, tendió a afirmarlo. Los planes de la editorial incluían colecciones de literatura argentina y “la publicación de obras extranjeras que revistan para nuestro público un interés particular”. Se inició así la reconocida actividad editorial que confirió al grupo Sur un prestigio que trascendió las fronteras nacionales, uno de cuyos pilares fue, junto al acierto de muchas elecciones de autores modernos, el cuidado por la calidad de las traducciones. En la misma “notícula” se realizaba un diagnóstico severo de las condiciones de la vida intelectual, y se postulaban explícitamente la promoción de nuevos valores y el rechazo de la cultura oficial como vías de corrección de la reinante “miseria del espíritu”. En esta breve declaración asomaba lo que fue el corazón de la ideología del grupo Sur: la convicción de que el mantenimiento de los valores culturales era responsabili-

dad de unas “minorías selectas” (para recuperar la expresión de Ortega y Gasset), alejadas de los espacios del poder. En el mismo número, un artículo de Leo Ferrero, “Carta de Norteamérica, crisis de ‘elites’”, se inscribía en esta línea, que por otra parte ya se había perfilado en números anteriores.

A partir del número 10, de julio de 1935, *Sur* hizo un cambio decisivo: se convirtió en revista mensual, modificó su formato y redujo su precio a la mitad, sin que se diera ninguna explicación sobre las razones precisas que llevaron a este giro tan llamativo. Lo cierto es que comenzó entonces el período de máximo esplendor de *Sur*, que habría de prolongarse hasta bien avanzada la década del cincuenta.

Cada vez más alejada del campo del poder y de la cultura oficial, se convirtió en la revista literaria más prestigiosa de la Argentina y quizá de América Latina. Fue reconocida y elogiada en revistas de diversas tendencias, como *Nosotros*, *Columna*, *Conducta* y *Verbum*, y publicar en sus páginas llegó a ser para muchos un factor de consagración. Aunque a menudo fue atacada desde la derecha católica, varios nacionalistas, como ya se dijo, escribieron en ella casi hasta fines de los treinta. Años después, Julio Irazusta evocó en sus *Memorias* la “osadía de espíritu” con que Ocampo “abrió las puertas de su gran publicación a la tendencia que significaba el mayor desafío a las ideas recibidas acerca de la historia nacional”. Recordaba, casi con seguridad, la elogiosa reseña de su *Ensayo sobre Rosas* que escribió Ramón Doll, en la que éste desplegó una ácida crítica a los “escritores europeizados” que vivían “de espaldas al país” (en alusión a unas célebres palabras de Victoria Ocampo), vinculados con la para él abominable tradición liberal.

La “osadía” elogiada por Irazusta fue muchísimo menor con los escritores de izquierda, pero la larga permanencia en *Sur* de dos izquierdistas tan atípicos como Waldo Frank y María Rosa Oliver sugiere que las razones de este trato diferente tenían más que ver con la colocación social y las disposiciones culturales que con las divergencias o afinidades políticas. No obstante, en 1932 *Sur* publicó la nota de Elías Castelnuovo “La vida de los escritores en la URSS”, una decisión bien ilustrativa de las vacilaciones ideológicas que experimentaba la intelectualidad. Otra nota significativa en relación con las empresas culturales de la izquierda local fue el elogio entusiasta de la trayectoria y los objetivos del Teatro del

Pueblo que escribió Eduardo González Lanuza en 1939, cuando esa compañía puso en escena el *Orfeo* de Jean Cocteau.

Los escritores de *Sur*

Además de Victoria Ocampo, los escritores argentinos más representativos en la primera etapa de *Sur* fueron Eduardo Mallea y Jorge Luis Borges. José Bianco, que desde 1938 ocupó el cargo de secretario de redacción, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares no gozaban por entonces del reconocimiento que alcanzaron después. Ni sus posiciones estéticas, ni sus respectivas colocaciones en el campo literario y en la propia revista eran idénticas. Pero por sobre las diferencias resulta evidente, pese a las diatribas de Doll, la común preocupación por la literatura nacional, por sus tradiciones, su presente y sus relaciones con el conjunto de la cultura occidental. La primera colaboración de Bianco en *Sur*, un ensayo sobre las obras de Mallea de 1936, revela claramente este lazo: Bianco reivindicaba el derecho de los escritores argentinos a nutrirse de temas europeos y rechazaba sin ambages las soluciones cerradamente nacionalistas.

Mientras tanto, Borges iba tomando cierta distancia de los temas criollistas que había desplegado en los primeros números, para orientarse hacia la reformulación de su poética: en la revista se multiplican sus notas sobre cine, sobre preceptiva, sobre el policial, sobre Chesterton, sobre Wells... El resultado de este derrotero fueron los dos primeros cuentos que a fines de la década aparecieron en *Sur*: "Pierre Menard, autor del Quijote" y "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius". Las colaboraciones de Borges en la segunda mitad de los años treinta muestran que *Sur* fue un verdadero laboratorio, donde ensayó a la vez la construcción de su poética del relato y el pasaje a la ficción narrativa, que finalmente resultó decisivo para su consagración internacional.

Entre los escritores extranjeros que publicaba *Sur* predominaron tres perfiles que a veces se superpusieron: aquellos que interesaba introducir y traducir por su novedad o su relevancia no solamente literaria, como D. H. Lawrence o Virginia Woolf; los que sostenían posiciones políticas pacifistas y antifascistas afines a las del grupo, desde Aldous Huxley a Jacques Maritain; y los que pertenecían a esa categoría de visitantes extranjeros tan productiva

para la literatura argentina que llamamos genéricamente “los viajeros”. Desde Ansermet hasta Roger Caillois, pasando por Drieu La Rochelle, Métraux e incluso Alfonso Reyes, estos “viajeros” constituyen una presencia constante en las páginas de la revista: de una u otra manera incorporaban las perspectivas que la mirada del otro aporta a la comprensión de lo propio, algo consustancial a la concepción de la cultura implicada en el proyecto de *Sur*. Entre esos viajeros, los más conspicuos fueron Waldo Frank, Ortega y Gasset y Hermann Keyserling. Los dos primeros formaron parte del consejo extranjero y ocuparon un lugar destacado en el relato canónico de los orígenes de *Sur*, tal como fue elaborado por Victoria Ocampo desde el primer número y perfeccionado luego por ella misma en los números de aniversario de la revista.

LA ARGENTINA QUE VIERON LOS VIAJEROS Y EL ENSAYO DE TEMA NACIONAL

Los viajeros europeos forman parte de la tradición cultural argentina y tuvieron siempre una repercusión muy amplia. Como ha demostrado Adolfo Prieto, desde el siglo XIX las imágenes de la Argentina que brindaron los viajeros alcanzaron una proyección relevante en numerosos textos fundamentales de la literatura nacional. En las primeras décadas del siglo XX, sus visitas eran profusamente difundidas por la prensa, sus conferencias constituían acontecimientos multitudinarios, sus libros se discutían en numerosas publicaciones. En los años veinte, Arturo Cancela esbozó en *La Nación* los primeros capítulos de lo que sería su breve saga satírica sobre los visitantes extranjeros, que culminó con la publicación, en 1944, de *Historia funambulesca del profesor Landormy*. El golpe de 1930 intensificó la necesidad de volver a reflexionar sobre males de la nación en una línea cuyos antecedentes más ilustres se remontaban al *Facundo*. Pero otro desencadenante tanto o más poderoso que el golpe para esas reflexiones fueron las imágenes de la Argentina construidas por los viajeros. Fueron esas imágenes las que inspiraron no pocos de los tópicos del ensayo llamado del “ser nacional”.

Ortega y sus circunstancias

Ortega y Gasset ganó sus palmas de “viajero” en las exitosas visitas que hizo a la Argentina en 1916 y en 1928. Los textos clave fueron su conferencia “Impresiones de un viajero” y algunos artículos publicados en *La Nación* y en *El Espectador*: “Carta a un joven argentino que estudia filosofía”, “La pampa... promesas” y “El hombre a la defensiva”. Los espejismos de la pampa, con sus promesas no cumplidas, y los rasgos del carácter argentino que Ortega hizo derivar de ese paisaje singular, incluido el tipo nacional del “guarango”, ingresaron en el copioso repertorio de imágenes y materiales ideológicos de *Radiografía de la pampa*, que Martínez Estrada publicó en 1933. Despertaron además una serie muy extensa de réplicas, algunas de ellas indignadas, entre los escritores más diversos, desde Francisco Romero a Manuel Gálvez.

La más célebre de esas réplicas fue *El hombre que está solo y espera*. Scalabrini Ortiz anotó allí con ingenio: “La pampa le jugó una mala pasada a Ortega y Gasset. Le hizo creer en promesas. Se llenó de espejismos para engañarlo”. La cita brinda una clave implícita en las tesis de Scalabrini: Ortega no llegó a ver al verdadero hombre argentino. No es “el hombre a la defensiva”, sino el que practica el culto de la amistad masculina en el espacio ritual del café. Ni el afán de lucro ni la devoción a un Estado sobredimensionado, dos rasgos criticados por Ortega, pueden aplicarse a ese argentino esencial que es, fundamentalmente, un sobrio demolidor de espejismos. Sus sentimientos y emociones opondrían una secreta red orgánica al espíritu de factoría de la sociedad abstracta y aluvial que criticaba Ortega. “No es extraño —concluía Scalabrini— que los hombres más seriamente clasificados en la vida social no sean exponentes de la invisible pulsación porteña. Al Hombre de Corrientes y Esmeralda es raro encontrarlo en las altas esferas.” Por estas vías, Scalabrini introdujo en su ensayo un tópico que iba a ser clásico del nacionalismo populista: el antiintelectualismo. Afirmó que el intelectual “no escolta el espíritu de la tierra, no lo ayuda”, y que Ortega, rodeado por supuestos intelectuales, “no pudo respirar esa atmósfera de la ciudad que tan fuertemente exhalaban las clases populosas, el soplo de la muchedumbre en que se licua el Hombre de Corrientes y Esmeralda”. En pocas palabras, el verdadero hombre argentino no sería un producto de la pampa sino de la

ciudad, y sin embargo, absolutamente imbuido del “espíritu de la tierra”.

Aunque no escribió prácticamente nada en *Sur*, la presencia de Ortega gravitó en los comienzos, y es conocida la anécdota de su intervención para decidir el nombre de la revista. Esa presencia se hizo visible en el número 2, aparecido en 1931, con una extensa nota de Francisco Romero sobre *La rebelión de las masas*. El tema del libro había sido justamente el de las conferencias de 1928 en Buenos Aires. Después de ironizar sobre los viajeros, haciendo de ellos “uno de los artículos de importación que más caros paga el país... del cual la vanidad nacional hace buen consumo”, Romero reconocía que las críticas de Ortega rompían con “las reglas tácitas de ese tráfico habitual”. Pero si bien el tema de la irrupción de las masas era crucial en la problemática de los años treinta, Romero desplazaba el acento hacia una cuestión conexas: la mayor responsabilidad que esa irrupción exige de las minorías. “Las minorías —decía—, que tienen a su cargo proponer programas y fines a la mayoría, tienen que comenzar por reformarse ellas mismas ante ese hecho nuevo que es la presencia desconfiada y constante de la muchedumbre.”

La autoexigencia que se requiere de las minorías rectoras, tal como la había planteado Ortega y Gasset, fue uno de los componentes centrales de la concepción del intelectual que se perfiló en *Sur*. Su resonancia no se agotó allí. Junto con la visión de las “dos Españas”, la “oficial” y la “vital” o auténtica, orientó los planteos más característicos de *Historia de una pasión argentina*, que fueron la necesidad de una “exaltación severa de la vida” (casi un eco de la “severa exigencia” que recomendaba Ortega en la “Carta a un joven argentino...”), y la célebre distinción de Mallea entre la argentina “visible” de las apariencias y la Argentina “invisible” de la realidad profunda.

Cuando en 1955 murió Ortega, *Sur* le dedicó un número de homenaje. Allí Victoria Ocampo reconoció otra deuda de *Sur* para con él: el modelo que le había brindado la *Revista de Occidente*, que Ortega había fundado en 1923 con el propósito de desprovincianizar a España conectándola con Europa y realizando un amplio programa de traducciones.

Divergencias estéticas y políticas

Las ideas estéticas de Ortega no merecieron por entonces ningún análisis en las páginas de *Sur*. Como él mismo advirtió, después de la efervescencia artística de los años iniciales de la primera posguerra, el interés del mundo se había desplazado hacia lo político-social. Pero si bien se mira, algunas de las ideas sobre el arte contemporáneo que había formulado en los años veinte en *La deshumanización del arte*, aunque parecen más deudoras del esteticismo del siglo XIX que de las poéticas de las vanguardias, muestran ciertas coincidencias con las que Borges exponía profusamente en sus ensayos y artículos de los años treinta, cuando planteaba y ejecutaba el rechazo del naturalismo, la autonomía de la obra de arte, la voluntad de forma, la ironía. Sin embargo, ese formidable campeón de la arbitrariedad que fue Borges prefirió ensañarse con las hipótesis de Ortega sobre la novela del siglo XX. Es que esas hipótesis —aflojamiento de la trama, minimización del argumento, interiorización, exploración de psicologías imaginarias— contrariaban su preceptiva sobre el arte narrativo, que además de privilegiar las formas breves, prescribía la construcción rigurosa de la trama y el rechazo del psicologismo.

Hubo episodios aún menos armoniosos. En 1938, a raíz de una intervención en que Ortega condenó la piratería editorial y llamó a los chilenos “araucanos forajidos”, denunciando el “fondo de inmoralidad” del alma de los hispanoamericanos, la Alianza de los Intelectuales de Chile para la Defensa de la Cultura, que presidía Pablo Neruda, le reprochó su “vergonzoso silencio” frente a la guerra civil española. Al año siguiente, en su tercer viaje a la Argentina, Ortega se retiró del Comité de Colaboración de *Sur*. Es probable que haya sido por su desacuerdo con una nota muy ácida publicada en la sección “Calendario” sobre *Sol y Luna*, la revista pro franquista de la derecha católica. Pero más allá de lo anecdótico, episodios como éstos revelan la fuerte polarización que habían introducido en el campo intelectual los acontecimientos políticos europeos. También en 1939 Ortega pronunció un discurso en la celebración del XXV aniversario de la Institución Cultural Española. Por un lado, apoyó sus afirmaciones sobre la indestructible relación entre la Argentina y España en los argumentos que Ibarra, quien lo había precedido en el uso de la palabra, “acaba egregiamente de espumarnos”; por el otro, saludaba efusivamente

al fundador de la Institución Cultural, el médico español republicano Avelino Gutiérrez, una presencia incómoda para los franquistas y los nacionalistas hispanófilos como Ibarguren, que controlaban en esos años la Institución.

El alejamiento de *Sur* parece haber coincidido con un cierto acercamiento de Ortega a los sectores de la derecha nacionalista; ésta a su vez hizo un uso discrecional de las ideas orteguianas sobre las minorías rectoras, para reforzar sus concepciones jerárquicas y autoritarias de la sociedad. En años anteriores, Ortega había sido bastante crítico con los nacionalismos restauradores europeos y con el fascismo, y había denunciado como un rasgo definitorio de este último el menosprecio por la legitimidad. Su actitud frente a los totalitarismos de los años treinta y sus relaciones con el franquismo son todavía hoy objeto de controversias. Lo cierto es que en 1942, cuando Ortega decidió regresar a Europa y finalmente a España, fueron muchos los intelectuales liberales, republicanos y antifascistas que manifestaron su decepción, en algunos casos con virulencia. En ese mismo año Waldo Frank, otro viajero vinculado con *Sur*, fue declarado persona no grata por el gobierno argentino y atacado en Buenos Aires por un comando nacionalista. El contrapunto muestra con bastante claridad algunos de los cambios y enfrentamientos en lo que el mismo Frank llamó “la jungla de pensamiento caótico que caracterizó a esa década”.

Waldo Frank

Victoria Ocampo siempre le asignó a Frank un papel protagónico en la paternidad de *Sur* y le otorgó un reconocimiento invariable pese a las diferencias que los fueron separando, derivadas de la adhesión de Frank al socialismo. Frank publicó asiduamente en *Sur* y su nombre integró todos los consejos y comités de colaboradores de la revista hasta su muerte, en 1966. Además de los ensayos de ideas sobre las cuestiones más candentes del período, escribió algunos artículos notables que dieron a conocer al público de habla española nombres valiosos de la literatura norteamericana contemporánea. Sin embargo, en varias ocasiones Ocampo manifestó sus dudas acerca de que *Sur* fuera lo que Frank había imaginado, y en sus *Memorias* Frank señaló a su vez la distancia entre su proyecto de revista como un organismo cul-

tural que reuniera las partes dispersas de América, y lo que Ocampo había hecho con él.

Resulta algo difícil entender hoy la enorme celebridad que rodeó a Frank en sus visitas a América Latina. Ella se debió tal vez a que América Latina siempre ocupó un papel privilegiado en las fusiones que Frank imaginaba para satisfacer el anhelo, no demasiado original, de recuperar una armonía orgánica que el capitalismo y la máquina habrían destruido en el mundo moderno. Frank proponía salidas que a veces describió como una recuperación de la organicidad medieval y otras llamó “comunismo integral”. En los años treinta, tentó varios caminos para llevarlas a la práctica, entre ellos el acercamiento al Partido Comunista y al sindicalismo estadounidense. En el interior de ese impulso no exento de visos mesiánicos, la unión de los países de la América Hispana y la integración entre las Américas del Norte y del Sur resultaban una pieza indispensable. Los sujetos activos de la realización de esa ver-



Waldo Frank (de pie en el centro), en la Sociedad de Arte Nativo, donde se le ofreció una audición de bailes y cantos autóctonos, noviembre de 1929.

dadera *unio mistica* del mundo hispanoamericano debían ser, a su juicio, los intelectuales.

El protagonismo que Frank asignaba a las minorías intelectuales no se limitaba a este papel encaminado a restaurar unidades cósmicas. También denunció, en una línea paralela a la de otras voces representativas de la época, como la de Julien Benda, la responsabilidad que les tocaba en los males del presente. El título de un artículo publicado en *Sur* lo decía brevemente en 1940: "Nuestra culpa en el fascismo". Sin embargo, su confianza en la benéfica fuerza latente de las minorías culturales nunca disminuyó. En 1942, Frank predicaba en Buenos Aires "la guerra profunda" contra el capitalismo y el mundo moderno, y solía iniciar sus discursos llamando a sus oyentes "hermanos y hermanas"; en esa fecha afirmaba: "Y he aquí lo que digo: que una minoría dentro de una minoría, teniendo de su parte la conciencia del destino del hombre, puede salvarse; y puede salvar el mundo". Estas vetas de su pensamiento generaron respuestas entusiastas en la intelectualidad argentina y latinoamericana.

Un documento invaluable de esas respuestas es el volumen *Waldo Frank in America Hispana*, editado en 1930 por el Instituto de las Españas en los Estados Unidos. Reúne colaboraciones de los intelectuales más destacados del continente y testimonios periodísticos del inmenso éxito que tuvieron las conferencias que Frank pronunció en su gira de 1929. Aunque un prefacio institucional declara explícitamente el carácter no oficial del viaje, el prólogo que abre el libro lo celebra como parte de las estrategias necesarias para acompañar las crecientes inversiones de los Estados Unidos en América Latina con productos culturales destinados a las minorías intelectuales, más refinados que el cine y capaces de revertir la "yankifobia" inducida por escritores como Darío y Rodó. Faltaban unos pocos años para que las políticas del panamericanismo se tornaran más activas, pero de todos modos en 1929 Frank parecía lejos de reunir las condiciones de un emisario ideal, pues apenas terminó de escribir *América hispana* en 1931, cumplió con el rito emblemático de los intelectuales de izquierda de ese período, y viajó a la Unión Soviética. No obstante, como ha puntualizado John King, su viaje a América Latina de 1942 fue financiado por la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, creada por Nelson Rockefeller, en la que trabajó algunos años María Rosa Oliver.

La primera visita de Frank a la Argentina fue promovida por el editor Samuel Glusberg y contó con los auspicios del Instituto Cultural Argentino-Norteamericano y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Los materiales recogidos en la publicación del Instituto de las Españas permiten apreciar la amplitud del arco ideológico que abarcaban las adhesiones a Frank, desde una elogiosa nota de Julio Fingerit publicada en *Criterio*, hasta ensayos de Juan Marinello y de José Carlos Mariátegui, o artículos en *Crítica* y en *La Nación*.

Uno de los textos más sorprendentes de esa recopilación es el poema "A Waldo Frank", de Martínez Estrada, que se había publicado en la revista de Glusberg, *La Vida Literaria*. Una alusión a Walt Whitman, "¡Oh capitán, mi capitán!", abre el poema, y después de esa salutación llama a los escritores a sumarse a un ejército "joven, altruista y veraz" que recorrería toda América en una cruzada que parece animada por un espíritu de regeneración vanguardista. El optimismo de esos versos de 1929 contrasta vividamente con las "espléndidas amarguras", como las calificó Borges, de *Radiografía de la pampa*, de 1933. Sin embargo, las huellas de Frank son evidentes en algunas proposiciones nucleares de Martínez Estrada. Una de ellas es la visión del mestizaje como un factor negativo de resentimiento y de conflicto; otra, la atribución de un efecto de alejamiento de la realidad a la pampa; luego, la chatura de Buenos Aires y la penetración en ella de la violencia de la pampa; por último, cierto aire de familia en la concepción de la conquista como una empresa paradójica. Frank escribió que la conquista fue tributaria de la imaginación fáustica española, una aventura moderna realizada con espíritu medieval; Martínez Estrada, que los barcos de los conquistadores, a medida que avanzaban en el espacio, retrocedían en el tiempo.

A la inversa de lo que ocurre con *Radiografía de la pampa*, las huellas de Frank son borrosas en *El hombre que está solo y espera*. Más precisamente, están borradas. En las primeras ediciones —que fueron seis entre 1931 y 1933—, Scalabrini Ortiz se refería con gran simpatía a Frank: "Waldo Frank quiere catequizarlos [a los norteamericanos]. Waldo Frank es un soñador que se equivocó al nacer. Es un porteño. Es macanudo. ¡Qué lástima! ¡Nos hubiera venido tan bien un hombre así! Y allá no lo van a aprovechar". En ediciones posteriores ese elogio desapareció. No sería ilícito interpretar que esa censura se inscribe en la



Victoria Ocampo con Eduardo Mallea, en Roma, 1934.

línea de agudización de las diferencias políticas que condujo al ataque fascista a Frank en 1942. Más a la inversa aún, y más asombroso: en lo que Frank escribió sobre Buenos Aires y su poder de convertir la mezcla de mestizos y extranjeros en un tipo único, el del porteño, se reconoce con claridad la impronta de las ideas de Scalabrini: “Sin embargo —se lee en *América hispana*, de 1931—, el espíritu transformador de la ciudad es tan poderoso, que Buenos Aires está habitado hoy exclusivamente por porteños”.

Historia de una pasión argentina ofrece el testimonio más extenso del impacto que causaron la presencia y las ideas de Waldo Frank en los ensayos de tema nacional. Mallea dedicó todo un capítulo a relatar su experiencia del encuentro con Frank, y lo que dice haber descubierto entonces roza la revelación. Era la sabiduría de un orden nuevo e incontaminado, oculto bajo la aparente dispersión, que recuperaría el sentido perdido en el caduco orden europeo: “Nuevo sentido, sentido americano”. Tal revelación es-

taba reservada a una elite de elegidos: “El espíritu que iba a mi lado no ignoraba la voluntad que en unos cuantos de nosotros había encendido. Sabía que la moral de un ejército no es, al fin, más que la moral de algunos pocos hombres”. Fuera de la sorpresa que produce volver a encontrar imágenes militares en relación con el mensaje de Frank, lo que se puede comprobar es que en este aspecto, como en tantos otros, *Historia de una pasión argentina* es poco más que el desarrollo del texto más temprano de Mallea, *Conocimiento y expresión de la Argentina*. Allí ya había escrito:

“Os hablo de una elite. [...] Ellos están empeñados en lograr lo que el mundo americano reclama, y es: conocimiento de sí y aplicación de este conocimiento a la integración y armonización de un orden. Para mí, conocimiento no es más que comprensión jerarquizada, y en estos nuevos grupos intelectuales argentinos la noción de un orden que va desde la forma de nuestros ríos hasta la concepción totalitaria de nuestra vida está ya actuando activamente. Estos grupos intelectuales nacen, pues oponiéndose por las vías del espíritu a la confusión propuesta por la pródiga vida física de América”.

La cita revela con claridad que el tópico de la elite aparecía en Mallea asociado a las ideas de orden jerárquico y totalidad cósmica que proponía Frank, y en franca oposición a las hipótesis de Keyserling sobre el peso de una naturaleza desmesurada que ahogaría las manifestaciones espirituales.

Fuera de estas proyecciones en el ensayo de tema nacional, los resultados más palpables de la gira de Frank fueron la fundación de *Sur* y su libro *América hispana*, dos de cuyos capítulos se publicaron en los primeros números de la revista. La aparición de *América hispana* dio lugar a un minucioso estudio de Carlos Alberto Erro sobre los principios de reintegración y el impulso constructivo que animaban el americanismo de Frank, que se publicó en el número 7. En ese mismo número apareció también una nota de Julio Irazusta sobre *Dawn in Russia*, titulada “La experiencia rusa de Waldo Frank”, en la que Irazusta sostenía que el comunismo de Frank provenía de un rechazo del régimen burgués que muchos nacionalistas podían compartir. Lo notable de esa combinación es que revela que todavía era posible, en 1933, que un nacionalista fundador de *La Nueva República* escribiera en *Sur* una

crítica no exenta de elogios a un partidario del comunismo, aunque fuera un partidario bastante peculiar. Muy poco después, en su conferencia *Conocimiento y expresión de la Argentina*, Mallea exponía en Italia, invitado por el Instituto Interuniversitario Fascista di Coltura, las ideas que le había inspirado el comunista Waldo Frank.

Los errores de Keyserling y su verdad

De los tres viajeros cuyas reflexiones fueron tan decisivas para el ensayo de tema nacional, Keyserling fue, en cierto sentido, el menos afortunado. Los excesos de su personalidad desbordante fueron objeto de semblanzas muy críticas, entre ellas el retrato implacable que trazó Mallea en un capítulo de *Historia de una pasión argentina*. Pero ya en *Conocimiento y expresión de la Argentina* se había referido críticamente a la personalidad de Keyserling y a sus ideas. “El filósofo decreta —advertía Mallea— que América del Sur es el continente ciego del planeta.” El error capital de Keyserling, para Mallea, era justamente considerar a América un continente ciego, cuando para él era evidente que se trataba de un continente mudo. La enmienda de ese error le brindó una apoyatura para precisar el proyecto literario enunciado en el título de su conferencia: “La ceguera que se pretende demostrar [en nuestro pueblo] no es otra cosa que su mutismo, y no es la etapa de la imagen, sino la etapa del conocimiento y expresión la que tenemos que vencer. Conocimiento y expresión de nuestra esencia; articulación de nuestro contenido emocional”. Esta lucha por la expresión de una esencia es el drama central que se desarrolla en *Historia de una pasión argentina*, y se reitera en toda la obra de Mallea.

Meditaciones sudamericanas, de Keyserling, apareció en 1933. Pero ya en 1931 *Sur* había publicado su ensayo “Perspectivas sudamericanas”, donde adelantaba las ideas fundamentales a un público más amplio que el que había asistido a sus conferencias de 1929. Los argumentos de Keyserling giraban en torno a la idea del carácter “primordial” del continente americano, instalado todavía en un estadio anterior al descenso del Espíritu, pero pleno de fuerzas germinales que lo convertían en el “más rico en porvenir”. La matriz hegeliana de este planteo podía ser reconocida por el público argentino: en un ensayo, Ortega y Gasset había resumido con

claridad el lugar de América según la filosofía de la historia de Hegel. Ubicada en la prehistoria, América era pura geografía, es decir, naturaleza sin espíritu. Pero como en la concepción hegeliana la naturaleza es algo que va a ser Espíritu, así se explica, concluía Ortega, “que hallemos alojado el futuro en el absoluto pretérito que es la Prehistoria natural [...]”

En el número 8 de *Sur*, publicado en setiembre de 1933, aparecieron dos críticas de las *Meditaciones sudamericanas*, con firmas de Homero Guglielmini y José Luis Romero. Ambas rezuman una ironía que muestra la escasa adhesión de la revista a las tesis de Keyserling. Guglielmini empezaba por aprobar la célebre hipótesis que caracterizaba a Sudamérica como el continente del Tercer Día de la Creación, pero se apresuraba a puntualizar que “en ese día no había animales”, y que por lo tanto resultaría difícil aceptar la condición de hombres-lagartos que Keyserling nos adjudicaba. No obstante, elogió la “clarividencia” con que había percibido Keyserling algunos rasgos de la vida argentina, dado que la distancia que brindan los viajes permite adquirir mejores perspectivas sobre un país, incluyendo el propio. Y concluía: “En este orden de cosas, no podemos menos que conceder la razón a quienes fueron certeros oteadores del alma nacional: Keyserling, Ortega y Gasset y Waldo Frank”.

La crítica de José Luis Romero partía de un reconocimiento similar de la utilidad de la perspectiva de los viajeros, quienes a pesar de sus errores y prejuicios, “nos ayudan a conocernos”. Por sobre las diferencias, notaba Romero, las imágenes de América hasta ahora más habituales coincidían en esperar alguna realización en el futuro, y en considerar que “Sudamérica no vale hoy por sí misma y que no es sino un reflejo de otra cosa, sin carácter y sin contenido esencial”. En este punto, Keyserling “nos honra en forma desusada”, pues “tras de mirarnos fijamente, ha llegado a un resultado inesperado que es menester apresurarse a declarar: [...] nos ha descubierto una esencia”. Esa esencia provendría de las raíces telúricas, y por lo tanto sería en vano buscarla en el plano del Espíritu. Según Keyserling, la ignorancia sudamericana del Espíritu era superior a toda la ciencia europea, “en el mismo sentido que la ignorancia de Sócrates tenía más valor que la omnisciencia de los sofistas”. Romero agregaba con malicia: “No sé por qué, he recordado aquí el libro de Scalabrini Ortiz sobre el hombre de Corrientes y Esmeralda”. Dicho sea de paso, ésta pare-

ce ser la única referencia a *El hombre que está solo y espera* que se puede encontrar en *Sur*.

CÓMO LEYÓ *SUR* EL ENSAYO DE TEMA NACIONAL

La radiografía velada

La primordialidad, el telurismo y la exclusión de la historia que Keyserling atribuyó a América no fueron celebrados en las páginas de *Sur*, pero tuvieron larga repercusión en la ensayística de tema nacional. Ingresaron de inmediato en la amplia enciclopedia con que Martínez Estrada elaboró en 1933 su diagnóstico de los males argentinos en *Radiografía de la pampa*, y le proporcionaron puntos de apoyo para sus propias hipótesis sobre “las leyes inertes de la tierra”, la primordialidad de América (que trasladaba de los tiempos del Génesis en que la había colocado Keyserling a las eras geológicas de la Prehistoria) y la consecuente problematización de la pertenencia a la historia.

La aparición de *Radiografía de la pampa*, que ni siquiera tenía el toque de confianza en el futuro advenimiento de “una cultura absolutamente nueva” con que concluía Keyserling su obra, no mereció ningún comentario en *Sur*. Pero en 1937 el libro obtuvo el Premio Nacional de Literatura; lo notable es que fue entonces cuando se publicó en *Sur* la dura crítica de Bernardo Canal Feijóo titulada “Radiografías fatídicas”. El error capital de esta radiografía, decía Canal Feijóo, provenía de que el autor “toma por signos constitucionales, de una especie de *fatum* orgánico, lo que sólo son, sin lugar a dudas, meros errores de política social y económica”. Y se preguntaba: “¿De dónde ha brotado, de qué complejos ha nacido este extraño libro sin piedad ni esperanza para el destino argentino?”. En realidad, él mismo se respondía, porque ignorando la originalidad de un esfuerzo interpretativo tan asombroso, afirmaba que Martínez Estrada no había inventado ni uno solo de sus argumentos, y que todos ellos provenían de las ideas de Sarmiento, de Alberdi, de Juan Agustín García, de Juan B. Justo, de Ingenieros, de Carlos Octavio Bunge y de otros. “El fatidismo étnico-telúrico tampoco es concepción original —concluía—, porque constituía ya una de las obscuras metafísicas demiúrgicas acomodadas por Keyserling para América.”

Para Canal Feijóo, el texto ejemplar que se debía contraponer a *Radiografía de la pampa* como “expresión auténtica de una nueva voluntad argentina” era *Historia de una pasión argentina*, de Eduardo Mallea. Fue consecuente con esa convicción, y en el número siguiente de *Sur* se publicó su elogio de este libro. La estrategia discursiva de la nota contrasta visiblemente con la desarrollada en la anterior: cuajada de citas, hace de ellas un uso que demuestra la total adhesión de Canal Feijóo a enunciados a los que confería el valor de la verdad. El contrapunto con la crítica a *Radiografía...* se hacía aún más evidente cuando celebraba la forma autobiográfica en que se desplegaba la pasión nacional. Sin inmutarse ni por los excesos de patetismo ni por la escasa sustancia de los hallazgos de Mallea, Canal Feijóo encontraba en *Historia...* una singular eficacia reveladora, gracias a su “espíritu rigurosamente histórico”. Su máxima virtud, concluía con generosa imaginación, era la de concitar un llamado “a la acción social positiva, que sólo necesitaría luego un programa concreto para volcarse en plena sinfonía política hacia la conquista de los claros horizontes que la obra misma deja revelados”. Canal Feijóo no llegó a preocuparse por señalar las tradiciones de pensamiento en que se inscribía la obra de Mallea, y cuánto debía no solamente a Ortega o a Frank, sino también a otros extranjeros ilustres y a unos cuantos “oteadores del alma nacional” autóctonos. Entre ellos, a Manuel Gálvez. Porque *Historia de una pasión argentina* es en buena parte una *remake*, con las huellas de los años treinta, de ese exponente de las perplejidades del Centenario que fue *El diario de Gabriel Quiroga*, desde el sesgo autobiográfico hasta el rechazo de la Argentina transformada por la modernización, numerosos hilos ideológicos, temáticos y formales vinculaban los dos textos.

El juicio de Canal Feijóo sobre



Historia de una pasión argentina, de Eduardo Mallea, 1937.

Mallea era por entonces compartido por otros miembros de *Sur*, como quedó ampliamente demostrado por la variedad y la persistencia de los reconocimientos a su obra. Pero muy pronto se vería que los entusiasmos de Canal Feijóo no habrían de durar. En 1940, cuando apareció *La bahía de silencio*, se preguntó si no se trataría de la “historia novelada” de la pasión argentina, y en tal caso, adónde había ido a parar la pasión. Encontró que los personajes partían hacia “un fin que no existe, que no llega a tener nunca realidad y se dispersa en vanas tentacularidades” y concluyó que “en el sagrado nombre de lo Invisible, arremeten contra la friable estatuilla de lo Visible, sin que por eso se alcance a obtener la visibilidad de lo Invisible”. La excepción a estos vaivenes valorativos parece haber sido Borges, de quien no se conocen elogios a Mallea y sí en cambio una brevísima reseña favorable de *Radiografía de la pampa* publicada en *Crítica*. Lo cierto es que el giro de Canal Feijóo indica la declinación de la estrella de Mallea y el claro ascenso de la de Borges en *Sur*.

DEBATES ESTÉTICOS Y POLÍTICOS EN *SUR*

Además de los ensayos de tema nacional, en las páginas de *Sur* se discutieron temas culturales, estéticos, literarios y políticos que atravesaban el entero campo intelectual, definiendo tendencias y dividiendo posiciones. Junto a las temáticas del americanismo, la literatura nacional, el lenguaje o las nuevas formas narrativas, la agenda de la época introdujo cuestiones como la crítica de los regímenes totalitarios, el futuro de América, la responsabilidad de los intelectuales, la cultura de masas y el papel de las minorías en la defensa de la cultura con una intensidad inédita, derivada de la agudización de los conflictos políticos. Hubo incluso, durante un tiempo, una sección donde se registraron los “Debates sobre temas sociológicos” organizados por la revista, cuyos asuntos estaban invariablemente ligados a estas preocupaciones.

Hacia el escritor argentino y la tradición

Las posiciones acerca de cómo, con qué temas, en qué lenguajes y desde qué tradiciones realizar un arte genuinamente nacional

o americano alimentaron una veta intensamente explorada en *Sur*. En el número 1, el músico suizo Ernest Ansermet, quien integró los consejos de la revista hasta su muerte en 1969, escribió un ensayo titulado “Los problemas del compositor americano”, que responde con increíble oportunidad a esos interrogantes, así como a la cuestión de la capacidad de la mirada del viajero para enriquecer el conocimiento de lo propio.

Ansermet se refería especialmente al problema de la tradición. Los compositores europeos, afirmaba, tienen una relación estrecha con sus tradiciones musicales. Para los americanos, cuya civilización es producto de un trasplante, las primitivas músicas indígenas constituyen un mundo tan ajeno que recurrir a él sólo podría ser un artificio voluntarista. “¡Librenos Dios —concluía— de las óperas o de los poemas sinfónicos sobre temas indios, realizados con estilo wagneriano!” En cuanto a las expresiones nacionales, como las danzas criollas argentinas, conjeturaba que si la civilización americana refrenara los impulsos nacionalistas, “quedarían relegadas al papel de documentos folklóricos” y no ingresarían en la corriente viva de la creación musical. Estos planteos anticipan buena parte de lo que Borges sostuvo unos años después en “El escritor argentino y la tradición”, uno de los ensayos más admirables referidos a esa cuestión.

Borges no dio muestras de haber reparado en esta intervención de Ansermet. Pero sí reparó en las opiniones sobre el género policial de otro colaborador extranjero, Roger Caillois, y a principios de los años cuarenta polemizó duramente con él. Según Borges, en *Le roman policier* Caillois hacía derivar el policial del malestar en la sociedad francesa después de la Revolución. Para él, en cambio, era indiscutible que “la prehistoria del género está en los hábitos mentales... de Edgar Allan Poe, su inventor”. Así, le atribuía un origen exclusivamente literario y anglosajón, y lo transformaba en modelo para sus preceptos sobre la ficción narrativa. Caillois replicó corrigiendo los maliciosos errores de la lectura que Borges había hecho de su libro, y Borges cerró la polémica con una “Observación final”, donde dictaminó que la hipótesis de Caillois no sólo era determinista y chauvinista sino algo todavía peor: “No es errónea —sentenció—; entiendo que es inepta, inverificable”. En realidad, las perspectivas sociológicas de Caillois no eran en absoluto desacertadas, pero estaban muy alejadas de las concepciones que sostenía Borges. Este enfrentamiento interesa sobre todo



Roger Caillois y Pepe Bianco en Villa Ocampo, San Isidro, circa 1940.

por revelar que, en una de sus caras, las poéticas son políticas en el sentido más elemental: una lucha por ocupar espacios de poder en el campo literario. Caillois había osado incursionar en el territorio del policial, que Borges se había anexado. Subrayando la conciencia del artificio, y el rigor constructivo asociado a la forma breve del cuento, lo utilizaba para oponerse a las novelas realistas y psicológicas que encontraba “informes”. En el número de *Sur* donde cerraba la polémica, publicó uno de sus mejores cuentos policiales, “La muerte y la brújula”, en el que cruzó el bajo mundo de delinquentes y policías con los “hábitos mentales” de Poe.

Vacilaciones y definiciones en la política

Roger Caillois fue un viajero especial. Vino a la Argentina a dar unas conferencias en 1939, invitado por Victoria Ocampo. El estallido de la guerra le impidió volver a su país hasta 1945. Escribió un par de ensayos sobre el ámbito pampeano, pero felizmente no se sintió obligado a brindar un diagnóstico sobre América. Hizo algo más original: para mantener una conexión viva con la cultura resistente de la Francia ocupada, obtuvo de Victoria Ocampo recursos para editar una revista, *Lettres Françaises*, y una colección de libros en francés, *La porte étroite*, cuyos beneficios se destinarían al Comité Francés de Socorro de Víctimas de la Guerra. Allí realizó las primeras traducciones de Borges al francés. Cuando regresó a Francia, dirigió la colección *La croix du Sud*, en la que difundió literatura latinoamericana. Se convirtió así en uno de los

pocos viajeros que contribuyeron al propósito implicado en el proyecto de *Sur* de dar a conocer América a los europeos.

El apoyo de *Sur* a esas publicaciones en francés significaba una decidida toma de posición política, a la que no se había llegado sin vacilaciones. En 1934, Victoria Ocampo y Eduardo Mallea dieron en Italia las conferencias que luego se publicarían como *Supremacía del alma y de la sangre* y *Conocimiento y expresión de la Argentina*, invitados por instituciones culturales fascistas. En esa ocasión, Ocampo llegó a obtener una audiencia con Mussolini. Pero a partir 1935, la cuestión de la responsabilidad de las minorías y de los escritores que había despuntado con Leo Ferrero se incrementó visiblemente a partir de un par de artículos de Aldous Huxley y Eduardo Mallea. En ese mismo año, un ensayo de Nicolás Berdiaev, "Personalismo y marxismo", introdujo la temática más decididamente política. Berdiaev compartía el ideal marxista de una sociedad sin clases, pero consideraba que la ausencia de una teoría de la persona conducía al régimen comunista al totalitarismo. Proponía un "socialismo personalista", que a su juicio se correspondía con el verdadero cristianismo. Con estos textos se introdujeron en *Sur* los debates en torno a la gran opción, tan difícil de resolver para los liberales de la época, entre comunismo y fascismo.

Las posiciones de la revista se orientaron en dos direcciones principales: la defensa de la cultura como un valor superior y la defensa de la persona como garantía de las libertades. La primera de esas líneas estuvo representada principalmente por figuras como Huxley, Bernard Shaw, Benda, Leo y Guglielmo Ferrero, y en 1938 se le dedicó un número especial titulado "Defensa de la inteligencia", en el que, además de los colaboradores extranjeros, escribieron Ocampo, Mallea y Canal Feijóo. La segunda se apoyó en doctrinas de filiación católica, como el personalismo de Emmanuel Mounier y el humanismo integral de Jacques Maritain.

La irrupción de la política en *Sur* y su alineación cada vez más explícita contra los regímenes totalitarios encontró una fuerte motivación en la guerra civil española. Los miembros de *Sur* no fueron, por cierto, brigadistas, y no participaron en los congresos internacionales de apoyo a la causa republicana. Pero la revista difundió con perseverancia un ideario totalmente opuesto al de regímenes totalitarios integristas como el franquismo, que eran apoyados por la Iglesia Católica argentina. En 1936 se publicó la

“Carta sobre la independencia” de Maritain, que proponía una política “auténticamente cristiana”, respetuosa de la persona, tendiente a la eliminación de las divisiones de clase, pero no menos opuesta a la “concepción comunista-atea que a la concepción totalitaria o fascista de la vida social”.

Sumado a la condena del antisemitismo, este ideario resultó intolerable para las jerarquías eclesiásticas y sus órganos de difusión cultural y doctrinaria. En 1937, el sacerdote Julio Menvielle publicó en *Criterio* un artículo virulento contra Maritain, al que llamó “el filósofo abogado de los rojos”, en el que atacó también a *Sur*, al referirse a “sus amigos de la Sociedad Hebraica y del Pen Club, los judaizantes y comunoides de *Sur* y la pasquinería porteña”. Ataques como éste dieron lugar a la publicación de la “Posición de *Sur*”. Leída hoy, puede parecer difusa. Leída sobre el trasfondo de la alianza que ocupaba el poder en esos años, de la que formaban parte sectores militares y clericales, no lo era tanto. Por



Comida del Pen Club en el Plaza Hotel. De pie, primero desde la izquierda, Córdova Iturburu y Eduardo Mallea; sentados, segundo de la izquierda, Juan Pablo Echagüe, Emilia Bertolé, Alfonsina Storni, setiembre de 1930.

si fuera poco, en el mismo número se publicaron dos artículos muy contundentes: “Católicos fascistas y católicos personalistas”, del católico no integrista Rafael Pividal, y “Sobre la guerra santa”, un ensayo de Jacques Maritain que negaba la justificación de la guerra “en nombre de Cristo Rey”, que esgrimían los católicos franquistas, con palabras que aún hoy conservan una conmovedora vigencia:

“En nombre de la guerra santa, el terror blanco se realiza bajo los signos y estandartes de la religión, la cruz de Jesucristo brilla como un símbolo de guerra sobre la agonía de los fusilados; y ni el corazón del hombre ni su historia pueden soportarlo”.

Presencia del antisemitismo: del Congreso del Pen Club a la ficción de la conspiración judía

¿Cómo se había llegado a una situación en que algunos católicos eran vilipendiados en publicaciones católicas y publicados por una revista de orientación liberal? La guerra civil española inició la liquidación de aquellos espacios de “convivencia civilizada” como el *Sur* evocado por Irazusta, y fue el partearguas que condujo a una redistribución de posiciones en el campo literario y a la formación de nuevos agrupamientos. Pero existía otro motivo previo de divergencias: el antisemitismo. Ésa fue la causa principal de los enfrentamientos ocurridos en el XIV Congreso Internacional de los Pen Clubs que se realizó en Buenos Aires en setiembre de 1936. *Sur* dedicó un número a los escritores que asistirían al congreso, y en esas páginas se puede leer una excelente nota de Ernesto Palacio sobre Ungaretti, con su traducción de dos poemas, un comentario de Irazusta sobre la obra de los integrantes de la delegación inglesa y una presentación que el sacerdote Leonardo Castellani hacía de Maritain, en términos que, aunque insinúan alguna divergencia, eran todavía elogiosos. La delegación argentina al congreso estaba encabezada por Victoria Ocampo y Carlos Ibarguren, y la integraban además Eduardo Mallea, Manuel Gálvez y Antonio Aíta, un “operador cultural” del nacionalismo. El congreso promovió una declaración contra el antisemitismo que Maritain suscribió, pero

que no firmaron ni Ibarguren ni otros católicos nacionalistas.

La extensa versión del Congreso que da Manuel Gálvez en sus *Recuerdos de la vida literaria* abunda en pormenores, ilustrativos por su misma parcialidad, acerca de los trabajos de preparación y de los choques que se produjeron a raíz de las denuncias de persecución a judíos y a intelectuales antifascistas bajo los gobiernos alemán e italiano. Los principales protagonistas de las polémicas fueron Maritain, Jules Romains y Emil Ludwig, con el apoyo de Benjamín Crémieux y Stefan Zweig, por un lado, y Ungaretti y Marinetti por el otro. Algunas sesiones fueron especialmente tumultuosas, debido sobre todo a la participación de un público que, según Gálvez, “en su mayoría estaba formado por izquierdistas, los más de ellos estudiantes. También puede asegurarse que casi todos eran judíos”.

De acuerdo con el relato de Gálvez, los escritores europeos “se agitaban, se insultaban mutuamente, lloraban, se amenazaban”, mientras que los hispanoamericanos, en cambio, se mantenían serenos. Desde ya, esto no significa que el antisemitismo no existiera entre nosotros. Por el contrario, su presencia se puede rastrear en la literatura argentina desde el siglo XIX. Alrededor de los años treinta era sistemáticamente cultivado por diversos grupos nacionalistas que lo difundían en sus publicaciones, y afloraba hasta en textos bien alejados de esas formaciones, como algunas *Aguafuertes* de Arlt.

El despliegue más acabado de los tópicos del antisemitismo en la ficción está en *El Kahal y Oro*, una novela en dos volúmenes de Hugo Wast, seudónimo de Gustavo Martínez Zuviría, publicada en 1936, cuyo argumento gira en torno al conocido mito de la gran conspiración urdida por los judíos para apoderarse del mundo entero. El Kahal es el nombre de una sociedad secreta de banqueros especuladores que se reúne en las sinagogas para llevar adelante ese plan. Su arma más poderosa es “la doctrina del oro”, una mentira económica con que los judíos arruinan a las naciones. La “serpiente judía” es derrotada con un ardid preparado por un noble banquero argentino, con el apoyo de un no menos noble presidente de la República, utilizando técnicas que combinan la alquimia y la ciencia ficción. En una de las escenas finales, los derrotados miembros del Kahal se prometen conquistar Buenos Aires en 1950.

Dada la ausencia de valores literarios en la obra de Wast, esta novela no merecería ser recordada si no fuera por dos razones:

COMOSE CUMPLE EL PLAN JUDIO

DESDE muchos siglos atrás, los judíos realizan en el mundo un plan de dominación universal, cuyo éxito radica en su ignorancia por los cristianos. El secreto es, pues, su mejor aliado. Pero el secreto es siempre difícil de guardar. A veces la necesidad misma exige violarlo, siquiera sea ocasionalmente, en un discurso, en un escrito, en una exposición cualquiera de propaganda. Esto ha ocurrido con frecuencia a los judíos, a través de los años y se conocen de ellos palabras que los condenan y que bastarían para que, en un país bien organizado y con el instinto de la defensa despierto, y no embobado como entre nosotros, los gobiernos decretasen la prohibición absoluta de la inmigración.

CLARO está que con documentos judíos sus autores son fácilmente descubiertos, aunque en cada país atacado los judíos no sólo activan, con los gobiernos, la creación de todos modos, especialmente mediante el silencio de la prensa y la de los sectores de líderes, cuando ellos mismos, con abundancia el precio de su traición.

Quiza como, por ejemplo, el discurso de aquel gran rabino que pidió hace más de 70 años sir John Lubbock y que otro rabino repetido para aconsejar a un revolucionario, en

1914, en el Congreso de Leimborg? Lo han leído alguna vez con estas palabras y ya lo han olvidado. Nosotros vamos a poner en el momento del período, fragmentariamente, pero testualmente, como su lectura servirá para abrir los ojos sobre los juicios que nos amosamos y para explicar tantas cosas extravagantes como se ven en la actualidad. Ese gran rabino expresó en sus discursos las especies más importantes de la táctica judía para dominar al mundo. He aquí lo que dijo:

DIEZ y ocho siglos han pertenecido a nuestros enemigos; el siglo actual y los venideros nos deben pertenecer a nosotros, mejor de Israel y sólo pertenecerán seguramente a nosotros.

EL ORO

CUANDO nos hacemos hecho los únicos poseedores de todo el oro de la tierra, el verdadero poder pasará a nuestras manos... "El oro, la más grande potencia de la tierra... el oro, que es la

fuerza, la recompensa, el instrumento de todo poder, que es todo lo que el hombre teme y lo que desea; he ahí el único misterio, la ciencia más profunda que rige la inteligencia del mundo. ¡Ese será el porvenir!"

EL CAPITALISMO INTERNACIONAL

ECEMOS una mirada sobre el estado material de Europa—decía este gran rabino en 1890— y analicemos los sucesos que han sabido procurarse los israelitas a partir del siglo actual, por el solo hecho de saber conseguir entre sus manos inmensas capitales de los que pueden disponer en todo momento... En París, Londres, Viena, Berlín, Amsterdam, Hamburgo, Roma, Nápoles etc. etc. en manos de los Rothschild; siempre son los judíos los amos de la situación financiera porque disponen de miles de millones, sin contar que en cada localidad de segundo y de tercer orden, ellos son siempre los que manejan el dinero en circulación y ninguna operación financiera, ningún trabajo importante podría hacerse sin la ayuda de los hijos de Israel.

LOS EMPRESTITOS Y LA BOLSA - LOS FERROCARRILES

LA Bolsa cotiza y regula como todas (los empréstitos hechos por los Estados y nosotros mismos en gran parte, los dueños de las Bolsas de cada país, las plazas. Por consiguiente, facilitar cada vez más y más estos empréstitos

nos es a lo que tenemos que aplicar, a fin de que podamos los reguladores de todos los valores, y siempre que podamos, tenemos en mercado de los capitales que proporcionamos, la explotación de los ferrocarriles..."

LAS CLASES TRABAJADORAS

BAJO el pretexto de que tenemos que ayudar a las clases trabajadoras, es necesario que los grandes revolucionarios sufran todo el peso de los impuestos y cuando las propiedades hayan pasado a nuestras manos, todo el trabajo del proletariado cristiano será para nosotros fuente de nuevos beneficios.

LAS QUIEBRAS

CON el pretexto que uno tiene el derecho de pedir que los impuestos sean más altos, de simular de los cristianos, para lo que él mismo obtiene, lo que debe ser el objeto de nuestros inmensos trabajos, es una ley

los menos se crea para castigar los alicientes. Conseguiéramos así para nosotros hacer una ley de oro con estos más ricos que la fuerza hace tiempo las manos de Cristóbal..."

LOS CASAMIENTOS ARISTOCRATICOS

DIFÍCIL favorecer los casamientos entre israelitas y cristianos. "La mezcla de cierta cantidad de sangre impura en nuestra raza, elegida por Dios, no puede ser permitida y nosotros Dios nos proporcionará con esos casamientos uniones con familias cristianas que tengan algún ascendiente y poder. A cambio del dinero que nosotros les damos, es justo que nos den un equivalente en influencia sobre lo que nos rodea. El emparejamiento con cristianos, no nos aparta del rumbo que nos hemos trazado; al contrario, con un poco de maña, nos proporcionará ser felices de un destino."

LA PRENSA

SI el oro es la potencia potencia de este mundo, la segunda, sin disputa es la Prensa. Pero ¿qué puede la segunda sin la primera? Como no podríamos realizar la que anteriormente dijimos con sin la ayuda de la Prensa, es preciso que los que nos ocupamos de la dirección de los diarios en cada país, la potencia del oro, la habilidad en la dirección de medios para manejar los capitales de los sectores de la opinión y los demás el imperio sobre las masas."

HAY QUE DESTRUIRLO TODO

UNA vez eliminados absolutos de la Prensa, podemos cambiar las ideas sobre el honor, sobre la virtud, la rectitud de conciencia, y dar así el primer golpe a una institución hasta ahora sacrosanta, la familia, y consumir su destrucción.

"Podremos extirpar las creencias y la fe en todo aquello en que nuestros enemigos los cristianos han creído hasta este momento y, por consiguiente, en ellos sus tradiciones, ilusiones y sueños, y dar así el primer golpe a una institución hasta ahora sacrosanta, la familia, y consumir su destrucción."

ESTE es el plan que desde hace un siglo vienen cumpliendo los judíos en el mundo. Su primer objetivo es la Argentina, seguida por Chile y en 1890, para crear un Estado judío. Escribiendo de Europa, apresuran a estas horas la invasión del país. Son los representantes de todas las naciones que en pocos años han estado de controlando por nuestros países desorganizados.

Ya tienen el oro. El capital. Han, los grandes empresas son

judíos desde los ferrocarriles, los frigoríficos, Union y Bar, la Chile, el Anglo Argentina, etc. etc. La banca patria ha perdido el país, mediante la política de los empréstitos basados en la Bolsa, donde especulan especulativamente. Esplotan y sublevar a la clase trabajadora. Quieren todos ellos en número que aceda, crean sus hijos con los aristócratas. Han subornado con avies a la prensa grande y chica. Mandan a nuestros gobiernos,

ROSARINO NO SE FIE DE LOS NOMBRES...

NO se fie de los nombres. Los judíos, como siempre son "perseguidos", utilizan el "camouflage" para disfrazar sus actividades. Por ejemplo, en Rosario trabaja fuerte una institución bancaria. Una institución bancaria en el 99 o 0 de los casos, es judía. En el otro 1 o 0, es lo mismo que si lo fuera. Pero la institución bancaria a la que nos referimos, rosarino, es 100 o 0 judía. Se llama Banco Cooperativo Limitado. ¿Lindo e inocente nombre, verdad?

Bueno. El Banco Cooperativo Limitado, con sede en la calle San Luis 1270, al 1372. Tiene el siguiente conspicuo directorio:

Presidente, Samuel Fleishmann; vice, Samuel Yarsky; tesorero, Adolfo Portnoy; pro. Selig Banker; secretario, M a r e s Tokman; pro. Naum Kahan; director titular, Marcos Nudenberg; vocales: Bernardo Pollak, Alejandro Kahan, Moisés Dubry y Samuel Charne; director suplente, David Lein; síndico titular, Luis Nisenboim; síndico suplente, Samuel R. Levit.



Reacción positiva

CUANDO llegaron los primeros judíos al país, los criollos reaccionaron, como han reaccionado siempre que se lo permitieron, frente a las invasiones enemigas: matando.

A "gauchos mataderos" atribuyen los escribas judíos, la degollación de Gerson Gerchunoff, la familia Waisman, Samuel Hurwitz y Jaime Reitch.

Nosotros ahoramos esa época en que, mataderos o no, había gauchos donde ahora hay judío.

Buenos socios

Cuando se habla de los semitas en las tertulias de salón, siempre se apela a ciertas citas fabricadas en la ocasión.

Señorones de largos oídos y de cuerda de muchos hilos sentencian: "Oh... son buenos socios... Hay que dejarlos más tranquilos".

Hay que dejarlos, sí, de acuerdo. Pero los socios circunscisos se llevarán al fin el cerdo, veiate, y la casa de tres pisos.

John Financía

Nota antisemita, La Maroma, diciembre de 1939.

Wast era uno de los escritores que más vendía en esos años, el único, según Gálvez, que vivía de lo que ganaba con sus libros, y esos libros, además de ser populares en cuanto al éxito de ventas, eran lectura cotidiana en las escuelas religiosas. Por otra parte, los mismos delirios se leían en muchas publicaciones católicas y nacionalistas, sin el atenuante de pertenecer a la ficción. El periodismo, la publicidad, la moda, el cine, la opinión pública, el laicismo, el sistema electoral y la democracia parlamentaria, en suma, todos los signos liberales de la modernización política y cultural, eran los objetos favoritos de denigración en esas publicaciones. Las ficciones de Wast no hacían sino repetir y reforzar ese discurso. Por si lo ficcional no fuera suficiente, *El Kahal y Oro* abundan en largas tiradas de citas que sin demasiado refinamiento buscan subrayar los enunciados ideológicos y conferir una dimensión simbólica a las acciones. Algunas provienen del texto bíblico y de otros libros religiosos; otras, de los *Protocolos de los Sabios de Sión* y demás libelos apócrifos que difundían el antisemitismo.

La novela de Wast narra además otras historias que sería ilustrativo analizar con detalle: historias de cómo se hacen ricos los judíos, historias de traiciones y de engaños, historias de amores y de conversiones religiosas. Hacia el final, la conversión del protagonista, y con ella la resolución del conflicto amoroso, resulta posible gracias a la irrupción de un acontecimiento tan extraordinario que el capítulo lleva por título "Lo que jamás los ojos vieron". Era el Congreso Eucarístico Internacional de 1934, "aquella serie de días milagrosos que no se olvidarán". En una noche aún más milagrosa, Mauricio Kohen, quien por suerte para él era sólo a medias judío y cuando niño había sido bautizado, es "traspasado por el ardiente dardo de la gracia", y se convierte al catolicismo.

El Congreso Eucarístico de 1934 escenificó el acontecimiento más promisorio para la alianza entre gobierno, ejército y clero que se anudó en esa década, y la ceremonia de la comunión de los hombres promovió un importante acercamiento masculino a la Iglesia. Más que la fe religiosa, lo que se intensificó fue la asociación imaginaria entre catolicismo e identidad nacional. A ese fin contribuía la presencia de muchos católicos nacionalistas en las instituciones culturales oficiales: Ibarguren, por ejemplo, era presidente de la Academia Argentina de Letras y Martínez Zuviría, director de la Biblioteca Nacional.

En *Recuerdos de la vida literaria* Gálvez dice haberse adelanta-

do a Wast con el tema de las conversiones en el Congreso Eucarístico. Cuenta que en 1935 escribió *La noche toca a su fin*. La acción de esa novela transcurre enteramente en la noche de las comuniones masculinas, cuyo impacto hace que toda una banda de periodistas semidelincuentes, que bien podían pertenecer al diario *Crítica*, uno de los más denigrados en las publicaciones de la derecha católica nacionalista, se arrepientan, se confiesen y comulguen. En esta novela se denuncia otra sociedad secreta: la masonería, origen de muchos males según los católicos nacionalistas. El protagonista, por ser hijo de un masón, ni siquiera ha sido bautizado y su abrumadora inmoralidad se debe, con toda evidencia, a la carencia de educación religiosa. Pero ante el espectáculo imponente de la comunión multitudinaria, recibe la iluminación de la fe. La resolución de la trama es perfectamente acorde con la condensación temporal que exige el verosímil realista, tal como Gálvez lo practicaba: en la “noche milagrosa”, el crápula ya cuarentón se convierte, recibe el bautismo, escribe toda su historia y decide hacerse cura.

El liberalismo de *Sur* y sus límites

Sur ni siquiera mencionó el Congreso Eucarístico. Aunque en sus páginas publicaron católicos de diversas tendencias, el laicismo de la revista era sorprendente. Conviene recordar que sus posiciones se recortaban sobre el fondo espeso de discursos como los mencionados y de otras actividades menos piadosas y artísticas practicadas por los nacionalistas católicos desde instituciones culturales oficiales y otros espacios vinculados al poder. En cuanto a su liberalismo, los límites se hacen evidentes cuando se percibe que la revista no se pronunció explícitamente contra las prácticas políticas del fraude y la represión de las libertades públicas en el país, ni siquiera cuando escritores de tendencias tan diversas como Ricardo Rojas o Raúl González Tuñón fueron perseguidos y encarcelados. No procedían así en sus países los escritores extranjeros a quienes traducían con persistencia. No obstante, publicaron numerosos libros, artículos, notas y textos de ficción que indicaban claramente la divergencia con las posiciones representadas en la política oficial. A ellos se sumó, desde 1937, el “Calendario”, una sección miscelánea donde, junto a las permanentes denuncias del racismo y de otras atrocidades cometidas por los regímenes

totalitarios, solían aparecer breves críticas mordaces sobre la situación argentina. En el registro ficcional, estas posiciones se complementaron con los libros que Bioy Casares y Borges escribieron juntos con los seudónimos de H. Bustos Domecq y B. Suárez Lynch: *Seis problemas para don Isidro Parodi*, de 1942; *Dos fantasías memorables*, de 1946 y *Un modelo para la muerte*, aparecido en el mismo año, cuya publicación se inició en *Sur*. Casi todos esos textos satirizaron con humor corrosivo el acercamiento entre Iglesia, ejército y nacionalismo pro fascista que la guerra y el golpe de 1943 hicieron aún más estrecho.

LAS TRANSFORMACIONES EN LA NARRATIVA Y LO QUE *SUR* NO LEYÓ

Bioy Casares y Borges, en los cuentos que escribieron juntos, extremaron las prescripciones sobre la ficción narrativa que habían desplegado en sus artículos, polémicas y prólogos de los años treinta, atacando la representación realista y la introspección psicológica. En su lugar, promovieron el poder de la invención, la perfección de las tramas y una causalidad que Borges no vaciló en llamar “mágica”. Sus resultados más admirables fueron los primeros cuentos de Silvina Ocampo, los de Borges, y *La invención de Morel*, cuyo prólogo, escrito por Borges, fue poco menos que un manifiesto de esa poética de la narración.

Pese a esos logros evidentes, en 1944 Borges aprovechó la aparición de *Las ratas*, de José Bianco, para trazar un cuadro demoleedor de la novela nacional. Dijo que esa primera novela de Bianco permitía esperar “una renovación de la novelística del país, tan abatida por el melancólico influjo, por la mera verosimilitud sin invención de los Payró y los Gálvez”. Las debilidades que Borges encontraba se podrían explicar si se tienen en cuenta la inexistencia de una tradición novelística vigorosa y la aparición notablemente tardía del realismo en la Argentina, en comparación con los desarrollos de la novela europea y norteamericana del siglo XIX. Pero es evidente que no eran ya los Payró y los Gálvez, como Borges arbitrariamente sugería, quienes ocupaban una posición dominante en la narrativa de los tempranos años cuarenta.

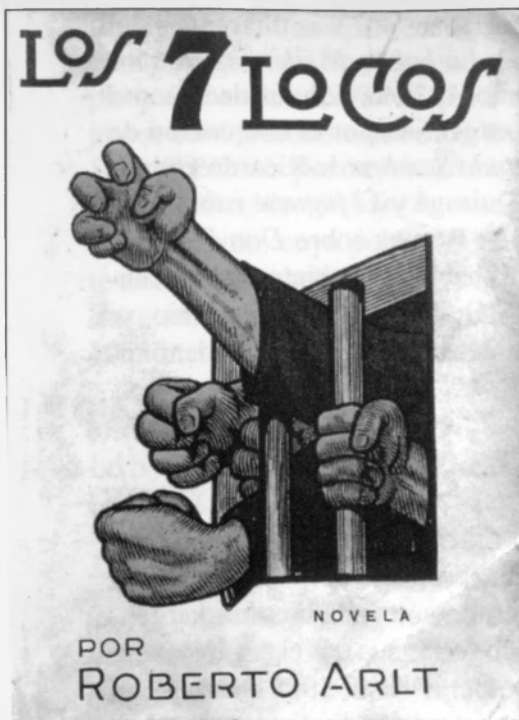
Los cambios pueden registrarse con claridad si se consideran las situaciones de 1926 y de 1940. Como se ha visto, en 1940

aparecieron dos novelas que se apartaban, por vías diferentes, del paradigma del realismo tradicional: *La bahía de silencio* y *La invención de Morel*. En el otro extremo, 1926 ha sido señalado como el *annus mirabilis* de la narrativa argentina por la conjunción de tres títulos renovadores: *Don Segundo Sombra* de Ricardo Güiraldes, *Los desterrados* de Horacio Quiroga y *El juguete rabioso* de Roberto Arlt. Aunque los juicios de Borges sobre *Don Segundo Sombra* fueron variables, Güiraldes había sido objeto de homenaje en los primeros números de *Sur*. Quiroga y Arlt, en cambio, se ubicaban en ese sector del campo literario que se podría denominar “lo que *Sur* no leyó”.

Las transgresiones de Arlt

A tal punto no los leyó, que Bianco pudo decir en *Sur*, hacia 1936, que la ciudad no había ingresado aún en la literatura argentina, cuando Arlt ya había publicado todas sus novelas y los cuentos de *El jorobadito*. Hubo que esperar hasta 1953 para que el nombre de Arlt llegara a *Sur*, traído por Sebrelli, un integrante de *Contorno*. No hay duda de que estas omisiones refieren tanto a las divergencias estéticas como a las diferentes posiciones en el campo literario, vinculadas con la desigualdad de los orígenes sociales y la formación cultural de los escritores. Pero se corresponden sobre todo a la diferencia que introducían las novelas de Arlt en el horizonte de la narrativa de esos años.

¿En qué radicaba esa diferencia? Buena parte de los materiales y procedimientos de Arlt respondían a convenciones propias del realismo moderno: un verosímil asentado en lenguajes, escenarios, temporalidades, personajes y conflictos cuyos referentes son reconocibles para el lector y asimilables a su experiencia. La impronta realista se reforzaba con la representación, que Arlt compartía con los escritores de Boedo, de sectores sociales sumergidos y figuras marginales del mundo urbano. Pero ese realismo no era ni el de los boedistas ni el de “los Payró y los Gálvez”. Eludía el miserabilismo del primero y reformulaba el de los segundos con un toque de desmesura. Unos factores extraños, vinculados con fantasías de transgresión en todos los órdenes de la moral social, introducían nuevas figuras y espacios, formas atípicas de la metáfora y distorsiones del orden temporal-causal, transformando la



Los siete locos, de Roberto Arlt, 1929.

composición del relato. Más allá de los desajustes léxicos y sintácticos de su escritura, las transgresiones de Arlt afectaban los modos habituales de la representación realista.

Esto es lo que *Sur* no leyó. Pero tampoco lo leyó Boedo: es conocido el rechazo de Castelnuovo por las primeras novelas de Arlt. Ante la incomodidad que provocaban esos libros atípicos, el mismo Arlt parece haber sentido necesidad de explicarse, y lo hizo en varias ocasiones. La más conocida es la del prólogo a *Los lanzallamas*, de 1931, una orgullosa defensa de la “prepotencia de trabajo” y la violencia del “cross a la mandíbula” por sobre los “bordados” del estilo para él inalcanzables.

Menos conocida es la reseña de *Los siete locos*, que escribió hacia 1929 en una de sus *Aguafuertes*. El desparpajo con que justificó esa publicidad tan poco encubierta se cruzaba con un evidente esfuerzo de autocomprensión. Arlt explicaba a los posibles lectores (y compradores) del libro la acción y el argumento, y distinguía entre el núcleo que se constituye en torno a la figura de Erdosain y la línea argumental que se despliega alrededor del Astrólogo y la Sociedad Secreta. Señalaba la ambigüedad de los personajes, individuos “canallas y tristes... viles y soñadores simultáneamente”. Y advertía que en la novela coexistían tres aspectos: “uno psicológico, otro policial y otro de fantasía”. Los dos últimos le hubieran gustado a Borges. Pero Arlt ponía el acento sobre el primero, sobre la “vida interior” de los personajes: no interesa “lo delincuente”, decía, sino “la angustia”. Y alardeaba: “Sobre trescientas cincuenta páginas, sólo cien son de acción”. Lo curioso es que al mismo tiempo que era capaz de intuir lo que había de novedoso en esa mezcla, Arlt se sintió obligado a ampa-

rarse en el verosímil realista. Sostuvo que los personajes eran “individuos y mujeres de esta ciudad, a quienes yo he conocido”, y que un cable llegado de Europa probaba que la Sociedad Secreta no era “un invento absurdo”. Utilizaba un argumento remanido: “No he hecho más que reproducir un estado de anarquismo misterioso latente en el seno de todo desorientado o locoide”. Con eso, podía tomar prudente distancia de sus inquietantes personajes: “A mí como autor esos individuos no me son simpáticos. Pero los he tratado”. En el contexto de la aguafuerte estos argumentos, más que reiterar las fórmulas ya desgastadas por los autores realistas, expresan incertidumbre ante la emergencia de un imaginario que corroía al realismo tradicional.

El otro realismo de Arlt

Después de *El amor brujo*, que fue publicado en 1932, Arlt escribió menos narrativa y se volcó al teatro. Sus obras, casi todas estrenadas en el Teatro del Pueblo, intensificaron los aspectos “de fantasía” de su mundo imaginario. Hacia el final de la década, intervino con varias aguafuertes en los debates sobre la novela que recorrían el campo literario nacional. Visiblemente presionado por las exigencias del género dramático, y también conmocionado por la guerra, condenó la falta de dinamismo de las novelas psicológicas, reclamó la aventura y enfatizó la necesidad de acción en la novela contemporánea. Más que renegar del realismo, le imprimió una vuelta de tuerca: consideró que los descubrimientos revolucionarios de las ciencias físicas constituían la “realidad maravillosa” que requería la novela de aventuras. Y afirmó que los héroes mediocres, propios del realismo tradicional, eran “una peste” en la novela contemporánea, totalmente inadecuados “en el preciso momento en que el planeta es conmovido por la acción de héroes negros, rojos y blancos como en la astral combinación de la magia”. En suma, postuló un realismo de excesos, apto para unos tiempos de violentas conmociones, que exigían acción dramática y héroes poderosos.

En la aguafuerte de 1929 Arlt había justificado la invención de los “locoides” y de la Sociedad Secreta apelando a un principio de la mimesis realista: el arte no hace sino imitar la vida. Pero al reeditar *Los siete locos* después del golpe, agregó una “nota del

comentador” que operaba a la inversa. Allí aclaraba que la novela había sido escrita entre 1928 y 1929 y que por lo tanto las palabras de un personaje, el Mayor, no podían haber sido “sugeridas por el movimiento revolucionario del 6 de septiembre de 1930”. Por el contrario, hizo notar que eran las declaraciones de los “revolucionarios” las que curiosamente habían venido a coincidir con las de su personaje. Esa estrategia apuntaba a conferir a su ficción un carácter casi profético. En la novela, el militarismo y el antiliberalismo del Mayor se complementaban con la exaltación de la violencia, el autoritarismo y otros ingredientes antidemocráticos de cuño fascista que se distribuían en los discursos de otros personajes, especialmente el Astrólogo. Pero así como no se necesitaba un cable del exterior para legitimar la invención de la Sociedad Secreta, tampoco se requerían dones proféticos para incrustar esos discursos en una novela de 1929. Para lo primero, bastaba

tener en cuenta la abundancia de asociaciones ligadas al ocultismo y la teosofía, que Arlt conocía muy bien, como lo prueba su primer texto semificcional y semiperiodístico, *Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires*, de 1920. Para lo segundo, era suficiente leer los artículos que desde mediados de los años veinte Leopoldo Lugones venía publicando asiduamente en *La Nación*, pródigos en la prédica antiliberal del nacionalismo.

Sobre la base de esos artículos, Lugones compuso dos libros que publicó en 1930, ambos antes del golpe: *La Patria fuerte* y *La grande Argentina*. En este último hizo un esfuerzo por sistematizar un programa de gobierno destinado a construir una nación poderosa. Imaginó una organización social corporativa



La grande Argentina, de Leopoldo Lugones, 1930.

y jerárquica, en cuya cúspide colocaba a los militares. Con sus comisiones por ramas de actividad, sus jefes y sus directores, *La grande Argentina* de Lugones tiene un diseño que se parece asombrosamente al que propone el Astrólogo en *Los siete locos*. Ambos textos abrevaban en el mismo terreno ideológico; ambos trabajaban con restos dispersos del discurso fascista y de saberes técnicos y seudocientíficos que circulaban en diversos sectores del campo intelectual. Fascismo y ocultismo se cruzaban en Lugones, y volvieron a cruzarse en las ficciones de Arlt. Pero el Astrólogo hacía con esa mezcla una farsa subversiva destinada a los marginales: “Quiero ser manager de locos, de los innumerables genios apócrifos, de los desequilibrados que tienen entrada en los centros espiritistas y bolcheviques. [...] Literatos de mostrador, inventores de barrio, profetas de parroquia, políticos de café y filósofos de centros recreativos [...]”. Lugones, en cambio, componía la imagen del escritor como legislador e imaginaba para sí la función de guía intelectual de los jefes del futuro poder militar. En este aspecto, *La grande Argentina* puede leerse como el reverso de *Los siete locos*.

Las tentaciones del escritor nacionalista

La prédica antiliberal que emprendió Lugones desde los años veinte se inscribía en un clima de ideas cuyos alcances se extendían más allá de las fronteras de la nación. Pero la crisis económica y el golpe de 1930 confirieron a ese ideario una actualidad renovada. Lugones no fue el único que se sintió llamado a cumplir una misión que excedía los límites de la función crítica; en 1933, Manuel Gálvez empezó a publicar en *La Nación* una serie de artículos cuyo título común, *Este pueblo necesita...*, señala la tentación de incidir sobre el poder que los tiempos suscitaban en los intelectuales nacionalistas.

Para esa fecha Gálvez tenía una larga carrera literaria. Su obra narrativa se inscribía en los marcos de un realismo simplista, a esa altura ya desgastados por una reiteración acrítica que jamás problematizó. En los años treinta se volcó a las biografías y produjo además gran cantidad de artículos sobre temas literarios, religiosos y políticos, que publicaba asiduamente en *La Nación*, en *Criterio* y en otras revistas de orientación católica o directamente

fascista, como *Il Mattino d'Italia*. Desarrollaba además una intensa actividad institucional, gremial y editorial, y era por lo tanto una presencia persistente en el campo literario.

La coyuntura histórica despertó en Gálvez el deseo de reflexionar sobre las razones de la crisis y las falencias de la nación. Según relata en *Recuerdos de la vida literaria*, en 1933 proyectó una serie de diez artículos “de carácter nacionalista decidido” y lo comentó con Mallea, por entonces director del suplemento dominical de *La Nación*, quien se interesó muchísimo en el plan y promovió su publicación. Fue así como, aproximadamente cada quince días, los lectores —y las autoridades— fueron advertidos de las carencias que habían llevado a “este pueblo” a un estado de prostración moral: aquí faltaban juventud, patriotismo, sentido heroico de la vida, moral, ideales, orden, disciplina... El sesgo fascista de esos artículos era excesivo, hasta para un diario que había difundido durante años la prédica antiliberal de Lugones, y la publicación se suspendió. Al año siguiente, Gálvez los reunió en un volumen, al que agregó notas explicativas y un apéndice sobre “Posibilidades del fascismo en la Argentina” que concluía así:

“Finalmente, el régimen fascista se hará necesario cuando el comunismo salga de sus guaridas y empiece a atacar con la tenacidad que le es característica. Ya está en casi todas las conciencias la idea de que no hay sino dos caminos: o Roma o Moscú. Ya nadie cree en la duración de la democracia. La guerra social comenzará tarde o temprano, y entonces, para evitar el advenimiento del horror comunista, con sus crímenes, con su satánico poder destructor, con su aniquilamiento del hombre, con su ateísmo militante, será urgente la mano de hierro del fascismo, violenta, justiciera, salvadora”.

No era la primera vez que Gálvez intervenía en un momento de balances de la conciencia nacional. Ya lo había hecho en 1910, con *El diario de Gabriel Quiroga*. En aquella ocasión, había apelado a una estrategia ficcional para exponer sus ideas: el diario íntimo de un personaje imaginario que era, a todas luces, su *alter ego*. Ahora, con su propia firma, diagnosticaba sobre un pueblo al que parecía señalar con un índice admonitorio. Pese a esas diferencias formales y a la mayor provisión de ideas reaccionarias que le brindaban el nacionalismo y el fascismo en los años treinta, la

continuidad de ciertos tópicos entre ambos libros es notable, así como también la repercusión que algunos de ellos tuvieron en Mallea. Los dos se sintieron acosados por un presente de decadencia y proclamaron la necesidad de una “regeneración”, que para uno se asentaba en el “sentido heroico de la vida” y para el otro, en versión más civil, en “una exaltación severa de la vida”.

Las decepciones de Gálvez en la ficción

En *Este pueblo necesita...* Gálvez señaló que el golpe de 1930 había despertado a los argentinos con un soplo de energía, pero que esa conmoción apenas había durado un mes: “La ráfaga de heroísmo pasó. Y volvió el argentino a la mediocridad espiritual y moral de sus peores tiempos”. Este ciclo de entusiasmo y decepción es exactamente el que articula su novela *Hombres en soledad*, de 1938.

La apología del fascismo de *Este pueblo necesita...* ingresó en la novela a través de un personaje de nombre significativo: Block. Ante el fracaso de las expectativas que había depositado en la “revolución”, Block se suicida. Más allá de la visible alusión a Lugones, esta resolución imaginaria es un indicio de que la confianza de Gálvez en la solución fascista se había debilitado. Pero la de Block es sólo una de las trayectorias que muestran que el golpe había resultado incapaz de cumplir con las promesas de recuperación de la energía nacional que, según Gálvez, había despertado. En todas las historias narradas en la novela y en todos los órdenes de las actividades de los personajes principales, sean políticas, intelectuales, familiares, amorosas o económicas, se cumple la misma parábola: una breve primavera y un pronto retorno a la inercia. Los proyectos se abandonan, las relaciones familiares se deterioran, las situaciones económicas se agravan, y todo sufre una degradación inexorable, salvo la vida religiosa auténtica y un ejercicio casi apostólico de la literatura.

Aunque Gálvez en sus *Recuerdos...* habló de ella como “la novela de la soledad espiritual”, omitiendo la centralidad que tiene el golpe en la composición del relato y en las trayectorias de los personajes, ese libro es todavía un testimonio valioso sobre el “momento de los treinta” por la eficacia con que articuló una visión ideológica en el registro ficcional. En ese sentido, *Hombres en*

soledad debe ser considerado uno de los textos pioneros en la construcción de la imagen tradicional de la “década infame” que, como se vio al comienzo, prosperó más allá de las primeras visiones críticas formuladas por algunos nacionalistas.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

Gálvez, Manuel. *Recuerdos de la vida literaria* (tres vols.), Hachette. Buenos Aires, 1962, tomos II y III.

Gorelik, Adrián. *La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936*, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 1998.

King, John. *Sur. Estudio de la revista argentina y de su papel en el desarrollo de una cultura. 1931-1970* (traducción de Juan José Utrilla), FCE, México, 1989.

Prieto, Adolfo. "El hombre que está solo y espera", en *Estudios de literatura argentina*. Galerna. Buenos Aires, 1969.

Romero, Luis Alberto. *Breve historia contemporánea de la Argentina*, FCE, Buenos Aires, 1994.

Sarlo, Beatriz. *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1988.

Warley, Jorge A. *Vida cultural e intelectuales en la década de 1930*, CEAL, Buenos Aires, 1985.

Zanatta, Loris. *Del Estado liberal a la nación católica*, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 1996.

Revistas

Contorno, N^{os} 1-5/6. Buenos Aires, 1953-1955.

Gramuglio, María Teresa; Sarlo, Beatriz y Warley, Jorge A. "Dossier sobre *Sur*", en *Punto de Vista*, VI, N^o 16. Buenos Aires, abril-julio de 1983, págs. 7-14.

Gramuglio, María Teresa. "*Sur* en la década del treinta. Una revista política", en *Punto de Vista*, IV, N^o 28. Buenos Aires, 1986, págs. 109-117.

Sur, N^{os} 1-355. Buenos Aires, 1931-1984.

Tramas. Para leer la literatura argentina. Vol. II, N^o 5, Narvaja, Córdoba, 1996.

BIBLIOGRAFÍA

Gálvez, Manuel. *Historia de la vida literaria (nueve vols.)*. Hachette, Buenos Aires, 1962, tomos II y III.

Gardiló, Adolfo. *La poesía y el prólogo. Espacios públicos y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1930*. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 1998.

Klein, John. *San Esteban de la revista argentina y de su papel en el desarrollo de la cultura, 1931-1970* (traducción de Juan José Ferrer). FCE, México, 1970.

Mérida, Adolfo. "El hombre que está solo y espera", en *Estudios de literatura argentina*. Galerna, Buenos Aires, 1969.

Morales, Luis Alberto. *Ítems literarios contemporáneos de la Argentina*. FCE, Buenos Aires, 1994.

Reyes, María Teresa. *La cultura literaria en Buenos Aires, 1930-1990*. Nueva Poesía, Buenos Aires, 1988.

Wahley, Jorge A. *Una cultura e intersecciones en la década de 1930*. CEAL, Buenos Aires, 1982.

Zamora, Luis. *Del Estado liberal a la nación católica*. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 1996.

Revista *Sur*, N.º 1-50, Buenos Aires, 1923-1952.

Gamuglio, María Teresa. *Sur, Jorge A. Wahley, María Teresa Reyes*. "Dossier sobre Sur", en *Sur*, VI, N.º 16, Buenos Aires, abril-julio de 1983, págs. 7-14.

Gamuglio, María Teresa. "Sur en la década del treinta. Una revista política", en *Sur*, IV, N.º 58, Buenos Aires, 1986, págs. 109-117.

Sur, N.º 1-322, Buenos Aires, 1923-1984.

Trinchero, Juan. *La literatura argentina*. Vol. II, N.º 2. Narcea, Córdoba, 1996.

IX

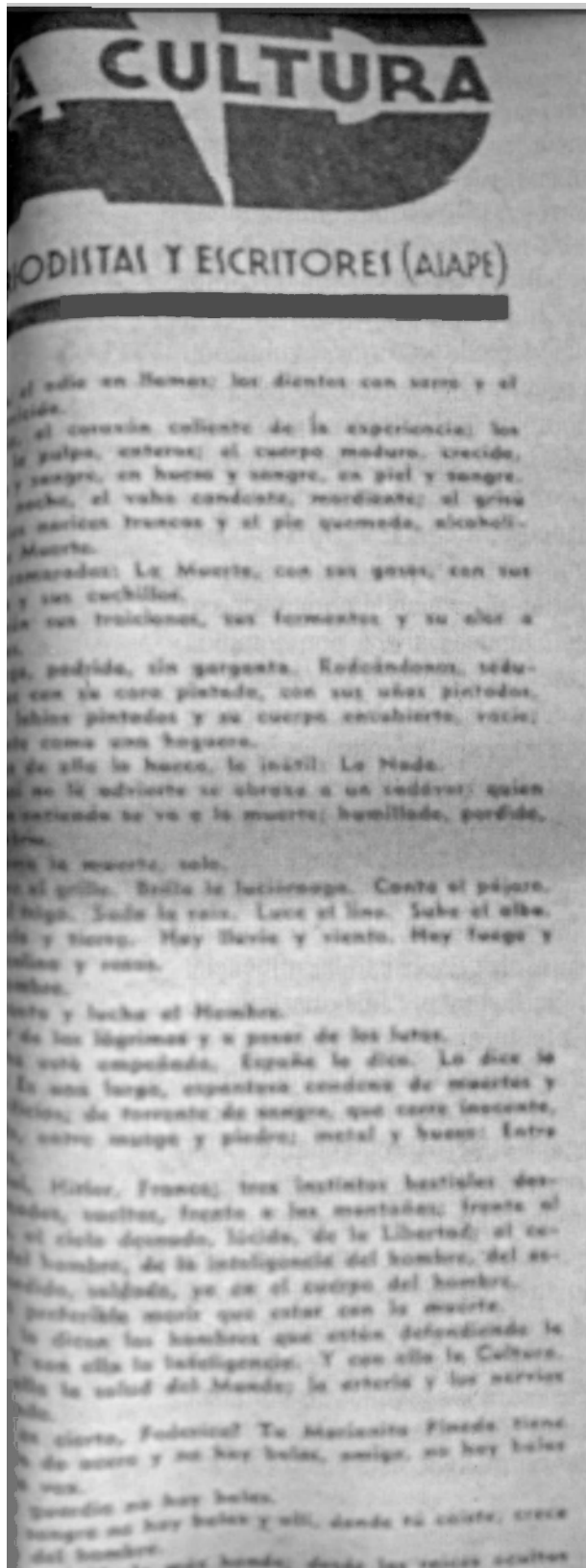
*Entre la cultura y la política:
Los escritores de izquierda*

por SYLVIA SAÍTTA

POR LA DEFENSA DE
UNIDAD
ORGANO DE LA AGRUPACION DE INTELLECTUALES, ARTISTAS, PE



Revista Unidad, Año 2, n° 2, 9-1937.



“Nosotros estamos de vuelta al pueblo, hartos de la cultura burguesa, ávidos de la dialéctica materialista.

Sólo en una sociedad sin clases será posible el sueño, lo abstracto, la intimidad con lo inverosímil y lo inventado, con Dios y con los otros mundos.

Nosotros estamos de vuelta al pueblo y ya oímos las detonaciones que mañana

os coserán contra las paredes. ¡Guerra a la clase dominante! ¡Dictadura para asegurarnos la libertad!”

El optimismo de González Tuñón y su certeza de que la revolución era posible en los comienzos de la década del treinta no constituyen excepciones. En esos años, los escritores y los intelectuales de

izquierda insistieron en reflexionar sobre cuestiones políticas y culturales que excedían los límites nacionales. La Rusia de los soviets y el stalinismo, la experiencia fascista, la República española, el Frente Popular y la guerra civil fueron los ejes de discursos y prácticas artísticas que generaron nuevos compromisos, articulando núcleos intelectuales. En las revistas de izquierda aparecidas a comienzos de la década, se actualizó la discusión en torno al rol del intelectual comprometido, la función del arte revolucionario, las relaciones entre arte y sociedad o literatura y revolución, en un planteo que diseñó nuevas prácticas y nuevos modelos de intervención política. La crisis económica de 1929 acrecentó entre los intelectuales y los militantes de izquierda la certidumbre de que el fin del capitalismo estaba próximo; la Unión Soviética era un modelo por seguir en la construcción de una nueva sociedad sin clases. Convicción también compartida por nacionalistas, conservadores y católicos, que descubrían propaganda comunista en todos lados. El escritor y ensayista Manuel Gálvez, por ejemplo, en el artículo “Extremismo y literatura”, publicado en *Il Mattino d'Italia* el 18 de abril de 1932, criticaba a las editoriales españolas por traducir libros que, en su mayoría, eran de tendencia revolucionaria: “Se traducen continuamente todos los abortos de la literatura rusa. Incoherentes, confusos, inmorales, falsos, pesados [...] En materia editorial nosotros somos tributarios de España. Y esto constituye en el momento actual una grave desgracia. El caos español se transmite a nosotros por intermedio del libro. Y como en la política española así como en su espíritu subsiste la influencia de la propaganda soviética, se puede fácilmente imaginar qué libros nos llegan de ese país. Creo que nuestro gobierno, si quiere evitarse el peligro de luchar contra el comunismo, debe impedir la libre entrada en el país de esta literatura perniciosa”. Dos años después, el mismo Gálvez se otorgaba el derecho de enumerar lo que *Este pueblo necesita...* para terminar, de una vez y para siempre, con las mentiras de la democracia representativa y del orden liberal. Buscando diferenciarse de nacionalistas y conservadores, quienes —según Gálvez— no incluían la justicia social en sus programas, proponía la construcción de un Estado fuerte de claro corte corporativo. Con un tono apocalíptico y quejoso, señalaba el fuerte arraigo de las ideas soviéticas entre los jóvenes argentinos, sentenciando que “hay un comunismo formidable entre nosotros, que no vota ni se muestra en la calle porque ello está en su conve-

niencia, pero que un día se levantará y ensangrentará el país, si no halla en su camino otra fuerza que se le oponga”.

El argumento del “peligro rojo”, que como bandera de choque habían agitado los sectores nacionalistas, conservadores y católicos para reprimir huelgas, prohibir manifestaciones y detener a dirigentes gremiales o políticos, no era novedoso. Pero en los tempranos años treinta, motivando alarmas o suscitando adhesiones, ciertos procesos sociales parecían confirmar la proximidad de alguna profunda conmoción social. A Elias Castelnuovo, José Portogalo, Roberto Arlt, los hermanos Raúl y Enrique González Tuñón, entre otros muchos escritores, poetas y periodistas, el encuentro con la Rusia de los soviets y con el Octubre Rojo de Asturias en 1934, les permitió —como señala Beatriz Sarlo— diferenciarse del resto del campo cultural pues el impacto ideológico-político de la revolución se convirtió en el eje de sus discursos y de sus prácticas artísticas. Estos escritores de izquierda, que registraron la decadencia y la crisis, encontraron en ellas mismas una promesa de salida: la utopía revolucionaria. Esa promesa fue la instauración de un nuevo país cuyo modelo era la Rusia de los soviets primero, la República española después.

Y en este sentido, estos escritores de izquierda se recortaron nitidamente de quienes se vieron ganados por el escepticismo político y el pesimismo. Se diferenciaron de la desazón y la desesperanza de otro sector de intelectuales quienes, enfrentados a los dilemas mal resueltos de un liberalismo incapaz de generar más salidas que las del fraude patriótico y la represión de partidos políticos mayoritarios o de sectores gremiales contestatarios, intervinieron con ensayos, textos literarios y artículos periodísticos, retomando las mismas cuestiones que habían rodeado los festejos del centenario de la Nación. Muchos ensayos asumieron nuevamente las preguntas sobre el destino de un país que había perdido su brújula a partir de la crisis desencadenada por el golpe de Estado de setiembre de 1930, buscando las claves de interpretación en los modos en que se había constituido “el ser nacional”, con la intención de definir la identidad y la naturaleza auténtica de los argentinos. Para algunos ensayistas como Ezequiel Martínez Estrada, ya no existían salidas, al menos en su *Radiografía de la pampa* (1933). Diferente fue la postura de Eduardo Mallea, quien propuso en su *Historia de una pasión argentina* (1937) otra versión del ser nacional. Para Mallea, la Argentina de los años treinta se en-

contraba bajo el signo de la pérdida, pues se habían olvidado los valores esenciales. Esos valores, sin embargo, no se habían perdido para siempre, sino que se encontraban sumergidos en lo que Mallea denominó “la Argentina invisible” a la que se oponía la pura apariencia de la Argentina visible, formada por “los hombres adventicios” que no respondían a la verdad de lo nacional, verdad que se encontraba en la Argentina invisible.

Angustia ante la pérdida de valores, análisis pesimista y frustración colectiva fueron también las vertientes en las cuales abrevó el tango del período. Como señala Eduardo Romano, las letras de Enrique Santos Discépolo, Homero Manzi y Celedonio Flores trasantan la desazón de las clases medias urbanas, quienes comprobaron día a día que la abnegación, la honestidad y el trabajo ya no bastaban para la carrera del ascenso social. *¿Qué sapa, señor?*, se preguntaba Enrique Discépolo indicando, desde el título en *vesre*, la inversión de palabras y de valores, el desconcierto de no saber, una vez aniquiladas las viejas convenciones, cuál era el rumbo:



Enrique Santos Discépolo.

“La tierra está maldita / y el amor con gripe en cama... / La gente en guerra grita, / bulle, mata, rompe y brama. / Al hombre lo ha mareado / el humo al incendiar. / Y ahora entreverao / no sabe adónde va”. Esta desazón, ocasionada por la pérdida y la transacción de valores en un mundo donde todo estaba trastocado, se resaltaba en el tono marcadamente apocalíptico de *Cambalache*: “¡Hoy resulta que es lo mismo / ser derecho que traidor! / ¡Ignorante, sabio, chorro, / generoso o estafador! / ¡Todo es igual! ¡Nada es mejor! / ¡Lo mismo un burro / que un gran profesor! / No hay aplazaos ni escalafón, / los inmorales nos han igualao. / Si uno vive en la impostura / y otra roba en su ambición, / da lo mis-

mo que sea cura / colchonero, rey de bastos / caradura o polizón”.

Asimismo, el tango incorporó como tópicos importantes los efectos de la crisis económica abierta después del crack de 1929: la falta de dinero, la imposibilidad de encontrar trabajo y la consecuente represión policial de toda señal de descontento. “Hoy no hay guita ni de asalto / y el puchero está tan alto / que hay que usar un trampolín... / Si habrá crisis, bronca y hambre / que el que compra diez de fiambre / hoy se morfa hasta el piolín.”, decía Enrique Cadícamo en *Al mundo le falta un tornillo*, de 1932. Y también Celedonio Flores, en *Pan*, del mismo año:

“Sus pibes no lloran por llorar / ni piden masitas, / ni dulces, ni chiches, ¡señor! / Sus pibes se mueren de frío / y lloran hambrientos de pan. / La abuela se queja de dolor, / doliente reproche que ofende a su hombría. / También su mujer. / escualida y flaca. / en una mirada / toda la tragedia le ha dado a entender.”

“¿Trabajar? ¿Adónde? Extender la mano / pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? / Recibir la afrenta de un `perdone, hermano` / él que es fuerte y tiene valor y altivez...”

Un año más tarde, los temas y climas se reiteraron en *Al pie de la Santa Cruz*, de Mario Barristella:

“Declaran la huelga. / hay hambre en las casas. / Es mucho el trabajo / y poco el jornal / y en ese entrevero / de lucha sangrienta, / se venga de un hombre / la ley patronal. / Los viejos no saben / que lo condenaron / pues miente piadosa / su pobre mujer, / quizás un milagro / le lleve al indulto / y vuelva en su casa / la dicha de ayer.”

Esta concepción pesimista de un presente en el cual todo parecía derrumbarse caracterizó también una línea de la literatura testimonial de los años treinta, principalmente los textos vinculados a la labor periodística. Así, en los relatos de Enrique González Tuñón compilados bajo el título *Camas desde un peso* en 1932, y en las *Aguafuertes porteñas* de Roberto Arlt, publicadas en el diario *El Mundo*, se representaron las condiciones de vida de los sectores populares fuertemente sacudidas por el impacto de la rece-

sión económica. La crisis y el desempleo transformaron la ciudad arltiana pues en ella se tornó visible la aparición de un nuevo sujeto social, el desocupado, que modificó con su sola presencia el paisaje urbano. Después de hablar con un desocupado, Arlt, por ejemplo, miró la ciudad con nuevos ojos, y así lo explicaba en *El Mundo*, el 18 de diciembre de 1931:

“Al separarme de mi amigo, me fijo en las plazas públicas. Es sencillamente catastrófica la cantidad de gente que ocupa los bancos. En Plaza Once, a las cuatro de la tarde, no hay un solo asiento desocupado. En Congreso, ídem. En Plaza Mayo, la plaza menos simpática para los desocupados, encontramos ahora que los escasos bancos que hay los ocupan señores sin posición económica ni renta fija. [...] Hay una sola realidad... la realidad son las plazas repletas de desocupados, las agencias de colocaciones atiborradas de desdichados que buscan `cualquier cosa` para parar la olla”.

Como nunca, la expresión “estar en la calle” adquiriría un sentido no figurado: los desocupados estaban en la calle, ocupaban los bancos de las plazas, llenaban los cines de la tarde; las esquinas estaban tomadas con puestos de cigarrillos, fósforos y revistas, y “la gente anda por todos los parajes regalando trabajo”. Arlt descubrió al desocupado que buscaba trabajo a las cuatro de la mañana subrayando los clasificados en algún bar cercano a la redacción de cualquier diario, el mismo que, ya perdidas las esperanzas, se asilaba en algún cine de barrio. El 24 de julio de 1932 escribía, también en *El Mundo*:

“Es la miseria. El cansancio. La tristeza. La necesidad de buscar olvido. Un hombre sin trabajo... y aquí ya tenemos la respetable cifra de quinientos mil desocupados que necesita meterse en alguna parte donde lo que sus ojos miren sea completamente distinto a aquello que, día por día, noche por noche, le recuerda que es un ser humano que no produce ni para sí mismo. El hombre se mete en el cine... como en otras partes el desocupado se mete en la taberna a buscar en un vaso de vino alcohólico el borrador de sus penas... el lenitivo de su amargura que en ese instante le hace pensar: ‘En este momento, ella me estará esperando esperanzada, dicién-

dose: Tengo el presentimiento que hoy él va a venir con buenas noticias”.

Malabaristas del hambre y rateros de poca monta refugiados en hoteles de un peso o en fondines miserables son los protagonistas de los relatos de Enrique González Tuñón, quien eligió narrar la otra cara del desempleo: la de aquellos que, quebrados por la falta de trabajo, robaban para pagar un café con leche en el Puchero Misterioso o una sórdida cama de hotel pues de las plazas, de noche, también eran expulsados. “Un guardián de plaza pública es un representante de la sociedad. [...] Los sin trabajo y sin hogar van a entrecerrar sus ojos doloridos de sueño y el guardián no permite que los vagabundos duerman. Es enemigo del sueño al aire libre, bajo el amparo gratuito de los árboles”, sostuvo en *Camas de un peso*, de 1934. En sus relatos, como en el tango discepoliano, se cuestionan las categorías con las cuales se solía describir una sociedad más igualitaria, vivida como lo irremediablemente perdido:

“Al fin de cuentas, ¿qué es un hombre honesto? Un fabricante que explota a cientos de obreros, paga impuestos cuando no puede eludirlos con una coima, cumple con las regulaciones legales, engorda, cohabita con libreta de registro civil...”

En los ensayos sobre el ser nacional, en el tango y en la literatura testimonial, entonces, se hace evidente la presencia de fuertes



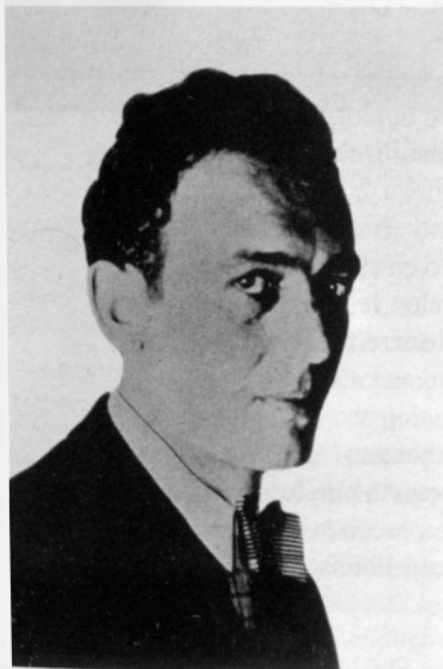
Roberto Arlt.

líneas que aludían a algunas de las situaciones que, en ciertas versiones, tornaron infame a la década.

Sin embargo, como se señaló, para un sector de escritores argentinos las cosas eran distintas. En rigor, no se trataba de una versión radicalmente diferente ya que el diagnóstico inicial era el mismo: la decadencia del modelo liberal y la crisis del capitalismo eran las variables que mejor describían un sistema político corrupto, una economía nacional entregada a los juegos del imperialismo, una realidad social al borde del estallido. Se trató, en cambio, de otra interpretación de los hechos: eran precisamente la crisis y la decadencia los elementos que abrían la posibilidad de la salida revolucionaria.

HACIA LA REVOLUCIÓN

El rasgo que mejor define los modos de intervención cultural y política de estos intelectuales de izquierda en la Argentina de los años treinta es el alto grado de internacionalización de su compromiso político. El comunismo, el fascismo y los avatares de los



Elias Castelnuovo.

frentes populares fueron algunos de los centros principales de los discursos y de las prácticas artísticas, que generaron nuevos compromisos y reagruparon núcleos intelectuales. En esos años, comenzó a desarrollarse una nueva actitud mental a partir de la cual la principal preocupación de los intelectuales ya no pasaba solamente por la reflexión y la eventual intervención, en torno a cuestiones relacionadas con su propio país, sino que esa preocupación se hizo mucho más vasta. Por lo tanto, se actualizó y se reformuló la discusión acerca del rol del intelectual, la función del arte, las relaciones entre arte y sociedad o literatura y revolución, en un planteo a partir del cual se diseñaron nuevas prácticas y nuevos modelos de inter-

vención política. Los escritores que se consideraban de izquierda, muchos de ellos cercanos al Partido Comunista, problematizaron en libros, textos periodísticos y artículos aparecidos en pequeñas publicaciones, y en ocasiones a partir de sus propias experiencias como viajeros internacionales a la Rusia de los soviets y a la España lacerada de la guerra civil, cuál debía ser el rol del intelectual comprometido; cuáles eran las funciones del arte revolucionario en una sociedad capitalista; cómo era posible participar, desde la literatura, en la construcción de una sociedad sin clases.

Elias Castelnuovo, por ejemplo, viajó a Rusia en 1932 para “ver y palpar” cómo se vivía y se trabajaba bajo el nuevo orden revolucionario. Para este hijo de inmigrantes, las prerrogativas del viaje diferían de las de los miembros de las clases dominantes: Castelnuovo, quien carecía del capital simbólico para conectarse con las elites intelectuales de París, pudo acceder al contacto de otros “viajeros ilustres”, quienes, como él, analizaban la estructura política surgida de la revolución; también pudo apropiarse de otra lengua —el ruso—, considerada en sus testimonios de viaje como el nuevo idioma universal. Si, como señala David Viñas, el viaje es desde comienzos del siglo XIX un tema permanente que enhebra las diversas flexiones del intelectual argentino, el viaje de izquierda reformuló la dicotomía París-Buenos Aires con la traslación del modelo ideológico-cultural hacia lo que Aníbal Ponce denominó una “tercera ciudad”: Moscú o Madrid. La postulación de una tercera ciudad aludía también a la firme creencia sostenida por la Iglesia Católica que, después del Congreso Eucarístico de 1934, había instalado la certeza de que “Roma o Moscú” era la única alternativa política existente.

Madrid, en cambio, fue el espacio imaginario y la ciudad emblemática en la poesía de Raúl González Tuñón. Desde su viaje como cronista a la Asturias del Octubre Rojo de 1934 y a las trincheras del frente republicano, el viaje estético en dirección a Europa se convirtió en el viaje militante:

“Madrid

De todas partes hacia ti venimos
con fusiles o versos a tus muros.

Flamante capital de todas partes.

¡novia del mundo!” (*La muerte en Madrid*, 1937)

La inminencia de la revolución abrió entonces la discusión sobre el arte y su función en una sociedad de clases. González Tuñón proclamó la necesidad de un arte revolucionario cuyo contenido social correspondiera también a una nueva técnica literaria; así, en “A nosotros la poesía”, incluido en *La rosa blindada*, de 1936, sostenía: “Llamo técnica nueva al conocimiento y a la superación de todas las técnicas, a la desenvoltura que nos da ese conocimiento, a la libertad de tonos, ritmos, imágenes, palabras, y a lo que siempre tuvieron los poetas de cada época creadora, a lo que sigue la línea poética que nació con la primera palabra pronunciada por el hombre en la tierra: a la personalidad de un poeta”.

La idea de una revolución posible fue planteada no sólo en términos políticos y económicos: la literatura apostaba por la representación de un nuevo orden social que también alterara las reglas que regían la vida privada. Así, por ejemplo, en *Camas desde un peso*, Enrique González Tuñón vinculaba la revolución con un cambio en las costumbres: “Vendrá el amor libre como vendrá la emancipación económica de los hombres. La sociedad burguesa ha entristecido al amor. Lo ha relajado. Ha llevado el amor al prostíbulo. He aquí lo que es el amor burgués; el amor con preservativo, el amor que se lava con permanganato”. Algo parecido proponía Arlt en su novela *El amor brujo*, de 1932, que fue promocionada por la revista comunista *Actualidad* en su número 3 con un aviso publicitario que insólitamente señalaba: “La novela describe las alternativas de un personaje que trata de orientarse hacia el comunismo a través de la maraña de las contradicciones de la burguesía, a cuyo servicio trabaja en calidad de ingeniero”. Desconcertante aviso porque, por un lado, la novela efectivamente cuestiona la moral burguesa enfocada a través de las relaciones entre hombres y mujeres, al apostar por un cambio revolucionario que también altere las reglas que regulan la esfera privada: bajo el capitalismo, las mujeres “habían nacido para enfundarse en un camisón que les llegaba a los talones y hacerse la señal de la cruz antes de dormirse. Pavoneaban una estructura mental modelada en todas las restricciones que la hipocresía del régimen burgués impone a sus desdichadas servidoras”. Pero por otro lado, las ensoñaciones de su protagonista Estanislao Balder, más que revelar a “un personaje que trata de orientarse hacia el comunismo”, enfatizan la confusión ideológica de un ingeniero de clase media: “Estas mujeres tienen que ser hechas pedazos por la revolución, violadas por los

ebrios en la calle', se decía a veces Balder". Asimismo, la novela propone reflexiones ambiguas sobre los vínculos entre vida privada y esfera pública, entre lucha de clases y moral burguesa, y plantea las contradicciones de los asalariados que, en lugar de pelear por sus derechos, buscan pertenecer a la burguesía: "Cualquier mecanógrafa, en vez de pensar en agremiarse para defender sus derechos, pensaba en engatusar con artes de vampiresa a un cretino adinerado que la pavoneara en una voiturette. No concebían el derecho social, se prostituían en cierta medida, y en determinados casos asombraban a sus gerentes del lujo que gastaban, incompatible con el escaso sueldo ganado". O defienden el orden social: enfrentado a Alberto, un mecánico que postula la necesidad de sostener las convenciones sociales, Balder piensa: "¿En qué país estamos? Este obrero que tiene la obligación moral de ser revolucionario me viene a conversar a mí que soy un ingeniero, de la necesidad de respetar los convencionalismos sociales. Qué lástima no estar en Rusia. Ya lo habrían fusilado".

REVISTAS CULTURALES, APUESTAS POLÍTICAS

Estos hombres de letras comprometidos con algún tipo de transformación profunda del orden social y político impulsaron, en esos años, un conjunto de iniciativas muy variadas. Desde ya, publicaron sus obras de ficción, sus poemas y ensayos, sus memorias de viajes; también organizaron encuentros, congresos y campañas de propaganda, con fines múltiples que siempre se quisieron solidarios. Simultáneamente, participaron en la creación de instituciones, dictaron conferencias, hablaron en actos políticos y también, desarrollando una práctica particularmente extendida en la época, fundaron revistas. Algunas de ellas fueron efímeras; otras se convirtieron en el ámbito en el que se libraron intensas y fugaces polémicas; es posible pensar, por otra parte, que sus lectores fueron con frecuencia menos de lo que las direcciones hubieran deseado.

Sobre ese abigarrado conjunto de revistas culturales, señalaba la revista católica *Criterio* en 1933: "Desde hace algunos meses se nota en la ciudad una multiplicación sospechosa de publicaciones de carácter comunista, especialmente soviético. Primero *Hoy Argentina*, que felizmente para las letras, las ideas y el buen gusto desapareció antes de dar la tercera entrega. Luego *Contra* que, con

los mismos redactores de la anterior, sigue sus pasos con mayor modestia editorial. Ahora se publica *Actualidad* —económica, literaria, artística, científica, pero simplemente soviética— que lleva sus tiros contra *Claridad*, a la cual acusa de socialdemócrata reeditando la literatura combativa de Lenin en la *Iskra*. *Actualidad* tiene los mismos redactores de *Contra* y *Tiempos Nuevos* —otra muestra más de la proliferación marxista revolucionaria— aparece escrita por los mismos. Las que hemos citado son solamente algunas de las que se ofrecen en los quioscos de la capital a la curiosidad incauta de las inteligencias desprevenidas. Siendo muchas, pero dirigidas por la misma voluntad hacia idéntico fin, su circulación ha de ser forzosamente mayor que si se tratara de una sola. Quien maneje los hilos de la propaganda bolchevique en el país sabe lo que hace, siendo evidente que su conducta se ajusta a las instrucciones que salen de Rusia para todo el mundo”.

Sin embargo, no todos los escritores involucrados en estas empresas coincidían en el tipo de revolución que deseaban, y menos aún, compartían los modos de realizarla. Desde comienzos de la década hasta 1936, se produjeron duros enfrentamientos y sorprendentes disensos entre los sectores de izquierda, cuyas huellas pueden leerse, con particular claridad, en aquel conjunto de publicaciones. Los escritores de izquierda se dispersaban y se reagrupaban, atravesados por los nuevos debates que recorrían Occidente, dejando atrás la tranquilizadora dicotomía que en los años veinte los ubicaba en Boedo o en Florida, en la “literatura social” o en “el arte por el arte”.

En las nuevas revistas que se fundaron en los tempranos años treinta, la política se impuso como preocupación central y, por lo tanto, definió qué lugares se ocupaban en el campo cultural. Porque en los años veinte, como sostiene Liliana Cattáneo, la revista *Claridad*, dirigida por Antonio Zamora, funcionaba como el espacio que aglutinaba a las diferentes versiones de la izquierda local, una izquierda que, tal como se sostenía en el subtítulo “Tribuna de Pensamiento Izquierdista”, comprendía al socialismo, al anarquismo, al comunismo, a los primeros grupos trotskistas, al georgismo, junto a lo que se consideraba la “juventud independiente”, estudiantes e intelectuales, y también a militantes de organismos universitarios y sindicales. En cambio, en los años treinta la necesidad de definir ubicaciones políticas más precisas condujo a cada sector a reivindicar espacios diferenciados, a di-

sentir y polemizar. El alejamiento de Leónidas Barletta, uno de sus secretarios de redacción, a finales de 1929 fue el primer síntoma de la dispersión del grupo inicial de *Claridad* y de la elección de caminos diversos una vez agotadas las polémicas de Boedo con los representantes de la vanguardia estética de la nueva generación. Como se verá más adelante, en los treinta, Barletta editaría, desde mayo de 1931, su propia revista, llamada *Metrópolis. De los que escriben para decir algo*, que fue órgano del Teatro del Pueblo, donde se concentró el elenco más reconocido de Boedo.

Claridad, por su parte, continuó publicándose durante toda la década, cada vez más inclinada a transformarse en una revista cuyo eje era la política. Naturalmente, se seguían publicando poemas y cuentos, y la sección de crítica literaria continuaba aspirando a funcionar como una guía de la “buena literatura”, comprometida y de denuncia, para la organización de las bibliotecas populares. A ese objetivo contribuía buena parte de los libros publicados por la editorial Claridad. Pero los artículos sobre el fascismo y el imperialismo, sobre la guerra de España y los crímenes nazis, se impusieron en las páginas de *Claridad* a la reflexión referida a las letras o al arte, al tiempo que el aprismo en el exilio y la izquierda del Partido Socialista fueron dos de los grupos de mayor presencia en la revista.

A su vez, en las vanguardias la política ampliaba su espacio a expensas de la estética, y sus revistas se caracterizaron precisamente por su intensa politización. La persistencia de la dicotomía Florida-Boedo continuó funcionando a la hora de definir estilos periodísticos, modelos estéticos y posiciones políticas. El cierre de *Martín Fierro*, la principal revista vanguardista de los años veinte, dejó un espacio vacío que propuestas similares buscarían ocupar. Pero en los treinta, la idea de sostener una revista que, como *Martín Fierro*, propusiera un modelo de intervención en el cual se excluyera la representación de los principales debates políticos, resultó inviable.

En efecto, durante los años en que salió a la calle (1924-1927), *Martín Fierro* excluyó la política de su agenda de intereses. Las pocas reflexiones políticas que se publicaron —aparecidas sobre todo en los primeros números— ubicaron a la revista en un espacio cercano a las reivindicaciones de izquierda. Por ejemplo, en su primer número se publicó la “Declaración de Haya de la Torre,



Conrado Nalé Roxlo, 17-10-1941.

presidente de la Federación de Estudiantes de Perú, desterrado de su país por el gobierno de Leguía con motivo de su campaña contra la pretendida consagración de la Nación peruana a la imagen del Corazón de Jesús” y, como nota de la redacción, un comentario que señalaba: “Hace más de seis años que el gobierno zarista fue desalojado de Rusia. Dos revoluciones de importancia universal han sucedido al nefasto régimen. Y sin embargo, el gobierno argentino no se ha enterado”. Esa inquietud fue retomada en el número siguiente, en la sección “Preguntamos”. Las menciones a Rusia desaparecieron de la revista con la publicación de *Canto a Rusia*, de Conrado Nalé Roxlo, en su cuarto número (aunque en su último número se anunciaba “un importante estudio” de Eduardo González Lanuza, titulado *La Revolución Rusa y su literatura*), y la decisión de la revista con respecto a la política se

explicitó en la discusión con Roberto Mariani sobre la literatura social y la figura de Leopoldo Lugones. En efecto, en el séptimo número, la revista tomó dos decisiones importantes: publicó la nota de Mariani donde éste criticaba el beneplácito de *Martín Fierro* con la figura modernista y a la vez fascista de Leopoldo Lugones, pero también cubrió su portada con un retrato a lápiz de Lugones, debajo del cual Evar Méndez lo consideraba “este gran argentino, decidido martinfierrista, uno de los nuestros”. La polémica se retomó en los números siguientes; así, en el octavo número la redacción respondió a Mariani diciendo: “Hay entre nosotros quienes saben agitar el trapo rojo con tanto denuedo como los valientes redactores de la anunciada *Extrema Izquierda*. Si no lo hacen en *Martín Fierro* es sencillamente por la misma razón que no hablamos de carreras ni de modas: por razón de especialidad”.

Si la elección entonces había sido dejar la política afuera, fue la intrusión de la política la que determinó el cierre de la revista. En su último número, aparecido en 1927, en una nota firmada por su director Evar Méndez, se “aclaró” nuevamente el carácter apolítico de la publicación:

“*Martín Fierro* declara una vez más su carácter absolutamente ‘no-político’, y mucho menos político-electoral o de comité: politiquero. [...] El programa de *Martín Fierro* le exige permanecer desvinculado de todo interés y asunto de índole política y consagrarse por entero, únicamente, a los problemas literarios y artísticos. Ocupándose en ello, como lo hace, ya tiene de sobra como razón para existir y cumplir una digna misión”.

Como se ha señalado en más de una oportunidad, la aparición en los diarios porteños de una solicitada en respaldo de la candidatura de Hipólito Yrigoyen a la presidencia del país firmada por varios martinfierristas fue el motivo de esta “aclaración”. Sin que se sepa a ciencia cierta si la causa del cierre fue la solicitada o la aclaración, lo cierto es que éste fue el último número de la revista, que dejó de aparecer sin explicaciones.

LA CONTINUIDAD DE UN MODELO

Tres años después del cierre de *Martín Fierro*, Cayetano Córdova Iturburu, poeta y escritor vinculado a la vanguardia martinfierrista, se propuso retomar ese modelo, lanzando una revista similar: *Argentina. Periódico de Arte y Crítica*, que apareció en noviembre de 1930 bajo su dirección. Formalmente idéntica, optaba, al igual que *Martín Fierro*, por la no inclusión de la política en sus páginas. Si bien se incorporaron nuevas firmas, como la de María Rosa Oliver, y algunos nombres como los de Oliverio Girondo y Jorge Luis Borges estuvieron ausentes, Córdova Iturburu manifestó explícitamente que la intención era la misma: se trataba de un periódico exclusivamente literario, en el cual no había cabida para el proselitismo político. En su número 2, de 1931, Córdova Iturburu sostenía:

“No hablamos, es cierto, de bolcheviquismo o socialismo. Ni de teosofía. Ni de política. Y no lo hacemos porque nuestro periódico es un periódico de arte. Eso queremos que sea. Y nada más. Obrando así estamos seguros de no eludir los deberes de nuestra generación y de ser útiles a nuestro país y al mundo. [...] Queremos ser solamente artistas, hombres consagrados exclusivamente a una actividad, inaugurar entre nosotros la era de las especializaciones porque sabemos que es la especialización lo que ha edificado la cultura. Creemos, además, que el arte no puede ser vehículo de doctrinas sino que tiene su finalidad en sí mismo y que sus beneficios sociales se producen por virtud de presencia. [...] No admitimos, de ninguna manera, el criterio socialista o comunista de poner el arte al servicio de otro ideal. ¿Es que el arte no es ya un ideal bastante alto? Nosotros, por lo menos, tenemos la inocencia de creerlo. Y somos, en esto, tan inocentes como Rembrandt y Leonardo da Vinci. ¿Qué queda del llamado arte social de fines del siglo pasado? Nada. Absolutamente nada. Tampoco quedará, aunque ustedes piensen lo contrario, un solo poema socialista, un solo cuadro comunista, una sola sonata radical o demócrata progresista o una sola marcha triunfal conservadora”.

Sin embargo, el modelo ya era inviable. *Argentina* dejó de salir

después de su tercer número, en agosto de 1931. El cierre demuestra entonces que a comienzos de los años treinta el sector izquierdista del campo literario estaba ya cruzado por tensiones y discusiones estético-ideológicas que tornaban inviable tanto el modelo “apolítico” que proponían *Martín Fierro* y *Argentina* como el estilo irreverente con el cual intervenir en los debates estéticos. Dos años después, fue Raúl González Tuñón quien intentó recuperar el modelo formal martinfierrista para fundar una revista que, sin embargo, desde su comienzo postulaba una propuesta diferente: de lo que se trataba era de incorporar la dimensión política como tema y unir así, en una misma militancia, la estética con la política. *Contra. La revista de los franco-tiradores*, que González Tuñón dirigió desde abril hasta setiembre de 1933, constituyó otro intento de convertirse en la heredera formal de *Martín Fierro*. Si bien se presentó como “la revista de los franco-tiradores” en la cual tenían cabida “todas las escuelas, todas las tendencias, todas las opiniones”, *Contra* fue una revista de izquierda que postuló el enfrentamiento de clase contra clase y que tuvo como uno de sus proyectos la organización institucional de los escritores de izquierda para la defensa de sus intereses profesionales. Sus dieciséis páginas tamaño tabloide constaban de gran cantidad de artículos que giraron en torno al análisis de la política internacional, notas dedicadas a introducir en el ámbito local el debate sobre la función del arte revolucionario, traducciones de artículos, poemas y ensayos publicados en órganos europeos.

Contra se presentó al lector como la continuación de la revista *Martín Fierro* y tanto su diseño y su presentación formal, como la decisión de incorporar algunas de sus secciones, ratificaron el modelo elegido. Porque además de los artículos y del material gráfico, *Contra* poseía dos secciones fijas que abrían y cerraban la revista: “Los sucesos, los hombres”, firmada por Raúl González Tuñón, y “Recontra”, la contratapa. Ambas, como describe Beatriz Sarlo, se caracterizaron por un sistema misceláneo que reunía pastillas escritas según las reglas estilísticas del periodismo moderno y político. En “Los sucesos, los hombres” se recogían opiniones de publicaciones internacionales, comentarios de cables, citas de libros o artículos, datos estadísticos sobre los avances de la construcción económica soviética, miniaturas de cine, teatro y literatura. En cambio, “Recontra” se singularizó por la publicación de consignas, enumeraciones, epitafios, cuartetos, redondillas

satíricas que retomaban las formas del discurso irónico y paródico de la vanguardia martinfierrista, rasgos que llevan a Sarlo a definir a *Contra* como “el martinfierrismo de izquierda” dado que, en el trabajo irónico con el discurso de los otros (escritores o políticos), asumió las tácticas de la guerrilla estética martinfierrista, como en su número 2, aparecido en junio de 1933:

“El Suplemento
Lo dice siempre sin querer
o queriendo que me convenza:
‘Sólo sirve para envolver
el suplemento de *La Prensa*’.

Crisol
Plagiar estudios no osés,
pues tu fama se irá a pique.
no hagas como Luis Enrique
Osés.”

Dos ejes de discusión y polémica y, por lo tanto, de redefiniciones y recolocamientos, atravesaron los cinco números de la revista: el primero de ellos fue el rol de los escritores en la sociedad capitalista; el segundo, los modos de intervención y las formas de construcción de un arte revolucionario. El planteo sobre cuál debía ser el rol del escritor sudamericano en sociedades “todavía” divididas en clases sociales apareció en su primer número enunciado por González Tuñón, quien proponía dos modos de intervención, acordes a una doble caracterización de los escritores de izquierda. Por un lado, señalaba que los jóvenes escritores que creían que la revolución era posible en América del Sur debían afiliarse al Partido Comunista y, desde allí, luchar por la revolución. En cambio, aquellos escritores, entre los que se incluía, que creían que la Argentina es un país semicolonial, debían esperar que la revolución se extendiera a Inglaterra, Francia, Alemania y recién en ese momento “ponerse en el ritmo”. Mientras tanto, la función de los escritores era hacer propaganda desde el libro, el diario, la revista, la calle, para crear una conciencia colectiva revolucionaria.

Tales afirmaciones desataron la polémica con los miembros del Partido Comunista; uno de sus voceros, el joven militante Carlos Moog, envió a la revista una larga respuesta porque consideraba al

artículo de González Tuñón “falso y confusionista”, agregando que su autor “nada sabe de marxismo”. Moog discutía la idea de que la Argentina debía esperar a que la revolución se realizara primero en los países centrales y luego en Latinoamérica, ya que afirmaba que “esa revolución hay que hacerla y aquí mismo”. Para Moog, no bastaba con limitarse a crear una conciencia colectiva revolucionaria a través del libro, el diario y la revista pues no eran los intelectuales quienes iban a crear esa conciencia revolucionaria sino los trabajadores, a partir de la acción y la propaganda del Partido Comunista.

La polémica entre Carlos Moog y Raúl González Tuñón reproduce, de alguna manera, la disputa que un año antes, en abril de 1932, habían sostenido Roberto Arlt y el dirigente comunista Rodolfo Ghioldi en el diario comunista *Bandera Roja*. Ghioldi había convocado a varios escritores de izquierda a colaborar en el nuevo diario interesado, como señala José Aricó, en encontrar un lugar vinculado al Partido para los intelectuales burgueses. Arlt,



Rodolfo Ghioldi, 13-10-1941.

invitado por Castelnuovo, se había incorporado al staff de *Bandera Roja*, que en sus comienzos no apareció como órgano del Partido Comunista sino como un periódico independiente y de los trabajadores. Ghioldi mismo, en el número del 24 de abril de 1932, había definido con nitidez los elementos que hacían posible una colaboración como la reclamada: se trataba de intelectuales que creían ser “escritores de izquierda y proletarios, aunque no fuera proletaria su producción literaria” y a los que la dictadura uriburista y “la situación actual en su conjunto impulsan hacia el proletariado”. En aquella oportunidad, y recién llegado al mundo ideológico del marxismo, Arlt escribió una nota invitando a los simpatizantes del comunismo a estudiar:

“El motivo de este artículo es lo siguiente: hacer comprender a todo tibio simpatizante con la causa de Rusia que su deber, su único deber, es estudiar de continuo. [...] No basta la intención, la simpatía, ni el entusiasmo. Hay que reemplazar el entusiasmo por una conducta fría, concentrada. El boxeador que se entusiasma o enoja en el ring, pierde en el noventa por ciento de los casos la pelea. El que ganó es el otro, el calmoso, el tranquilo, el que ubica sus trompadas con precisión de cañonazos. [...] Un partido compuesto de hombres, de los cuales cada uno es un técnico en la ideología en que se basan sus principios, disfruta de una fuerza tan extraordinaria de penetración que nada se le resiste. Pero para esto hay que estudiar, estudiar y estudiar. Nada más.”

A esa nota respondió, en el número de *Bandera Roja* del 21 de abril de 1932, un miembro del Partido, con el seudónimo de “Artero”. El autor negaba rotundamente que un revolucionario, un propagandista de la causa de Rusia, pudiera formarse por medio del estudio, tal como había sugerido Arlt, y sostenía que un revolucionario debía hacerse en la lucha, debía ir a los sindicatos, a las reuniones de obreros, a sus clubes, para “sentir en carne propia el desprecio a la burguesía dominante”. En otras palabras —en un argumento con el que coincidirá Carlos Moog un año después—, que para ser revolucionario había que afiliarse al Partido Comunista. Como otros lectores intervinieron en la polémica, Rodolfo Ghioldi tomó la palabra y, en dos largos artículos publicados en abril de 1932, planteó que Arlt revelaba en su nota la persistencia

de una ideología individualista pequeñoburguesa pues enfocaba el problema social desde un punto de vista puramente individual y psicológico, que nada tenía que ver con el marxismo-leninismo. Ghioldi sostuvo entonces que existía un núcleo de la pequeña burguesía (donde ubicaba a los intelectuales como Arlt) que, si bien comprendían que sin el proletariado nada podía emprenderse, temían a su dirección y aspiraban a una alianza con el proletariado que estuviera bajo la hegemonía de la pequeña burguesía. Éste era el caso de escritores que, como Arlt, sin ser proletaria su producción literaria, “subjetivamente aspiran a desarrollarse como comunistas”, aunque perduran en ellos viejas concepciones individualistas y no marxistas. En su respuesta, Ghioldi afirmaba que la necesidad de estudiar que había subrayado Arlt era una necesidad puramente individual y la ejemplificación de la teoría de las minorías selectas, en la cual una masa bienintencionada e incapaz era conducida por una minoría pequeñoburguesa, armada de la sabiduría revolucionaria. Para Ghioldi, los intelectuales que se acercaban a los obreros debían renunciar “a la teoría de la minoría sapiente que lleva de las narices a la multitud entusiasta” y emprender el estudio del marxismo-leninismo. Arlt respondió provocativamente: sostuvo que si en teoría era cierto que es el proletariado el que debía orientar al intelectual pequeñoburgués, esta premisa era incuestionable sólo en aquellos países donde el proletariado y la gran masa rural eran comunistas. Y en la Argentina, “de cien proletarios... noventa ignoran quién es Carlos Marx... pero noventa pueden contestarle en qué estilo daba besos Rodolfo Valentino, y qué bigote usa José Mogica”. También discutió con Ghioldi sobre la importancia del factor individual, sosteniendo que las minorías, ya sean conservadoras ya sean comunistas, eran producto de la selección, y que muchos líderes del movimiento comunista mundial eran desprendimientos de la clase pequeñoburguesa.

La redacción en pleno de *Bandera Roja* respondió a Arlt y dio por clausurada la discusión al mes siguiente, en mayo de 1932. *Bandera Roja* lo acusó de intelectual pequeñoburgués, sostuvo que Arlt despreciaba a la masa en general y al proletariado en particular al propugnar su teoría de las minorías selectas, desmintió su carácter de marxista leninista, y lo vinculó a los anarcosindicalistas al considerar que con ellos compartía el desprecio por las masas: “Resulta muestra de ignorancia que Arlt sostenga sus puntos de vista en nombre de un marxismo engendrado en su cerebro.

Que lo haga en nombre de su anarquismo a lo gran señor, como diría Lenin, y entonces las posiciones aparecerían más definidas”. Como ha planteado Aricó, la exigencia de claridad ideológica que Ghioldi demandaba a Arlt exhibió la debilidad intrínseca de una corriente política aislada de esa misma clase a la que pretendía representar, y el desdén con el que el obrerismo del partido miraba a los intelectuales. Arlt pretendía nada menos que otorgar una funcionalidad autónoma a la cultura de izquierda y un papel relevante a los intelectuales que bajo el influjo de la experiencia rusa se desplazaban hacia el comunismo. El dilema que Arlt planteó en su artículo no se resuelve en la respuesta de Ghioldi, pues Arlt rechazaba la fácil identidad de proletariado y comunismo, y se preguntaba cuál camino debía seguir un intelectual radicalizado en un país donde el proletariado y la gran masa rural se mantenían alejados e impermeables a la influencia del marxismo y del movimiento comunista. En parecidos términos, Carlos Moog y Raúl González Tuñón sostuvieron, un año más tarde, la misma polémica en una discusión que, aunque breve, mostró claramente los encontronazos y malentendidos de los intelectuales considerados de izquierda con el Partido Comunista, en un debate que puso en el centro las tensiones existentes entre militancia comunista y actividad intelectual.

El otro eje importante de polémica de la revista *Contra* se desplegó en torno a la figura y la propuesta estética del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, ya que su figura despertó los debates y las discusiones más productivos acerca de una definición de la función del arte en la sociedad capitalista. Su visita a Buenos Aires, que había generado grandes confrontaciones y polémicas tanto en Amigos del Arte como en la prensa en general, fue el tema dominante en el tercer número de *Contra*, a partir del cual la revista se afianzó en una definición propia acerca de su rol en la creación de una conciencia de clase revolucionaria. En ese número, Siqueiros reflexionó sobre la función del arte y de sus características formales a partir de la diferenciación del arte en la sociedad capitalista y en la sociedad comunista. Señaló, por un lado, que la plástica de agitación y propaganda era previa a la “estética de la revolución” por pertenecer a la época de la lucha proletaria final contra el Estado capitalista; por otro, que esa plástica debía encontrar su propia forma, su propio estilo, su propio lenguaje y su propia metodología pues no sería académica ni modernista sino dia-

léctica y subversiva, es decir, lógicamente materialista, objetiva y dinámica. Siqueiros proponía sacar la producción pictórica y escultórica de los museos y de las manos privadas para hacer de ella un elemento de máximo servicio público y de bien colectivo, utilizar todas las oportunidades posibles de plástica monumental descubierta, y la formación de equipos que anticiparan la técnica del futuro. Esa técnica del futuro era lo que Siqueiros denominaba “la plástica de la sociedad comunista”, que sólo sería posible una vez abolidos los residuos del poder capitalista, pues se trata de una plástica realmente pura, bella de por sí, ajena por completo a toda intervención anecdótica, descriptiva, imitativa, decorativa; una plástica



Raúl González Tuñón.

sin historias ni moral, al servicio del más fino sentimiento estético de los hombres. En el mismo número, González Tuñón retomó la propuesta de Siqueiros al afirmar que el arte puro, el arte-abstracto, el arte-entretenimiento sólo sería posible en una sociedad sin clases y no en una sociedad capitalista donde el arte “no puede estar ajeno al drama del mundo”. Por lo tanto, llamaba a militar por un arte subversivo “que despertara y provocara, que representara la ansiedad, el dolor y la esperanza del pueblo” pues el arte puro sería el arte del futuro, el arte que serviría a la dictadura del proletariado.

Arte puro y arte de propaganda fueron, entonces, los términos en que la revista planteó una discusión que introdujo, a su vez, una disputa acerca de “la forma” del arte, es decir, acerca de una dicotomía planteada entre forma y contenido. En este sentido, fue Julio Payró quien sostuvo que Siqueiros, al adoptar los temas de la propaganda social y proscribir las bellas imágenes destinadas, según Siqueiros, a adormecer a las masas, olvidaba que su pintura tenía trascendencia para la humanidad no por los temas que toca-

ba pues, “para el arte, lo mismo da que esté crucificada el águila y, en pie sobre la cruz, el indio triunfante de la revolución”, sino por su forma. En otras palabras, Payró, basándose en la obra del mismo Siqueiros, planteaba que el valor de la obra de arte no estaba en el contenido sino en la forma en que ese tema (sea cual fuera ese tema) aparecía representado.

La revista delimitó un proyecto estético en el cual izquierda vanguardista se superponía a militancia política o, en otros términos, los procedimientos formales de la vanguardia estética se entendían inseparables de sus contenidos ideológicos. Por lo tanto, diseñó un claro recorte con respecto al “romanticismo proletario” o el “arte social” que caracterizaba a la literatura de Boedo que si bien se preocupaba por los temas de la miseria, la desigualdad social, el dolor proletario, las huelgas o las manifestaciones, no problematizaba el modo de representación de esos temas. Así, Payró tomaba el ejemplo de la pintura *Al alba* de Hernans, en la cual aparece un grupo de obreros que, mientras se dirigen a su trabajo, pasan frente a un cabaret del que sale un caballero vestido de frac, ebrio, a quien llevan del brazo dos prostitutas que lo invitan a subir a un automóvil. Payró señalaba que la ideología de esta pintura era sana y noble pero que el cuadro era grotesco pues “no basta con que estemos de acuerdo con el tema de una pintura para que aceptemos a ésta como una obra de arte”.

Frente al “arte social”, la revista propuso otros modelos estético-ideológicos: el surrealismo francés, la nueva literatura rusa (Gladkov, Fedin, Pilniak, Ivanov, Gomilewsky, Leonov) y a algunos escritores norteamericanos como Sinclair Lewis y John Dos Passos. Esta adscripción fue la que rigió la traducción y la selección de los materiales literarios publicados, y dibujó un mapa que, en el ámbito internacional, tenía como figura central a Louis Aragon, y en el marco de la literatura nacional, a Raúl González Tuñón. *Contra* publicó en su segundo número la primera traducción española de *Frente rojo*, realizada por Luis Waismann, y dos números después, el controvertido poema de González Tuñón *Las brigadas de choque*. El caso González Tuñón reprodujo, en el ámbito local, los sucesos que rodearon, en 1930, la publicación de *Frente rojo* de Aragon en *Literatura de la Revolución Mundial*, órgano de la UIER (Unión Internacional de Escritores Revolucionarios), ya que así como Aragon fue perseguido por incitación al crimen, medida que provocó la movilización y el debate entre los

escritores, en 1933 la publicación de *Las brigadas de choque* tuvo efectos similares ya que fue González Tuñón el procesado por incitación a la rebelión. En 1935, cuando González Tuñón ya se encontraba en Madrid, se conoció la sentencia judicial, que generó documentos de protesta firmados por intelectuales argentinos, franceses y españoles.

Fiel al modelo martinfierrista, *Contra* realizó encuestas para convocar la opinión de escritores e intelectuales. La primera encuesta nació de un artículo de Córdoba Iturburu publicado en su primer número, en el cual se preguntaba: “¿Puede o no la literatura, la verdadera, la de los buenos escritores, descender al mundo agitado de las luchas políticas en que se debaten las aspiraciones más nobles y los apetitos más mezquinos?” A partir del número siguiente, esta pregunta adquirió el formato de una encuesta titulada “¿El arte debe estar al servicio del problema social?”, a la que respondieron Nydia Lamarque, Luis Waismann, Oliverio Gironde, entre otros. El problema se desencadenó con la respuesta de Jorge Luis Borges quien, como señala Sarlo, se negó a considerar los términos de la pregunta porque someterse a ella implicaba aceptar la existencia de un problema que planteara la relación entre arte y sociedad. Por lo tanto, respondió de un modo altamente irónico, retomando argumentos que él ya había escrito sobre Leopoldo Lugones y el modernismo, en el tono y el estilo característicos del desenfado martinfierrista:

“Es una insípida y notoria verdad que el arte no debe estar al servicio de la política. Hablar de arte social es como hablar de geometría vegetariana o de artillería liberal o de repostería endecasílabo. Tampoco el Arte por el Arte es la solución. Para eludir las fauces de ese aforismo, conviene distinguir los fines del arte de las excitaciones que lo producen. Hay excitaciones formales *ID EST* artísticas. Es muy sabido que la palabra *AZUL* en punta de verso produce al rato la palabra *ABEDUL* y que ésta engendra la palabra *ESTAMBUL*, que luego exige las reverberaciones de *TUL*. Hay otros menos evidentes estímulos. Parece fabuloso, pero la política es uno de ellos. Hay constructores de odas que beben su mejor inspiración en el Impuesto Único, y acreditados sonatistas que no segregan ni un primer hemistiquio sin el Voto Secreto y Obligatorio. Todos ya saben que éste

es un misterioso universo, pero muy pocos de esos todos lo sienten”.

El tono jocoso, la falta de seriedad en la respuesta borgeana a una pregunta que *Contra* consideraba “seria” provocó, por un lado, la furiosa respuesta, publicada en el mismo número, de Córdova Iturburu, para quien “la respuesta de Borges no debió publicarse” porque “es una burla y una disminución intencionada del problema”. Córdova Iturburu no pudo leer el gesto altamente paródico de Borges y se equivocó al tratar de responder, seriamente, a una bravuconada:

“Claro está que un arte al servicio del VOTO SECRETO Y OBLIGATORIO o del IMPUESTO ÚNICO sería, esencialmente, ridiculo. Tan ridiculo como un arte al servicio del Jabón Reuter o de los pantalones con franja de los compadritos convencionales del sainete. Pero no se trata de eso. Borges no puede dejar de saberlo. EL VOTO SECRETO Y OBLIGATORIO y el IMPUESTO ÚNICO, instituciones chatamente burguesas, opacamente liberales, pueden constituir un ideal en un comité radical o conservador o en un centro socialista y encender el verbo frenético de sus oradores. Pero el VOTO SECRETO Y OBLIGATORIO y el IMPUESTO ÚNICO, trastos inútiles del demo-liberalismo en bancarota, son cosas enteramente ajenas a eso dramático, viviente, cálido y humano que flota hoy sobre las muchedumbres trabajadoras del mundo y que se concreta en una ideología y un sentimiento revolucionario”.

La polémica que Córdova Iturburu plantea frente a la respuesta de Borges, si bien es pobre en su argumentación, marca hasta dónde *Contra* puede cumplir con las pautas del modelo elegido: la revista pudo hacer suyo el discurso irónico o paródico que caracterizaba al martinfierrismo siempre y cuando éste se encontrara delimitado en las contratapas, y siempre y cuando ese espíritu juvenilista y de picardía criolla no se desplazara a las zonas de discusión que la revista consideraba “serias”. Al mismo tiempo, el hecho de que Córdova Iturburu pusiera en duda que Borges “no habrá dejado de advertir que una sociedad se derrumba y que otra sociedad pugna por nacer entre sus ruinas” no hace sino señalar su

propia ceguera ante un proyecto literario que, sin las estridencias del surrealismo o del constructivismo ruso, reflexiona, a su modo, sobre su presente histórico. Como señala Sarlo, aunque Borges siempre trató de preservar su literatura como un espacio libre de las pasiones inmediatamente políticas, sus cuentos del treinta y del cuarenta “pueden ser leídos como una respuesta hiperliteraria no sólo a procesos europeos, donde el surgimiento del fascismo y la consolidación de un régimen comunista en la URSS preocupaban a todos los intelectuales liberales, sino también a las desventuras de la democracia en Argentina, y a la masificación de la cultura en una sociedad donde la modernización parecía no haber dejado nada en pie”. Por otro lado, es probable que la respuesta de Borges haya sido el motivo del cierre de la encuesta: “Quisimos dar a la encuesta un tono polémico, vivo, y no fue posible porque tanto elementos de la izquierda como de la derecha y del centro se han guardado sus opiniones”. Cierre del debate que, al mismo tiempo, ratificaba la concepción del arte que *Contra* ya había manifestado en sus números anteriores: “El criterio de *Contra* es siempre el mismo: el arte, hoy, debe ser revolucionario, más que estética, políticamente. Mañana deberá servir a la construcción del socialismo. Después, será el arte puro. Hay artistas maravillosos, grandes poetas y pintores, que no sienten el llamado de la hora. Ellos serán sacrificados, muy a pesar nuestro, si es que su actitud, en la vida, siquiera, en la realidad cotidiana, no es una actitud anti-burguesa y revolucionaria”.

En el último número de *Contra*, González Tuñón advertía a los lectores de los problemas de distribución que había tenido la edición anterior debido a confiscaciones, insinuaciones a los vendedores y detenciones de numerosos lectores. El conflicto creció, ya que ese quinto número fue confiscado por la policía y, como antes se señaló, González Tuñón fue encarcelado durante cinco días y debió someterse a un largo proceso judicial por la publicación de *Las brigadas de choque*. Aunque el proceso y los conflictos con la policía explican, de algún modo, el cierre de la publicación, también es plausible sostener que, al cabo de sus cinco números, el modelo de intervención elegido por *Contra* había encontrado su límite. Por un lado, la irreverencia y la mordacidad no funcionaban en un mundo en el cual los nazis estaban persiguiendo a los judíos y los fascistas encarcelaban a sus opositores. Por otro, las relaciones entre la vanguardia estética y el Partido Comunista se

habían complicado. Fue en 1933 cuando el Partido Comunista Francés expulsó a André Breton, Paul Éluard y René Crevel (y esto explicaría la centralidad de Aragon, el único surrealista que logró resolver sin mayores conflictos una concepción del arte vanguardista con su militancia comunista) y pocos meses después se instauraría el realismo socialista como la única estética posible dentro de la revolución. A pesar de su precipitado final, en su corta trayectoria *Contra* representó una propuesta que literariamente, en la Argentina, era novedosa: se trató de unir, por primera vez, vanguardia estética y vanguardia política, siendo el punto máximo de articulación de una vanguardia estética revolucionaria con una práctica política militante.

DISPERSIONES Y POLÉMICAS

Mientras la revista *Contra* buscó convertirse en la sucesora de *Martín Fierro* y le disputó a la revista *Sur* de Victoria Ocampo el carácter de heredera (en enero de 1933, cercana la fecha de la aparición de *Contra*, González Tuñón había afirmado en *Crítica* que “la revista *Sur* —que aparece en el barrio Norte— no es expresión auténtica del moderno movimiento literario argentino. Esa expresión fue *Martín Fierro*. Y lo será pronto”), los escritores que años antes se habían agrupado en Boedo, en los treinta conformaron un mapa atravesado por dispersiones y enfrentamientos.

Como se señaló, en mayo de 1931, salía a la calle *Metrópolis*. *De los que escriben para decir algo*, la revista del Teatro del Pueblo, dirigida por Leónidas Barletta. El elenco estable de Boedo reaparecía así en las páginas de sus quince números, con sus nombres más reconocidos: Alvaro Yunque, Roberto Mariani, Ramón Doll, José Portogalo, Santiago Ganduglia. Como señalan Lafleur, Provenzano y Alonso, *Metrópolis* fue un tardío retoño de Boedo y su contenido “fue un caldo espeso, resultado de la cocción, en la misma cacerola, de Carlos Marx, Gorki, Kropotkin, Proudhon, Dostoievski, Jaurès, Plejanov, Stirner, Otto Bauer y Elias Ehrenburg; todo ello condimentado con la especería autóctona del tango, la muchachita del suburbio y el malevo de cafetín”. En su primer número, *Metrópolis* continuaba con la misma polémica de años anteriores, pues el modo de diferenciarse y de definir un espacio propio era, nuevamente, con respecto al grupo de Florida:

“Hay quienes escriben para beneficio de la humanidad y hay quienes escriben para conseguir un empleo. Casi todos los literatos de Florida escribían —¡Santo Cielo!— para conseguir un puestito. Y apenas tuvieron la colocación, cumplido el objeto de su arte, abandonaron la literatura. Digamos entre paréntesis, que para bien de todos. Pero, es bueno consignarlo como ejemplo. ¿Recordáis aquel temerario poeta rubendariano de Florida, el insigne Evar Méndez? Es jefe de una oficina de Impuestos Internos, tiene un sueldito pasable y ya no escribe más versos. Otro guerrillero narcisista, Ernesto Palacio, ex anarquista, pseudo revolucionario, es secretario de no sabemos qué intervención, y ya no escribe más macanas. ¿Recordáis a Jacobo Fijman —otro converso por snobismo— autor de un libro de pavaditas? Ya no volverá a escribir: es secretario del secretario de un secretario del gobierno. Y no sería nada difícil que tuviese influencia para meternos presos. En fin, nosotros queríamos decir que por muchos libros que se publiquen, cuando no hay sincera vocación artística, con los primeros pesos malganados, el arte se lo lleva el diablo”.

Sin embargo, el campo literario de la izquierda ya no era el mismo y la sola diferenciación del grupo de Florida no bastaba para delimitar un “nosotros” con perfiles definidos. Así, por ejemplo, *Metrópolis*, en su número 7 de noviembre de 1931, polemizaba con Antonio Zamora, buscando separarse de la revista *Claridad*, de la cual el propio Barletta había sido secretario de redacción:

“Porque, digámoslo sin rodeos, el señor Samora (sic) es un bruto incapaz de poner en el papel dos palabras juntas, ni de decirlas en público, con sentido común. Tiene la mentalidad de un salchichero. Sabe hacer negocios, limpios y sucios; eso es todo. [...] Ha olvidado la explotación infame que hizo de Castelnuovo, Yunque, Mariani. Barletta, Amorim y Rodríguez, a quienes no les liquidó sus libros, con el agravante de que tampoco pagaba la imprenta [...] Ya se verá cómo ni siquiera respeta a Arlt, que es un buen negocio de librería y a quien, estamos seguros, querrá arreglar con manises. Pero esos escritores revolucionarios a que aludimos deberían te-

ner un gesto de independencia y negarse a que se les exhiba en comidas `con abundante menú`, con fines puramente comerciales. No deberían tampoco colaborar en una revista que pone el retrato de Laurencena en la tapa, salvo que el señor Samora les confiara la dirección sin restricciones. [...] En resumen: creemos que ha llegado el momento de hablar sin eufemismos. Los que a esta fecha siguen subordinándose al `melón` de Samora, sin decidirse a tomar las riendas de *Claridad*, o plantean el dilema o se deciden a disparar de la `empresa cultural` antes de que la mierda les llegue al cuello”.

Como también se señaló, el alejamiento de Barletta de la revista *Claridad* fue el primer síntoma de la dispersión del grupo inicial de Boedo y de la elección de caminos diferentes. En los años treinta, Barletta fue una figura ajena a *Claridad*, del mismo modo que



Tapa de la revista *Claridad*, Buenos Aires, diciembre de 1935.

mientras Zamora permaneció ajeno tanto a *Metrópolis* como a las otras revistas que la siguieron (*Columna*, de 1937, y *Conducta*, de 1938), Castelnuovo dirigiría su propia revista, en un sistema de críticas cruzadas que, en muchos casos, sólo revela cierta indecisión a la hora de plantear los verdaderos problemas en la constitución de una izquierda sólida en la Argentina.

Pese a la dispersión, Barletta intentó organizar, desde Teatro del Pueblo, un espacio común para convocar a escritores que provenían de diferentes zonas del campo cultural de izquierda. Fundado por Barletta el 30 de noviembre de 1930 con la finalidad, según se señalaba en su estatuto, de “realizar experiencias

de teatro moderno para salvar al envilecido arte teatral y llevar a las masas el arte general, con el objeto de propender a la elevación espiritual de nuestro pueblo”, el Teatro del Pueblo desarrolló sus primeras funciones en teatros barriales y plazas públicas. Oficialmente inauguró su temporada el 14 de febrero de 1931 en un cine de Villa Devoto, con un programa que incluyó *La conferencia*, de Mark Twain, interpretada por José Petriz; *El Cafetín*, canciones del suburbio interpretadas por Virgilio San Clemente; *La madre ciega*, boceto de Juan Carlos Mauri; *Comedieta burguesa* de Álvaro Yunque; y versos criollos recitados por Hugo D’Evieri. El programa se repitió en otras dos salas de cines de barrio hasta que Barletta alquiló la sala de la Wagneriana, ubicada en Florida 936, y allí debutaron con un repertorio integrado por *Títeres de pies ligeros* de Ezequiel Martínez Estrada, *La madre ciega* y *El pobre hogar*, de Juan Carlos Mauri. Después de gestiones, idas y vueltas, Barletta obtuvo que la Municipalidad le cediera un ruinoso local ubicado en Corrientes 465. Allí convocó, a mediados de 1931, a los escritores Álvaro Yunque, Roberto Arlt, Amado Villar, Nicolás Olivari, entre otros, a participar de Teatro del Pueblo con obras propias. Con escepticismo, la mayoría de los escritores invitados aceptó participar, a pesar de la poca confianza que les despertaba el teatro, que no era otra cosa que un salón destartado, con montones de revoque caído por los rincones, y con la compañía de actrices y actores tiritando de frío en banquitos de madera, entre quienes se encontraban Amelia Díaz de Korn, Joaquín Pérez Fernández, Pascual Nacarati, José Veneziani, Hugo D’Evieri, Virgilio San Clemente, María Novoa.

Pese a tan precarios comienzos, en muy poco tiempo la compañía sumó a nuevos actores: los hermanos Juan, Rosa y Celia Eresky, José Petriz, Tito Rey, Emilio Lommi, Josefa Goldar, Ana Gryn y Nélide Piuselli. Guillermo Facio Hebequer dibujó el logotipo de la institución: un hombre con el torso desnudo que agita la cuerda del badajo de una campana. El Teatro del Pueblo se convirtió así en una propuesta teatral alternativa, que ofreció un espacio de divulgación para las clásicas y modernas piezas extranjeras (obras de Gogol, Shakespeare, Cervantes, Tolstoi, Lope de Vega, Molière, Eugene O’Neill, Jean Cocteau, Andreiev, entre otros), y un lugar a los nuevos dramaturgos argentinos: Raúl González Tuñón, Amado Villar, Nicolás Olivari, Eduardo González Lanuza, Arturo Capdevila, Roberto Mariani, Horacio Rega Molina,

entre otros. Además, la compañía llevaba sus funciones a plazas públicas y cines de barrio, editaba boletines, programaba conferencias y publicaba *Metrópolis. De los que escriben para decir algo*, el órgano oficial del Teatro del Pueblo. En estas actividades, según Osvaldo Pellettieri, es clara una propuesta teatral que se caracterizó por una idea didáctica del teatro de acuerdo con el modelo propuesto por Romain Rolland, el activismo de sus miembros organizados en comisiones directivas, asambleas, entes de lectura, y un antagonismo explícito contra la tradición anterior, especialmente contra el teatro comercial. Como reseñó Arlt en *El Mundo*, años después de su inauguración: “La cueva de la calle Corrientes, *veinte centavos la entrada*, fue siendo conocida por el público. La gente, con excepción de ciertos intelectuales, observaba con simpatía el esfuerzo de este grupo de artistas en semilla, que con bolsas, rafia, fondos de canastas, papel y algunas lamparitas pintadas, confeccionaban los decorados. Al poco tiempo, en el Teatro del Pueblo se anunció un progreso. Los cajones de querosén fueron sustituidos por bancos de tablonés. Un humanitario carpintero fió la madera. Los actores del teatro hacían el trabajo, por turno, de ordenanzas, de lavapisos, de pintores, maquinistas, apuntadores, administradores, porteros y boleteros. Lo hacían todo. Cualquier actor de la compañía del Teatro del Pueblo puede hacer trabajos de sastre, puede confeccionar una peluca postiza, dibujar un traje, proyectar un decorado. A la fuerza ahorcan, y ellos tenían que hacerlo todo. Y lo hicieron. Lo hicieron todo, incluso su destino a través de nueve años de durísima lucha”.

También durante 1931, apareció *Nervio. Ciencias, Artes, Letras*, revista dirigida por V. P. Ferreira que, si en un comienzo se postuló como una revista que militaba por el pacifismo y en contra del imperialismo, poco después devino en una revista claramente anarquista, en la cual se publicaron artículos de Alfonso Longuet, Isidoro Aguirrebeña, S. Kaplan, Costa Iscar y textos literarios de Alfonsina, Portogalo, Yunque, Castelnuovo, C. Brumana, Campio Carpio, Aristóbulo Echeagaray.

Si bien en su primer número *Nervio* se definió como un “órgano ecléctico, independiente en absoluto, [que] tiene trazado de antemano su camino: servir lealmente de mentor a todos aquellos que se encuentran desorientados y anhelan iniciarse en la senda que conduce a la Verdad” y publicó numerosos textos literarios, muy

pronto tomó un cariz exclusivamente político y gremial, diferenciándose de las propuestas políticas de izquierda, tanto de los socialistas como de los comunistas. En octubre de 1932 sostenía:

“Resolver el problema de la desocupación y la miseria, sin resolver el de la libertad. pretender superar el capitalismo y sus contradicciones, dentro o fuera de él, con el recurso del fortalecimiento de las instituciones opresivas del Estado. fundar en la violencia de arriba, la solución del presente caos, es la reedición del círculo de Vico. De ahí la responsabilidad de las fuerzas libertarias en esta hora de violencia. De su acción y de despertar, esperemos que surja el verdadero espíritu contra la guerra, contra la violencia y contra sus culpables”.

En enero de 1934, la revista se redefinió señalando que el objetivo de su publicación era exponer la posición libertaria “frente a la realidad que nos rodea, para hacer crítica constructiva y presentar las soluciones que nuestro movimiento plantea al caos actual. Sin hacer distinciones entre unos y otros, ha conseguido ser un fuerte nexo entre todas las fuerzas revolucionarias en potencia: estudiantes, obreros, maestros, intelectuales, etc. Sin desconocer que una de ellas ha de tener preponderante actuación en la transformación y reconstrucción de la sociedad que se está gestando, alienta a todos los que en diferentes planos de ubicación, artistas, escritores, profesionales, pueden colaborar con gran eficacia en esta acción, como aliados poderosos de los trabajadores”. Por lo tanto, en su número 38 reprodujo el manifiesto de los anarquistas



Tapa de la revista Nervio, Buenos Aires, 1932

rusos *Por una Rusia libre*, fechado en diciembre de 1934 y firmado por Maximov, y se definió como una revista libertaria cuyo deber era sostener una política de alta confrontación tanto con el gobierno de Agustín P. Justo (que detenía a sus colaboradores, confiscaba sus ediciones e impidió, en más de un momento, su libre circulación) como con el resto de las fuerzas de izquierda.

En abril del año siguiente, una escisión del grupo de Boedo participó en la creación de la revista *Actualidad Económica, Política, Social*. Los primeros proyectos para sacar esta revista estuvieron en manos de dispersos disidentes del Partido Comunista y de un grupo de intelectuales liderado por Elías Castelnuovo. Finalmente, el proyecto se fue modificando y la revista que salió a la calle era un vocero oficioso del Partido Comunista. Su primera época constó de ocho números, que aparecieron entre abril y octubre de 1932 con la dirección de Castelnuovo, quien no figuró como director; su segunda época, en cambio, comenzó en febrero de 1933 con la dirección de Ricardo Aranda. Se trató de una revista que publicaba notas que vinculaban una posición marxista a las prácticas artísticas y las actividades culturales. Desde su primer número se definió como una revista marxista y publicó artículos sobre economía comunista y política internacional. Las dos firmas del ámbito literario local que prevalecieron fueron las de Roberto Arlt y Elías Castelnuovo, quienes publicaron notas en todos sus números. Arlt, por ejemplo, usó su saber de cronista profesional para registrar espacios urbanos y situaciones sociales vedados en sus *Aguafuertes porteñas* publicadas en el diario *El Mundo*. Así, escribió notas sobre los obreros que hacían huelga en los frigoríficos de Avellaneda o sobre los desocupados que vivían en Puerto Nuevo, a quienes entrevistó en compañía de un delegado del Partido Comunista. A través de sus reportajes, ilustrados con numerosas fotografías, Arlt se enfrentó a las reales condiciones de explotación en que trabajaban miles de obreros y a la miseria producida por la desocupación y la falta de vivienda. En su confrontación con los militantes obreros y con el mundo del trabajo, sus certezas como periodista e intelectual de izquierda entraron en crisis:

“El cronista está mareado. Tiene la lúgubre sensación de haberse aproximado a un pozo sin fondo. ¿Qué es un cronista?

Un señor que anda bien vestido, conversa de literatura, tiene éxitos entre gente bien vestida, y cree que el límite del uni-

verso se limita a cuatro rayas que abarcan un perímetro de ciudad construida de acuerdo a hermosas leyes de arquitectura. El cronista está marcado. [...] Cierta es que el sol entra por la ventana, que el cigarrillo humea entre sus dedos, cierto que él no necesita preocuparse de esos problemas, él no tiene que cargar bultos, ni andar descalzo en un saladero, ni cargar fardos de carne de setenta kilos. No. Él gana en una hora de escribir pavadas, lo que estos hombres ganan en un día de correr bajo el control de un reloj, y los gritos de un capataz defendido por los máusers de la policía del frigorífico, y los máusers de la policía del Estado. [...] El cronista chupa su mate en silencio y piensa: —Me he venido con este magnífico sobretodo a ver a esta gente sin trabajo. ‘Hay que defender a la patria de estos elementos disolventes.’ Hijos de puta. Así que la mujer que se desmaya, la otra que revienta tísica, la tercera que tiene que abrirse de piernas al capataz, son gente de ideas subversivas. ¡Treinta y cinco centavos la hora! Y, seguramente, en Londres, las hijas de estos accionistas se quejan de que la atmósfera no es lo suficiente templada para ir a hacer el amor poético en un bosque más poético aún”.

En *Actualidad*, Castelnuovo y Arlt encontraron un espacio de militancia que se tradujo en la formación de la Unión de Escritores Proletarios en mayo de 1932. Sus tres objetivos principales eran: la defensa de la Unión Soviética, la lucha contra la guerra imperialista, y la lucha contra el fascismo y el socialfascismo. Su comisión directiva estaba formada por Elías Castelnuovo (secretario), Carlos E. Moog (prosecretario), Simón Slawsky (tesorero), y los vocales: Roberto Arlt, J. Boero, J. Alonso, Bartolomé Bossio; Suplentes: León Klimosky y Osvaldo Dighero. Asimismo, y en abierta confrontación con el Teatro del Pueblo de Barletta, *Actualidad* promovió la formación del Teatro Proletario con la intención de “formar un amplio frente con el cual iniciar de inmediato una formidable ofensiva contra el teatro burgués”. En sus doce números, la revista mantuvo álgidas polémicas con *Claridad*, a la que acusaba de socialdemócrata, y con *Metrópolis*, cuyas críticas apuntaban a la figura de su director: “Elegimos a Leónidas Barletta por cuanto éste constituye la expresión de toda una tendencia de la burguesía en sus instantes actuales: la que utiliza el arte bajo un

disfraz izquierdista, aparentemente de ideas sociales, para, a fin de cuentas, no realizar otra tarea que el apuntalamiento y la defensa de esa misma burguesía que muchas veces parece despreciar o combatir, pero de la que en realidad son sostenes, tal y como el arte burgués mismo”, explicaba Carlos Moog en el número 3, de junio de 1932.

Dos años más tarde, en agosto de 1934, comenzaría a publicarse *Feria*, cuyos dos primeros números fueron dirigidos por Arturo Cambours Ocampo, y sus cuatro restantes por Carlos Serfaty. Su primer número apareció como un diario, con el formato tabloide; a partir del número siguiente, se transformó en una revista. En su tercer número, cambió de director y modificó su título: *Feria. La Revista de los Escritores*. Se trató, sobre todo, de una revista literaria que intentó concitar el interés de los jóvenes escritores a través de cierta prescindencia de la política y de la no intervención en las discusiones políticas por considerar que “la juventud que piensa, desprecia a la política, a la nuestra se entiende, porque desprecia a los políticos”. En sus fúgaces siete números, también se propuso sostener una posición equidistante con respecto a las polémicas estéticas:

“*La Revista de los Escritores*, vale decir: la voz de los hombres que escriben. Sin distinciones de estilos, de grupos, de banderías. Ni Florida ni Boedo. Ni pasatistas, ni neosensibles, ni novísimos. Escritores que necesitan decir algo que no puede ser dicho en las columnas mercenarias de los rotativos o las páginas chirles de las revistas de gran tiraje. Que no puede ser dicho allí, o por el tono o porque allí el espacio para el talento es menguado y cedido tarde y como gracia de piedad. *Feria. La Revista de los Escritores* y para los escritores, anhela que cada hombre o mujer que escribe, tenga en ella su tribuna. Es el único plan, es el único motivo. Quisiera su Dirección que todos comprendieran. Que todos sintieran eso. Que todos dijeran: Nuestra Revista. Porque *Feria* intentará ser desde hoy, eso: ‘Nuestra Revista’, la revista de los escritores”.

Al no sentar posición con respecto a ninguna postura, ni estética ni política, su staff de redacción fue altamente ecléctico; así, en sus páginas se publicaron artículos tanto de jóvenes escritores como

de viejos militantes socialistas: Arturo Cerretani, José Portugalo, Adolfo Likerman, Manuel Antonio Valle, Manuel Francioni, Aristarco el Justo, César Tiempo, Rafael Cansinos Assens, María Julia Gigena, José Salas Subirat, José Gabriel, Leónidas de Vedia, Álvaro Yunque, Vicente Barbieri, Alberto Gerchunoff, Antonio Gil, Juan L. Ortiz.

UNIDAD CONTRA EL FASCISMO

La consolidación del stalinismo en la Unión Soviética, el estallido de la guerra civil española y el cambio de estrategia de la Tercera Internacional, que desde 1935 pasó a impulsar la formación de frentes populares, marcaron un corte decisivo en la franja izquierdista del campo intelectual y político argentino. A partir de 1936, el antifascismo fue el aglutinante que contribuyó a dirimir las polémicas internas y que dio coherencia al compromiso político de intelectuales que provenían de sectores que, muy poco antes, habían estado enfrentados. Ese clima se suspendió provisoriamente entre 1939, con la firma del tratado Von Ribbentrop-Molotov entre la URSS y la Alemania nazi, y 1941, cuando comenzó la invasión alemana al país de los soviets. La situación internacional hizo que los intelectuales comunistas se vieran en una situación incómoda en esos años: reaparecía en el partido el diagnóstico de la guerra como conflicto interimperialista y se postergaba la estrategia de frente popular para retomar, demasiado apresuradamente, una táctica sectaria. Sin embargo, esos cambios de 1939-1941 no arraigaron entre los escritores cercanos al partido; el retorno de 1941 a las consignas previas, que incluían la reivindicación de la democracia, parecía contar en cambio con un apoyo mucho mayor y empalmar con tradiciones más firmes.

El viraje de 1935 dio como productos más representativos la organización de la AIAPE (Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores), el 28 de julio de ese año, y la fundación de las revistas *Unidad y Dialéctica*. La defensa de la cultura frente al ataque del fascismo fue el principal proyecto de la AIAPE, una asociación de intelectuales de centro y de izquierda liderada por hombres vinculados al Partido Comunista. Obligados, por el llamamiento a conformar frentes populares, a aliarse con sectores liberales y democráticos no revolucionarios, los comunistas bus-

caron entonces organizar los lineamientos ideológicos de la agrupación. Pero como la AIAPE intentaba ante todo sostener un frente de intelectuales antifascistas que se opusiera al crecimiento de la derecha, sus principios, como demuestra James Cane, eran generales y vagos pues giraban en torno a las nociones de democracia, justicia y libertad. Desde sus comienzos, Anibal Ponce fue el líder natural de la nueva organización, y su presidente hasta octubre de 1936, momento en el que fue expulsado de su cátedra de psicología y debió exiliarse en México. Fue entonces reemplazado por Emilio Troise, con quien la AIAPE asumió un discurso más nacional para convocar a los antifascistas, hecho que ocasionó, en más de un momento, conflictos internos entre comunistas, socialistas y trotskistas. Así incorporó a radicales como Arturo Frondizi y a socialistas reformistas como Roberto Giusti. El órgano periodístico de la AIAPE fue la revista *Unidad. Por la Defensa de la Cultura*, que apareció en enero de 1936 en formato tabloide. En



Anibal Ponce, noviembre de 1928.

sus ocho números prestó particular atención a aquellos ensayos y artículos que reflexionaban sobre el Frente Único en París, y publicó noticias sobre la guerra civil española y denuncias sobre los continuos actos de censura e intimidación por parte del gobierno nacional, como la condena a Raúl González Tuñón, la negación del derecho de asilo al exiliado boliviano Tristán Maroff, el encarcelamiento de Héctor Agosti, el secuestro del libro *Tumulto* de José Portogalo y la acusación al pintor Demetrio Urruchúa, que había colaborado con sus ilustraciones.

Mientras tanto, la revista *Dialéctica* apareció en mayo del mismo año 1936 dirigida por Anibal Ponce, presidente de la AIAPE. A diferencia de *Uni-*

dad, la revista se propuso, en su primer número de mayo de 1936, poner al alcance de los estudiosos los textos de la biblioteca socialista tradicional, así como artículos que, apelando al materialismo dialéctico, renovaban la ciencia y la cultura para “esclarecer —mediante el tratamiento directo de los clásicos del proletariado— los caminos que conducirán a la liberación del hombre”. En sus siete números, publicó artículos de Carlos Marx, Georg Plejanov, Anatoly Lunacharsky, Georg Lukács, entre otros, que todavía no habían sido traducidos al castellano. La única firma de autor nacional fue la de Aníbal Ponce quien, en su sección “Comentarios marginales”, se dedicó a analizar cada uno de los artículos publicados. La revista entonces proveyó materiales de lectura, reseñas de libros y de revistas sólo de izquierda con la idea de armar una enciclopedia del intelectual de izquierda.

La necesidad de sostener propuestas culturales capaces de unificar a diversos sectores de izquierda y de centro atenuó notoriamente el tono revolucionario que caracterizaba a las revistas de izquierda de comienzos de los años treinta. El ejemplo que mejor ilustra estos dos momentos de la izquierda argentina es la posición de Raúl González Tuñón, en quien se produjo, claramente, una conversión entre la radicalidad revolucionaria de *Las brigadas de choque* de 1933 y el tono conciliatorio de sus artículos periodísticos publicados en *Unidad* en 1936.

En efecto, el largo poema publicado en *Contra* en agosto de 1933, que puede ser leído como el programa estético-político de la revista, se ubicaba —como ha señalado Jorge Boccanera— entre la gestualidad anarquista y los manifiestos vanguardistas, para gritar un llamamiento poético y político: “Formemos nosotros, cerca ya del alba motinera, / las brigadas de choque de la Poesía. / Demos a la dialéctica materialista el vuelo lírico / de nuestra fantasía. / ¡Especialicémonos en el romanticismo de la revolución!”. El poema repetía anafóricamente la palabra “contra” y diseñaba un nosotros y un ellos a través del cual armar un mapa del cual, salvo los comunistas, todos quedaban excluidos:

“... y Nicolás Repetto —Bueno, gracias / y José Nicolás Matienzo cuidando la Constitución / como si la Constitución fuera una hembra / —sí, la Constitución es una hembra en estado de descomposición / y nosotros, únicamente nosotros los comunistas, auténtica, / legítimamente nos reimos de esa

Constitución burguesa / y de la democracia burguesa / pero
 no de la democracia que proclamamos / porque nosotros que-
 remos la dictadura / pero la dictadura que asegurará la ver-
 dadera libertad / de mañana. / Nosotros contra la democracia
 burguesa / contra / contra / contra la demagogia burguesa, /
 contra la pedagogía burguesa, / contra la academia burguesa.
 [...] Contra la masturbación poética, / contra los famosos sal-
 vadores de América / —Palacios, Vasconcellos, Haya de la
 Torre— / Contra / contra / contra las ligas patrióticas y las
 inútiles / sociedades de autores, escritores, envenenadores. /
 Contra los que pintan, ¡todavía! cuadros para los burgueses,
 / contra los que escriben, ¡todavía! libros para los burgueses.
 [...] Contra el radicalismo embaucador de masas / —fuente
 de fascismo— / dopado con el incienso de vagas palabras /
 —sufragio libre, democracia, libertad— / ellos, los
 masacradores de la Semana de Enero, / ellos, los metralleros
 de Santa Cruz. [...] Los social-demócratas, los católicos, los
 nacionalistas, / tienen también el vuelo de los cuervos. / Cer-
 ca de ellos, hay que destrozarnos con un tiro de escopeta. /
 Porque ellos anuncian y provocan la peste en la tierra”.

Violento y provocador, el yo del poeta exhibía en el poema sus errores políticos del pasado (“lamento no haber sido lo que se dice un ‘subversivo auténtico’ / lamento haber perdido tantos bríos / en los periódicos”), exhortaba a los camaradas poetas a asumir una actitud revolucionaria y a conformar una “brigada de choque” que hiciera posible la instauración del arte puro en una sociedad sin clases, e impulsaba la guerra en contra de las instituciones, las leyes, la democracia y la demagogia burguesas: “...Para abatir al imperialismo. / ...Por una conciencia revolucionaria. / —y aquí nosotros contra la histeria fascista, / contra la confusión radical, / contra el socialismo tibio. / Contra / contra / estar contra / sistemáticamente contra / contra / Yo arrojo este poema violento y quebrado / contra el rostro de la burguesía”.

Otra fue, en cambio, la posición política de González Tuñón tres años después, cuando en el primer número de *Unidad* publicó un artículo en el cual instaba a todos los intelectuales, “por sobre todas las creencias e ideologías”, a luchar por un Frente Popular capaz de frenar los embates del fascismo criollo. Esta posición política conciliatoria, y que buscaba limar las diferencias internas

entre socialistas, comunistas y trotskistas, alteró también su percepción de la ciudad: mientras que en 1933 González Tuñón había representado a Buenos Aires como una ciudad “sucio como su río”, la “super calamidad de la semicolonias South America / que nunca ha dado un bandido perfecto / ni un gran poeta”, en 1936, en el tercer número de *Unidad*, se mostraba esperanzado: “Estamos en una ciudad de hombres fuertes, sanos, vivos. Estamos formando nosotros, escritores, artistas, poetas, periodistas, el frente intelectual popular. Somos ya la brigada de choque del pensamiento antifascista, nosotros, tal vez de diversas creencias e ideas políticas pero unidos en la lucha por la defensa de la cultura amenazada por los hachadores, por los estranguladores, por los que queman libros, por los que censuran, inhiben y matan”.

La conversión de buena parte de la izquierda revolucionaria en uno de los componentes del frente antifascista marcó el final de un momento de alta confrontación política, en el cual los intelectuales reflexionaron acerca de la función del arte en una sociedad capitalista, de las formas estéticas con las cuales crear un estado de conciencia revolucionaria y del arte como arma fundamental de la lucha política. En el nuevo frente se reencontraron, finalmente, los hombres de *Claridad*, animados de una firme voluntad pedagógica hacia los grupos populares, inclinados a apreciar el realismo de denuncia y la ficción que dejara “alguna enseñanza”, cautelosos ante los experimentos rupturistas en lo formal, con quie-



Xilografía de Enrique Chelo, representando una movilización del Frente Popular, 1936.

nes, en el inestable cruce de la política y las letras, habían intentado reconciliar ambas vanguardias: Zamora, González Tuñón y Barletta volvían a hallar un lugar en el cual convivir. La realidad internacional, signada por la guerra civil española y la guerra mundial, se impuso a los debates locales y reestructuró nuevamente el campo cultural y político. En efecto, si, como afirma François Furet, la Revolución Rusa de octubre de 1917 había adquirido en los años de la posguerra la categoría de acontecimiento universal, fue con el ascenso de Hitler y con la guerra civil española de 1936 cuando se concentraron y simplificaron las pasiones políticas del siglo al reducir la complejidad en dos bandos, fascistas y antifascistas. Por lo tanto, las cuestiones debatidas, dentro de los Estados o entre ellos, fueron de carácter transnacional y en ellas los intelectuales y los artistas fueron los que se dejaron ganar más fácilmente por los sentimientos antifascistas: como señala Eric Hobsbawm, los intelectuales occidentales fueron los primeros en movilizarse en masa en contra del fascismo; y si al comienzo formaban un estrato todavía reducido, fueron sumamente influyentes porque, entre otras razones, incluyeron a los periodistas que en los países no fascistas de Occidente cumplieron la función de alertar a sus lectores acerca de la naturaleza del nacionalsocialismo. Esa necesidad de aunar todos los esfuerzos en frenar el avance del nazismo y el fascismo, y en conformar un Frente Único de intelectuales puso en el centro de las preocupaciones valores más universales, como los de democracia, justicia y libertad, opacando la idea de la revolución posible y cercana que rigió el pensamiento y la militancia de muchos intelectuales a comienzos de los años treinta.

BIBLIOGRAFÍA

- Aricó, José. "La polémica Arlt-Ghioldi. Arlt y los comunistas", en *La Ciudad Futura*, N° 3, diciembre de 1986.
- Boccanera, Jorge. "El viaje de González Tuñón", en Raúl González Tuñón, *Juancito Caminador*. Buenos Aires, Ameghino, 1998.
- Cattáneo, Liliana. *La izquierda argentina y América Latina en los años treinta. El caso de Claridad*, tesis de posgrado del Instituto Di Tella, Buenos Aires, 1992.
- Cattaruzza, Alejandro. *Historia y política en los años treinta: comentarios en torno al caso radical*. Buenos Aires, Biblos, 1991.
- Ciria, Alberto. *Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-1946)*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
- Gramuglio, María Teresa. "Sur en la década del treinta: una revista política", en *Punto de Vista*, N° 28, noviembre de 1986.
- Gorelik, Adrián. *La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1998.
- Halpcrin Donghi, Tulio. *Argentina en el callejón*, Buenos Aires, Ariel, 1995.
- Hobsbawm, Eric. *Historia del siglo XX*, Barcelona, Critica, 1997.
- Lafleur, Héctor René; Provenzano, Sergio y Alonso, Fernando. *Las revistas literarias argentinas, 1893-1967*, Buenos Aires, CEAL, 1968.
- Larra, Raúl. *El hombre de la campana. Leónidas Barletta*, Buenos Aires, edición homenaje "Amigos de Aníbal Ponce", 1987.
- Orgambide, Pedro. *El hombre de la rosa blindada*, Buenos Aires, Ameghino, 1998.
- Pellettieri, Osvaldo. "El teatro independiente en la Argentina (1930-1965): intertexto europeo y norteamericano y realidad nacional", en Fernando de Toro (ed.), *Semiótica y teatro latinoamericano*, Buenos Aires, Galerna / IITCTL, 1991.
- Romano, Eduardo. *Sobre poesía popular argentina*, Buenos Aires, CEAL, 1983.
- Romero, José Luis. *Las ideas políticas en Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1986.

Saítta, Sylvia. *El escritor en el bosque de ladrillos. Una biografía de Roberto Arlt*. Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

Sarlo, Beatriz. *Borges, un escritor en las orillas*. Buenos Aires, Ariel, 1995.

———. *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1988.

Sebreli, Juan José. *Martínez Estrada. Una rebelión inútil*. Buenos Aires, Catálogos, 1986.

Sosnowski, Saúl (ed.). *La cultura de un siglo. América Latina en sus revistas*. Buenos Aires, Alianza, 1999.

Terán, Oscar. "Anibal Ponce o el marxismo sin nación", en *En busca de la ideología argentina*, Buenos Aires, Catálogos, 1986.

Viñas, David. *Literatura argentina y política: de Lugones a Walsh*, Buenos Aires, Sudamericana, 1996.

———. "Martínez Estrada, de *Radiografía de la pampa* hacia el Caribe", en Ezequiel Martínez Estrada. *Radiografía de la pampa*, Colección Archivos-Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 1993.

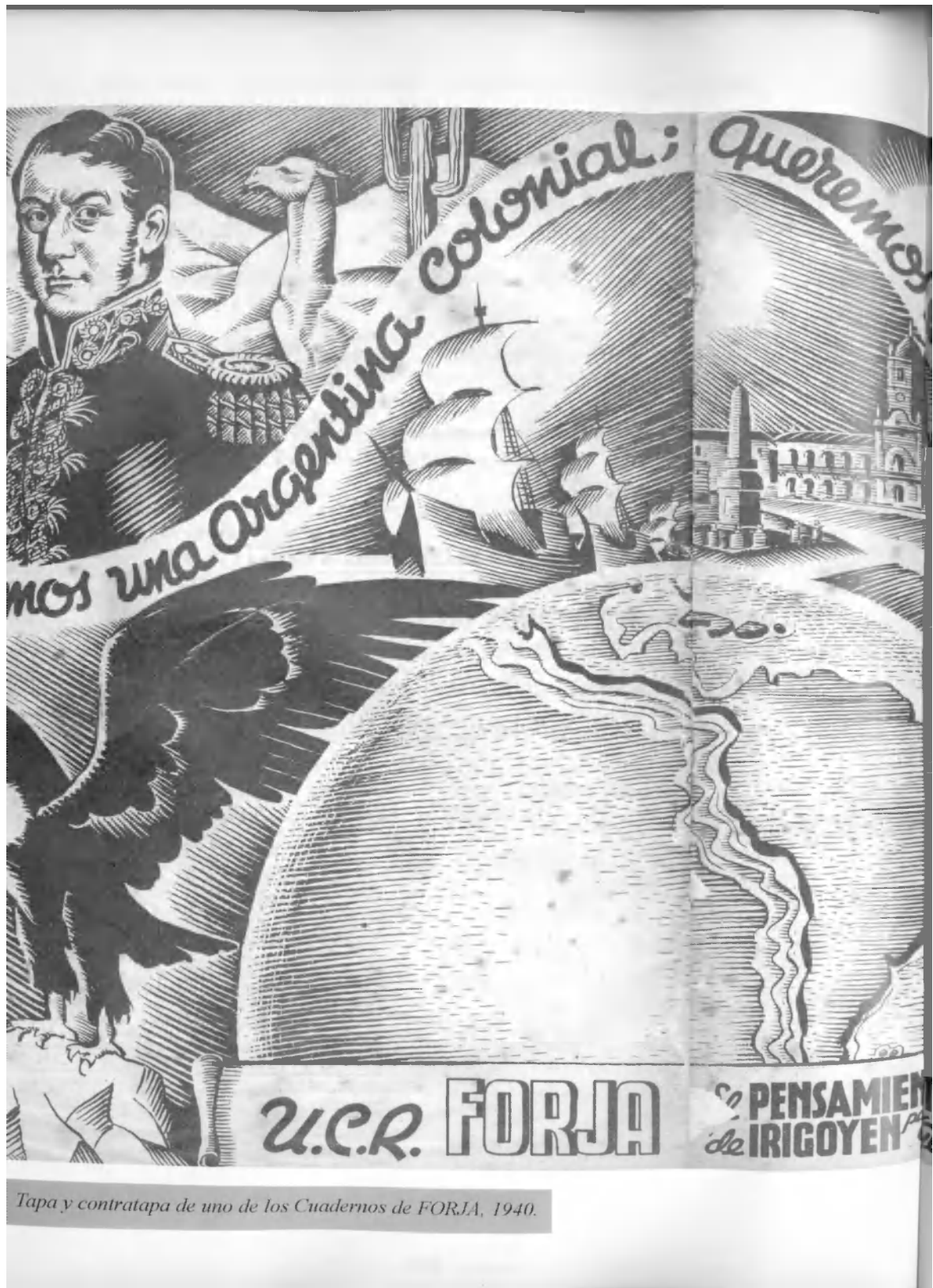
Warley, Jorge. *Vida intelectual en la década de 1930*, Buenos Aires, CEAL, 1985.

LA PRESENCIA DEL
PASADO

X

*Descifrando pasados: debates y
representaciones de la historia nacional*

por ALEJANDRO CATTARUZZA



Tapa y contratapa de uno de los Cuadernos de FORJA, 1940.

LA PRESENCIA DEL PASADO



El 23 de mayo de 1942 unos 18.000 alumnos de las escuelas primarias de la Capital se reunieron en la Plaza de la República para conmemorar el cercano aniversario de la Revolución de Mayo. El Consejo Nacional de Educación había organizado el acto y, de acuerdo con *El Monitor de la Educación Común*, los escolares habían formado en “16 columnas de escuadrones”. Luego de que el vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo, Ramón Castillo, izara la bandera, los asistentes pudieron escuchar al presidente del Consejo sosteniendo que “la voz de la tradición nacional [...] clama sin cesar que [...] el pueblo argentino debe estrechar filas, sin distingos que lo dividan, para que se cumpla hoy más que nunca el preámbulo de nuestra carta fundacional”. La evocación de la Constitución fue apenas anterior a la del lema “Dios, patria y hogar”.

Dirigiéndose a los maestros, el funcionario les recordó que su tarea era hacer que “la escuela nacional sea el crisol en que se funden las mejores energías de la raza”. A continuación, “los abanderados

pasaron a colocarse al frente de sus respectivas escuadras, y comenzó el desfile hasta la Plaza de Mayo. Las columnas infantiles, a cuya cabeza iban las autoridades, marchaban paralelamente, formadas de a ocho”, y depositaban su ofrenda floral al pie de la Pirámide.

En esa ocasión, algunos aspectos del acto obedecían a una circunstancia específica, caracterizada por la neutralidad que el gobierno había decidido ante la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, las movilizaciones de alumnos no era excepcionales. Ese mismo año, el Día del Himno, 1.700 escolares desfilaban en el Consejo Escolar Número 2 de la Capital. En 1941, frente al monumento a San Martín, 5.000 niños lo habían hecho el 17 de agosto. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires impulsaban también celebraciones de este tipo. El 9 de julio de 1937, el gobernador Fresco había presidido la jura de la bandera en La Plata; allí tuvo lugar el desfile escolar. El discurso fue transmitido por radio a las plazas del interior de la provincia, donde se realizaron ceremonias similares. El mismo año se aprobó una ley por la cual se establecía que el 20 de junio se celebraría en todo el país el Día de la Bandera.

El calendario de la liturgia patriótica tomaba, por entonces, una forma casi completa. Desde 1930, se habían agregado nuevas efemérides a las tradicionales, como ocurrió con la celebración del Día de la Escarapela, instituida por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública en 1941. Sin embargo, quedaban dudas acerca de las características materiales de los símbolos patrios: recién en 1942 se expedía una comisión específica integrada en su mayoría por miembros de la Academia Nacional de la Historia, que definió colores, diseños y versiones “auténticos” de la bandera, el escudo y el himno. El Estado tomaría posición, por decreto, en 1944. La cuestión de los colores de la bandera hizo que algún diputado advirtiera contra un posible cambio; así había comenzado la guerra de España, sostenía. De todas maneras, el asunto no alcanzó a desatar las pasiones que, en 1927, había provocado la decisión del presidente Alvear de fijar una versión del himno, que había llevado a campañas periodísticas intensas y a un episodio de represión policial.

Continuaba de este modo, en los años treinta, el esfuerzo estatal por definir los atributos de esos símbolos que había comenzado en el siglo XIX. El Estado convocaba a una de las principales asocia-

ciones de historiadores para fundar la decisión, reconociendo que sería la suya una opinión autorizada. Los altos funcionarios del área de educación también recuperaban antiguas preocupaciones y modos de solucionar los que concebían como problemas, e insistían en la celebración de fiestas patrias con el objetivo de afianzar la cohesión social y los sentimientos de nacionalidad, fórmula que en la época admitía sentidos diversos. Grupos sociales amplios, por otra parte, se sentían involucrados en las discusiones en torno al himno nacional, y celebraban en multitud de pequeños ámbitos locales las efemérides patrias.

Los historiadores, el Estado, los partidos políticos, los intelectuales que reflexionaban sobre las peculiaridades nacionales en ensayos que siempre incluían una perspectiva histórica, parecían entender en los años treinta —aunque ésta no fue una característica exclusiva del período— que el pasado podía tener alguna eficacia sobre la situación presente. Pero en tiempos agitados como aquéllos, las imágenes de la historia de la Argentina no fueron nítidas y, en razón de las incertidumbres que se vivían, tampoco se alineaban estrictamente con las posiciones políticas asumidas. Actitudes diferentes ante el presente, que pretendían legitimarse apelando al pasado, encontraban en los años treinta linajes comunes en los cuales inscribirse. Tampoco se trataba de grandes tradiciones interpretativas cuyo choque ocupara todo el campo de los debates sobre la historia; por el contrario, esas interpretaciones estaban bosquejándose o formulando una nueva versión de sí mismas, y lo hacían en la propia discusión, que se libraba en muchos frentes. Esas polémicas fueron la forja de las interpretaciones, que no llegaban a ellas completas y acabadas. La Segunda Guerra Mundial hizo que las posiciones se tornaran más firmes, aunque no ganaran demasiado en precisión.

Junto a las polémicas, había también certezas compartidas. Los historiadores de todos los grupos e instituciones estaban convencidos de que la suya era una empresa “científica y patriótica”, cuyo objetivo era indagar lo que llamaban, en palabras del presidente de la Academia Nacional de la Historia, Ricardo Levene, el “alma de la nación”, y los funcionarios, a pesar de sus diferencias ideológicas, confiaban en que la enseñanza de la historia fortalecería entre los sectores populares el sentimiento patriótico, aunque ofrecieran versiones distintas de ese patriotismo. Prácticamente todos coincidían, además, en una cuestión de contenido: era el gaucho el



*Ricardo Levene habla en el Museo Histórico Nacional.
Sentados, 1) Emilio Ravignani, 2) Miguel Ángel Cárcano,
y 3) el presidente Ortiz, circa 1939.*

tipo social representativo de la nacionalidad. Los partidos, a su vez, estaban seguros de que sus respectivos diagnósticos sobre el pasado explicaban sus posiciones presentes y, hacia los tempranos años cuarenta, cada grupo, incluyendo a la izquierda, proclamaba nutrirse de la auténtica tradición nacional.

TRADICIONES, GRUPOS Y PARTIDOS POLÍTICOS EN LA INVENCION DEL PASADO NACIONAL

Durante la década de 1930, la mayoría de las identidades partidarias estaba, en lo que hace a los aspectos ideológicos, en trance de construcción o de ajuste. La justificación de la toma de posición de las agrupaciones quedaba, con frecuencia, a cargo de los intelectuales, y su relación con los partidos era de distinta naturaleza, como también lo era la estructura de las agrupaciones. El

socialismo, por ejemplo, había cosechado algunas adhesiones; el Partido Comunista variaba su actitud hacia ellos según la etapa de la estrategia que estuviera atravesando, pero conservaba cierta capacidad de convocatoria. El nacionalismo fue, inicialmente, un movimiento de intelectuales, mientras que con el radicalismo ocurrió que varios grupos culturales creyeron ver en ese movimiento el agente útil para construir la sociedad que en otros ámbitos habían soñado, y se atribuyeron el papel de guías doctrinarios.

A su vez, las situaciones coyunturales locales e internacionales desafiaban las explicaciones disponibles, e impulsaban modificaciones, a veces profundas y otras efímeras, en las actitudes de los partidos. Así, los activistas culturales del radicalismo discutieron con continuidad la cuestión de la intervención estatal en la economía, que se confundía con los debates sobre los destinos del liberalismo y la democracia. Grupos de la izquierda cultural y partidaria asumieron la cuestión del imperialismo, y el manifiesto fundacional de FORJA fue uno de los textos discutidos. Las oscilaciones del Partido Comunista entre la estrategia de clase contra clase, la de frente popular, la de antiimperialismo vehemente de 1939 a 1941 y la de unión democrática contra el fascismo, fueron también evidentes. Deben sumarse a estos ejemplos las evoluciones que siguieron los grupos nacionalistas: muchos de ellos pasaron del conservadurismo radicalizado de fines de los años veinte a posiciones que pueden llamarse fascistas. En el conjunto nacionalista suele incluirse también a la mencionada FORJA, aunque su origen radical obliga a tomar precauciones; tampoco el forjismo definió su programa de una vez y para siempre.

El cruce de desplazamientos ideológicos de envergadura con decisiones coyunturales, que afectaba a todo el mundo político, tuvo una influencia crucial en los modos en que cada grupo leía la historia de la sociedad en la que actuaba. Esa lectura era precisamente uno de los elementos a los que recurrían para explicar cada toma de posición ante la realidad.

El radicalismo solía proponer una visión del pasado nacional que en sus rasgos generales se acomodaba a la tradicional, con alguna modificación. Mayo era concebido como el momento fundacional; la dictadura rosista era criticada; se reivindicaban los héroes de la organización nacional y se subrayaba la traición del roquismo a ese programa. Por otra parte, a lo largo de la década todos los sectores internos ejecutaron con tesón un ejercicio ima-

ginario que el radicalismo había ensayado desde su creación: el enlace del partido con la historia nacional. Cuando los intelectuales y dirigentes radicales narraban la historia de su agrupación, relataban —o creían relatar— la historia de la nación. El espíritu del radicalismo habría estado presente en Mayo a través de la acción de Moreno, o en la lucha contra Rosas, que el recién insurrecto Arturo Jauretche evocaba en el poema gauchesco *El Paso de los Libres*, de 1934. Todo el radicalismo sostenía que existía sólo una batalla importante, que ocupaba por completo el escenario político e histórico, enfrentando al privilegio con la nación desde Mayo de 1810, en un eterno y decisivo combate. El argumento continuaba, naturalmente, sosteniendo que la nación era expresada políticamente por la UCR. Esta manera de concebir la historia y el presente era funcional a la resistencia, clásica en la cultura política argentina, al reconocimiento de la pluralidad de representaciones.

De todos modos, en el radicalismo, que desde el punto de vista ideológico estaba todavía lejos de definir un perfil preciso, las unanimidades no eran absolutas. En 1930, por ejemplo, el conspirador militar de 1893 y 1905 Lauro Lagos, ex diputado nacional y funcionario del partido, abrió su libro *Doctrina y acción radical* con un homenaje a Dorrego; la obra contenía apreciaciones críticas hacia Yrigoyen. Tres años después, el grupo yrigoyenista del Ateneo Radical Bernardino Rivadavia celebraba un acto para reivindicar el “radicalismo americanista de Yrigoyen”. Allí, una apasionada militante aludía en su discurso a las rebeliones radicales de esos años, destacando que una de ellas se había producido en Entre Ríos, “cuna y madre de la gloria libertadora de 1852”, que había terminado con el gobierno de Rosas. Quien en cambio elogiaba la política exterior de Rosas, en 1934, era el ministro de Interior de Justo, Leopoldo Melo, radical pero antipersonalista, en un discurso público que mereció el elogio del nacionalista Julio Irazusta.

A pesar de los matices, aquello que inmediatamente después del golpe de Estado del 6 de setiembre rechazaba el radicalismo en conjunto era la interpretación de sus adversarios que hacía de Yrigoyen un nuevo Rosas y que, en ocasiones, veía en Uriburu un Lavalle de la hora. Los radicales pronto sostuvieron que era en cambio Uriburu el heredero lejano del rosismo. En los tiempos cercanos al derrocamiento, pocos radicales deseaban que sus gobiernos fueran comparados con los de Rosas, a pesar de que en el

movimiento de rehabilitación iniciado en 1934 participarían algunos de ellos.

Laurentino Olascoaga, ex funcionario radical, por ejemplo, participó en la Junta por la Repatriación de los Restos de Rosas, creada en 1934, junto con Dardo Corvalán Mendilaharsu, también dirigente radical, colaborador del diario *La Nación* y miembro correspondiente de la Junta de Historia y Numismática, institución que se transformaría en Academia Nacional de la Historia. Más notorio fue el caso de Julio Irazusta, antiguo hombre de *La Nueva República* y uno de los fundadores de la interpretación revisionista a través de la obra que publicó junto con su hermano Rodolfo, *La Argentina y el imperialismo británico*, en 1934. Unos años después, en ocasión de la campaña de Alvear para la elección presidencial, Irazusta se afilió a la UCR. Los itinerarios posibles que se abrían en los años treinta eran, de este modo, muchos: el rosista Irazusta apoyaba a Alvear, mientras que Jauretche, antirrosista hasta hacía muy poco, se empeñaba en la prédica forjista.

La izquierda, por su parte, se encontraba sacudida por los debates que enfrentaban a los partidos que la constituían, y no lograba organizar una interpretación compartida. Hacia agosto de 1934, antes del cambio a la línea de frentes populares, la revista *Soviet* del Comité Central del Partido Comunista publicaba un artículo de Rodolfo Ghioldi sobre J. B. Alberdi; se cumplían cincuenta años de su muerte, y los homenajes eran corrientes. El artículo trazaba las líneas centrales de la interpretación comunista oficial de la historia argentina, señalando que la obra de Alberdi se vinculaba a la “llamada ‘tradición de Mayo’, que nadie define claramente”. Para muchos, “esa tradición de Mayo sería la encarnación de la democracia. El coloniaje era el feudalismo; Mayo, la democracia”. Ghioldi, impugnando esta versión, sostenía en una rápida resolución de lo que más adelante sería el problema del modo de producción dominante: “Es ésta una de las múltiples falsificaciones de la historia argentina. Antes y después de Mayo hubo el régimen feudal”. Alberdi, como Echeverría, Sarmiento y Mitre, “temía fundamentalmente a las masas”. Pero, concede irónico Ghioldi, “Alberdi tiene sus propios méritos, y son principalmente su desarrollo consecuente de una política de entrega al capital extranjero y su toma de partido por los caudillos feudales del litoral en las luchas internas entre los bandos de hacendados”.

Alberdi habría mirado con simpatía la obra de Rosas porque

“supo contener los levantamientos de la masa campesina, en plena ebullición por la sumisión forzada y violenta al régimen del salario”. Esto explicaría también el legado que San Martín hizo de su sable: “Es que en el fondo, los personajes de la historia argentina han sabido apreciar el inmenso servicio que Rosas prestó a la causa feudal, cimentando los privilegios de los hacendados y de la gran propiedad”. Todos ellos “propiciaban un régimen de orden bajo formas monárquicas. Rosas, sin monarquía, les dio el orden: por eso el gran reconocimiento de San Martín, de Alberdi, de Urquiza”.

Estas opiniones, publicadas en una revista oficial del partido, no sólo eran intervenciones en la discusión sobre el siglo XIX. En el artículo referido a Alberdi, el sentido de la operación era explícito: “El congreso socialista de Santa Fe, previo repudio del marxismo, declara que las fuentes ideológicas del Partido Socialista deben buscarse en Alberdi, Sarmiento, Mitre. La burguesía, la pequeña burguesía, el PS, la intelectualidad, buscan de paralizar al proletariado amarrándolo a la ideología alberdiana”, manifestaba Ghioldi al comienzo de su trabajo. El cierre era mucho más duro: Alberdi era el “hombre que la reacción y el socialfascismo adelantan en la cruzada antimarxista. El vocero de los caudillos feudales litoralenses y del capital extranjero es agitado ahora ante las masas”, que Ghioldi imagina en plena movilización, para “corromperlas ideológicamente”.

En cuanto al panteón nacional del Partido Socialista, Ghioldi era preciso. El PS había afianzado ya su lectura del pasado, construyendo una tradición nacional con la cual filiarse. Alfredo Palacios la planteaba, de manera sumaria, al reincorporarse al partido en 1930, recuperando “como patrimonio de nuestro pueblo la nobleza espartana de San Martín, el idealismo febril de Rivadavia, la progresista inquietud de Alberdi, el anhelo ascendente de Sarmiento, el justiciero fervor de Echeverría, el sentido democrático de Mitre”. El pensamiento de Mayo se hacía en esta versión “libertador y justiciero”, y Palacios entendía que “en la tradición argentina está el germen de la democracia futura”.

La inclusión de San Martín en la crítica comunista era una manifestación contra la vasta acción que llevaba adelante el gobierno justista, junto a sectores del ejército, por instaurar un nuevo culto al héroe, que ha sido analizada en detalle por Eduardo Hourcade. Ese esfuerzo del Estado nacional, al que se sumaron varios go-

biernos provinciales, incluyó desde la creación del Instituto Sanmartiniano en 1933, con fuerte presencia militar, hasta el decreto de Justo que estableció, ese mismo año, dedicar el 17 de agosto a la conmemoración pública de San Martín, ratificando la definitiva incorporación de la fecha al calendario ritual de la argentinidad.

Entre los múltiples actos públicos y privados, que cubrieron toda la década, tuvo lugar la publicación en 1932 de la *Historia del Libertador General Don José de San Martín*, de José P. Otero, poco después designado presidente del Instituto Sanmartiniano, donde San Martín era presentado como modelo de la nacionalidad y se destacaban sus condiciones militares y de hombre de gobierno. Ricardo Rojas, por entonces un opositor radical, respondió un año más tarde con *El santo de la espada*. Sin dudar de la condición de héroe central de la argentinidad, Rojas hacía de San Martín un militar que “opone a la fuerza arbitraria del instinto, la fuerza protectora del espíritu”, un “asceta del patriotismo”. El intelectual más reputado del radicalismo ofrecía así una visión alternativa de la acción de San Martín, mientras el partido se mantenía al margen de las celebraciones oficiales. En torno a la figura de San Martín se libraba así una explícita controversia interpretativa.

Los frentes de polémica que proponía el comunismo eran todavía más amplios. En 1934, Ghioldi sostenía que era natural que “ahora, bajo el régimen de la reacción, se organice la repatriación de los restos de Rosas. Faltaría, acaso, erigirle un monumento, en el cual el ornamento principal fuese la figura del presidente Justo prendido a las ubres del rosismo: Orden, Autoridad, Sumisión”. La curiosa imagen de un Justo rosista revela, una vez más, la dependencia de estas lecturas del pasado de las disputas presentes. Tanto los rosistas como los “señorones de la Junta de Historia”, sostenía Ghioldi, contribuían a “mantener la espesa red de falsificación que aprisiona a la historia argentina”, en una coincidencia con la denuncia que luego harían circular, mucho más ampliamente, los revisionistas.

Estas vetas en la interpretación de la izquierda no fueron del todo fugaces. Álvaro Yunque sostenía en 1937, desde las páginas de *Claridad*, que con motivo del homenaje a Esteban Echeverría “se moverán las péñolas de los historiadores a fin de presentarnos sólo la parte erudita del acontecimiento, y las de los socialfascistas, siempre empeñados en paralizar la labor renovadora de la actual juventud, presentándole como guías a [...] Rivadavia, Echeverría,

Alberdi, Sarmiento, Justo". Y agregaba: "Los falsificadores de la historia argentina vieron en Rosas una potencia demoníaca que desvió al país de la ruta democrática y libertadora de Mayo". En rigor, Mayo habría sido "una revolución hecha por propietarios, con el fin de administrar para provecho propio la aduana de Buenos Aires y para seguir enriqueciéndose haciendo intervenir el capital extranjero, en este caso el inglés". Mayor consideración le merecía José Hernández, quien "en 1869 —en plena presidencia del 'civilizador' Sarmiento!— fundó un periódico [...] en el que pueden leerse sus protestas contra el abuso que se cometía arreando al gauchaje hacia los contingentes, a pelear contra los indios, para defender la tierra de otros".

En 1937, la evocación de Hernández no era una novedad en la izquierda: un año antes, su retrato hecho pancarta figuraba en una xilografía que representaba una movilización del frustrado Frente Popular. El cartel era de la AIAPE, agrupación de intelectuales promovida por el PC y por entonces presidida por Aníbal Ponce; junto al de Hernández, aparecían los retratos de Lenin y Marx. De acuerdo con Oscar Terán, por estas fechas Ponce, quien formaba parte de la constelación comunista aunque no estuviera incorporado al partido, desarrollaba una reconsideración del gaucho que había comenzado a esbozarse hacia 1934. En su exilio mexicano, Ponce ubicaba esa reconsideración en la más amplia tarea de pensar de un nuevo modo la "cuestión nacional".

Los debates, indirectos en ocasiones, entre las formaciones de la izquierda, se hicieron más frecuentes en la segunda mitad de la década. En 1937, por ejemplo, el comunista Eduardo Astesano polemizaba muy duramente con el aprista Daniel Faleroni sobre la Revolución de Mayo en las páginas de *Claridad*. Pero fue durante los años de la Segunda Guerra Mundial cuando se produjo el movimiento más importante entre estos grupos, que se reflejó en la aparición de trabajos de envergadura sobre historia argentina a cargo de intelectuales comunistas. Esta vez, eran militantes culturales que se dedicaron con continuidad a la práctica de la historia, no dirigentes que ocasionalmente opinaron sobre el pasado. Tampoco se trataba de historiadores profesionales, condición que los propios involucrados hubieran repudiado, sino de una figura frecuente en los años treinta: la del intelectual que, sin formación específica y por fuera de los circuitos académicos, se empeñaba con constancia en la construcción de interpretaciones históricas utilizando

alguna versión, no siempre tosca, de las “reglas del método”. En ese movimiento se inscribió el trabajo de Rodolfo Puiggrós titulado *De la colonia a la Revolución*, publicado en 1940. El propio Puiggrós publicaba *Mariano Moreno y la revolución democrática argentina* en 1941, y Eduardo Astesano presentaba *Contenido social de la Revolución de Mayo*. Puiggrós continuó la serie con *Los caudillos en la Revolución de Mayo* un año más tarde, y con *Rosas, el pequeño*, explícita crítica al revisionismo y a la presunción de que el gobierno rosista hubiera abierto la posibilidad de un desarrollo capitalista autónomo, en 1943. Todos los trabajos fueron publicados por editoriales vinculadas al partido.

Así, los comunistas precisaban, desplegaban, y muchas veces rectificaban, la explicación del proceso histórico argentino que el propio partido había ensayado pocos años atrás. Tal actitud obedeció a una decisión político-cultural que maduró sólo en la segunda mitad de la década, aunque muy rápidamente: por debajo de los cambios de coyuntura, la inclinación a la integración en la comunidad política nacional se hacía evidente. A medida que crecían esos aires reformistas, la izquierda comunista se hacía cargo de ofrecer su propia versión, detallada, del pasado de la nación.

También los nacionalistas reinterpretaban el pasado. La evolución de las agrupaciones de esa estirpe fue compleja en los años treinta: los grupos eran muchos y reconocían varios orígenes; las tentativas de unidad fracasaron y el nacionalismo tenía relaciones de muchas caras con el poder político y con el militar. En el nacionalismo se reconocían desde el antisemitismo vulgar de la publicación *La Maroma* hasta las empresas culturales que se dirigían a los intelectuales, como *Sol y Luna* y la católica *Criterio*; desde el conservadurismo radicalizado, pero republicano, hasta el fascismo. En el conjunto tan variado de intelectuales y activistas del nacionalismo, el aprecio a la figura de Rosas fue abriéndose paso paulatinamente; entre las brigadas de la Legión Cívica se contaban las llamadas “General Lavalle” y todavía en 1937, un dirigente de la misma agrupación continuaba utilizando la equiparación con Rosas para denostar a Yrigoyen. Desde el revisionismo, atrapado entre su proclama de científicidad y la utilización política de sus argumentos, se lanzaron más de una vez advertencias acerca de la inviabilidad del modelo rosista para el presente. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, la asociación se afirmó y el rosismo pasó a ser la posición dominante entre los nacionalistas, convir-

tiéndose en pieza clave de su repertorio, mientras muchos de ellos hacían explícita su simpatía por el Eje. A ojos de sus opositores, la defensa de Rosas fue un síntoma indudable de adhesión al fascismo.

Las imágenes del pasado nacional que los grupos políticos construyeron en los años treinta no solían ser, entonces, estables y claras. Tampoco era probable que lo fueran: a visiones del mundo relativamente inciertas, sometidas a polémica y a una prueba permanente de sus capacidades explicativas frente a la realidad, correspondían interpretaciones del pasado también cambiantes y en muchos sentidos imprecisas. La sorpresa de los hombres que se proclamaban herederos de la Reforma Universitaria de 1918 ante la reivindicación de Facundo que inició Saúl Taborda, uno de ellos, hacia 1935, fue una prueba más de ese estado. De cualquier modo, nadie dudaba de que el debate sobre el pasado era un elemento central para la polémica política, ni de la utilidad del análisis del pasado de cara al presente. Tampoco del valor político que tenía

hacer circular sus representaciones de la historia nacional en la sociedad. En ese punto, nada los separaba de los historiadores profesionales.

HISTORIA E HISTORIADORES

En los años cercanos a los de la Gran Guerra, con más claridad que en etapas anteriores, los intelectuales dedicados a la historia se esforzaron por deslindar el campo que les era propio, diferenciándose de los hombres de letras y de los científicos sociales. Quienes se instalaron en ese espacio social e intelectual afinaron los mecanismos del sistema de reconocimiento de sus pares, de incorporación de los recién



Emilio Ravignani, mayo de 1936.

venidos y de consagración, y crearon nuevas instituciones dedicadas a la formación del personal que habría de enseñar e investigar historia. Estas operaciones tenían en su centro el dominio de las prácticas intelectuales que constituían el método, en la versión de la historia erudita; la aplicación del método era entendida, al mismo tiempo, como garantía de cientificidad y como nota que distinguía a los nuevos historiadores. La voluntad de utilizar a la historia en la construcción de identidades colectivas en clave nacional, presente en muchos intelectuales y funcionarios inquietos por el impacto de la inmigración, no fue ajena a aquellas acciones.

Como había ocurrido en buena parte de los países europeos a lo largo del siglo XIX, la historia dejaba así de ser una actividad intelectual practicada libremente, para transformarse en una disciplina profesionalizada; el Estado tenía un papel decisivo en el fenómeno, y en la Argentina de los años siguientes al Centenario, también lo tuvo esa vocación por consolidar la llamada conciencia nacional. Los integrantes de la Nueva Escuela Histórica, entre los que se contaban Emilio Ravignani, Ricardo Levene, Rómulo Carbia, Diego Luis Molinari, Luis María Torre, fueron quienes organizaron la versión local de la historia profesional.

En la década abierta en 1930, los ámbitos de los historiadores profesionales se vieron afectados por dos procesos, que se vinculaban y se sostenían mutuamente. Por una parte, tuvo lugar la consolidación de sus redes e instituciones; por otra, una mayor aproximación al Estado, que adoptó muchas formas. Esos procesos no fueron, sin embargo, sencillos. La estructura estatal se hacía más compleja y los cuerpos administrativos se ampliaban, en un contexto general de extensión de las funciones del Estado. Entre el personal burocrático se había desarrollado una cierta interpretación corporativa de la gestión pública, que encontraba su base en la especificidad técnica, real o atribuida, del trabajo realizado, y en el área de educación esta inclinación fue fuerte. La ampliación no afectó sólo al Estado nacional, sino también a muchos estados provinciales, que manejaban parte de los canales de inserción profesional para los historiadores.

Al mismo tiempo, los historiadores supieron abrir nuevas alternativas profesionales, que favorecieron la consolidación de los circuitos académicos: las comisiones para la instalación de monumentos, o para la definición de cuestiones tales como el “verdadero” color de la bandera, eran algunas de ellas. Pero la profesiona-



Habla Ricardo Levene, presidente de la Junta de Historia y Numismática. Entre la concurrencia, Carlos Saavedra Lamas (sentado, segundo desde la izquierda), ministro de Relaciones Exteriores, c. 1937.

lización encontró límites severos, que se relacionaron fundamentalmente con la naturaleza de las propias instituciones comprometidas, en las que abundaban los intelectuales cuyas relaciones con la historia, fuera como investigadores o como profesores, eran mínimas. Se producían, entonces, situaciones curiosas: en 1941, la Academia Nacional de la Historia lograba del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública el reconocimiento de que la condición de miembro de la entidad habilitaba para ocupar cátedras de historia.

Entre los historiadores, el grupo que parecía dominante era el de la Nueva Escuela Histórica, cuya denominación sugiere una unidad que era sólo relativa. Como han indicado Nora Pagano y Miguel Galante, la Nueva Escuela se encontraba atravesada por una disputa institucional entre la Junta de Historia y Numismática transformada en 1938 en Academia Nacional de la Historia, cuyo personaje central era Ricardo Levene, y el Instituto de Investigaciones Histó-

ricas, radicado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y dirigido en la época por Emilio Ravignani.

Con ellos competían, por el reconocimiento de la autoridad científica, por los recursos estatales, por los vínculos con el exterior, varios contendientes más. Un abigarrado conjunto de entidades se dedicaban a la investigación, a la publicación de libros, recopilaciones documentales, boletines, y a establecer relaciones con el Estado por caminos muy diversos. Participaban de las comisiones oficiales para la celebración de homenajes, en la definición de la toponimia urbana, en la determinación de qué sitios eran históricos y, naturalmente, solicitaban apoyo económico de reparticiones y gobiernos. Así funcionaban la Junta Provincial de Estudios Históricos de Córdoba, de Santa Fe y de Santiago del Estero, el Archivo Histórico de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, la Sociedad de Historia Argentina, la Asociación Argentina de Estudios Históricos, la Sociedad Sarmiento de Tucumán, el Instituto de Historia del Derecho, aun el Instituto Sanmartiniano, entre otros. Hacia fines de la década, la recién fundada Junta de Historia y Letras de La Rioja conseguía un subsidio del gobierno provincial que sería dedicado a sostener investigaciones y publicaciones, mientras que en la ciudad de Buenos Aires maestros y vecinos del barrio de Flores creaban su propia Junta en 1938.

Muchas eran instituciones historiográficas de viejo tipo. Se reunían allí individuos con algún interés por los asuntos históricos, quizá notables de la ciudad, abogados, maestros o sacerdotes, a menudo impulsados por el deseo de conservar el patrimonio histórico de la localidad o la provincia. La historia que cultivaban sólo accidentalmente cubría los requisitos metodológicos que en la época se planteaban. Sus publicaciones lograban a veces sostenerse, y algunas de esas entidades fueron incorporadas a la estructura de la Academia Nacional de la Historia. En una escala microsocia y fuera de las grandes ciudades, la producción de estas instituciones, por la vía de la conferencia, el homenaje local, el libro del "historiador de la zona", estaba mucho más al alcance del público que los textos de la historia académica. En La Rioja de 1937, un ciclo de conferencias en las que se reivindicaba a Facundo parece haber tenido fuerte impacto, así como la publicación en 1939 de un libro favorable a Chacho Peñaloza.

Otras fueron instituciones algo menos tradicionales, como la Sociedad de Historia Argentina, fundada en 1931, que con una

organización similar a la de la Academia publicó una colección de libros de historia de importancia, y un *Anuario* entre 1940 y 1945, sosteniendo además la clásica serie de conferencias. La Sociedad de Historia Argentina contaba entre sus miembros a historiadores y universitarios destacados, como Juan B. Terán, Rómulo Carbia, Ricardo Rojas, Ricardo Zorraquín Becú, Carlos Ibarguren; entre ellos había integrantes del Instituto de Investigaciones Históricas, de la Junta transformada en Academia, y aun del revisionismo de fines de la década.

La competencia por los recursos y el reconocimiento estatal, al menos en el nivel nacional, se resolvió en favor en la Junta de Historia y Numismática. En 1934, Levene obtuvo para la Junta un subsidio del Congreso, destinado a la publicación de la *Historia de la Nación Argentina*, en 1936, el subsidio se dedicó a la ampliación del Museo Mitre y en 1938, un decreto del Poder Ejecutivo transformó a la Junta en Academia Nacional de la Historia.



Tapa de Juan Manuel de Rosas, de Carlos Ibarguren, edición de 1933.

La lenta aparición del revisionismo fue otro de los fenómenos importantes en la segunda mitad del período. El Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas fue creado en 1938, subsumiendo a un grupo santafesino similar; poco después comenzaba a publicar su *Revista*. Ciertamente es que, hacia 1934, Julio y Rodolfo Irazusta habían publicado *Argentina y el imperialismo británico*, que ofrecía algunas de las claves de interpretación que los revisionistas harían suyas, y ese mismo año se organizaba la Comisión por la Repatriación de los Restos de Rosas. También podría considerarse que, en 1930, Carlos Ibarguren publicaba y vendía con notable

éxito su *Juan Manuel de Rosas. Su vida, su tiempo, su drama*. De todas maneras, las instituciones revisionistas que serían las más duraderas se fundaron hacia fines de la década, en una coyuntura cultural en la cual las posiciones nacionalistas y clericales ganaban espacio. Esa fundación es inseparable del avance del nacionalismo, cuyos éxitos más notables se dieron precisamente en el plano cultural, y que finalmente hizo de la defensa de Rosas y de la impugnación del orden que creía reinante luego de Caseros dos de sus frentes de batalla más característicos.

Una vez fundado el Instituto, resultó sencillo identificar a sus miembros más notorios. Menos simple es, en cambio, detectar los rasgos comunes que presentaban sus interpretaciones. En esos años, la reivindicación de los gobiernos de Rosas era sin duda compartida. Pero la reivindicación de un Rosas que había dominado para bien al gauchaje, garantizando el orden social en beneficio de las clases propietarias, propuesto por Ibarguren, no se alineaba del todo con la defensa de un Rosas que protegía la “industria” local y ejecutaba una reforma agraria en favor de quien trabajaba la tierra, que planteaba José María Rosa a comienzos de los años cuarenta. El propio Instituto, en el primer número de su *Revista*, reconocía la existencia de una “derecha rosista” y una “izquierda rosista”, e intentaba tomar distancia de ambas. En cualquier caso, los argumentos que insistían en la defensa de la soberanía nacional frente a las pretensiones extranjeras y aquellos que planteaban la consolidación de la unidad nacional gracias a la acción de Rosas estaban muy extendidos.

Al tiempo de plantear sus frentes de polémica, el revisionismo diseñaba un adversario. En ese diseño obviaba matices, desconocía herencias que podrían haber fortalecido sus argumentos, denunciaba unanimidades donde había disidencias. El ejemplo de la *Historia de la Nación Argentina* dirigida por Levene, cuyos primeros tomos aparecieron en 1936 y que fue convertida por el revisionismo en el monumento de la historia oficial, es evidente. Los elencos convocados incluían a miembros de muchas instituciones, los argumentos expuestos sobre algunos asuntos eran abiertamente contradictorios y hasta la misma concepción de la obra impedía por extensión y fragmentación la existencia de un lector de conjunto. Mientras construía un adversario homogéneo, el revisionismo se daba unidad a sí mismo; así, la invención de la imagen que planteaba la existencia de una lucha entre la “historia ofi-

cial”, un bloque sin fisuras, y sus impugnadores, otro conjunto que se pretendía uniforme, fue quizás el triunfo más importante del revisionismo a comienzos de los años cuarenta.

A su vez, al menos hasta los años finales de la década de 1930, el rosismo de los futuros revisionistas y sus presentes y pasadas cercanías al nacionalismo político no acarrearón consecuencias serias para su inserción en el campo intelectual. Esta circunstancia no indicaba proximidad ideológica entre quienes devendrían revisionistas y otros grupos culturales, sino que evidencia que ni el nacionalismo ni el rosismo eran causa de exclusión. Si se toman en cuenta los principales nombres del revisionismo, se registra que Ernesto Palacio y Julio Irazusta escribieron en *Sur*, la revista de Victoria Ocampo. Irazusta lo hizo hasta 1938, avanzada ya la guerra de España, y ambos habían participado en 1936, junto a Ramón Doll, también convertido al nacionalismo, del “Primer debate de *Sur*”. Palacio efectuó traducciones para la editorial, e Irazusta publicó en 1937 su libro *Actores y espectadores* con ese sello. Manuel Gálvez, por su parte, seguía siendo un novelista que lograba éxitos de ventas, y era tratado con deferencia por hombres como Giusti. Carlos Ibarguren era presidente de la Academia Argentina de Letras, e integró la delegación argentina a la reunión de los Pen Clubs celebrada en Buenos Aires en 1936, junto al propio Gálvez. Su libro sobre Rosas había recibido el Premio Nacional de Literatura en 1930. En la década anterior, Ibarguren había ocupado el cargo de profesor de Historia Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras y desde 1924 era miembro de la Junta de Historia y Numismática. Ibarguren denunciaría mucho después una conjura del poder contra el nacionalismo, que habría tenido lugar en los mismos años en que él se desempeñaba como presidente de la Comisión Nacional de Cultura, en la segunda mitad de la década de 1930.

Los revisionistas, en tanto, mantenían su estima por el sistema de consagración oficial de los gobiernos herederos del golpe de Estado del 6 de setiembre. Julio Irazusta, por ejemplo, fue distinguido en 1937 con el Premio Municipal de Literatura, que no dudó en recibir. Resulta evidente que los futuros miembros del revisionismo disponían de los instrumentos de legitimación en el campo intelectual: participación previa, presencia y reconocimiento en las instituciones, premios otorgados y recibidos, apellidos prestigiosos, relaciones con el poder, éxitos de venta. Esos mecanismos

funcionaron, al menos, hasta poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

No fue entonces el revisionismo un movimiento intelectual nacido en los márgenes de la cultura argentina, y mucho menos un frente de jóvenes rebeldes. Algunos de ellos habían sido sí jóvenes vanguardistas, pero a comienzos de los años veinte; quince años más tarde, al momento de fundarse el Instituto Juan Manuel de Rosas en 1938, prácticamente todos ellos ocupaban lugares relativamente cómodos en el campo intelectual. Por el contrario, el revisionismo se organizó en torno a uno de los núcleos de la cultura admitida, que desde hacía tiempo exhibía una muy clara vocación conservadora. La tolerancia que el mundo cultural demostró hacia

los revisionistas revela que no se hallaba articulado alrededor de un único eje liberal-democrático, con un programa preciso que lo obligara a repudiar a quienes plantearan la discusión del pasado desde posiciones siempre sospechadas de autoritarias.

Sin hallarse en los márgenes del universo de la cultura, el revisionismo tuvo una posición mucho más débil en las instituciones de la historia profesional, que de todas maneras no lo excluían del todo. Carlos Ibarguren, como se ha expresado, era miembro de la Academia desde tiempo atrás; también lo era de la Sociedad de Historia Argentina. Julio Irazusta era miembro correspondiente de la misma entidad, al tiempo que participaba en el Instituto Juan Manuel de Rosas.

Las participaciones así cruzadas eran muchas. Rómulo Carbia, hombre importante de la Nueva Escuela, publicaba en 1942 un artículo en la *Revista del Instituto Juan Manuel de Rosas*, mientras era adscripto honorario del Instituto de Investigaciones Histó-



Julio Irazusta, 1938.

ricas dirigido por Ravnigani. El mismo año, Dardo Corvalán Mendilaharsu escribía para el *Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas*. Corvalán había sido presidente de la Comisión por la Repatriación de los Restos de Rosas, lo que tampoco había obstado para que el Museo Mitre lo convocara a disertar en su sede sobre el tema "Mitre historiador"; allí llegó a sostener que "encontraba en Mitre elementos para la rectificación histórica" de los juicios sobre Rosas. Simultáneamente, Corvalán era miembro de la Academia. Estas pertenencias múltiples eran posibles porque las disputas institucionales e interpretativas no habían obligado todavía a levantar muros infranqueables entre aquellas entidades.

El revisionismo recurría, por otra parte, a los mismos procedimientos que utilizaban los demás grupos: fundaba un instituto, publicaba una revista y libros, sostenía ciclos de conferencias.



Rómulo Carbia, 23-12-1922.

También conmemoraba sus fechas, y no despreciaba la invitación a los poderes públicos. En 1938, en ocasión del centenario de la defensa de la isla Martín García, el Instituto Rosas organizó una ceremonia a la que concurrieron representaciones de los ministerios de Marina y de Ejército, de la Presidencia y de la Gobernación de Buenos Aires, así como delegaciones del Círculo Militar y del Centro Naval.

Así, a la hora de ofrecer un balance de la situación de la historiografía, Carbia apuntaba en la segunda edición de la *Historia crítica de la historiografía argentina*, publicada en 1940, que la Nueva Escuela Histórica albergaba varias corrientes, pero "sólo tres han alcan-

zado una definición evidente. Son éstas: la que se polariza en los centros universitarios de Buenos Aires y La Plata [...]; la que informa los estudios históricos en los medios provincianos [...]; y la que toma como epicentro a la Dictadura". Las sedes de estas tres "corrientes" eran la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, la de Humanidades de La Plata, el Instituto Nacional del Profesorado, las facultades del interior y el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.

Pero muchos de los historiadores que no formaban en el revisionismo acostumbraban tomar una precaución común: sostenían que el grupo subordinaba la tarea científica a motivos políticos, despreocupándose de las prescripciones del método. El revisionismo admitía sólo parcialmente esa crítica, y utilizaba un doble argumento. Por una parte, reconocía que la suya era una empresa política, ya que aspiraba a reemplazar una visión del pasado por otra que creía más útil a los intereses colectivos. Simultáneamente, insistía en que la violación de las reglas metodológicas había estado a cargo de quienes "falsificaron" la historia nacional, ocultando y deformando los "documentos". En 1940, el revisionista H. Llambías proclamaba que "el trabajo de revisión histórica ya está hecho en sus líneas fundamentales", y que "sobre los hechos mismos quedan pocos puntos por esclarecer"; luego agregaba que "se podría pensar que la revisión pretende servir a una tendencia política, la antiliberal y tradicionalista. Sin embargo, es fácil comprobar que la rehabilitación de Rosas se produce como consecuencia de trabajos objetivos, de simple investigación". La conclusión era contundente: "La causa de Rosas está científicamente ganada". Sin embargo, quedaba pendiente un objetivo que sólo muchos años más tarde, luego de la caída del peronismo, el revisionismo lograría alcanzar: la conquista del público.

Es que todos estos hombres, dedicados al estudio del pasado con mayor o menor talento y apego a las reglas del oficio, confiaban ciegamente en que la difusión de la historia sería, como planteaba un joven historiador de los círculos académicos hacia 1940, "un acicate enérgico para la conciencia nacional". De acuerdo con estos razonamientos, quienes debían ser acicateados eran los grupos populares, que en parte se contaban entre el público amplio, un horizonte lejano al que todos aspiraban a llegar.

LOS PÚBLICOS Y LOS MEDIOS

La voluntad de conquista del público vasto no era, entonces, exclusiva de algún grupo o institución. Ricardo Levene, en el prólogo a la *Historia de la Nación Argentina* de 1934, prometía “un resumen de la obra principal en dos volúmenes y un atlas para la enseñanza y la cultura general”, afirmando que la “auténtica cultura histórica [...] debe esparcirse socialmente”. “La historia —concluía Levene— es para el pueblo”.

Pero el público era un complejo muy heterogéneo. En lo que hace a quienes manejaban la habilidad de la lectura, las tasas de alfabetización crecían desde hacía tiempo, aunque el aumento de la cantidad de personas que sabían leer no debía crear, necesariamente, un público lector. En la Argentina de 1938, por otra parte, todavía el 18% del padrón electoral era analfabeto. La cifra escondía la gran variación regional existente, que iba del 2% en la capital a un 40% en Corrientes. Estos datos aluden, masivamente, a la población nativa; entre los inmigrantes, el porcentaje de analfabetos era mayor. A esas diferencias se sumaban las diversas pertenencias sociales, las inclinaciones y gustos de cada comunidad de lectores, y la distinta densidad de los circuitos de distribución de bienes culturales.

En las grandes ciudades, la aparición de nuevos públicos lectores era un fenómeno visible desde los años de la Gran Guerra; muchos de esos nuevos lectores pertenecían a los llamados sectores medios y a los populares, y a ellos se dirigieron emprendimientos que hicieron del libro barato su producto más característico. Claridad y Tor, de Buenos Aires, fueron dos de los más importantes. En la segunda mitad de la década de 1930, explicitando su posición católica y nacionalista, la editorial Difusión lanzó su propia oferta de libros baratos con el objetivo de “oponer el libro bueno al libro malo”, que todas estas editoriales proclamaban.

Los historiadores y sus instituciones apelaron, en los años treinta, a la publicación de distintos tipos de libro. Por una parte, varios historiadores intervinieron, con buena fortuna, en ese mercado peculiar constituido por los libros de texto, a través de la publicación de manuales para la enseñanza media. Por otra, las instituciones académicas publicaban sus boletines o anuarios que muchas veces se vendían por suscripción, los trabajos eruditos concebidos para circular entre los especialistas y las todavía más específicas

colecciones documentales. Finalmente, otro tipo de libro de historia parecía ir tras lectores más numerosos: Irazusta publicaba con el sello Tor tanto *La Argentina y el imperialismo británico* como, en 1935, el *Ensayo sobre Rosas*; la editorial Difusión imprimía y distribuía textos del propio Irazusta, y *La historia falsificada*, de Ernesto Palacio, hacia fines de la década. Abierta también a los públicos populares, editorial Anaconda publicaba *El santo de la espada*, con que Ricardo Rojas, por la época miembro de la Junta de Historia y Numismática, respondía a la imagen sanmartiniana oficial en 1933; el libro tiró 20.000 ejemplares, y parece haber vendido 200.000 hasta 1947. El prestigio literario del autor contribuyó al éxito de ventas, pero es evidente que el público veía en *El santo de la espada* un libro de historia. Otro tipo de publicación, como la *Historia de la Nación Argentina* de la Academia, había agotado sus primeros tomos en 1939, aunque la compra institucional puede haber tenido importancia en este caso.

En los catálogos de aquellas editoriales, los libros que hacían de la historia su tema central no alcanzaban a convertirse en un conjunto mayoritario. Sin embargo, tal como señaló Luis Alberto Romero, varias novelas ambientadas en el siglo XIX, en particular en la época de Rosas, se vendieron con éxito. Junto a esas novelas, muchas otras obras contenían una evocación aún breve del pasado, a veces como escenario de una ficción, otras como prólogo al análisis de temas políticos. Y ese material fue también utilizado en la construcción de imaginarios colectivos referidos a la historia por los nuevos lectores.

Las colecciones, otra de las formas clásicas de oferta de libros a públicos lectores amplios, incluyeron también libros de historia. Algunas circularon por años, como la “Biblioteca de *La Nación*”, que entre principios de siglo y 1920 imprimió, de acuerdo con Leandro de Sagastizábal, más de un millón de ejemplares de los 875 títulos publicados. Otras, fundadas alrededor de 1915, continuaban publicando en los años treinta, aun con distintas denominaciones: “La Cultura Argentina”, impulsada por José Ingenieros, cuyo catálogo retomó en la década de 1930 “La Cultura Popular”, o la “Biblioteca Argentina”, proyecto de Ricardo Rojas. Los libros que admitían ser leídos como textos sobre el pasado figuraron en esas colecciones bajo dos formas: la reproducción de las obras de los escritores nacionales “clásicos”, a menudo prologados por historiadores, y la publicación, menos frecuente, de trabajos especifi-

cos de investigación histórica. En las colecciones aparecieron obras de Alberdi, Sarmiento, Avellaneda, Estrada, Ramos Mejía, Mansilla; también trabajos más definidamente historiográficos como el *Manual de historia argentina* de Vicente Fidel López, que hacía años el autor había escrito pensando en maestros y profesores, y el de Vicente Quesada, titulado *Historia colonial argentina*, entre otros. Desde ya, la producción de Mitre formaba parte de los catálogos. La *Historia de San Martín* fue incluida en la "Biblioteca de *La Nación*", y una selección de sus textos, titulada *Ensayos históricos*, era publicada en 1918 en "La Cultura Argentina", y reeditada todavía en 1937 por "La Cultura Popular". Es posible que esos volúmenes tiraran entre 3.000 y 5.000 ejemplares, de los cuales, seguramente, no todos se venderían; pero la cifra es significativa si se considera la permanencia en el tiempo y las múltiples ediciones.

Estas colecciones, hacia los años treinta, habían conformado un fondo bibliográfico que los nuevos lectores populares podían alcanzar, a través de la compra o de la consulta en las bibliotecas, incluso en las barriales. Libros de historia en un sentido doble, ya que habían sido producidos por los hombres de la elite que habían participado de las luchas del siglo XIX y al mismo tiempo contenían un relato de ese mismo pasado, fueron parte de la gran biblioteca, dispersa y accesible, que los lectores que no pertenecían al público culto tuvieron a su disposición.

En los años treinta, cuando la industria cultural en expansión daba forma peculiar a la cultura de masas, ocupaban un lugar destacado los medios masivos de comunicación. La radio, afirmada en la década anterior, tenía alcance nacional y era utilizada con frecuencia por el poder político. Los historiadores participaron también: la Academia Nacional de la Historia transmitió las conferencias dictadas en la institución por Radio del Estado, y la Sociedad de Historia Argentina desarrolló un plan similar, así como el Círculo Militar, que incluía los temas históricos en una agenda más amplia. Menos fáciles de asir, y puede pensarse que más escuchados, eran los relatos sobre el pasado lanzados en las versiones radiofónicas de aquellas novelas que se desarrollaban en el siglo XIX y que habían sido originalmente, en muchos casos, folletines; ellos contaban con un público entrenado en su lectura desde hacía años. La transformación del folletín melodramático en radioteatro, ha planteado Alejandro Eujanian, mereció duros juicios por parte

de algunos críticos de radio que, como Homero Manzi, atendían al escenario histórico bosquejado. A su vez, los diarios no sólo publicaron artículos específicos, que hallaban con frecuencia su lugar en los suplementos culturales, sino que impulsaron encuestas entre los intelectuales sobre temas históricos; *Crítica*, por ejemplo, lo hizo en 1927 y en 1934 sobre Rosas. También se consignaban las conferencias dictadas sobre temas históricos, que en parte estaban destinadas a aquellos públicos populares. Como en los demás casos, se deben sumar a este conjunto las referencias menudas a la historia argentina, muy abundantes.

En la Argentina de los treinta, entonces, circulaba en la sociedad un conjunto de representaciones del pasado, algunas desplegadas y especializadas, otras sumarias, accidentales y fragmentarias. Los sostenes de ese gran relato confuso y contradictorio del pasado eran, junto a los libros, artículos y conferencias sobre historia, esa multitud de referencias ocasionales, de glosas a modo de ejemplo, de menciones casi al descuido incluidas en textos que se referían no a la historia, sino a otros problemas. En la publicación barrial *El Radical*, que apareció a fines de la década, por ejemplo, es imposible hallar un solo artículo dedicado a la historia, y sin embargo puede reconstruirse con certeza la visión del pasado del grupo que lo publicaba, expresada en esas pequeñas alusiones. La radio, por su parte, había permitido que una vez más el obstáculo del analfabetismo fúera superado: al público sin duda popular que no sabía leer, llegaban tanto las conferencias de la Academia como los radioteatros ambientados en el siglo XIX.

Tampoco el cine exigía del todo el dominio de la lectura. A menudo, guionistas y directores recurrían a argumentos que remitían al pasado, y ello mereció la atención de los historiadores y del Estado, en una forma quizá curiosa. En 1938, la Academia Nacional de la Historia, a pedido del Ministerio de Instrucción Pública, designó un representante ante la comisión que controlaría la proyección de películas cuyo argumento se refiriera a la historia argentina. Pocos años más tarde, sin que sea posible saber si tal comisión intervino, *La guerra gaucha* se convertía en un resonante éxito de público en todo el país.

LA HISTORIA Y LA ESCUELA

Las imágenes del pasado que esos públicos potenciales tenían a su disposición no se hallaban sólo en libros o películas. El Estado construía y ofrecía un relato, no siempre homogéneo, a través de mecanismos que iban desde las conmemoraciones oficiales hasta la incorporación de nuevas fiestas cívicas al calendario, la inauguración de monumentos y la acción desde la escuela.

Los intentos de “construir la nacionalidad”, que se suponía desdibujada por la inmigración masiva o amenazada por circunstancias internacionales, un proceso estudiado por Lilia Ana Bertoni, habían incluido a fines del siglo XIX la utilización de la historia en esa tarea, en particular a través de la escuela primaria. La escuela haría de los alumnos futuros “ciudadanos y patriotas”, y en esa transformación la enseñanza de la historia nacional tenía un papel. Con tonos cambiantes de acuerdo con variables múltiples —presencia, entre las autoridades educativas, de intelectuales con diversas perspectivas ideológicas, evolución de la coyuntura política inmediata, grado de consolidación del aparato administrativo de las reparticiones involucradas, entre otras—, ese anhelo tomó nuevo impulso y tonos en torno al Centenario, y halló un nombre en la denominación “educación patriótica”. Ricardo Rojas y J. M. Ramos Mexía fueron dos de los intelectuales vinculados a ese esfuerzo.

Sin embargo, las discrepancias sobre los contenidos de la moral cívica y patriótica que habría de inculcarse a los alumnos fueron habituales, así como fueron contradictorios los balances de los resultados de la acción educativa. Ramón Melgar, rector del Colegio Nacional de Dolores, sostenía en la *Revista de Filosofía* hacia 1920 que no existía en esos días “un hogar genuinamente argentino”; por eso “la escuela ha de cultivar constantemente los sentimientos de la nacionalidad y el amor a la patria”. Sin embargo, para Melgar se debía conciliar el amor a la patria con el “amor a la humanidad”. Pablo Pizzurno advertía, tres años después, que el “patriotismo, generalmente mal entendido, se hace degenerar en un patriotismo hueco”, y agregaba críticamente: “Hicimos cantar el himno a cada momento con cualquier pretexto o sin pretexto; hicimos jurar la bandera a niños de seis años con tanta solemnidad exterior como inconciencia”. El ensayo era, a su juicio, un fracaso rotundo.



Desde la izquierda, Ricardo Levene, profesor Pablo A. Pizzurno, Carlos Múscari, Oliverio Tacchia, y el coronel J. M. Sarobe (de perfil), setiembre de 1937.

Pocos años más tarde, en 1929, un grupo de inspectores y docentes de la escuela primaria, en el Plan de Estudio y Programas para las Escuelas de Nuevo Tipo, volvía a retomar estas cuestiones. La propuesta admitía que “en un país nuevo y cosmopolita como el nuestro se requiere una enseñanza [de historia] nacionalista”, pero señalaba inmediatamente que “la historia se propone darnos un conocimiento exacto del pasado [...] [y] de ningún modo debemos retroceder o mantener antiguos criterios que pedían a la historia lecciones de moral, ejemplos de conducta [...]”.

A pesar de estas observaciones, los docentes no abandonaban aquella otra preocupación cívica, y auguraban que “la moral y el sentimiento patriótico surgirán de la valorización espontánea de los hombres y de los pueblos”. La enseñanza de historia tendría como uno de sus objetivos “la formación de una conciencia nacional”, pero “no podrá ser instrumento de la formación de un patriotismo ciego y xenófobo”. Estas expresiones son prueba evidente no sólo de la existencia de varias concepciones, sino también de la

posibilidad de acción del cuerpo docente. Esa posibilidad tenía, de todos modos, límites firmes: el proyecto de las Escuelas de Nuevo Tipo quedó trunco en tiempos de Uriburu, por decisión del Consejo Nacional de Educación.

A lo largo de los años treinta, las políticas educativas del Estado nacional exhibieron una dinámica peculiar. Ella estaba condicionada por las decisiones de las direcciones de organismos ministeriales, en ocasiones ocupadas por intelectuales de firme implante en el mundo cultural, por orientaciones más generales promovidas por la prédica y la presión de grupos culturales y por las acciones de unos cuadros burocráticos y docentes que no eran meros ejecutores de aquellas decisiones y que, aun parcialmente, les imprimían estilos propios en las aulas, allí donde las decisiones de las cúpulas podían transformarse en acciones hacia los alumnos.

De esos alumnos, hacia 1938, un 46% se educaba en escuelas provinciales; este porcentaje alude al promedio del país, pero en algunas provincias alcanzaba el 70%. Eran Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Mendoza las jurisdicciones en que la presencia provincial era más notoria. En lo que hace al problema de la historia en la escuela, este dato toma importancia: casi la mitad de los escolares primarios del país concurría a escuelas que se hallaban bajo control administrativo y pedagógico de los estados provinciales, que tendían a construir panteones y versiones del pasado propias. En Santa Fe, el caudillo federal Estanislao López formaba parte del procerato local; en 1938, la Junta de Historia de Santa Fe celebró unas jornadas sobre su figura, a las que concurrió una delegación de la Academia y otra del Círculo Militar. Los entrerrianos, por su parte, homenajeban a Pancho Ramírez y en La Rioja se ampliaba por esos años la reivindicación de Facundo y del Chacho. Estas presencias no debían devenir, obligatoriamente, en lecturas radicalmente diferentes de las que se suponen dominantes en el nivel nacional, pero tampoco pueden ser desatendidas. Como señaló Halperin Donghi, “la ortodoxia antifederal [...] era un fenómeno más porteño que nacional”.

A pesar de estas variantes, el complejo estatal dedicado a la educación mantuvo en los años treinta las preocupaciones por la formación de la moral patriótica. En 1938, el Ministerio de Instrucción Pública había solicitado de la Academia Nacional de la Historia un plan para difundir la historia nacional, con esos fines, y la institución designó una comisión con ese objeto. Poco des-

pués. un proyecto de reforma educativa oficial insistía incluso en los viejos procedimientos: que en cada aula hubiera una bandera, un mapa y el retrato de algún prócer.

Atribuyendo a los textos escolares una importancia decisiva, el ministerio llegó a planear la redacción de un texto único para la enseñanza de historia en 1940. La propia Academia cuestionó el proyecto en nombre de la “libertad en la enseñanza de la historia” y, al año siguiente, quedó fijada por decreto una nueva reglamentación, que expandía el control que sobre los manuales primarios tenía el CNE desde sus primeros tiempos. En las escuelas secundarias y en las instituciones de formación docente, “los libros destinados a la enseñanza sólo podrán ser utilizados como textos [...] una vez que hayan sido autorizados” por esa repartición. La Inspección General de Enseñanza designaría comisiones docentes que tendrían a su cargo la aprobación de los libros de todas las materias, y luego las Academias Nacionales podrían expedirse sobre las “deficiencias” que encontrarán. Los considerandos del decreto destacaban que el proyecto educativo oficial “acentúa convenientemente la orientación nacionalista”, y que “en particular los [libros] de historia argentina deberán inculcar los ideales patrióticos que guiaron a los creadores y organizadores de nuestra nacionali-



Commemoración del Día de la Bandera en una escuela del Consejo Escolar XIV de la Capital, 1942.



Ernesto Palacio, periodista de la revista El Hogar, durante la transmisión de adhesión al Congreso Eucarístico por Radio Splendid, 1934.

dad, exaltando sus virtudes y evitando toda información que se aparte de tales propósitos, como asimismo toda posición tendenciosa o polémica que pueda originar confusión en los alumnos". Ernesto Palacio coincidía, desde el revisionismo, insistiendo en la falta de unidad nacional a causa de la inmigración; sostenía en 1939 que ante los alumnos de las escuelas primarias "es necesario [...] limitarse al relato apologético, con vistas a la formación cívico-moral", y criticaba que "en vez de insistirse [...] sobre la grandeza moral de los creadores de la nacionalidad, se acentúa el aspecto polémico".

Los manuales que el ministerio aspiraba a controlar, publicados en su mayoría en Buenos Aires, constituían un conjunto en extremo uniforme. El estilo, el modo de argumentación,

la configuración de un relato del pasado nacional, aparecían reiterados hasta el infinito. Sin embargo, no se trataba de un material particularmente "retrasado" respecto de las evoluciones de la historiografía profesional argentina en los años treinta, en cuya producción el cumplimiento estricto de la preceptiva metodológica no había provocado, en general, una renovación en las interpretaciones ni la apertura de frentes de investigación que se destacaran por su audacia.

Los historiadores profesionales, por su parte, no desatendían del todo a este otro mundo, el de los textos escolares; escribir manuales no sólo era un vehículo de extensión del propio saber al resto de la sociedad y de intervención en la tarea patriótica que se atribuían esos hombres, sino que también representaba una forma de inserción laboral. Levene había publicado un manual destinado

a la secundaria ya en 1912, mientras que el núcleo de la Nueva Escuela Histórica lo había hecho, colectivamente, en 1917, con el *Manual de historia de la civilización argentina*. En los años treinta, Ricardo Caillet Bois publicaba *La enseñanza de la historia en la escuela primaria*, y aparecía en 1939 una nueva edición de aquel manual de Levene. La Sociedad de Historia Argentina, en tanto, juzgaba pertinente comentar, en la sección de crítica bibliográfica de su *Anuario*, un manual de Alfredo Grosso publicado en 1940. En el comentario se hacía notar que “la exposición que presenta el señor Grosso revela un manejo abundante y variado de la bibliografía más moderna”. Como se encargaba de recordar el propio crítico, en un tono sorprendentemente laudatorio, el libro aparecía cuarenta y ocho años después de la publicación del *Resumen de historia patria* de Grosso.

Tampoco despreciaban los historiadores el problema de la enseñanza de su disciplina. En el II Congreso Internacional de Historia de América celebrado en 1937, uno de los tantos que tuvieron lugar en el período, el académico Alberto Palcos dedicó su ponencia al asunto, al igual que Levene. También asumió esa cuestión Juan Mantovani, pedagogo y responsable como funcionario del Ministerio de Instrucción Pública de un plan de reforma de la enseñanza secundaria presentado en 1937, que no sería aplicado. En palabras de Mantovani, que todos los ponentes habrían suscripto, “el estudio de la historia patria es un factor determinante en la formación en el pueblo del sentimiento de la auténtica nacionalidad”.

Esta convicción, que hundía sus raíces en el siglo XIX, continuaba así extendida a fines de los años treinta. Pero una de las claves para la realización de ese anhelo fallaba, y ni los historiadores ni los funcionarios educativos advirtieron el obstáculo. Los centros de formación de recursos humanos capacitados para investigar y enseñar historia eran por entonces muy pocos, y se ubicaban en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, y en la Universidad de Cuyo, fundada a fines de la década. También funcionaban carreras de Historia en Institutos Nacionales del Profesorado de Buenos Aires y de Paraná, este último desde 1933. El de Catamarca se inauguraría en 1942.

Unos años después, cuando esos centros de formación de personal eran más numerosos, las cifras resultaban elocuentes: hacia

1948, poco después del cierre de nuestro período, en el Profesorado de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo había 123 cursantes; en La Plata, eran alumnos del Doctorado y del Profesorado 75 personas. La Carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires contaba con 62 cursantes, y aquel año egresaban de sus aulas 4 profesores de historia. El total de alumnos de la carrera en el Instituto del Profesorado de Capital era de 112, y en todo el país se graduaban 34 profesores de historia de los profesorados. A cargo de las clases en las escuelas normales, donde estudiaban los futuros maestros a quienes se encargaba la “formación en el pueblo del sentimiento de la auténtica nacionalidad”, había entre otros profesionales 319 abogados y sólo 58 doctores en Filosofía y Letras, de los que no todos eran especialistas en historia.

Los datos indican que aquella vocación por utilizar la enseñanza de la historia en la que parecía la enorme tarea de reforzar la conciencia nacional disponía de huestes muy menguadas para ser llevada adelante, al menos con las características que los historiadores profesionales deseaban para ella. Porque si bien la dimensión “patriótica” de esa misión no exigía ser dirigida y ejecutada por historiadores, su costado científico sí requería esa presencia. Sin duda, el cambio de alguna de las variables para volver más atractiva la entrada a la profesión en condición de docente estaba fuera del alcance de la acción de los historiadores; la salarial era una de ellas. Pero es evidente que no se disponía de la masa crítica necesaria para ocupar las horas dedicadas a la enseñanza de la historia en escuelas normales y secundarios, ni para conducir aquella otra empresa de tan largo aliento. La circunstancia hacía también visible una singularidad del proceso de organización de un campo profesional entre los historiadores argentinos: aunque poblado por muchas instituciones, a unos treinta años de las acciones iniciales de la Nueva Escuela Histórica éste era todavía un espacio social muy estrecho, cuyas segundas líneas no se reclutaban aún entre quienes se habían formado en los centros educativos que el propio grupo había impulsado y controlado en gran medida.

Por su parte, los heterogéneos elencos de funcionarios que, tanto en el nivel nacional como en los provinciales, tenían a su cargo la política educativa, incluían a algunos hombres vinculados a los grupos nacionalistas. María Dolores Béjar ha examinado el caso

de la provincia de Buenos Aires, donde una reforma había implantado la enseñanza religiosa en 1936, subrayando la cercanía del gobierno de Fresco con la Fundación Argentina de Educación. La entidad era dirigida por Alberto Baldrich y tenía entre sus integrantes a Jordán Bruno Genta, ambos dirigentes del nacionalismo católico; Octavio S. Pico, cercano a fines de los años veinte al grupo nacionalista de *La Nueva República*, y luego a la católica *Criterio*, ministro de Uriburu, fue designado presidente del Consejo Nacional de Educación por Justo. A comienzos de los años cuarenta, el secretario de ese Consejo era Alfonso de Laferrère, también antiguo integrante de *La Nueva República* y jefe hacia 1929 de la Liga Republicana.

Sin embargo, esos funcionarios no se mostraron entusiasmados por la aplicación, en el área educativa, de los planteos sobre el pasado que estaban realizando los revisionistas, sus compañeros en otros proyectos políticos y culturales. Por cierto, existían zonas de la visión revisionista en ciernes que no eran fácilmente integrables en los discursos históricos que desde esas reparticiones se impulsaban. Pero fundamentalmente ocurría que no era necesario apelar a la reivindicación de Rosas para intentar difundir el programa de orden, de organización jerárquica de la sociedad y de exaltación de las características culturales propias, en que aquellos funcionarios estaban empeñados: la tradición disponible era útil para ese objetivo y exhibía la ventaja de ser admitida. San Martín era enaltecido por el Estado como jefe militar, los lazos de la historia argentina con la de España y la reconsideración favorable de la acción española en América eran ensayados por Carbia, Levene y Molinari, todos ellos historiadores profesionales y nombres prominentes de la Nueva Escuela. La Iglesia había logrado construir una imagen de Sarmiento, y en general del conjunto de próceres argentinos, que podía recuperar por completo, y conseguía instalarse con comodidad en la historia nacional sin plantear argumentos polémicos. Ni la identificación del ejército con la nación, ni el hispanismo, ni la interpretación católica, estaban ausentes en la versión escolar, aunque no fueran sus notas dominantes. Las conducciones educativas, y los nacionalistas que formaron parte de ellas, no hallaron ninguna versión más útil que la tradicional para insistir en la tarea que se habían asignado, con perfiles más abiertos, con disidencias y debates, hacia tanto tiempo: en palabras de 1941, lograr que “al estudiar los asuntos históricos”, maes-

tros y alumnos se dedicaran a “exaltar el amor a la Patria con el ejemplo de las virtudes de los hombres de ayer”.

HOMENAJES, MONUMENTOS Y CANCIONEROS POPULARES

La celebración ritual de la patria tomó perfiles específicos en los años treinta, y ella no involucró sólo a la escuela. Como se ha señalado, a partir de 1933, el 17 de agosto, Día del Libertador, comenzó a adquirir relevancia en el calendario oficial; el Consejo Nacional de Educación decretó en 1934 la celebración del Día del Himno el 11 de mayo, y en 1941 fijó el 18 de mayo como Día de la Escarapela. Una ley nacional de 1937 estableció, a su vez, el 20 de junio como Día de la Bandera.

Mientras tanto, en 1934 se fundaba la Comisión de Homenaje a Juan Bautista Alberdi, para impulsar una conmemoración pública en ocasión del cincuentenario de su muerte. Los procedimientos puestos en juego son un modelo de cómo se organizaban estas celebraciones por la época. Los presentes en la reunión fundacional manifestaban disponerse a realizar una ceremonia en el mausoleo y a “solicitar la cooperación oficial a fin de que se recuerde en los establecimientos educacionales la memoria del Dr. Alberdi, se dic-

ten clases alusivas y se decrete la adhesión moral del Poder Ejecutivo”, gestionando el reconocimiento de la comisión por parte del Estado y la sanción de una ley para erigir un monumento. Consideraban también necesario apelar a la radio y a las instituciones culturales del país para la difusión de “aspectos de la vida de Alberdi y sus doctrinas”. Todo ello apuntaba a que fuera “reparado el olvido oficial en que se tiene al autor de nuestra organización nacional”.



Todo Tucumán Está
Colaborando en la
Colecta Popular Pro
Monumento a

Alberdi

JUAN BAUTISTA ALBERDI
(De un daguerrotipo hecho en Chile en 1846, en poder de la Biblioteca Alberdi de Tucumán)

HAGALO USTED TAMBIEN
CUOTA UNICA: \$ 1.-
BIBLIOTECA ALBERDI - TUCUMAN
ESPACIO CEDIDO POR LA CAJA POPULAR DE AHORROS

Aviso publicado en La Gaceta, Tucumán, 1935.

La comisión obtuvo el reconocimiento legislativo, y se sancionó así, en junio de 1934, una ley que la autorizaba a erigir el monumento en plaza Constitución y comprometía el aporte del gobierno. Al año siguiente, cuando se cumplían 125 años del nacimiento de Alberdi, se lanzó una colecta popular para reunir fondos, que inauguraba oficialmente el presidente de la comisión, Adolfo Carranza, a través de un mensaje transmitido por Radio Stentor. Alberdi era presentado por Carranza como un héroe civilizador, que “luchó siempre en favor de la perfección de las costumbres y leyes atrasadas de América” y “concretó las nuevas reglas convenientes para abatir el desorden, la anarquía y el caudillismo”. La opinión debió haber contrariado a Ghioldi, para quien Alberdi era, visiblemente, un aliado de los “caudillos feudales”.

Como había ocurrido con los monumentos a Sarmiento, Rivadavia y Mitre, quienes impulsaron el de Alberdi recurrieron a la extendida red escolar para recolectar dinero. En 1938, el Congreso aprobaba el proyecto del senador socialista Mario Bravo, que acordaba un subsidio gubernamental al monumento; también se aprobaban las bases del concurso que, a tono con lo que había ocurrido en oportunidades anteriores, prescribía que los materiales debían ser elegidos “dentro de la producción nacional”. A lo largo de esos cuatro años, entre 1934 y 1938, el secretario de la comisión fue Ismael Bucich Escobar, quien no había encontrado obstáculo para, en 1934, formar parte simultáneamente de la Comisión por la Repatriación de los Restos de Rosas, y para colaborar luego con Levene, en calidad de secretario de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos a partir de 1938. Bucich Escobar fue incorporado a la Academia Nacional de la Historia en 1941.

Esa Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos se mostró muy activa desde su organización en 1938. Su acción, en lo que hace a los museos, se inspiraba en una concepción que Enrique Udaondo, a cargo del de Luján, definía en su ponencia ante el II Congreso de Historia de América: “Un museo de historia es el templo cívico de la Patria”. La obra de Udaondo había sido valorada por Benjamín Villafañe, siempre desbordado, quien lo hacía el “Pontífice Máximo del nacionalismo”, en “cuyo corazón arde una pira levantada a las virtudes de los más grandes hombres del pasado”. Entre “los aplausos que se prodigan a las

patadas de foot-ball y caballos de carrera, mantiene vivo el fuego sagrado de la estirpe en ese santuario del Museo de Luján”, agregaba Villafañe. Udaondo, miembro de la Junta de Historia y Numismática desde 1922, había sido el promotor de la primera conmemoración del combate de Obligado en 1934.

En los años siguientes, la Comisión Nacional indagó provincia por provincia qué sitios y edificios merecían ser considerados históricos, promoviendo leyes y decretos que los declararan tales. Una de esas leyes, de 1941, hizo de la Casa de Tucumán un monumento nacional, e impulsó los estudios que llevaron a su reconstrucción; la casa restaurada se inauguró en 1943, cuatro años después de que el Cabildo reacondicionado abriera sus puertas en Buenos Aires. En 1936, Vialidad Nacional, el Automóvil Club Argentino e YPF habían invitado a la Junta de Historia y Numismática a colaborar en la instalación de carteles identificatorios y conmemorativos en los lugares históricos, que esas reparticiones habían comenzado ya, en una prueba de que tales afanes no conmovían sólo a los estudiosos del pasado. La institución aceptó, y se formó una comisión integrada por los presidentes de aquellas entidades y algunos miembros de la futura Academia. Las juntas de estudios históricos y ciertos gobiernos provinciales se comprometían en esfuerzos similares, y también lo hacía el ejército.

Los relatos del pasado iban encontrando, a través de estas acciones, su anclaje territorial, cubriendo todo el país y haciendo posible reconocer, a pesar de los cambios ocurridos, el paisaje en que las luchas del siglo XIX habían tenido lugar. En ciertas ciudades del interior existían sitios que habían sido objeto de cuidado, por el valor histórico que se les atribuía; sin embargo, eran ahora las zonas rurales las que se incorporaban al escenario, con indicaciones de los lugares remotos de una batalla o la referencia al nacimiento de cierto personaje en una aldea, posibles en buena parte por la extensión de la red carretera.

A instancias de la Comisión de Museos, en esta misma línea y retomando iniciativas de 1928, el Poder Ejecutivo decretó en 1942 que las nuevas estaciones ferroviarias, o aquellas cuyos nombres fueran cambiados, deberían llevar denominaciones que refirieran a “la tradición o al folklore”. La inquietud folklórica de intelectuales y funcionarios tenía antecedentes, pero a fines de la década de 1930 tomó nuevo vigor. En 1921, el Consejo Nacional de Educación organizaba la primera recolección de piezas musicales y poé-

ticas folklóricas, a cargo de maestros de escuela. Una vez más, en las instrucciones enviadas la inmigración se dibujaba como un peligro para la “noble tradición del pasado”; también una vez más, los maestros eran convocados a una “obra patriótica”. Naturalmente, el documento indicaba que los “elementos exóticos” asociados a la inmigración debían ser expurgados. Hacia 1939, la Comisión de Folklore del Consejo Nacional de Educación retomó la iniciativa; en este caso, los resultados se reunieron en una *Antología Folklórica Argentina*, publicada en 1940. Desde 1926, cultivando un tipo de estudio folklórico más académico, Juan Alfonso Carrizo venía publicando sus propios cancioneros populares: en aquel año había sido el de Catamarca; en 1933, el de Salta, editado por la Universidad de Tucumán; luego el de Tucumán en 1937 y el de La Rioja en 1942. Otro especialista, Augusto Cortazar, asumía el tema *El folklore y el concepto de la nacionalidad* en un libro de 1939; Draghi Lucero recopilaba el cancionero de Mendoza y Di Lullio el de Santiago del Estero. El movimiento culminó en la fundación del Instituto Nacional de la Tradición en 1943, que fue dirigido inicialmente por Carrizo.

El interior y sus habitantes, que ya desde el Centenario habían sido vistos por algunos hombres de letras como el lugar y los sujetos en los que la auténtica nacionalidad debía buscarse, eran ahora explorados por el Estado, amojonados sus lugares y fijadas sus “referencias históricas”, recopilados sus cantos y leyendas que, parecía entender un sector de la elite, agregaban un tono inofensivamente popular al pasado nacional que debía celebrarse. Es posible que el supuesto de que esos habitantes del interior habían sido, luego de la conquista, gauchos se encontrara muy extendido. En ese sentido se manifestaba la Agrupación Bases, que en la campaña por el monumento a Alberdi desplegó grandes esfuerzos. Por los mismos años, el grupo se dedicó también a impulsar otro homenaje y otro monumento, que tenían precisamente al gaucho y a José Hernández como destinatarios.

UN TIPO SOCIAL, UNA VERSIÓN DE LA HISTORIA NACIONAL

El *Martín Fierro* ya había sido convertido por la literatura culta en el poema central de la nacionalidad. Hubo quienes lo entendie-

ron como la expresión simbólica más acabada de la Argentina vieja, la única auténtica. Lugones había recuperado el poema de Hernández en sus conferencias de 1913, luego reunidas en *El payador*, mientras que Ricardo Rojas lo haría por esos mismos años. Sin duda, existían diferencias en la apreciación literaria de la obra de Hernández, pero ambos escritores coincidieron en el reconocimiento de su condición de pieza crucial de la expresión de la nacionalidad.

Sin embargo, en los años que van de 1910 a mediados de la década abierta en 1930, el Estado se había mostrado poco proclive a la celebración gauchesca, que en cambio seguía manteniendo sus auditorios populares, de los que formaban parte vastos sectores inmigrantes. Sólo a fines de los años treinta se registró un fenómeno importante y preciso en el universo estatal: hacia 1938, en las dos Cámaras de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, eran presentadas iniciativas para declarar el 10 de noviembre, fecha de nacimiento de José Hernández, Día de la Tradición; la ley se aprobó en 1939. Entre las peticiones iniciales, estaba también la de levantar un monumento al gaucho en La Plata. Fue por entonces cuando se hizo evidente que la asociación entre la figura del gaucho, la nacionalidad y la historia de la Argentina, uno de los centros donde ella se definía, encontraba adhesiones más unánimes que en tiempos anteriores.

Así, el secretario de la Agrupación Bases expresaba en 1938 que el *Martín Fierro* “simboliza en su esencia más profunda, espiritual y nacionalista [...] lo que sirve para estructurar [...] el motivo básico de la iniciativa. La Patria, que es la tierra que nos vio nacer, tiene en el *Martín Fierro* [...] el vértice de nuestra propia idiosincrasia. *Martín Fierro* debe ser para todo argentino como un catecismo”. Un año más tarde, Carlos Sánchez Viamonte, diputado provincial por el Partido Socialista, agrupación que había sido reacia al criollismo, concedía que “el poema de José Hernández contiene mucha parte del alma nacional, del alma argentina con sus defectos y virtudes”. Desde el Partido Comunista y sus cercanías, la evocación de Hernández y de las “masas gauchas” había sido algo más temprana.

Sin embargo, imágenes que hacían del gaucho y en particular de Martín Fierro la síntesis de la nacionalidad también eran planteadas desde la derecha, tanto política como cultural. Gauchos, como representación del criollo, eran las víctimas del imperialis-

mo británico y de la usura judía en las caricaturas del nacionalismo filofascista; desde una perspectiva más atenta a los problemas del pasado, la reivindicación del gaucho permitía insistir en la recuperación de la herencia cultural española. El autor de un artículo publicado en la *Revista del Instituto Juan Manuel de Rosas*, agregando otro elemento característico del nacionalismo, proclamaba en 1940 la indudable catolicidad de Martín Fierro, quien “en su servicio militar de fronteras ejerció hasta extremos inconcebibles su espíritu de obediencia”, en su objetivo de “servir a la nación”. Martín Fierro, el personaje, se volvía el “símbolo de la raza” hispano-criolla y católica, y el poema, su saga más acabada.

Confirmando la tendencia, por estas mismas fechas, el Ministerio de Instrucción Pública y el Consejo Nacional de Educación recomendaban a los maestros bajo su jurisdicción la lectura y el comentario del *Martín Fierro*, como ejercicio para los alumnos. Se trataba, con claridad, de un producto más de la voluntad de nacionalización.

Buena parte de la historiografía erudita, sumada a la labor de examinar el “alma nacional”, coincidía con estos planteos generales, quizá de manera menos estridente. Pero había excepciones. Así ocurría con Emilio Coni, quien desde 1927 era miembro de la Junta de Historia y Numismática, y se dedicaba al estudio de la historia rural. Autor del capítulo “La agricultura, ganadería e industria hasta el Virreinato”, que apareció en el cuarto volumen de la *Historia de la Nación Argentina* publicado en 1937, el ingeniero agrónomo Coni formaba parte de los elencos de historiadores reconocidos.

En el curso de sus estudios, Coni debió encarar el problema del gaucho, que abordó en varios artículos y en un trabajo de mayor aliento, publicado en 1937. En 1945, luego de su muerte, apareció *El gaucho*, libro redactado entre 1940 y 1943. Largos tramos del trabajo eran una exposición historiográfica erudita, pero al mismo tiempo el autor aspiraba a fundar en sus investigaciones una postura frente a los argumentos que se desplegaban en torno al gaucho. En la “Introducción”, sostenía Coni que “la leyenda gauchesca [...] ha tomado una amplitud y seriedad tales, que hoy la mayoría de las gentes ignora que se trata de una leyenda y le asigna con toda buena fe el carácter de hecho histórico”; los responsables de esta circunstancia habían sido los “poetas y literatos, a los cuales poco les preocupa la verdad histórica”.

Su decisión de intervenir en el debate colectivo con el libro, de acuerdo con el propio Coni, obedecía a que sobre esa "leyenda que se infla día a día, se estructura toda una doctrina seudonacionalista, que pretende para una sola provincia el monopolio de la argentinidad y la representación exclusiva de la Patria". El problema, y la posición del historiador, comienzan así a delinearse con más precisión. Coni argumentaba:

"Sobre la leyenda gauchesca descansa hoy una doctrina, según la cual la pampa y el gaucho representan la nacionalidad, lo que viene a significar que las diez provincias no pampeanas, no gauchescas, no cuentan para nada en la argentinidad. Y sin embargo [...] son ellas las que tienen más derecho que la cosmopolita Buenos Aires a representar la nacionalidad".

Coni planteaba que "las verdaderas tradiciones argentinas" eran las que perduraban en las provincias interiores, no en el Litoral "primero pastoril y semibárbaro, luego profundamente cosmopolita". El "martinfierismo del Litoral con sus pretensiones de representación argentina" le parecía un enorme error histórico y político.

Las expresiones de Coni ratifican la amplitud del consenso en torno al gaucho, que ya se volvía sentido común. Al mismo tiempo, destacan que se trataba de un problema que concernía a los historiadores, ya que estaba en discusión una interpretación del pasado. Eran los historiadores, planteaba Coni, a quienes el dominio del método y el afán de verdad garantizaban una opinión cierta, quienes debían corregir los yerros de los hombres de letras, sólo preocupados por aspectos estéticos e ignorantes de las normas que debían guiar la reconstrucción científica del pasado.

El historiador académico, a pesar de todo, no advertía que algunas certidumbres lo acercaban a las posiciones de los intelectuales que criticaba. Coni no dudaba de que la utilización del método científico le había permitido alcanzar una versión "verdadera" de la tradición argentina y del tipo social que la representaba. Allí estaban, en el pasado, los rasgos esenciales de la nacionalidad, que gracias al empleo atinado de las reglas de la investigación histórica y a la experiencia personal, Coni había descubierto en los campesinos sedentarios de las provincias interiores, todavía a

salvo de los efectos de la inmigración, que sí había “contaminado” al Litoral y, naturalmente, a las grandes ciudades.

Así, el planteo de base acerca de la existencia de un núcleo auténticamente nacional, por antiguo y puro, en peligro por la “contaminación” de los inmigrantes, quedaba en pie, y aun reforzado por esta crítica. Frente a la exaltación del gaucho, hombre del Litoral expuesto a aquel contacto corruptor, se perseguía el centro histórico y cultural de la nación todavía más en el interior, en el país real que ni siquiera podría hallarse en la llanura, y menos en la ciudad que, en ciertas versiones, la encarnaba. Cerrando con pasión su libro, Coni sostenía que “los valores morales que forman las genuinas tradiciones argentinas” se encontraban “lejos de la gran cosmópolis”, fuera de las “canciones tabernarias” de la poesía gauchesca. Estaban “allí donde hubo hogar, donde existió la familia, donde la mujer, el elemento principal en la transmisión de la tradición, la ha conservado [...] hasta nuestros días”. Tratándose del pasado, decía el historiador, “vale [...] el espesor de la pátina depositada por los siglos y la sangre formada en el decurso de varias generaciones que hayan dado pruebas palpables de su argentinidad”.

Coni compartía también otras opiniones extendidas, que insistían en atribuir a la escuela una extraordinaria capacidad para influir en las actitudes de quienes a ella concurrían. El historiador se alarmaba ante la decisión ministerial de recomendar la lectura del *Martin Fierro*, porque “los niños pueden aprender a odiar a la policía y a favorecer al delincuente, ya que este último se presenta siempre en el poema con aspecto simpático y en cambio la autoridad es odiosa y antipática”. Incapaz de suponer que la lectura de aquellos niños fuera otra que la propia, Coni desempolvaba antiguos temores que habían rondado la aparición de la obra, y revelaba que los distintos programas de orden social no estaban, a fines de los treinta, obligados a utilizar los mismos recursos. Basta recordar aquella interpretación que, por estos mismos años, destacaba los “extremos inconcebibles” que Fierro alcanzaba en su servicio a la nación.

EL PASADO Y EL FUTURO

Del estudio erudito del pasado, de representaciones sujetas a normas menos estrictas, de su difusión entre alumnos y públicos

vastos, se esperaban muchas cosas entre 1930 y los tempranos años cuarenta. Quienes se formulaban preguntas de orden político buscaban en la historia tradiciones auténticamente nacionales que sostuvieran las respuestas ensayadas; los intelectuales que reflexionaban sobre la identidad argentina volvían la mirada al pasado, rastreando allí las trazas que hacían de ésta una formación cultural y aun racial específica; afanosamente, el Estado buscaba consolidar la nacionalidad, que creía en riesgo por una inmigración que hacía ya una década tendía a descender. Alrededor de este último tema, debe señalarse que los desafíos más visibles a los símbolos nacionales se habían atenuado, lo que torna más excesivo aquel esfuerzo. Las celebraciones de las colectividades se habían convertido en rituales admitidos y la resistencia anarquista y comunista a los emblemas patrios, que hasta los años veinte era pública, se había transformado en un fenómeno menor, fuera por el declive anarquista o por la integración comunista de la segunda mitad de la década.

El efecto de legitimación de la apelación al pasado constituía en la sociedad argentina un presupuesto general. No había, en este sentido, disidencias entre los discursos de la historiografía erudita y de los intelectuales consagrados y, por ejemplo, el que Martín Gil, de escasa fama póstuma, planteaba en su libro *Milenios, planetas y petróleo*, hacia 1936: “Nuestras puertas están cerradas a los buscadores [de petróleo]. Deben de haberse olvidado de leer la Constitución, la Representación de los Hacendados de Moreno, las palabras de Carlos Pellegrini, de Sarmiento, de Mitre...” Textos fundadores y próceres eran convocados para sostener la crítica a una específica política económica.

Tan intenso como el recurso al pasado en busca de explicaciones fue el debate sobre él, que se organizaba en torno a muchos asuntos: San Martín, Alberdi, el himno o el color de la bandera, Rosas, los ferrocarriles británicos.

Cuando el peronismo irrumpió en ese escenario, en los últimos tiempos de la guerra, provocó un nuevo realineamiento de los grupos culturales, incluyendo a los historiadores, y políticos. Como ocurrió con el resto de la sociedad, el mundo intelectual se dividió alrededor del apoyo o la oposición al nuevo movimiento, que no reclamó a quienes se incorporaban ninguna credencial ideológica: nacionalistas, socialistas, conservadores, radicales, comunistas, hombres de la historia académica, revisionistas, se aproxi-

maron a él. Tampoco en el otro bando la uniformidad era mucha.

La realidad tornó útiles, para el nuevo combate político de los años cercanos a 1945, los esquemas que había madurado en la década de 1930, que imaginaban una tradición nacional “auténtica” enfrentada a otra que no lo era, o que creían descubrir la lucha, librada desde los orígenes de la nación, entre dos principios ante los cuáles sólo podía optarse utilizando un criterio ético-político: liberalismo contra autoritarismo; democracia contra dictadura; política popular contra intereses oligárquicos; actitud nacional frente a actitud colonial. Los nuevos bloques políticos y sociales existentes, variados y complejos como los anteriores, se creaban así un linaje imaginario, y atribuían otro al adversario. Con mucha frecuencia, ambos rechazaban esas atribuciones; Miguel Tanco, dirigente radical yrigoyenista incorporado al peronismo, lo hacía en 1946, cuando declaraba que, siendo “liberal e individualista”, no podía compartir la “sórdida desconfianza” que ante el capital extranjero desplegaban “los xenófobos, que sueñan con el retorno a la Vuelta de Obligado y con las chuzas de tacuara”.

Pero al mismo tiempo, desde la coyuntura peronista era posible ordenar los años treinta. Lo ocurrido en esa década se explicó desde entonces, y por mucho tiempo, utilizando aquellos esquemas, y así los itinerarios políticos seguidos durante la restauración conservadora se transformaron en anticipos retrospectivos de las posiciones asumidas frente al peronismo. Una configuración de la historia nacional organizada en los treinta ganaba su mejor batalla, al someter su propio momento de producción a la mirada que ella misma había inventado. Al final del período, entonces, esa imagen parecía explicar no sólo el desarrollo ya más que secular de la nación, sino que echaba luz sobre la historia inmediata, y hasta permitía augurar qué principios lucharían en el futuro abierto por el peronismo.

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, Eugenia. *La visión del pasado del Circulo Militar en la década de 1930*. Buenos Aires, mimeo, 1992.

Bazán, Armando R. *La Rioja y sus historiadores*, Buenos Aires, Platero, 1982.

Béjar, María Dolores. "Altars y banderas en una educación popular. La propuesta del gobierno de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires, 1936-1940", en AA. VV., *Mitos, altares y fantasmas. Aspectos ideológicos en la historia del nacionalismo argentino*, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación/UNLP, 1992.

Bertoni, Lilia Ana. "Construir la nacionalidad. Héroe, estatuas y fiestas patrias, 1887-1891", *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. E. Ravignani"*, 3ra. serie, número 5, 1992.

Blache, Marta. "Folklore y nacionalismo en la Argentina", en *Revista de Investigaciones Folklóricas*, UBA, Buenos Aires, vol. 6, 1991.

Buch, Esteban. *O juremos con gloria morir. Historia de una épica de Estado*, Buenos Aires, Sudamericana, 1994.

Buchbinder, Pablo. *Historia de la Facultad de Filosofía y Letras*, Buenos Aires, EUDEBA, 1997.

Cattaruzza, Alejandro. "Algunas reflexiones sobre el revisionismo histórico", en F. Devoto (comp.), *La historiografía argentina en el siglo XX*, tomo I, Buenos Aires, CEAL, 1993.

———. *Historia y política en los años treinta: comentarios en torno al caso radical*, Buenos Aires, Biblos, 1991.

———. "Instituciones historiográficas y campo intelectual en la Argentina de los años treinta: la Sociedad de Historia Argentina y su *Anuario*", mimeo, ponencia presentada en las Sextas Jornadas Interdepartamentales de Historia, Universidad Nacional de La Pampa, 1997.

———. "Por una historia de los modos en que una sociedad intenta dar cuenta de su pasado", en *Rivista di Storia della Storiografia Moderna*, Roma, 1995.

Colaneri, Roxana. *El gran espectáculo de la historia: La guerra gaucha*, mimeo, ponencia presentada en las Séptimas Jornadas Interdepartamentales de Historia, Universidad Nacional del Comahue, 1999.

Chiaramonte, José C. *El mito de los orígenes en la historiografía latinoamericana*, Buenos Aires, Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. E. Ravignani", 1991.

De Sagastizábal, Leandro. *La edición de libros en la Argentina. Una empresa de cultura*, Buenos Aires, Eudeba, 1995.

Eujanian, Alejandro. *Historia de revistas argentinas 1900-1950. La conquista del público*, Buenos Aires, AAER, 1999.

Eujanian, Alejandro y Cattaruzza, Alejandro. "Héroes patricios y gauchos rebeldes. Dispositivos estatales y representaciones populares en la constitución de imágenes colectivas del pasado en la Argentina", en *Rivista di Storia della Storiografia Moderna*, Roma, 2000.

Gianello, Leoncio. *La enseñanza de la historia en la Argentina*, México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1951.

Halperin Donghi, Tulio. *El revisionismo histórico argentino*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1970.

———. "El revisionismo histórico como visión decadentista del pasado nacional", en *Punto de Vista*, Nº 19, Buenos Aires.

Hourcade, Eduardo. "Ricardo Rojas hagiógrafo (A propósito de *El santo de la espada*)", en *Estudios Sociales*, año VIII, número 15, Santa Fe, 1998.

Pagano, Nora. *Un historiador argentino en la década del treinta: el caso de Diego Luis Molinari*, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1999.

Pagano, Nora y Galante, Miguel. "La Nueva Escuela Histórica: una aproximación institucional del Centenario a la década del 40", en F. Devoto (comp.), *La historiografía argentina en el siglo XX*, tomo I, citado.

Puiggrós, Adriana (directora). *Historia, democracia y orden (1916-1943)*, Buenos Aires, Galerna, 1992 [tomo III de la *Historia de la educación argentina*].

Quattrocchi de Woisson, Diana. *Los males de la memoria. Historia y política en la Argentina*, Buenos Aires, Emecé, 1995.

Romero, Luis Alberto. "Una empresa cultural: los libros baratos", en Gutiérrez, Leandro y Romero, Luis Alberto, *Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra*, Buenos Aires, Sudamericana, 1995.

Sarlo, Beatriz. *Una modernidad periférica. Buenos Aires 1920-1930*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988.

Svampa, Maristella. *El dilema argentino: civilización o barbarie. De Sarmiento al revisionismo peronista*, Buenos Aires. El Cielo por Asalto, 1994.

Tedesco, Juan Carlos. *Educación y sociedad en la Argentina (1880-1945)*, Buenos Aires, Solar, 1986.

Terán, Oscar. "Aníbal Ponce, o el marxismo sin nación", en *En busca de la ideología argentina*, Buenos Aires, Catálogos, 1986.

Zanatta, Loris. *Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y ejército en los orígenes del peronismo 1930-1943*, Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, 1996.

NUEVA HISTORIA ARGENTINA

TOMO 1: *Los pueblos originarios y la conquista*

Período: Prehispánico (hasta 1516)

Dirección de tomo: Myriam Tarrago

TOMO 2: *La sociedad colonial*

Período: Colonial (1516-1806)

Dirección de tomo: Enrique Tandeter

TOMO 3: *Revolución, República, Confederación*

Período: De la Independencia a Caseros (1806-1852)

Dirección de tomo: Noemí Goldman

TOMO 4: *Liberalismo, Estado y orden burgués*

Período: De la Organización Nacional (1852-1880)

Dirección de tomo: Marta Bonaudo

TOMO 5: *El progreso, la modernización y sus límites*

Período: De la hegemonía conservadora (1880-1916)

Dirección de tomo: Mirta Zaida Lobato

TOMO 6: *Democracia, conflicto social y renovación de ideas*

Período: De entreguerras I: Los gobiernos radicales (1916-1930)

Dirección de tomo: Ricardo Falcón

TOMO 7: *Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política*

Período: De entreguerras II: La década de 1930 (1930-1943)

Dirección de tomo: Alejandro Cattaruzza

TOMO 8: *El peronismo*

Período: Del peronismo (1943-1955)

Dirección de tomo: Juan Carlos Torre

TOMO 9: *Violencia, proscripción y autoritarismo*

Período: De la Revolución Libertadora al derrocamiento de Illia (1955-1976)

Dirección de tomo: Daniel James

TOMO 10: *Dictadura y democracia*

Período: Del Proceso de Reorganización Nacional al gobierno de Menem
(1976-1999)

Dirección de tomo: Juan Suriano

TOMOS ESPECIALES

Arte, sociedad y política. Dirección de tomo: José Emilio Burucúa

Atlas Histórico Argentino. Dirección de tomo: Mirta Zaida Lobato - Juan Suriano

En los capítulos de este libro se asumen los problemas que han merecido mayor atención en los estudios sobre la década abierta en 1930. Las cuestiones económicas, en particular la situación de las exportaciones y la industrialización sustitutiva; el impacto del golpe de Estado en el sistema político y las actitudes y evoluciones de los partidos, junto a la paulatina implantación del fraude; las tendencias en el movimiento obrero, la inclinación al diálogo con el aparato estatal y el crecimiento del número de trabajadores industriales, son algunos de ellos. Pero, al mismo tiempo, los autores ensayan el análisis de la constitución de nuevas identidades en los sectores populares, el problema de la ampliación de la ciudadanía hasta la inclusión del derecho a la salud, las políticas de integración territorial y los planteos ideológicos que las sustentaban, la construcción de imágenes del pasado y los debates sobre ellas, las relaciones entre los intelectuales y la política en los escritores de la izquierda, y el funcionamiento del mundo de las letras.

Este volumen, entonces, al tiempo de ampliar el repertorio de problemas analizados, propone una imagen del período 1930-1943 que viene a cuestionar algunos rasgos de la interpretación heredada.



ISBN 950-07-1938-X



www.edsudamericana.com.ar